COLECCION TRUJILLO

CENTENARIO DE LA REPUBLICA

1844 - 1944

SERIE II

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS

VOLUMEN IX

11

Coleccion TRUJILLO
Documentos
Legislativos
II

Senado Consultor
1859 - 1861

IX

SENADO

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

COLECCION TRUJILLO

CENTENARIO DE LA REPUBLICA

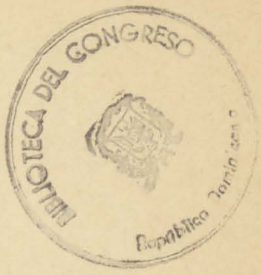
1844 - 1944

SERIE II

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS

VOLUMEN IX

AGN



SENADO CONSULTOR

(ACTAS DE LAS SESIONES)

1859 - 1861



Donación

EDICION DEL GOBIERNO DOMINICANO
1944

AGN

ESTA COLECCIÓN HA SIDO NOMINADA Y DIRIGIDA POR EL LICENCIADO MANUEL ARTURO PEÑA BATLLE, SECRETARIO DE ESTADO DE LO INTERIOR Y POLICIA.

EDITORIAL EL DIARIO
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA

INDICE

PROCEDENCIA DE LAS FUENTES XIX

SENADO CONSULTOR
1859 - 1861

ACTAS DE LAS SESIONES, AÑO 1859

Sesión del día 3 de enero 3
Sesión del día 5 de enero 7
Sesión del día 8 de enero 13
Sesión del día 11 de enero 15
Sesión del día 12 de enero 16
Sesión del día 13 de enero 17
Sesión del día 17 de enero 19
Sesión del día 20 de enero 20
Sesión del día 24 de enero 21
Sesión del día 27 de enero 24
Sesión del día 31 de enero 26
Sesión del día 3 de febrero 28
Sesión del día 14 de febrero 30
Sesión del día 24 de febrero 31
Sesión del día 27 de febrero 34
Sesión del día 3 de marzo 35
Sesión del día 5 de marzo 37

Sesión del día 8 de marzo 33
Sesión del día 9 de marzo 40
Sesión del día 10 de marzo 43
Sesión del día 11 de marzo 48
Sesión del día 15 de marzo 50
Sesión del día 16 de marzo 52
Sesión del día 18 de marzo 53
Sesión del día 21 de marzo 54
Sesión del día 22 de marzo 55
Sesión del día 23 de marzo 57
Sesión del día 29 de marzo 57
Sesión del día 30 de marzo 58
Sesión del día 31 de marzo 60
Sesión del día 4 de abril 61
Sesión del día 5 de abril 62
Sesión del día 6 de abril 62
Sesión del día 7 de abril 63
Sesión del día 11 de abril 71
Sesión del día 20 de abril 72
Sesión del día 26 de abril 76
Sesión del día 27 de abril 77
Sesión del día 28 de abril 79
Sesión del día 29 de abril 80
Sesión del día 30 de abril 81
Sesión del día 3 de mayo 83
Sesión del día 4 de mayo 87
Sesión del día 5 de mayo 88
Sesión del día 9 de mayo 89
Sesión del día 10 de mayo 91
Sesión del día 11 de mayo 92
Sesión del día 13 de mayo 94
Sesión del día 16 de mayo 97
Sesión del día 17 de mayo 98
Sesión del día 19 de mayo 99
Sesión del día 23 de mayo 101
Sesión del día 24 de mayo 116
Sesión del día 25 de mayo 118

Sesión del día 26 de mayo 120
Sesión del día 28 de mayo 121
Sesión del día 29 de mayo 123
Sesión del día 30 de mayo 126
Sesión del día 3 de junio 128
Sesión del día 4 de junio 131
Sesión del día 6 de junio 132
Sesión del día 7 de junio 134
Sesión del día 8 de junio 135
Sesión del día 9 de junio 136
Sesión del día 10 de junio 137
Sesión del día 15 de junio 138
Sesión del día 16 de junio 140
Sesión del día 17 de junio 141
Sesión del día 19 de junio 143
Sesión del día 20 de junio 144
Sesión del día 21 de junio 146
Sesión del día 22 de junio 147
Sesión del día 23 de junio 148
Sesión del día 25 de junio 150
Sesión del día 27 de junio 151
Sesión del día 4 de julio 154
Sesión del día 7 de julio 156
Sesión del día 12 de julio 157
Sesión del día 22 de julio 158
Sesión del día 5 de agosto 160
Sesión del día 18 de agosto 161
Sesión del día 25 de agosto 163
Sesión del día 29 de agosto 164
Sesión del día 1º de septiembre 167
Sesión del día 11 de septiembre 168
Sesión del día 22 de septiembre 168
Sesión del día 31 de octubre 169
Sesión del día 10 de noviembre 171
Sesión del día 14 de noviembre 172
Sesión del día 17 de noviembre 174
Sesión del día 28 de noviembre 175

Sesión del dia 3 de diciembre 177
Sesión del día 19 de diciembre 180
Sesión del día 21 de diciembre 181
Sesión del día 22 de diciembre 182
Sesión del día 23 de diciembre 183
Sesión del día 24 de diciembre 184
Sesión del día 26 de diciembre 184
Sesión del día 28 de diciembre 185
Sesión del día 30 de diciembre 186
Sesión del día 31 de diciembre 187

ACTAS DE LAS SESIONES, AÑO 1860

Sesión del día 2 de enero 191
Sesión del día 3 de enero 192
Sesión del día 4 de enero 193
Sesión del día 5 de enero 199
Sesión del día 7 de enero 199
Sesión del día 10 de enero 200
Sesión del día 16 de enero 201
Sesión del día 18 de enero 202
Sesión del día 20 de enero 203
Sesión del día 7 de febrero 203
Sesión del día 13 de febrero 204
Sesión del día 27 de febrero 205
Sesión del día 28 de febrero 207
Sesión del día 2 de marzo 208
Sesión del día 5 de marzo 212
Sesión del día 7 de marzo 213
Sesión del día 9 de marzo 215
Sesión del día 12 de marzo 216
Sesión del día 16 de marzo 217
Sesión del día 20 de marzo 218
Sesión del día 23 de marzo 221
Sesión del día 26 de marzo 222
Sesión del día 27 de marzo 223

Sesión del día 28 de marzo 224
Sesión del día 29 de marzo 226
Sesión del día 2 de abril 226
Sesión del día 10 de abril 230
Sesión del día 11 de abril 231
Sesión del día 12 de abril 234
Sesión del día 13 de abril 235
Sesión del día 16 de abril 236
Sesión del día 17 de abril 243
Sesión del día 18 de abril 246
Sesión del día 19 de abril 247
Sesión del día 23 de abril 251
Sesión del día 25 de abril 255
Sesión especial del día 26 de abril 257
Sesión del día 27 de abril 277
Sesión del día 30 de abril 280
Sesión del día 1º de mayo 282
Sesión del día 2 de mayo 283
Sesión del día 4 de mayo 285
Sesión del día 7 de mayo 286
Sesión del día 8 de mayo 290
Sesión del día 9 de mayo 292
Sesión del día 10 de mayo 293
Sesión del día 14 de mayo 297
Sesión del día 15 de mayo 301
Sesión extraordinaria del día 17 de mayo 303
Sesión del día 18 de mayo 304
Sesión del día 21 de mayo 307
Sesión del día 22 de mayo 308
Sesión del día 23 de mayo 310
Sesión del día 24 de mayo 312
Sesión del día 25 de mayo 313
Sesión del día 28 de mayo 314
Sesión del día 29 de mayo 315
Sesión del día 31 de mayo 322
Sesión del día 4 de junio 325
Sesión del día 5 de junio 327

Sesión del día 6 de junio 331
Sesión del día 5 de junio 335
Sesión del día 11 de junio 337
Sesión del día 12 de junio 339
Sesión del día 13 de junio 341
Sesión del día 18 de junio 342
Sesión del día 19 de junio 344
Sesión del día 20 de junio 346
Sesión del día 21 de junio 347
Sesión del día 22 de junio 350
Sesión del día 23 de junio 353
Sesión del día 25 de junio 353
Sesión del día 26 de junio 354
Sesión del día 27 de junio 354
Sesión consultiva del día 17 de julio 361
Sesión del día 2 de agosto 364
Sesión consultiva del día 16 de agosto 365
Sesión del día 18 de agosto 365
Sesión del día 20 de agosto 374
Sesión del día 21 de agosto 379
Sesión del día 23 de agosto 381
Sesión del día 24 de agosto 381
Sesión del día 25 de agosto 382
Sesión del día 27 de agosto 384
Sesión del día 28 de agosto 386
Sesión del día 29 de agosto 387
Sesión del día 31 de agosto 389
Sesión del día 6 de septiembre 391
Sesión especial del día 8 de septiembre 392
Sesión del día 13 de septiembre 395
Sesión del día 15 de septiembre 396
Sesión del día 17 de septiembre 397
Sesión del día 18 de septiembre 400
Sesión del día 19 de septiembre 401
Sesión del día 20 de septiembre 405
Sesión del día 25 de septiembre 406
Sesión del día 26 de septiembre 409

AGN

BIBLIOTECA DEL CONGRESO Nacional
República Dominicana

Sesión del día 27 de septiembre 412
Sesión del día 28 de septiembre 416
Sesión del día 1º de octubre 418
Sesión del día 3 de octubre 422
Sesión del día 5 de octubre 424
Sesión del día 6 de octubre 425
Sesión del día 8 de octubre 427
Sesión del día 9 de octubre 428
Sesión del día 10 de octubre 429
Sesión del día 22 de octubre 430
Sesión del día 23 de octubre 432
Sesión del día 26 de octubre 434
Sesión del día 29 de octubre 435
Sesión del día 31 de octubre 436
Sesión del día 1º de noviembre 437
Sesión del día 8 de noviembre 438
Sesión del día 12 de noviembre 439
Sesión del día 14 de noviembre 439
Sesión del día 16 de noviembre 440
Sesión del día 28 de noviembre 442
Sesión del día 1º de diciembre 444
Sesión del día 3 de diciembre 445
Sesión del día 4 de diciembre 446
Sesión consultiva del día 13 de diciembre 447
Sesión del día 17 de diciembre 448
Sesión del día 22 de diciembre 449
Sesión del día 24 de diciembre 450

ACTAS DE LAS SESIONES, AÑO 1861

Sesión del día 16 de enero 455
Sesión del 24 de enero 455
Sesión del día 31 de enero 458
Sesión del día 12 de febrero 459
Sesión del día 27 de febrero 460
Sesión del día 28 de febrero 463
Sesión del día 4 de marzo 463

Sesión del día 11 de marzo 465
Sesión del día 13 de marzo 463
Sesión del día 15 de marzo 473
Sesión especial del día 16 de marzo 475

APENDICE

DOCUMENTO NÚM 1

Decreto del Libertador declarando en toda su fuerza y vigor la Constitución de 23 de Diciembre de 1854. (27 de Setiembre 1858) 479

DOCUMENTO NÚM 2

Mensaje del Presidente de la República, General Pedro Santana, al Senado Consultor. (5 de Enero 1859) 481

DOCUMENTO NÚM 3

Discurso pronunciado por el Presidente del Senado, en contestación al Mensaje del Presidente de la República. (5 de Enero 1859) 491

DOCUMENTO NÚM 4

Dictamen que presenta al Senado Consultor, el Comisionado que se nombró para hacer una reseña de las medidas que en el Mensaje del General Libertador se reservan al conocimiento y deliberación del Senado. (12 de Enero 1859) 495

DOCUMENTO NÚM 5

Memoria que somete a la consideración del Senado, uno de sus miembros, sobre la necesidad de dar a la República legislación propia, adecuada a sus costumbres y actual organización. (12 de Enero 1859). 499

DOCUMENTO NÚM 6

Discurso del General Pedro Santana, pronunciado en el acto de prestar juramento como Presidente de la República. (31 de Enero 1859). 503

DOCUMENTO NÚM. 7

Discurso del Presidente del Senado Consultor, en contestación al del Presidente de la República. (31 de Enero 1859). 507

DOCUMENTO NÚM. 8

Alocución del General Antonio Abad Alfau, al tomar posesión de la Vice-Presidencia de la República. (31 de Enero 1859). 511

DOCUMENTO NÚM. 9

Memoria que presenta al Presidente de la República, el Secretario de Estado en los despachos de Justicia e Instrucción Pública, acerca de los ramos de que está encargdo. (2 de Febrero 1859). 513

DOCUMENTO NÚM. 10

Alocución del Presidente de la República, General Pedro Santana, pronunciada en la apertura de la Sesión legislativa del Senado Consultor. (27 de Febrero 1859). 521

DOCUMENTO NÚM. 11

Contestación del Presidente del Senado Consultor al de la República. (27 de Febrero 1859). 523

DOCUMENTO NÚM. 12

Discurso pronunciado por el Presidente del Senado Consultor el día de la clausura de la Sesión legislativa. (3 de Marzo 1859). 525

DOCUMENTO NÚM. 13

Comunicación que dirige el Vice-Presidente de la República al Senado Consultor, convocando a Sesión extraordinaria legislativa. 531

DOCUMENTO NÚM. 14

Alocución que dirige el Vice-Presidente de la República al Senado Consultor. (27 de Febrero 1860). 535

DOCUMENTO NÚM. 15

Mensaje presentado por el Vice-Presidente de la República en ejercicio del Poder Ejecutivo. (27 de Febrero 1860). 537

DOCUMENTO NÚM. 16

Memoria que presenta al Poder Ejecutivo, el Ministro Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores, dando cuenta de lo concerniente a su ramo, durante el último período parlamentario. (24 de Febrero 1860). 543

DOCUMENTO NÚM. 17

Mensaje del Presidente de la República al Senado Consultor. (27 de Febrero 1861). 549

PROCEDENCIA DE LAS FUENTES

En buen estado se conserva en el Archivo General de la Nación el Registro en que se asientan las Actas del Senado Consultor, *con quinientas treintiuna páginas, de las cuales quinientas doce contienen el texto que ha valido para la mayor parte del material original integrante del presente volumen, donde se hallan los últimos documentos legislativos de la Primera República. Comprende el registro los años 1859, 1860 y 1861. En su uniformidad de redacción, comparado con los anteriores libros de actas, así como en la acertada relación de los asuntos de las sesiones, refleja fiel y consecuentemente la etapa final de una función de gobierno que empezó de manera informe, y progresivamente se fué adaptando a su verdadera finalidad. Sus postreras páginas asientan la sesión del 16 de marzo de 1861, dos días antes de proclamarse la reincorporación a España, pero no se hace en dicha sesión, como tampoco en las anteriores del mismo año, alusión alguna a tan trascendental suceso, como lo es el eclipse de la soberanía nacional. Complementariamente con ese libro se ha hecho uso del de* Sesiones Consultivas, Resoluciones, y Providencias del Senado Consultor, *el mismo empleado ya en los volúmenes VI y VII. Siendo un libro de minutas, su contenido no difiere del anterior, pero en algunas actas tiene puntos no expresados en aquél, por lo que sirvió para dar la cabalidad de asuntos tratados en determinadas sesiones. La sesión inicial es la misma en uno y otro registro, de fecha 3 de enero de 1859. Se emplea el segundo desde la página 114. Su última acta es la de 27 de junio de 1859.*

El proyecto de ley sobre estado de sitio, que figura en el acta del 29 de mayo de 1860, fué copiado de la Colección de Leyes, *año 1860, documento número 656.*

SENADO CONSULTOR
1859 - 1861

AGN

SESIONES DEL
SENADO CONSULTOR
1859

AGN



SESION DEL 3 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los tres días del mes de Enero, de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional donde regularmente celebra sus sesiones el Senado Consultor, en virtud de la convocatoria hecha por el Exmo. Señor General Libertador, en el Decreto que expidió con fecha 30 de Octubre del año próximo pasado, a saber: los Honorables Tomás Bobadilla, Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu y Pedro Pablo de Bonilla, con el objeto de proceder a la instalación del Senado Consultor de la República, y se procedió a formar el bufete provisional, ocupando la silla presidencial el Honorable Bobadilla, como mayor de edad, y el encargo de Secretario el Honorable Bonilla, como más joven. Cada uno de los miembros presentes, y que componen el *quórum*, presentó sus poderes que fueron examinados; y encontrados en buena y debida forma, y de los cuales aparece: que por mayoría absoluta fueron electos para Senadores de esta Provincia Capital los Honorables Bobadilla y Abreu; por la Provincia de Azua, el Honorable Bonilla, y por la de La Vega el Honorable Delmonte, los cuales reunen las cualidades que requiere la Constitución del Estado.

Instalado así el bufete provisional, y verificado los poderes sin haberse notado ningún vicio ni falta de formalida-



des, se procedió a nombrar el Presidente que ha de durar en este ejercicio tres meses según los Reglamentos, lo mismo que el Vice-Presidente y Secretario, y hecha la elección una después de otra depositando cada cual en una urna el nombre de la persona que elegía, verificado el escrutinio, dió por resultado: que el Honorable Bobadilla obtuvo mayoría para Presidente, el Honorable Delmonte para Vice-Presidente, y el Honorable Bonilla para Secretario. Concluído lo que, se procedió a instalar el Senado, después que el Presidente puesto de pie, con la mano derecha sobre la Constitución del Estado dijo: Yo, Tomás Bobadilla, a la faz de la Nación y por ante mis Honorables colegas: Juro por Dios y los Santos Evangelios, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes del Pueblo Dominicano, respetar sus derechos y mantener la Independencia Nacional. Si así lo hiciere, Dios sea en mi ayuda, y si no, me lo demande y castigue.

Y en seguida, los demás miembros, uno por uno, prestaron el mismo juramento en manos del Honorable Presidente y, verificado ésto, puesto de pie, el mismo Presidente dijo: En nombre de la Constitución, el Senado Consultor de la República está instalado.

Se acordó participar la referida instalación al Excmo. Señor General Libertador; que por la voluntad unánime de los Pueblos ha ejercido amplios poderes y facultades para restablecer la Constitución de 23 de Diciembre de 1854. (*)

Se abrió y dió lectura a una nota oficial del Honorable Juan R. Herrera, Senador electo para la Provincia del Seibo, quien hace presente que por una grave enfermedad que ha atacado a su Señora madre no ha podido concurrir este día como tenía dispuesto haberlo hecho; pero que gustoso se presentará luego que cese aquel motivo y prestará su pequeño contingente de ideas para dejar cumplidos los deseos de sus comitentes; y se acordó que se le acuse el recibo correspondiente, y se le manifieste a la vez la necesidad de

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 1.

su comparendo, por encontrarse el Senado en extricta mayoría.

El Señor Secretario particular encargado del Despacho del Interior y Policía, dirigió al Senado una colección de las *Gacetas Oficiales* desde el 17 de Agosto hasta el 21 de Diciembre último, y seis pliegos sellados y cerrados, dirigidos al Presidente del Senado por los Colegios Electorales de las Provincias, y se acordó que en la sesión del día de pasado mañana, que contaremos cinco de los corrientes, a las once en punto de ella, se abrirán para tomar de ellos el debido conocimiento.

Después de todo lo que, se procedió a la nominación de un archivista, dos copistas y un portero y mensajero, y fueron nombrados a unanimidad para archivista el Señor Gerardo Bobadilla; para copistas, los Señores Mariano Rodríguez y Juan E. Diez y para portero y mensajero, el Señor Francisco Velázquez.

Con lo que se concluyó la sesión de este día y firmaron los Honorables miembros presentes.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.-* Secretº.

SESION DEL 5 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los cinco días del mes de Enero del año mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional los Señores que componen el Senado Consultor, a saber: los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario, y previo el llamamiento por la lista nominal, resultando mayoría, se declaró abierta la sesión.

Se dió lectura de la acta de la sesión anterior, y no habiendo resultado observación que hacer quedó sancionada en todas sus partes.

El Presidente dió lectura de una nota oficial que había recibido del Excmo. Señor General Libertador, fecha del día cuatro, en que suplicaba al Senado se reuniese hoy porque ansiosamente deseaba dar cuenta a la Nación, y deponer los poderes que los Pueblos le habían conferido en el Manifiesto del 27 de Julio del año próximo pasado. Y se nombraron en Comisión a los Honorables Abreu y Bonilla, para que pasasen a darle conocimiento al Excmo. General Libertador que el Senado estaba reunido, y lo recibiría con gusto para el objeto que ha indicado.

Algún tiempo después se presentó S. E. acompañado de la Comisión, de sus Secretarios particulares, de su Estado Mayor, del Gobernador de la Provincia, del Comandante de Armas, corporaciones judiciales, militares y las del ramo de Hacienda y demás empleados públicos, y de un numeroso concurso, e introducido en la sala, colocado en su puesto, lo mismo que las otras autoridades, puesto de pie dijo: Que le cabía la satisfacción de venir al Senado para dar cuenta de la misión que le encargaron los Pueblos en el 27 de Julio, y el Secretario de Guerra y Marina, por su órgano leyó un Mensaje que dice así: (Aquí el Mensaje). (*)

Concluído lo cual el Honorable Presidente del Senado, puesto de pie, tomó la palabra y contestó del modo siguiente: (Aquí la contesta) (**)

Concluído lo cual, resonaron vivas al Libertador, al Senado, y a la República Dominicana, y el Excmo. Señor General Libertador, se retiró acompañado de la misma Comisión y de su comitiva, en medio de un golpe de música y de diferentes aclamaciones. Vuelta la Comisión a la sala de sesiones, el Honorable Presidente expuso que debiendo conti-

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 2.
(**) Véase Apéndice, doc. Nº 3.

nuarse la sesión según la orden del día el Senado debía ocuparse de la apertura de los seis pliegos que le habían dirigido los Colegios Electorales de las diferentes Provincias, y que, sin duda, debían contener las elecciones de Presidente y Vice-Presidente de la República; y, en efecto, abiertos unos después de otros, los referidos pliegos acompañaban a los oficios correspondientes las actas de elección; y se acordó sin discontinuar a hacer primero el examen y despojo de los votos del Presidente de la República.

Se examinó primero el proceso verbal del Colegio Electoral de esta Provincia Capital de fecha 7 de Diciembre próximo pasado y dió por resultado que el Excmo. Señor General Libertador Pedro Santana, obtuvo la mayoría de 29 votos. Los Señores Miguel Lavastida, tres; Juan Nepomuceno Tejera, uno; Manuel Joaquín Delmonte, nueve; Antonio Madrigal, uno; Mateo Velázquez, uno; José M. Perdomo, uno; Jacinto de Castro, dos; Juan Bautista Ramírez y Pedro Delgado, uno.

De la acta celebrada por el Colegio Electoral de la Provincia del Seibo con fecha 7 de Diciembre próximo pasado resultó que el referido Señor General Libertador obtuvo para Presidente de la República 27 votos; y los Señores Tomás Bobadilla padre, siete; Felipe Alfau, cinco; Domingo de la Rocha, siete; Abad Alfau, ocho; Ramón Mella, uno; Manuel de Regla Mota, uno; Rafael Pérez, dos; y un voto en blanco.

De la acta del Colegio Electoral de la Provincia de Santiago, su fecha 7 de Diciembre próximo pasado, resultó que el General Pedro Santana obtuvo, para Presidente de la República, 20 votos, y los Señores Juan Evangelista Gil, dos; el General Alfau, uno; Fernando Valerio, ocho; José Desiderio Valverde, siete; José E. Villanueva, dos; Manuel Delmonte, dos; Domingo Mallol, uno; José Francisco Fernández, uno; Ramón Mella, dos; Furcy Fondeur, uno; José María Silverio, padre, uno; Manuel de Regla Mota, uno; y Domingo Rodríguez, tres.

De la acta del Colegio Electoral de la Provincia de Azua, fecha 10 de Diciembre próximo pasado resultó que el General Pedro Santana obtuvo para Presidente de la República 20 votos, y los Señores Francisco Sosa, seis; Casimiro Félix, cuatro; Manuel de Regla Mota, nueve; Telésforo Objío, seis; y Tomás Bobadilla, dos.

De la acta del Colegio Electoral de la Provincia de La Vega, fecha 9 de Diciembre próximo pasado, resultó que el General Pedro Santana obtuvo para Presidente de la República, 25 votos, y los Señores Ramón Mella, uno; Félix Morilla, cuatro; José Valverde, dos; José R. Gómez, dos; Cristóbal José de Moya, siete; Manuel Mejías, tres; José Tabera, uno; José Velasco, dos; J. María Rodríguez, uno; Patricio Mieses, uno; y Jerónimo Abreu, uno.

Hecho el cómputo correspondiente, resultando que de 134 electores en las diferentes Provincias, el Excmo. Señor General Libertador ha obtenido la inmensa mayoría de ciento veinte y cuatro sufragios. Puestos de pie los Honorables Senadores, el Presidente dió publicidad del resultado de la elección y proclamó al Señor General Pedro Santana, Presidente de la República Dominicana.

Se procedió en seguida a examinar las actas de elecciones de Vice-Presidente de la República, y la acta celebrada en esta Provincia Capital el día ocho de Diciembre próximo pasado, dió por resultado que el General de División Antonio Abad Alfau obtuvo para Vice-Presidente 20 votos; y los Señores Manuel de Regla Mota, tres; Franco Bidó, uno; Pilar Fortún, uno; Ramón Mella, once; Manuel Joaquín Delmonte, dos; Andrés Herrera, uno; Miguel Lavastida, uno; José María Morales, uno; Chery Victoria, uno; Mateo Perdomo, dos; Juan Evangelista Gil, uno; y Manuel Santana, uno.

El proceso verbal de la Provincia de La Vega celebrado el día 9 de Diciembre próximo pasado, dió por resultado que el General de División Antonio Abad Alfau, obtuvo para Vice-Presidente de la República 26 votos; y los Señores José R. Gómez, tres; José Concepción Tabera, tres; Ge-

neral Manuel Mejías, cuatro; Félix Morilla, dos; Casimiro Moya, uno; Hilario Carvajal, uno; José Velasco, uno; Juan J. Botier, uno; General Felipe Alfau, uno; Patricio Mieses, uno; Jerónimo Abreu, uno; y Cristóbal José de Moya, ocho.

El proceso verbal de la Provincia de Santiago de fecha 7 de Diciembre próximo pasado, dió por resultado que el General de División Antonio Abad Alfau obtuvo para Vice-Presidente de la República, 14 votos; y los Señores José Desiderio Valverde, dos; Miguel Lavastida, uno; Fernando Valerio, nueve; Juan Luis Franco Bidó, uno; Pedro Quiñones, uno; Ulises Espaillat, tres; Francisco Fauleau, uno; Santiago Pichardo, uno; José E. Villanueva, tres; José María Silverio, (padre) cinco; Pedro R. Espaillat, uno; Domingo Rodríguez, uno; Diego Crespo, uno; Coronel Manzueta, uno; Tomás Lavastida, uno; Furcy Fondeur, uno; Benigno Rojas, dos; Regla Mota, dos; y Evangelista Gil, uno.

El proceso verbal de la Provincia de Azua de fecha 11 de Diciembre próximo pasado, dió por resultado que el General Antonio Abad Alfau obtuvo 24 votos; y los Señores Casimiro Félix, cuatro; Manuel de Regla Mota, cuatro; Francisco Sosa, tres; Telésforo Objío, tres; Ignacio Rojas, uno; Miguel Lavastida, uno; Elías Miranda, uno; Donato Aquino, uno; y Carlos A. Dechaptte, uno.

El proceso verbal de la Provincia del Seibo, de fecha siete de Diciembre próximo pasado, dió por resultado, que el General Antonio Abad Alfau obtuvo para Vice-Presidente de la República, 14 votos; y los Señores Pilar Fortún, cinco; Francisco Sosa, tres; Rafael Pérez, dos; Domingo de la Rocha, cuatro; Felipe Alfau, dos; Tomás Bobadilla, 21; Ramón Mella, dos; y un voto nulo.

Habiéndose hecho el cómputo correspondiente y resultando que entre 134 electores, ochenta y nueve han votado por el General de División Antonio Abad Alfau, y que, de consiguiente, la mayoría absoluta resulta a su favor, puestos de pie los Honorables Senadores, el Presidente le proclamó Vice-Presidente de la República, conforme a la Constitución

del Estado, y una salva de artillería anunció por todas partes una y otra elección, lo mismo que los repiques de campanas.

Se acordó que inmediatamente se participe la elección a los referidos Señores Pedro Santana y Antonio Abad Alfau, para que el día que tengan a bien indicar se presenten a la sala del Senado, para que presten el juramento constitucional, y sean puestos e instalados en el ejercicio de sus funciones respectivas.

El Presidente, en vista de lo que dispone el Art. 30 de la Constitución, propuso al Senado la duda que se presenta hoy acerca del período en que deberá ejercer sus funciones el Vice-Presidente de la República; que si bien han de ejercer su período por seis años, la elección debe hacerse con la diferencia de tres años, entre el Presidente y Vice-Presidente, cuya duda resulta de las circunstancias anormales que ha atravesado el país; y habiéndose discutido sobre la materia, a unanimidad quedó resuelto que los períodos de seis años comiencen a contarse desde el día en que sean instalados en sus funciones; pero el Vice-Presidente de la República sólo las ejercerá por tres años en este primer período, para que pueda tener lugar lo dispuesto en el referido Art. 30.

Se abrió y dió lectura de un oficio que con fecha 26 de Diciembre ha dirigido al Senado el Honorable Vicente Morel, el cual se excusa de admitir dicho encargo por causa legítima de enfermedad justificada con la certificación de un facultativo; y se acordó admitirle, como le fué admitida, su dimisión; y que el Senado se ocuparía de reemplazarlo constitucionalmente en una de sus próximas sesiones, y que se le conteste debidamente.

Y siendo la hora muy avanzada, y no habiendo por el presente otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 8 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los ocho días del mes de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, en el lugar donde de ordinario celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Señores Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu y Pedro Pablo de Bonilla, Secretarios, y después del llamamiento que se hizo por la lista nominal y estando presente la mayoría, queda abierta la sesión.

Se dió lectura del acta anterior, que fué sancionada después de algunas ligeras modificaciones hechas por el Honorable Delmonte, que fueron aprobadas.

En seguida se procedió, según la orden del día, a la nominación de un Senador por la Provincia de Santiago, interinamente y hasta la primera reunión del Colegio Electoral de la Provincia, en reemplazo del Honorable Vicente Morel, que se ha dimitido por causa legítima de enfermedad, todo en conformidad de lo que dispone el Art. 19 de la Constitución; y habiéndose procedido a la votación secreta, echando cada uno de los Honorables miembros del Senado un papel con el nombre escrito de la persona que elegía, hecho el escrutinio de los votos resultó electo a unanimidad el Señor Felipe Dávila Fernández de Castro, y se acordó pasarle oficio inmediatamente para que, si acepta este nombramiento, preste el juramento constitucional y quede instalado en sus funciones, y así se hizo, habiéndosele remitido el expresado oficio.

Se dió lectura de una nota oficial del Secretario particular del Interior y Policía, con la cual acompañaba copia

de las resoluciones tomadas por el Gobierno durante el tiempo en que el Excmo. Señor General Libertador, ejerció las omnímodas facultades que el dieron los Pueblos para restablecer la Constitución vigente y un régimen legal adecuado, y se acordó contestar la referida nota oficial y tomar conocimiento de las referidas resoluciones para los fines que puedan convenir.

El Honorable Presidente hizo presente que por una resolución reglamentaria del Senado estaba acordado que las reuniones ordinarias de aquél, durante el tiempo en que no estuviere en Sesión legislativa, serían los días Lunes y Jueves de cada semana, salvo los casos de urgencia, o que el Gobierno lo necesitare como Consultor; que entonces el Honorable Presidente lo reuniría a hora fija, como también cuando los días indicados fueran feriados; que entonces tendría lugar la reunión al siguiente día; lo cual hará presente para que quedase establecido un orden, a menos que el Senado determinare variar, y a unanimidad se dispuso continuar el que ya había sido adoptado.

El Honorable Felipe Dávila Fernández de Castro se presentó en la sala del Senado, habiendo manifestado que, deseoso de prestar sus servicios a la Patria, aceptaba la honrosa nominación que se le había hecho.

Puestos los Honorables Senadores de pie, prestó el juramento constitucional en la forma acostumbrada, y fué instalado en sus funciones.

El Honorable Presidente propuso que le parecía conveniente nombrar una Comisión para extraer del Mensaje del Excmo. Señor General Libertador todas aquellas medidas que él recomendó, llamando la atención del Senado para ir trabajando los proyectos de leyes que sean necesarias para darle el impulso correspondiente a la marcha de la Administración, y habiendo sido acogida esta proposición, se nombró al Honorable Felipe Dávila Fernández de Castro para que presentase los conceptos ya referidos; y, siendo la

BIBLIOTECA DEL CONGRESO República Dominicana

hora muy avanzada, se levantó la sesión por no haberse presentado los Senadores que faltan de algunas Provincias.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 11 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los once días del mes de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, en el lugar donde de ordinario celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Señores Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; y después del llamamiento que se hizo por la lista nominal, estando presente la mayoría, quedó abierta la sesión.

Se dió lectura del acta anterior, que fué sancionada, y a propuesta del Honorable Presidente quedó acordado se dirigiese un oficio al Honorable Francisco Javier Jiménez, Senador electo por la Provincia de Santiago, para que a la posible brevedad se presente en esta Capital, para que entre en el ejercicio de sus funciones, respecto a que es de necesidad ir preparando los trabajos de que debe ocuparse el Senado en la próxima Legislatura; y en seguida se despachó el referido oficio y se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SENADO de la República Dominicana BIBLIOTECA

SESION DEL 12 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los doce días del mes de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron extraordinariamente en el Palacio Nacional, en el lugar donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Señores Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; y después del llamamiento que se hizo por la lista nominal, estando presente la mayoría, quedó abierta la sesión; se dió lectura del acta anterior, que fué sancionada. Se abrió y dió lectura de un oficio fecha del día de ayer, del Excmo. Señor General Libertador, en que solicita el acuerdo del Senado para deliberar sobre el recurso en gracia que en virtud de lo dispuesto en el Art. 35, atribución 28 de la Constitución, han impetrado de él Antonio y Evangelista Sambuá, condenados a muerte por una sentencia en último recurso de la Suprema Corte de Justicia y después de haber conferenciado sobre el particular en virtud de varias consideraciones que producen las circunstancias del momento, quedó a unanimidad acordado que el Senado prestaba su consentimiento para la referida gracia, y se oficiara al Excmo. Señor General Libertador para que pueda proceder a la conmutación de la pena, con arreglo a las leyes y a las circunstancias actuales; y se levantó la sesión, por ser la hora avanzada.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 13 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, el día trece de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; y hecho el llamamiento por la lista nominal en presencia de la mayoría, quedó abierta la sesión del Senado Consultor.

Se dió lectura del acta de la última sesión y quedó sancionada. El Honorable Presidente dió conocimiento de una nota que con fecha dos de los corrientes ha dirigido al Senado el Honorable Francisco Javier Jiménez, Senador electo por la Provincia de Santiago, por la cual hace presente que le es imposible admitir el empleo de Senador por hallarse recargado de una numerosa familia y al cuidado de sus intereses, siéndole imposible trasladarse a esta Capital; y desde luego hace dimisión formal del referido encargo de Senador.

Después de una conferencia sobre el particular, unánimemente le fué admitida la dimisión y se acordó que se le participara por oficio en forma, y que en una de las próximas sesiones se procedería a su reemplazo.

Se dió lectura del informe que ha hecho el Honorable Castro sobre las indicaciones que hizo en su Mensaje el Excmo. Señor General Libertador, cuyo informe dice así:

(Aquí el informe) (*)

El Honorable Presidente tomó la palabra y dijo que

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 4.

para poder deliberar en cuanto a las dilapidaciones que han habido del Tesoro público en la época de la Administración Báez, era preciso esperar que fuesen remitidos los informes, cuentas y aclaraciones que propone el mismo Excmo. General Libertador; que en cuanto a la prolongación del Tratado de amistad y comercio con S. M. Británica, como quiera que al Ejecutivo toca establecer las bases, y al Senado examinarlas y aprobarlas según la Constitución, y habiendo ofrecido el mismo Libertador ocuparse de este negocio, nada puede deliberarse por ahora, hasta que no llegue el tiempo oportuno.

Manifestó también el Honorable Presidente que era de necesidad ir preparando para la Sesión legislativa algunos trabajos que eran indispensables; tales como una ley de enjuiciamiento para los altos funcionarios; la revisión de la Ley de Registro por la que se gravan por la actual los intereses del Fisco; la revisión de la Ley de Ayuntamientos, por cuanto, entre otras cosas, se han quitado los Síndicos en las Comunes donde éstos ni aquéllos no existen; y esto es una grave falta, pues no tienen quien la representen, y quien acuse las contravenciones de policía, ni quien controle la contabilidad de los Alcaldes en las cuentas de patentes y derechos comunales; que también era indispensable la revisión de la Ley de Hacienda, porque en este ramo vital para la República no existe ningún arreglo, y las leyes que hay son contradictorias y presentan los más grandes inconvenientes en su observación; que también era de necesidad ir formulando un proyecto de ley o de decreto sobre el papel moneda emitido por la referida Administración Báez y fuera de circulación, según la disposición del Gobierno del Cibao. Por lo tanto, le parecía de necesidad nombrar comisiones que fueran ocupándose de preparar los trabajos relativos a los objetos indicados, y habiendo sido adoptada por unanimidad esta proposición, se nombraron las Comisiones de la manera siguiente:

Los Honorables Delmonte y Bonilla, para la revisión de la Ley de Hacienda y formar el proyecto de la que convenga según las circunstancias actuales.

Los Honorables Bobadilla y Abreu, para la revisión de las Leyes de Registro y Ayuntamientos.

Los Honorables Delmonte y Castro, para abrir concepto sobre el papel moneda emitido por Báez.

Los Honorables Bobadilla y Bonilla, para formar un proyecto de ley de enjuiciamiento para los altos funcionarios.

Pudiendo las diferentes Comisiones pedir informes a los Secretarios de Estado en los respectivos ramos, y hacer todas las inquisiciones que crean conveniente para ilustrar las materias en cuanto sea posible, y proceder con el acierto correspondiente.

Y siendo la hora avanzada, se declaró cerrada la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 17 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los diez y siete días del mes de Enero del año mil ochocientos cincuenta y nueve, año 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, a saber: los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Pedro Pablo de Bonilla, Secretario. Hecho el llamamiento de la lista nominal, presente la mayoría, quedó abierta la sesión.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y quedó sancionada.

Se presentó el Honorable Juan Rosa Herrera, Senador electo por la Provincia del Seibo, y habiéndose verificado sus poderes, estando en buena y debida forma constitucional, se le exigió y prestó el juramento constitucional en la forma acostumbrada, quedando instalado en el ejercicio de sus funciones.

Se dió lectura de un oficio del Secretario del Interior y Policía, con el cual enviaba al Senado un libro de las actas del Soberano Congreso Constituyente de Moca y otro Copiador de oficios de la misma Corporación, los cuales dice que pertenecen al Archivo del Cuerpo Legislativo, y se acordó quedasen depositados en él, y que se acuse recibo al referido Secretario del Despacho del Interior, etc. Y siendo avanzada la hora, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bonilla.*

SESION DEL 20 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, el día veinte de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario de sus sesiones, el Senado Consultor, compuesto de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera, Pedro Pablo de Bonilla, Secretario. Después de hecho el llamamiento por la lista nominal, en presencia de la mayoría se declaró abierta la sesión.

Se dió lectura y fué sancionada el acta de la sesión anterior.

El Honorable Castro presentó una moción escrita que dice así: (aquí la exposición). (*)

El Honorable Presidente hizo presente que, aunque el Senado no se encontraba en Sesión legislativa, pero que siendo de tanto interés público el objeto que propone el Honorable Castro, el Senado podía ocuparse para ir preparando cualquier trabajo que hubiera de hacerse sobre la materia propuesta, y siendo todos de esta opinión, quedó la proposición sobre el bufete para deliberar lo que mejor convenga en la próxima sesión. Se acusó recibo al Secretario encargado del despacho del Interior de las últimas Gacetas y otros impresos que había remitido al Senado; y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 24 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cuatro días del mes de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, se reunieron en el Palacio ordinario de sus sesiones el Senado Consultor, compuesto de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario. Se hizo el llamamiento por la lista nominal, y en presencia de la mayoría se declaró abierta la sesión. Se trajo a la vista la proposición que había hecho el Honorable Fernández de Castro sobre la necesidad de dar a la República una legislatura propia; y EL HONORABLE PRESIDENTE tomó la palabra en los términos siguientes:

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 5.

Honorables Senadores: La exposición que ha sometido a vuestra apreciación el Honorable Castro, pone de manifiesto su celo e interés por el bien común de la República; he sido y soy de la misma opinión.

Siendo Ministro de Justicia en 1845, en la Memoria que presenté de este ramo hice ver los grandes inconvenientes que resultan de que los Códigos por donde ha de juzgarse se encuentren en un idioma extraño para los Jueces y para los ciudadanos; hice también presente la necesidad de localizar esas mismas leyes acomodándolas a la conveniencia pública del país, y no he cesado de instar por la reforma de la legislación cuantas veces se me ha presentado la ocasión de hacerlo.

El Congreso Nacional, en épocas diferentes, acordó también algunas providencias para tan importante objeto; una de ellas fué encargar al difunto Manuel Aybar de la traducción de los Códigos, y después de haberse hecho gastos de alguna consideración, parece que el resultado no produjo ningún efecto. Más después, los Señores Félix María Delmonte y el Presbítero Manuel Valencia por 2.000 o más pesos fuertes se hicieron cargo de ese trabajo, se les entregó la suma, y no es a mi conocimiento que lo hayan hecho. Por fin, Presidente del Senado en Mayo de 1855, hice una moción sobre el particular; ésta fué acogida, y dió por resultado el Decreto del día 22 del mismo mes y año de que paso a daros lectura; en él están consignadas las mismas razones y consideraciones que deduce el Honorable Castro; y esto justifica que yo adopte de lleno sus ideas, y que opine del mismo modo que él.

En el referido Decreto está ordenado que inmediatamente se nombrase una Comisión para que recogiese las traducciones de los Códigos para completarla, si no estuviese del todo hecha, para solicitar que se hicieran en el extranjero o recoger los Códigos que se dice están traducidos, para que se ocupara en modificar y localizar la expresada legislación, acomodándola a las necesidades, usos y conveniencias del

país, al carácter y genio nacional, en armonía con nuestros principios e instituciones, y que, verificados los trabajos, se sometiesen al Senado para discutirlos y adoptar la legislación civil y criminal que más convenga a la Nación.

Se encargó, sobre todo, la más pronta ejecución, y aún quedó establecido que se votaría anualmente una suma para los gastos que hubieren de hacerse, y es también a mi conocimiento que se escribió a Francia al Señor Don F. Segundo Flores, para la traducción de dichos Códigos, y que pidió por ella $12.000 fuertes; mas la Comisión no fué nombrada; yo ignoro la causa; y lo que hay de positivo es que la administración de Justicia siempre marcha en medio de un laberinto de embarazo.

Lo peor que puede suceder en un Estado es que se den leyes para no ejecutarlas; y por ahora creo que lo que debe hacerse es oficiar al Secretario encargado del Despacho de Justicia para que dé un informe prolijo y circunstanciado sobre el particular, especificando las medidas que se han tomado en virtud del Decreto ya citado, y remitiendo los trabajos que se hayan hecho, a fin de discutirlos en la Sesión legislativa. Si el resultado no corresponde a los fines propuestos; si hay alguna inconveniencia en el Decreto que sea preciso enmendar o reformar en beneficio de la Nación, yo estaré siempre por lo mejor y más conveniente.

Después de lo cual el Honorable Fernández de Castro pidió la palabra y dijo que, aunque el Honorable Presidente manifestaba ser de su opinión, no estaban de acuerdo en cuanto a que los trabajos se hagan por una Comisión fuera del Senado, porque éste dejaría siempre un mal resultado como ha sucedido hasta aquí, y que siendo imperativas las razones de conveniencia pública que ya ha deducido, estaba siempre por su opinión. El Honorable Presidente contestó que él estaría siempre por lo mejor y más conveniente sobre el particular; y que si el Decreto del 22 de Mayo no llena los fines que se propone con el informe del Secretario encar-

gado del Despacho de Justicia, en Sesión legislativa puede reformarse, y estatuirse lo que mejor convenga.

El Honorable Delmonte tomó la palabra para recomendar la importancia de la medida, y en este sentido hablaron los demás Senadores, habiéndose acordado dirigir oficio al Secretario encargado del Despacho de Justicia, para que dé informe prolijo y circunstanciado sobre el asunto, especificando las medidas que se han tomado en virtud del Decreto ya citado, y remitiendo los trabajos que se hayan hecho, a fin de resolver lo que mejor convenga.

Se recibió y dió lectura de un oficio del General de División Antonio Abad Alfau, fecha 24 de los corrientes, en contestación al que se le dirigió con fecha 5 del que cursa, por el cual manifiesta que acepta la Vice-Presidencia de la República, para la cual ha sido electo; porque de ninguna manera dejaría de corresponder a la confianza que de él han hecho los pueblos, sino con las luces que él quisiera, al menos con la sobrada voluntad con que siempre se ha prestado al servicio de su Patria; y que el día que designe el Señor Presidente electo, se presentaría junto con él en el seno de la Representación Nacional para prestar el juramento constitucional.

Y siendo avanzada la hora, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.*

SESION DEL 27 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 27 días del mes de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario de sus sesiones, el Senado Consultor, a saber: los Honorables Tomás Bobadilla, Presi-

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

dente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; y habiéndose hecho el llamamiento por la lista nominal, en presencia de la mayoría se declaró abierta la sesión.

Se dió lectura y fué sancionada el acta de la sesión anterior.

El Presidente del Senado puso en conocimiento de los Honorables Senadores un oficio del Señor Francisco Javier Jiménez con fecha 18 de los corrientes en contestación al que se le dirigió para que viniese a ocupar el puesto de Senador, a que fué electo por la Provincia de Santiago, repitiendo la renuncia que se le había admitido, y se estimó que se archivara, respecto a que ya debe estar en conocimiento del expresado Jiménez la admisión que se le hizo de su dimisión, por causas justificadas.

Se recibió y dió lectura también de un oficio de esta fecha del Excmo. Señor General Libertador, por el cual expone que acepta el honroso encargo de Presidente de la República a que ha sido llamado por tercera vez por la mayoría de la Nación, y que está dispuesto a prestar el juramento constitucional el día 31 de los corrientes a las doce de la mañana; y fué acordado que por el Senado se dispusiera lo conveniente para el efecto.

Los Honorables Senadores conferenciaron largamente sobre algunos objetos de interés nacional tendientes a preparar los trabajos de la próxima Legislatura. Y siendo avanzada la hora, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Bonilla.- Franco. X. Abreu.*

SESION DEL 31 DE ENERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, el día 31 de Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana se reunieron en el Palacio Nacional, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; y hecho el llamamiento por la lista nominal, en presencia de la mayoría quedó abierta la sesión del Senado Consultor.

Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.

En seguida, el Honorable Presidente recordó a los Honorables Senadores, que se hallaban convocados a sesión extraordinaria con el objeto de recibir el juramento solemne que habían de hacer ante el Senado los electos Presidente y Vice-Presidente de la República, con arreglo al Art. 34 de la Constitución; y que para que este acto tuviese toda la solemnidad que requería, era conveniente que después de nombrada la Comisión que debe introducir en el Senado a los altos Magistrados de la República, que ante él habían de jurar, se suspendiese la sesión a fin de disponer lo conveniente para tan augusta ceremonia.

Nombrados para esta Comisión los Honorables Felipe Dávila Fernández de Castro y Juan Rosa Herrera, se suspendió la sesión.

A la hora prefijada por su Excelencia El Libertador para llevar a cabo el requisito exigido por la ley, se abrió de nuevo la sesión, y la Comisión nombrada salió a llenar su cometido. Breves momentos después se presentó en el seno de la Representación Nacional Su Excelencia el General Libertador Don Pedro Santana, acompañado del Vice-Presidente electo Don Antonio Abad Alfau y de un numeroso séquito.

Acto continuo, el Honorable Presidente del Senado, en presencia de los Representantes de las naciones amigas de la República, el Excmo. Señor John Christmas, Plenipotenciario del Rey de Dinamarca, y los Señores Cónsules de Francia, Inglaterra y España; en presencia también de todos los Cuerpos del Estado, y en presencia asimismo de la gran mayoría del Senado, compuesta de todos sus miembros, menos uno; en presencia, en fin, del Pueblo representado por los ciudadanos, que en gran número asistían al acto, anunció que iba a tomar el juramento constitucional al Presidente electo de la República. Puestos de pie el elegido Jefe del Poder Ejecutivo Don Pedro Santana y el Presidente del Senado, y teniendo extendidas las diestras sobre la Constitución, el Honorable Presidente del Senado dijo al de la República: *¿Juráis guardar la Constitución y las Leyes Dominicanas, respetar sus derechos y mantener la Independencia de la Nación?*

Y el Presidente de la República respondió en voz clara: *Sí Juro.*

El Presidente del Senado hizo entonces la siguiente solemne proclamación: *En Nombre de la Ley, queda constituído el Presidente de la República.*

En seguida se procedió a celebrar igual ceremonia para recibir el juramento del Vice-Presidente Don Antonio Abad Alfau.

De pie este funcionario, y tendida la mano sobre la Constitución, el Honorable Presidente del Senado le hizo la siguiente pregunta: *¿Juráis guardar la Constitución y las Leyes Dominicanas, respetar sus derechos y mantener la Independencia de la Nación?*

Y el Vice-Presidente de la República contestó en voz clara: *Sí Juro.*

El Presidente del Senado le proclamó su investidura diciendo: *En Nombre de la Ley queda constituído el Vice-Presidente de la República.*

Después de lo cual el Excmo. General Libertador Don

Pedro Santana pidió la palabra e hizo leer el discurso siguiente: (Aquí el discurso). (*)

Terminada la anterior lectura, el Honorable Presidente del Senado contestó, en nombre de esta Corporación, con el siguiente: (aquí el discurso). (**)

Acto continuo el Señor Vice-Presidente hizo leer la alocución que sigue (aquí la alocución). (***)

Hecha la anterior lectura se suspendió la sesión para pasar al Templo a dar gracias al Todopoderoso por la divina protección que dispensa a la República, y rogarle que la preserve en el porvenir de los males que hasta ahora la han afligido.

De vuelta al lugar ordinario de las sesiones del Senado, se abrió de nuevo la de este día, y habiendo terminado el objeto para que fué convocado, quedó levantada en seguida la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 3 DE FEBRERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, el día tres de Febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; y hecho el llamamiento por la lista nominal, en presencia de la mayoría, quedó abierta la sesión del Senado Consultor.

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 6.
(**) Véase Apéndice, doc. Nº 7.
(***) Véase Apéndice, doc. Nº 8.

Se dió lectura y fué sancionada el acta de la sesión anterior.

Se trajo a la vista un pliego cerrado y sellado, dirigido por el Ministro Secretario de Estado del Despacho de Justicia, el cual, después que se le dió lectura, se vió que contenía el informe que se había pedido sobre las medidas tomadas acerca del Decreto de 22 de Mayo de 1855, que dispuso se nombrase una Comisión para la traducción de los Códigos, cuyo informe es a la letra como sigue: (*)

Se examinaron los Códigos remitidos y traducidos, de que hace mención el Señor Ministro, y deseando completar un trabajo de tanta importancia para la buena administración de Justicia, después de haber conferenciado largamente sobre el particular, quedó acordado que se nombrase una Comisión para que, con la brevedad posible, confronte las referidas traducciones y vaya preparando los trabajos en forma de leyes, y en capítulos enteros y separados, para de este modo obviar dificultades y realizar el completo de una obra de tanta importancia; cuyas leyes que formarán los respectivos Códigos se irán presentando en la próxima Sesión legislativa y en las demás sucesivas hasta que se verifique la obra por completo.

En consecuencia, quedaron nombrados miembros de la referida Comisión los Honorables Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla, a quienes se pasaron los cuadernos de las traducciones. Concluído lo cual, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 9.

SESION DEL 14 DE FEBRERO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, el día catorce de Febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; y hecho el llamamiento por la lista nominal, en presencia de la mayoría quedó abierta la sesión del Senado Consultor. Se dió lectura y fué aprobada el acta de la sesión anterior.

El Honorable Presidente puso en conocimiento del Senado un oficio del Ministro de Hacienda de fecha 11 de los corrientes, acompañado de una petición del General de División Román Franco Bidó y de otros documentos, por la cual solicita se le mande entregar una suma de $3.000 fuertes votados a su favor en Mayo de 1857, durante la Administración Báez, en indemnización de las pérdidas que ha sufrido por la revolución, y que si las escaseces del Erario público no lo permiten, se le haga el abono en pago de daños al Señor Finke, negociante en Puerto de Plata, que es su acreedor, y el que más lo persigue, por tener consentida una hipoteca sobre la única casa que posee en la Ciudad de Santiago, proponiéndose por el referido Ministro que el Senado tome una resolución definitiva; y se acordó a unanimidad que no estando el Senado en sus sesiones legislativas, sino consultivas, pasasen estos documentos a una Comisión para que abriese concepto en la próxima Sesión legislativa; y quedó nombrada la Comisión, compuesta de los Honorables Fernández de Castro, Abreu y Herrera, a quienes se dispuso que fuesen entregados los documentos para el fin indicado.

Se dió también lectura de otro oficio de fecha 12 del corriente del mismo Ministro de Hacienda relativo a una solicitud, para que se haga donación al Benemérito General Fernando Valerio de un bohío que le sirva de alojamiento a su familia, el cual está situado en el pueblo de San Lorenzo de Guayubín donde él vive y ejerce hace largo tiempo las funciones de Comandante General de Fronteras; y se acordó igualmente que pasase a la referida Comisión para los mismos fines, y se acusase el recibo correspondiente al referido Ministro por oficio político en forma.

Y se suspendió la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 24 DE FEBRERO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Vice-Presidente

En la Ciudad de Santo Domingo, el día veinte y cuatro de Febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Manuel Joaquín Delmonte Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Senadores; y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; y estando presente la mayoría se abrió la sesión.

Se leyó el acta de la sesión anterior, y habiendo hecho algunos Señores Senadores varias observaciones sobre su redacción por no expresarse en ella con exactitud lo que dijeron sobre las cuestiones que se ventilaron, observó el Honorable Secretario la imposibilidad en que se hallaba el Senado de variar con alguna, sin un acuerdo expreso, por haberse copiado equivocadamente la referida acta en el libro,

sin hallarse aprobada, y el Senado acordó que dicha acta fuese anulada, y quedase sin firmar por los que debieran autorizarla, y que se redactase de nuevo la de la sesión del día 14, tal cual debía estar, y después de aprobada se insertase a continuación: Dice así:

Reunidos en la Ciudad de Santo Domingo, el día 24 de Febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, a las once de la mañana los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Senadores Felipe Dávila Fernández de Castro, Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla; Secretario; haciendo el primero las veces de Presidente, por enfermedad del Honorable Bobadilla, y llamados por la lista nominal los Honorables Senadores, quedó abierta la sesión en presencia de la mayoría.

En seguida se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

El Señor Presidente interino anunció al Senado que la presente debía tenerse por sesión preparatoria en la solemne apertura que habría de tener lugar el inmediato día 27, conforme a lo que previene el Art. 20 de la Constitución, y consultó al Senado sobre los términos en que éste desearia que se emitiese el pensamiento de la Corporación al proclamar la apertura de la presente Sesión legislativa; preguntó además al Senado el mismo Señor, bajo cuál denominación numérica quería se designase la Legislatura que principiaba el día 27, y habiendo tomado la palabra varios Senadores, se discutió largamente el punto, y se acordó que en atención a que la Legislatura legal que ha precedido a la que va a abrirse fué la tercera; en razón de que si bien el ex-Presidente Báez convocó en Marzo de 1858 para otra que denominó 4ª, él no tenía carácter alguno para hacerlo, ni los tales Senadores para reunirse en Sesión legislativa, porque habiendo sido el primero exonerado de la Presidencia por el acuerdo del Congreso de Moca de 21 de Enero del mismo año cuando aquel Cuerpo representaba la voluntad nacional, ni Báez debió resistir, encerrado entre las murallas de Santo Domingo, hacer resistencia a aquel mandato y continuar obran-

do como Poder del Estado; ni los que habían dejado de ser Senadores, pudieron seguirlo en su resistencia, sin hacerse cómplices de su rebeldía; que en consecuencia la reunión de semejantes hombres no puede tener a los ojos del Senado el carácter de legales ni obrará efecto alguno; que, en consecuencia, la referida Legislatura debe tenerse por no habida y sus actos por nulos, írritos y de ningún valor, y por tanto era de llamarse cuarta la presente.

En seguida se leyó una comunicación de la Comisión de Códigos que acompaña el proyecto de la ley que habrá de discutirse en el Senado, y sería en caso de aprobarse la primera de las que han de componer el Código Civil, en la cual propone la Comisión se reserve para la Sesión legislativa la discusión sobre el fondo, sirviéndose sin embargo el Senado tomar conocimiento del primer trabajo de la Comisión a fin de que examinada su forma opine si debe o no continuarse en los mismos términos, y el Senado acordó la continuación de la obra en cuanto a su plan distributivo y redacción del texto, suprimiendo no obstante para mayor brevedad escribir al frente del proyecto los textos del original francés, de traducción y la que de él había hecho la antigua Comisión; porque con esta supresión podría adelantarse más el trabajo, cuando por otra parte era innecesario el que hiciera en aquellas copias que el Senado podría tener a la vista en sus originales, y se levantó la sesión.

Leída que fué el acta que precede, quedó aprobada.

Dióse lectura de un oficio del Señor Ministro del Interior en que manifestaba que deseando el Gobierno consultar al Honorable Senado sobre un asunto importante, esperaba se reuniesen a él en el salón de su Palacio hoy a las once de la mañana; y siendo actualmente la hora indicada en el oficio, se levantó la sesión para pasar en Cuerpo al lugar designado.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 27 DE FEBRERO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, el día veinte y siete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve y 15º de la Patria, siendo las ocho de la mañana, en el Palacio Nacional, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, se reunieron en virtud del Art. 20 de la Constitución, los Honorables Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Senadores, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; ejerciendo la Presidencia el primero por enfermedad del Honorable Tomás Bobadilla, con el objeto de celebrar la solemne sesión que aquel artículo previene y, presente la mayoría, se abrió la sesión. Leída el acta de la anterior, fué aprobada.

El Señor Presidente hizo presente al Senado que siendo el *27 de Febrero* el día más solemne para la República, cuyos recuerdos son imperecederos en todo corazón dominicano, había convocado al Senado, compuesto de patricios entusiastas de la Libertad, para que en compañía de Su Excelencia el General Libertador, fuese al Templo a asistir a los solemnes oficios que para dar gracias al Altísimo han de celebrarse.

De vuelta el Senado al lugar de sus sesiones, se abrió de nuevo la de este día en presencia del Presidente de la República, Excmo. General Libertador Don Pedro Santana, del Vice-Presidente General Antonio Abad Alfau, y de un numeroso concurso, compuesto de los diferentes cuerpos del Estado y de los principales ciudadanos y, puestos todos de pie, dijo EL PRESIDENTE INTERINO DEL SENADO: *En nombre de la Constitución y conforme a su Art. 20, queda abierta la Cuarta Sesión Legislativa del Senado Consultor.*

AGN

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

Acto continuo Su Excelencia el General Libertador hizo leer un discurso que dice así: (*)

El Vice-Presidente del Senado, Presidente interino del mismo, tomó en seguida la palabra y leyó la siguiente alocución que dice así. (**)

Después de lo cual y terminado el acto, se levantó la sesión con la solemnidad de costumbre.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 3 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los tres días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte, Felipe Dávila Fernández de Castro, Francisco Javier Abreu y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; haciendo las veces de Presidente el primero por enfermedad del Honorable Tomás Bobadilla, y llamados nominalmente los Señores Senadores, quedó abierta la sesión con presencia de la mayoría.

En seguida se leyó el acta de la sesión anterior, que fué aprobada.

El Honorable Dávila Fernández de Castro expuso que habiendo cesado el período de la Sesión consultiva en que hasta el veinte y siete de Febrero había estado el Senado, y entrándose en el de la Legislativa, para el cual no estaba elegido el Presidente del mismo, como lo previene la Cons-

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 10.
(**) Véase Apéndice, doc. Nº 11.

titución, al abrirse la Sesión legislativa, parecía oportuno legalizar la constitución de aquélla antes de proceder a otro asunto, verificándose una nueva elección. Tomaron la palabra los Honorables Abreu y Bonilla, y se discutió latamente el punto, quedando acordado se procediese a la elección.

Verificada ésta por escrutinio secreto, resultaron elegidos separadamente los Señores Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte por Vice-Presidente; y Pedro Pablo de Bonilla para Secretario. Seguidamente se dió lectura de una petición de algunos vecinos de San Cristóbal, y enterado de su contenido, acordó el Senado nombrar una Comisión de peticiones, a la cual pasáse la referida solicitud, a fin de que abriese concepto sobre ella, y fueron nombrados para componerla los Señores Abreu y Castro. Leída inmediatamente después otra petición de los vecinos de Jarabacoa, y enterado el Senado de su contenido, acordó pasase a la misma Comisión.

El Honorable Francisco Javier Abreu pidió la palabra para recomendar al Senado la necesidad en que estaba de nombrar el séptimo Senador, cuya plaza se halla vacante por renuncia del 2º elegido por la Provincia de Santiago de los Caballeros; y el Senado, reconociendo la urgencia del referido nombramiento, acordó, sin embargo, se aplazase para cuando estuvieren presentes los Honorables Senadores enfermos en la actualidad.

El Honorable Vice-Presidente leyó un proyecto de decreto que es a la letra como sigue..... (*) y hallándose firmado por otro Señor Senador, como lo previene el Reglamento, y declarada la urgencia, se tomó en consideración, y se dejó sobre la mesa para dar su segunda lectura en la inmediata sesión, conforme a lo que establece el mismo Reglamento.

Terminada ésta se procedió a dar la primera lectura del proyecto de la Ley 3ª del Código Civil que estaba sobre

(*) Omitido en el original.

la mesa por remisión que de él había hecho la Comisión nombrada y, concluída, quedó de nuevo sobre la mesa para que siga los trámites que le traza la Constitución.

Hecho lo cual, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 5 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cinco días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera, Senadores; y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; el primero ocupando la Presidencia por enfermedad del Honorable Tomás Bobadilla.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En seguida fué llamada la orden del día y se dió la primera lectura al proyecto de decreto sobre la declaración honrosa que se reclama para el Ministro Plenipotenciario que fué Don Rafael María Baralt, y quedó sobre la mesa.

Se procedió luego a la segunda lectura de la primera ley del Código Dominicano y, terminada ésta, se dió la primera de la segunda ley; quedando ambas sobre la mesa.

Se dió cuenta asimismo, de una petición de los miembros de la Cámara de Cuentas y enterado el Senado de su contenido, la mandó pasar a la Comisión de peticiones.

Terminada la orden del día, se leyó un oficio del Señor Ministro de lo Interior, consultando al Senado en nombre del Gobierno, sobre el uso de la facultad que concede al Poder Ejecutivo el Art. 35 de la Constitución, en su 27ª atribución

en favor de los individuos que en él se expresan, y se acordó se dijese al Gobierno que el Senado, evacuando la consulta que se le ha hecho por el órgano del Señor Ministro del Interior, acerca del permiso de volver al país, que S. E. el General Libertador desea conceder a los Señores Manuel Saldaña, José Reyes, Marcos Polanco, José Ortega, Lasteni Martínez, José M. Sedano, Juan Guerrero, Juan Rodríguez, José Dolores Peguero, Angel Guerra y Juan de la Rosa Arache; ha acordado se le pida al Gobierno informe sobre las causas por qué están dichos individuos en el caso de ser amnistiados.

Terminado lo cual y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 8 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los ocho días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera, Francisco Javier Abreu y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; haciendo las veces de Presidente el primero por enfermedad del Honorable Tomás Bobadilla, y llamados nominalmente los Honorables Senadores, en presencia de la mayoría se declaró abierta la sesión.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se dió cuenta de un oficio del Señor Ministro del Interior, en que el Gobierno informa sobre las calidades que hacían acreedores a los propuestos por el mismo para la amnis-

tía que el General Libertador desea conceder; y se acordó evacuar la consulta de acuerdo con el pensamiento propuesto.

Se pasó a la orden del día, y por ella se procedió a la segunda lectura del proyecto de ley sobre remuneración honorífica a los servicios prestados a la República por el Señor Baralt y hecha, quedó sobre la mesa.

Se dió en seguida la tercera lectura de la primera ley del Código Civil y leída que fué, quedó sobre la mesa.

Hízose lo mismo con la segunda ley del mismo Código, después de habérsele dado su segunda lectura.

El Honorable Abreu observó el entorpecimiento que para el despacho de los negocios causaba en el Reglamento del Senado dos equivocaciones que se habían padecido al imprimirlo. La primera sobre la Presidencia interina del mismo en el caso de enfermedad del que la ejerza, y la segunda exigiendo que las discusiones de las leyes tengan interrupciones y términos que suelen no ser oportunos ni convenientes; y se comisionó al Señor Fernández de Castro para que propusiera las modificaciones que habrían de hacerse.

Dió cuenta en seguida la Comisión de peticiones de su dictamen acerca de la solicitud hecha a nombre del General Valerio, y conformándose el Senado con el parecer emitido por ella, la acordó favorablemente.

Dióse en seguida cuenta por la misma de otra petición del General Román Franco Bidó, y el Senado aprobó el dictamen de la Comisión.

Se dió lectura de otro dictamen de aquélla sobre una reclamación de los vecinos de Jarabacoa pidiendo la agregación a su Común del Distrito de Tabera, y se acordó pedir al Gobierno informes con los antecedentes.

Se dió cuenta por último de otro dictamen de la misma, sobre una reclamación de los miembros de la Cámara de Cuentas, y el Senado acordó conforme con el dicho dictamen. Terminada lo cual, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 9 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los nueve días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario de las sesiones del Senado Consultor, a saber: los Honorables Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; haciendo las veces de Presidente el primero, por enfermedad del Honorable Bobadilla.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

El Honorable Dávila Fernández de Castro pidió la palabra y dijo: Que habiéndosele encargado por el Senado la reforma de dos artículos del Reglamento interior de este Cuerpo, cuya redacción viciosa se había acordado enmendar, tenía el honor de someter su trabajo a la deliberación del Senado; y habiéndose discutido, fueron aprobados los siguientes: Arts. 9, 41 y 43.

Se pasó en seguida a la orden del día, y por ella se dió la tercera lectura del proyecto de decreto sobre la recompensa honorífica propuesta en favor del Señor Baralt, Ministro Plenipotenciario que fué de la República en Madrid, por los servicios que prestó en su misión, y terminada dicha lectura, se discutió y aprobó en los términos siguientes:

Atendiendo: a que es notorio y consta además en la Memoria dirigida por el Secretario encargado de las Relaciones Exteriores a S. E., el General Libertador el 30 de Diciembre del año expirado, Don Rafael María Baralt, Ministro Plenipotenciario que ha sido de la República en Madrid, ha prestado al Estado y a su Gobierno servicios tan importantes como la celebración del Tratado dominico-hispano y la consiguiente aclaración de su artículo 7º por parte del Gobierno de S. M. Católica.

Atendiendo: a que con el Tratado referido, obtuvo Don Rafael María Baralt, no sólo el objeto primordial de la política dominicana, cual era el de regularizar y legalizar la existencia de la República en la comunión de las demás naciones independientes; sino un fin que hasta entonces se había negado a las más vivas, repetidas y costosas instancias del Gobierno Dominicano.

Atendiendo: a que así en la celebración del Tratado dominico-hispano, como en las gestiones hechas para obtener del Gobierno de S. M. Católica la aclaración relativa al artículo 7º del mismo, y generalmente en todos los pasos dados con el carácter de Ministro Plenipotenciario de la República, Don Rafael María Baralt, procedió con estricta y religiosa sujeción a las instrucciones del Gobierno Dominicano.

Considerando: que estos y otros servicios eminentes, prestados a la República por Don Rafael María Baralt no han sido remunerados como correspondía, no obstante la buena voluntad y gratitud del Gobierno Dominicano.

Considerando: que al desconocer el ex Presidente la eficacia de la interpretación dada al Gobierno de S. M. Católica al Art. 7º del Tratado dominico-hispano: al continuar autorizando, y aun promoviendo la matriculación abusiva de los dominicanos como súbditos españoles, y al separar a Don Rafael María Baralt de un puesto que este Señor había honrado con su conducta y sus actos marcados con el sello del desinterés, de la lealtad y de la más rara nobleza, obró Báez aconsejado únicamente por una ciega ambición privada, olvidando los deberes de su cargo y queriendo vengar en nuestro Ministro Plenipotenciario en España, el agravio de haber obtenido estipulaciones que frustraban sus designios.

Considerando, por último: que semejante conducta en el que fué Presidente de la República Dominicana hace indispensable, en éste como en todos los demás actos de su especie un correctivo que desagravie la moral, establezca la justicia, dé satisfacción a los intereses ofendidos y restaure el decoro, el buen nombre y la dignidad de la República.

DECRETA:

Art. 1º Don Rafael María Baralt ha merecido bien de la Patria.

Art. 2º En nombre de la República, se le da voto de gracias.

Dado, etc. — M. J. Delmonte. — Francisco J. Abreu.

Pasóse luego a la tercera lectura de la ley primera del Código Civil, y hecha, se discutieron sus artículos separadamente, tomando parte en el debate los Señores Abreu y Delmonte, por una parte, y los miembros de la Comisión, y quedó sancionado en los términos siguientes:

Dios, Patria y Libertad — REPÚBLICA DOMINICANA —

EL SENADO CONSULTOR

En nombre de la República ha sancionado la

LEY DEL CODIGO CIVIL DOMINICANO

TITULO PRELIMINAR

De la Ley. — Derechos y obligaciones que de ella emanan.

Art. 1º § 1º—Ley es el precepto escrito que, con las formalidades debidas, sanciona el Poder Legislativo y promulga el Ejecutivo.

§ 2º—Las leyes son ejecutivas, obligatorias y de necesaria aplicación por los Tribunales de la República, desde el día que se fije en el decreto de su promulgación.

Art. 2º La Ley no tiene fuerza retroactiva; jamás podrá aplicarse a los hechos anteriores a ella.

Art. 3º Todo el que resida en la República está sujeto a las leyes dominicanas, sin más excepción que aquella que por los Tratados especiales, celebrados con las naciones amigas, se halle expresamente establecida o se estableciere en favor de sus respectivos nacionales. Los dominicanos residentes en países extranjeros estarán sujetos a las leyes que regulan el estado y la capacidad civil y política de las personas.

Art. 4º El Juez que rehusare oír en justicia a las partes, proveer sus pedimentos o dar sentencias en las causas o pleitos que se hallen en estado aun cuando sea bajo el pretexto del silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido y juzgado como culpable de "denegación de justicia".

Art. 5º § 1º—Se prohibe a los Jueces pronunciar sus sentencias en términos generales ni reglamentarios; y las que pronuncien se entenderán siempre decisivas únicamente del caso o casos que hayan sido objeto del juicio.

§ 2º—Una ley no puede ser derogada sino por otra que le sea posterior.

Art. 6º Cuando el cumplimiento de una ley interesa al orden público o la moral y buenas costumbres, los convenios particulares entre partes, o las renuncias que éstas hicieren del derecho que aquélla les concede, no impedirán su ejecución.

Art. adicional. Desde el momento en que esta ley se haga obligatoria, en virtud de la publicación que de ella hiciere el Poder Ejecutivo, quedarán anuladas todas las disposiciones contenidas en el Título preliminar del Código Civil desde el Art. 1º hasta el 6º inclusive.

Dado en el Palacio del Senado en Santo Domingo, Capital de la República, a los 9 días del mes de Marzo de 1859, 16 de la Patria.

Con lo cual, se levantó la sesión, siendo la hora avanzada.- *M. J. Delmonte.- Francisco X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 10 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Felipe Dávila Fernández de Castro, Francisco Javier Abreu y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario, ocupando el primero la silla presidencial por enfermedad del Honorable Bobadilla.

Leída el acta de la anterior, fué aprobada.

Llamóse el orden del día y se pasó a dar la tercera lectura del proyecto de la ley segunda del Código Civil Dominicano; y verificada que fué, admitida a discusión, se procedió a ello por artículos.

Se abrió ésta sobre el contenido del Art. 7º del Código, que es el primero de esta ley, y la Comisión hizo observar que era conveniente en nuestra Ley Civil la diferencia que hay entre los derechos civiles y los políticos; y después de discutirse el artículo 7º, fué aprobado en los términos siguientes:

Art. 7º *Son derechos civiles: aquellos que se adquieren en virtud de la Ley Civil; a diferencia de los políticos que sólo pueden darse por la Constitución del Estado. Para el goce de los derechos civiles no es por consiguiente necesario estar en posesión del derecho de ciudadanía, que se adquiere, conserva o pierde solamente conforme a lo prescrito por la Constitución.*

Dada la tercera del octavo, se abrió la discusión, y se aprobó en la forma siguiente:

Art. 8º *Todo el que con arreglo a la Constitución gozare de la calidad dominicana, disfrutará de los derechos civiles.*

Pasóse a discutir el noveno, y la Comisión sostuvo la variación hecha en el artículo, fundándose en que nada hay que establecer sobre los hijos de los extranjeros, para los cuales ha dispuesto ya la Constitución lo conveniente; cuando, por el contrario, es oportuno sentar en principio la participación de los derechos civiles que la ley concede a los extranjeros; y quedó aprobado como sigue:

Art. 9º *Los extranjeros que se hallen en el caso señalado por la Constitución, gozarán igualmente de los derechos civiles en los mismos términos que en él les indica.*

Hízose la misma lectura del 10º, se discutió y aprobó en los términos siguientes:

Art. 10. *Los hijos de dominicanos nacidos en país extranjero, son dominicanos, si no han perdido esta calidad*

BIBLIOTECA DEL CONGRESO República Dominicana

por alguna circunstancia en la ley. En el mismo caso se hallan los hijos de los dominicanos que hubiesen perdido esta calidad y que nacieren en país extranjero, siempre que a su vuelta al territorio de la República hagan la aceptación que previene la Constitución.

Se pasó luego al debate del artículo siguiente, y se observó por la Comisión que, aunque la Constitución concedía los derechos civiles a los extranjeros que se hallasen en el caso previsto en ella, podía, sin embargo, llegar el caso de que cualquier potencia quisiese renunciar esos derechos concedidos a sus nacionales, privando a los dominicanos, por cláusula expresa en su Tratado, de la participación de iguales derechos en aquella Nación; para cuyo caso convenía se estableciese el principio que se sienta en el artículo. Agotada la discusión fué aprobado en la forma que va a continuación:

Art. 11. *Sin embargo de lo dispuesto en los artículos que preceden en beneficio de los extranjeros, el goce y ejercicio de los derechos civiles tendrá para éstos la misma limitación que por los Tratados de su Nación se imponga al que en ella gocen y ejerzan los dominicanos.*

Se discutió acto continuo el 12, y observándose que difería en su relación del correspondiente en el Código francés, dijo la Comisión que, siendo igual el principio en que estribaba lo establecido en el Art. 12 del Código francés y lo dispuesto en el 13, aunque para casos distintos, convenía reunirlos en uno, y redactarlo tal cual lo había presentado la Comisión; y después de una discusión que ilustró la materia, se aprobó como se ve en artículo siguiente:

Art. 12. *La mujer, en cuanto al goce de los derechos civiles, sigue la condición de su marido.*

Se procedió acto contínuo al debate del Art. 13 de la misma, y se aprobó en los términos siguientes:

Art. 13. *La dominicana viuda de un extranjero que por su matrimonio hubiese perdido el goce de los derechos civiles, podrá recobrar la calidad de dominicana si reside en la*

República o vuelve a ella y declara que es su intención continuar residiendo en el país.

El que le sigue en el orden numérico púsose a discusión, y previa su lectura fué aprobado sin réplica del modo siguiente:

Art. 14. *Las obligaciones contraídas con un dominicano por un extranjero, resida o no en la República, aun cuando no hubiesen sido en país extranjero, son de la competencia del tribunal dominicano donde se entable la demanda.*

Sometido a discusión el Art. 15, fué ligeramente variado en la discusión y aprobado.

Art. 15. *Un dominicano puede ser demandado ante los tribunales dominicanos por las obligaciones que hubiese contraído en país extranjero, aun cuando no hayan sido con un extranjero.*

Y habiendo tomado la palabra algunos Señores sobre la conveniencia de conservar la disposición del Código francés, por cuanto un extranjero podría irrogar perjuicios a un dominicano intentándole temerariamente una demanda injusta, y burlándose de la condenación en costos, daños y perjuicios con la fuga y sobre todo por no hallarse establecida en los Códigos extranjeros una excepción igual en favor de los dominicanos.

El Honorable Dávila Fernández de Castro sostuvo el dictamen diciendo que la tendencia de nuestra Ley Política no permite conservar la disposición de aquel artículo; que en ella se abren las puertas al extranjero por cuantos medios tiene la República, y no parece que deban cerrársele las de los Tribunales, porque tengan más o menos facilidad de prestar fianza de estar a lo juzgado y sentenciado; fianza que, en la práctica, se tiene como una de las más difíciles de dar por su calidad de incierta: que siendo además esa disposición poco liberal, debe restringirse en cuanto no sea absolutamente necesaria; que en Francia, reino abierto y limítrofe de cuatro naciones extrañas, hay necesidad de limitar más la facultad de demandar, porque el extranjero que lo

hiciera por capricho hallaría muy pronto un refugio contra una condenación en costos; pero entre nosotros sólo podría evadirse por mar, después de obtener el permiso de ausentarse, y cualquiera interesado podría estorbar su salida con un brevísimo recurso. Continuándose el debate por otros Señores, la Comisión retiró el artículo para redactarlo de nuevo.

Hecho esto y puesta la nueva redacción a votación, quedó aprobada por cuatro votos contra uno en los términos siguientes:

Art. 16. *Todo extranjero que intente una demanda en cualquier materia que no sea de comercio, estará obligado a prestar fianza previa, bastante a cubrir los costos, daños y perjuicios que puedan originarse de ella, a menos que posea en la República bienes inmuebles de suficiente valor a cubrirlos.*

Se discutió el 17 y se aprobó en la siguiente forma:

Art. 17. *La pérdida de la calidad de dominicano lleva consigo la de los derechos civiles.*

§ 2º *La calidad de dominicano se pierde por cualquiera de los motivos siguientes: 1º. Por naturalizarse en país extranjero: 2º. Por aceptar de un Gobierno extranjero empleos públicos o comisiones, a menos que no se haya obtenido la autorización competente; 3º. Por establecerse en país extranjero de manera que se demuestre la intención de no volver jamás a habitar en la República.*

§ 3º *Los establecimientos de comercio, sea cual fuere su importancia o duración, jamás se reputarán hechos con la intención a que se refiere la cláusula 3ª del párrafo anterior.*

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 11 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los once días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; ocupando el primero la silla presidencial por enfermedad del Honorable Bobadilla; y llamados nominalmente los Honorables Senadores, se declaró abierta la sesión en presencia de la mayoría.

Se leyó el acta de la sesión anterior, y habiendo observado el Señor Vice-Presidente que entre las razones que expuso para sostener la redacción que se le ha dado por el Senado al Art. 16 de la ley 2ª del Código Civil que se discute, se omitió la principal que era la de no hallarse en los Códigos extranjeros una disposición en favor de los dominicanos, análoga a la propuesta por la Comisión, se hizo esta enmienda y se aprobó en el acta.

Se presentó en seguida por la Comisión el proyecto de la ley 3ª del Código Civil y quedó sobre la mesa.

Se llamó el orden del día y dada la tercera lectura del proyesto de la 2ª ley, se abrió la discusión sobre sus artículos; y no habiendo habido oposición a la redacción del Art. 18, quedó aprobado en éstos términos:

Art. 18. *Todo dominicano que hubiese perdido la calidad de tal, puede recobrarla del modo siguiente: 1º. Si está fuera del país, habrá de volver a él y declarar que es su ánimo continuar residiendo en la República y además renunciar las calidades que le hicieron perder la de ciudadano dominicano; 2º. Si reside en la República, hará la declaración de*

continuar permaneciendo en ella y renunciará las referidas calidades.

Abierta la discusión sobre el 19 se aprobó en los términos siguientes:

LEY 2ª. TEXTO

Art. 19. *Los derechos civiles recobrados conforme a lo que previenen los Arts. 10, 13 y 18, no producirán sus efectos en beneficio de los interesados, sino después de llenarse las formalidades prescritas en ellas y sólo en los casos que ocurran después de haberlos recobrado.*

Igual trámite siguió el inmediato, y se aprobó en la forma que va a continuación:

Art. 20. *El dominicano que tomase las armas contra la República y el que tomase servicio en el ejército o armada de un enemigo suyo, quedará sujeto a las penas de la ley y perderá los derechos civiles con la calidad de dominicano.*

Tampoco sufrió alteración el que se copia a continuación, que fué aprobado así:

Art. 21. *Los dominicanos que tomaren voluntariamente, y sin permiso del Gobierno, servicio militar en el ejército o armada de una Nación que no se hallase en guerra con la República, perderá los derechos civiles, que sólo podrán recobrar después de residir tres años en el territorio dominicano y obtener su rehabilitación del Poder Ejecutivo.*

Púsose a discusión el 22 y se aprobó como sigue:

SESION 2ª

De la privación de los derechos civiles a consecuencia de las sentencias de los tribunales.

Art. 22. 1º. *La muerte civil es la privación de toda participación de los derechos civiles de la República.*

2º. *La pena que lleve consigo la privación de todos los derechos civiles, produce la muerte civil.*

Se entró en el debate del Art. 23, y después de algunas modificaciones se aprobó, en la forma que va a continuación:

Art. 23. *La sentencia de muerte natural, aunque no se sufra por el condenado, lleva consigo la de la muerte civil, aun en el caso de no expresarse en la sentencia.*

Tampoco se objetó nada contra la redacción del 24, y se aprobó con esta redacción:

Art. 24. *Las demás penas aflictivas perpetuas, no llevarán consigo la de la muerte civil, a menos que ésta no se halle expresa en la ley.*

Y siendo avanzada la hora, se suspendió la discusión, y acto seguido se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 15 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los quince días del mes de Marzo del mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada. Seguidamente se procedió al reemplazo del Señor Francisco J. Jiménez, cuya dimisión se había aceptado; y hecho el escrutinio del modo acostumbrado, resultó electo a unanimidad de votos el Señor Vicente Antonio Reyes, a quien se le participó esta nominación para que compareciese a prestar el debido juramento a la mayor brevedad posible.

Se dió lectura de una solicitud del Señor Juan F. Guevara, ciudadano de la República de Venezuela; quien reclama del Senado Consultor, se le indemnicen las pérdidas que dice haber sufrido en la Común de Guerra, a causa de los daños que le causara el Ejército expedicionario en las primeras medidas que tomó el ex Presidente Báez en el año 1857; y el Senado acordó que si la tal solicitud es un reclamo debe dirigirse a quien corresponda, y si una petición, éste derecho no le es concedido por la Constitución sino a los dominicanos; se dió lectura a otra petición del Señor Eugenio García, vecino de la Península de Samaná, y leída que fué ésta, pasó a la Comisión de peticiones.

Se acordó oficiar al Señor Ministro de Justicia, para, conforme a sus deseos, oír el día de mañana a las doce de ella la observación que por su órgano hace el Ejecutivo a la primera Ley del Código Civil dominicano. Seguidamente se ocupó el Senado en evacuar la consulta que le hizo el Gobierno sobre la cuestión dinamarquesa, y el Senado opinó se conteste que convenía hacer comprender al representante de S. M. el Rey de Dinamarca, que el Gobierno de la República ve con sentimiento que sus esfuerzos por conservar las buenas relaciones que lo habían ligado con el Rey de Dinamarca vengan a estrellarse contra la desusada severidad del representante de S. M., en una cuestión puramente pecuniaria; que el Gobierno de la República ha agotado los medios de conciliación que le han permitido usar la dignidad de su Nación, llevando la conciliación hasta renunciar su autonomía en la decisión de lo que es su derecho, sometiéndose a sufrir la voluntad de un árbitro; que hoy nada le resta que hacer, más que sostener por cuantos medios estén a su alcance esa misma dignidad nacional, asegurando al Ministro dinamarqués, que verá con profundo sentimiento que S. S. continúe en la vía poco conciliadora que ha elegido no aceptando el arbitraje propuesto; pero que si insiste en ella, al Gobierno de la República no le queda más arbitrio que dirigir-

se en queja al de S. M. el Rey, y prepararse para las eventualidades que su poca flexibilidad pudieran hacer surgir.

El Senado acordó, además, añadir al Gobierno que en último evento no descuide hacer llegar su queja y proposición firmemente apoyada hasta el Gabinete de Copenhague y proceda en lo demás con toda la energía que requieran las circunstancias, contando con la cooperación más eficaz del Senado Consultor en el caso que le sea necesario.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 16 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y seis días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Felipe Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se presentó el Señor Vicente Reyes a la prestación del juramento de Senador por la Provincia de Santiago, en reemplazo del Señor Francisco J. Jiménez, según comunicación que se le hizo de tal nombramiento; y éste le fué tomado por el Honorable Presidente de la manera que prescribe la Constitución.

Acto continuo se presentó el Señor Ministro de Justicia ante el Senado y expuso que, a nombre del Poder Ejecutivo, tenía que hacer una observación a la Ley 1ª del Código Civil

Dominicano, en cuanto a su forma y promulgación; y después de algunas aclaraciones sobre el particular, quedaron de acuerdo en que el método adoptado era el mejor para poder obtener con más prontitud la impresión del mencionado Código.

Seguidamente, el mismo Señor Ministro, a nombre del Poder Ejecutivo, propuso al Senado que sería conveniente para sostén de la moral y buenas costumbres que se reformara el Decreto que trata sobre la extracción de las niñas menores de edad de la casa paterna, y el Senado acordó que pasara a una Comisión especial compuesta de los Honorables Bobadilla y Bonilla.

Traído el orden del día, se procedió al debate del Art. 25 del Código Civil Dominicano, y después de una larga discusión, se suspendió ésta para ocuparse de ella en la próxima sesión.

Se dió lectura a una solicitud de la sociedad "Amantes de las Letras" remitida al Senado por el órgano del Poder Ejecutivo, y se pasó a la Comisión de peticiones.

También se dió la primera lectura a la 3ª Ley del Código Civil, y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 18 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y ocho días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Felipe

Dávila Fernández de Castro, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

El Honorable Castro propuso que se nombrase una Comisión para entenderse en la inspección de la impresión de las leyes que deben formar el Código Civil Dominicano, y al efecto fueron nombrados los Honorables Delmonte, Reyes y Bonilla.

Se dió lectura de una petición de los Señores Jacinto de Castro, Pedro Ricart hijo, Felipe Calero hijo y Juan Ramón Fiallo, y se acordó pasase a la Comisión de peticiones.

Se dió la 2ª lectura a la ley 3ª del Código Civil.

Y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 21 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y un días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario de las sesiones del Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Felipe Dávila Fernández de Castro, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se dió lectura de un oficio del Poder Ejecutivo de fecha diez y ocho de los corrientes, para que el Senado se dignase tomar medidas sobre su contenido, y se mandó que pasara a una Comisión especial nombrada al efecto, compuesta de los Honorables Reyes y Delmonte.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

El Honorable Castro antes de ausentarse del país para desempeñar la comisión que con beneplácito del Senado le ha encargado el Gobierno, presentó una Memoria sobre la conveniencia y posibilidad de hacer la amortización de la moneda nacional circulante por medio de un empréstito de probable buen éxito, y a la vez un proyecto de ley para llevarlo a cabo, y se tomó en consideración.

Traída el orden del día se procedió a la 3ª lectura de la ley 3ª del Código Dominicano, y habiéndose suscitado algunos debates, se acordó la suspensión de su lectura; y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 22 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y dos días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla, ocupando el primero la silla presidencial por el Honorable Bobadilla; y llamados nominalmente los Honorables Senadores, se declaró abierta la sesión en presencia de la mayoría.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada. La Comisión de peticiones presentó su dictamen sobre varias solicitudes que se habían sometido a su examen. A saber: la del Señor Eugenio García, vecino de la Península de Samaná, reclamando una balandra nombrada *La Josefa* que dice le fué tomada en requisición en aquel lugar en

Julio de 1857, y que se perdió en el servicio del Gobierno Provisional; y el Senado, conformándose con el dictamen de su Comisión, acordó pedir informes al Señor Ministro de Hacienda y Comercio sobre los puntos contenidos en dicha solicitud, para decidir después lo que fuere de justicia.

La que por conducto del Poder Ejecutivo hicieron los Señores Jacinto de Castro, Pedro Ricart hijo, Juan Ramón Fiallo y Felipe Calero hijo, proponiendo compra de los terrenos de *Engombe* pertenecientes al Estado, y el Senado acordó diferir la decisión hasta que se tenga a la vista la Ley de la materia. La de varios vecinos de la Común de San Cristóbal, solicitando se les exonerase del derecho de patentes, en razón de los grandes perjuicios que a causa del sitio ha sufrido aquella población; y el Senado, apreciando el dictamen de la Comisión, declaró inadmisible la solicitud, en razón de que igual derecho tendrían a esta excepción la mayor parte de los pueblos de la República.

La de la sociedad "Amantes de las Letras", solicitando se les conceda el ex convento de los Jesuítas para la Construcción de un teatro, y visto el dictamen de la Comisión, se determinó oficiar al Ministro del Interior para que informe al Senado acerca de las condiciones con que fué acordado a los peticionarios el antiguo Coliseo de la Plaza de Armas de esta Capital.

Se concluyó la 3ª lectura de la ley 3ª del Código Civil Dominicano y se dió la 1ª de la cuarta.

Después de lo cual y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 23 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y tres días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se procedió a la continuación de la 3ª y última lectura de la ley 3ª del Código Civil Dominicano, y terminada que fué, se aplazó la discusión; igualmente se dió la 1ª lectura de la 4ª ley del mencionado Código: después de lo cual y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 29 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta anterior y fué aprobada.

También se leyó una solicitud del Ayuntamiento de la Ciudad de Santiago, pidiendo al Senado la autorización para ceder en propiedad los solares de la Común, en favor de aquellos que fabriquen de paredes y techen con tejas, con el fin de hermosear la Ciudad e impedir que se fabriquen pequeños bohíos que imperfeccionen las calles, y que tome una resolución sobre el peaje que se cobra por las bestias de las que transitan por el camino de Puerto Plata, fijados por dos pesos moneda nacional, suma en extremo insignificante, atendiendo al valor actual de dicha moneda, y se mandó pasar a la Comisión de peticiones. Seguidamente se dió comunicación de un oficio del Poder Ejecutivo incluyendo el Tratado de paz, amistad, etc. entre la República, y el Honorable Senado de la Ciudad libre anseática de Bremen; y se aplazó la lectura para la próxima sesión.

Se dió la 2ª lectura de la 4ª ley del Código Civil dominicano; y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 30 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los treinta días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario de las sesiones del Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Procedióse a la solicitud que presentó el General Román Franco Bidó y pasó a la Comisión de peticiones. Los Honorables Bonilla y Herrera, presentaron un proyecto de ley referente a la extracción de niñas menores de la casa paterna, y después de su lectura fué tomado en consideración para discutirlo oportunamente.

En seguida se dió la primera lectura constitucional del Tratado de paz, amistad, etc. entre la República y la Ciudad libre y anseática de Bremen, y se suspendió en el artículo octavo.

Acto continuo, la Comisión de peticiones presentó su informe sobre la solicitud del Ayuntamiento de Santiago, mencionada en el acta de la sesión anterior, y cuyo tenor es el siguiente:

La Comisión opina acerca de los particulares que abraza la exposición del Ayuntamiento de Santiago, en cuanto al que se refiere a la cesión en propiedad de solares pertenecientes a la Común, que se le autorice a vender en la forma y manera que indica, y con el requisito de que los que compren solares deben en la escritura de propiedad que se les dé, comprometerse a edificar en el plazo improrrogable de un año. En cuanto al segundo particular, la Comisión es de parecer, que el Senado no debe conocer en el asunto, por ser puramente municipal, y por lo tanto de las exclusivas atribuciones de los Municipios, los cuales pueden tomar todas las medidas que crean más convenientes en este caso así como en otros análogos.

Se difirió la discusión de este asunto para la próxima sesión. Seguidamente se dió la tercera lectura de la 4ª ley del Código Civil dominicano, según lo traía la orden del día; concluída la cual siendo ya la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 31 DE MARZO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los treinta y un días del mes de Marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente, en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

La Comisión nombrada para abrir concepto acerca del Tratado de Comercio, paz, etc. entre la República y la Ciudad libre y anseática de Bremen, presentó su dictamen en forma de un decreto, del cual se dió la primera lectura.

Seguidamente y a propuesta del Honorable Pedro Pablo de Bonilla, se acordó hacer la adquisición de la obra titulada *Decretos y Sentencias* del Tribunal de Casación de Francia, por Sirey, que se encontraba de venta en un almacén de esta plaza, la cual podría ser de grande utilidad al Senado por ahora, y después a la Suprema Corte de Justicia.

Se ocupó el Senado de otras varias materias, y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 4 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cuatro días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada. Se leyó una petición del Señor A. García, Ministro de Hacienda, reclamando una indemnización por la goleta *Amistad* de su legítima propiedad, la cual dice fué echada a pique en el puerto de Macorís durante la revolución, con las circunstancias mencionadas en dicha solicitud; y se mandó pasar a la Comisión de peticiones.

Se dió la primera lectura del decreto que reduce a toneladas de pies cúbicos para el pago de los derechos de puerto, etc., la medida capacidad llamada *last* de comercio, y usada en varios países cuyos pabellones frecuentan los puertos de la República.

Se concluyó la primera lectura del Tratado de paz, amistad, etc. entre la República y la Ciudad libre y anseática de Bremen, y siendo la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 5 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cinco días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario de las sesiones del Senado Consultor, a saber: los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente, en funciones de Presidente; Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se dió la primera lectura del proyecto de ley referente a la extracción de las niñas menores y mayores de la casa paterna, y después de varias discusiones sobre el particular, siendo la hora avanzada, se suspendieron los debates para continuarlos en otra sesión.- *M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 6 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los seis días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las once de la mañana, se reunieron en el Palacio Nacional, lugar ordinario donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta anterior y fué aprobada.

También se procedió a dar la segunda lectura del Tratado de paz, amistad, etc. entre la República y la Ciudad libre y anseática de Bremen.

Se pasó en seguida a dar la tercera lectura del proyecto de decreto entre esta República y dicha Ciudad de Bremen, sobre la reducción a toneladas de pies cúbicos, para el pago de los derechos de puerto, etc., en la medida de capacidad llamada *last* de comercio, usada en varios países.

Seguidamente, la Comisión de peticiones presentó su dictamen acerca de la solicitud del Señor A. García, y de conformidad se acordó pedir informes al Gobierno, sobre la nacionalidad del buque naufragado, las cualidades civiles del peticionario y los demás particulares a que se contrae dicha solicitud.

Sobre la del General Román Franco Bidó, la Comisión arriba mencionada presentó su dictamen en estos términos: que se remitan al Poder Ejecutivo los nuevos documentos exhibidos por el peticionario, para que se sirva informar sobre los particulares que contiene, y con especialidad, si aquel General ha sido debidamente indemnizado por alguna de las Administraciones pasadas, de los suplementos, gastos y pérdidas a que se contraen otros documentos. Y se acordó conforme.

Siendo ya la hora avanzada, se cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 7 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los siete días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria, siendo las once de la mañana, se

reunieron en el Palacio Nacional, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Seguidamente se pasó a la discusión del proyecto de decreto que reduce a toneladas de pies cúbicos, para el pago de los derechos de puerto, etc., la medida de capacidad llamada *last* de comercio, usada en varios países, y quedó definitivamente sancionado.

La Comisión nombrada para abrir concepto acerca del papel moneda emitido por Buenaventura Báez, presentó el resultado de sus tareas. El Honorable Presidente, uno de los dos individuos de que se compone, dijo: que la opinión de su Honorable colega, el Señor Fernández de Castro, se hallaba aún en borrador y concedida en términos muy lacónicos, porque de este modo fué que recíprocamente se comunicaron su dictamen, cuando vieron que había desacuerdo entre ellos, conviniendo en redactarlo separadamente y con más extensión para presentarlo al Senado, lo que, sin duda, no ha podido hacer el Señor Fernández de Castro, a causa de los preparativos indispensables al largo y repentino viaje que acaba de emprender en desempeño de una importante misión del Gobierno; pero que, tal cual estaba, era suficiente para imponer al Senado del parecer de su Honorable colega en la presente cuestión. Acto continuo se procedió a dar lectura al escrito del Señor Fernández de Castro que dice así:

"Juicio que ha formado el que suscribe sobre el arreglo que conviene hacer en la cuestión de papel emitido por Báez."

Persuadido de que ese papel es una propiedad como otra cualquiera de las garantizadas por la ley, es de sentir que sus tenedores no pueden ser despojados de ella.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

Persuadido asimismo de que una autoridad que obra contra la Constitución vigente y contra el derecho civil y de gentes, no debe ni debe ser obedecida; y que las autoridades del Cibao, cuando prohibieron la circulación de dicho papel, no pudieron tener en mira quebrantar la ley y no fué sin duda su ánimo despojar a los dueños de ese papel de lo que legítimamente les correspondía, sino sólo tomar una medida entonces necesaria; opina que pasadas aquellas circunstancias, el Decreto del Gobierno de Santiago debe estimarse como no escrito, en cuanto pueda inferir perjuicio a los tenedores del papel.

Persuadido, también, de que si este papel entrase de nuevo en la circulación se causaría una perturbación considerable en el crédito, perjudicial a sus mismos dueños, tenedores hoy de la moneda nacional circulante, cree que el referido papel debe ser definitivamente recogido, indemnizando a sus dueños.

Para hacer efectiva esta indemnización en estos angustiosos momentos, el que suscribe opina que debe crearse un papel de Deuda, llamada "Deuda Interior", con una renta de 3% amortizable en más o menos tiempo. Cree, también, que estimado el papel de Báez al cambio que debe tener se cambie por títulos de esa Deuda, a razón de un cincuenta por ciento, a fin de abonar a los tenedores un seis por ciento de su capital reconocido hasta tanto que se les amortice.

Por último, cree el que suscribe, que si bien no es justo enriquecer a los que hallan ese papel mal habido, tampoco lo será empobrecer a los que lo tienen con título legítimo y a cambios bajos, y que para aproximarse a un término medio equitativo, debe señalarse el tipo de 323 pesos por un peso fuerte. — Firmado. Felipe Dávila Fernández de Castro.

Terminada la lectura, el HONORABLE PRESIDENTE volvió a tomar la palabra y dijo: Honorables Senadores: Vengo a dar mi parecer acerca de la cuestión del papel moneda emitido por Buenaventura Báez, y recogido de la circulación, en mi calidad de individuo de la Comisión que a ese fin nombró de su seno el Senado. Este parecer mío toma las modestas proporciones de un voto particular, por la circunstancia, para mí muy sensible, de no haber podido ponernos de acuerdo mi ilustrado colega el Señor Fernández de Castro y yo en

algunos puntos referentes al asunto. Y es natural esta divergencia en los pareceres, por proceder, no de una obstinación injustificable por una y otra parte, sino de la diferencia del punto de vista en que cada cual se ha colocado para estudiar la materia.

Yo prescindo, Señores, en la presente cuestión, de si Buenaventura Báez tenía o no autoridad para emitir papel moneda después de haber sido depuesto de la primera magistratura del Estado por el Congreso Soberano de Moca; prescindo también de los manejos que tuvieron lugar, así como de las miras aviesas con que se hizo la última emisión, toda vez que, a lo que entiendo, la mayor parte de los tenedores de ese papel, lo poseen como habidos *bona fide*, y no es posible distinguirlos de los que lo hubieron por medios que la ley condena. Por lo tanto, mi parecer versará tan sólo sobre el valor que deba dársele, y asimismo acerca del modo, forma y término en que deba hacerse la indemnización, sin mayor gravamen del Tesoro público. Y no quiere esto decir que yo crea que cualquiera medida, más o menos ventajosa para los tenedores decretada por el Senado, lo sea por exigirlo así la justicia, no, la indemnización, como quiera que se haga, estará fundada, a juicio mío, en razones de equidad y nada más que de equidad.

En este punto de vista y bajo ningún otro, ha de verse y considerarse la cuestión, y en ese punto me colocaré para su esclarecimiento ulterior, puesto caso que por discordar los pareceres, se empeñan mayores debates.

Lo que principalmente importa averiguar es el tipo a que debe calcularse ese papel moneda; papel que, precisamente como el que tiene hoy curso legal en el Estado, no representa *ningún valor efectivo definido;* circunstancia sobre la cual, permítaseme recordarlo, he sido el primero en llamar la atención del Senado y del Gobierno en las pasadas legislaturas; y aunque entonces no tuvo ningún resultado mi observación, me propongo hacerla de nuevo en la presente, tan pronto haya coyuntura favorable para ello.

Esa carencia, pues, de valor *representativo definido*, de que adolece el papel moneda emitido por Buenaventura Báez, es de suyo una grave dificultad por ser punto menos que imposible averiguar, no ya con certeza, pero ni aun aproximativamente, la pérdida real que han sufrido los tenedores por habérsele retirado de la circulación. Quiere mi ilustrado colega, el Señor Fernández de Castro, que para la estimación del mencionado papel, se tome por base el tipo proporcional de $323 por un peso fuerte. A decir verdad yo no encuentro razón alguna plausible que justifique ese tipo: si se aceptara, tendríamos que un papel, a mi juicio de origen bastardo, que llegó a fluctuar entre $3.125 y 3.750 por un peso fuerte, vendría a ser de mejor condición qne el de la circulación legal.

Me explicaré: si se tratase hoy de amortizar el papel que legalmente circula y que, según se cree, asciende a cincuenta millones de pesos dominicanos, poco más o menos, ¿a qué tipo lo estimaríamos? ¿Por ventura a los primitivos de $40, 50 y 60 por diez y seis pesos fuertes? Entonces el Estado sería gravado con unos veinte millones de pesos fuertes. ¿Por ventura a los tipos subsiguientes de $100, 200 por una onza? Entonces nuestro papel representaría de diez a cinco millones de fuertes.

Todos estos cálculos serían injustos, absurdos, en fuerza de ser ridículos. Y serían injustos porque jamás la suma de nuestro papel circulante *ha representado ese valor*; serían absurdos, porque de ello resultaría que un mal, como consideran al papel moneda los economistas, habría llegado a ser, contra los sanos principios, un venero de riqueza para los tenedores, si bien ruina miserable del país; y serían ridículos, porque no teniendo de suyo el papel moneda dominicano más valor que el que el *público le da*, habría alcanzado uno intrínseco, con sólo la ocasión del cambio. ¿A qué tipo, pues, lo amortizaríamos? Naturalmente lo amortizaríamos con arreglo al último que tuviese o alcanzase en los momentos mismos de la operación.

Pues bien: esta regla es la que debe servirnos de pauta en la cuestión que debatimos. El papel de Buenaventura Báez (prescindiendo del origen ilegítimo que tiene la mayor parte), no debe amortizarse con arreglo a otro tipo, si las razones que acabo de exponer tienen fundamento plausible, sino al que últimamente tuvo. Sin que valga decir que con ello se infiere perjuicio a los tenedores, porque el perjuicio ya lo habían sufrido aquellos mismos que lo habían obtenido a cambios bajos, *mucho antes de que se recogiese de la circulación*: como hoy mismo están perjudicados los tenedores del papel legal que en sus principios lo compraron a $40 y 50 por una onza, sin que por eso se crean con derecho a reclamar la pérdida que efectivamente han hecho, pues, aparte de otras consideraciones económicas, hay la de que no cabe dar un valor permanente y absoluto a lo que en sí es convencional, y está sujeto por su irregularidad original a fluctuaciones continuas. Fuera de que si aceptáramos la doctrina que acerca de este punto quiere establecer mi ilustrado colega, y puesto caso que la aplicáramos a la amortización del papel legal en circulación, el pueblo, en su inmensa mayoría, sufriría con ello nuevo gravamen: pues a la pérdida que él mismo ha padecido con demérito del papel moneda (pérdida que ningún dominicano siente, porque con ella hemos comprado, por decirlo así, la libertad e independencia nacional), se agregaría la pesadísima carga de una deuda a todas luces injusta y por todo extremo insoportable.

Demostrado, pues, lo infundado cuanto injusto sería el amortizar el papel de Buenaventura Báez, a razón de $323 por un peso fuerte, sólo me resta indicar el tipo a que debemos estimarlo. Para ello deberíamos tomar por base los dos últimos, entre los cuales fluctuó. Con todo, teniendo presente las circunstancias que agobiaron a la Ciudad sitiada, propongo el de dos mil por un peso fuerte, en vez de tres mil setecientos cincuenta: así satisfaremos las exigencias de la equidad, no menoscabaremos los principios de justicia, y no gravaremos con una deuda pesada al Tesoro nacional.

En cuanto al modo, forma y términos de efectuar la amortización, difiero del parecer de mi ilustrado colega el Señor Fernández de Castro. Y me fundo para emitir el mío en que ascendiendo como a cuarenta millones el papel moneda de Báez que queda por amortizar, calculados éstos al tipo que he indicado, harían veinte mil pesos fuertes, suma que no consiente por su exigüidad que se le consolide en deuda nacional interior.

Por esta razón, opino porque se expidan *bonos* a los tenedores, contra el Tesoro, en el cual se reciban en pago de derechos de importación y exportación, en los mismos términos que establece el Decreto de 29 de Octubre de 1858, para los bonos del Tesoro público con plazos vencidos. No puede hacerse más por un papel de origen ilegítimo: el Senado, decretando su amortización en la manera propuesta, los equiparará a los *pagarés* del Estado por tantos títulos legítimos.

Al terminar, creo deber manifestar que en la estimación del tipo a que debe aprestarse el papel moneda de Buenaventura Báez, sólo he tenido presente los sanos principios de justicia y equidad. Si por ventura algunos tenedores se creen lastimados, el perjuicio que haya, lo repito, no lo infiere el Senado, puesto que por cierto y la verdad, ese perjuicio es consecuencia lógica de la índole misma del papel, y data de mucho antes de haberse recogido de la circulación. Yo poseo, permítaseme de paso lo diga para poner ese mi voto al abrigo de toda interpretación, una gran cantidad de ese papel: lo obtuve a tipo muy bajo, y, sin embargo, el interés personal no me ciega hasta el punto de preferirlo a los intereses del Estado, ni menos a anteponerlo a toda noción de justicia.

No quiero cansar por más tiempo la atención del Senado, acumulando más argumentos para apoyar mi parecer.

El Senado examinará con detenimiento y calma las razones que sirven de fundamento al voto de mi ilustrado colega el Señor Fernández de Castro, así como las que yo he

tenido en cuenta para formular el mío, y en su sabiduría tomará la resolución que juzgue más acertada.

Entre tanto y para en el caso de que el Senado estime fundado mi parecer, someto a su aprobación el decreto siguiente:

EL SENADO CONSULTOR

En nombre de la República, etc.

Atendiendo: a que el General Libertador en el Mensaje que dirigió al Senado al resignar el Poder Dictatorial de que lo había revestido la Nación, lo excita a tomar una providencia acerca del papel moneda emitido por B. Báez y retirado de la circulación, que, a la vez desvanezca la ansiedad pública sobre este punto, concilie en cuanto sea posible los intereses de los particulares con los del Tesoro Nacional;

Considerando: que si bien el referido papel moneda en su mayor parte ilegal, los actuales tenedores que lo poseen como habido "bona fide", por cuya razón la equidad, ya que no la justicia, exige se les idemnice de la pérdida que realmente sufrieron con su desmonetización;

Considerando: que no teniendo el papel moneda en cuestión, como es evidente, valor alguno "representativo definido" de que el Tesoro público aparezca obligado a responder, los tenedores, aun en el supuesto caso de que ese papel fuese legal, no pueden fundadamente exigir que se les indemnice con arreglo a otro tipo más ventajoso que el que realmente tenía y era corriente en la plaza el día de su desmonetización;

Considerando: que cuando se procedió a desmonetizarle o retirarle de la circulación, el valor del referido papel fluctuaba entre los tipos de tres mil ciento veinte y cinco, y tres mil ciento cincuenta pesos nacionales por uno fuerte; siendo así que anteriormente había tenido otros diferentes tipos mucho más ventajosos y de casi imposible determinación;

Considerando: que, por esta circunstancia, se hace indispensable para lograr el fin propuesto, buscar un término medio que, conciliando tales extremos, establezca una justa compensación entre todos los intereses así públicos como privados.

DECRETA:

Art. 1º El papel moneda de los tipos de $10, $20 y $60 emitido durante la Administración Báez, será depositado en la Contaduría General de Hacienda en el perentorio término de un mes, contado desde la publicación del presente Decreto, para ser cambiado por "bonos" o "vales" en moneda fuerte a respecto de $1 fuerte por cada 2000 de aquel papel moneda.

Art. 2º Los dichos "vales" se recibirán en las Administraciones de la República, en pago de derechos de importación y exportación, en los mismos términos que previene el Decreto del General Libertador, de fecha veinte y nueve de Octubre de 1858, para los vales del Tesoro público con plazos vencidos.

El presente Decreto deroga, etc. — Firmado, M. J. Delmonte.

Y el Senado Consultor, después de haberse impuesto de los respectivos pareceres de los Señores Delmonte y Castro, resolvió tomar en consideración el proyecto de decreto con que termina el del primero de aquellos Honorables Señores, para discutirlo en los términos constitucionales.

Con lo cual y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 11 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los once días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

En este estado dióse la última lectura del decreto sobre el papel moneda emitido por la Administración Báez, puesto fuera de circulación, de los tipos de $10, 20 y 60, el cual pasó a discusión, y después de varios debates, fué sancionado a unanimidad. (Véase el libro marcado B. donde está sentado dicho Decreto) y acto continuo se ofició al Poder Ejecutivo dicho Decreto para los fines constitucionales.

Tomóse en consideración el informe del Ministro del Interior acerca de la solicitud hecha por la Sociedad "Amantes de las Letras"; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 20 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se reunieron en el Palacio del Senado Consultor, donde celebra sus sesiones, los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En este estado se dió también lectura de un oficio del Ministro de Hacienda, fecha diez y seis del que cursa, acusando recibo del Decreto enviado al Poder Ejecutivo con fecha quince de los corrientes, por el cual se reducía a toneladas para el pago de los derechos de puerto la medida de capacidad llamada *last* de comercio.

Igualmente se dió lectura de otro oficio, fecha diez y seis de los corrientes, devolviendo el Decreto que arreglaba el cambio del papel moneda emitido durante la Administración Báez, para que el Senado escogitase otro medio que armonizase mejor los intereses públicos con los de los negociantes extranjeros; y después de algunas discusiones en que tomaron parte todos los miembros del Senado, se acordó devolver el citado Decreto al Poder Ejecutivo, para que éste precise las observaciones que quiera hacerle de la manera que prescribe la Constitución y que se ha practicado hasta ahora: pues teniendo ambos Poderes la iniciativa de las leyes, un mismo interés público y el deseo de la felicidad general, conviene también igual franqueza en sus opiniones, y principalmente en una materia de tanta trascendencia.

Se trajo a la vista también otro oficio del mismo, sobre Gastos públicos, para el corriente año de mil ochocientos cincuenta y nueve, del cual se dió lectura y se acordó que será tomado en consideración oportunamente.

El Honorable Presidente hizo presente que una penosa enfermedad le había impedido su asistencia a las sesiones legislativas, que aun no bien restablecido venía a presentar el proyecto de ley que se le había encargado formular en conjunto del Honorable Bonilla, sobre la manera de enjuiciar los altos funcionarios del Estado; y se dió lectura del referido proyecto que contiene ochenta y un artículos y fué tomado en consideración.

En seguida tomó la palabra y dijo:

Honorables Señores: Encargado de formular un proyecto de Ley de Ayuntamientos, recurrimos a la que con fecha nueve de Mayo de mil ochocientos cincuenta y cinco hizo el Senado, y comparándola con la de veinte y ocho de Mayo de cincuenta y siete que la abrogó, sólo hemos encontrado pequeñas diferencias que deben reputarse perjudiciales a la causa pública. Se quitaron los Síndicos Procuradores de las Comunes, que, como otra vez hemos dicho, son de absoluta necesidad para supervigilar y arreglar los bienes comunales,

para que tengan los pueblos un representante que lleve la voz por ellos y los defienda en caso necesario para el arreglo de la policía municipal y otros fines de utilidad pública.

Hemos observado que, tanto en una como en otra ley, no figuran como bienes comunales los cementerios, aunque los Ayuntamientos están en posesión de ese ramo; pero en la Ley de 57 se dice que el derecho de las bóvedas y panteones pertenece a los fondos comunales. Estas bóvedas y panteones no pueden ser otros que los que se establezcan en los cementerios, pues en las iglesias no puede ser, por estar prohibido en ellas los enterramientos.

Nosotros somos de opinión que se mantenga en su fuerza y vigor la Ley de 55 con algunas modificaciones o alteraciones que resultarán de los debates, y que se le añada:

1º Que los Cementerios o derecho de sepultura formarán parte de las rentas comunales y se arrendarán anualmente a las condiciones más ventajosas que sea posible.

2º Que se establezca por el derecho de sepultura, tanto....

3º Que si se le pone un enladrillado, o solado liso, tanto....

4º Que si lleva una vara de alto, seis y medio pies de largo y tres de ancho, tanto.....

5º Que si es un panteón para familia con cinco varas en cuadro, que contenga dentro bóveda o lugares separados de enterramiento, cincuenta pesos fuertes: todo en atención a que los lugares quedan afectos o enajenados y prohibido su uso a la comunidad.

Este es nuestro parecer sin perjuicio de que el Senado resuelva lo mejor y más conveniente.

Quedó tomado en consideración para hacerle a la referida ley las reformas convenientes, en los términos que prescribe la Constitución.

Presentó también otro proyecto para que se declaren nulos o inconstitucionales todos los actos hechos por el ex

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

Presidente Báez en virtud de facultades omnímodas y extraordinarias que le confirió el Senado.

También presentó otro proyecto, para que se secuestren y pongan en seguridad con inventarios en forma, tanto los bienes que se reconozcan pertenecientes al ex Presidente Báez, como los de sus Ministros Juan Esteban Aybar, Félix Ma. Delmonte y Pedro Antonio Bobea, para que a su tiempo respondan a los perjuicios ocasionados durante su Administración, y al mismo tiempo para que se haga lo mismo con todos los agentes contables que se ausentaron al rendimiento de la plaza sin haber dado cuenta de los intereses de la Nación que manejaban, resultando alcanzados en cuantiosas sumas, sometiéndolos a juicio, lo mismo que a cualquiera otro contable que durante dicha Administración aparezca deudor a la Nación, y quedó tomado en consideración.

El mismo Honorable Presidente hizo también una moción para que se llevase a efecto la acusación decretada por el Gobierno Provisional contra el ex Presidente Báez y sus Ministros Juan Esteban Aybar, Félix María Delmonte y Pedro Antonio Bobea, por los crímenes especificados en aquel acto, por los otros cometidos después y por la violación de la capitulación con que se entregó esta plaza; y se tomó en consideración para en la próxima sesión decidir lo más conveniente.

El Honorable Delmonte pidió se pasase a una sesión secreta, para tratar de un asunto de interés general, y habiéndose acogido su proposición, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 26 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y seis días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se reunieron en el Palacio, donde celebra sus sesiones el Senado Consultor, a saber: los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Seguidamente se pasó a tratar sobre el estado de acusación en que deba ponerse a Báez y sus Ministros; y se nombró al Honorable Bonilla para que, en vista de los cargos que aparecen contra ellos, recoja las pruebas y revista el expediente legalmente, y se ofició al Poder Ejecutivo para que se le faciliten en las diferentes oficinas todas las copias y documentos que él juzgue necesarios.

Se dió la segunda lectura constitucional al proyecto de ley sobre enjuiciamiento de los altos funcionarios de la República.

Se dió también la segunda lectura al proyecto de decreto declarando nulas todas las facultades omnímodas y extraordinarias que el Senado dió al ex Presidente Báez.

Sufrió su segunda lectura el proyecto de decreto sobre secuestro y seguridad de los bienes de Báez, sus Ministros y agentes contables; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 27 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y siete días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En este estado, se procedió a dar lectura de la Ley sobre Ayuntamientos del año 1855 y se acordó añadirle el artículo siguiente en el Capítulo de las *rentas de los ingresos y egresos de esa Corporación.*

Art. 29. Los cementerios o el derecho de sepultura formarán parte de las rentas comunales, y se arrendarán anualmente a las condiciones más ventajosas que sea posible, y se establece:

1º Por derecho de una sepultura simple o llana, un peso fuerte. Se exceptúan los militares y pobres de solemnidad que serán exentos de este derecho.

2º Si se le pone a la sepultura un enladrillado, o solado liso, ocho pesos fuertes.

3º Si lleva una vara de alto y siete pies de largo y tres de ancho, diez y seis pesos fuertes.

4º Si es un panteón para familia con cinco varas en cuadro que contengan dentro bóvedas o lugares separados de enterramiento, circuenta pesos fuertes.

Según la orden del día, se trajeron a la vista los informes que ha recogido el Gobierno sobre el reclamo del valor de un balandro nombrado *La Josefa*, que suponía el Señor Eugenio García, vecino de Samaná, haberse perdido en ser-

vicio del Gobierno Provisional; y como quiera que de ellos resulta que el buque fué cogido en requisición por el Gobierno de Báez para llevar pliegos muy aceleradamente a Puerto Plata, y no siendo de razón ni de justicia que el Estado responda de los reclamos que se hagan por servicios o depredaciones del ex Presidente Báez durante su tenaz resistencia a la soberanía de la Nación y a la voluntad general de los Pueblos, se resolvió sin lugar este reclamo y cualquiera otro de su especie.

También se sometió a la apreciación del Senado el informe que con fecha doce de los corrientes ha dado el Ministro de Hacienda sobre la solicitud del Señor A. García, diciendo que "carece de las cualidades de Ciudadano, para haber sido legítimo propietario de la goleta *Amistad* que llevaba el pabellón Nacional": en vista de lo que se acordó sin lugar este reclamo.

Referente al envío que hace el Poder Ejecutivo por órgano del Ministro de Hacienda sobre la Ley de Presupuestos para el corriente año de 1859, se acordó contestarle lo siguiente:

Que no pudiendo el Senado sin un conocimiento exacto del pie en que está la Hacienda pública y sus rentas, meditar las correspondientes mejoras ni calcular hasta qué punto pueden elevarse los impuestos que han de hacerse a la Nación; no habiendo aun impreso y presentado las Cuentas generales de la República, según lo dispuesto por la Constitución, para apreciar dicho proyecto de Ley de Presupuestos que se le ha sometido, necesita a la mayor brevedad posible tener a la vista, 1º. Las Cuentas generales de la República. 2º La lista civil y militar con el número de Generales, Coroneles, Comandantes y demás Oficiales y soldados. 3º El pie en que está la Guardia Cívica y el plan formado para su organización y movilización. 4º Cuál es el producto de las Aduanas, rentas e ingresos ordinarios de la República. 5º A cuánto asciende el total de los bienes nacionales, sus productos y bajo qué sistema se administran. 6º A cuánto asciende la deuda interior de la República y medios que se han escogitado para su pago. 7º Qué compromisos tiene en el extranjero

la República, legales o presuntos. 8º Que acompañe, si lo estima conveniente, los proyectos que juzgue oportunos para mejorar los ramos establecidos, suprimir alguno o establecer otro nuevo.

Se dió la segunda lectura del proyecto sobre la ley de Ayuntamientos.

Seguidamente se discutió el Tratado de paz, comercio y navegación entre la República y la Ciudad libre y anseática de Bremen, y fué aprobado y sancionado en todas sus partes; y se acordó enviarlo al Poder Ejecutivo con el decreto correspondiente, para su canje y demás fines convenientes; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 28 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorable Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En este estado se dió la 3ª lectura constitucionalmente al proyecto de ley sobre enjuiciamiento de los altos funcionarios de la República y sufrió algunas modificaciones. Se dió también la 3ª lectura al proyecto de decreto declarando nulas las facultades omnímodas y extraordinarias que el

Senado dió al ex Presidente Báez, e igualmente sufrió algunas alteraciones.

Se dió lectura seguidamente al proyecto de decreto sobre secuestro y seguridad de los bienes de Báez, sus Ministros y agentes contables, y a propuesta del Honorable Abreu, se acordó añadir el Art. 2º, el cual fué redactado y aprobado a unanimidad.

Se envió el Tratado de paz, comercio y navegación entre la República y la Ciudad libre y anseática de Bremen al Poder Ejecutivo para su canje y demás fines convenientes; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 29 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes, Juan Rosa Herrera y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En este estado, la orden del día trajo a discusión la solicitud de la sociedad "Amantes de las Letras", pidiendo se le conceda por cincuenta años el edificio que sirvió de Iglesia a los R.R. P.P. Jesuítas de esta Ciudad, y quedó resuelto: Que si el Gobierno no necesita de la parte que le pertenece de dicho edificio para el servicio público, se le puede

conceder por veinte años para establecer en él el Teatro, bajo las condiciones: 1º: Que han de comenzar a repararlo dentro de un año, a contar desde la fecha del contrato, y si no lo verifican quedará sin efecto la concesión: 2º: Que cumplido el término, deberán entregar el edificio en buen estado, y todas las mejoras estables que le hubieren hecho quedarán a beneficio del Gobierno, sin perjuicio de nuevo arreglo u otra concesión; y que se comunique al Poder Ejecutivo para que si no presenta inconveniente por su parte, pueda otorgar la concesión bajo las condiciones expresadas.

En cuanto a la solicitud del Ayuntamiento de Santiago, se resolvió: que no ha lugar a la autorización que solicita para la enajenación de los solares pertenecientes a la Común, en atención a que no existe necesidad ni utilidad evidente; pudiendo el Ayuntamiento al hacer las concesiones bajo las condiciones de arrendamientos, tomar todas las medidas que juzgue convenientes para delinear las calles y arreglarlas de manera que hermoseen la Ciudad, sin que esta disposición pueda perjudicar a los pobres que hayan fabricado o quieran fabricar, pues todos deben considerarse con igual derecho; y que en cuanto al peaje, el Ayuntamiento puede, en sus facultades, alterar el precio y dictar las medidas que crea conveniente para su cobranza, conforme a la ley. Se dió igualmente la 3ª lectura del proyecto de ley de Ayuntamientos; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 30 DE ABRIL DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los treinta días del mes de Abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria; siendo las diez de la mañana, se

abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En este estado y traído la orden del día, se ofició al Poder Ejecutivo, comunicándole para los fines convenientes el acuerdo del Senado, acerca de la solicitud hecha por la sociedad "Amantes de las Letras", creada en esta Ciudad, pidiendo se les conceda por 50 años el edificio que sirvió de Convento a los Padres Jesuítas, para la construcción de un Teatro, cuyo acuerdo consta en el acta de la sesión anterior.

Seguidamente, el Senado, a propuesta del Honorable Abreu, acordó a unanimidad oficiar al Poder Ejecutivo en los términos siguientes:

Que en vista de que el clamor público anuncia que en la Ciudad de Azua ha habido un "complot", cuyo fin es asesinar al Excmo Señor General Libertador, Presidente de la República, y que en las Provincias del Cibao hay agitaciones que pueden alterar el orden y tranquilidad general, poniendo a los buenos ciudadanos y padres de familia en consternación; y sin embargo de que ha creído que el Ejecutivo en el círculo de sus atribuciones habrá tomado y tomará cuantas medidas enérgicas sean convenientes, como quiera que nada se le ha comunicado oficialmente, ha resuelto dirigirse a él sobre el particular y ofrecerle su franca y leal cooperación para todo lo que tenga tendencia a mantener el orden, la estabilidad del Gobierno, la seguridad y garantías de los ciudadanos, y la más perfecta unidad de la República.

Al mismo tiempo, con oficio correspondiente, se enviaron al Poder Ejecutivo el Decreto para secuestrar los bienes del ex Presidente Báez, sus Ministros, agentes contables y también los del ex Fiscal del Tribunal de Primera Instancia Señor Manuel María Gautier, lo mismo que el que declara nulos todos los actos del mencionado Báez en virtud de

las omnímodas facultades que le confirió el Senado, para que ambos tengan su debido cumplimiento y ejecución, conforme lo prescribe el Pacto Fundamental: y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 3 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los tres días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió el Senado Consultor con presencia de la mayoría compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan R. Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Seguidamente se dió lectura de un oficio del Ministro de Hacienda, por el cual incluye un informe sobre las bastardas negociaciones hechas por el ex Presidente Báez en la isla de Curazao y de Saint Thomas con las casas de comercio J. A. Jesurum y Sons, Rostchild, Sons & Ca., con el informe de la Cámara de Cuentas sobre el particular, en contestación a la nota que el Senado pasó al Poder Ejecutivo solicitando varios documentos de los diferentes Ministerios y a la que dirigió el Honorable Senador encargado de solicitar documentos y pruebas para revestir el expediente que se está formando sobre la acusación del referido ex Presidente Báez y sus Ministros; ofreciendo el mencionado Ministro de Hacienda facilitar por su parte al Honorable miembro del Senado los demás informes que se desean, tanto de la Conta-

duría General como de la Cámara de Cuentas, para la formación del dicho expediente.

Se dió también lectura de otro oficio fecha del treinta del mismo Ministro de Hacienda, en que pone al conocimiento del Senado que el Poder Ejecutivo, precisando las observaciones hechas al Decreto del once del mes próximo pasado sobre la fijación del valor que debe darse a la moneda papel emitida por Báez, puesta fuera de circulación, propone que se fije al cambio de veinte y cinco mil pesos la onza.

En este estado, se presentó en la sala del Senado el referido Ministro de Hacienda y, colocado en su lugar, manifestó que venía a hacer algunas aclaraciones relativas al mismo negocio: expuso las razones en que el Poder Ejecutivo se fundaba para fijar el valor de la referida moneda papel.

El Honorable Presidente tomó la palabra manifestando la satisfacción que experimentaba el Senado de poseerle en su seno, y el gusto con que vería la disposición del Ejecutivo para el arreglo de una cuestión de tanta trascendencia pública.

En seguida, el mismo Honorable Presidente expuso que, a causa de enfermedad, no había podido tomar parte en aquella deliberación del Senado, pero que iba ahora a emitir su opinión en los términos siguientes:

Es incuestionable que el día en que el Excmo. Señor General Libertador, actual Presidente de la República, rindió esta plaza bajo una capitulación, ya el papel moneda en cuestión estaba desmonetizado y suprimido por un Decreto del Gobierno Provisional que representaba la soberanía de la Nación, que se había rebelado contra la Administración Báez por sus malos procederes, siendo constante que la opinión de la pluralidad debe tenerse por el de la Nación entera, según los principios del derecho de *gentes interno*, y a los deberes de una Nación para consigo misma, debiendo su libertad e independencia juzgar todo lo que concierne a su felicidad y bienestar. Que remontándose aún a principios

BIBLIOTECA DEL CONGRESO Republica Dominicana

anteriores, y si no fuera bastante la decisión del Gobierno Provisional, diría que el papel moneda emitido por el ex Presidente Báez, no lo fué legal ni constitucionalmente, y que fué uno de los muchos actos que él hizo para dejar la Nación en un estado de ruina y de postración, es decir, si el día de la toma de la plaza se hubiese dado a los tenedores de aquel papel, que ya no representaba ningún valor, el que tuvo en los días anteriores, que era el de sesenta a setenta mil pesos, se habrían dado por muy contentos y satisfechos; pero que no habiéndose verificado así por la resolución del Gobierno Provisional, hoy debe estimarse como una acción generosa del Gobierno en concederle una indemnización principalmente a los habitantes de esta Ciudad, que fueron los que más sufrieron los desastrosos efectos de la Administración Báez.

Que es constante que los comerciantes, tanto nacionales como extranjeros, en la fluctuación del cambio de dicha moneda aprovecharon la venta de sus efectos con un beneficio calculado. Que también es constante que de aquí se exportó mucho papel moneda para el exterior de la Ciudad con el objeto de cambiarlo fuera, de manera que puede decirse que los que lo tenían cuando el cambio de la onza estaba a bajos precios, tuvieron la facilidad de mandarlo a las Provincias del Cibao para cambiarlo con grandes ventajas y, principalmente, los extranjeros, cuyos Cónsules salían dos y tres veces a la semana y comunicaban con los jefes del ejército sitiador. Que además es notorio que, después de rendida la plaza, los tenedores de dichos billetes han hecho transacciones con los comerciantes por cuarenta y cincuenta mil pesos una onza, y que existen depositados y en manos de algunas personas particulares grandes sumas de ese papel pertenecientes a los que más encarnizadamente fueron enemigos de la causa de la Nación, y que éstos hoy van a sacar provecho de ella, después que le hicieron una guerra fratricida.

Que tampoco puede decirse que los extranjeros sufren con esta medida que les pone a la par de los ciudadanos del país, que son los verdaderamente perjudicados, porque aquéllos vendieron sus efectos con un beneficio arreglado al cambio de la onza, después han hecho transacciones ventajosas, mientras que los hijos del país sufrieron la carestía y los efectos de la alza del cambio y tendrán que soportar después las imposiciones que se le hagan para la extinción de esta deuda con que va a gravarse la Nación.

Que por todas estas razones y en razón a que ocho o diez días antes el cambio regular de la onza estaba en los últimos días que subió a sesenta y hasta setenta mil pesos, porque Báez y sus partidarios se apresuraron a sacar cualquiera ventaja de las cuantiosas sumas que tenían, su opinión es que se fije al cambio de veinte y cinco mil pesos la onza, como propone el Poder Ejecutivo, para acallar cualquiera clamor, y que no se diga que la propiedad individual había sido atacada.

El Honorable Delmonte pidió la palabra y dijo que en el informe que había presentado al Senado, constan todas las razones en que se funda para fijar el cambio a treinta y dos mil pesos la onza, y que habiendo procedido en este asunto con toda la madurez y reflexión que exige su importancia, persistía en la opinión emitida, y en este sentido tomaron la palabra por su turno los Honorables Abreu, Bonilla, Herrera y Reyes, y después de una larga discusión, sometido el asunto a votación, resultó que la mayoría del Senado, menos un voto, fué de opinión que se sostuviese la resolución del Decreto y que se devolviese al Poder Ejecutivo con oficio de urbanidad en forma, para los efectos constitucionales.

Se pasó a dar lectura de otro pliego cerrado y sellado dirigido al Senado, y resultó ser una solicitud del Señor Carlos Nouel, miembro de la Cámara de Cuentas, el que suplica se le admita la dimisión que hace de su empleo, ofreciendo utilizar sus servicios en mejor oportunidad, y se acordó decidir sobre el particular en la próxima sesión.

El Ministro de Hacienda se retiró de la sala del Senado con las ceremonias de estilo.

El Honorable Bonilla presentó un proyecto de decreto, debidamente apoyado, para cortar los abusos sobre los apoderados en los Tribunales de las Alcaldías; se le dió lectura y quedó tomado en consideración.

Presentó igualmente, en virtud de la Comisión que se le confirió por el Senado, otro proyecto que fija el uso y valor del papel sellado que debe regir en la República; se le dió lectura y quedó también tomado en consideración.

El Honorable Delmonte presentó también un proyecto sobre ley de Hacienda pública, para el cual fué comisionado en unión del Honorable Bonilla. Se le dió lectura y fué tomado en consideración. Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 4 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cuatro días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Juan Rosa Herrera y Vicente Antonio Reyes, haciendo este último las veces de Secretario por enfermedad del titular.

En este estado y traída la orden del día, se trajo a la vista la dimisión que con fecha dos de los corrientes hizo el Señor Carlos Nouel como miembro de la Cámara de Cuentas de la República y apreciando los motivos que en ella expone, le fué acordada.

En seguida, el Senado se ocupó de la verificación de algunos actos, cuyo examen era indispensable; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 5 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cinco días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En este estado y traída la orden del día, se participó al Señor Carlos Nouel le quedaba acordada su dimisión por medio de un oficio.

En seguida procedióse a la última lectura y discusión de la Ley de Ayuntamientos de la República y después de algunas enmendaduras y modificaciones, artículo por artículo, fué sancionada en todas sus partes, y se acordó fuese remitida al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- V. A. Reyes.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.*

SESION DEL 9 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los nueve días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Juan Rosa Herrera.

Se dió lectura al acta de la sesión del día anterior y fué aprobada.

Por ausencia del Secretario archivista, le fué propuesto este encargo al Señor José María Pérez, para que, si lo aceptaba, lo ejercería provisionalmente, y habiéndolo aceptado, prestó el juramento correspondiente y fué instalado en su respectivo puesto.

Dióse lectura a un oficio de fecha cinco del actual del Señor Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Comercio, relativo a las enmiendas que el Poder Ejecutivo hace al Decreto de fecha treinta del mes expirado sobre desconocerse las facultades omnímodas de que estuvo investido el ex Presidente Báez, y reconociendo que las enmiendas propuestas estaban en perfecta armonía con el sentido del referido Decreto, se apreciaron y fué corregido para ser devuelto al Poder Ejecutivo a los fines constitucionales.

Igualmente se dió lectura de otra nota oficial de la misma fecha y dirigida al Senado por el mismo Secretario de Estado, sobre algunas observaciones que el Poder Ejecutivo propone al Decreto acordado en fecha treinta del mes expirado, relativo al secuestro de los bienes del ex Presidente Báez, sus Ministros y demás empleados contables de esa Administración. Fueron acogidas dichas enmiendas y se orde-

nó pasase otra vez al Poder Ejecutivo para lo que previene la Constitución.

Seguidamente se procedió a dar lectura a otra nota oficial del Señor Secretario de lo Interior en contestación a la dirigida por el Senado al Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley de Presupuestos para los empleados civiles y el pie de ejército de la Guardia Cívica.

Y por último, se dió lectura a otra nota del Señor Secretario de Estado de Hacienda, fecha seis del corriente, por la que consulta al Presidente de esta Honorable Corporación lo útil que sería dictar medidas sobre diferentes reclamos que se le suscitan diariamente al Gobierno contra el Fisco por objetos tomados por cuenta del Gobierno durante la Administración Báez, y también que existen vales del Tesoro por sumas adeudadas a particulares, pues como lo que desea el Ministro es arreglar la Hacienda pública, le movían a solicitar una resolución tendente a impedir que el desorden se prolongue en su dicho oficio; y el Senado resolvió contestarle en los términos siguientes:

Que no teniendo el Senado todavía las Cuentas generales de la República, ignorando la época en que se contrajeron las obligaciones o reclamos que se hacen contra la Administración Báez y la naturaleza de ellas, no podía anticipar su juicio sobre una materia tan delicada.

Que en cuanto a los demás puntos, el Ministro puede, según el Art. 17 de la Ley sobre la Cámara de Cuentas, de acuerdo con ésta, introducir cualquiera mejora para la mayor claridad, exactitud y regularidad de la contabilidad, sin variar las épocas en que por la Constitución y las Leyes deben arreglarse e imprimirse las Cuentas generales de la Administración. Y si esto no basta, el Poder Ejecutivo, que tiene la iniciativa en las leyes, puede formular y presentar un proyecto de ley o decreto sobre el particular, que si lo envía al Senado será tomado en consideración.

Y que en cuanto a los vales que figuran como existencia cuya gran parte resultan incobrables, necesita el Senado tener a la vista un estado de ellos con la clasificación de "buenos, dudosos o incobrables", y los que hayan sido

dados a diferentes empleados como "gratificaciones" con el juicio u opinión que forme el Poder Ejecutivo, para por este medio conciliar los intereses de la Nación con la justicia, equidad y responsabilidad efectiva de los empleados de Hacienda que puedan haber salido de los límites que les imponía o les impone la ley.

El Honorable Bonilla manifestó que ayer opinó porque se le contestase al Señor Ministro del modo siguiente: que no viniendo la consulta en nombre del Poder Ejecutivo, el Senado se abstenía en dictar ninguna resolución sobre los particulares a que se refiere el oficio del Señor Ministro, y que, por consiguiente, ratificaba su opinión porque sea ésta y no otra la contestación que se le dirija.

En este estado y habiendo sufrido las tres lecturas constitucional la ley sobre enjuiciamiento de los altos funcionarios, se abrió a discusión, artículo por artículo, y después de algunas ligeras modificaciones y enmiendas, quedó sancionado desde el Art. 1º hasta el 20 inclusive, aplazándose su continuación para el día de mañana por ser la hora avanzada; con lo cual se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 10 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

En consecuencia, se dió lectura al acta de la sesión an-

terior, la que, después de habérsele hecho algunas ligeras modificaciones y adiciones, fué aprobada.

Se dió lectura a un oficio de fecha siete del corriente dirigido por el Señor Secretario de Estado de Hacienda, relativo a las contradicciones que se advierten en ciertas disposiciones de las Leyes de fechas de 17 de Junio 1847, y 27 de Abril de 1853 sobre la administración de bienes nacionales, y a que el Senado se digne resolver si los terrenos, buques, etc., del Estado son o no susceptibles de arrendarse, etc.; y después de algunas discusiones, se determinó quedase sobre la mesa para ulterior resolución.

Acto continuo se procedió a la lectura de otro oficio del Ministro de lo Interior de fecha 9 del corriente, por el cual se remiten los informes necesarios para resolver la solicitud que hicieron los habitantes de la Común de Jarabacoa, y entre otras cosas dice el Ministro: "opinando el Gobierno también en conformidad de ellas"; y habiéndose dado lectura tanto de la solicitud cuanto al oficio dirigido por el Gobernador Político de La Vega, y de la exposición del Ayuntamiento de la misma, se determinó aplazar esta cuestión para otra sesión, invitándose al Ministro, por oficio político en forma, a fin de que se encuentre en el seno del Senado para que haga algunas aclaraciones conducentes sobre el particular e ilustrar más la materia, para resolver lo que corresponda.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 11 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los once días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y déci-

mo sexto de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Conforme al orden del día, se continuó la discusión de la ley sobre enjuiciamiento de los altos funcionarios, la que quedó pendiente en el Art. 20, y terminada la discusión del Art. 50, fué interrumpida porque en este estado se presentó al Senado el Señor Ministro de Justicia, manifestando que, encargado por el Poder Ejecutivo y por enfermedad del Señor Ministro de la Guerra, venía a poner en conocimiento del Senado un oficio del Gobernador Político de la Provincia de Azua, fecha 9 de los corrientes, en que dice al Gobierno que, por hoy, deberían someterse a juicio los que aparecían allí acusados de *complot* atentatorio a la vida del Jefe del Estado, que lleva por objeto trastornar el orden constitucional establecido, y que el principal acusado, Coronel Matías de Vargas, se había fugado en la noche anterior; y que, según la actuación, el mismo atentado tenía ramificaciones en Barahona, donde habían sido capturados dos o tres individuos. Que en estas circunstancias, el Gobierno consultaba al Senado cuál sería la medida que debía dictarse para la captura del delincuente.

El Senado, habiendo discutido sobre el particular resolvió a unanimidad, por vía de consulta, decir al Poder Ejecutivo:

Que, según el Art. 35 de la Constitución, en su 22ª atribución él está autorizado a tomar todas las medidas que crea indispensables para la seguridad del Estado y garantías de la Sociedad; y que, en consecuencia, el Senado presta su acuerdo y conformidad para que el prevenido Matías de Vargas sea declarado "fuera de la ley", librándose requisitorias para perseguirle y capturarlo en cualquier punto en que se encuentre. Que toda persona

que le ocultase en su casa, se considere como favorecedora y cómplice en el mismo crimen: Que todos los que sepan de su paradero, están en la estricta obligación de presentarle a la autoridad competente; y que además, el Senado aprobará cualquiera otra disposición que el Ejecutivo juzgue oportuna y que tenga por objeto la seguridad interior del país, el mantenimiento del orden legal, la tranquilidad pública, la seguridad del Estado y la represión legal del delito.

Con lo cual, y habiéndose librado al Señor Ministro, por mandato del Señor Presidente del Senado, extracto de lo resuelto, se retiró cumplidamente.

En seguida se prosiguió la discusión de la mencionada ley, a la cual se hicieron algunas enmiendas, modificaciones y adiciones, habiéndosele suprimido nueve artículos, y se acordó volver a revisar y discutir, antes de darle su sanción definitiva.

Acto continuo, se dió la primera lectura al proyecto de ley sobre papel sellado, así como también al Decreto que prohibe representarse a las partes por apoderados ante las Alcaldías Constitucionales, y quedaron sobre la mesa.

Hecho lo cual y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 13 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo a los trece días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Juan Rosa Herrera, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de

BIBLIOTECA DEL CONGRESO República Dominicana AGN

Bonilla, habiéndose legitimado la inasistencia de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte y Francisco Javier Abreu.

Se dió lectura al acta anterior y fué aprobada.

El Honorable Presidente hizo dar lectura a una nota oficial, fecha 12 del corriente, dirigida por el Ministro del Interior, por la que le participa, en nombre del Gobierno, invitase al Honorable Senado para celebrar una consulta en la sala del mismo en este día a las once de la mañana, con el fin de conferenciar y ponerse en acuerdo a las observaciones que, por órgano del Ministro de Hacienda, se hicieron a los decretos de fecha treinta del mes expirado; y se determinó trasladarse a la hora indicada.

Conforme al orden del día, se procedió a dar lectura al proyecto de ley que establece cinco clases de papel sellado para el uso en toda la República.

El Honorable Herrera manifestó que el sello o clase quinta siendo de doce y medio centavos fuertes que debe usarse en las cédulas expedidas por los Alcaldes, libros de comercio, pasaportes de una Común a otra y patentes, era en su concepto muy gravosa para las partes, y que, por tal virtud, opinaba fuese de seis y cuarto centavos fuertes.

La mayoría se pronunció por la opinión emitida, y quedó acordado fuese el sello 5º de seis y cuarto centavos fuertes para los usos indicados.

En seguida se dió lectura, es decir, la segunda, al proyecto de decreto que prohibe representarse las partes por medio de apoderados ante las Alcaldías; así como también a otro proyecto de ley sobre extracción de niñas de la casa paterna: se suscitaron algunas dificultades, y para aclararlas e ilustrar la materia se determinó invitar al Ministro del ramo para recibirle en su seno en la sesión del Lunes 16 a las nueve de la mañana, con el fin de obtener algunos informes y aclaraciones sobre los mencionados proyectos de ley y decreto.

Se recibió un oficio del Ministro de Hacienda con fecha nueve del que rige, por el cual incluye al Senado la lista del

personal del Departamento de su ramo, y a la vez manifiesta lo que producen las Aduanas de esta Capital y Puerto Plata, cuyo cómputo de un año con otro presenta la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos fuertes, y que agregándose a esta cantidad un valor de veinte y cinco mil fuertes más por trimestre como productos de las demás rentas, podrá contar la República, si con integridad se administra la Hacienda, con un ingreso anual de quinientos cincuenta mil pesos fuertes por lo menos.

Comunica, igualmente, que los bienes nacionales, por estar mal administrados hasta hoy, apenas producen todos un valor suficiente para las reparaciones de uno solo, y que no habiendo un catastro que designe las posesiones del Fisco, (cuya mengua se nota de muchos años atrás) no ha podido dictar las providencias necesarias para restablecer el orden debido a ese ramo.

Y, por último, manifiesta se han recibido dos reclamos, uno de ellos hecho por el Cónsul americano, en nombre de su Gobierno, sobre la goleta *Charles Hill*, y el otro de los Señores Rottel Collin & Ca., de New York, por cinco mil pesos fuertes, más o menos, valor de pólvora remitida en tiempos pasados.

Terminada su lectura y siendo las once de la mañana, se suspendió la sesión y el Senado, en Cuerpo, se trasladó al Palacio de Gobierno. Allí se le hicieron nuevas observaciones por parte del Poder Ejecutivo al Decreto de treinta de Abril, relativo al secuestro provisional de los bienes de los agentes contables de la Administración Báez, y no habiendo podido ponerse de acuerdo con el Ejecutivo, quedó en receso el referido Decreto, debiendo el Ministro someterlos a juicio para ver el resultado que ésto produce y entonces se tomarán otras medidas que convengan, e intertanto diera órdenes para impedir toda especie de enajenación y que se disponga de los productos hasta el resultado correspondiente; quedando el Senado convenido en volverse a reunir hoy para acordar sobre las observaciones que han sido hechas al Decreto

que desconoce las facultades omnímodas que le fueron dadas a Báez.

Y siendo las dos de la tarde, hora en que regresó el Senado a su local, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 16 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y seis días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Juan Rosa Herrera, Pedro Pablo de Bonilla y Vicente Antonio Reyes; hallándose presente el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, y, en su virtud, se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada. La inasistencia del Honorable Francisco Javier Abreu se legitimó por su enfermedad.

Conforme al orden del día, se dió lectura al proyecto de decreto que prohibe a las partes ser representadas por apoderados ante las Alcaldías Constitucionales. Se suscitaron discusiones análogas a la inconveniencia que presenta el referido decreto, puesto que la Ley sobre Organización judicial, terminantemente manda a los Alcaldes no admitan en sus Tribunales personas de la naturaleza prescrita en el Art. 25, 2º inciso; y que, por tanto, habiendo previsto la ley dichos casos, está de más que el Senado se ocupe en decretar sobre la materia. En consecuencia y habiéndose apreciado las aclaraciones y observaciones que el Ministro hiciera con dicho fin, quedó resuelto que el Senado refiriese al Ministro para que hiciese efectiva la responsabilidad de los Alcal-

des, si no observan lo imperado por la ley en el particular, y por lo que prescribe la circular que el mismo Ministro tuvo a bien dirigirles en ese sentido, de la cual dió conocimiento al Senado; y que, además, les recomendase de nuevo el exacto cumplimiento de las referidas disposiciones para evitar *absolutamente* que se ocupen *habitualmente* en defender pleitos en las Alcaldías, fomentándolos e introduciendo a las familias discordias, consecuencias desagradables que ordinariamente proceden.

Acto continuo, se procedió a dar lectura al proyecto de ley sobre extracción de niñas de la casa paterna. Se debatió la materia en toda su latitud, esclareciéndose a tal grado que de ello surgieron puntos, mejoras y adiciones, que deberían intercalarse para reprimir y castigar los actos que con frecuencia se cometen y ofenden a la sana moral y trastornan a la sociedad, y se determinó que el Honorable Bobadilla se encargase de dicho proyecto para que lo adicionase con todos los casos que abrace la materia.

Terminadas estas cuestiones, se retiró el Ministro. En seguida se dió lectura a la solicitud que hacen los habitantes del Puesto Militar de San Pedro del Macorís, para que se acordase erigirle en Común, y se mandó pasase a la Comisión de peticiones. Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 17 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y siete días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la

mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Juan Rosa Herrera.

Acto continuo se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Habiéndose recibido una nota oficial del Ministro del Interior se le dió lectura, por la que devuelve al Senado la Ley de Ayuntamientos con observaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. Unas no pasaron por razón de utilidad y conveniencia, y además porque el Senado las estima conformes a la Constitución y a los principios, y las otras se apreciaron por iguales conceptos, por cuya razón sufrió dicha ley algunas alteraciones y se mandó remitir al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Refiriéndose el orden del día a la tercera lectura del proyecto de Ley sobre papel sellado, se procedió a ella y después de varias correcciones, modificaciones y enmiendas, quedó acordado que el Honorable Bonilla la trasladase en el papel correspondiente para ser enviada al Poder Ejecutivo a los fines constitucionales, pues quedó sancionada definitivamente.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 19 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y nueve días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín

Delmonte, Vice-Presidente; Juan Rosa Herrera, Pedro Pablo de Bonilla y Vicente Antonio Reyes, y en seguida se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

La inasistencia del Honorable Francisco Javier Abreu se excusó por seguir quebrantada su salud.

Acto continuo se dió lectura a un oficio dirigido al Senado por la Cámara de Cuentas, incluyendo el informe resultante de las Cuentas de la Contaduría General y Administración particular de Santo Domingo durante el período de la Presidencia Báez, y concluye por opinar que el ex Presidente Báez, sus Ministros y agentes contables, sean responsables ante la Nación de los fraudes y dilapidaciones que consumaron; que se desaprueben dichas Cuentas, y que se descargue al Contador General de la responsabilidad que sobre él pesa por haber probado a la Cámara que sus actos están cubiertos con las órdenes expresas que le daba el Ministro de Hacienda, y se descargue igualmente al ex Receptor de Hacienda, que como empleado subalterno del Administrador estaba obligado a acatar las órdenes escritas que éste le daba, y que también opina la Cámara que el Senado se digne ordenar al liquidación de las Cajas de la Contaduría General y Administración de Hacienda.

El Honorable Bonilla manifestó que, en cumplimiento del encargo que se le hiciera por el Senado con el fin de recoger todas las pruebas necesarias para la acusación Báez, sus Ministros y además empleados contables de aquella funesta Administración, le cabía la honra en someter a la apreciación del Senado todos los documentos y actos que había obtenido de los Secretarios de Estado como del archivo de esta Honorable Corporación, los que en su concepto juzgaba por suficientes en unión del informe de la Cámara de Cuentas, para llenar el fin propuesto.

Habiéndose tomado en consideración todo lo obrado por la Cámara de Cuentas, así como los documentos producidos por el Honorable Bonilla, se fijó la sesión del Lunes 23 para debatir la cuestión, a fin de someter en estado de

acusación al ex Presidente Báez, sus Ministros y demás funcionarios contables de aquella tenebrosa Administración, y que, en cuanto a los demás pareceres emitidos por la susodicha Cámara de Cuentas, se aplazaba su resolución oportuna para otra sesión.

Se dió también lectura a una solicitud del Ayuntamiento de Santiago, fecha 10 de Mayo de este año, en que solicita que el Senado vote la suma de dos mil pesos fuertes para la fábrica de aquella iglesia, y se acordó pasarla a la Comisión de peticiones.

Se dió la segunda lectura al proyecto de ley sobre extracción de niñas; y siendo las doce del día, se levantó la sesión y el Senado se trasportó al Palacio de Gobierno, en virtud a la invitación hecha por el Ministro del Interior.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 23 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y tres días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Juan Rosa Herrera y Vicente Antonio Reyes.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Refiriéndose el orden del día a tratar sobre la declaratoria en estado de acusación del ex Presidente Báez y sus Ministros, se procedió a dar lectura al informe del Honora-

ble Senador encargado del expediente para revestirlo de los comprobantes necesarios; a otro informe remitido por la Cámara de Cuentas, al del Señor Teodoro Stanley Heneken respecto a la misión que se le encargó por el Gobierno en las islas de Curazao y Saint Thomas, y, por último, a todos los demás documentos que comprueban los crímenes de la expoliadora Administración Báez.

Concluída la lectura de los antedichos informes, el Honorable Presidente declaró abierta la discusión, y después de prolongados debates y aclaraciones, el Honorable Reyes expuso que, siendo miembro del Gobierno Provisional y habiendo firmado el Decreto que puso a Báez y sus Ministros en estado de acusación por los crímenes que habían cometido hasta el 26 de Julio de 1858, habiéndose multiplicado sus faltas con la infracción a la Constitución y las leyes y su obstinada resistencia en sostenerse en el mando que produjo tanta efusión de sangre, tantos fraudes y manejos torpes en la Administración de la Hacienda pública y tantas substracciones escandalosas que han arruinado completamente la República, desde luego votaba porque Báez y sus Ministros fuesen declarados en estado de acusación para que sean juzgados y castigados con arreglo a las leyes.

El Honorable Bonilla dió su opinión por escrito concebida en estos términos: Honorables Señores: Al tratarse de la acusación del ex Presidente Báez, sus Ministros, Senadores y demás empleados contables de aquella malhadada Administración, deseaba, no lo dudéis, ser el primero que votase porque fuesen declarados en estado de acusación y sometidos a juicio, para que se hiciese efectiva la responsabilidad de unos funcionarios infieles y corrompidos, que traicionando sus deberes y resistiendo tenaces a la voluntad de la Nación, cometieron durante los once meses que permanecieron encerrados entre los muros de esta Ciudad los más grandes y escandalosos crímenes y desafueros; pues nada sería más justo que satisfacer a la Nación de tantos ultrajes con el ejemplar castigo de unos hombres sin conciencia, quie-

nes, después de haber provocado y sostenido la guerra civil, derramando y empapando el suelo con la sangre de sus hijos, después de haber hurtado y dilapidado con descaro el Tesoro público, han causado la completa ruina de la República, creándole además infinidad de compromisos y embarazos: mas aunque tal es mi convicción sobre lo que dejo expuesto, soy sin embargo de contraria opinión a la de algunos de mis colegas y voto en sentido opuesto, es decir, porque no se puede poner en estado de acusación a Báez, sus Ministros y Senadores, fundando mi parecer en las razones que paso a deducir.

Exonerado Báez de la Presidencia por acuerdo del Congreso Constituyente, de fecha 21 de Enero del año pasado de 1858, y el actual Senado Consultor acatando aquella declaratoria la ratifica por el suyo tomado en la sesión celebrada el 24 de Febrero último y publicada en la *Gaceta Oficial* del 15 de Marzo subsecuente, no queda duda que, no siendo Báez desde aquella época Presidente de la República, ni reasumiendo ninguna responsabilidad, no puede ser hoy, en calidad de tal, declarado en estado de acusación sin incurrir el Senado, si lo hiciera, en la más notable contradicción, sujeta a la censura pública.

Además de este poderoso inconveniente, se presenta otro de mayor gravedad, y es, que aun en el caso de que Báez, sus Ministros y Senadores fuesen puestos en estado de acusación, sometidos a juicio, juzgados y declarados culpables, ¿cuál será la pena que se les aplicaría? Ninguna, porque no existiendo la ley especial que, conforme al Art. 41 de la Constitución, debe establecer las que debían aplicárseles a los altos funcionarios por crímenes de Estado y delitos comunes, e hiciese la calificación de los primeros, claro está que el juicio a que fueran sometidos sería ilusorio y daría el mismo resultado como si no fuesen juzgados: la impunidad del crimen; lo que sería además demasiado ridículo. Por lo tanto es necesario convenir que no pueden ser declarados en estado de acusación, tanto por el acuerdo

del Congreso Constituyente como por el del Senado, que no podemos contrariar, cuanto porque no existe la ley que establezca las penas que deberán aplicarse, prevista por la Constitución, la que debemos acatar *ante omnia* y cumplir, resultando de lo dicho que no hay otra cosa que hacer en semejantes circunstancias, sino es la de declararlos traidores, enemigos de la Patria y condenarlos perpetuamente a la vergüenza y execración pública, para lo cual deberían mandarse imprimir y publicar en todo el mundo los documentos que manifiestan y justifican sus crímenes.

Aprovecho esta oportunidad para llamar la atención del Senado sobre la necesidad que hay de que se ocupe de la elaboración de la ley prevista por el Art. 41 de la Constitución a que nos hemos referido.

El Honorable Delmonte emitió su opinión como sigue: Honorables Señores: Sensible me es, pero no puedo dejar de manifestar que disiento del parecer del preopinante en todas sus partes; porque nada hace al caso presente la época en que cesase Báez de ser Presidente legal de la República, cuando es constante que antes y después cometió hechos punibles por nuestras leyes: la retención del poder de una comandancia cualquiera contra las órdenes de la autoridad legítima, el incendio, el robo, el pillaje, la devastación, la traición, la excitación a la guerra civil, la tentativa de variar la forma del Gobierno establecido, etc. ¿No son crímenes previstos por el Código Penal en vigor? ¿Hay alguien en nuestro país superior a la Ley? ¿No es esta igual para todos, sea que premie, sea que castigue? Pues entonces no atino con la razón plausible que pueda alegarse para que queden impunes aquellos crímenes, ora sean perpetrados por simples particulares, ora por el Jefe del Estado, sin que en uno u otro caso haya más diferencia que en el procedimiento o modo de enjuiciar.

En cuanto a la pretendida imposibilidad legal para juzgar a Báez por falta de la ley especial de que trata el Art. 41 de la Constitución, carece a mi entender de todo funda-

BIBLIOTECA DEL CONGRESO Republica Dominicana AGN

mento. Verdad es que algunos de los crímenes de aquel perverso mandatario habrán de quedar sin el condigno castigo por la carencia de esa ley; pero los ya enumerados no se encuentran en ese caso: una vez sometido Báez a juicio, no podrá el Tribunal dejar de aplicar la pena, sin infringir los Arts. 4 del Código Civil y 19 de la Ley Orgánica.

Por todo lo cual, voto por la acusación de Buenaventura Báez; pero, respecto de la de sus Ministros, habiendo entre ellos uno que lleva mi apelativo, creo de mi deber abstenerme, y por tanto salvo mi voto.

El Honorable Bonilla replicó: Las razones con que el Honorable Delmonte impugna nuestra opinión, no destruyen en manera alguna las que en apoyo de ellas hemos aducido; pues si es verdad que los Códigos en vigor traen penas para los crímenes de traición, robo, asesinato, incendio, pillaje, devastación, asesinato y excitación a la guerra civil, etc., estas disposiciones no pueden ser aplicables a los altos funcionarios, pues si bien éstos no son superiores a la Ley, por ser ésta igual para todos, la Constitución, que es la ley superior del Estado, los somete a otra ley especial que designe las penas que a ellos deban imponérseles, tanto por los crímenes de Estado como por los delitos comunes, y, no existiendo esa ley, no puede suplirse con ninguna otra sin expresa violación del artículo 41 de la Constitución que así lo determina: por lo que sostenemos nuestra opinión.

El Honorable Delmonte: Señores: Sólo añadiré dos palabras para replicar al Honorable preopinante. Cuando al interpretar una ley de un modo caemos en un absurdo, preciso es buscarle otra interpretación racional; y pues de la que quiere darse al Art. 41 de la Constitución, se sigue que los altos funcionarios pueden cometer impunemente todo linaje de crímenes mientras no se haga la ley especial que previene aquel artículo, la sana razón y la moral dicen que no es posible haya sido esa la mente del legislador. En todo caso, cumpla el Senado con su deber de acusar, y deje a la

SENADO de la Republica Dominicana

Corte Suprema el cuidado de cumplir con el suyo de juzgar.

El Honorable Presidente emitió su opinión por escrito como sigue: Honorables Señores: Un grande acto de justicia nacional reclama la majestad de las leyes y la moral pública, violadas escandalosamente por un Gobierno que no pensó sino en la ruina y destrucción de la Patria.

El ex Presidente Buenaventura Báez y sus Ministros Félix María Delmonte, Pedro Antonio Bobea y Juan Esteban Aybar, son reos de la lesa Nación por haber violado escandalosamente la Constitución y las leyes de la República, por haber defraudado los intereses de la Nación, comprometiendo su crédito, y por haber precipitado con los actos de su Administración la guerra civil, haciendo que los ciudadanos se armasen unos contra otros, y tantos crímenes a la faz del mundo no pueden ni deben quedar impunes.

Si se echa una ojeada a los primeros pasos que dió Báez cuando vino al Poder e inauguró su malhadada Administración, se verá que él faltó completamente al ajuste y condiciones con que volvió al país del ostracismo en que se encontraban él y otros varios por causas de inseguridad del Estado.

Ofreció un olvido total de lo pasado; que desaparecería el espíritu de partido y presentaría la armonía de los ciudadanos y la tranquilidad y prosperidad del país. Todo lo contrario sucedió: él excitó tumultos populares y grandes asonadas que, por lo regular, son precursores de la guerra civil. El patriotismo, el candor y la buena fe de los que estaban en su anterior Administración, llegó hasta el extremo de creer en sus promesas y que podría calmar las agitaciones que había producido la matrícula, por la interpretación violenta que daba al Tratado dominico-hispano, contra la intención de su Augusta Soberana, el Cónsul General Don Antonio Ma. Segovia, que fué el que más intrigó para que Báez volviese al país y se colocara a la cabeza de los negocios; pero, apenas empuñó el mando, que alucinando una porción

de incautos, él y su Ministro Aybar, como unos verdaderos demagogos, salieron cuarenta noches por las calles de la Ciudad con vocinglerías escandalosas y canciones indecentes, calumniaron, ajaron y vilipendiaron en sus propias casas a todos los hombres de representación que habían figurado en las Administraciones pasadas, sin respetar las familias, y esto no sólo produjo un descontento general, sino que los miembros de la Representación Nacional que tampoco fueron exentos de las *cantaletas*, abandonaron sus puestos y se dimitieron: todo lo que se hacía de profeso para quitarle los empleos a unos y poner Báez hombres que se acomodasen a sus ideas y a su voluntariedad.

Llegaron las cosas a tal extremo, que en las últimas noches, cuando se proponían salir por las calles con hachas para tumbar puertas y asesinar diez o doce individuos notables, los Señores Cónsules de Inglaterra, Francia y España, que fueron garantes del convenio con que él volvió al país, en igual que el Señor Almirante francés que se encontraba en este puerto, recurrieron a él para que hiciese cesar tantos desórdenes, y protestando frívolamente que no tenía fuerzas para oponerle a lo que él llamaba pueblo, luego que ellos le dijeron que si era así pondrían a su disposición trescientos hombres que harían desembarcar para que mantuviesen el orden, entonces publicó un simple Decreto y ésto bastó a calmar la agitación de algunos hombres ilusos y engañados, que no se movían sino por sugestiones de él y del Ministro Aybar, que muchas veces se les vió a la cabeza de las escandalosas reuniones para atropellar las familias y llenarlas de disgusto, sin que a ninguno le fuese dable quejarse de aquellos actos desordenados, porque todas las palabras, las acciones más inocentes y las más sencillas y casuales reuniones, se reputaban crímenes, propagandas y conspiraciones, para perseguir a los ciudadanos beneméritos y patriotas que habían hecho eminentes servicios al Gobierno, y muchos no obtuvieron su libertad sino a costa de grandes sumas de dinero; tales como el Coronel Julián Polanco, de Hato Mayor;

y los oficiales del batallón de Neiba, a quienes el difunto Félix Báez, hermano de Buenaventura, les quitó grandes partidas de dinero, porque, acusados de una conspiración que quería el Gobierno que hubiera para comprender al Excmo. General Libertador, cuando, concluído el sumario, se encontraron que nada ameritaba, se lanzó un indulto para perdonarlos y para que la luz pública no viese la falta y manejos que tan descaradamente se hicieron. Por último, se forjó contra el Excmo. Señor General Libertador la más ilegal y escandalosa acusación, se le obligó a venir a esta Capital y se le forzó salir del país, y aun se tuvo la loca pretensión de quererle confinar en la isla Martinica, lo que altamente desaprobró el Gobierno francés, a quien el mismo Libertador escribió después de su llegada allí e inmediatamente se le escribió al Gobernador de aquella isla para que le permitiese o se fuera donde mejor le acomodara. Los manejos que para ésto se emplearon fueron ridículos y torpes. Se persuadía a los incautos que Báez venía por Inglaterra, la Francia y la España, como el hombre escogido para gobernar la República; que estas grandes potencias lo sostenían, le ofrecían millones, y aun él mismo decía en casos dados esperaba cinco o seis mil *bigotudos* para componer el país. La calumnia, la hipocresía y la mentira, todo se puso en juego para engañar a los incautos y para echar sobre el Libertador y sus partidarios hechos injustificables. Injustificables digo, porque la gran mayoría de la Nación, el gran partido del orden, el del progreso y el que le ha dado garantías a la República, siempre ha sido el del General Santana; prueba de ello son los acontecimientos que hemos atravesado desde nuestra gloriosa Separación, la caída de Báez y las grandes reformas que se han operado, en que la influencia del ilustre caudillo, su prestigio y el de los hombres que le rodean, han producido sucesos inesperados y han desmentido completamente las imposturas que inventaron la envidia, la venganza y un tropel de pasiones innobles. Báez, cuya ambición en todo género no tiene límites, se hizo autorizar del Senado, a

pretexto de que había escasez de papel moneda, para emitir seis millones de pesos nacionales, y esta medida, que no fué dictada en realidad por necesidad o utilidad evidente y aunque envuelve condiciones y preceptos que no se han cumplido, atacó directamente la propiedad individual de los ciudadanos.

Es un hecho constante en todos los países donde se ha emitido papel moneda sin una garantía real, que en pequeñas cantidades busca su equilibrio con la moneda de oro o plata, pero que en grandes sumas aumenta su depreciación y el agio y ocasiona la ruina del país.

Así fué que, en 1849, cuando Báez fué elevado a la Presidencia por la primera vez, porque el Libertador y sus amigos lo llevaron, como sucedió también en la última, porque él jamás se ha visto al frente del enemigo ni es político administrador, ni ha tenido ni tiene sino muy miserables simpatías, el cambio de la onza estaba a menos de $500 y dió en su manía de hacer millones de papeletas para convertirlos en pesos fuertes, y cuando dejó el mando quedaron las onzas a 1000 pesos; de manera que se vió evaporar la riqueza pública, porque el ciudadano que tenía diez mil duros cuando las onzas estaban a 500 pesos y luego subieron a 1000, no le quedaba sino la mitad.

De estos manejos no dejó de sacar provecho para sí, porque cogía del Tesoro grandes sumas para dar luego libranzas en fuertes, y resultaba a su provecho que no sólo hizo elaborar grandes partidas de maderas con fondos que nunca habían tenido, sino que se utilizaba de la diferencia del cambio que iba en progresión, y cuando a los cuatro o seis meses daba las letras le resultaba también un grande beneficio.

De aquí sobrevino un gran perjuicio al Erario público, porque por ocultar esos manejos no se tentaban las cajas públicas mensualmente como lo dispone la ley, y esto dió lugar a sustracciones y desfalcos, por lo que el Administrador Jo-

sé Joaquín Machado fué condenado a pagar una suma de diez y seis mil duros que se encontraron de menos.

En virtud de la referida autorización del Senado, es constante que Báez, en lugar de cinco millones, dispuso se hiciesen veinte, a pretexto de que iba a favorecer a los agricultores de las Provincias del Cibao y a destruir el monopolio que hacían con ellos los comerciantes; y como en los años de 56 y 57 se habían recogido abundantes cosechas de tabaco, estando las onzas a 800, 900 y a 1000, y luego dió su Decreto fijando el cambio a 1100 pesos la onza en virtud a las facultades extraordinarias que le había conferido el Senado contra las disposiciones expresas de la Constitución. (Véase el inciso 18 del Art. 20.) Sólo el Senado puede determinar y uniformar el valor, peso, tipo, ley y nombre de la moneda y fijar el valor de la extranjera. Véase también el Art. 40. Los poderes de la Nación son independientes, responsables y temporales, se ejercen separadamente y sus encargados no pueden delegarlos ni salir de los límites que les fija la Constitución. Sin embargo, Báez, por medio de agentes, invirtió la mayor parte de los veinte millones de papel, y ésto le dejó un resultado de dos millones más o menos que él mismo arregló y mandó distribuir entre sus Ministros, Senadores y parciales, unos a setenta mil, otros a sesenta, cincuenta, cuarenta, treinta, veinte y cinco y veinte mil pesos, con los que regaló y predispuso para sus miras ulteriores.

El dinero fuerte, sin legal autorización, manejado por él y por su Ministro Aybar, se depositó en Saint Thomas, en la casa de los Señores Rothschild, Sons & Ca., que habiendo quebrado después, ha dejado una pérdida inmensa para el Tesoro de la Nación, como aparece justificado del examen de las cuentas que hizo el encargado del Gobierno Don Teodoro Heneken, y del de la Cámara de Cuentas en donde se demuestran los detalles más amplios y las pruebas más perentorias de los torpes manejos y fraudes que hizo Báez con la referida casa y con la de los Señores J. A. Jesurum en Cura-

zao, disponiendo escandalosa y arbitrariamente del Tesoro de la Nación, que es el sudor del Pueblo. (Véase los Arts. 53, 54 y 55 de la Constitución.) Sólo la ley puede conceder pensiones o gratificaciones del Erario público. No se pueden distraer de un objeto especial los fondos de la Nación sino en virtud de una ley. Fuera de los fondos decretados por la Ley de Presupuestos, no podía sacarse suma alguna del Erario público sin el previo consentimiento del Senado Consultor.

No contento con ésto se hizo dar una suma de veinte y seis mil pesos fuertes en indemnización de otra que él supuso haber mandado a Santiago para comprar tabaco por su cuenta y que allí se le había embargado sin haber justificado la propiedad, la cantidad ni otros requisitos esenciales en iguales casos. Véase sobre el particular el informe de la Cámara de Cuentas.

También se hizo remunerar con una suma de cincuenta mil duros que pidió en indemnización de perjuicios imaginarios de lo que él llamaba sus bienes. Aquí hay que notar dos cosas: la una que a este acuerdo, a esta resolución del Senado, a esta ley o este decreto, llámese como se quiera, ni se le puso el *exequátur* ni se publicó en la manera que prescribe la Constitución; y la segunda es que los tales bienes, según aparece de actos oficiales en su anterior expatriación, los vendió a un francés nombrado Mr. Mendes, quien también pidió entonces cien mil pesos de indemnización que no le fueron concedidos porque se justificó la falsedad de la venta y la de los reclamos, pues el Gobierno no embargó los tales bienes, ni prohibió su administración, ni ellos consisten en otras cosas que en terrenos incultos que valdrán ocho o diez mil pesos, siendo inconcusa la regla que en materia de perjuicios éstos se deben justificar y se deben regular por la ganancia o pérdida que se ha hecho y nunca pueden exceder a la suerte principal.

De la monopolización que Báez hizo del papel moneda, el resultado fué que los ciudadanos sufrieron en sus intere-

ses y principalmente los de las Provincias del Cibao, porque estando la onza a 800 pesos y habiéndola puesto el Gobierno a 1.100 claro es que ya estuviese la moneda circulante en manos del labrador o del comerciante, experimentaban una pérdida de seis pesos en cada onza o séase un treinta y siete y medio por ciento.

Esto, las asonadas de Báez, sus procedimientos injustos contra el General Libertador y contra los hombres valiosos del país, ya por los servicios hechos a la Patria, ya por su posición social, a quienes calumnió y ajó indignamente, produjo el memorable pronunciamiento de Santiago el 7 de Julio, que los pueblos acogieron para sacudir el yugo de un tirano insolente que se había convertido en enemigo acérrimo de su Patria y de la libertad y seguridad que no pueden existir cuando se han violado la buena fe de los convenios públicos, la Constitución y las leyes, porque es muy sabido que, allí donde aquéllas acaban, se levanta la tiranía. Así fué que la anarquía reinaba por todas partes. No había justicia, y el robo y el asesinato, la calumnia y todos los gérmenes de disociación, asomaron por todas partes y ángulos de la República.

Un autor muy conocido dice que: "La Constitución del Estado y sus Leyes son la base de la tranquilidad pública, el apoyo más firme de la autoridad política y la garantía de la libertad de los ciudadanos; pero la Constitución será un fantasma, vanas e inútiles las mejores leyes, si no se observan religiosamente. La Nación, pues, debe vigilar sin descanso para que las respeten igualmente los gobernados y los Gobiernos. Atacar la Constitución del Estado y violar sus leyes es un crimen capital contra la Sociedad; y si los que le cometen son personas revestidas de autoridad, añaden al crimen mismo un pérfido abuso del poder que se les ha conferido. La Nación debe reprimirlos constantemente con el vigor y vigilancia que exige la importancia del objeto. Rara vez se oponen abiertamente a las leyes y a la Constitución del Estado; pero la Nación debe guardarse particularmente

de los ataques sordos y lentos. Las revoluciones súbitas hieren la imaginación de los hombres, y aunque se escriba la historia y se manifiesten los medios, se olvidan las mudanzas que acaecen insensiblemente por una larga serie de sucesos poco notables....."

No quiero detenerme en referir el calamitoso cuadro que presenta la obstinada, maliciosa y temeraria resistencia que hizo Báez en sostener la guerra civil después que se ostentó y puso de manifiesto la voluntad general de los pueblos, excepto la Capital, que, a merced de sus murallas y fortificaciones, con una guarnición forzada, a quien de día en día se engañaba con esperanzas lisonjeras, ilusorias y noticias falsas se sostuvo, habiendo hecho entre tanto *cuarenta* y pico de millones más de papeletas que han sido un cataclismo o una inundación de males para el país, mientras que Báez y comparsa compraban a vil precio las prendas de oro y plata de los infelices que sufrían los efectos espantosos de la escasez, de la carestía y del hambre, hasta morirse por las calles, junto con las enfermedades que son consiguientes en iguales casos, y el haber prolongado la situación fué para dar más empuje a la efusión de sangre, a la devastación, a los asesinatos que se cometieron dentro de esta Ciudad, y que él, como celador de todos los excesos de poder que se cometieron bajo su Administración, debió hacer perseguir. La población de la Capital quedó diezmada, murieron más de dos mil almas en los once meses de sitio y los demás habitantes representaban un cuadro de espectros lánguidos, descarnados y completamente arruinados y empobrecidos.

No me detendré tampoco en la arbitrariedad con que procedió privando de su libertad a muchos ciudadanos sin ninguna forma de juicio y sólo por leves sospechas, oprimiéndolos con tratamientos crueles e inhumanos, privándolos de toda comunicación, aun con sus propias familias. No me detendré tampoco en la cruel expatriación de más de cuarenta ciudadanos notables que salieron huyendo de su tiranía, de su crueldad y de las vejaciones que él autorizaba a

los que se decían sus partidarios, inclusas algunas señoras que fueron atropelladas en sus casas y por las calles, por motivos muy leves y despreciables, porque la voz imperante del sexo recomendable en todas partes, la del honor y de la razón, jamás alcanzaron a ser oídas en los corazones bárbaros e inhumanos.

De todo lo dicho y de otros muchos cargos que pudieran hacerse a Báez resulta que él violó la convención que le trajo a este país, la Constitución y las leyes; que promovió y precipitó la guerra civil y que es responsable ante Dios y los hombres de la sangre vertida y de los males que han sobrevenido a la Patria; que ha sido infiel a su mandato y a sus juramentos y promesas; que ha defraudado y consentido se defrauden los intereses de la Nación de que no era sino un administrador, cuyos hechos detallados y constantes aparecen robustamente justificados de los documentos de que está revestido el expediente y del informe de la Cámara de Cuentas; en razón de lo que, y atendiendo a que el Gobierno Provisional de Santiago con fecha 23 de Julio de 1857 lo puso en estado de acusación tanto a él como a sus Ministros, que siempre son responsables de las órdenes que refrendan, según el Art. 36 de la Constitución, mi opinión es que Buenaventura Báez, ex Presidente de la República y sus Ministros Félix María Delmonte, Pedro Antonio Bobea y Juan Esteban Aybar, sean declarados en estado de acusación para ser juzgados y castigados con arreglo a las leyes y declarados responsables con sus bienes a todos los perjuicios que ha sufrido la Nación y los particulares a quienes se les deja su derecho a salvo.

Y contrayéndose después a refutar la del Honorable Bonilla, se expresó en los términos que el Honorable Delmonte, y añadió que sería un escándalo pretender que no existen Leyes en la República que castiguen la prevaricación el robo, el asesinato y la provocación a la guerra civil, y que dado caso que hubiese algún vacío en la legislación, no era el Senado a quien tocaba su apreciación, porque eso

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

sería prejuzgar en una causa que no estaba sometida a su conocimiento; que eso no era más que de la competencia de la Suprema Corte de Justicia que los ha de juzgar, y que ésta, llegado el caso y cuando hubiese silencio, oscuridad o insuficiencia en la ley, arreglará su decisión al derecho común, porque ésto sería menos malo que trazar el ejemplo escandaloso en dejar impunes delitos graves y tan trascendentales como los que cometieron Báez y sus Ministros.

El Honorable Bonilla sostuvo siempre su opinión.

El Honorable Herrera manifestó que estaba por la acusación de Báez y sus Ministros.

El Honorable Abreu emitió su opinión por qué estaba de acuerdo por la acusación de Báez y sus Ministros.

Prolongada la discusión, el Honorable Presidente hizo presente que le parecía suficientemente discutida la cuestión; y habiéndose procedido a recoger los votos de los Honorables Senadores, resultó a unanimidad, menos un voto, que Buenaventura Báez fuera declarado en estado de acusación por los crímenes y hechos que amerita el expediente; y respecto a los Ministros, fueron declarados en estado de acusación por mayoría, menos el voto del Honorable Bonilla y el del Honorable Delmonte, que se abstuvo de votar.

En este estado, el Senado acordó nombrar una Comisión para que redactase el proyecto de decreto que ponga en estado de acusación a los referidos Báez, Félix María Delmonte, Pedro Antonio Bobea y Juan E. Aybar, y fueron nombrados para la expresada redacción los Honorables Francisco J. Abreu y Vicente A. Reyes. Y con respecto a los cargos que aparecen contra los miembros del Senado de aquella época, siendo esta materia de grande importancia, se acordó tratar de ella en una sesión especial que se designaría al efecto.

Y siendo muy avanzada la hora, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SENADO
de la
República Dominicana

SESION DEL 24 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cuatro días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria, siendo las diez de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Juan Rosa Herrera, Pedro Pablo de Bonilla, Francisco Javier Abreu y Vicente Antonio Reyes.

Leída el acta anterior, después de varias enmiendas y observaciones que se le hicieron, quedó aprobada.

Se dió lectura a un oficio del Presidente de la Cámara de Cuentas, Señor Epifanio Billini, por el que participa al Senado que habiendo S. E. el Presidente de la República enviádole el despacho de Contador General de Hacienda, optaba por éste y que por tanto se le considerara por dimitido de aquellas funciones, haciendo conocer a la vez que faltan ya dos miembros en la referida Cámara; y se difirió resolver sobre esta solicitud en una de las sesiones inmediatas.

Seguidamente se procedió a dar lectura a otro oficio del Ministro del Interior, por el que en nombre del Poder Ejecutivo incluía una solicitud que le hicieran los miembros de la respetable Cuna de América, para que se les conceda a perpetuidad el local donde celebra sus reuniones y se mandó pasara a la Comisión de peticiones.

Acto continuo, se dió lectura a otro oficio del Ministro de Hacienda, acompañando, en nombre del Poder Ejecutivo, otra solicitud hecha por la viuda Beauregard, relativa al reclamo de una casa que le fué asignada en dote por su difunto esposo en el contrato matrimonal, la que se había

secuestrado por el Fisco como bienes pertenecientes a su consorte, y se envió a la Comisión de peticiones.

El Honorable Presidente hizo presente era de necesidad dar un decreto que subdividiese el Distrito judicial de Santiago, creando un Tribunal de Primera Instancia en la Provincia de La Vega que pueda juzgar las causas civiles y criminales en conformidad al Art. 47 de la Constitución, pues está orientado por el Poder Ejecutivo que en las cárceles de Santiago se encuentra un gran número de individuos, cuyas causas no se han juzgado, sin duda por la dificultad que se presenta en razón a las distancias para hacer comparecer los testigos, mediando el mismo inconveniente por las causas civiles; que, además, estaba informado que el Tribunal de Comercio no se reunía y que sería conveniente tomar informes del Ministro de Justicia sobre el particular, para, si no hay medio en remediar este mal, suprimir el referido Tribunal de Comercio y establecerlo en Puerto Plata o atribuirle las facultades de juzgar en esta materia al Tribunal de Primera Instancia de Santiago. Se tomó en consideración esta moción y se acordó que el Honorable Presidente formulase el proyecto de decreto para crear un Tribunal de Primera Instancia en la Provincia de La Vega y que se invitase al Ministro del ramo para que viniese al seno del Senado, con el fin de informarle del retardo que se experimentaba en las causas comerciales en aquella Ciudad.

Habiéndose hecho la invitación al Ministro y verificado su comparecencia, después de haberse orientado del objeto de su presencia, manifestó que, en efecto, tenía en su poder seis procesos verbales que comprueban la no reunión de los miembros del Tribunal de Comercio, y que, en su consecuencia, habia escrito al Gobernador de aquella Provincia para que los reuniera y les hiciese entender la necesidad en que estaban de cumplir con sus deberes y la responsabilidad a que están expuestos de que se reclame contra ellos personalmente a lo que les sujeta la ley por denegación de Justicia; y que, al mismo tiempo, hacía presente o especial encar-

gado al mencionado Gobernador, para que, si ésto no basta, se tomen las medidas más oportunas para que no sufran ciudadanos por falta de administración de Justicia, y que, en todo caso, sometería el resultado al Senado, para que se acuerde lo mejor y más conveniente; y sobre este particular fué aplazada la discusión, habiéndose retirado el Ministro.

El orden del día prescribe la discusión y sanción de la ley de Enjuiciamiento a los altos funcionarios de la Nación, que quedó pendiente en el Art. 50, conforme a la sesión del día once de los corrientes, y acto continuo prosiguió su lectura hasta el 55, habiendo sufrido varias emiendas y adiciones; levantándose la sesión por ser la hora avanzada.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 25 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cinco días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las diez de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Juan Rosa Herrera.

Leída el acta anterior, después de habérsele hecho algunas observaciones, fué aprobada.

El Honorable Presidente, en virtud del encargo que se le hizo, presentó al Senado el proyecto de decreto que subdivide el Distrito judicial de Santiago y crea en la Ciudad de La Vega, cabeza de Provincia, un Tribunal de Pri-

mera Instancia con las atribuciones que le señala la Ley de 19 de Mayo de 1855, avocándose el conocimiento de las causas comerciales, y en seguida sufrió la primera lectura y fué tomado en consideración, aplazándose la 2ª lectura para la sesión del Viernes.

Se procedió a dar lectura a un oficio del Ministro de la Guerra, concebido en éstos términos:

Honorables Senadores: El Poder Ejecutivo me encarga de contestar a Vds. la comunicación que le dirigieron en 27 de Abril próximo pasado en lo concerniente a la lista militar de la República.

No me es posible dar a Vds. en el momento un informe exacto del pie de Ejército actual porque, durante los últimos acontecimientos políticos ocurridos en el país, la mayor parte de los cuerpos se desorganizaron, muchos militares fueron exhonerados por los ex Presidentes Valverde y Báez, otros emigraron, engañados por las falsas promesas de este último y no pocos cambiaron su domicilio de una Común a otra.

Tiempo ha habido, después de instalada la actual Administración para haber completado los diversos cuerpos militares haciendo un reclutamiento en la República; pero el Poder Ejecutivo no lo ha creído conveniente en las presentes circunstancias, ya porque el estado de tregua con Haití nos dispensa por ahora de la necesidad de aumentar o completar el Ejército permanente, ya porque es justo dejar descansar a los que durante los once meses de sitio se mantuvieron cual más, cual menos, con las armas en la mano.

No quiere esto decir, Señores, que no existen en la República los mismos cuerpos de infantería y de artillería que han existido siempre, y lo mejor arreglado que es posible, con la única diferencia de que acaso no tengan las mismas plazas de que se componían antes de la malhadada Administración Báez.

Creo que en esas dos clases de armas cuenta el Gobierno, en toda la República, con ocho mil hombres organizados para cualquiera eventualidad.

A pesar de ésto y con el deseo de hacer en mi ramo las economías que exige el estado exhausto del Tesoro Nacional, he reducido el servicio cuanto lo exige la prudencia en todos los puntos de la República.

Mensualmente entran de servicio el número de hombres indispensables, y son los únicos que disfrutan del sueldo y ración. Dios guarde a Vds. muchos años. — Firmado: M. Lavastida. — Santo Domingo y Mayo 26 de 1859 y 16º.

Se asignó la sesión del Viernes para ocuparse de la Ley de Presupuestos.

Acto continuo y prescribiendo el orden del día continuar la discusión de los últimos artículos de la ley de Enjuiciamiento a los altos funcionarios, se verificó la sobredicha discusión terminando en el Art. 72 de que se compone dicha ley, y, en consecuencia, fué sancionada, mandándose copiarla para ser remitida al Poder Ejecutivo a los fines constitucionales.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Bonilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 26 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y seis días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y décimo sexto de la Patria; siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Juan Rosa Herrera.

Leída el acta anterior, después de una ligera observación fué aprobada.

Se recibió un oficio del Ministro del Interior, por el que, a nombre del Poder Ejecutivo, propone al Senado que, en vista de la aglomeración de los trabajos legislativos que

aun están a cargo del Senado, y en virtud de lo dispuesto por el Art. 20 de la Constitución Política, solicitaba se prorrogase la Sesión legislativa por treinta días más.

Se tomó en consideración lo propuesto por el Poder Ejecutivo y la mayoría votó por la prórroga, a cuyo efecto se formuló el Decreto, el que después de leído y sancionado, fué remitido al Poder Ejecutivo para los fines de la Constitución.

Conforme al orden del día, se procedió a dar lectura, es decir, la tercera, al proyecto del decreto sobre extracción de niñas de la casa paterna, aplazándose su discusión para otra sesión inmediata.

En seguida sufrió la 2ª lectura la ley de Hacienda, habiéndose llegado hasta el Art. 50: se suscitaron largos debates que obsorbieron un largo tiempo; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Bonilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 28 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla, y en consecuencia se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Conforme al orden del día, se procedió a la renovación del bufete y practicado el escrutinio, resultó el Honorable Bobadilla con cuatro votos para Presidente y el Honorable

Delmonte con uno; para Vice-Presidente, obtuvo el Honorable Delmonte cuatro votos y uno el Honorable Abreu, y habiendo reunido el Honorable Reyes tres votos para Secretario y el Honorable Bonilla dos, quedó instalado el bufete del modo siguiente: el Honorable Bobadilla para Presidente, el Honorable Delmonte para Vice-Presidente, y el Honorable Reyes para Secretario, por haber obtenido cada uno la mayoría de sufragios. A cuyo tiempo se presentó el Honorable Juan Rosa Herrera.

Acto continuo se prosiguió la lectura de la ley de Hacienda, la cual quedó pendiente en el Art. 50, y terminada que fué, se suscitaron discusiones, por lo que se señaló la sesión del Lunes para su 3ª y última lectura, a fin de abrir su discusión.

En seguida se dió la 2ª lectura al proyecto de decreto que subdivide el Distrito judicial de Santiago y establece la formación de un Tribunal de Primera Instancia en la Ciudad de La Vega, cabeza de Provincia. Sobrevinieron varias aclaraciones y discusiones sobre la ineficacia que habrá de producir el referido decreto, pues ya una vez se había palpado; y, sin embargo de todo ésto, quedó aplazada la última lectura para la sesión del Lunes.

En este estado, se recibió un oficio del Ministro de Justicia, por el cual participa al Senado haber comunicado a quien corresponde, para su observancia, lo que el Senado acordó respecto a los que habitualmente se ocupan en ser picapleitos en las Alcaldías.

Inmediatamente se procedió a dar lectura al proyecto de ley de Presupuestos para el presente año; surgieron varias discusiones y se acordó aplazar la 2ª lectura para una de las próximas sesiones.

Con lo cual y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 29 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y nueve, y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla y Vicente Antonio Reyes.

Leída el acta anterior, después de una ligera observación, fué aprobada.

En este estado, se presentó el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, y, después de haber tomado asiento, manifestó venía en nombre del Poder Ejecutivo a presentar al Senado un proyecto de ley que restablece la antigua Universidad de Santo Domingo, acompañado de una nota suscrita por el mismo Ministro, concebida en éstos términos:

Honorables Senadores: Intimamene convencida la Administración de S. E. el General Libertador de que de la difusión de las luces depende en gran parte la felicidad y el engrandecimiento del país, cuyos destinos le han sido confiados, ha hecho todos los esfuerzos imaginables por conseguir un objeto tan importante y deseado.

Obstáculos de grande magnitud se le han presentado a cada paso; dificultades casi insuperables se le han interpuesto como para arrebatarle toda esperanza de que sus grandes y generosos esfuerzos obtuviesen la sanción de la realidad; pero su constancia y el ferviente deseo que le anima de llenar cumplidamente su alta y delicada misión, han triunfado de todo, y la instrucción pública ha recibido un mayor incremento del que podía esperarse, si se atiende al estado de postración y abatimiento en que la Administración pasada dejó al país y al cúmulo de compromisos que le legó como consecuencia forzosa de sus desórdenes y concusiones.

No satisfecho aún el Gobierno con haber dado pruebas

tan evidentes e inequívocas de todo su anhelo y todos sus conatos, sólo tiende a proporcionar a los pueblos su felicidad y bienestar, y muy especialmente del vivo interés que le inspira la santa causa de la educación de la juventud, de esa juventud a quien la naturaleza ha dispensado con tanta profusión las inestimables dotes de la inteligencia, ha concebido la grandiosa idea de restablecer la antigua Universidad de Santo Domingo, y al efecto tengo la satisfacción de someter a vuestra aprobación un proyecto de ley que espero acogeréis con el mayor entusiasmo.

Vosotros podréis considerar cuan inmenso será el júbilo que experimento al dar un paso que hará época en la historia de nuestra emancipación, y que las generaciones futuras no podrán menos de admirar. Sí, Señores, una dulce satisfacción y un placer inexplicable embargan en este momento mi corazón, y no puede ser de otro modo, porque después de tantos años de oscurantismo, de tantos años que el templo de Minerva permanecía cerrado a la juventud estudiosa, todo corazón dominicano debe palpitar bajo la impresión de iguales sentimientos al ver restaurada la Universidad, que tanta gloria y renombre dió a la Primada de las Indias. En ella está simbolizada nuestra pasada grandeza, ella trae a nuestra imaginación recuerdos que nos enorgullecen y estimulan a hacernos por nuestra infatigable constancia en el estudio de las ciencias, dignos imitadores de los Arancibias, Núñez, Heredias, Valverdes, Correas y otros tantos ilustres varones que florecieron en los bellos días de nuestra Patria.

La Universidad de Santo Domingo fué la primera que se estableció en América, y también la que alcanzó más celebridad e importancia; los hijos de Cuba, Puerto Rico y Venezuela corrían ansiosos a sus sagradas fuentes a beber las inspiraciones de las ciencias; ella fué un gran foco de luz, cuyos brillantes resplandores iluminaron el continente americano.

Yo siento, Señores, una grata complacencia en recrearme con tan hermosos recuerdos, y me gozo en reposar la vista sobre ese feliz y glorioso período de nuestra historia, al mismo tiempo que alimento la consoladora y halagüeña esperanza de que su renacimiento se aproxima. Esto parecerá tal vez una ilusión, una quimera irrealizable, fruto de una ardiente fantasía que todo lo contempla al través de un prisma seductor; pero, afortunadamente,

AGN
República Dominicana
BIBLIOTECA DEL CONGRESO

es todo lo contrario, pues existen muchas probabilidades en favor de mi creencia. En efecto, Señores, una vez restablecida la Universidad, yo no dudo que reaparecerán las ciencias y las artes que con brillo florecieron en este suelo, pues el proverbial talento de los dominicanos vive aún, aunque inculto y oscurecido por la total carencia de elementos para obtener su desarrollo y sólo aguarda un impulso para ostentarse con toda su robustez y lozanía. Al Gobierno y a vosotros está reservada la gloria de dar cima a una empresa que llamará la atención del mundo civilizado. Acometámosla, pues, con resolución firme y decidida y con fe en el corazón, y el éxito es infalible. Dios guarde a Vds. muchos años. — Firmado. — Fauleau.

Santo Domingo y Mayo 30 de 1859 y 16º de la Patria.

El Honorable Presidente le contestó en nombre del Senado que participaban él y sus miembros de los mismos sentimientos en favor de la instrucción pública y del restablecimiento de la Universidad, y que podía asegurar al Poder Ejecutivo su más exacta cooperación a un objeto tan importante y de tanta utilidad pública, y el referido Ministro se retiró del Senado.

Se dió lectura de la opinión de la Comisión de peticiones sobre la solicitud del Ayuntamiento de Santiago, pidiendo se le conceda una suma de $2.000 fuertes para ayudar la construcción de la Iglesia parroquial de aquella Común, y de acuerdo con la expresada opinión, tenerla presente en la formación que se trata de hacer de la Ley de Presupuestos, teniendo en consideración los embarazos del Erario público y los diferentes objetos que debe atenderse.

Se dió también lectura de la opinión de la Comisión de peticiones sobre la solicitud que hacen los vecinos de San Pedro de Macorís, pidiendo se erija aquel Puesto Militar en Común, y vista la disposición del Art. 3 de la Ley de 9 de Mayo 1855, que requiere un número de 3.000 almas, a lo menos, para que un Puesto Militar sea erigido en Común, de acuerdo con la opinión de la Comisión de peticiones, se declaró por ahora sin lugar la expresada solicitud.

Se dió la 3ª lectura constitucional al decreto que establece un Tribunal de 1ª Instancia en la Ciudad de La Vega, y sufrió algunas enmendaduras, y se acordó abrir la discusión de él en la sesión del día 1º de Junio entrante.

En seguida se leyó también el proyecto de ley mandado por el Ejecutivo sobre el restablecimiento de la Universidad, y fué tomado en consideración.

Se trajo a la vista el proyecto de ley de Presupuestos para este año, presentado por el Poder Ejecutivo, y habiendo sufrido varias observaciones, se acordó nombrar una Comisión para que formulase el proyecto en los términos convenientes, y, en el acto, el Honorable Presidente nombró en Comisión al efecto a los Honorables Bonilla y Reyes.

Se abrió y dió lectura a un pliego que resultó ser una solicitud del Honorable Juan Rosa Herrera, quien hacía presente al Senado que le era de absoluta imposibilidad continuar ejerciendo las funciones de Senador por la Provincia del Seibo, en razón de que sus intereses estaban abandonados y experimentaba en ellos un gran detrimento, por lo que, bien a su pesar, estaba en el caso de dar su dimisión, esperando que le sería admitida; y habiéndose tomado en consideración lo expuesto, unánimemente se acordó admitirle su dimisión y que en una de las sesiones inmediatas se procedería a su reemplazo, provisionalmente, de la manera que prescribe la Constitución. Y siendo la hora avanzada, se suspendió la sesión.- Es copia.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 30 DE MAYO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los treinta días del mes de Mayo de mil ochocientos

cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Y, en consecuencia, se dió lectura del acta anterior y fué aprobada. Acto continuo se trajo a la vista la solicitud hecha por la Logia Cuna de América, con la opinión emitida por la Comisión de peticiones, y se acordó por el Senado hacerle la concesión del dicho edificio por el término de veinte años y con las condiciones siguientes: que disolviéndose la sociedad antes de cumplirse el tiempo indicado, volverá al Gobierno con las mejoras estables que se le hayan hecho, y que si, por el contrario, continuase, se le renovará la concesión por otro término, reservándole siempre el derecho de propiedad al Fisco; quedando igualmente acordado se le comunique al Poder Ejecutivo para que, si no hay por esa parte inconveniente, se proceda a otorgar la concesión en los términos consignados. Se trajeron a la vista los documentos relativos a la solicitud de la Señora Elizabeth Robert viuda Beauregard, y se dió lectura a la opinión de la Comisión de peticiones, y habiéndose suscitado sobre el particular conferencias, quedó aplazada la discusión para una de las sesiones inmediatas.

También se leyó una solicitud del Cura Párroco de San Carlos, por la que suplica se le conceda una suma de dinero para reparar aquella iglesia que se encuentra en muy mal estado, no pudiendo obtener nada del vecindario por el estado miserable en que se halla, y se acordó pasase a la Comisión de peticiones.

Se procedió a nombrar uno de los miembros de la Cámara de Cuentas por la vacancia de dos individuos que legítimamente se han dimitido, y habiéndose recogido la votación por escrutinio secreto, resultó nombrado a unanimidad el Señor Gabriel José de Luna, y se acordó que se le despachase título en forma y se le comunicase el nombramien-

to por medio de una nota oficial; lo que se verificó instantáneamente. El Honorable Presidente manifestó que era de absoluta necesidad el ocuparse en forma de la Ley de Patentes del año venidero de 1860, y se acordó nombrar una Comisión para que, a la mayor brevedad, formulase el proyecto, y el Honorable Presidente nombró a los Honorables Francisco Javier Abreu y Vicente A. Reyes. Se trajo igualmente a la vista un oficio del Ministro de Hacienda que se hallaba sobre la mesa y resultó contener varias observaciones que el Poder Ejecutivo hace a la Ley de Papel Sellado: unas fueron apreciadas y acogidas, y otras no, porque se estimó por necesidad y conveniencia que existieran tal como está el texto de Ley, y quedó resuelto se devolviese al Poder Ejecutivo en otra sesión para los fines constitucionales.

Se levantó la sesión por ser la hora avanzada.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 3 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los tres días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En este estado, se presentó el Ministro de lo Interior, Policía y Agricultura y después de haber tomado asiento, el Honorable Presidente hizo dar lectura al oficio que con fecha 9 del mes expirado dirigió al Senado incluyendo los

informes relativos a la solicitud de los habitantes de Jarabacoa, con el fin de que el referido Ministro ilustrase la idea que emite en el último párrafo de su dicho oficio que dice así: "Opinando el Gobierno también en conformidad con ellos".

El Ministro manifestó que la opinión de su Gobierno era de acuerdo con lo que habían informado el Gobernador Político de La Vega y el Ayuntamiento; y orientado el Senado de que como quiera que los vecinos de la Sección de Tavera no han sido los que han pedido su agregación a la Común de Jarabacoa, y que es más útil y ventajoso para ellos que permanezcan unidos a la de La Vega, se acordó que no ha lugar por ahora a la solicitud de los vecinos de Jarabacoa, y que la sección Tavera permanezca unida y forme parte de la jurisdicción de la Ciudad de La Vega.

Conforme a la orden del día, se trajo a la vista y se le dió lectura a la solicitud de la viuda Beauregard.

El Honorable Bonilla dijo: Debo hacer presente al Senado que la solicitud de la Señora Isabel Robert viuda Beauregard, ha sido ya sometida otra vez al Senado, el que tiene resuelto que ella debía ocurrir a los Tribunales de Justicia a quien correspondía darle una solución; pero si, a pesar de aquel acuerdo, cree el Senado que no se opone en manera alguna para tomar otra contraria, como lo ha hecho la mayoría, opino en este caso con ella.

El Senado, en conformidad al dictamen de la Comisión de peticiones, y a los artículos 12 y 16 de la Ley de 2 de Julio de 1845, a unanimidad declaró que, habiéndose justificado por la referida viuda la propiedad de la casa en cuestión, el Gobierno la entregará, como se ha verificado con otros en iguales casos, y que se comunique al Ministro de Hacienda esta resolución en contestación a su oficio de fecha veinte de Mayo último, devolviéndole los documentos que sometió al Senado.

Se procedió a dar lectura al resumen del informe de la Cámara de Cuentas relativo a las operaciones practicadas en

las cuentas de la Administración Báez para resolver lo que juzgue oportuno respecto al descargo del Contador General y Receptor de Hacienda de aquella época, lo que quedó pendiente en la sesión del diez y nueve de Mayo expirado; y suscitadas diferentes cuestiones, se acordó que mientras no se presente el Estado general de las Cuentas de la República, nada puede decidir el Senado, ni sobre la aprobación o desaprobación en el todo o parte de dichas cuentas, ni sobre el descargo de ninguno de los agentes contables de aquella Administración.

Se puso a discusión, artículo por artículo, el Decreto que establece un Tribunal de Primera Instancia en la Ciudad de La Vega, y recibió su sanción absoluta, y se acordó remitirlo al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales. Igualmente se le remitió la Ley sobre papel sellado para los mismos efectos.

Se dió la 2ª lectura al proyecto de ley sobre Presupuestos para el corriente año y sufrió algunas alteraciones.

Se ocupó el Senado en la nominación del Senador que debe reemplazar provisionalmente al Honorable Juan Rosa Herrera, Senador por la Provincia del Seibo, y habiendo procedido al escrutinio secreto, resultó el Señor Esteban Mesa con dos votos; el Señor Jacinto de Castro con otros dos, y el Señor Juan Nepomuceno Tejera con un voto. Y no habiendo elección, se procedió de nuevo a otra con las mismas fomalidades, y resultó el referido Señor Esteban Mesa con cuatro votos y Tejera con uno; y se acordó oficiar al antedicho Mesa para que, si acepta el nombramiento, se presente el Lunes a las once de la mañana a prestar el juramento constitucional. Y siendo la hora muy avanzada, se cerró la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.- Bonilla.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 4 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los cuatro días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes y Pedro Pablo de Bonilla.

Se leyó el acta anterior, y fué aprobada previa una observación.

Se dió lectura a una solicitud del Señor Manuel Galván suplicando al Senado se le mandase pagar el valor de un caballo y doscientos cincuenta barriles de cal que en la Administración de Báez se le compelió a prestar para el servicio público en momentos en que estaba esta Ciudad sitiada, y se mandó pasase a la Comisión de peticiones.

También se dió lectura a un oficio del Ministro de Justicia, relativo a dos observaciones que el Poder Ejecutivo hace a la Ley de Enjuiciamiento para los altos funcionarios de la Nación; fueron discutidas, y una de ellas fué estimada y acogida por el Senado, por la que se le aumenta al Jurado la multa de cien pesos fuertes en lugar de cincuenta en caso de falta cuando sea citado en forma, y la otra no pasó, puesto que los Gobernadores Politicos no están comprendidos en la clase de altos funcionarios de que trata el Art. 41 de la Constitución, teniendo previsto la Ley sobre organización de Tribunales el modo de proceder contra ellos cuando faltan en el ejercicio de sus funciones y fuera de ellas; habiéndose acordado devolver la referida Ley al Poder Ejecutivo para los fines que prescribe la misma Constitución.

Sufrió la 3ª y última lectura constitucional la ley de Hacienda, a la que se le hicieron diferentes enmiendas y adiciones y se le suprimieron algunos artículos, acordándose someterla a discusión en una de las próximas sesiones. Acto continuo se ocupó el Senado en el nombramiento por escrutinio secreto del miembro de la Cámara de Cuentas que aun estaba vacante, y, verificado, resultó a unanimidad electo el Señor Luis Durocher, a quien se le despachó el título que comprueba su nominación, acompañado de un oficio.

Se le comunicó al Ministro de Hacienda lo acordado en la sesión del día dos respecto a la solicitud de la viuda Beauregard. Igual comunicación se hizo al Ministro de lo Interior sobre la representación de la Logia Cuna de América.

Se levantó la sesión por ser la hora avanzada.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 6 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los seis días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Hallándose el Señor Esteban Antolín de Mesa en la sala, el Honorable Presidente le dijo que si aceptaba el ser miembro del Senado, provisionalmente, por la Provincia del

Seibo, prestase el juramento constitucional, y habiéndosele tomado, según la forma acostumbrada, quedó instalado en dicho puesto.

Conforme la orden del día, se procedió a dar la 2ª lectura al proyecto de ley que restablece la antigua Universidad.

También se leyó el Decreto que declara en estado de acusación al ex Presidente Báez y sus Ministros Félix María Delmonte, Juan Esteban Aybar y Pedro Antonio Bobea. Se le hicieron algunas enmiendas y adiciones y, hecho esto, el Senado a unanimidad aprobó su redacción respecto al ex Presidente Báez, y la mayoría igualmente sancionó su redacción respecto a los Ministros, a excepción del Honorable Delmonte que se abstuvo de votar, por las razones que ya había expuesto.

Habiéndose recibido un oficio del Ministro de Justicia, por el que hace a nombre del Poder Ejecutivo dos observaciones al Decreto que instala un Tribunal de Primera Instancia en la Ciudad de La Vega, y hallándose fundadas, fueron acogidas por el Senado y se ordenó por el Presidente que se redactase en los términos que indica el Ejecutivo y se le devolviese para los fines que prescribe la Constitución.

En seguida se recibió otro oficio del mismo Ministro de Justicia, fecha del día seis del actual, participando al Presidente del Senado que, habiendo recibido S. E. el Presidente de la República la Ley de Enjuiciamiento a los altos funcionarios de la Nación, había sido revestida del *exequátur* constitucional.

Sometida a discusión la Ley de Presupuestos para el año corriente y después de varias enmiendas y adiciones, recibió su sanción definitiva.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Esteban A. de Mesa.- Pedro P. de Bonilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 7 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los siete días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Prescribiendo la orden del día discutir la Ley de Hacienda, se verificó y no se le hicieron observaciones ni enmiendas; por tanto quedó sancionada, y el Honorable Presidente ordenó se pusiese en estado de remitirla al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Igualmente sufrió la primera lectura el proyecto de ley sobre patentes para el año 1860, aplazándose la segunda para el Jueves.

Se dió lectura a una solicitud del Señor Juan José Betances suplicando al Senado se le mandase pagar el valor de $250 de dos caballos que se le tomaron en requisición en el año 1855, acompañando a dicha solicitud una certificación, y se mandó pasase a la Comisión de peticiones.

Habiéndose recibido y dado lectura a un oficio del Ministro de Hacienda de fecha tres del corriente mes, en que solicita del Senado en nombre del Poder Ejecutivo una resolución sobre el déficit de $ 87.151.17 nacionales, que resultó en 1856 en la Administración de La Vega, por efecto del robo que en ella se hizo, cuyas circunstancias apreciadas por la Cámara de Cuentas la hicieron declarar a los Administradores de aquella época sin ninguna responsabilidad en los hechos, e igualmente respecto a un vale del difunto General Pedro de Mena, que existía en aquella Administración,

AGN
República Dominicana
BIBLIOTECA DEL CONGRESO

puesto que el Poder Ejecutivo no se ha creido autorizado para ordenar el descargo de las sobredichas cuentas y vales, porque cree que sólo el Senado es el único hábil para resolver cuestiones de esa naturaleza.

Discutida la materia, y sometida a votación, el Senado, a unanimidad, de acuerdo con la opinión de la Cámara de Cuentas en todas sus partes, resuelve: que los ex administradores Casimiro Cordero y Manuel Nicasio Mella sean descargados de toda responsabilidad por la suma de $87.151 17 nacionales, y que también se descargue a aquella Administración de la mencionada cantidad, para que no figure en la contabilidad, y que, en cuanto al vale del General Pedro de Mena, el Senado es de parecer que, si él ha dejado bienes conocidos en la República, se persigan éstos hasta hacer efectivo el cobro, y si no ha dejado tales bienes, se descargue formalmente a la Administración del montamiento de su valor; que se le conteste al Ministro su oficio con inserción de este acuerdo, y devolviéndole los documentos sometidos al Senado; lo que se verificó inmediatamente.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Esteban A. de Mesa.*

SESION DEL 8 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los ocho días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Francisco Javier Abreu, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta anterior y fué aprobada; igualmente se dió lectura a un oficio del Ministro de Justicia, por el que participa al Senado haber recibido S. E. el Presidente de la República el Decreto que subdivide el Distrito judicial del Cibao y establece un Tribunal de Primera Instancia en la Ciudad de La Vega, el que ha sido revestido del *exequátur* para su cumplimiento.

Acto continuo se ofició al Poder Ejecutivo remitiéndole la Ley de Presupuestos del año corriente para los fines constitucionales.

Se dió la 3ª lectura al proyecto de ley que restablece la antigua Universidad; se le hicieron algunas enmiendas y se aplazó a la sesión del Viernes para someterlo a discusión.

El Honorable Presidente nombró una Comisión para formular un proyecto de ley sobre registro.

Con lo cual y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 9 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los nueve días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se procedió a dar la 2ª lectura al proyecto de ley de patentes para el año mil ochocientos sesenta.

La Comisión nombrada para formular el proyecto de ley de registro lo presentó, se le dió lectura y fué tomado en consideración.

Y siendo la hora avanzada, se suspendió la sesión.- *Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 10 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, y 16º de la Patria, siendo las diez de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes, Fancisco Javier Abreu y Esteban Antolín de Mesa.

Se procedió a dar lectura al acta anterior y fué aprobada.

El orden del día prescribía la discusión de la Ley que restablece la antigua Universidad, y verificada artículo por artículo, fué sancionada en su conjunto y se acordó que se le remitiese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Habiéndose recibido y dado lectura a un oficio fecha nueve del corriente dirigido por el Ministro de lo Interior y Policía, por el que somete al Senado la aclaración de la duda que le ha ocurrido acerca del personal de los Ayuntamientos que determina la Ley en vigor, con el que en la actualidad tiene en virtud de la Ley anterior, se acordó contestarle que en el inciso del Art. 6 está resuelta la duda que se propone, puesto que los que en la actualidad ejercen sus funciones no serán removidos sino cuando hayan cumplido su período y las Asambleas Electorales provean a su reemplazo

oportunamente; lo que se le comunicó al referido Ministro por oficio público en forma, lo que se verificó en el acto.

Siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 15 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los quince días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, y 16º de la Patria, siendo las once del día, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente, por enfermedad del Honorable Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se trajo a la vista el dictamen de la Comisión de peticiones, concebido en estos términos:

La Comisión de peticiones, en vista de la que antecede del Señor Juan J. Betances reclamando el pago de dos caballos que se dice le tomaron en requisición en Diciembre de mil ochocientos cincuenta y cinco cuando la invasión haitiana, opina: que el Senado no debe conocer de ningún reclamo de esta especie, y que el peticionario debió en tiempo oportuno haberse provisto de los documentos necesarios para haber hecho su reclamo ante quien fuera de derecho, como se ha practicado en todos los reclamos de igual naturaleza. — Santo Domingo y Junio 14 de 1859. — Firmado, Fco. X. Abreu.

El Senado, de acuerdo con esta opinión, declaró sin lugar la petición a que se refiere. Igualmente se dió lectura

a otro dictamen de la antedicha Comisión, cuyo tenor es como sigue:

La Comisión de peticiones, en vista de la que antecede y de todos los documentos que la acompañan, en apoyo del reclamo que el Señor Manuel Galván hace de un caballo y doscientos cincuenta barriles de cal tomados en Julio de mil ochocientos cincuenta y siete por la Administración Báez, como se evidencia de los referidos documentos arriba expresados; opina: que el reclamo es justo y que éste no se encuentra, a juicio de la Comisión, en el caso de otros que puedan hacerse. Santo Domingo y Junio 15 de 1859. — Firmado. Francisco X. Abreu.

Se suscitaron diferentes discusiones, y por último resultado se acordó mandarle pagar los 200 barriles de cal por haber sido empleados en obras públicas y que con respecto a los 50 barriles restantes y al valor del caballo en cuestión, no había lugar por estar comprendidos en la categoría de servicios hechos al ex Presidente Báez durante su tenaz resistencia a la voluntad general de los Pueblos, según el acuerdo del Senado de fecha veinte y siete de Abril último. Se dió lectura a una petición dirigida al Senado por el Presbítero Dionisio V. de Moya, Cura y Vicario de la Ciudad de La Vega, en la que solicita se le conceda la suma de cuatro a cinco mil pesos fuertes para la conclusión del templo de su Parroquia; y se mandó pasar a la Comisión de peticiones.

El Honorable Presidente presentó dos decretos apoyados por el Honorable Bonilla; el uno sobre la concesión de una pensión vitalicia de $200 fuertes anuales a la Señora Doña Juana Ramírez de Montenegro, hija legítima del difunto Brigadier don Juan Sánchez Ramírez, y el otro que modifica el Art. 2º del Decreto de 30 de Diciembre expirado sobre el cabotaje por buques extranjeros; y ambos decretos fueron tomados en consideración.

Y siendo la hora muy avanzada, se levantó la sesión.- *Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.*

SESION DEL 16 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y seis días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, y diez y seis de la Patria, siendo las doce del día, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta anterior, y, previas algunas observaciones, fué aprobada. El Honorable Presidente presentó, apoyado por el Honorable Reyes, un proyecto de ley modificadora del actual sistema monetario, y fué tomado en consideración. Se dió lectura a dos peticiones dirigidas al Senado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Señor Don Juan Nepomuceno Tejera, la una solicitando se le mande pagar los sobresueldos que como Presidente de la dicha Suprema Corte tiene devengados, y la otra cobrando los gastos hechos en la misión que en mil ochocientos cincuenta y siete le confió el Gobierno para ir a Las Matas de Farfán y ajustar una tregua entre la República y el Imperio haitiano: se mandaron pasar, con todos los documentos en apoyo, a la Comisión de peticiones.

La misma Comisión de peticiones presentó su informe acerca de la que con fecha 14 del corriente ha dirigido el Presbítero don Dionisio V. de Moya, solicitando un auxilio de cuatro a cinco mil pesos fuertes para concluir la iglesia de La Vega, empezada y continuada hasta hoy a costa del peticionario, y el Senado, en atención a que todo lo expuesto en dicha petición es de notoriedad pública, lo mismo que los sacrificios de toda especie hechos por el Presbítero Moya para llevar a cabo la empresa, con un celo verdaderamente

religioso, de conformidad con la opinión de la Comisión, acordó votar la cantidad de cuatro mil pesos fuertes para el objeto indicado, tan útil como necesario a una población industriosa, morigerada y digna, bajo todos conceptos, de ayuda y protección.

Se dió la 1ª lectura al proyecto de ley de registro, y sufrió su 3ª lectura el otro proyecto de ley sobre patentes; y siendo la hora avanzada, y no habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bonilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 17 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y siete días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, y diez y seis de la Patria, siendo las doce del día, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se dió lectura a un oficio de fecha diez y seis de los corrientes, dirigido al Senado por el Ministro del Interior en nombre del Poder Ejecutivo, proponiendo la erección en Puestos Militares de Los Cevicos, dependiente de la Común del Cotuí, el Bonao, dependiente de la Común de La Vega, y Yamasá, dependiente de Santo Domingo; y el Senado acordó invitar al referido Ministro para la sesión de mañana, con el fin de obtener algunas aclaraciones sobre los puntos a que se contrae dicho oficio.

Se dió la 1ª lectura al proyecto de decreto que concede una pensión vitalicia de $200 fuertes anuales a la Señora Doña Juana Ramírez de Montenegro, hija legítima del difunto Brigadier Juan Sánchez Ramírez.

Igualmente se procedió a dar la primera lectura al proyecto de decreto que modifica el Art. 2º del Decreto fecha 30 de Diciembre expirado sobre el cabotaje por buques extranjeros.

Recibió la sanción definitiva la Ley de Patentes para el año 1860.

El HONORABLE PRESIDENTE tomó la palabra y dijo:

Honorables Señores: Dos hombres que, en hora menguada para la República, pusieron el pie en nuestras playas, los Señores Don Antonio M. Segovia, ex Cónsul General y Encargado de Negocios de S. M. Católica cerca de nuestro Gobierno, y Don Antonio Gutiérrez, comerciante quebrado y ex Cónsul de la Nueva Granada en esta Capital, han dejado en el país un rastro de lágrimas y sangre que no se borrará jamás. Empero, esos hombres descorazonados, al conspirar contra la prosperidad y sosiego de esta tierra, que tan franca y amistosa acogida les diera, a fuer de ruines caballeros, no perdieron de vista sus intereses personales. El uno, Señor Segovia, a más de los tres mil y pico de pesos fuertes que le produjo el abuso que hizo de la matrícula española, recibió del Erario, según pública voz, cinco mil pesos para gastos de una misión diplomática que no llegó a desempeñar, porque el Gabinete de Madrid rehusó, con sobrado fundamento, admitirlo en clase de Plenipotenciario de la República, o, mejor dicho, de agente de Buenaventura Báez; el otro, Señor Gutiérrez, no contento con haber arruinado con su quiebra a una porción de honrados comerciantes, dentro y fuera del país, percibió también del Tesoro nacional cuatro mil fuertes, a cuenta de una empresa de inmigración de naturales de Islas Canarias, la que se quedó en proyecto, habiéndose marchado Gutiérrez al extranjero a poco de haber embolsado la suma. Siendo, pues, incuestionable que en uno

y otro caso ha lugar a restitución, según la ley, propongo que, por medio del Ministro del ramo, se soliciten las pruebas que pueda haber de la entrega de las referidas cantidades, para resolver después lo que más convenga a los intereses de la Nación.

Y el Senado Consultor tomando en consideración la proposición de su Honorable Presidente, acordó oficiar al Ministro de Hacienda en los términos que ella expresa.

Con lo cual y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 19 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y nueve días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve y diez y seis de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

El acta de la sesión anterior fué aprobada sin observación. El orden del día prescribía la lectura de dos proyectos de Decretos, el uno que modifica el Art. 2º del Decreto fecha 30 de Diciembre expirado, sobre el cabotaje por buques extranjeros, y el otro que concede una pensión vitalicia de doscientos pesos fuertes anuales a Doña Juana Ramírez de Montenegro, hija del Brigadier Don Juan Sánchez Ramírez; y habiéndose procedido a la discusión, artículo por artículo, recibieron ambos su sanción definitiva, y se acordó remitirlos al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Se dió la 2ª lectura al proyecto de ley reformativa del sistema monetario. Igualmente se procedió a dar la segunda al proyecto de decreto que autoriza al Poder Ejecutivo a demandar ante los Tribunales de las naciones a que pertenezcan a los Señores Rothschild Sons & Compañía, de Saint Thomas, y J. A. Jesurun et Zoon, de Curazao, para obtener el pago de lo que adeudan a la República; y habiéndose hecho una enmienda al Art. 2º se votó la suma de diez mil pesos fuertes para llevar a ejecución dicho decreto. Declarada la urgencia, se dió lectura al proyecto de decreto que erige en Puestos Militares las Secciones de Yamasá, Cevicos y Bonao.

Se dió también la 1ª lecura al proyecto de ley que modifica la de correo de 20 de Diciembre 1851, previa la declaratoria de urgencia.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 20 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los veinte días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve y diez y seis de la Patria, siendo las doce del día se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente, por enfermedad del Honorable Tomás Bobadilla; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta anterior, fué aprobada.

El Ministro del Interior se presentó al Senado en virtud de la invitación que se le hizo para obtener aclaraciones sobre ciertos puntos que encierra su nota oficial de fecha

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

diez y seis del corriente, referente a la erección en Puestos Militares de las Sesiones de Cevicos, Bonao y Yamasá: surgieron diferentes debates de las aclaraciones dadas por el referido Ministro, y este Señor ofreció dar informes más circunstanciados.

En seguida, la Comisión de peticiones dió su informe sobre la que hizo Don Nepomuceno Tejera en fecha 16 de los corrientes; y el Senado, teniendo a la vista los documentos que la justifican y en atención a que al peticionario en su calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, le fué acordado por el Poder Ejecutivo en veinte y dos de Mayo de mil ochocientos cincuenta y siete, un sobresueldo de sesenta pesos fuertes mensuales que empezaría a percibir desde el 1º de Julio del mismo año; que en fecha 20 de Julio de mil ochocientos cincuenta y siete le fué aprobada por el Ministro del ramo una cuenta de gastos, montante a la suma de seis mil seiscientos trece nacionales, equivalentes a ciento treinta 25 cts. fuertes, suplidos por el interesado en la misión que le encargó el Gobierno para conferenciar con una Comisión haitiana en nuestras fronteras; tomando en consideración que los servicios del Señor Tejera no fueron hechos al Gobierno de Báez, sino a la Nación, y que la Constitución del Soberano Congreso de Moca, en vigor hasta el veinte y siete de Julio del año pasado, mantenía a la Suprema Corte de Justicia con su asiento en esta Ciudad; por éstas y otras razones de equidad y justicia y de conformidad con el dictamen de su Comisión, acordó que los seis mil seiscientos trece nacionales, o bien sean los ciento treinta y dos con veinte y cinco cts. fuertes, suplidos por el peticionario, le sean satisfechos por el Tesoro público al cambio fijado por el Gobierno, y que el sobresueldo de sesenta fuertes mensuales le sean también abonados desde el 1º de Julio de 1857 hasta el 1º del mismo mes de 1858.

Se dió la 2ª lectura de la ley de Registro. El Honorable Bonilla tomó la palabra y dijo que, en vista de los pocos días que restan para concluirse la Sesión legislativa, era de

opinión que se reuniera el Senado diariamente a mañana y tarde para terminar los trabajos que aun estaban pendientes.

El Senado accedió a dicha proposición.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 21 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los veinte y un días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, y diez y seis de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó y fué aprobada el acta de la sesión anterior.

Se dió la 2ª lectura al proyecto de decreto que acuerda a la Señora Doña Juana Ramírez de Montenegro una pensión vitalicia de doscientos anuales, que recibirá por duodécimas partes.

Se procedió en seguida a dar la 1ª lectura al proyecto de ley que arregla el sistema monetario.

También se dió la segunda lectura al decreto que modifica el Art. 2º del Decreto de 30 de Diciembre último sobre el cabotaje por buques extranjeros, y siendo la hora avanzada, se suspendió la sesión.- *M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 22 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y dos días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, y diez y seis de la Patria, siendo las diez de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes, Francisco Javier Abreu y Esteban Antolín de Mesa. Leída el acta anterior, fué aprobada.

El Senado se ocupó en el nombramiento de los dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia que faltan en esa Corporación, para cuyo efecto se trajeron a la vista las listas de las antiguas Diputaciones Provinciales y de los Colegios Electorales que las reemplazaron, las cuales contienen los candidatos para dicho Tribunal y demás de la República. En consecuencia, cada Senador depositó su voto en la urna y, practicado el escrutinio, resultaron electos separadamente los Señores Leonardo Delmonte y Pedro Tomás Garrido.

Se recibió un oficio del Poder Ejecutivo por el cual hace algunas observaciones a la Ley de Patentes votada por el Senado para el año mil ochocientos sesenta; se apreciaron todas, excepto la que se hizo al último párrafo del Art. 8º, el que quedó tal como está, siendo la intención del Senado que se publiquen en la *Gaceta Oficial* las declaraciones de patentes, para facilitar la persecución de los infractores y no para ejercer un control que ya está establecido por la misma ley.

Se dió la tercera lectura al proyecto de ley sobre registro.

Y siendo la hora avanzada, sin más de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 23 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y tres días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, y diez y seis de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se discutieron las observaciones que el Poder Ejecutivo hace a la Ley de Hacienda y fueron resueltas de la manera siguiente:

En cuanto al párrafo 5º del Art. 2º, quedó tal como está, en razón a que la disposición que contiene, armoniza las Leyes de 17 de Junio de mil ochocientos cuarenta y siete, y 27 de Abril de mil ochocientos cincuenta y tres, y resuelve la duda propuesta por el Ministro de Hacienda respecto a la contrariedad que se nota entre los Arts. 3º de la primera, y 3º de la 2ª Ley, pareciendo muy conveniente expresar de un modo más claro el uso que deba hacerse de los bienes nacionales.

Respecto al Art. 7º se reformó de este modo: *En caso de ausencia temporal del Contador General, lo reemplazará en sus funciones y bajo su responsabilidad, el empleado que elija, y cuando haya impedimento legal para el desempe-*

ño de su empleo dará inmediatamente parte al Ministro de Hacienda, para que el Gobierno provea provisionalmente su reemplazo.

El Art. 11 se mantuvo en los mismos términos que está redactado, en razón de que, aunque el Senado está muy convencido de la utilidad de establecer para toda la República la contabilidad en partida doble, ha tocado con la misma dificultad que presenta el Poder Ejecutivo, pero cree con sobrado fundamento que esta dificultad no existe con respecto a la Contaduría General, cuyos actuales empleados están familiarizados con el sistema propuesto, siendo éste el único medio de dar insensiblemente principio a su ensayo.

El Art. 19 quedó tal como está, porque a la Ley de Hacienda es a la que toca fijar los empleados de este ramo, y a ella debe arreglarse la de Gastos Públicos, que no es otra cosa sino el Presupuesto general del Estado, que debe hacerse anualmente, según lo determina el inciso 4º del Art. 26 de la Constitución.

El Art. 31, mereciendo nueva redacción, se formuló como sigue: *Los Interventores son personalmente responsables de los derechos de importación o exportación que dejaren de cobrarse, bien sea por su negligencia o descuido en el cumplimiento de sus deberes, o bien por irregularidades y faltas de fórmulas en las fianzas que, conforme a la Ley del Comercio Marítimo, deben presentar los comerciantes.*

Y por último, el capítulo 12, que trata del personal de las oficinas de Hacienda, quedó tal como está por las razones aducidas al tratarse del Art. 11; y en cuanto a las demás observaciones que hace el Poder Ejecutivo, fueron todas aprobadas y acogidas.

Se dió la 2ª lectura al proyecto de ley sobre correo. Recibió su sanción definitiva el proyecto que reforma la ley sobre sistema monetario.

Se procedió a dar la 2ª lectura al proyecto de decreto que erige en Puestos Militares las Secciones de Yamasá, Los Cevicos y el Bonao.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro Pablo de Bonilla.- V. A. Reyes.*

SESION DEL 25 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cinco días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se dió la 3ª y última lectura al proyecto de Decreto que erige en Puestos Militares las secciones de Yamasá, Los Cevicos y el Bonao, y quedando definitivamente sancionado, fué remitido al Poder Ejecutivo para los fines que prescribe la Constitución.

Se procedió a dar la 2ª y última lectura al proyecto de Ley de correos, e igualmente fué sancionado.

Se remitió al Poder Ejecutivo la Ley de Patentes para el año 1860. Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 27 DE JUNIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y siete días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Vicente Antonio Reyes y Esteban Antolín de Mesa.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Habiéndose tomado en consideración lo que el General Libertador expuso en su Mensaje de 5 de Enero último, para que se diese una disposición sobre los derechos cobrados por el Gobierno Báez, durante el sitio de esta plaza, por despacho de buques para el extranjero, destinados a cargar en las costas, que pagaron dobles derechos, porque si bien él los exigía, también el Gobierno de Santiago dispuso que no se permitiese a dichos buques cargar en las costas sin que pagaran sus derechos, habiendo resultado que éstos se cobraron dobles, cuya medida es del todo injusta y gravosa a los extranjeros, se resolvió autorizar al Poder Ejecutivo para que ordenase la devolución de los referidos derechos cobrados en esa época, según la cuenta y razón que debe haber de los buques que se encuentran en este caso.

Se recibió y dió lectura a un oficio del Ministro de Hacienda, fecha veinte y cinco de los corrientes, por el que en nombre del Poder Ejecutivo hace observaciones al Decreto fecha 30 de Diciembre último, sobre cabotaje por buques extranjeros; y se acordó quedase en receso. Se procedió a la discusión, artículo por artículo, de la Ley de Registro, y fué sancionada definitivamente.

Se trajo a la vista el informe de la Cámara de Cuentas de tres de Mayo de 1859, en que dió cuenta de los desórdenes en que se encontraba la contabilidad general de Hacienda durante la Administración Báez, y las dificultades que esto ha producido por no haberse presentado e impreso en su oportunidad las Cuentas de la República; y el Senado, considerando que, según el mismo informe, la Cámara fué de opinión que el Presidente Báez, sus Ministros y agentes administrativos, son responsables ante la Nación de los fraudes y dilapidaciones que consumaron, y que se desaprueben las Cuentas, ha resuelto: que se devuelvan al Ministro de Hacienda, tanto el informe de Don Teodoro S. Heneken, como el de la Cámara de Cuentas, para que se tomen todas las medidas necesarias, a fin de asegurar, por cuantos medios sean posibles, los intereses de la Nación, y para que inmediatamente se pongan en estado de acusación y se sometan a juicio ante los Tribunales competentes a los agentes administrativos de la referida Administración Báez, no habiendo lugar por ahora a descargar de toda responsabilidad al Contador General ni al Receptor de Hacienda, en atención a que, por la Constitución del Estado, ninguna persona está autorizada ni puede sacar de las Cajas públicas cantidad alguna sin el previo consentimiento del Senado Consultor, ni se pueden distraer los fondos públicos de su objeto especial, sino en virtud de una ley.

Al mismo tiempo se tomó en consideración el acuerdo tomado por el Senado bajo la Administración Báez, en que dispuso se sobreseyese la ejecución de la sentencia dada contra el ex Administrador de Hacienda José Joaquín Machado, deudor de las Cajas públicas por la suma de tres mil ochocientos once pesos 35 cts. fuertes y setecientos sesenta y un mil, quinientos veinte y cuatro pesos 51 cts. nacionales; y considerando que ya aquella sentencia había adquirido el carácter de la cosa juzgada que la hace inrrevocable, y que el Senado no pudo, sin infracción de la Constitución, haberse mezclado ni avocado conocimiento alguno en materia judi-

cial, porque los Poderes del Estado son independientes y soberanos, el Senado ha resuelto también declarar, como declaró, nula y de ningún valor ni efecto la mencionada disposición de sobreseimientos, por ser inconstitucional y contraria a derecho, y que la referida sentencia debe llevarse a debida ejecución en todas sus partes.

Acordó también se excite al Ministro de Hacienda para que someta a juicio al ex Fiscal del Tribunal de Primera Instancia de este Distrito Judicial, Manuel María Gautier, a quien habiéndosele confiado por la Administración el cobro de diferentes obligaciones de retardatarios del Fisco, las cobró o negoció, y no ha dado cuenta de ella, lo mismo que por el valor que sacó de las Cajas públicas de la goleta americana *Charles Gill*, que habiéndose rematado por cuenta del Fisco, no sólo se extrajo la suma, sino que se han cobrado al Estado indebidamente derechos. Cuyas medidas en general cree el Senado que es de su deber tomar, no sólo porque está encargado de la conservación de los bienes de la Nación, sino porque también es de rigor que se cumplan las Leyes y que los defraudadores de la Hacienda pública se les juzgue y castigue conforme a derecho, a la vez que se deben recaudar y hacer volver al Tesoro todas las sumas que se hayan extraído indebidamente, y a las que son responsables con privilegio y preferencia los bienes de todos los administradores y agentes encargados de la conservación y recaudación de los referidos bienes.

Se sancionó definitivamente el Decreto que autoriza al Poder Ejecutivo a demandar a los Señores A. Jesurun et Zoon, de Curazao, y Rothschild Son et Ca., de Saint Thomas, para reclamarles sumas que adeudan al Fisco por negociaciones bastardas hechas en la Administración Báez; y también contra los Señores Antonio María Segovia, ex Cónsul General encargado de Negocios de S. M. Católica en esta República y Antonio Gutiérrez, ex Cónsul granadino, a éste por una suma de cuatro mil pesos fuertes que recibió a cuenta de una inmigración de isleños que no tuvo efecto, y a

aquél por cinco mil pesos fuertes que igualmente recibiera por una negociación diplomática con el Gabinete de S. M. Católica que no cumplió.

Y siendo muy avanzada la hora, y cumplidos hoy los treinta días de prórroga para la Sesión legislativa, quedó ésta cerrada conforme a lo que prescribe la Constitución del Estado.

El Honorable Presidente manifestó que había sido encargado por el Senado de hacer un discurso de clotura, por el cual se hiciera un resumen de los trabajos que se han hecho, y se acordase un voto de gratitud a los que derrocaron al Tirano, voto extensivo al General Libertador, a los que contribuyeron con las armas en la mano a defender los derechos y la soberanía del Pueblo y a todos los demás que con sus luces han cooperado a dar nueva vida a la República: presentó y dió lectura al dicho discurso que es el mismo que se halla inserto en la *Gaceta Oficial* número 49 (*)

Se aprobó la referida alocución, y se quedó terminada la Sesión legislativa.- *Bobadilla.- V. A. Reyes.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 4 DE JULIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cuatro días del mes de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoria, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Francisco Javier Abreu y Esteban Antolín de Mesa.

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 12.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Leída el acta de clotura de la Sesión legislativa, fué aprobada.

En este estado se recibió un oficio del Ministro de Hacienda, fecha veinte y ocho del pasado, que dice así... (*)

Discutida la materia, el Senado, reconociendo los motivos de conveniencia que hay para que una ley reforme el actual sistema monetario introduciendo las mejoras que puedan adoptarse según las circunstancias, y cuyas consideraciones de necesidad y utilidad pública le indujeron a proponer, discutir y aprobar la citada ley que reforma el sistema monetario; y considerando que la Sesión legislativa está ya cerrada, y que no le es dable legislar, acordó que permanezca en receso la referida ley hasta la Sesión próxima, a fin de llenar las disposiciones previstas por el Art. 23 de la Constitución.

Se leyó un oficio del Señor Leonardo Delmonte, por el que renuncia el nombramiento que el Senado Consultor hiciera en él para Ministro de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo el título que se le expidiera, y le quedó acordada. Se leyó igualmente otro oficio del Ministro de Hacienda por el que incluye un estado de los deudores a la Administración de Santiago, y se resolvió que hasta no viniendo dicho estado con sus respectivas clasificaciones, como se le tiene anunciado al Señor Ministro, el Senado se abstuvo ocuparse de tal extremo.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

(*) Omitido en el original.

SESION DEL 7 DE JULIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los siete días del mes de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se sometió a discusión sobre si el Senado en sus sesiones consultivas está llamado a elegir los Ministros de la Suprema Corte de Justicia se procedería en seguida, y de no, se abstendría en verificarlo.

El Honorable Vice-Presidente manifestó que el Senado Consultor, según el texto de la Constitución, ejerce dos atribuciones, una como Cuerpo Legislativo, en cuyo caso es que tiene facultad para elegir los Ministros de la Suprema Corte, y otra como Consejo de Estado, para sólo consultar al Gobierno, y que, por consiguiente, opinaba porque el Senado no tiene en este último caso tal facultad. El Honorable Bonilla emitió su opinión en el mismo sentido. El Honorable Abreu fué de contrario sentir, sosteniendo que el Senado tenía por la Constitución, además de las funciones legislativas, las facultades judiciales y consultivas y demás que aparecen de sus atribuciones; que no podría legislar sino en la Sesión legislativa, pero las demás atribuciones podía ejercerlas en cualquier tiempo de su permanencia, ya fuese en Sesión legislativa o fuera de ella.

Y después de varias discusiones, habiéndose ilustrado la materia, se puso a votación, y la mayoría estuvo por la

opinión del Honorable Abreu; por lo que difirió para el Lunes nombrar el Ministro de aquella Corporación que aun falta. Con lo cual se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.- Bonilla.*

SESION DEL 12 DE JULIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los doce días del mes de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa. Se leyó el acta anterior y fué aprobada.

Se recibió y leyó un oficio que dirigió el Ministro de Hacienda de fecha ocho del actual, en nombre del Poder Ejecutivo, por el cual observa que la resolución tomada por el Senado Consultor, relativa al reclamo que hizo el Señor Juan Nepomuceno Tejera, es contraria a la disposición que el Gobierno había tomado de no abonar sueldos a ningún empleado, bien sea judicial, civil o militar, sino contándose desde el 1º de Junio de mil ochocientos cincuenta y ocho.

Surgieron diferentes debates sobre el particular, y se acordó aplazar la discusión para el Jueves.

Se procedió a elegir el Ministro de la Suprema Corte de Justicia por escrutinio secreto, y resultó el Señor B. A. Pérez con dos votos y el Señor José Diez con tres, y obteniendo éste último la mayoría, se le despachó el título acompañado de oficio competente. Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bonilla.*

SESION DEL 22 DE JULIO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y dos dias del mes de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francsco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

En este estado, se presentó el Ministro de Relaciones Extranjeras, y manifestó, en nombre del Poder Ejecutivo, que venía a someter al Senado el resultado de la misión que se confió al Señor Felipe Dávila Fernández de Castro, Plenipotenciario del Gobierno en la Corte de Copenhague, para que arreglase la cuestión suscitada sobre el apresamiento que tuvo lugar de tres buques dinamarqueses en el tiempo de la Administración Báez, y en el crucero que se hizo en frente de Puerto Plata por los buques que al efecto mandó aquel Gobierno; y habiendo sometido al Senado las piezas relativas a esta negociación y el Protocolo que se concluyó el veinte y dos del mes pasado, por el cual quedó convenido, entre otras cosas, queda entendido que la aceptación por el Gobierno Danés de la proposición arriba expresada relativa al arbitraje eventual de una tercera potencia sobre la cuestión de derecho, permanece suspensa hasta que el Gobierno Dominicano haya dado su sanción definitiva a las disposiciones de este Protocolo, según las formas requeridas por la Constitución de la República; pero desde que el cumplimiento de esta formalidad llegue a conocimiento del Gobernador de las Antillas danesas residente en Santa Cruz, por una comunicación directa del Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República, y que el presente Protocolo se haya insertado en la *Gaceta Oficial* del Gobierno

Dominicano, se dará orden al Cónsul de S. M. el Rey de Dinamarca en Santo Domingo, para que entre de nuevo a ejercer sus funciones, y, desde esa fecha, las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Dominicana y la Dinamarca tomarán su curso ordinario de cordial y perfecta amistad, y habiendo el referido Secretario de Estado encargado de las Relaciones Exteriores suplicado al Senado se sirviese dar su aprobación al referido convenio en la forma que prescribe la Constitución, para que pueda tener su efecto, discutida la materia y sometida a votación, resultó a unanimidad de votos aprobado en todas sus partes el referido convenio, y se resolvió dar una Resolución que fué redactada y aprobada en los términos siguientes:

REPÚBLICA DOMINICANA

PODER LEGISLATIVO. EL SENADO CONSULTOR

Visto el Mensaje del Poder Ejecutivo transmitido al Senado por medio del Ministro encargado de las Relaciones Exteriores;

Visto el convenio celebrado, en veinte y dos de Julio, entre el Señor Felipe Dávila Fernández de Castro, Plenipotenciario de la República cerca de S. M. el Rey de Dinamarca y el Señor Ministro de Relaciones Extranjeras de dicha Corte;

Vistas las disposiciones del 9º inciso, Art. 26 de la Constitución del Estado,

En nombre de la República el Senado Consultor aprueba en todas sus partes lo ajustado y convenido en el Protocolo que se hizo el referido día veinte y dos de Junio del corriente año.

La presente Resolución será enviada al Poder Ejecutivo para que el referido ajuste y convenio se lleve a puro y debido efecto, y para que sea ejecutado en todas sus partes.

Dada en el Palacio del Senado Consultor, en la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los veinte y dos días del mes de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria.

Y siendo avanzada la hora, se terminó la sesión de este día.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 5 DE AGOSTO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cinco días del mes de Agosto de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Esteban Antolín de Mesa y Pedro Pablo de Bonilla.

Se trajo a la vista la dimisión que hace el Señor Juan Nepomuceno Tejera del cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y le quedó acordada, contestándosele por oficio.

El Senado Consultor, encargado por la Constitución de ilustrar al Poder Ejecutivo con su opinión a todo lo concerniente al bien público, se ocupó del estado actual en que se encuentra la República y de la intranquilidad que padece por los constantes conatos de revolución que se observan en diferentes puntos, lo que prueba que no deja de haber algunos partidarios de la Administración Báez que se ocupan en intranquilizar el país, tanto con noticias falsas que se propagan y forjan en la Ciudad y en el interior, como las que vienen del extranjero, y habiendo discutido sobre el particular, se acordó que el Senado se reuniese al Gobierno para hacerle presente que, rendida esta plaza bajo una capitulación, se ofreció garantizar a los partidarios de Báez con la condición tácita de que hubiesen de vivir en paz y buena ar-

monía, conformándose a las leyes y a las determinaciones del Gobierno actual; pero no verificándose así, a pesar de las medidas generosas con que se les ha tratado procurando atraerlos por medios suaves y fraternales, era de necesidad cambiar de política con todos aquellos que la opinión pública considera y designa como perturbadores del reposo y de la tranquilidad pública.

Que, en política, cada vez que se trata de la seguridad general y del sosiego de la sociedad y de los ciudadanos, todas las medidas de precaución son buenas, porque vale más precaver los males que tener que remediarlos, y que abultándose las novedades de día en día, el Senado cree que el Gobierno debe hacer uso de las facultades amplias que le concede el inciso 22 del Art. 35 de la Constitución, para poder llenar su principal deber, que es mantener el orden, la paz y la tranquilidad pública y la garantía de la sociedad; y siendo todos los miembros del Senado de esta misma opinión, quedó resuelto, trasladarse al Palacio de Gobierno para hacer estas indicaciones al Poder Ejecutivo, como efectivamente se verificó; y de vuelta a la sala de sus sesiones, se acordó levantar esta acta para que quede en todo tiempo la debida constancia.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 18 DE AGOSTO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y ocho días del mes de Agosto de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las diez de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor, en presencia de la mayoría,

compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Esteban Antolín de Mesa y Pedro Pablo de Bonilla.

Leída el acta de la sesión anterior fué aprobada.

Se trajo a la vista un oficio del Ministro de Hacienda de 15 de Julio último que dice así: (aquí el oficio). (*)

Discutida la materia, se acordó que en atención a que ya está cerrada la Sesión legislativa, quedase en receso el citado Decreto para discutir las observaciones que se le hagan de la manera y forma que dispone el Art. 23 de la Constitución, pero que se diga al Poder Ejecutivo que el Senado espera que así como se han tomado medidas para perseguir a Don Antonio María Segovia, y al Señor Antonio Gutiérrez por las sumas que adeudan al Tesoro público, también las tomará por cuantos medios sean de derecho para conservar, recaudar y asegurar lo que adeudan los Señores Rothschild y Sons, de Saint Thomas, y el Señor J. A. Jesurun y Son, de Curazao, pues el Senado no puede prescindir de la obligación que le impone el artículo 26, inciso 16 de la Constitución, que es el único interés que le ha guiado en este negocio y el de recaudar los intereses nacionales y precaver que la Nación sufra su pérdida cuando se presentan medios para poderlo salvar.

Se leyó una solicitud del Señor Vicente C. Soto, proponiendo se le conceda el callejón que queda entre la casa de su propiedad y la del Señor Miguel Valverde, en la calle de Las Damas, para darle más amplitud a su casa y hermosear la calle, para que no quede con ese vacío: se acordó dejar dicha solicitud sobre la mesa para traerla a la vista en las tareas legislativas, pues es cuando el Senado está llamado a conocer y decidir sobre tales pretensiones.

Igualmente se dió lectura a un oficio de la Cámara de Cuentas, acompañando una comunicación del Ministro de

(*) Omitido en el original.

Hacienda, y se decidió pedir informes al Ministro para acordar lo que corresponda.

Siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.*

SESION DEL 25 DE AGOSTO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cinco días del mes de Agosto de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se leyó igualmente un oficio del Ministro de Justicia, fecha 22 de los corrientes, en que remite al Senado copia del que en el mismo día le dirigió el Ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia, haciéndole presente que, habiendo reunido por dos veces los Ministros que la componen para nombrar un Presidente provisional, conforme a lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica, no ha podido haber elección en razón de que aquellos que han sido considerados aptos para el desempeño de esas funciones se han negado, manifestando por excusa sus pocos conocimientos para tan ardua misión, y exponiendo terminantemente que en el caso de que la mayoría le nombre, inmediatamente harán sus renuncias de las funciones de Ministros; concluyendo el referido Ministro de Justicia, la imperiosa necesidad de que se proceda a nombrar Presidente a la Suprema Corte, para que no sufra retardo la administración de Justicia.

Discutida la materia, se acordó que el Senado se ocupará oportunamente en nombrar Presidente a dicha Corporación; pero que, mientras tanto, debe presidirla uno de los cuatro miembros de que actualmente está compuesta, y que el retardo que haya en la administración de Justicia, sólo puede serle imputable a los que no cumplen con la ley; porque la Corte no puede refundirse ni personificarse en sólo el Presidente, sin atender a la disposición legal, y que, en los casos de muerte, dimisión, destitución o impedimento temporal del Presidente, éste debe ser reemplazado por uno de los Ministros, y que si la elección resultare empatada, debe procederse a ella de nuevo, o que la suerte decida. Habiéndose acordado igualmente contestar al precitado Ministro de Justicia, con oficio político en forma, todo lo que arriba se expresa.

Se trató sobre preparar los trabajos legislativos para cuando llegue esa época tenerlos adelantados y que no se aglomeren. El Honorable Presidente nombró al Honorable Mesa para que se una a la Comisión nombrada para traducir y localizar los Códigos, a fin de que en la próxima Sesión legislativa, se presenten algunos trabajos de esa naturaleza.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 29 DE AGOSTO DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de Agosto de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Fran-

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

cisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

El orden del día prescribe la renovación del bufete por haber cumplido el anterior su período; y en acto continuo se verificó, dando por resultado que el mismo Honorable Bobadilla fuese electo para Presidente, para Vice-Presidente el Honorable Delmonte, y para Secretario el Honorable Bonilla; quedando pues instalado el bufete en el orden arriba indicado.

Se dió lectura a una representación de los vecinos de la Sección de Tavera, pidiendo se le agregue la Sección de Jarabacoa para acrecer su población; y se resolvió desestimarla, porque ya sobre tal concepto se ha acordado por lo conveniente. El Honorable Presidente pidió ser autorizado para comunicar al Gobierno dicha representación a los efectos oportunos; lo que se le acordó por el Senado.

Se dió lectura a un oficio del Honorable Vicente Antonio Reyes, por el que solicita se le prorrogue la licencia que tenía por habérsele ya cumplido, y se le acordó por todo el mes entrante de Setiembre.

Se trajo a la vista el oficio del Ministro de Hacienda, fecha 27 de los corrientes, en contestación al que se le dirigió el 26 del mismo, solicitando informes acerca de la queja producida por la Cámara de Cuentas con motivo de la comunicación que dicho Ministro la hiciera el 17, participándola que, o bien deben cumplir exactamente con sus deberes, o dar dimisión del cargo que desempeñan, que inmediatamente serán reemplazados.

Después de haber discutido largamente sobre la materia:

Atendiendo: a que, aunque los Ministros, como órganos del Poder Ejecutivo, están encargados de proveer a la ejecución de las leyes y demás providencias gubernativas, etc., etc., Art. 40 de la Constitución, estas facultades sólo pueden ejercerlas dentro del círculo que la ley determina;

Atendiendo: a que sólo el Senado es hábil para apreciar las quejas que se provocan contra la Cámara de Cuentas que está a la cabeza del Cuerpo administrativo, Art. 9 de la Ley de 2 de Mayo de 1855 sobre organización de la Cámara de Cuentas, y, por consiguiente la que produjo el Contador General debió habérsele pasado para haber examinado, si estaba en alguno de los casos en que trata el Art. 22 de la misma ley;

Atendiendo: a que el Contador General sólo se reduce a decir que ofició al Presidente de la Cámara de Cuentas al principiar la impresión del papel sellado para que mandase uno de sus miembros a que tomase cuenta, según el Art. 4 de la Ley sobre el papel sellado, y que ningún miembro había comparecido;

Atendiendo: a que el artículo ya citado, dice así, "que el sello de la Cámara de Cuentas será estampado al centro de cada pliego, dicha Cámara llevará cuenta en un Registro, archivado al efecto, del número de papel impreso con designación de cada clase por separado, como de los valores a que ascienda para arreglo y comprobante del examen de sus cuentas, y lejos de imponerle la obligación de que descienda la Cámara de su puesto para ir a la Contaduría General, obliga ésta a que mande con la debida cuenta y razón el papel sellado que se imprima a la Cámara para los efectos a que se contrae el referido artículo.

Por estos motivos y otros que se han tomado en consideración, el Senado declara: que los miembros de la Cámara de Cuentas no han cometido falta por no haber asistido a la Contaduría General a las operaciones del papel sellado, que éstas deben hacerse en su propio local para que la Cámara cumpla con las obligaciones que le impone la ley: que esta resolución se comunique al Ministro de Hacienda y a la Cámara de Cuentas para que no sufra atraso el servicio público.

Siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 1º DE SETIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a primero de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente, por enfermedad del titular; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior, fué sancionada, previa una ligera observación.

Se leyó un oficio dirigido por el Ministro de Hacienda, fecha 31 del mes expirado, por el que, en nombre del Poder Ejecutivo, consulta al Senado acerca de la oportunidad y conveniencia de abrir nuevamente al comercio extranjero los puertos de Samaná y Monte Cristi, este último tan sólo para la exportación, cerrados por Decreto del General Libertador, de fecha 18 de Diciembre del año expirado; y en atención a que, por el Art. 30 de la Ley de Hacienda, fecha 23 de Junio último, el puerto de Samaná está comprendido entre los que se declaran abiertos al comercio extranjero, y a que el mencionado Decreto fué dado, aunque sin expresarlo, en virtud del inciso 22 del Art. 35 de la Constitución, y con el objeto de asegurar el orden y la tranquilidad pública; como quiera que dicho artículo deja a la apreciación del Poder Ejecutivo la cesación de la necesidad que haya motivado las medidas excepcionales, tomadas en los casos previstos por el referido artículo, el Senado acordó manifestar al Poder Ejecutivo su conformidad con su opinión sobre la oportunidad de la medida propuesta.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 11 DE SETIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, el día once de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo la una del día, se reunieron en sesión extraordinaria los miembros del Senado Consultor, a saber: Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Pedro Pablo de Bonilla, Esteban Antolín de Mesa y Francisco Javier Abreu.

En virtud de un oficio del Ministro de lo Interior, Policía y Agricultura, en que hace presente que el Ejecutivo estima de suma importancia cerrar el puerto de Azua al comercio extranjero, para lo cual necesitaban el dictamen del Senado a la mayor brevedad; y después de haber discutido sobre el particular, se acordó contestar al referido Ministro que la opinión del Senado es que el Ejecutivo puede cerrar el puerto de Azua al comercio extranjero y nacional, ínterin duren las circunstancias políticas en que se encuentra aquella Ciudad; y en el acto se verificó la contestación por medio de oficio político en forma, y se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 22 DE SETIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y dos días del mes de Setiembre de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las dos de la tarde, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, com-

puesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; por enfermedad del titular; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

En este estado, se recibió y dió lectura a un oficio que el Ministro de lo Interior dirige al Senado en nombre del Poder Ejecutivo por el que consulta creé el Gobierno necesario extrañar del país a algunos individuos complicados en la insurrección originaria en la Ciudad de Azua, y que, por esta virtud, pide su acuerdo al Senado conforme a la Constitución. En consecuencia, se resolvió dicha consulta prestando el Senado su consentimiento para expulsar del país a los individuos a que se refiere el mencionado oficio, lo que fué contestado instantáneamente por nota oficial.

Igualmente se dió lectura a otro oficio del mismo Ministro, por el que invita al Senado para asistir a la Misa solemne que tendrá lugar el día 24 en el ex Convento de la Merced.

Y no habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 31 DE OCTUBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los treinta y un días del mes de Octubre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Felipe Dávila Fernández de Castro, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se dió lectura a un pliego dirigido por el Honorable Vicente Antonio Reyes, miembro de esta Corporación, que se halla en licencia en la Ciudad de Santiago, por el cual, en fecha 4 de los corrientes, dice que el día 20 de Setiembre estando ya dispuesto para pasar a esta Capital, le sucedió la desgracia de habérsele caído de las manos una pistola y descerrajando el tiro con que estaba cargada, le había herido con la bala en un muslo, desde cuyo tiempo estaba en cama, por cuya causa y aproximándose la reunión de los Colegios Electorales que deberán ocuparse de nombrar uno en su lugar por no ser más que provisional su encargo, pedía su dimisión antes que se le reemplace.

El Senado, tomando en consideración los justos motivos que ha tenido el Honorable Reyes para no haberse presentado a ocupar su puesto, a unanimidad acordó no admitirle la dimisión que hace, y sí prorrogarle la licencia por un mes más hasta el último día de Noviembre para que pueda restablecer su salud, y que se le haga la debida contestación.

Dióse lectura de un oficio del Ministro de lo Interior en que remite al Senado un mapa charolado de esta Isla, para que sea colocado en la sala del Senado, y se acordó acusarle el correspondiente recibo.

La Cámara de Cuentas ofició al Senado con fecha 29 del corriente, haciéndole presente que, aunque el Señor Luís Durocher fué nombrado miembro de aquella Cámara, no se había presentado en ella, y que la presencia de todos los miembros se hacía indispensable para el pronto despacho de las cuentas de que se ocupa la Cámara, y habiendo conferenciado sobre el particular, quedó resuelto reemplazar al referido Durocher, y se procedió en seguida a nombrar otro en su lugar, habiendo resultado nombrado a unanimidad el Señor Pablo Antonio Lajara, a quien se le despachó título en forma, comunicándole el nombramiento por oficio político en forma.

Se dió lectura a una solicitud fecha 27 del corriente en que el Señor José Salado y Mota, Presidente accidental de la Suprema Corte de Justicia, dimisiona del referido encargo de Presidente, en razón a que sus débiles y escasos conocimientos y el tener hijos en la minoridad, huérfanos de madre, no le permite desempeñar aquellas funciones, y se resolvió contestarle que debe ocurrir para dicha renuncia al Supremo Tribunal que le nombró.

También se leyó otra nota oficial del Poder Ejecutivo que dice así. (aquí la carta.) (*) Se discutió detenidamente sobre el particular, y quedó resuelto contestar al Ejecutivo que el Senado aprecia los sentimientos que manifiesta en la referida nota oficial y que se ocuparía activamente en la reorganización de la Suprema Corte, para que no haya ningún embarazo en la administración de Justicia, sin embargo de que, habiendo cuatro Jueces titulares, hay el número suficiente para despachar cualquiera causas que se presenten en aquel Superior Tribunal.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se reunió el Senado Consultor en presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

(*) Omitida en el original.

Se leyó el acta de la última sesión y quedó sancionada.

El Honorable Presidente sometió a la consideración del Senado una nota oficial de S. E. el Presidente de la República, fecha 3 de los corrientes, la cual está concebida en éstos términos.

(Aquí la Carta)... (*).

Y habiéndose tomado en consideración su contenido, se acordó contestarle como sigue: (Aquí la contestación)... (*)

También el referido Presidente sometió al Senado un oficio del Ministro de lo Interior y Policía en que dice que, deseando S. E. el Presidente de la República indultar a Ezequiel Medina en virtud de las facultades que le confiere la Constitución, solicitaba, como ésta lo requiere, el acuerdo del Senado, y habiéndose discutido lo conveniente sobre el particular, no acompañando dicho oficio la sentencia de Medina, ni indicando siquiera cuál ha sido su delito ni la pena que se le ha aplicado, se resolvió contestar al dicho Ministro que el Senado no conoce el delito ni la pena que se le ha aplicado al dicho Medina, pero que si su delito es de aquellos que se pueden indultar conforme a la Constitución, el Senado, desde luego, presta su acuerdo a la gracia que el Poder Ejecutivo quiera hacerle.

Y siendo avanzada la hora, se suspendió la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los catorce días del mes de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año

(*) Omitida en el original y en la "Gaceta Oficial".

16º de la Patria, siendo las diez de la mañana, se reunieron los Honorables miembros del Senado Consultor, compuesto de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Esteban Antolín de Mesa y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la sesión anterior y quedó aprobada.

El Señor Felipe Dávila Fernández de Castro dirigió al Senado un oficio en que pone en su conocimiento que, habiendo sido nombrado por el Poder Ejecutivo Ministro Secretario de Estado en los Despachos de lo Interior, Policía y Agricultura, con profundo sentimiento se veía en el caso de anunciarle al Senado que ya no hacía parte de la Corporación, y se acordó contestarle haciéndole las más sinceras felicitaciones, no dudando que en su nuevo destino ejercerá en favor de la Patria la misma actividad, celo y buenos sentimientos que manifestó en el Senado y que lo hicieron acreedor a su más distinguido aprecio.

Se abrieron dos oficios: uno del Señor José Román y otro del Señor José Salado y Mota, en que hacen renuncia de los empleos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia. El Honorable Presidente hizo traer a la vista la nota oficial del Excmo. Señor Presidente de la República en que pone en conocimiento del Senado el mal estado en que se encuentra la administración de Justicia, por los entorpecimientos que se notan en la Suprema Corte, y el Honorable Presidente añadió que era de imperiosa necesidad tomar medidas para reformar la referida Corte y dar sobre este negocio una resolución definitiva.

Se suscitaron diferentes cuestiones, y el Honorable Abreu propuso que, para obviar dificultades de grande trascendencia, le parecía lo más conveniente que el Senado se acercase al Poder Ejecutivo para obrar de acuerdo con él en la reorganización de la Corte o en las medidas que hayan de tomarse para remover todos los inconvenientes que puedan obstruir el curso de la buena y pronta administración de

Justicia; esta proposición fué adoptada y quedó convenido que el Senado se reuniría el día de mañana a las doce en punto, para trasladarse al Palacio de Gobierno para la conferencia indicada.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y siete días del mes de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las diez de la mañana se reunieron en el Palacio Nacional los Honorables miembros del Senado Consultor, a saber: Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Esteban Antolín de Mesa y Pedro Pablo de Bonilla.

Leyóse el acta de la sesión anterior y quedó sancionada.

Se sometió a conocimiento del Senado una exposición del Señor Luis Dujarric, Comandante del Resguardo de este puerto, fecha 15 del corriente, en que hace presente que, en cumplimiento de su deber, había apresado varios efectos traídos de Puerto Plata en la goleta nacional *Carmen*, que no venían en el manifiesto de su despacho y que, después de haberlos declarado confiscables, el Tribunal de Primera Instancia de este Distrito judicial se apeló de la sentencia por ante la Suprema Corte de Justicia, quien declaró nulo el contrabando, por lo que creía que no sólo se faltaba a la ley, sino que se irrogaban perjuicios al Fisco, por lo que suplicaba al Senado diese su fallo sobre tan importante materia.

República Dominicana BIBLIOTECA DEL CONGRESO AGN

Sometido el asunto a discusión y considerando que los Poderes del Estado son independientes y se ejercen separadamente, que siendo soberanas las sentencias de la Suprema Corte, se deben llevar a ejecución, y en el caso de que los Jueces estén sujetos a una responsabilidad, ésta debe hacerse efectiva por los trámites que la ley tiene establecidos.

El Honorable Presidente, encontrándose quebrantado de salud, pidió retirarse y que lo reemplazase el Vice-Presidente; así se hizo y continuó la sesión.

Se procedió en seguida a nombrar un Presidente para la Suprema Corte de Justicia, y resultó electo a unanimidad, por escrutinio, el Señor Juan Nepomuceno Tejera y se acordó despacharle título en forma para que pueda ejercer sus funciones.

El Senado acordó también no admitirle por ahora a los Señores José Salado y José Román las dimisiones que han dado de Jueces Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El Honorable Bonilla solicitó del Senado una licencia por quince días para poder pasar a Baní a restablecer su salud, y le fué concedida, debiendo estar de regreso en esta Capital el día 1º del mes de Diciembre entrante.

Siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veintiocho días del mes de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las diez de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín

Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior y modificada conforme a una observación del Honorable Abreu, quedó sancionada.

Se leyó un oficio del Señor Ministro de Justicia por el que pasaba en consulta al Senado una representación de los Señores Benigno Filomeno de Rojas, P. F. Bonó, Vicente Morel y M. A. Rojas, Defensores públicos del Distrito judicial del Cibao, la que se tomó en consideración y quedó aplazada para la próxima sesión.

Después se leyó un oficio de la Cámara de Cuentas, por el que pedía el dictado del Senado sobre la conducta administrativa de algunos empleados del ramo de Hacienda, y le sometía al mismo tiempo los documentos cuyo examen debía servir de base al parecer del Senado sobre esta materia.

Se decidió a unanimidad que los dichos documentos fuesen devueltos a la Cámara de Cuentas, diciéndole que en este caso debía ceñir su proceder a lo que prescriben las leyes, no pudiendo el Senado anticipar opinión ninguna sobre materia que por ahora no es de su incumbencia.

El Honorable Presidente hizo presente que el día de ayer se había cumplido el trimestre en que debía renovarse el bufete por haber cumplido su tiempo los nombrados, según lo dispuesto por los Reglamentos interiores de la Corporación, y habiéndose procedido a nueva elección, por escrutinio secreto en la forma de costumbre, uno después de otro, resultaron nombrados para Presidente, el Honorable Bobadilla, para Vice-Presidente, el Honorable Manuel Joaquín Delmonte, y para Secretario, el Honorable Pedro Bonilla, quienes quedaron instalados en el ejercicio de sus funciones respectivas.

Y no ocurriendo otra cosa, se declaró cerrada la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los tres días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las diez de la mañana, se reunió el Senado Consultor con presencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Esteban Antolín de Mesa y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura del acta de la última sesión y quedó sancionada.

Se trajo a la vista la nota oficial del Señor Ministro de Justicia del 17 del corriente en que sometió al Senado la consulta que le hacen los Defensores públicos del Distrito judicial del Cibao, Señores Benigno Filomeno de Rojas, Vicente Morel, Pedro F. Bonó y M. A. Rojas, pidiendo aclaraciones sobre la adopción de los Códigos franceses, y manifestando el Ministro que es de suma importancia interpretar con todo el acierto y exactitud posible el Decreto que expedió el Congreso Nacional poniendo en vigor los Códigos de la Restauración, para hacer cesar las dificultades que existen sobre el particular, cuyo negocio quedó aplazado para este día.

Vista la consulta a que se refiere la nota oficial de que se hace mención, concebida en estos términos:

"Desde que el Honorable Congreso Constituyente de San Cristóbal puso en vigor los Códigos franceses de la Restauración como los que debían regir en la República, en la aplicación práctica de entonces acá, ha habido en nuestros Tribunales contrariedad de intepretaciones sobre tan importante materia, entendiendo unos que debía extenderse el referido Decreto en su "literal sentido" y que sólo los pequeños Códigos del año 1815 regían en la República, mientras que en otras ocasiones, y por lo general, se admitían y se decidían las cuestiones

por los Códigos franceses, según los textos de las ediciones más modernas, alcanzando las que se han usado principalmente en estas Provincias hasta el año 1847.

Ninguna dificultad se ha presentado sobre tan importante materia desde el año 1850 hasta el actual, porque durante aquel año la Suprema Corte en un muy luminoso dictamen, surgido de una apelación llevada a aquella Superioridad por un litis entre dos agricultores de esta Común, llamados el uno Sosa y el otro Vargas, sobre la aplicación del Código Rural, en la cuestión entre dichas partes, decidió que debía entenderse que regían en nuestra República los Códigos de la Restauración con los que posteriormente se habían agregado y con las modificaciones subsecuentes que aquéllos habían sufrido.

En el año actual, la misma Suprema Corte ha decidido en la cuestión de los Señores Verrón y Alfau que sólo los Códigos de la Restauración están, en vigor, sin ninguna otra de las leyes o modificaciones subsecuentes.

Esta disposición haría inferir que el divorcio es permitido y que ninguna de las leyes posteriores al año de 1815, como la de 17 de Mayo de 1819, sobre la represión de crímenes y delitos cometidos por medio de la prensa que ha sustituído los artículos 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377 del Código Penal de 9 de Noviembre de 1815, queda abolida.

La contrariedad de estas dos disposiciones, ha dado margen a que estos Tribunales se guíen unas veces severamente por el pequeño texto de 1815, y que en otras adopten las disposiciones de los Códigos franceses más modernos, según los cuales la tramitación sigue un orden distinto, y la numeración de los artículos en vigor es algo diferente, produciendo la falta de adopción uniforme de un mismo texto para la aplicación de la ley, innumerables complicaciones en la práctica forense y perjuicios considerables y constantes a las partes.

En semejante conflicto, los que suscriben han creído de su deber dirigirse a V. E. para que se sirva provocar por la autoridad competente una decisión que ponga término a la mayor brevedad posible a tan perjudicial conflicto".

Visto el Decreto del Congreso Nacional de 4 de Julio de 1845 que dice: "Art. 1º Desde la publicación del presente Decreto se observará en todos los Tribunales de la República Dominicana los Códigos franceses de la Restauración con las modificaciones que contiene la Ley

Orgánica para los Tribunales de ella. Art. 2º Todos los Tribunales de la República arreglarán a esa legislación sus actos y decisiones, siempre que no se opongan ni a la Ley Fundamental ni a las leyes dominicanas en vigor, sin que puedan valerse de otra alguna hasta nueva disposición".

Vista la Constitución promulgada en Francia en 7 de Agosto de 1814 y el Art. 59 de ella en que pone en vigor el Código Civil y las leyes existentes hasta que fueran legalmente derogadas.

Visto el Art. 26 de la Constitución, inciso 8º, que atribuye al Senado la facultad de resolver las cuestiones o dificultades de Derecho público que sobrevengan en la marcha de los negocios, interpretar y explicar las Leyes en caso de duda u oscuridad.

El Senado, a unanimidad, resuelve que los Códigos puestos en vigor por el Congreso Nacional son: El Código Civil, el de Comercio, el de Procedimientos Civiles, el de Instrucción Criminal y el Código Penal que se adoptaron y reformaron en la Restauración francesa de 1814 con todas sus modificaciones, adiciones y alteraciones que han tenido y que aparecen de las diferentes impresiones o ediciones que se han hecho legalmente de los referidos Códigos desde aquella época hasta el 4 de Julio de 1845, en que fué aquella legislación adoptada de lleno en la República, en todo lo que no se oponga a la Ley Fundamental ni a las leyes patrias en vigor. Se declara que cualquiera otra disposición posterior al 4 de Julio de 1845 que puedan contener los referidos Códigos no será en manera alguna ejecutoriable en la República, y que todos los Tribunales de ella deben conformarse a las presentes disposiciones y aclaraciones hasta que otra cosa se determine.

Que de esta resolución se remita copia al Ministro de Justicia para los fines convenientes.

Y siendo la hora avanzada se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 19 días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa, habiéndose legitimado la inasistencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte, VicePresidente, por hallarse enfermo, según lo participa al Honorable Presidente en una nota que le dirigió.

En esta virtud, el Honorable Presidente dió conocimiento a los demás Senadores del oficio que con fecha 16 del presente mes dirigiera el Ministro de lo Interior y Policía, encargado de las Relaciones Exteriores, por el que le comunica el Decreto dado por el Poder Ejecutivo y promulgado el día anterior convocando al Senado Consultor en Sesión legislativa extraordinaria, con el fin de someterle el Protocolo firmado por el Ministro y los Cónsules de S. S. M.M. el Emperador de los franceses y las Reinas de Inglaterra y España; y para que al mismo tiempo conozca y legisle sobre los recursos que deben creársele a la Nación, con otras medidas que sean necesarias a la conveniencia pública.

Discutida la materia y vista la urgencia prescrita en el referido Decreto, quedó el Senado constituído en Sesión legislativa extraordinaria, y se acordó participarle al Poder Ejecutivo, por medio del mismo Ministro, que estando abierta la Sesión esperaba se le hiciesen las comunicaciones convenientes, porque está dispuesto a cooperar con los buenos deseos del Poder Ejecutivo.

Se acordó también se oficiase al mencionado Ministro para que dirigiese las competentes notas a quienes co-

rresponda, con el objeto de que los Senadores que faltan de las Provincias del Cibao y Santa Cruz del Seibo y que ya han debido ser electos el primer Lunes del mes cursante, se presenten inmediatamente a ocupar sus destinos, porque hallándose el Senado en mayoría estricta, puede ocurrir la paralización de los trabajos a que está llamado, si alguno de los miembros presentes se enferma o no puede asistir por otro impedimento legítimo.

Se resolvió que las sesiones fuesen diarias, y las reuniones a la hora de costumbre, hasta que terminen las tareas para que ha sido convocado; y siendo la hora avanzada se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro Pablo de Bonilla.*

SESION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veintiún días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

Acto continuo se procedió a dar lectura a una nota oficial dirigida al Senado por el Poder Ejecutivo, cuyo tenor es como sigue:

Aquí la nota..... (*)

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 13.

Igualmente se dió lectura a otro oficio dirigido por el Ministro encargado de las Relaciones Exteriores, de fecha 19 de los corrientes, por medio del cual acompaña el Protocolo ajustado y concluído el día 13 del mismo mes entre el Gobierno de la República y los de S.S. M.M. el Emperador de los franceses y las Reinas de la Gran Bretaña y de España, por el que queda arreglada amistosamente la cuestión que se hallaba pendiente entre el Gobierno Dominicano y los de las expresadas naciones, sobre la amortización del papel moneda emitido por la Administración del ex Presidente Báez.

Se tomó en consideración dicho Protocolo, y en esta virtud se acordó aplazar para mañana su primera lectura constitucional, la 2ª el Sábado 24, y la última el Lunes 26 de los corrientes.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veintidós días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

Se trajo a la vista la orden del día, y prescribiendo la 1ª lectura constitucional del Protocolo ajustado entre el Ga-

binete Dominicano y los Cónsules de S.S. M.M. el Emperador de los franceses y las Reinas de la Gran Bretaña y España, se procedió a ella, y no habiéndosele hecho ninguna observación, se levantó la sesión, siendo la hora avanzada.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 23 días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior, y fué aprobada y sancionada.

Se procedió a dar lectura a un oficio, fecha 22 del actual, dirigido por el Ministro de Hacienda y Comercio, concebido en estos términos:

Señor Presidente: Tengo el honor de remitir a V. S. los adjuntos proyectos de Ley acordados en Consejo de Ministros, a fin de que V. S. tenga a bien hacer que el Senado llene con ellos las formas constitucionales. Saludo a V. S., etc.

El Senado Consultor acordó a unanimidad devolver al referido Ministro dicha nota y proyectos de decretos, para que, si lo tiene por conveniente, haga el envío conforme a la Constitución. Y no habiendo otro particular de que ocuparse, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinticuatro días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve y 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior, la que fué aprobada y sancionada.

Conforme a la orden del día, se procedió a dar la 2ª lectura constitucional al Protocolo ajustado y convenido entre el Ministro de Relaciones Exteriores de la República y los Cónsules de S.S. M.M. el Emperador de los franceses y las Reinas de la Gran Bretaña y de España, y pasó sin habérsele hecho ninguna observación.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y seis días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor, con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla,

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

La orden del día prescribe la última lectura del Protocolo ajustado y concertado entre el Ministro de Relaciones Exteriores y los Cónsules de S.S. M.M. el Emperador de los franceses y las Reinas de la Gran Bretaña y España y, en consecuencia, se procedió a la consabida lectura constitucional, y artículo por artículo fueron sancionados unos después de otros y en seguida el conjunto del sobredicho Protocolo, habiéndose acordado formular en la primera sesión el proyecto de decreto de su aprobación para remitirlo al Poder Ejecutivo; a fin de que produzca todos los efectos legales; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada y sancionada.

El orden del día traía la redacción del proyecto de decreto que aprueba el Protocolo concluído entre el Ministro de Relaciones Exteriores de la República y los Cónsules de

S.S. M.M. el Emperador de los franceses y las Reinas de Inglaterra y España, el mismo que fué sancionado en la última sesión y revestido de las formas constitucionales; y habiéndolo formulado el Honorable Presidente, se sometió a discusión, y después de algunas ligeras modificaciones quedó aprobado del modo siguiente. (*)

Y se acordó remitirlo al Poder Ejecutivo con oficio político en forma, para los fines constitucionales.

Con lo cual y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu. Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los treinta días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada y sancionada.

Se dió cuenta al Senado de un oficio dirigido por el Ministro de lo Interior, con fecha de ayer, por el que remite el acta del Colegio Electoral de la Provincia de Santiago de los Caballeros, resultando electos para Senadores los Señores Melitón Valverde y Pedro Dubocq.

(*) Omitido en el original. Ver Colección de Leyes, 1859, doc. Nº 633.

También acompaña una lista de los individuos aptos para desempeñar funciones judiciales de aquel Distrito, y se acordó hacer presente al referido Ministro que aquel Colegio Electoral no se ha ajustado a las disposiciones de los Arts. 15, inciso 4º, al 45 y 47 del Pacto Fundamental, que prescriben el modo con que han de formularse dichas listas y las calidades que han de tener los enunciados individuos para poder ser nombrados Jueces, a fin de que en lo sucesivo se tomen providencias convenientes, para que los Colegios Electorales cumplan precisamente con el texto de la Constitución.

Se dió igualmente lectura a otro oficio del mismo Ministro, por el que remite en nombre del Poder Ejecutivo un proyecto de ley relativo a una nueva emisión de billetes del Tesoro público hasta la cantidad de cincuenta mil pesos fuertes, garantidos por el Estado, como signo representativo de la moneda fuerte. En consecuencia, el sobredicho proyecto de ley fué tomado en consideración y se acordó proceder a su 1ª lectura constitucional el día de mañana; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1859

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los treinta y un días del mes de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

Prescribiendo la orden del día la primera lectura constitucional del proyecto de ley sobre nueva emisión de billetes del Tesoro público hasta la cantidad de cincuenta mil pesos fuertes garantizados por el Estado, se procedió a ella y pasó sin ninguna observación, y se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

AGN

SESIONES DEL
SENADO CONSULTOR
1860

SESION DEL 2 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los dos días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

Se procedió a dar la 2ª lectura al proyecto de ley sobre una nueva emisión de billetes del Tesoro público hasta la cantidad de cincuenta mil pesos fuertes, distribuyendo sus valores en billetes de uno, cinco, diez y veinte pesos fuertes garantidos por el Estado, y pasó sin ninguna observación.

Se leyó un oficio del día 30 del pasado dirigido por el Ministro de Hacienda y Comercio, por el cual acompaña tres proyectos de leyes; el 1º sobre reformas de los aranceles de importación y exportación, y quedó tomado en consideración.

El 2º es para que se declare como unidad monetaria para la República el peso fuerte de a ocho reales de plata, e igualmente tomado en consideración.

Y el 3º es para que se revoque el Decreto de 16 de Agosto de 1858, que establece comisiones mensuales para

fijar el cambio entre la moneda fuerte y la nacional; también se tomó en consideración; pero quedó aplazada su discusión para cuando el Senado se encuentre con todos sus miembros presentes.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 3 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los tres días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada y sancionada.

Se dió la 1ª lectura al proyecto de ley que reforma la de aranceles de importación y exportación, y después de habérsele hecho algunas observaciones, quedó aplazada su segunda lectura para una de las próximas sesiones.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bonilla.*

SESION DEL 4 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cuatro días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada y sancionada.

Conforme al orden del día, sufrió la 1ª lectura constitucional el proyecto de ley que fija como unidad monetaria para la República el peso fuerte de a ocho reales de plata y pasó sin ninguna observación.

El Honorable Presidente manifestó al Senado que, debiendo procederse a la discusión y sanción del proyecto de decreto sobre la emisión de billetes del Tesoro público hasta la cantidad de cincuenta mil pesos fuertes, era de sentir que se llamase al seno del Senado al Ministerio para que tomase parte en la discusión; todos los Honorables Senadores asintieron a lo propuesto por el Honorable Presidente.

En consecuencia, fué invitado el Ministerio y se presentó el Ministro de lo Interior y Policía, a nombre de sus colegas, para ser oído como órgano del Gobierno.

Acto continuo principió la discusión del proyecto de decreto y al Art. 2º se le hicieron algunas enmiendas, en cuyo estado el Honorable Presidente dijo que estaba muy persuadido de la necesidad en que se encontraba el Gobierno de poner un remedio a las exigencias actuales; pero que tenía que hacer dos observaciones de grande importancia.

La 1ª es que el decreto afecta la emisión de billetes a toda especie de pagos de derechos, y en su opinión deben

exceptuarse los derechos de puerto que siempre se han pagado en moneda fuerte y con los cuales ha atendido el Gobierno a su compromiso en el extranjero, y aun para las frecuentes necesidades interiores. Hoy mismo tiene precisión de recurrir a varios desembolsos que han de hacerse en lo que va el crédito de la Nación; ¿y cómo podría cubrirse sin ninguna entrada en moneda fuerte? Por tanto, yo estoy porque el decreto exceptúe los derechos de puerto.

En cuanto a la 2ª observación, si el decreto dijera que los derechos de importación y exportación se pagaran en moneda fuerte o precisamente en los billetes que han de emitirse, exceptuando los derechos de puerto, sería un bien que favorecería al mismo Gobierno y al comerciante; sería también una garantía para ese mismo papel moneda, y se evitaría toda dificultad sobre la manera con que debe periódicamente fijarse el valor de la moneda metálica para la percepción de los derechos de Aduana; pero es muy de temer que la promesa del Gobierno no sea obligatoria sino para él, quedando los billetes como moneda fuerte, esté en la obligación de recogerlos como tal, sin poder evitar los efectos del agio; porque toda moneda papel que no pueda reembolsarse a voluntad, no representa realmente, según la opinión de los mejores economistas, ningún valor, porque ningún poder ni elocuencia humana pueden hacer que varíen la esencia y naturaleza de las cosas. El oro es oro, la plata es plata, y el papel sin ninguna garantía efectiva y sin la certeza de cambio, no tiene sino un valor ilusorio.

En consecuencia, si el decreto no se modifica, como he propuesto, salvo mi voto, y no estoy por el dicho decreto de ninguna manera.

El Ministro de lo Interior, en representación del Gobierno y en contestación a las objeciones que hace el Señor Presidente del Senado, dijo: Dos son, Señores, las observaciones que hace el Honorable Senador que me ha precedido en el uso de la palabra; y la autoridad que les da la ilustración de su sostenedor no me permite pasarlas en si-

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

lencio; pero séame lícito invertir el orden en que S. S. las ha hecho, porque exige la importancia de la última que sea contestada antes que la primera.

Sienta S. S. un principio en que todos estamos de acuerdo. "El oro es oro, dice S. S., la plata es plata, y el papel sin ninguna garantía efectiva, y sin la certeza del cambio, no tiene sino un valor ilusorio". Más podemos decir: no tiene valor ninguno. Pero si todos estamos de acuerdo en cuanto a ese principio, no podemos estarlo en cuanto a la aplicación que se hace de él a la emisión de los billetes del Tesoro que hoy propone el Gobierno. ¿Es cierto que para esos billetes no habrá una garantía efectiva; que sus poseedores no tendrán la certeza del cambio; que sus tenedores, en fin, no poseerán más que un valor ilusorio? El que tiene el honor de dirigirse al Senado, preguntará a su vez al Honorable Señor preopinante: ¿Será por ventura una mentira el Art. 3º del proyecto, luego que esté convertido en ley y no podrán cambiarse esos billetes por una suma doce veces mayor representada por los pagos que se hacen al Estado en el término de un año? ¿Es acaso que no se recibirán los mismos billetes por el Estado en pago de las obligaciones que se contraigan con él, y que, en el curso ordinario de los negocios, representan, en un solo mes, la suma que va a emitirse? ¿No garantiza este cambio el Gobierno en el proyecto que presenta? ¿No lo garantiza el Senado si lo aprueba? ¿No lo garantiza, en fin, el crédito de la Nación entera, si los poderes constituídos se han obligado para ello? ¿Cómo, pues, decir que carece de garantía?

El Gobierno propone hoy la emisión de un papel que él acepta en cambio de un valor real y verdadero, de tanta cuantía como el oro; pues es oro lo que representa. El Estado cobra derechos que no se le pueden pagar sino en oro o plata. ¿No es, pues, ésto equivalente a dar de antemano los recibos de ese oro o plata que se había de pagar? Y el recibo del oro ¿qué es, sino oro? El recibo que representa plata, ¿qué es, sino plata?

Bien lo reconoce S. S. cuando dice en su 1ª observación que se opone a la aprobación del proyecto porque el Estado tiene que llenar obligación en moneda fuerte, y que adoptado aquél no podría cumplir esas obligaciones. No porque esta observación adolezca de inexactitud en cuanto al fondo, deja de contener el pensamiento de que el oro y la plata que habríamos de recibir se convertirá en billetes; o, lo que es lo mismo, que los billetes del Tesoro representarán oro o plata: vea, pues, S. S., como su aserto está contradicho por S. S. mismo.

Acabo de indicar que la observación a que me he referido contiene una inexactitud en el fondo, y voy a demostrarlo.

Dice el Honorable Senador que tenemos obligaciones que satisfacer en moneda fuerte y no podremos cumplirlas si emitimos los referidos billetes. ¿Pues qué, acaso vamos a regalarlos? Si lo emitimos es para llenar esas obligaciones. Ni el Gobierno hace, ni puede ni debe hacer en metálico remesas al extranjero. Para el cumplimiento de esas obligaciones hace lo que el comercio: busca giros; y como el comercio, también hallará letras en cambio de su papel. Ese comercio compra hoy todo lo que importa con moneda fuerte; no obstante el que todo lo vende por el papel moneda corriente. Si, pues, el comercio puede obtener giros en cambio de un papel que el Gobierno le recibe en pago de sus obligaciones contraídas en moneda fuerte, ¿con cuánta más razón no se obtendría con el papel privilegiado que tratamos de emitir?

Propone por último S. S. que no se reciban los billetes del Tesoro que proponemos en pago de los derechos reservados a la moneda fuerte; y como S. S. comprende muy bien que ésto reduciría los tales billetes a la clase de papel moneda actual, imagina reclamar para ellos el privilegio de que sea exclusivamente con ellos que puedan pagarse los derechos de importación y exportación. Sin duda que hago mal en combatir ese pensamiento, porque no puede ser el de S.

S. y que sólo en el calor de la improvisación pudo escapársele. El Gobierno preferiría mil veces retirar el proyecto y privar al país de sus ventajas antes que exponerlo a las calamidades a que lo sujeta la enmienda que propone S. S. ¿Para qué serviría el papel existente si el Gobierno se negara a recibirlo en pago de los derechos de importación, único caso en que lo admite? ¿A qué valor quedaría reducido? ¿Cuál no sería su descrédito? ¿Cuántas, en fin, las reclamaciones que sobre nosotros caerían de todas partes?

Quede, pues, sentado, que el papel que se propone emitir tendrá sobrada garantía con la sanción de los Poderes del Estado llamados a dársela, y con el crédito de la Nación misma; que podrá cambiarse por el oro o plata que haya menester el comercio para satisfacer una obligación, apremiante hoy; y que por último la cantidad que se emite representa apenas.....de la República que percibe de renta en treinta días.

De la misma opinión fueron los Honorables Delmonte, Abreu y Mesa, habiendo deducido algunas razones en apoyo.

El Honorable Presidente manifestó que sentía mucho ser de contraria opinión a la de sus Honorables colegas y a la del Ministro presente, órgano del Gobierno para sostener el proyecto de decreto sometido al Senado. Que considera de más deducir la infinidad de razones que hay para probar que la principal cualidad que ha de tener todo papel moneda para que no desmerezca en su valor, es la de poderse convertir a voluntad y cuando uno quiera, sin descuento, en moneda metálica, porque cual que sea la garantía que se dé a los billetes, ésto no les da la propiedad de reemplazarlos por la moneda metálica que tiene un valor intrínseco universalmente conocido y que, por lo tanto, se acomoda a los usos necesarios en la vida social; que además cree que los tales billetes perjudicarán los intereses de la Nación, porque sufrirán precisamente un descuento, y el Gobierno contrae la obligación de darlos y recibirlos como moneda fuerte, y el tal descuento perjudicará también a los empleados y

demás individuos de la población, excepto un pequeño número que será beneficiado. Que, además, por una módica suma va a privársele al Gobierno de la única entrada que tiene en moneda fuerte, tan precisa y necesaria como lo es la de los derechos de puerto; por lo que sería menos gravoso hacer papeletas para reemplazar siquiera las que se han quemado, y socorrer las necesidades actuales del Erario público.

Que no obstante todo ésto, y cuanto más pudiera decir en apoyo de los principios que sirven de base a las grandes teorías de papel moneda, principios que son verdades eternas, sancionados por el tiempo y la experiencia de todas las naciones, y por lo que pasa entre nosotros mismos, si por uno de aquellos acasos que son superiores en el orden de la naturaleza, los billetes que se van a emitir conservaren su valor y se cambiaren a la par de los pesos fuertes, y no atraigan los principios que se recela, se dará por muy satisfecho y reconocerá su error, pero que cree que es de su deber y de sus propias convicciones, no prestar su consentimiento a la sanción de la ley tal como está, por lo que repite que salva su voto.

En consecuencia, continuóse la discusión, artículo por artículo, uno después de otro, y fueron sucesivamente sancionados por la mayoría de los Senadores, excepto el Honorable Presidente, que se reservó su voto.

Después se le dió lectura íntegra al conjunto del decreto, y fué también aprobado como sigue:

(Aquí el Decreto) (*)

Y se acordó que fuese remitido con oficio político en forma al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

(*) Omitido en el original. Véase Colec. de Leyes 1860, doc. Nº 634.

SESION DEL 5 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cinco días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

En este estado, se presentó el Señor Melitón Valverde, Senador electo por la Provincia de Santiago de los Caballeros y exhibió los poderes que justifican su nombramiento, los que habiendo sido verificados y encontrándose en buena y debida forma, el Honorable Presidente le recibió el juramento constitucional y quedó instalado en el ejercicio de sus funciones.

Se procedió en seguida a dar la 2ª lectura al proyecto de ley que reforma la de Aranceles de exportación e importación, y pasó sin habérsele hecho ninguna observación.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco X. Abreu.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 7 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los siete días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Pa-

tria, siendo las nueve de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Presidente interino por enfermedad del Honorable Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Francisco Javier Abreu, Esteban Antolín de Mesa y Melitón Valverde.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada y sancionada.

El orden del día prescribe la 2ª lectura del proyecto de ley que fija como unidad monetaria para la República el peso de a ocho reales de plata, y en seguida se procedió a dicha lectura y pasó sin ninguna observación; y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Melitón Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 10 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente, en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada y sancionada.

El orden del día prescribe la discusión del proyecto de decreto que fija como unidad monetaria para la República el peso de a ocho reales de plata.

Abierta la discusión, el Honorable Presidente dijo que, en atención a que este decreto se halla en oposición con el que sancionó el Senado en 23 de Junio del año expirado sobre

reforma del sistema monetario, y que quedó en receso para discutirlo de nuevo junto con el Poder Ejecutivo, en la próxima Sesión legislativa, como lo previene el Art. 23 de la Constitución, era de opinión de que se aplazase su discusión hasta el resultado definitivo de aquel decreto; y así quedó acordado a unanimidad.

Se dió lectura a un oficio del Honorable Presidente Tomás Bobadilla, por el que solicita una licencia por un mes para dedicarse a la curación de los males de que adolece, y se acordó concedérsela por el expresado término.

Y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 16 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y seis días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Esteban Antolín de Mesa y Melitón Valverde.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

El orden del día prescribe la discusión de la Ley que reforma la de Aranceles del mes de Junio de 1855.

En consecuencia, principió la discusión, artículo por artículo, y después de algunas enmiendas quedaron aprobados, y en seguida sancionado el conjunto de la Ley.

Se pasó a la discusión del Arancel, y previas algunas observaciones y modificaciones, se suspendió en la letra B., por ser la hora avanzada, y se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 18 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los dieciocho días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente en funciones de Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Esteban Antolín de Mesa y Melitón Valverde.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

Según la orden del día, prosiguió la discusión del Arancel de importación, que quedó pendiente el día de ayer en la letra B., y habiendo llegado a la V., previas varias enmiendas, se suspendió por ser la hora avanzada y quedó aplazada la continuación para mañana; con lo cual se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Melitón Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 20 DE ENERO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de Enero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, siendo las once de la mañana, se abrió la sesión del Senado Consultor en presencia de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Esteban Antolín de Mesa.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada y sancionada.

Conforme al orden del día, se continuó la discusión sobre los Aranceles, que quedó pendiente en la letra V., y después de varias modificaciones y enmiendas fué aprobado y sancionado el Arancel de importación.

El de exportación sufrió igualmente diversas alteraciones y modificaciones, con adición de algunos artículos no contenidos en el que se discutía; y finalmente se aprobó y fué sancionado.

Terminado esto, se acordó remitir al Poder Ejecutivo la Ley de Aranceles reformados para los fines que la Constitución prescribe, y en este punto el Honorable Presidente cerró la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 7 DE FEBRERO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, a los siete días del mes de Febrero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor reunida la mayoría, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín

Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla.

El acta de la sesión anterior fué aprobada y sancionada.

Presentóse el Honorable Rafael Pérez, Senador electo por la Provincia de Santa Cruz del Seibo, y después que fueron verificados sus poderes y encontrados en debida forma, prestó el juramento constitucional, y fué instalado.

Se dió lectura a un oficio del Honorable Esteban Antolín de Mesa, por medio del cual participa al Senado su retiro del puesto que ocupaba, pues había llegado y debía instalarse ese mismo día el nuevo elegido por la Provincia a quien representaba, y al despedirse da las gracias a los Honorables Senadores por la confianza y el honor que le habían concedido al elegirle.

A propuesta del Honorable Presidente se procedió al nombramiento del Secretario archivista del Senado; y fué electo el Señor Juan Bautista Zafra, con lo cual se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 13 DE FEBRERO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los trece días del mes de Febrero de mil ochocientos sesenta, año 16º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor en presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada unánimemente.

AGN

BIBLIOTECA DEL CONGRESO 205

Dióse lectura a un pliego del Señor Joaquín José Delmonte, miembro de la Cámara de Cuentas, por medio del cual dimitía del puesto que ocupaba, presentando al Honorable Senado motivos poderosos que éste tomó en consideración; y determinó se acordase dicha dimisión y que en otra sesión se proveyera a su reemplazo.

El Honorable Presidente, de acuerdo con los demás miembros del Senado, expuso que, habiéndose terminado los trabajos para los que fué convocado extraordinariamente el Senado, quedaba cerrada la Sesión legislativa extraordinaria.

Entonces, el Honorable Presidente cedió el puesto al Vice-Presidente, quien hizo dar lectura a una carta presentada por el primero pidiendo una licencia por el término de un mes para acabar de curarse, y dijo además que en cualquier caso grave y urgente estaría dispuesto a volver a su puesto. Fué concedida y, sin haber ocurrido otra cosa, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- R. Pérez.- Melitón Valverde.*

SESION DEL 27 DE FEBRERO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y siete días del mes de Febrero de mil ochocientos sesenta, y 17º de la Patria, se reunió el Senado Consultor en la sala donde celebra sus sesiones, compuesta la mayoría de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla; Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte; Rafael Pérez, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario, con el objeto de asistir a la solemnidad del aniversario de la Independencia, que tenía lugar en la Iglesia Catedral.

Dirigióse al templo en compaña del Gobierno y demás

SENADO de la Republica Dominicana

autoridades de la República, y una vez terminada la función, se encaminó al Palacio Nacional, y reunido en su sala, se abrió la sesión en presencia de los Honorables arriba mencionados. El Honorable Presidente del Senado envió una Comisión al Poder Ejecutivo invitándole a pasar a la sala del Senado Consultor, para abrir la Sesión legislativa de este año.

Después de un momento, presentáronse el Señor Vice-Presidente de la República y los Secretarios de Estado, acompañados de los Cónsules de Francia, Inglaterra, España y los Países Bajos y varias autoridades de la República.

Colocados en sus puestos, el Presidente del Senado, puesto de pie, en alta voz proclamó abierta la 5ª Sesión legislativa del Senado Consultor, del año 17º de la Patria.

S. E. el Vice-Presidente de la República dirigió una alocución a los Honorables Senadores, (*) y presentó las Memorias de los Secretarios de Estado, y un Mensaje, (**) que leyó el de lo Interior, cuya lectura terminada, el Honorable Presidente del Senado contestó en éstos términos:

Excmo. Señor Vice-Presidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo: La Representación Nacional ha oído con gusto el Mensaje que V. E. le ha dirigido, y se congratula de que la República haya dado al mundo pruebas esplendentes de que nada tiene que temer en el porvenir y que tiene por cimiento sólido el patriotismo y la firmeza.

Los miembros del Senado, al aceptar la misión honrosa en que les han colocado la benevolencia y la confianza de sus comitentes, están dispuestos con sus débiles luces a llenar su deber y a marchar de acuerdo con los demás poderes del Estado, en todo aquello que contribuir pueda a la estabilidad, esplendor, gloria y prosperidad de la Patria.

Retiróse el Poder Ejecutivo acompañado de una Comisión del Senado Consultor, y el Presidente de este Cuerpo

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 14.
(*) Véase Apéndice, doc. Nº 15.

le convocó para el día siguiente con el objeto de proceder a la renovación del bufete y al examen de las Memorias ministeriales, y se cerró la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- Melitón Valverde.- R. Pérez.*

SESION DEL 28 DE FEBRERO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veintiocho días del mes de Febrero de mil ochocientos sesenta, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Rafael Pérez, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario.

Leída el acta de la sesión anterior fué aprobada.

Procedióse, según la orden del día, a la elección del nuevo bufete del Senado y resultó del escrutinio que el Honorable Tomás Bobadilla, reunía la mayoría de los votos para Presidente; el Honorable Delmonte para Vice-Presidente a unanimidad; y para Secretario los Honorables Bonilla y Valverde obtuvieron por 2 veces igual número de votos; y puesta la elección a la suerte, se decidió ésta por el Honorable Valverde y quedó nombrado e instalado en sus funciones, lo mismo que los demás funcionarios.

El Honorable Presidente hizo presente al Senado que, según el orden establecido, era de necesidad nombrar Comisiones para examinar las Memorias que acompañaban al Mensaje del Poder Ejecutivo, a fin de ocuparse en todas aquellas medidas que se pidiesen al Cuerpo Legislativo; y para que indicasen todo aquello que conviniese a las circunstancias; y habiendo asentido los Honorables Senadores a esta proposición, nombró el Presidente las Comisiones del modo siguiente:

La Memoria del Ministerio del Interior y Policía fué encomendada a los Honorables Abreu y Pérez.

La de Hacienda a los Honorables Delmonte y Valverde.

La de Justicia e Instrucción Pública a los Honorables Pérez y Bonilla.

La de Guerra a los Honorables Presidente y Valverde.

La de Relaciones Exteriores a los Honorables Delmonte y Valverde.

En seguida, a propuesta del Honorable Bonilla, se acordó oficiar al Ministro de Interior y Policía, haciéndole presente que el Señor P. E. Dubocq, nombrado Senador por la Provincia de Santiago, no se había presentado a la apertura de la Sesión legislativa; y que informado el Senado de que había dimitido de este encargo, deseaba saber oficialmente lo que hubiera de positivo en el particular para reemplazarle, si hubiese lugar, según lo dispuesto por la Constitución, en atención a la falta que se experimentaba de dicho Senador.

No habiendo otra cosa que tratar, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- R. Pérez.- Melitón Valverde.*

SESION DEL 2 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, el día dos de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se reunió el Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla, y habiendo mayoría, se declaró abierta la sesión.

Dióse lectura al acta de la sesión anterior y fué unánimemente aprobada.

Se leyó un oficio del Ministro de lo Interior y Policía que dice así:

Señor Presidente: El Gobernador de Santiago me dice con fecha de 10 de Enero lo que copio: "Por la carta fecha 31 del mes último que hoy he recibido por el correo de Puerto Plata y que le paso en comunicación (que acompaña), se impondrá el Señor Ministro cómo el Señor Senador electo P. E. Dubocq expone que no puede aceptar ese honroso encargo".

Quizás él oficiará por el correo de mañana al Honorable Senado, haciendo dimisión para que sea reemplazado.

Con lo cual dejo contestado el oficio de V. S. de esta fecha sobre este asunto y satisfechos los deseos del Honorable Senado.

Tengo la honra de ofrecer a S. S. los sentimientos de mi alta consideración. — Firmado. Felipe D. Fernández de Castro. — Santo Domingo, Febrero 29 de 1860.

A la lectura de este oficio, el Honorable Delmonte hizo presente que no estaba en la forma debida la dimisión del Senador electo Dubocq, que el Senado era el único hábil a admitir la renuncia, y por lo tanto a él únicamente debía ser presentada, y que así, no habiendo sido dirigida al Senado, era su dictamen que no había formal renuncia.

El Honorable Presidente opinó que sí existía la renuncia, puesto que el Señor Dubocq había manifestado patentemente su voluntad a la autoridad por quien había sido requerido; que además no estaba el Senador electo en el caso de dirigirse al Senado porque no era miembro de él, supuesto que no había entrado en el ejercicio de sus funciones, por ser un principio generalmente recibido que hasta que un empleado no ha sido puesto en posesión de su cargo ni se puede reputar tal, ni forma parte de la Corporación para la que ha sido elegido; y que en todo caso, si había habido falta en la forma, no sucedía así en cuanto a la realidad del hecho, porque el Señor Dubocq había dado su renuncia al Gobernador Político de Santiago, que lo requirió para que viniese a ocupar su puesto, y éste lo participó al Ministro de

lo Interior, cuyos conductos debían reputarse oficiales y dárseles fe y crédito en el ejercicio de sus funciones; que, además, la falta del Senador electo se hacía notable porque, abierta la Sesión legislativa, él debía haberse presentado para llenar sus tareas, y no habiéndolo hecho, era claro que persistía en la renuncia y debía reemplazarse conforme a la Constitución, para que no sufriese atraso el servicio público.

El Honorable Rafael Pérez dijo que habiendo oficiado el Senado al Ministro de lo Interior para que se requiriese a los Senadores que aun no se habían presentado para que lo hiciesen, y habiendo el citado Ministro oficiado al Gobernador de Santiago, y éste al Señor Dubocq, este Señor manifestó su voluntad, esto es, su renuncia, por el órgano del mismo que le había requerido, y que por esto opinaba que se admitiese la dimisión.

Los Honorables Abreu, Bonilla y Melitón opinaron en el sentido del Honorable Delmonte y, acordadas las proposiciones, el Senado resolvió por mayoría lo siguiente:

Que se oficiase al Señor Dubocq, Senador electo por la Provincia de Santiago, invitándole viniese a la mayor brevedad a cumplir el mandato que le confiaron los Pueblos, y que, en caso de impedimento legítimo, hiciese su dimisión directamente al Senado, a quien exclusivamente correspondía admitirla.

La Comisión encargada del examen de la Memoria de la Guerra presentó su informe redactado en los términos siguientes.

Honorables Senadores: La Comisión nombrada para examinar la Memoria presentada por el Ministro de Guerra y Marina, viene hoy a exponeros que, habiendo cumplido su encargo, no encuentra cosa particular que pueda llamar la atención del Poder Legislativo. Provoca el Ministro una ley para que se establezcan dos escuelas de Náutica, una en esta Ciudad y otra en la de Puerto de Plata, para darle impulso a la Marina nacional, lo mismo que otra que limite el número de marineros nacionales y extranjeros con que deben tripularse los buques; mas como el

encargado del Poder Ejecutivo ha ofrecido formular y presentar los proyectos, nada puede el Senado hacer por ahora hasta tanto que aquéllos no se le sometan.

El Ministro asegura que el Ejército está en buen pie de organización; que por un proyecto de ley, que se someterá al Poder Legislativo, serán creadas algunas mejoras; que nuestros arsenales están provistos de armas y de pertrechos para poder hacer frente a cualquiera peligro que se presente, y si a ésto se le agrega que el Jefe de la Administración General, que lo es el Ilustre General Libertador, es el que está encargado de la conservación de la República, su seguridad y defensa, los Representantes de la Nación nada tienen que promover sobre este particular, porque ella y ellos deben descansar en la confianza que les aseguran las reiteradas pruebas de celo con que siempre se ha distinguido. — Firmados, Bobadilla. — Melitón Valverde.

El Honorable Abreu hizo presente que, tanto la Memoria del Ministro de Guerra y Marina como las de los demás Ministerios, carecían de las aclaraciones, informes y documentaciones necesarias para ilustrar al Cuerpo Legislativo en los términos que requería la Constitución para proceder con acierto en sus deliberaciones.

Esto produjo una discusión en que tomaron parte todos los Honorables Senadores, y se acordó aplazarla para deliberar lo que correspondiese en una de las próximas sesiones.

El Honorable Presidente expuso que, habiéndose aceptado la dimisión de un miembro de la Cámara de Cuentas y aplazado para otra sesión el nombramiento del que deberá reemplazarle, iba a proceder a ello; los demás Honorables pidieron que se difiriese hasta la próxima sesión, y se aplazó.

Agotadas las materias, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- R. Pérez.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 5 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los cinco días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Independencia, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Melitón Valverde Secretario; Pedro Pablo de Bonilla y Rafael Pérez.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

En seguida se procedió al nombramiento de un miembro de la Cámara de Cuentas, que había quedado aplazado para aquella sesión.

Del escrutinio resultó que tuvieron por dos veces igual número de votos los Señores Leonardo Delmonte y Alejandro Gazán; la tercera vez el Señor Leonardo Delmonte obtuvo cinco votos contra uno y fué electo.

Dióse después lectura de un oficio del Ministro de Hacienda y Comercio que dice así.

Honorables Senadores: Habiéndose recibido en este Ministerio una petición de los Señores Delmonte & Cª, por la que solicitaban el permiso de exportar ciento y pico de reses y pidiendo, además, que en atención a que los nuevos Aranceles no podrán tener su puntual ejecución sino hasta el 7 del corriente, deseaban que se ordenase que el pago de los derechos de ellas fuera arreglado según la Ley de Aranceles actualmente en vigor. Sobre lo primero resolvió este Ministerio, pero como lo segundo versa sobre una interpretación que es necesario dar a la ley, cosa que sólo es atributiva al Senado Consultor, lo someto a la alta apreciación de Vds. para que tomen una justa determinación.

Dios guarde a Vds. muchos años. — Firmado, P. Ricart y Torres.

El Senado dió la siguiente Resolución:

En virtud de la consulta dirigida al Senado por el Ministro de Hacienda con fecha 29 de Febrero, pidiéndole la interpretación de la Ley sobre Aranceles de importación y exportación.

Considerando: que es un principio generalmente admitido que las leyes tienen su efecto desde el día de su publicación.

Considerando: que el Art. 1º de la Ley dada el 20 de Enero de este año en el Art. 1º dice que: "los Aranceles de Importación y Exportación regirán en la República, para el cobro de los respectivos derechos, dos meses después de su publicación para los buques procedentes de Europa, 30 días para los de los Estados Unidos, y 15 días para los de las Antillas, sin comprender a los que fuesen despachados de éste o de otro puerto de la República."

Considerando: que es de necesidad favorecer tanto cuanto se pueda la exportación de los frutos del país y sus productos.

El Senado Resuelve:

Que el buque despachado por los Señores Delmonte & Cª, cargado de ganado para el extranjero, no está comprendido en la disposición del Art. 1 de la citada Ley como no procedente del extranjero y que debe gozar del beneficio de la Ley desde el día de su publicación, y que en estos términos se conteste al Ministro incluyéndole copia de esta resolución.

Y no habiendo más de que tratar se cerró la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Melitón Valverde.- R. Pérez.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 7 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los siete días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión en presencia de la mayoría, compuesta de

los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu y Pedro Pablo de Bonilla.

Leída el acta de la sesión anterior, fué unánimemente aprobada. El HONORABLE PRESIDENTE hizo la siguiente moción: Señores: La Nación debe un recuerdo de gratitud, en cuanto pueda ser compatible con su posibilidad, a la familia de aquellos que haciendo abnegación de su vida, la sacrificaron defendiendo la libertad e independencia de la Nación, o por mantener la estabilidad del Gobierno, el orden y el reposo público.

La viuda del General Jerónimo de Peña, que murió de resultas de las heridas que le dieron en la memorable acción de Sabana Larga, tiene una solicitud pendiente recomendada por el Poder Ejecutivo y por el Ayuntamiento de la Villa de Moca para que se le conceda la propiedad de una casa situada en aquella población.

Diez hijos, la mayor parte menores, del infortunado General Casimiro Félix, que en la madrugada del 7 de Setiembre murió en el puesto que le señalaba el honor en la Ciudad de Azua defendiendo el orden y la estabilidad del Gobierno, reclaman la munificencia nacional, porque su padre no les dejó más bienes de fortuna que una honrosa memoria.

Pido, pues, al Senado que nos ocupemos de uno y otro asunto y que, teniendo a la vista los documentos relativos, se formulen los decretos que hemos de dar para acordarles lo que las circunstancias permitan como un rasgo de reconocimiento y de justicia nacional.

Todos los Senadores aprobaron la proposición hecha por el Honorable Presidente y le facultaron a que presentase los proyectos de decretos sobre el particular, para que fuesen discutidos conforme a la Constitución.

Se dió lectura a una carta del Cura párroco de la Villa de San Carlos en la que reiteraba la petición de que se le votase una suma para la reedificación de la iglesia de dicho pueblo; y se aplazó la decisión que debiera darse para una

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

de las próximas sesiones. Fueron nombrados para componer la Comisión de peticiones los Honorables Abreu y Pérez.

Y sin más nada, se cerró la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- R. Pérez.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 9 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los nueve días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta la mayoría de los Honorable Tomás Bobadilla Presidente; Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez y Pedro Pablo de Bonilla.

Leída el acta de la sesión anterior, fué unánimemente aprobada.

El Honorable Presidente presentó los dos proyectos de decreto sobre las remuneraciones otorgadas a la Señora viuda del General Jerónimo de Peña y a los hijos menores del General Casimiro Félix; y sufrieron la 1ª lectura constitucional, pasando sin observaciones.

Leyóse un oficio del Señor Ministro de lo Interior consultando al Senado en nombre del Poder Ejecutivo sobre un indulto para Julián de Castro, condenado a trabajos forzados; y se determinó contestar que el Senado estaba de acuerdo en que concediera al referido Julián de Castro el indulto de la pena a que fué condenado por presunciones de complicidad en la extracción de la pólvora de la Común de Higüey y cuya gracia había implorado del Poder Ejecutivo.

Se dió lectura a un pliego firmado por el Licenciado Delgado e impuesto el Senado de su contenido, resolvió que pasara a la Comisión de peticiones para que abriera concepto.

SENADO
de la
República Dominicana

Concluído esto, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Melitón Valverde.- Franco. X. Abreu.- R. Pérez.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 12 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los doce días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta, se abrió la sesión del Senado Consultor en presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu y Pedro Pablo de Bonilla.

Leída el acta anterior fué aprobada.

En conformidad a la orden del día, se dió la 2ª lectura constitucional a los proyectos de decretos de que habla el acta anterior, y pasaron sin ninguna observación.

Concluído esto, la Comisión de peticiones presentó el informe siguiente:

Muy Honorable Senado: La Comisión de peticiones ha visto con escrupulosa atención las piezas sometidas a vuestra apreciación por los Señores Licenciado P. A. Delgado, Valentín Ramón, Bernardina y Agustina Delgado, sus hermanas, pidiendo se les ampare nuevamente o se les declare propietarios absolutos de los terrenos conocidos bajo el nombre del Doctor Leyba en los sitios de la Buenaventura como pertenecientes a su difunta madre Doña Josefa Sánchez, que los hubo de sus hijos menores José María y Petrona Ruiz habidos de su primer consorcio con Don Antonio Ruiz, y hermanos uterinos de los peticionarios. El título que presentan que es una información de testigos debidamente aprobada y la posesión judicial que sin contradicción alguna se le dió al padre de los peticionarios en 1818, es del todo respetable en derecho, porque arrastra consigo una prescripción adquirida en más de 40 años. Dice la ley "que el que posee más de treinta años a título de propietario, no necesita de presentar título ni puede oponérsele la excepción de mala fe, porque

se extinguen las acciones tanto reales como personales" y, por consiguiente, cualquiera reclamo que pudiera suscitarse hoy sería cuestión que debería ventilarse ante los Tribunales, quienes también deben ordenar un nuevo reconocimiento de límites si se estima necesario, o si se suscita cualquier otro reclamo judicial; por lo que la Comisión es de opinión que el Senado nada tiene que hacer, porque el negocio es privativo de los Tribunales, y los poderes son independientes y se ejercen separadamente, conforme a la Constitución.

Santo Domingo Marzo 12 de 1860 y 17º de la Patria. Firmados, Francisco X. Abreu. — Rafael Pérez.

El Senado estuvo conforme con el dictamen de la Comisión y lo aprobó.

No habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- R. Pérez.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 16 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y seis días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Melitón Valverde, Secretario; Francisco Javier Abreu, Rafael Perez y Pedro Pablo de Bonilla, y se leyó el acta de la sesión anterior, la que fué aprobada y sancionada.

La orden del día traía la 3ª y última lectura de los decretos de remuneración de que habla el acta anterior, los que pasaron sin ninguna observación, y se acordó leerlos por última vez y sancionarlos, si hubiere lugar, en la próxima sesión.

Se leyeron los siguientes oficios: el primero del Ministro de lo Interior, proponiendo al Senado a nombre del Poder Ejecutivo se separe el Puesto Militar de Sabana de la

Mar de la Común de Samaná, por la dificultad que se experimenta de comunicar de dicho Puesto a la expresada Común de Samaná, atravesando la bahía en todo su ancho, y que, pudiendo hacerlo por tierra con la Provincia del Seibo, que se agregue a esta última.

El segundo oficio del Ministro de Hacienda y Comercio manifestando en nombre del Poder Ejecutivo que el sueldo de que goza el General en Jefe de las Fronteras del Norte no alcanza para procurarle su subsistencia y que, siendo un puesto de la mayor importancia, cree conveniente y propone al Honorable Cuerpo Legislativo, se acuerde a este General *sesenta* pesos fuertes mensuales, y 16 a su Secretario.

El tercero también del Ministro de Hacienda y Comercio, en el que propone el Poder Ejecutivo al Senado se sirva derogar el Decreto de fecha 4 de Enero del corriente año dado por este Cuerpo, a petición del Gobierno, para amortizar los billetes que estén en circulación e inutilizar los depositados en la Contaduría General.

Fueron tomados en consideración para formular los proyectos de decreto. Sobre las indicaciones del oficio último se presentó un proyecto de decreto que sufrió la 1ª lectura constitucional.

Y no ocurriendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- R. Pérez.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 20 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los

Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, Secretario.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada. Leídos por última vez los Decretos concernientes a la remuneración que se otorga a la viuda del General Jerónimo de Peño y a los hijos menores del General Casimiro Félix, fueron sancionados artículo por artículo; y dado lectura del conjunto de cada uno de ellos, quedaron aprobados.

Se dió la segunda lectura constitucional al decreto que deroga el de fecha 4 de Enero de 1860, relativo a los billetes de a 1, 5, 10 y 20 pesos fuertes, emitidos por el Tesoro público; y pasó sin ninguna objeción.

También se dió le 1ª lectura constitucional a otro decreto en que, a propuesta del Poder Ejecutivo, se separe de la Península de Samaná el Puesto Militar de Sabana de la Mar, agregándole a la Común del Seibo: tampoco sufrió ninguna observación.

Se dió lectura de un oficio del Ministro de Hacienda, fecha 17 de los corrientes, en que acompañaba los documentos concernientes a la solicitud pendiente del General de División Román Franco Bidó, a consecuencia de una Resolución del Senado, fecha 6 de Abril del año pasado, por la cual se le dijo informara con especialidad si aquel General había sido debidamente indemnizado por alguna de las Administraciones pasadas de los suplementos, gastos y pérdidas que hizo después del 27 de Febrero de 1844; a lo que dice el Ministro que de los informes que se han tomado, no aparece que el General Bidó haya percibido suma alguna bajo el respecto indicado; y siendo constante por la notoriedad pública y por los informes de las personas más notables de las Provincias del Cibao que el General Román Franco Bidó con su persona y bienes hizo grandes sacrificios para la libertad e independencia de la Nación y que hoy se encuentran él y su familia en un estado lamentable de miseria; el Senado ha resuelto que se diga al Poder Ejecutivo que de las sumas

votadas en la Ley de Presupuestos para gastos extraordinarios, se le conceda al General de División Román Franco Bidó la suma de tres mil pesos fuertes en remuneración de los grandes gastos que hizo en favor de la causa de la Separación, y a beneficio de la Patria, en los primeros momentos en que, sin recursos, ni elementos de ninguna clase, sacudió el yugo de sus opresores y se constituyó en Nación libre e independiente; y que se comunique al Poder Ejecutivo.

Acerca del oficio del Ministro de Hacienda en que propone a nombre del Ejecutivo el aumento de sueldo para el General en Jefe de las Fronteras del Norte y su Secretario, hubo una discusión, quedando aplazada esta materia para la sesión próxima.

Concluído esto, el Honorable Pérez hizo la siguiente proposición, apoyada por el Honorable Bonilla:

El infrascrito, animado del deseo de que la Nación tome en cuenta el estado en que ha quedado la viuda e hijos menores del finado Capitán Venancio Reynoso, muerto en Higüey el año pasado de 57, a la ocasión en que las tropas del Seibo marcharon a someter aquella población en favor de la gloriosa revolución del 7 de Julio; como igualmente el del Capitán Valentín Méndez, por haber perdido en dicha época ambas manos por un disparo de cañón de los enemigos, como a las viudas de los militares Lucas de la Cruz y José Peguero, muertos en los cantones de Faría y Manganagua en la misma época, combatiendo por derrocar la tiranía del ex Presidente Báez; propone a la Beneficencia nacional ejerza con ellos un acto de justicia acordándoles, aunque por una sola vez, algunos recursos con que puedan remediar la situación miserable en que se encuentran.

Santo Domingo, Marzo 20, 1860.

Se tomó en consideración y quedó aplazada; y agotada la materia se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- R. Pérez.*

SESION DEL 23 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y tres días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta la mayoría de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, Secretario. Leída el acta de la sesión anterior, fué unánimemente aprobada.

Se dió la 3ª lectura constitucional al Decreto que deroga el de fecha 4 de Enero de 1860, relativo a los billetes de a 1, 5, 10 y 20 pesos fuertes, emitidos por el Tesoro público y pasó sin ninguna observación.

También se dió la 2ª lectura constitucional al decreto en que, a propuesta del Poder Ejecutivo, se separe de la Península de Samaná, el Puesto Militar de Sabana de la Mar, agregándole a la Común del Seibo: tampoco sufrió ninguna objeción.

Trayendo el orden del día la discusión que quedó pendiente sobre el Mensaje del 15 de los corrientes del Poder Ejecutivo, en que solicita que al General en Jefe de las Fronteras del Norte se le acuerden sesenta pesos fuertes mensuales y diez y seis a su Secretario; considerando el Senado que tanto el General en Jefe de las Fronteras del Norte como el de las del Sur, deben permanecer en ellas para vigilar constantemente no sólo su seguridad, sino la del buen orden, y que en el mismo caso que se encuentra el uno se encuentra el otro: ha resuelto que se diga al Poder Ejecutivo que de la suma votada para gastos militares en la Ley de Presupuestos, que se dió el año pasado, puede asignar a uno y a otro y a sus Secretarios igual suma hasta tanto que en el corriente año se forme la correspondiente Ley de Presupuestos.

Habiéndose ocupado el Senado de la moción hecha por el Honorable Pérez acerca de que ejerciese la Nación con el Capitán Valentín Mercedes y con las viudas e hijos menores de los militares Lucas de la Cruz, Venancio Reynoso y Gabriel Peguero un rasgo de munificencia nacional por haberse inutilizado el uno y muertos los otros defendiendo con honor la estabilidad de la República, y sacudiendo el ominoso yugo de la opresión y de la tiranía con que el ex Presidente Báez la oprimiera, considerándolos muy acreedores, como mártires gloriosos de la Patria, ha resuelto, a unanimidad, que se diga al Poder Ejecutivo que de los Fondos públicos de la Nación se le dé por una sola vez al Capitán Valentín Mercedes una suma de diez mil pesos nacionales y cinco mil a cada una de las viudas de los militares Lucas de la Cruz, Gabriel Peguero y Venancio Reynoso.

No habiendo ocurrido otra cosa, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- R. Pérez.*

SESION DEL 26 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y seis días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta la mayoría de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, y Pedro Pablo de Bonilla, nombrado Secretario *ad-hoc* por enfermedad del Honorable Valverde.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada. Según la orden del día, se procedió a sancionar el Decreto que deroga el de 4 de Enero concerniente a los billetes emitidos por el Tesoro público; fué sancionado artículo por artículo y aprobado en su conjunto.

Se dió la tercera lectura constitucional al decreto que separa el Puesto Militar de Sabana de la Mar de la Península de Samaná y le agrega a la Común del Seibo. No hubo observación ninguna.

No habiéndose aún presentado todos los informes de los Honorables Senadores sobre las Memorias ministeriales, se acordó que la sesión del Jueves próximo, 29 de los corrientes, se destinaría para tomar en cuenta los informes de las Comisiones nombradas para abrir concepto sobre las mencionadas Memorias; y no ocurriendo otro particular se cerró la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- R. Pérez.*

SESION DEL 27 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y siete días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta, 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor con presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, Secretario.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada. La orden del día traía la última lectura y sanción del Decreto sobre el Puesto Militar de Sabana de la Mar de que habla el acta anterior, y se procedió a ello, sancionándose parte por parte y quedando aprobado en su conjunto. Y se acordó remitirlo al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Se trajo a la vista una solicitud del Señor Esteban Pozo en que expone al Senado que habiéndosele mandado entregar en el sitio, en la Administración del ex Presidente Báez, una cantidad de barriles de cal, según la orden que acompaña del ex Ministro Bobea, pide a esta Honorable Cor-

poración se sirva declarar la validez de dicha deuda y ordenar su pago; y pasó a la Comisión de peticiones.

Y sin más nada de que tratar, se cerró la sesión.- *Bobadilla.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- R. Pérez.*

SESION DEL 28 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta la mayoría de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla, y Melitón Valverde, Secretario. Se dió lectura del acta de la sesión anterior, y fué aprobada.

El Honorable Presidente dió cuenta al Senado de una nota oficial del Ministro de Hacienda, con fecha 26 de los corrientes, que es del tenor siguiente:

Señor Presidente: Movido el Poder Ejecutivo por la consideración de que gran parte del papel moneda que hoy circula en la República está ya en el último grado de deterioro, lo que causa materiales perjuicios al público, y muy particularmente al Tesoro nacional, que percibe en pago de derechos grandes cantidades en papel moneda, en las que naturalmente entran por mayor las papeletas más arruinadas, ha tomado el acuerdo de pedir por este Ministerio al Honorable Senado Consultor la autorización de imprimir diez millones de papeletas de los mismos tipos que las que hoy circulan, las que habrán de aplicarse precisamente a amortizar las que el uso ha hecho inservibles y entorpecen la circulación por su mal estado. Lo que pongo en conocimiento de V. S. para que por su órgano sea el Senado debidamente impuesto, y acuerde lo conveniente al caso.

Dios guarde a V. S. muchos años. — Firmado, P. Ricart y Torres.

Santo Domingo, 26 de Marzo de 1860.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

El Senado, después de haber conferenciado largamente sobre la materia, determinó autorizar al Poder Ejecutivo para que se imprimiesen y pusiesen en circulación diez millones de billetes de Caja con los mismos tipos de los que actualmente están en circulación para que precisamente se recogiesen los que estuviesen en mal estado de deterioración, no pudiendo ni aumentarse el número ni disminuirse del objeto de su destinación, en atención a que el Poder Ejecutivo ha informado al Senado que con lo que se estaba adeudando al Tesoro público y activando su cobro, podía subvenirse a las necesidades y gastos indispensables de la Nación; y que se le participe para los fines convenientes.

El Honorable Delmonte hizo presente la necesidad de que se reuniesen los dos Poderes del Estado para discutir la Ley dada con fecha 27 de Junio del año pasado sobre reforma del sistema monetario, y otras que quedaron en receso en la pasada Legislatura ordinaria, en cumplimiento del Art. 23 de la Constitución.

El Honorable Presidente manifestó que por sus enfermedades no había asistido a la discusión y sanción de la Ley sobre el sistema monetario; que cada vez que se trate de emitir papel moneda, con cualquiera denominación de valor, siempre será de la misma opinión que ha sido desde el año 44 hasta la fecha: que los billetes de Caja, en no teniendo la cualidad esencial de poder ser cambiados a voluntad, sin una garantía, no pueden producir sino efectos ruinosos para el país; pero que si de la discusión puede resultar alguna mejora en el sistema monetario, estará siempre por lo más útil y principalmente en las circunstancias de apuros en que se encuentra la Nación.

Los demás Senadores convinieron también en la necesidad de la reunión, y el Senado unánimemente acordó se oficiase al Poder Ejecutivo para que tuviese efecto dicha reunión a brevedad posible; con lo cual se terminó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- R. Pérez.- Melitón Valverde.*

SESION DEL 29 DE MARZO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta la mayoría de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla, Secretario *ad-hoc.*

Se leyó el acta de la sesión anterior y hechas algunas modificaciones fué unánimemente aprobada.

Como se había determinado que en esta sesión se discutirían los informes que presentasen las Comisiones encargadas para abrir concepto sobre las Memorias de los Secretarios de Estado, y no habiéndose presentado aún dichos informes, quedó aplazada esta materia para la sesión del Lunes próximo. Y después de haber oficiado al Poder Ejecutivo sobre las disposiciones tomadas por el Senado y de que habla el acta anterior, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- R. Pérez.*

SESION DEL 2 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los dos días del mes de Abril de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor con asistencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, Secretario.

Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

Se dió lectura a un oficio del Ministro de Hacienda en el que propone al Poder Ejecutivo que se abra el puerto de Monte Cristi al comercio extranjero para la exportación de ganado solamente; y fué tomada en consideración por el Senado la medida propuesta.

En conformidad a la orden del día y habiéndose convenido que en esta sesión se presentarían los informes sobre las Memorias ministeriales, la Comisión compuesta de los Honorables Pérez y Bonilla, encargada de abrir concepto sobre la Cartera de Justicia e Instrucción Pública, presentó su informe, que es como sigue:

Honorables Señores: La Comisión encargada de informar sobre la Memoria de Justicia e Instrucción Pública, tiene el honor de exponer a la atención del Honorable Senado Consultor, que ha examinado tan detenida y circunstanciadamente como le ha sido posible todo lo contenido en ella.

Y prescindiendo ahora al establecimiento de su dictamen, primeramente en la parte relativa a la administración de Justicia, la Comisión manifiesta que no puede menos que asentir y adherirse al parecer del Ministro en cuanto "considera dicha administración en un estado muy poco satisfactorio a pesar de los esfuerzos de los que le han precedido y de las providencias que hasta la fecha han tomado los Cuerpos colegisladores".

La Comisión, enterada de los inconvenientes graves que existen y de la poca eficacia de los arbitrios que hasta ahora se han escogitado para remediarlos, no ve en los expedientes y temperamentos que de nuevo se sustituyen sino el medio seguro de que dure y se prolongue tan lamentable mal; que sólo comenzaría a desarraigarse, en el concepto de la Comisión, para desaparecer después enteramente, si se variasen y modificasen en su esencia las condiciones con que hasta aquí ha existido nuestra administración judicial: haciendo de ella un cuerpo regular jerárquicamente organizado, aumentando de una manera conveniente las dotaciones asignadas que por su mezquina exigüidad distan mucho de ser adecuadas, y escogiendo preferentemente con sistema y constancia a los hombres que hasta hoy se han dedicado al estudio de las leyes y a la práctica de los Tribunales para el servicio de

las diferentes funciones de la Magistratura. Rodeando al mismo tiempo a esta indispensable y bienhechora institución de todos los honores y de todas las consideraciones que puedan asegurarle su preeminencia y su respeto.

Este sistema, que establecería y fomentaría una emulación constante, sería también una vía muy expedita de recompensa y de premio; creando además ese saludable espíritu de corporación que es el alma y la vida de todas las instituciones colectivas.

La realización del buen deseo expresado por el Señor Ministro de que se traduzcan los Códigos, buenos deseos que otros predecesores suyos han formulado también y que hasta ha llegado a tener un principio de ejecución, aunque infeliz, daría un resultado ventajoso en el sentido mismo de esta reforma; pero no tan absoluto y decisivo como parece esperarlo alguno.

El uso de una legislación escrita en una lengua extranjera y formada para una sociedad que por sus instituciones, sus hábitos morales complicados, sus tendencias, y hasta por su genio mismo, difiere tanto de nosotros, es un mal gravísimo, un contrasentido, una lamentable calamidad, que a todo trance debe hacerse desaparecer y que no basta, ni con mucho, a remediar la apetecida traducción.

No debe de esto inferirse que la Comisión no la tenga por muy útil; ella por el contrario adopta y aplaude ese pensamiento, aunque está profundamente penetrada de lo delicado y hasta muy arduo del trabajo.

La persona (si es que basta una persona sola), que ha de hacer la traducción, ha de estar muy versada en la legislación y jurisprudencia francesa y españolas, además de la inteligencia perfecta con que debe poseer entrambas lenguas, y, aun así y todo, para dar a la terminología forense francesa, y éste es el nudo de la dificultad, su genuina y técnica significación en nuestro idioma patrio, ha de tener muchísimas dificultades que vencer y aun algunas libertades que tomarse, sin que baste la instrucción más sólida y la más extensa y exquisita erudición para encontrar siempre y felizmente, no ya rigurosas equivalencias, sino meras analogías siquiera a muchas instituciones y ambas cosas.

Pero si, salvando y orillando tantas dificultades, llegase esta empresa a lograr dichoso remate y cumplida ejecución, se habría levantado una obra verdaderamente

monumental, que, fuera de otras muchas y grandes ventajas que a todo el mundo ocurren, tendría la no despreciable para nosotros de hacer desterrar de una vez esos inevitables barbarismos que ahora afean y descomponen hasta las menos imperfectas producciones de nuestro foro.

La parte de esa Memoria que se versa sobre la instrucción pública ha sido para la Comisión asunto que ella ha considerado también con la mayor madurez y reflexión.

El estado proporcionalmente ventajoso en que se encuentra la enseñanza primaria debido en mucha parte, sin duda, al celo desplegado por el Señor Ministro, hace sentir vivamente la necesidad de un establecimiento central en el que se dispensase a la estudiosa juventud el beneficio de la enseñanza superior y perfeccional: necesidad que lo inconducente y desproporcionado de la Ley de 16 de Junio próximo pasado "restableciendo la antigua Universidad de Santo Domingo", no ha podido satisfacer en lo más mínimo.

Movida por la censura que de dicha Ley ha hecho en su Memoria el Ministro, la Comisión se ha creído en el deber de examinarla, y estudiarla de nuevo, y ha encontrado exactos y muy ajustados a razón los reparos con que la tacha el Señor Ministro, asociándosele en el deseo de que se la derogue y sustituya con otra más oportuna y más atemperada a su objeto.

La Comisión da tanta importancia a la restauración de los buenos estudios clásicos, ha tanto tiempo suspendidos, que no puede dejar de manifestar su complacencia al ver el empeño que el Señor Ministro pone en el establecimiento de una Universidad, cuyo plan está calculado poco más o menos sobre los antiguos estatutos.

La experiencia de los ensayos sucesivamente repetidos y abortados siempre, habrá inspirado al Ministro el pensamiento feliz de buscar las condiciones debidas del nuevo establecimiento en ese respetuoso culto por nuestras antiguas tradiciones universitarias.

La Comisión cree y espera que este Instituto, que será también un nuevo elemento de fuerza, de unidad y de nacionalidad, nos preservará de los peligros que siempre llevan consigo los estudios privados, faltos de estímulos, por lo regular incompletos y poco metódicos, y ocasionados a las veces, por la carencia de discernimiento y elección, a descaminar la juventud, esterilizando en su germen las verdades y principios morales y religiosos.

La Comisión, sin embargo, se complace en manifestar que esta insinuación, que ella ha creído muy oportuna y que le ha sido sugerida por el asunto mismo, no entraña la malicia de ninguna alusión actual. Pues nuestra juventud, fiel al espíritu y tendencias reaccionarias de este siglo, es al par que aplicada, religiosa y moral. Encontrándose en ella nobles aptitudes, ya en parte desarrolladas, y especialidades algo significativas que podrían entrar, tal vez no sin gloria, en la honrosa y delicada carrera del profesorado.

Antes de concluir, la Comisión debe manifestar que la reforma pedida para el Código Penal Militar y la Ley sobre el Comercio Marítimo no debe en manera alguna ser desatendida. Siendo tanta la necesidad, sobre todo, de que se revise la Ley sobre el Comercio Marítimo, que ningún encarecimiento la podría exagerar; pues los grandes abusos a que da lugar dicha ley tienen por último y necesario resultado, disminuir en una parte muy considerable los intereses del Fisco.

Tal es, Honorables Senadores el informe que la Comisión encargada de examinar la Memoria de Justicia e Instrucción Pública tiene el honor de someter a vuestra ilustrada consideración. — Santo Domingo, Abril 2 de 1860. — Firmados, Pedro T. Garrido. — Rafael Pérez.

El Senado, a propuesta del Honorable Delmonte, acordó que dicho informe se leería otra vez en una de las posteriores sesiones, párrafo por párrafo, por si hubiese algo que tomar en consideración sobre algunos de los puntos de que trata.

Y no ocurriendo otra cosa, se cerró la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 10 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de Abril de mil ochocientos sesenta y 17º de la Independencia, se abrió la sesión del Senado Consultor, presentes

los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, Secretario.

Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

Habiéndose formulado el proyecto de decreto que abre el puerto de Monte Cristi al comercio extranjero, solamente para la exportación de ganado, se dió la primera lectura constitucional y no hubo observación.

No ocurriendo otra cosa, se cerró la sesión.- *Bobadilla.-*

SESION DEL 11 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los once días del mes de Abril de mil ochocientos sesenta y 17º de la Independencia, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta la mayoría de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, Secretario.

Se leyó el acta de la sesión anterior y, no habiendo observación que hacerle, fué unánimemente aprobada.

Dióse lectura a un pliego del Ayuntamiento de Puerto Plata, en el que pide esta Corporación al Senado se le autorice a enajenar varios solares de aquella Común pertenecientes al Estado, con el fin de proveer con éste a la construcción de una Cása Capitular y reconstruir también los siete puentes que facilitarán las comunicaciones en aquel lugar. Se tomó en consideración y pasó a la Comisión de peticiones.

El Honorable Delmonte tomó la palabra y dijo así: Honorables Senadores: Todo corazón dominicano se contrista al rumor de la infausta noticia que circula hoy en el público.

Se dice que el Gobierno de Venezuela, a despecho de sus mismas leyes, ha hecho pasar por las armas a varios do-

minicanos cogidos prisioneros de guerra en uno de los combates que han tenido allí lugar, y, sin forma de juicio, exceptuando de esta disposición a los demás prisioneros, sólo ha decretado la muerte para nuestros hermanos conciudadanos. Se dice que, alcanzando su encono hasta todos nuestros nacionales, les niega la hospitalidad y los expulsa de su territorio. ¿De este modo corresponde el Gobierno de Venezuela a la hospitalidad generosa que el nuestro ha brindado a sus hijos cuando proscritos y errantes han abordado a nuestras playas? Cuan diferente no ha sido nuestra conducta benévola y protectora aún para aquellos que, olvidando su condición de extranjeros, han atizado el fuego de nuestras discordias civiles y causado males de inmensa gravedad. Si esto es así cierto, Honorables Senadores, el honor nacional está gravemente comprometido: la situación de nuestros compatriotas debe afligirnos y el nombre dominicano debe ser sincerado. Prescindamos ahora de que las víctimas sean o no enemigos políticos; en esta ocasión no atiendo sino al golpe dirigido a nuestra nacionalidad. Y el Gobierno está en la precisión de indagar y cerciorarse de la verdad de los hechos para pedir explicaciones al Gobierno de Venezuela y disponer, si fuese cierto semejante atentado, lo que más convenga al honor nacional.

El Honorable Melitón Valverde dijo: Sí es doloroso, en verdad, Senadores, lo que acabamos de oír, no es poco satisfactorio para la Representación Nacional el contar en su seno hombres que, como el Honorable Delmonte, haciendo abnegación de sus pasiones políticas y de personales resentimientos, alza la voz en favor de sus extraviados compatriotas. Yo aplaudo sus nobles sentimientos en este particular, y asociándome por completo a su manera de considerar estos hechos de salvaje crueldad, diré que si las representaciones que nuestro Gobierno debe hacer al de aquel pueblo, cuyo estado habitual es el desorden y la anarquía, no dan por resultado la inmediata reparación del ultraje hecho a la Nación —derecho de gentes y hasta de las leyes

mismas de la humanidad— entonces el instinto de propia conservación y la protección debida a los ciudadanos de una misma Nación —protección que ha sido el objeto primario y esencial de la creación de los gobiernos y que debe extenderse muy particularmente en este caso a los que, condenados al ostracismo, sufren hoy sus dolorosas consecuencias—, nos obligaría a recurrir como a la última razón, al derecho de represalia, haciendo experimentar a todos y a cada uno de los venezolanos que residan en el territorio de la República iguales tratamientos a los sufridos por nuestros ciudadanos en Venezuela. El Gobierno, al obrar de esta manera, a la vez que cumpliría un deber de indeclinable responsabilidad, dispensaría su generosa protección a esos desgraciados que, aunque extraviados, no han dejado por eso de ser nuestros hermanos.

Todos los Senadores opinaron en favor de la proposición y se determinó oficiar al Poder Ejecutivo con inserción de esta acta en la parte continente, excitándole a tomar todas las informaciones sobre la verdad de los hechos y a pedir explicaciones al Gobierno de Venezuela sobre el particular.

No habiéndose aún presentado el Senador electo Dubocq, ni contestado el oficio que le dirigió el Senado requiriéndole hiciese su dimisión directamente a esta Corporación, se procedió a la elección de un nuevo Senador, y resultaron primeramente el Señor Domingo de la Rocha con 2 votos, el Señor Manuel María Valverde con 2 votos también, y el Señor Felipe Perdomo con uno; puesta segunda vez la votación entre los Señores Rocha y Valverde, resultó que el Señor Domingo de la Rocha tuvo dos votos y el Señor Manuel María Valverde 3, y reuniendo este último la mayoría quedó electo.

No habiendo otra cosa de que tratar, se cerró la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 12 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los doce días del mes de Abril de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla; Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte; Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, Secretario. Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

Trayendo la orden del día la 2ª lectura constitucional del decreto que dispone se abra el puerto de Monte Cristi para la exportación de ganado vacuno, se procedió a ello y pasó sin objeción.

Se dió lectura de un oficio del Ministro de la Gobernación por el que expone la solicitud hecha por los encargados de la obra de la iglesia que se construye en Santiago, de que se les ceda la parte no ocupada del solar que fué de los Trinitarios para, con su producto, terminar la obra; y fué tomada en consideración dicha solicitud.

Con otro oficio, el mismo Ministro remitía al Senado varias piezas originales para que se sirviese ilustrar al Gobierno con su opinión. Dichas piezas venían acompañadas de un oficio del Gobernador Político de Santiago, en el que expone que, habiendo dado su consentimiento al Ayuntamiento de Santiago para poner en pública subasta el derecho de peaje, y habiendo visto después las condiciones de dicha venta, las que creía podían ocasionarle dificultades, las dirigía al Gobierno para que determinase lo más conveniente.

Otro oficio del mismo Gobernador de Santiago acompañaba varias disposiciones del Ayuntamiento de Puerto Plata, las que sometía el Señor Gobernador a la consideración del Poder Ejecutivo.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana
AGN

Se dió lectura de todas estas mencionadas piezas y se dejó su discusión para las sesiones próximas, acordándose lo mismo sobre un oficio del Ayuntamiento de Puerto de Plata, dirigido al Ministro del Interior con varios documentos relativos a un litis que sostenía dicho Ayuntamiento con el Señor Felipe Flores sobre los terrenos sitos en esta Ciudad en el lugar nombrado Petit Guinea; y se terminó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 13 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los trece días del mes de Abril, de mil ochocientos sesenta y 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta la mayoría de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Rafael Pérez y Melitón Valverde, Secretario.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Se presentó el Honorable Manuel M. Valverde, Senador nombrado en reemplazo del Señor Pedro Eduardo Dubocq, que fué electo por la Provincia de Santiago, y prestó juramento, quedando inmediatamente instalado en su puesto, conforme a la Constitución.

Se trajo a la vista el oficio del Ministro del Interior de fecha 11 de los corrientes, por el cual remite al Senado algunas piezas relativas a la controversia que desde el año de 1853 existe entre el Señor Felipe Flores y el Ayuntamiento de Puerto de Pata, sobre el reclamo de un terreno situado en dicha población, en el lugar nombrado la Petit Guinea, donde se encuentran establecidas 24 casas, en virtud de los arrendamientos hechos por el Ayuntamiento. Adjunto se encontraba también un oficio del Presidente de dicha Corpo-

ración en que solicita la autorización del Ministerio para abandonar al Señor Flores dichos terrenos, bajo ciertas condiciones constantes en el documento marcado (d). Y el Senado, después de haber discutido la materia, fué de sentir que, versando el asunto sobre el derecho de propiedad que acerca del mencionado terreno reclamaban recíprocamente el Ayuntamiento de Puerto de Plata y el Señor Felipe Flores, el negocio era por consiguiente contencioso; y su resolución correspondía exclusivamente a los Tribunales de Justicia, en atención a que los Poderes del Estado son independientes y se ejercen separadamente; y se acordó participarlo al Poder Ejecutivo en la forma de estilo, con devolución de los documentos que se sometieron al Senado.

Se principió la lectura y discusión de las piezas sometidas al Senado, relativas a las disposicones que había dado el Ayuntamiento de Puerto de Plata y se determinó nombrar una Comisión, para que abriese concepto sobre lo que debería resolverse con respecto a las citadas disposiciones, y fueron encargados los Honorables Bonilla y Manuel M. Valverde.

Se leyó un pliego del Honorable Rafael Pérez, por el cual solicitaba una licencia durante un mes para ir al Seibo a arreglar negocios de familia que hacían necesaria su presencia en ese lugar; y le fué concedida por el tiempo que precisamente necesitase, contando que regresaría inmediatamente después de arreglados dichos asuntos. Con lo cual se terminó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- M. Valverde.- Pedro Pablo de Bonilla.*

SESION DEL 16 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y seis días del mes de Abril de mil ochocientos sesenta, se abrió la se-

sión del Senado Consultor, compuesta la mayoría de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, Secretario.

Dióse lectura al acta de la sesión anterior y fué unánimemente aprobada.

En conformidad con la orden del día, se procedió a la discusión sobre la consulta hecha por el Poder Ejecutivo tocante a las disposiciones establecidas por los Ayuntamientos de Santiago y Puerto de Plata.

Primeramente se dió lectura al oficio del Señor Ministro de la Gobernación, que dice así:

Señor Presidente: Tengo el honor de someter a la consulta de ese Honorable Cuerpo de orden del Gobierno, la que hace la autoridad política de Santiago como comprendida en la atribución 8ª del Art. 26 de la Constitución; y que aparece de los documentos que originales acompañó. El Gobierno desearía que, al resolver, el Senado tuviese presente todo lo gravoso que es para la agricultura el impuesto de peaje; por cuanto grava directamente esta industria en su parte más vital, que es la del transporte de sus productos, harto perjudicado ya por el estado en que se encuentran las vías públicas. Podría tal vez creerse que el producto del peaje, bien aplicado, contribuiría a la mejora de aquéllas; pero la experiencia enseña que lo real y efectivo es la imposición del gravamen a los pueblos, el cobro de su rendimiento y el completo abandono de los caminos; porque, desgraciadamente encomendada la inversión a los Ayuntamientos, participan de los inconvenientes que experimentan en su acción las corporaciones, siempre lenta y desprovista de energías. En las circunstancias presentes el Gobierno no pierde tiempo en ocultar al Senado que el clamor es general contra los abusos que se cometen en la ejecución del impuesto establecido en el camino de Puerto Plata, y que ningún Ayuntamiento estaría menos que el de Santiago, en el caso de imponer trabas al transporte de los frutos, cuando es de todos conocido que las que ya les ha puesto la naturaleza son la única barrera que impide el desarrollo completo de la riqueza agrícola en tan industriosa

Provincia; y, por último, que es aún más notable que esto se haga por un Ayuntamiento cuyas rentas son superiores a sus gastos. Ruego a V. S. se sirva disponer la devolución a estas oficinas de los documentos adjuntos, luego que hayan llenado su objeto. Aprovecho esta ocasión para ofrecer a V. S. la seguridad de mi distinguida consideración. Santo Domingo, 11 de Abril 1860. — Firmado, Felipe Dávila Fernández de Castro. — Honorable Señor Presidente del Senado Consultor.

Se leyó también un acta del Ayuntamiento de Puerto Plata con fecha 18 de Febrero de este año, en que dispuso hacer las imposiciones siguientes:

SOBRE EL PEAJE

Art. 1º Por las horquetas y cañones de todas dimensiones hasta de 12 de tabla que se introduzcan en esta Ciudad por mar y tierra, su conductor pagará por cada una: F. Cs. 2. Por id. id. de mayor dimensión pagará por cada una: F. cts. 4. Art. 2º Todo animal cargado con productos de exportación que venga de la costa o del interior de la Común, el dueño o conductor pagará por cada carga: F. cts. 4. Art. 3º Todo fruto de exportación que se introduzcan en la Ciudad por vía de embarcaciones pagarán como sigue: Por cada quintal de concha: F. 4. Por id. de cera: F. 12½. Por cada id. de cueros: F. cts. 6¼. Por cada serón de tabaco: F. cts. 2. Art. 4º Todo introductor de animales para el consumo pagará por cada res: F. cts. 5. Por cada puerco: F. cts. 2. SOBRE ESTABLECIMIENTOS. Art. 5º Todo establecimiento de cigarrería en la Ciudad, pagará por el presente año: F. 6. y todo cigarrero sin establecimiento pagará por mes: F. 12½. Art. 6º Todo sastre y carpintero, sin talleres, (*) panadero, latonero, latero, zapatero y todo artesano no (*) en el presente artículo pagará por el presente año, (*) sin establecimiento (*) indicado por la Ley de Patentes, pagará por el presente año: F. 5. Art. 8º Toda persona que ejerza la profesión de vender en la plaza del mercado legumbres, víveres y demás, pagarán todos los Sábados: F. cts. 2. Art. 9º Se prohibe a toda persona el salir fuera de la población al camino real a atajar las cargas de víveres que traen los habitantes a ven-

(*) Destruído el original.

der al Pueblo. Art. 10. Todo carretero pagará por año: F. 6. Art. 11. Todo vendedor de agua pagará semanalmente: F. 12½. Art. 12. Todo vendedor de maloja pagará por cada carga: F. 1. Art. 13. Toda persona que haga una diversión pública deberá antes obtener una licencia de la municipalidad, por la cual pagará a la Caja comunal lo que sigue: Por un fandango F. 1; por un bambulá F. 2; por un baile de máscaras $5.

Dióse igualmente lectura a otro acuerdo del 22 de Noviembre del año pasado, en que dispuso hacer las siguientes imposiciones:

POR DERECHO DE LIMPIEZA. Todo almacén y taller de carpintería pagará semanalmente: 25 cts. fuertes. Toda tienda, pulpería, tabaquería, sastrería y zapatería: 12½ cts. F. Toda casa particular: 6¼ cts. fts. Los que no son verdaderamente pobres: 3 cts. fts.

Dos acuerdos más, fechas 26 de Noviembre y 9 de Junio, en que impusieron del modo siguiente:

Art. 1º Por cada pieza de caoba depositada en la playa, frente a la Aduana de este puerto pagará el dueño por cada trimestre que esté depositada: F. cts. 3. Art. 2º Este derecho tendrá que satisfacerse aunque del trimestre sólo un día haya estado depositada la pieza. Por toda otra clase de madera de estantería, vigas o tablas de palma, se pagará por cada pieza o docena de tablas, mensualmente: 1 cts. fuertes, etc., etc.

La Comisión nombrada para abrir concepto sobre este negocio, compuesta de los Honorables Bonilla y M. Valverde, formuló por escrito su opinión en los términos siguientes:

Honorables Señores: La Comisión nombrada para formular el proyecto de respuesta a la consulta hecha por el Poder Ejecutivo sobre las imposiciones establecidas por el Ayuntamiento de Puerto Plata, evacua su sometido en la forma siguiente: Que se diga al Poder Ejecutivo que si por el Art. 25 de la Ley sobre Ayuntamientos, éstos están autorizados a crearse los arbitrios convenientes según las riquezas y facultades de las poblaciones, sin embargo, éstos no pueden imponerse sino sobre los

objetos destinados al consumo local. Estos objetos se dividen en cinco clases, que son: Primera: bebidas y líquidos; segunda: comestibles; tercera: combustibles; cuarta: forrajes; quinta: materiales. Son comprendidas en la primera división, los vinos, vinagres, cidras, cerveza, aguardientes, espíritus, licores y aguas espirituosas. Son comprendidos en la segunda división los objetos que sirven habitualmente al alimento de los hombres, como las carnes, pescados, mantecas y quesos que vengan del extranjero; con excepción, sin embargo, de los granos, harinas, frutos, manteca, leche, legumbres y otros frutos menores. Son comprendidos en la tercera división, el carbón y la leña; sebos, cera, aceites para alumbrados. La cuarta división comprende los forrajes verdes y secos de cualquier naturaleza, especie y calidad que sean. Son comprendidos en la quinta división, las maderas labradas o en bruto, propias para las construcciones de ebanistería, tonelería, carretería; las piedras de sillería, pizarras, tejas, ladrillos, piedras de cal y yesos.

Deduciéndose de lo dicho que el Ayuntamiento de Puerto Plata no se ha creado arbitrios, sino que ha impuesto contribuciones que no pueden ser establecidas sino por una ley, y las que los Ayuntamientos no pueden imponer, ni aun para subvenir a sus más urgentes necesidades; habiendo faltado además al establecer aquéllas, en cuanto a la forma, pues no se ha ajustado a lo dispuesto por el 5º inciso del Art. 27 de la citada ley, que dispone que dichos derechos no pueden crearse sino con la anuencia del Gobernador Político y la debida aprobación del Gobierno. — Santo Domingo, Abril 16 de 1860.

Verificado ésto el HONORABLE PRESIDENTE manifestó su opinión en los términos siguientes: Señores Senadores: De acuerdo con la opinión de la Comisión, creo que lo que debe decirse al Poder Ejecutivo es que el objeto de la ley no fué que se gravasen los pueblos con contribuciones onerosas, sino con aquellas que fuesen útiles, provechosas y necesarias para su fomento, para establecer su policía, crear hospicios y otros establecimientos de beneficencia y para lo demás que sea de utilidad y conveniencia pública. Por ésto se dejaron las imposiciones comunales, tan precisas y necesarias, al patriotismo y claro discernimiento de los Ayuntamientos,

con anuencia del Gobernador Político y la aprobación del Gobierno.

El peaje de Santiago en 1847 fué establecido para crear un camino de aquella Ciudad a la de Puerto de Plata más cómodo y conveniente que el que existía. Poco se ha hecho, y claro que si la imposición se ha distraído de su objeto principal no debe existir, o a lo menos debía ponerse mucho esmero en no distraer los fondos del objeto de su destinación y conservarlos para llevar adelante la obra que es también de necesidad y utilidad como lo son las vías de comunicación.

En su principio, sólo se pagaban dos pesos nacionales, hoy se dice que se cobran diez y, en mi concepto, para operar en este ramo cualquiera innovación o aumento debió hacerse con la anuencia del Gobernador de la Provincia y la aprobación del Gobierno, como lo requiere la ley. La imposición de peaje en Puerto de Plata, La Vega y demás Comunes, parece por ahora innecesaria y demasiado gravosa para aquellos Pueblos.

No lo es menos la imposición hecha a las caobas que se hayan de poner en las playas de Puerto de Plata. Esta producción del país está ya muy recargada de derechos y para promover el fomento de la agricultura y demás producciones territoriales es conveniente no gravarlas y concederles por el contrario cuántas franquicias sean posibles. Además, las playas pertenecen en propiedad al dominio público, el derecho a todos, y el Ayuntamiento no pudo, sin violación de las leyes, haber creado un ramo sobre la propiedad ajena.

No deja de tener también sus inconvenientes las imposiciones hechas a todas las bestias que entran en la población cargadas de frutos, a las verduleras, carreteros, etc., etc. porque hay una consideración que debe llamar mucho la atención sobre el particular y es que la Ley de Patentes los ha exceptuado porque los legisladores han tenido presente que si bien es de necesidad que los ciudadanos contribuyan a las necesidades del Estado, las contribuciones siempre son

gravosas, atacan la propiedad individual y en un estado normal se hacen más llevaderas, pero cuando el ciudadano tiene muy a menudo que abandonar su casa y trabajos para defender la Patria y el orden público, se le han de tener muchas consideraciones y, principalmente, es necesario ante todo tener presente que los pueblos no pueden marchar súbitamente a su engrandecimiento, prosperidad y ornato: porque ésta es la obra pausada de la naturaleza y del desarrollo del trabajo, de la industria, de la producción y de la civilización. Por todo lo que, yo opino que el Ejecutivo puede aprobar las imposiciones que juzgue convenientes hacer que se modifiquen, desaprobarlas y dictar todas las medidas necesarias para corregir los abusos y el fraude, principalmente en la recaudación de impuestos, porque se hace muy notable que el Ayuntamiento de Santiago fijase diez pesos nacionales de peaje y que se diga que hayan cobrado cuarenta, lo cual debe reprimirse con la mayor severidad. Este es mi parecer.

Se suscitaron diferentes cuestiones y aclaraciones; y el HONORABLE VICE-PRESIDENTE manifestó su opinión diciendo: Señores Senadores: He oído con atención la opinión de la Honorable Comisión especial del Senado y la que acaba de emitir nuestro digno Presidente; y, hablando con el debido respeto, ni una ni otra llena, a mi corto entender, el objeto del Gobierno al hacer al Senado la consulta de que se trata, porque ambas están concebidas en términos muy generales y no concluyen categóricamente.

Yo opino, pues, que en respuesta de aquélla, se diga al Poder Ejecutivo que, entre las diversas imposiciones hechas por el Ayuntamiento de Puerto de Plata y que tenemos a la vista, se nota una, la que recae sobre las maderas que se depositan a orillas del puerto de aquel nombre, nada legal, en razón a que las playas del mar son del dominio público y no pueden formar parte de ningún ejido; que de las otras, la mayor parte corren bajo la jurisdicción de la Ley de Patentes; y que en cuanto al peaje establecido por dicho

Ayuntamiento y el de Santiago, aunque es materia de la exclusiva atribución de estas Corporaciones, según el Art. 27, inciso 5º de la Ley de la materia, está, sin embargo, sujeta a la sanción del Gobierno, quien puede por tanto aprobar o desaprobar las cuotas, según lo estimare conveniente.

Estando suficientemente ilustrada la materia, se puso a votación: el Honorable Presidente persistió en su opinión y la mayoría adoptó el proyecto de respuesta de la Comisión para evacuar la consulta con la adición propuesta por el Honorable Delmonte.

Se leyeron dos notas oficiales del Ministro de la Gobernación, proponiendo en una, abrir el puerto de La Romana, puesto que habían cesado ya las circunstancias particulares en que se encontraba la República que obligaron a cerrarle; en la segunda nota, se proponía al Senado Consultor se sirviese votar la suma de seiscientos pesos fuertes para la reparación del templo de Santa Cruz del Seibo, y fueron tomadas en consideración ambas proposiciones para discutirlas y resolver lo conveniente en una de las próximas sesiones.

Habiéndose ausentado el Honorable Rafael Pérez, el Presidente nombró al Honorable Bonilla para sustituir a aquel en la Comisión de peticiones durante su ausencia, lo mismo que en la del informe sobre la Memoria del Interior, y se terminó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 17 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y siete días del mes de Abril de mil ochocientos sesenta, año 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta

la mayoría de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, Secretario.

Dióse lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

El Honorable Delmonte propuso al Senado una sesión secreta y todos los demás Senadores apoyaron su moción, quedando en receso la pública por algunos momentos. Terminada la sesión secreta se volvió otra vez a la pública. En conformidad con la orden del día, se dió la tercera lectura al decreto que determina abrir el puerto de Monte Cristi para la exportación de ganado vacuno.

La Comisión de peticiones presentó su informe, que es así:

La Comisión de peticiones ha examinado la solicitud que hace el Ayuntamiento de Puerto de Plata al Senado Consultor de que se le autorice para enajenar a favor de los Señores Tomás Rodríguez y Gustavo Zeller varios solares, para con su producto construir una Sala Capitular y reparar los puentes que facilitan las comunicaciones en esa Ciudad.

La Comisión observa que no encuentra en esta solicitud los documentos necesarios, como son el presupuesto de los gastos para dicha obra, el avalúo de los solares y el apoyo del Gobernador de la Provincia; por lo que la Comisión se abstiene de abrir concepto. — Santo Domingo, 17 de Abril 1860. — Bonilla. — Abreu.

De acuerdo con la opinión de la Comisión, el Senado resolvió que el Ayuntamiento de Puerto Plata hiciese su solicitud por la vía ordinaria y acompañada de los documentos necesarios. Tocante a una solicitud del Señor Esteban Pozo, la Comisión presentó el siguiente concepto, quedando aplazada la resolución para otro día.

Honorables Señores: La Comisión de peticiones, en vista de la que ha dirigido al Senado el Señor Esteban Pozo, reclamando el inmediato pago del valor de ciento ochenta y un barril de cal de que fué despojado en la Ad-

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

ministración Báez, acompañando a dicha solicitud la orden expedida por el Ministro de lo Interior en esa época, compeliéndole a la entrega de dicha cal, como asimismo el recibo dado por el Señor Vicente Soto, que acredita haberse entregado de ella y empleándola en la composición de la calle del Comercio, la Comisión es de dictamen que, estando justificado que el Señor Esteban Pozo entregó a la persona que le fué designada los ciento ochenta y un barriles de cal y que éstos se emplearon en utilidad pública, como lo es la reparación de las calles, que se abone al Señor Pozo por el Tesoro público el valor de los 181 barriles de cal, conforme al 15 inciso del Art. 8º de la Constitución, cuando el Erario público esté en actitud de poderlo verificar. — Santo Domingo, 17 de Abril de 1860.— Bonilla. — Abreu.

Se trajo a la vista la nota oficial del Ministro de lo Interior, en la cual proponía al Senado se sirviese votar la suma de 600 pesos fuertes para la reparación del templo de Santa Cruz del Seibo: se tomó en consideración y se resolvió que de los fondos públicos se destinara esa suma para la obra citada.

Vista la nota oficial del Poder Ejecutivo, en la que propone la apertura del puerto de La Romana, se abrió la discusión sobre este punto y se resolvió que se formulase el proyecto de decreto; y al mismo tiempo que se dijese al Poder Ejecutivo que, teniendo él la iniciativa de las leyes, convendría que en lo sucesivo cuando tuviese que proponer alguna ley o decreto se sirviese enviar formulado el proyecto para dejar más cumplidos sus deseos.

Leído un oficio del Ministro de la Gobernación, en el que representa la solicitud hecha al Gobierno por los encargados de la fábrica de la iglesia que se construye en Santiago, de que se les ceda la parte no ocupada del solar que fué de los Trinitarios, para con su producto terminar la obra, el Senado resolvió que se dijese al Ministro que, para poder apreciar dicha solicitud, necesitaba tener a la vista el justiprecio del solar y que se comprobase la necesidad de destinar su valor a la conclusión de la fábrica de la iglesia.

Se abrió un pliego del Vicario General, Gobernador de la Diócesis y Vice-Rector del Colegio Seminario, por el cual solicitaba del Honorable Senado tomase algunas medidas para el restablecimiento de este instituto, indicando alguna de las disposiciones de la Ley de 8 de Mayo, de 1848, que no habían sido puestas en ejecución y las que creía convenientes para el objeto propuesto, etc., etc.

El Senado, habiendo tomado en consideración dicha solicitud, determinó que pasase ésta a la Comisión de peticiones, para que abriese concepto, y agotadas las materias, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 18 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los diez y ocho días del mes de Abril de mil ochocientos sesenta, año 17º de la Patria, se abrió la sesión del Senado Consultor en presencia de la mayoría, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior, que fué aprobada.

Se discutió artículo por artículo el Decreto que determina abrir el puerto de Monte Cristi para la exportación de ganado vacuno, y fué sancionado del mismo modo; leído después el conjunto, fué aprobado unánimemente.

Presentado el proyecto de decreto por el cual queda abierto el puerto de La Romana para la exportación e importación desde el 1º de Enero de 1861, sufrió la 1ª lectura constitucional sin observación.

Abierta la discusión sobre la respuesta a la consulta hecha por el Poder Ejecutivo con respecto a las disposiciones de los Ayuntamientos de Santiago y Puerto de Plata, hubo distintos pareceres, y se aplazó dicha contestación para una de las próximas sesiones, cerrando la de este día.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 19 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

Después de ésto, el Senado pasó a una sesión secreta, terminada la cual continuó la pública.

Conforme a la orden del día, se evacuó la contestación pendiente sobre la consulta hecha por el Poder Ejecutivo acerca de las imposiciones tomadas por los Ayuntamientos de Santiago y Puerto Plata; y fué según el dictamen de la Comisión encargada, inserto en el acta del 16 de los corrientes con la adición siguiente, propuesta por el Honorable Delmonte:

En cuanto al peaje, el Senado hace presente que esta imposición está acordada por la ley y es atributivo de los Ayuntamientos, teniendo el Gobierno el derecho de aprobar o desaprobar la cuota, según lo estimase conveniente.

La Comisión de peticiones presentó el informe siguiente, que leyó el Honorable Bonilla concebido así:

La Comisión de peticiones, habiendo visto y detenidamente examinado la que ha dirigido al Honorable Senado Consultor el Señor Vicario General Gobernador de la Diócesis y Vice-Rector del Colegio Seminario establecido en esta Capital en virtud de la Ley de 5 de Mayo de 1848, y tomando en consideración las poderosas razones en que se funda para pedir a esta Honorable Corporación resuelva como materia de su exclusiva atribución que el Convento de Regina Angelorum, que fué destinado por el Art. 6 de la citada Ley para el establecimiento del Colegio, sea puesto a su disposición para los fines indicados; que la suma de doce mil pesos nacionales, que de las arcas del Tesoro público fué asignada en calidad de renta de este instituto le sea sustituída con otra suma que represente el mismo valor que aquélla tenía de 768 pesos fuertes en esa época, por haberse reducido a consecuencia del demérito del papel moneda a la insignificante de 48 pesos fuertes, supuesto que la intención de los legisladores fué, sin duda, al hacer esta asignación, la de favorecer ese instituto con el valor real que dicha suma representaba; que por el Art. 14 de la misma Ley se destinaron también, para rentas del Colegio, el arrendamiento de cuatro de las mejores casas del Estado en esta Ciudad y las que desde entonces le fueron entregadas al Rector, gozando el Seminario de los productos de su arrendamiento hasta el 4 de Junio del año próximo pasado, en que, por acuerdo del Senado, fué una de ellas mandada entregar a la Señora Viuda Beauregard por pertenecerle en propiedad, habiendo el Gobierno destinado la otra para servirle de Palacio al nuevo Arzobispo, en que estas disposiciones justa la una y necesaria la otra, han despojado al Seminario de la mayor parte de sus rentas, reduciéndole al estado triste de no poder continuar, privando a la Igesia y al Estado de los beneficios que ha producido y debe esperarse de la conservación de tan laudable instituto; en este concepto, la Comisión opina que estima justa, como fundada en razón, la solicitud del Señor Vicario General, estando basada en disposiciones de una ley que, no habiendo sido derogada, deberá tener su cumplida ejecución y que, por lo tanto, se le conceda al Señor Vicario todo lo que solicita por creerlo justo y tán necesario y útil a la Iglesia como al Estado. — Santo Domingo, 19 de Abril de 1860. — Bonilla. — Abreu.

Fué tomado en consideración para discutirlo en la sesión próxima.

Los Honorables Abreu y Bonilla, nombrados en Comisión para abrir concepto sobre la Cartera del Interior, éste último en reemplazo del Senador R. Pérez, ausente, presentaron su dictamen como sigue:

Las primeras líneas de la Memoria de lo Interior y Policía, confiada a nuestro examen, revela la triste causa del estado de casi completa parálisis que afecta a esos ramos. Toda la buena voluntad del Ministro actual, como la de sus predecesores; todo su patriotismo, su eficacia, sus esfuerzos, han ido a estrellarse contra la valla fatal levantada ante el progreso de la República por la precaria situación de nuestra Hacienda.

Así lo declara el Señor Ministro, entrando luego a reseñar las diversas tentativas hechas por él y por los que le antecedieron para realizar algunas mejoras importantes. Tal fué el arreglo de los caminos, la reparación de calles y edificios públicos, la organización de la Guardia Cívica, y las frecuentes excitaciones a los agricultores, pero esas tentativas o, quedaron sin fruto o le dieron escaso, viniendo a hacerlas casi inútiles la consabida causa. Después de manifestar el Ministro la esperanza de que el Senado Consultor se sirva votar los fondos que se le propongan para tan importante ramo, asegura que en él todo está por hacer, y señala algunas medidas indispensables o útiles, según su concepto, para el progreso del país. Premios para la industria agrícola y fabril, mejoramiento de las vías de comunicación y de transporte, establecimiento de un muelle en Puerto Plata y otras obras en los demás puertos de la República que necesiten mejoras para mayor facilidad del comercio; reforma en nuestro sistema de cárceles actual, que, según el Señor Ministro puede influir en que "el saludable freno de la Justicia sea un medio ilusorio contra el vicio y una vana forma en el Estado". La mejor administración de hospicios y de cuarteles; provisión de aguas potables para los Pueblos que, como Santo Domingo y Monte Cristi, carecen de ellas; acuñación de una moneda nacional; fabricación de nuestra pólvora; recomposición de las calles de la Capital y su iluminación; reparación de sus ruinosos edificios y fomento del teatro. Tal es el resumen que hace el Señor

Ministro de las mejoras necesarias en su ramo, las cuales, dice, todos echan de menos, todos anhelan y reclaman, porque todos las conocen y por lo mismo las ven posibles.

El Señor Ministro no ha hecho más que apuntar esas necesidades en su Memoria, proponiendo al Poder Ejecutivo la presentación sucesiva al Senado Consultor de los diversos proyectos de leyes, de que cada una de aquéllas ha de ser objeto.

Más adelante indica el Señor Ministro la facilidad de transmutar toda esta muerte en vida, haciendo venir al país capitales extranjeros, que asegura poder obtenerse a un interés de cinco o seis por ciento, y, ayudados de los cuales, podríamos explotar nuestras minas de carbón, establecer un ferrocarril en el Cibao, ver convertido el inseguro puerto de Azua en el más abrigado del mundo, y ligar todos los puntos de nuestro territorio con tres hilos eléctricos para las comunicaciones telegráficas.

Tanta dicha podríamos obtener en pocos años, pero nosotros creemos con el Señor Ministro que todo ello no puede ser sino la obra de un empréstito extranjero, y, consiguiente, debemos comenzar por procurárnosle.

Además, cree el Señor Ministro que con poco esfuerzo podríamos fundar cajas de ahorros y montes de piedad, seguros mutuos y un banco agrícola, y concluye excitando al Poder Ejecutivo a que presente a este Cuerpo los proyectos de ley que reclaman esas mejoras, para las cuales es nuestro sentir que espere efectivamente el Senado tan ilustrada iniciativa.

Las resoluciones del Poder Ejecutivo en el ramo de lo Interior y Policía, desde el dos de Marzo del año pasado de 59 hasta el 20 de Enero del presente, encargadas a nuestro examen, no contienen nada que necesite especial referencia. En ellas sólo hemos notado que la adoptada en 20 de Diciembre concediendo indultos y salvo conductos a condenados políticos, adolece de la irregularidad de no haber sido tomado el parecer de este Honorable Cuerpo para dicha concesión, según lo prescribe para las de su género el párrafo único del Art. 35 de la Constitución. — Santo Domingo, Abril 19 de 1860.

El Senado resolvió juntar dicho informe a los de las otras Comisiones para discutirlos todos cuando estuviesen reunidos, según lo resuelto en una de las sesiones pasadas.

El Honorable M. Valverde ofreció presentar el de la Hacienda en la siguiente sesión; y quedó levantada ésta.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Francisco X. Abreu.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 23 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Presente la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla, y Melitón Valverde, Secretario; se abrió la sesión. Fué leída y aprobada el acta de la anterior.

Se dió la segunda lectura constitucional al decreto que autoriza abrir el puerto de La Romana para la importación y exportación desde el 1º de Enero de 1861.

Teniendo a la vista la solicitud que hizo el Vicario General, Vice-Rector del Colegio Seminario de Santo Tomás, y el dictamen de la Comisión que abrió concepto sobre el particular, se puso a discusión la materia y el Honorable Delmonte propuso que dicha solicitud pasase al Ministro encargado del ramo de Instrucción Pública, para que informase al Senado la conveniencia sobre los diversos puntos que abraza, y fué acogida la proposición por todos los Senadores, quedando así acordado.

Vista también la solicitud del Señor Esteban Pozo y la opinión de la Comisión de Peticiones, el Senado, conformándose con los principios establecidos por él y lo dispuesto anteriormente en iguales casos, acordó que su acreencia era legítima y que debía pagarse por el Tesoro público, cuando las circunstancias lo permitiesen, el valor de los ciento ochenta y un barriles de cal que el Señor Pozo entregó por

orden superior, habiéndose invertido la cal en la composición de las calles.

En seguida, el Honorable Melitón Valverde dió lectura al informe de la Comisión sobre la Cartera de Hacienda, que fué así:

Señores Senadores: La Comisión que habéis tenido a bien nombrar para que informe acerca de la Memoria que el Señor Secretario de Hacienda os ha presentado, cumpliendo el Art. 8 de la Ley sobre la responsabilidad ministerial, viene hoy a daros cuenta de su encargo y a ofreceros el resultado de su examen. Ella principiará sintiendo que las Cuentas generales de la Administración no hayan sido presentadas a causa, dice el Señor Ministro, de la no centralización de dichas Cuentas, como también por el atraso que algunas particulares han tenido en el envío de los suyos.

La Comisión deplora esta circunstancia, tanto más cuanto que por una resolución del Gobierno de 5 de Abril del año 59 se nombraba un empleado con ese solo objeto y asignándole una dotación de $25 fuertes mensuales. Así, Senadores, nuestra tarea ha sido ardua y enojosa al tratar de poner en claro nuestra situación fiscal rentística, que una no interrumpida serie de calamitosas circunstancias han complicado y obscurecido de tal modo, que nos ha hecho imposible el exacto cumplimiento de nuestro cometido.

La reciente entrada del Señor Ministro en esta Cartera excusa con respecto a él solamente, a los ojos de la Comisión, esta—de otro modo—incalificable omisión.

Los que suscriben están plenamente convencidos de la importancia que el Senado da a la presentación regularizada de las Cuentas generales de la República, del Presupuesto y del Tesoro para no insistir sobre la urgencia de su necesidad.

La Comisión (despejada así la situación fiscal), podría saber con exactitud si el Tesoro se encuentra al nivel de sus necesidades y compromisos.

Mucho, es verdad, Señores, se ha hecho hasta ahora, dando feliz término a indefinidas reclamaciones, originadas todas de la desastrosa guerra civil que durante once meses asoló al país, destruyó los capitales y agotó hasta las mismas fuentes de la riqueza nacional. Pero no marchando, desgraciadamente, con el día la contabilidad, le

es imposible a la Comisión conocer con exactitud y saber con fijeza cuanta es la suma de sacrificios impuesta a la Nación por la deuda contraída en aquella malhadada época.

La Comisión, Señores Senadores, ha creído deber llamar vuestra atención particularmente sobre la administración General de Hacienda. Esta Oficina, que da unidad y centralización a las operaciones de recaudación e inversión de los fondos nacionales, que incorpora por lo mismo en su cuenta las de las demás que ejercen funciones análogas a las que ella ejecuta, tiene sin embargo su cuenta propia e independiente de las otras. Es, además, esta oficina, por la cantidad de los fondos que maneja, por los documentos que expide y amortiza y por los diferentes negociados que se le han atribuído, la primera oficina de pago de la República. Y, sin embargo, y a pesar de esto mismo, Señores, teniendo como dejamos dicho su propia cuenta, es notorio, Senadores, el atraso en que se halla en sus disposiciones, cuyo pronto y expedito despacho ha sido, cree la Comisión, el principal objeto de su creación. La Nación, Señores, debe saber con regularidad y periodicamente los ingresos y egresos de esta importante oficina, porque la Nación tiene derecho a saber y la Administración pública el deber de informar a la Nación, cómo y en qué se invierten los fondos públicos. Los infrascritos son de sentir que cada trimestre deben aparecer en la "Gaceta Oficial" las cuentas al corriente de la Administración General de Hacienda. La Comisión, considerando la Cámara de Cuentas como la Oficina encargada de examinar aquéllas de que acaba de hablar, es por este mismo hecho la que complementa la organización fiscal de la República, puesto que allí se someten a juicio todos los responsables del Erario público por los fondos que han manejado.

Muy grande es, sin duda, la responsabilidad que pesa sobre el honor de estos empleados, pero ella se mide por la confianza que el Senado ha depositado en ellos al nombrarlos guardianes del Tesoro público.

Sin embargo, la Comisión cree que las funciones de la Cámara de Cuentas son ineficaces cuando no son inmediatamente correlativas a la presentación de las cuentas, porque la experiencia, como dice felizmente un estadista americano, está demostrando cada día que la cuenta que se envejece se cancela entrando en el cúmulo de las

muchas que existen sin examinar indefinidamente, y cuando llega el caso de serlo, muchas veces no tienen los medios de satisfacer los reparos, ni de pagar los alcances que definitivamente resultaren. Es por esto que responsabilidades que pudieron hacerse efectivas en tiempo oportuno, verificándose sin dificultad los respectivos reintegros, vienen a ser negatorias cuando se retarda su examen con gravísimo perjuicio del Erario público.

Pero todos estos inconvenientes no desaparecerán sino cuando, variando nuestro actual sistema, adoptemos los medios que en otros pueblos ha señalado la experiencia para poner a cubierto los intereses del Fisco, creando una caución proporcionada a la responsabilidad del destino que se desempeñase. Y mientras esto tenga lugar y para la legítima satisfacción, tanto del Gobierno como de los mismos interesados, la Comisión cree que la Cámara, llenando el objeto de su creación, debe ocuparse constantemente de las cuentas actuales y de las que se presentaren año por año y mes por mes, y que el examen de esas cuentas se publique periódicamente en la "Gaceta Oficial". Tal es, Senadores, el informe que la Comisión nombrada para abrir concepto sobre la Cartera de Hacienda y Comercio tiene el honor de someter a vuestra ilustrada consideración. — Santo Domingo, Abril 23 de 1860. — M. J. Delmonte. — Melitón Valverde.

La Comisión nombrada para abrir concepto sobre la Cartera de Relaciones Exteriores, manifestó que no había podido ponerse de acuerdo; y por esta razón y otras muy poderosas expuestas por el Honorable Melitón Valverde, el Senado le exoneró de este encargo y le reemplazó el Honorable Presidente.

El Honorable Delmonte hizo presente de nuevo al Senado la necesidad de discutir con el Poder Ejecutivo las leyes y decretos que estaban en receso desde la Sesión legislativa ordinaria del año pasado, y se acordó a unanimidad que se manifestase al Poder Ejecutivo que el Senado desearía tuviese efecto la continuación de esas discusiones, para cumplir con el voto de la Constitución. Sin otra cosa se levantó la sesión. (*)

(*) Acta sin firmar.

AGN



SESION DEL 25 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, Secretario, se abrió la sesión. Fué leída el acta de la anterior y se aprobó.

Se dió la tercera lectura constitucional al decreto que abre el puerto de La Romana al comercio extranjero y fué puesto a discusión su conveniencia o inconveniencia. El Honorable Delmonte tomó la palabra y expuso varias razones incontestables por las que cree oportuno el proyecto, y todos los Senadores opinaron también en favor del citado decreto, a excepción del Honorable Abreu, que se reservó hacerlo cuando se impusiese del conjunto. Leído el Art. 1º que decía: *Queda abierto el puerto de La Romana para la importación y exportación, etc.*, el Honorable Bonilla fué de opinión de que sólo se abriese dicho puerto para la exportación, apoyándose en que, no habiendo en esa Provincia grandes establecimientos que hiciesen necesaria la apertura de La Romana para la importación y que estando el puerto tan distante del pueblo como lo está de esta Capital, era abrir las puertas al fraude; y, además, por la dificultad de que permaneciesen allí, como creía necesario, los empleados de Aduana.

El Honorable Delmonte dijo: Consecuente con lo que he expuesto anteriormente diré que, comercialmente hablando, sería de la opinión del Honorable Bonilla; pero, políticamente, creo necesaria la apertura de ese puerto al comercio extranjero, por los acontecimientos que pueden acaecer en la República y que el legislador debe siempre pre-

ver, y creo ilusoria esta medida si sólo se abriese para la exportación.

A eso agregaré, dijo el Honorable Presidente, que yo no creo que se fomentaría allí la industria y la agricultura si no hubiera la facilidad de llevar efectos para el cambio de los productos del país; y que esta medida será un aumento de estímulo para aquellos habitantes que podrán conseguir esos efectos a menor precio y recogiendo mayor beneficio de su trabajo.

El Honorable Abreu opinó que debía abrirse el puerto de La Romana para la importación y exportación, no tan sólo por la conveniencia que debía resultar, sino también por una medida de justicia, pues sería injusto privar a esa Provincia del derecho acordado a las demás; y que, tocante a los temores del Honorable Bonilla, el Ejecutivo dictaría las medidas convenientes para impedir el contrabando.

Dilucidada la materia y puesta a votación, la mayoría se decidió por la apertura del puerto de La Romana al comercio extranjero.

Fueron modificados los demás artículos y leídos después uno por uno, y luego el conjunto, quedando aprobado y sancionado el Decreto en los términos siguientes:

PODER LEGISLATIVO. — EL SENADO CONSULTOR

A propuesta del Poder Ejecutivo

Considerando: que es de necesidad fomentar en todas las Provincias de la República, de una manera poderosa y eficaz, la industria, la agricultura y el comercio; y que la del Seibo experimenta grandes inconvenientes para conducir sus productos hasta el puerto de Samaná.

En nombre de la Nación ha dado el siguiente

DECRETO:

Art. 1º Queda abierto el Puerto de La Romana al comercio extranjero a contar desde el 1º de Enero de 1861.

Art. 2º El personal de esta Aduana será el mismo que establece la Ley de Hacienda Pública para las Aduanas de Azua y Samaná.

Art. 3º El presente Decreto deroga cualquiera disposición que le sea contraria y será enviado al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dado, etc., etc.

El Honorable Bonilla manifestó que en la Sesión legislativa del año pasado hizo presente al Senado que debería proveer a la Ley a que se refiere el Art. 41 de la Constitución, sobre calificación de los delitos de Estado, y que determine las penas que por ellos, como por los delitos comunes, deberán imponerse a los dichos funcionarios; lo que reiteraba para que se satisficiese el voto de la Constitución.

El Honorable Presidente le observó que podría presentar un proyecto de ley, apoyado por otro Senador, para que el Senado lo tomase en consideración.

Dióse lectura a un oficio del Poder Ejecutivo en que hacía presente al Honorable Senado Consultor que estaba dispuesto a continuar la discusión que había quedado pendiente sobre las leyes y decretos que estaban en receso, fijando el día 26; y se acordó reunirse el día indicado.

Se abrió un pliego del Honorable Abreu en que pedía una licencia por un mes, pues su salud exigía que se diese algunos baños de mar, lo que no podía efectuar sino estando fuera de la Ciudad, y por esta razón le fué acordada; y se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION ESPECIAL DEL 26 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel

Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión, hallándose presente S. E. el Presidente de la República y sus Secretarios de Estado.

Siendo el objeto de la reunión de ambos Poderes el de discutir la Ley que reforma el Sistema Monetario y que había sido aplazada anteriormente, el Honorable Presidente del Senado declaró abierta la discusión.

Dióse lectura a la citada ley, cuyo tenor es como sigue:

El Senado Consultor, previa las tres lecturas constitucionales;

Considerando: 1º Que el papel moneda actualmente en circulación, no representa "ningún valor efectivo definido", pues en él sólo se dice que "Debe circular en el territorio de la República por el valor de tantos pesos", sin estar determinado ese valor, cuya falta es causa de que ignore el público la suma porque se le garantiza.

2º Que es absolutamente necesario dar a nuestra moneda nacional un valor representativo tal que, sin alterar repentinamente y de un modo muy sensible los precios corrientes del mercado, produzca el aumento de los ingresos, facilite su recaudación, y fije de una vez el valor porque la garantiza el Estado a los tenedores de ella, ha dado la siguiente ley:

Art. 1º Se emitirán $900.000 de un nuevo papel moneda cuyos billetes de ¼ de peso representen 10 cts., los de ½ peso 20 cts., los de un peso 40 cts. y los de dos pesos, 80 cts. de valor extrínseco o numismático de 1 peso fuertes; por cuyo valor circularán y serán recibidos en todas las transacciones hechas en la República, sin más excepciones que las establecidas por la Ley.

Por el mismo valor se recibirán en Tesorería en pago de los derechos de importación, exportación y otros no exigibles en moneda fuerte.

Art. 2º Los billetes de 1 y 2 pesos de que trata el artículo anterior, serán enteramente iguales a los que se hicieron en los E. U. para la República en 1846, y los de ¼ de peso y ½ peso se harán la tercera parte más pequeños que aquellos, con tinta negra los primeros y rosada los segundos, y llevarán por tipo solamente el escudo de armas de la República, y a los lados, los guarismos en me-

dio de un círculo, su valor representativo, repetido muchas veces en todas letras, dentro de los cordones, alrededor del billete y en el centro la disposición concerniente a la circulación, garantía, etc., a imitación de los de 1 y 2 pesos.

Unos y otros serán hechos en el extranjero, y numerados aquí según el orden del registro, sellados y firmados por la Cámara de Cuentas.

Art. 3º Con este nuevo papel moneda se amortizará el que actualmente circula, al respecto de 2½ pesos de los nuevos, por el equivalente de uno fuerte el día de su emisión.

Art. 4º Se harán igualmente y con las mismas precauciones $100.000 nacionales en moneda de vellón, de valor de 2½ cada pieza, cuya circulación tendrá lugar del mismo modo que la del nuevo papel moneda. Sin embargo, nadie estará obligado a recibir a la vez más de $25 nacionales en moneda de vellón.

Esta moneda llevará en el anverso el escudo de armas de la República, con esta leyenda "Dios, Patria y Libertad". — República Dominicana", y en el reverso el valor representativo de la pieza (2½ cts. nacionales) dentro de un círculo, y en el exergo, el milésimo 1859.

Art. 5º La moneda de vellón llamada "cuartilla", que actualmente circula, continuará en circulación al respecto de 2 piezas por una de la nueva moneda.

Art. 6º Tan luego como las circunstancias lo permitan y se estime conveniente se acuñará moneda de plata para amortizar con ella el nuevo papel moneda, por su valor representativo, si antes no lo hubiese sido con moneda extranjera.

Art. 7º Las deudas, contratos y demás negocios pendientes el día en que el actual papel moneda cese de circular, se arreglarán al cambio de la onza de oro con relación a la fecha en que tuvieron su origen y al lugar de su ejecución; a cuyo efecto, en cada cabeza de Provincia, el Gobernador Político con el Ayuntamiento y dos individuos nombrados por el comercio, a requerimiento de aquel funcionario, formarán una nota que establezca mes por mes el precio de la onza de oro, principiando desde el 1º de Marzo de 1844, hasta el día en que se emita la nueva moneda.

Esta nota se estampará integralmente en el libro de actas, y se fijará una copia de la misma en la puerta del

local de cada Ayuntamiento de la Provincia, la que servirá de pauta forzosa para aquellos arreglos, bien sean judiciales o extrajudiciales.

Art. 8º La presente ley deroga toda otra disposición que le sea contraria, y será enviada al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dada en el Palacio del Senado Consultor, en la Ciudad de Santo Domingo, Capital de la República, a los 23 días del mes de Junio 1859 y 16º de la Patria. — El Presidente del Senado, M. J. Delmonte. — El Secretario, V. A. Reyes.

El Honorable Vice-Presidente Delmonte pidió la palabra, y dijo así: Honorables Señores: Llamados a discutir de nuevo la Ley reformatoria del actual sistema monetario, que fué objetada por el Poder Ejecutivo y quedó en receso en la pasada legislatura ordinaria, creo de mi deber, como autor del proyecto y Presidente accidental del Senado Consultor en las sesiones en que se discutió y sancionó aquella ley, prestarle mi débil apoyo, a ver si alcanza a salir triunfante de la difícil prueba porque debe pasar hoy. Y supuesto que su objeto no es otro que el de sustituir un papel moneda con otro papel moneda, debemos examinarlos ambos y compararlos, a fin de poder decidir cuál de los dos presenta menos inconvenientes, y cuál mayores ventajas al público en su circulación.

Trataré, pues, primero de la papeleta corriente, para ocuparme después de las que dispone emitir la nueva ley, destinada a reemplazar aquella.

El primer vicio de que adolece el actual papel moneda y que salta a los ojos de quien lo ve por la primera vez, es su carencia total de valor representativo definido. En efecto, Señores, el papel moneda de todas partes lleva impreso clara y distintivamente su valor nominal: el tenedor sabe que en tal o cual caja, o en un tiempo dado, ésto al momento de su reembolso, su billete de aquella moneda le vale *tanto*, y que en el ínterin puede hacer uso de él para sus necesidades por el mismo valor que lo recibió; nuestro papel moneda, por el contrario, nada fijo representa, pues simple-

mente reza que el Tesoro público lo garantiza por *tantos pesos*, sin especificar qué clase de pesos, si duros, patriotas, sencillos, etc., circunstancia que hace ilusoria esa garantía; así es que en 1844, cuando se hizo su primera emisión, valía cada peso nacional 40% fuertes, y al presente sólo vale dos quintos de centavo, sin que el portador tenga derecho a reclamar la pérdida que haya de experimentar al recibir esa moneda ficticia en pago de su trabajo, o en trueque de otros valores reales, y ésto por la sencilla razón ya expresada, es decir, por no llevar definido desde luego como obligación escrita, el valor que representa y porque la garantiza el Estado.

El segundo vicio, o mejor dicho el segundo inconveniente, que ofrece al presente nuestro papel moneda, es la depreciación que ha sufrido con motivo de las repetidas emisiones que de él se han hecho en años atrás, necesitándose hoy una gran cantidad de billetes para formar cualquiera suma por insignificante que sea, de que resulta que para contar, por ejemplo, medio millón de pesos nacionales, equivalente a 2.000 duros, es preciso gastar muchos días; y si se reciben sin contar, como acostumbra hacerlo el alto comercio, se pierde cuando menos un 8 o 10 por ciento; y, sin embargo, regularmente se prefiere esto último, porque *el tiempo es dinero*, según el adagio americano, y el comerciante sabe demasiado lo que vale una semana empleada en un trabajo engorroso y sin lucro.

Ese ínfimo valor actual de nuestras papeletas y el grado de deterioro en que se encuentran, que aumenta considerablemente su volumen, merced a los muchos forros y remiendos de que van adornadas, causa graves males al público y aun al Erario. Sabido es que entre las diversas Provincias de la República, hay un gran movimiento mercantil (hablo con relación al estado de riqueza del país), movimiento que varía según los productos de cada una: así, de esta Capital se hacen frecuentes e importantes remesas de papeletas a la Provincia de Azua para comprar las maderas,

los azúcares, cueros, etc., etc. y a la del Seibo, para la compra del ganado vacuno, cera y algunos productos agrícolas, cuyas cantidades vuelven paulatinamente a la Capital para emplearse en mercancías y provisiones extranjeras; y aunque casi nada le vendemos ni compramos a las Provincias del Cibao, no por eso dejamos de hacer con ellas transacciones comerciales de suma importancia, toda vez que en tiempo de la cosecha del tabaco, mandan nuestros comerciantes a comprar libranzas sobre el extranjero a Santiago y Puerto Plata, y pasada la cosecha sucede lo contrario, que vienen del Cibao a hacer aquí igual negocio, esto es, en solicitud de nuestros giros con las mismas papeletas que de nosotros recibieron, produciendo ésto y alimentando un canje y trabazón de intereses entre todas las Provincias con la Capital, de la mayor conveniencia bajo el aspecto así comercial como político.

¿A quién, pues, se le ocultan los embarazos del comercio para remitirse recíprocamente esas enormes cantidades de papel moneda, los costos que ocasiona, y los riesgos a que están expuestas en un largo y penoso viaje, las más veces por montañas y llanuras solitarias, donde no hay posibilidad de conseguir una bestia de carga para reemplazar la que haya podido morirse o inutilizarse en el camino? Verdad es (y sea esto dicho en honor de los dominicanos), que hasta ahora no se ha dado un solo ejemplar de que una de esas recuas conductoras de importantes sumas haya sido asaltada por bandoleros en el tránsito; pero, Señores, ¿quién nos garantiza que esta seguridad haya de durar eternamente? Y aun así y todo, los innumerables ríos que tienen que cruzar, invadeables muchos de ellos en ciertas estaciones del año, y las frecuentes lluvias, y los gastos de peones y bestias para conducir esos valores, colocados por lo común en malos baúles, serones o sacos, no son otros tantos obstáculos puestos inadvertidamente al comercio interior, que tanta protección y fomento demanda de nuestra parte?; y ¿no debemos reputar como uno de nuestros más sagrados deberes el

remover esos obstáculos y todos los demás que obstruyan el desarrollo de la riqueza pública, máxime cuando puede hacerse no sólo sin detrimento, sino también con beneficio de las arcas nacionales? Nadie ignora, Señores, que las necesidades del servicio público exigen diariamente remesas de fondos de la Contaduría General a las Provincias y viceversa, en cuyas operaciones tropieza la Administración con los mismos inconvenientes que experimenta el público de las suyas particulares. Además, los habitantes de los campos que traen a vender sus cosechas al mercado no saben cómo hacerse para llevar consigo los voluminosos paquetes de papeletas que reciben en pago; y la mayor parte, especialmente los que trafican en ganado, prefieren vender por moneda fuerte, aún más barato que por su equivalente en papeletas, no por falta de confianza en la estabilidad del Gobierno, como equivocadamente creen algunos, sino por evitar los inconvenientes arriba relatados, y las pérdidas a que están expuestos con la continua fluctuación de un papel moneda cuyo valor representativo corre a cargo del público. Por otra parte, el poco valor de nuestro signo monetario, da en el extranjero una tristísima idea del estado actual de la República.

Muchos son los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora para atraer a ella la inmigración europea; pero, Señores, ¿quién emigra a un país donde sabe que un peso fuerte vale 250 y a veces hasta 300 de los denominados pesos nacionales? Cuando el hombre abandona la patria que le vió nacer, para trasladarse a lejanas y desconocidas regiones, es por lo común con el objeto de hacer fortuna, y en donde se le dice que el oro y la plata son como las auroras boreales, que sólo se ven de vez en cuando para desaparecer al instante, difícilmente creerá que pueda haber otras riquezas dignas de su atención; y por eso es que la idea que se tiene, aun en las islas más vecinas, de nuestra pobreza, es exagerada y muy distante de la realidad.

Tampoco debemos perder de vista, y éste no es el menor vicio del actual papel moneda, la facilidad que ofrece para su falsificación. Hecho en papel común de muy poco valor y en letras de molde y algunas viñetas que se hallan en todas las imprentas, y revestido de algunos sellos casi imperceptibles, y de dos o tres formas las más veces ilegibles, bastan algunos pesos y un tanto de habilidad para inundar el país de papeletas falsificadas; y aunque es verdad que hasta ahora no se hayan dado entre nosotros sino dos o tres casos de monederos falsos (de ellos ninguno dominicano), no por eso debemos descuidarnos, exigiendo la prudencia que se ponga con tiempo la fortuna pública al abrigo de los efectos de semejante crimen, porque el deber de los que gobiernan, es prever antes que remediar.

Del mismo modo debe llamar nuestra atención el gasto que ocasiona al Erario esa emisión continua de papel moneda, que es el cáncer de la República, pues si hoy reemplazamos los billetes que se acuñaron el año pasado, por hallarse deteriorados, dentro de algunos meses será preciso reemplazar por igual causa los que acuñen hoy, y así hasta lo infinito, si no aplicamos en tiempo el remedio que reclama tamaño mal; y cuenta que el costo de papel, tinta, sellos, impresión, firmas, selladores, numeradores, etc., no baja de un 20 por ciento; por manera que lo que se ha gastado en hacer moneda durante los 16 años que llevamos de existencia política, excede con mucho al actual valor real de toda la que tenemos en circulación. Quizás haya sido éste un mal de difícil remedio en los calamitosos pasados tiempos; pero, Señores, al presente creo que está en nuestras manos el hacerlo desaparecer de una vez. Y no se diga que la mayor parte de los inconvenientes que dejo relatados quedarían evitados con imprimir de aquí adelante nuestras papeletas, en el mismo papel y con los mismos requisitos que dispone la nueva ley que discutimos; porque una cosa es fabricar $900.000 nacionales en billetes iguales a los rosados y negros, gravados que corren de algún tiempo acá, autorizados

BIBLIOTECA DEL CONGRESO República Dominicana

por el reverso y de que posee el Gobierno las matrices, y otra hacer el costo de cuarenta millones de dichos pesos (suma que se calcula en circulación), en papeletas de la misma clase de aquéllas, y cuyos gastos de acuñación excederán quizás los valores que habrían de representar. No olvidemos tampoco, Señores, que en todos los países del mundo hay una cantidad de moneda de vellón que no es posible reemplazar con billetes sin exponerse a verlos muy pronto convertidos en añicos asquerosos y de ningún valor.

Estos son, Honorables Señores, los vicios que contiene y los embarazos que presenta nuestro papel moneda, aun en su curso legal.

Examinemos ahora las ventajas que le lleva el que se trata de emitir para sustituirlo. Muchas son a mi corto entender esas ventajas; y como se presentan de bulto a primera vista, no es preciso gran esfuerzo para demostrarlas; así las expondré según me vayan ocurriendo, aun cuando para ello me aparte del orden en que he colocado los inconvenientes o defectos de que adolece la papeleta circulante.

Primera ventaja: Economía de dinero y tiempo en la fabricación del nuevo papel moneda. Poseyendo el Gobierno, como queda dicho, las matrices en que se tiraron las referidas papeletas gravadas, y que importaron como 5.000 duros, está ya hecho el principal costo. Y como sólo se trata hoy de acuñar algunos millares de billetes, en lugar de los millones que hay en circulación, es claro que su fabricación habrá de costar infinitamente menos que la de éstos; y lo mismo diré con respecto al tiempo que haya de emplearse en revestirlos de los demás requisitos que exige la ley para su emisión; bastarán dos u otros meses al efecto, cuando, para hacer aquellos millones, se necesitarían cuando menos dos o tres años, y el empleo de muchas Comisiones compuestas de individuos particulares sin ningún carácter público, por lo cual no pueden ofrecer la misma garantía que los empleados del Gobierno a quienes comete la nueva ley las firmas y sellos del proyectado papel moneda.

Segunda ventaja: Más garantía. Llevando el dicho papel la cláusula de que el Erario público le garantiza por *tantos centavos fuertes* cada peso, no circulará con la misma velocidad que la papeleta actual, lo que contribuye no poco a su depreciación y podrá muy bien guardarla el que guste, en la confianza de que cualesquiera que sean las ligerísimas fluctuaciones que pueda sufrir su circulación, como todo instrumento de cambio, (sin exceptuar el oro y la plata), hay siempre un deudor responsable, que tarde o temprano está obligado a abonar su valor nominal al portador.

Tercera ventaja: Más durable. Hecho en el papel atafetanado que se emplea en todas partes para los billetes de banco, a la inversa de las papeletas existentes, que están impresas en papel común, como queda dicho, necesariamente habrá de resistir más que éstas a las injurias del tiempo y a todas las vicisitudes a que más que otra alguna está sujeta la moneda no metálica; y por eso es sin duda que el Pueblo, con su natural perspicacia, mira con tanto aprecio las ya mencionadas papeletas gravadas, al extremo de que en los campos se cambian por las que actualmente corren, hasta con un premio de 5 y 6 por ciento; cosa que parece increíble.

Cuarta ventaja: Mayor dificultad para su falsificación. Desde el momento que se necesitan; un papel especial, planchas o matrices hechas exprofeso y que cuestan 5.000 duros, y un gasto cuando menos de otro tanto, no hay duda que ha de ser más difícil su falsificación que la del papel circulante, la que está, por decirlo así, al alcance de todo el mundo. Se sabe que los ocho millones de papeletas falsas que en meses pasados introdujeron dos extranjeros por Puerto de Plata, sólo costaron 300 fuertes. Pero aún suponiendo que el dueño de un capital de $10.000 duros quisiera aventurarlo en una empresa arriesgada y criminal en que va nada menos que la libertad, en vez de emplearlo en un comercio lícito, o en el ejercicio de cualquier otra industria, nunca sería sino para operar en grande escala, a fin de hacer

una rápida fortuna proporcionada a estos riesgos y al principal comprometido; y ésto, Señores, no es posible en un país como el nuestro en que todos se conocen y saben la suma de negocios que puede hacer cada uno, y hasta el capital de que puede disponer.

Quinta ventaja: Más portátil. El proyectado papel moneda será más fino y ligero, y tendrá un valor representativo *cincuenta veces mayor* que el que ahora circula; por manera que el volumen que forme cualquiera cantidad, habrá de ser mucho menor, y mucho menor por tanto el número de billetes necesario para trasportarse grandes valores de un lugar a otro. En otras partes, cuando uno sale a comprar un artículo cualquiera, lleva un criado para cargarlo; entre nosotros es al revés, que el criado se emplea para llevar la moneda con que ha de comprar el objeto, cosa que raya en lo ridículo.

Sexta ventaja: La ejecución de la ley de que se trata, dará por resultado fijar la deuda nacional interior, que hasta ahora sólo aproximativamente puede calcularse. Siendo el nuevo papel moneda enteramente distinto del existente, concluída que sea la sustitución de éste y contada la suma invertida en la operación, ya está logrado el objeto.

No hay que dudarlo, Señores, el público quedará agradablemente sorprendido cuando sepa que el valor real de todas nuestras papeletas apenas alcanza a $160.000 fuertes, suma insignificante para una Nación, por pequeña que sea; y ésto habrá de contribuir poderosamente a conservar a la nueva moneda su valor nominal.

Creo, Honorables Señores, haber demostrado con la claridad que me ha sido posible, los muchos inconvenientes que ofrece el actual papel moneda en su circulación, y todas las ventajas que le lleva el que se trata de emitir para su reemplazo.

Réstame sólo desvanecer el único argumento que hasta ahora se haya opuesto al proyectado papel moneda: argumento aterrador si se atiende a las circunstancias personales

del arguyente; pero de ningún peso, examinado que sea a la luz de la imparcialidad.

Desde 1855, que, siendo Ministro de Hacienda, tuve el honor de someter al Senado Consultor el proyecto de ley en discusión, hasta el presente, el Honorable Bobadilla, Presidente entonces de aquel Ilustre Cuerpo, como lo es hoy, no ha cesado de combatirlo y siempre con las mismas armas, esto es, alegando en su contra los males sin cuento que lleva consigo todo papel moneda, y pintándolos con unos colores capaces de arredrar al más denodado partidario del nuevo sistema monetario.

Sin embargo, Señores, para que se vea que no esquivo el cuerpo a la dificultad, y que, lejos de pretender descolorar el cuadro que presenta Su Señoría lo recargo de espesas sombras, seguro de que en nada perjudica a mi propósito, me tomaré la libertad de insertar aquí lo que sobre el particular trae Flores Estrada en su curso de Economía Política: "De consiguiente, dice ese sabio español, aunque el numerario de un país no constituye, comunmente, sino una parte muy pequeña de su fortuna, la depreciación del papel moneda destruye sus riquezas más importantes. Todos los productos agrícolas, transformados y multiplicados por la industria fabril y comercial, son distribuídos entre los habitantes por medio del numerario. Cuando éste se haya expuesto a alteraciones tan frecuentes como las del papel moneda, toda la riqueza nacional se distribuye por una medida falsa. Entonces, todas las relaciones de intereses pecuniarios se alteran; los contratos son violados, y dan origen a injusticias; los medios de existencia vienen a ser más dispendiosos; el dinero desaparece; los capitales se exportan; el contrabando se hace la ocupación del comerciante; la industria se extingue; la miseria se acrecienta; los robos se multiplican; el Erario público sufre; todos los individuos pierden; y con la disminución de las fortunas particulares, la Nación ve desvanecerse su prosperidad y su riqueza."

He aquí, Honorable Señores, una pintura fiel y patética de los males que prevé mi digno antagonista: males que, a mi modo de ver, han pasado ya en su mayor parte para nosotros, aunque no sin dejar profundas huellas en la fortuna pública; habiendo sido el Pueblo Dominicano el que ha perdido lo que va de $40, 50, 60 nacionales, etc., etc., que valía la moneda de oro en el año de 1844 y siguientes, a $4.000 que vale hoy y cuyos quebrantos han soportado nuestros compatriotas con una resignación y constancia increíbles, sin duda porque con ellos, como lo he dicho en otro lugar, han comprado, en cierto modo, su libertad o independencia política.

Ahora bien, Honorables Señores, ¿puede con velos de razón y al abrigo de las doctrinas abstractas de los economistas, condenarse magistralmente la ley que se discute, sin atender a la alternativa en que estamos de escoger entre dos males y a lo excepcional del caso? ¿Se teme en realidad que el proyectado papel moneda cause de nuevo todos esos trastornos al Estado? ¡Cómo! ¿El dicho papel habrá de ser otro caballo troyano, o una especie de caja de pandora que lleve en su seno la ruina de la República? ¡Y la papeleta circulante, Señores! ¿Está por ventura exenta de esos inconvenientes, o tiene por el contrario los mismos vicios y todos los más que le son peculiares y que quedan relatados?

Si se tratase hoy de emitir papeletas por primera vez para reemplazar dinero, vendrían muy bien aquellos argumentos, propios del dominio ideal de la ciencia y de la pura teoría, y ciertamente que serían fundados los temores y escrúpulos de nuestro Honorable Presidente; pero tratándose únicamente de sustituir un papel moneda con otro papel moneda, como dije al principio, el solo punto de la dificultad está en saber cuál de los dos es menos malo, a fin de poder elegir; y esto es, Señores, a lo que deben concretarse nuestros discursos: todo lo demás me parece incongruente.

Tampoco se crea, Honorables Señores, que yo defienda la ley que se discute *unguibus et dentibus*, esto es, a todo

trance, y que no admita la más ligera modificación. Tan lejos estoy de eso, que yo mismo voy a proponer dos enmiendas: la primera, que en vez de acuñarse $900.000 nacionales en los nuevos billetes sólo se hagan $400.000, y los 100.000, en moneda de vellón, de que trata la ley, equivalente el todo a $200.000 fuertes, suma más que suficiente, atendido el curso actual de nuestras papeletas, para recoger los 40 millones en circulación, guardándose el remanente en Caja para un caso urgente; con lo que se economizará además la mitad del costo de acuñación; y la segunda, que el Tesoro público reciba la nueva moneda en pago de todos los derechos de importación, exportación, toneladas, etc., a fin de que el oro y la plata vengan a quedar en el comercio como una mercancía; pues es incuestionable que la precisión en que se ve el comercio de procurarse cierta cantidad en moneda fuerte, que rara vez pasa de $300 para despachar un buque, es lo que contribuye más que nada a desestimar la moneda nacional.

He concluído, Honorables Señores. Tengo la íntima convicción de que, con la adopción del nuevo sistema monetario, desaparecerán la mayor parte de los embarazos que causa al comercio y al público en general la papeleta circulante, y habrá de mejorar considerablemente la situación del país. Si tal no fuere vuestra opinión, lo sentiré; pero me consolaré con haber cumplido mi deber con la independencia propia de un Representante del Pueblo, y la Nación juzgará.

El Honorable Presidente Bobadilla se expresó en los siguientes términos: Señores: No habiendo asistido por causa de enfermedad a la discusión y sanción de la Ley que dió el Senado para reformar el sistema monetario de la República, de la cual nos ocupamos hoy, porque objetada por el Poder Ejecutivo una nueva discusión está abierta, conforme a la Constitución, estoy en el caso de poder opinar libremente, como lo haré en cumplimiento de mi deber, principalmente en una materia de tanta transcendencia pública,

en que se versan los intereses vitales de la sociedad. Para darme a entender mejor, desenvolveremos algunos principios que son verdades eternas e incontestables.

Los elementos del valor son en una parte, la extensión de las necesidades que la sociedad tiene de una cosa a cierto precio; y de otra parte, la cantidad de la cosa de la sociedad a que los productores pueden proveer a ese precio.

El fundamento de toda moneda se mira, como la de cualquiera otro objeto, sobre la cantidad de la cosa que una persona consiente dar a otra en cambio. Resulta de esto que la moneda en todos los pueblos es una mercancía que se vende y se compra como cualquiera otra.

Las monedas han sido y son de diferentes materias, pero las que reunen mayores ventajas son el oro y la plata, porque son inalterables y homogéneas, porque divididas en pequeñas porciones no alteran su valor, pues que por medio de la fusión pueden reunirse en un todo sin perjudicar sus propiedades, y, en fin, porque el uso de la moneda en metales preciosos se derrama por todo el globo y posee en supremo grado su mérito propio, asegurándole al que la tiene una mercancía usual en todo el mundo.

Algunos gobiernos han emitido lo que se denomina comunmente papel moneda, que es una promesa hecha de pagar al portador cierta cantidad; pero eso, como dice un célebre economista, no es sino una promesa ilusoria cuando ninguna oficina está abierta a los portadores para hacerse entregar la cantidad de oro o plata estipulada en el billete. Cuando él puede ser reemplazado, su valor, la facultad que tiene de comprar y de hacerse el objeto de un cambio, nada tiene de admirable, tiene un valor igual a la del metal de que hace poseedor al que lo tiene, desde el momento que se quiere: entonces es un signo representativo de un valor real, y los signos de este género son de un grande uso en la economía de la sociedad. Más la moneda papel, no pudiendo ser reembolsada cuando se quiere, no representa realmente ningún valor....; pudiera creerse que la promesa, aunque ilu-

soria, de moneda metálica, bastaría para darle un valor. La experiencia prueba lo contrario, y se ha visto papel moneda como los billetes del Banco de Lar, en Inglaterra, y más recientemente los asignados franceses, caer en nada; sin embargo de la promesa contenida en el billete y de la grande abundancia de oro y plata que existe entre esas naciones de primer orden. Los vales reales en España, los billetes de Portugal, los emitidos en Rusia, ¿pero para qué ir afuera? Los emitidos entre nosotros mismos no han podido conservar su valor y han producido funestos efectos. La revolución del 7 de Julio se precipitó por la expoliación que el ex Presidente Báez hizo a las propiedades particulares de los ciudadanos de la República, con una emisión injustificable de veinte millones de pesos; y los efectos de los muchos más que emitió para sostener con injusticia el sitio de esta plaza, cuyos perjuicios estamos sufriendo, como una prueba inequívoca entre otras de los ruinosos efectos del papel moneda.

No se me arguya que, habiendo ocupado diferentes destinos importantes en el país desde su gloriosa Separación, he consentido a la emisión del papel moneda. Presidente de la Junta Central Gubernativa, que fué el primer Gobierno creador, de acuerdo con el Dr. J. M. Caminero, que era miembro de ella, nos opusimos a la creación del papel moneda, hasta que, por fin, hubimos de ceder a la fuerza del imperio de las circunstancias. Esto produjo nuestra eliminación de la Junta por una facción, que incluía ideas proditorias. Y restituído el orden por la enérgica intervención del Ilustre General Libertador; reorganizada de nuevo la Junta, habiendo efectuado antes una reunión de comerciantes y de personas notables que aseguraron mantendrían el cambio de la onza a cuarenta pesos como entonces corrían, y habiendo al mismo tiempo venido una Comisión de las Provincias del Cibao, compuesta, si mal no me acuerdo, del General Juan Franco Bidó, de Dn. Cristóbal Moya y otro individuo más; entre otras cosas pedían entonces la emisión de papel mone-

da en nombre de los mandatarios de aquellos pueblos, y así se hizo, sacrificando yo mis propias convicciones, porque un empréstito, por gravoso que hubiera sido, o cualquiera otra medida, habría sido menos mala que el cáncer que corroe nuestra sociedad.

Cuando se dió un Decreto en 4 de Enero de este año para poner en circulación *cincuenta mil pesos* fuertes en billetes de Caja, sin embargo de que se aparentaban ciertas garantías, yo fuí el único que me opuse y salvé mi voto, y demostrando la experiencia los inconvenientes de esta medida, tuvo el Senado que dar en Febrero, a excitación del Ejecutivo, un Decreto derogando el anterior.

Uno de los grandes inconvenientes del papel moneda, dice el mismo economista, es que ofrece una ventaja a los falsificadores: "Desde el momento que con materias primeras de poco valor (como tinta y papel) se puede hacer una mercancía que excite, la ambición de los falsarios se despierta; un premio espantoso se ofrece a los más inteligentes; el hombre de buena fe está perpétuamente lleno de aprehensiones; la sociedad se aflige de tener que castigar a muchos. En Inglaterra el número de condenados por falsificación de billetes de Banco ha sido espantoso. Es un triste cortejo del papel moneda; y si con mucho orden se puede encontrar un agente económico de las transacciones sociales, por otra parte la tentación que ofrece a los falsificadores, es un contrapeso que no puede mirarse con negligencia".

Siento infinito no ser de la opinión de mis colegas que han votado por la sanción de la Ley sobre reforma del sistema monetario, y mucho más queriéndole dar a los billetes un valor que no tiene ni tendrán jamás en moneda fuerte. De aquí resultaría un grave perjuicio para la Nación, cual es: que si hoy con doscientos mil pesos se puede recoger el papel moneda que existe en circulación, el día que hubieran de recogerse los billetes que pretende la ley que nos ocupa, no lo haría el Erario público con más de un millón de pesos fuertes.

Ahora, si lo que se trata es de hacer billetes en papel de seda, dorado si se quiere, sin que se estipule cantidad de moneda fuerte y sin que se grave el Gobierno y la generalidad con una contribución de semejante especie, yo no me opongo a que se hagan lo más bonito que se pueda; pero, de lo contrario, opino como el Poder Ejecutivo, que no pase la ley, y que quede en receso hasta que pueda proporcionarse una moneda metálica que tenga un valor auténtico y las demás garantías necesarias para la propiedad de los asociados.

El Honorable Delmonte replicó: Todo lo que acaba de decir el preopinante, es inconcuso; invocado en su oportunidad, nada habría que replicar, pero permítaseme que lo repita, no es cuestión hoy, como en 1844, de arbitrar, por medio de la creación del papel moneda dominicano, para atender a las urgencias del Erario; y sí sólo de reemplazar con una papeleta, siquiera mala, otra infinitamente peor.

Por lo demás, no concibo Señores, el cómo, emitiéndose en la nueva moneda la limitada cantidad equivalente a 160 o 200 mil duros, pueda perder la Nación en un tiempo más o menos corto, los millones de que habla el Honorable Bobadilla; a menos que tras de aquella emisión se hagan otras más importantes; en cuyo caso, es claro que cuantas papeletas salgan a la circulación, por grande que sea su número, habrán de buscar siempre el nivel de la suma en moneda real, representada por el actual papel. Mas no puedo persuadirme, Señores, que sea esa la intención del actual Gobierno, vista la cordura con que inauguró su Administración, haciendo parar la prensa, cansada ya de gemir para abastecer las arcas nacionales; pues de lo contrario *frustra laboramus*.

El Ministro del Interior, apoyando la opinión fundamental del Honorable Bobadilla, opinó en contra de dicha ley con razones que expuso largamente sobre el demérito indispensable del nuevo papel moneda que se quería crear, sin la garantía efectiva de un capital igual del valor que

República Dominicana BIBLIOTECA DEL CONGRESO

representase la emisión: sobre lo ilusorio de la medida y el gravamen real para el Estado.

El Honorable Manuel Valverde combatió esta opinión, esforzándose en probar la dificultad de que desmereciese la nueva moneda, siempre que no se emitiese más de la cantidad necesaria para recoger la papeleta actual; bastando, en su concepto, un capital de la tercera o cuarta parte de los valores emitidos para impedir ese demérito.

S. E. el Presidente de la República, hizo presente la necesidad apremiante de introducir algunas mejoras en el actual sistema monetario, las tentativas que varias veces habían sido frustradas por los acontecimientos; y dijo que él apoyaría siempre cualquiera mejora que fuese posible y cierta. Que, además de que apreciaba en mucho todo lo dicho por el Honorable Delmonte, creía conveniente disminuir el valor que daba la ley a la nueva papeleta, por razones que expresó en apoyo de esta opinión; y propuso la modificación de la ley, haciendo él mismo la siguiente:

1ª Que el peso nacional valiese dos centavos fuertes; y 2ª que se estableciese por una ley la 4ª parte de los derechos de importación en moneda fuerte, dejándose esta suma y la de los demás derechos pagaderos en moneda fuerte, para garantía del nuevo papel moneda.

El Honorable Manuel Ma. Valverde y el Ministro de Justicia e Instrucción Pública acogieron esta proposición.

El Honorable Delmonte: Señores: Disiento de la opinión del Señor Presidente en todas sus partes. Su proposición, menos que una enmienda a la ley en cuestión es casi un nuevo proyecto que, a mi manera de ver, presenta grandes inconvenientes al ponerlo en práctica, porque, o se fabrican papeletas de valor representativo de 2.00 fuertes, iguales a las que dispone emitir aquella ley, en cuya operación se gastaría una suma exorbitante para el país, en las actuales circunstancias (cada billete de esos cuesta 1.00 fuerte), o bien se harán de $40 ó 50 nacionales, valor nominal 20, o 25 fuertes; y entonces ¿qué signo representará el peso domini-

cano? o más claro, cuál será la unidad monetaria en la República?

Mucho tendría que decir también respecto a la condición de pagarse una parte de los derechos de Aduana en moneda extranjera; pero veo la mayoría tan pronunciada en favor de la proposición de S. E., que lo creo inútil, bastando para refutarla lo que sobre el particular he expuesto con mi memoria de hoy. Señores: al sostener en ella que el proyectado papel moneda, en tanto que su emisión se limite a la cantidad necesaria para recoger la papeleta circulante, ha de fluctuar siempre en derredor de su valor representativo, sin desmerecer sensiblemente, contraería una especie de responsabilidad moral con la Nación. Desde el momento, pues, que se impone al comercio la obligación de procurar moneda extranjera para pagar derechos al Fisco, preciso es que a menudo tenga que hacer sacrificios para conseguirla, con mengua del valor representativo de la moneda nacional: por lo cual, desde ahora me doy por descargado de aquella responsabilidad.

Dilucidada la materia y puesta a votación, decidió la mayoría admitir este proyecto que modifica la ley sancionada por el Senado, y que se nombrase una Comisión para redactarla, conforme a las bases ante dichas, y fueron nombrados para esta Comisión, los Honorables Bobadilla y Delmonte y el Ministro de Hacienda y Comercio, quedando a cargo de la Comisión el fijar los diferentes tipos de los billetes que hayan de emitirse.

El Ministro Felipe de Castro, y el Honorable Bobadilla, expusieron que se someterían a la mayoría, pero que habiendo manifestado los principios en que fundaban sus opiniones, no desistían de éstas.

Quedó acordado que el proyecto que presentase la Comisión, sería discutido por los dos Poderes del Estado. Concluído esto, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- M. Valverde.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 27 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Manuel Ma. Valverde, y Melitón Valverde, Secretario, se abrió la sesión.

Se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

Dióse lectura a dos oficios, uno del Ministro del Interior y el segundo del de Hacienda, en los que proponían los siguientes proyectos de decretos.

El primero dice así:

Art. Unico. Se autoriza al Gobierno para aplicar al fomento de la agricultura las cantidades necesarias, empleándolas en aplicaciones reproductivas y dando cuenta al Senado en su oportunidad.

El segundo contiene lo siguiente:

Art. 1º Desde el 1º de Julio de este año de 1860, los buques de las naciones amigas con las que la República no tiene celebrado Tratados, quedarán asimilados, en cuanto al pago de los derechos de importación, exportación, toneladas, faro y todos los demás que conciernen al comercio, a los de las naciones más favorecidas.

Art. 2º Quedarán privados del beneficio de esta medida los buques de aquellas naciones que, transcurrido un año después de esta publicación, no hubiesen acordado a los dominicanos igual beneficio.

Fueron tomados todos en consideración para discutirlos.

En vista de una nota oficial del Poder Ejecutivo con fecha de 25 de Abril, en que dice que contando con la firmeza y solidez con que está asegurada la tranquilidad pública, solicitaba el acuerdo del Senado para hacer cesar por ahora el destierro en que se encuentran los Señores Blas Vallejo, Tomás García, Manuel de Jesús Echavarría, Marcos Núñez, Juan Contín y su hijo, José Antonio Sanabia y su hi-

jo, Marcos Polanco (músico), Alejandro y José Ma. Aguiar, José Antonio Valenzuela, José Núñez, Miguel Laucé, Mauricio Rodríguez, Marcelino Miniel, Pedro de Castro y Castro, Juan José Faura, Pedro Salazar, Elías Mella, Manuel Márquez, Reimundo Familia, Miguel Ortega, Martín García, Andrés Luciano, Mondecir García, Manuel Aybar, Luis Pambrend, Félix Aguirre, Basilio Luciano y familia, Horacio Alezar, Tomás Bobadilla, Isaac Bron, Fermín Hamilton, Inocencio Gatón, José María Caminero, Angel Guerra, Juan Rodríguez, Juan de la Rosa Arache, José Dolores Peguero, Manuel Rodríguez, Juan Francisco, Eusebio Serrano y Manuel Candelaria, expulsados por opiniones políticas.

El HONORABLE PRESIDENTE tomó la palabra y dijo: Honorables Senadores: El Poder Ejecutivo pide el acuerdo del Senado para amnistiar cuarenta individuos, más o menos, todos partidarios de la Administración Báez; unos que se fueron voluntariamente despreciando las garantías que les daba la capitulación con que fué rendida esta plaza y los otros que han sido expulsos de aquí como enemigos de la actual Administración, del reposo público, y adherentes de los acontecimientos que tuvieron lugar en Azua, el 7 de Setiembre último, y que tantos males han ocasionado al país.

No deja duda que todos ellos han hostilizado al país y fomentado la guerra civil, por lo que se han hecho acreedores a la pena que sufren y aun a otras mayores previstas por las leyes.

Se nota menos que ninguno ha hecho su sumisión al Gobierno ni han pedido volver, pretextando abjurar sus crímenes y errores.

Por otra parte, aunque el país esté tranquilo por ahora, no deja de existir Báez, existe también su partido y existen maquinaciones aquí y en el extranjero, pues se sabe que esos mismos se alimentan con la esperanza de venir para degollar y cometer otros crímenes atroces, por lo que creo que no es oportuno ni conveniente por ahora conceder esa gracia y mucho menos sin haberla impetrado los interesados, ni

sin haber hecho siquiera una promesa de sumisión a la autoridad y a las leyes, aunque hubiera sido por fórmula y para salvar siquiera las apariencias.

Por lo que opino se diga al Poder Ejecutivo que por ahora cree el Senado que la venida de esos hombres al país puede perjudicar el reposo y la tranquilidad pública, y que más tarde puede haber lugar, cuando ellos con su conducta y procederes se hagan acreedores, a la clemencia nacional y a la benevolencia de sus conciudadanos. Este es mi parecer.

El Honorable Delmonte se expresó en los términos siguientes: Señores Senadores: Las razones que acaba de exponer el Honorable Presidente, podrán ser de gran peso, y si yo no obedeciera sino a mezquinos resentimientos personales, quizás, adoptando su opinión, rechazaría también la proposición del Poder Ejecutivo; pero como Representante del Pueblo es otro mi deber. Señores, en todo trastorno político, los más inmediatamente amenazados son los que se encuentran a la cabeza del Gobierno, y yo debo creer que el nuestro está en perfecta seguridad al proponer este acto de clemencia, por lo cual soy de opinión que el Senado debe prestar su cooperación para ejercer esa preciosa prerrogativa del Poder, accediendo al indulto pedido.

El Honorable Melitón Valverde dijo que el Poder Ejecutivo estaba en perfecta aptitud de apreciar el grado de seguridad actual de la República, y que él debía juzgarla muy firme y ventajosa cuando proponía se abriesen las puertas de la Patria a los individuos que señala en su nota de hoy; que, por lo tanto, no creyendo, en esta virtud, ya peligroso el dar oídos a los sentimientos de humanidad, opinaba porque se accediese a la solicitud.

Y se acordó por mayoría prestase el Senado su acuerdo para la gracia que deseaba ejercer el Poder Ejecutivo, a quien se contestaría remitiendo copia de esta acta con oficio político en forma.

Terminado esto, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- M. Valverde.- M. M. Valverde.*

SESION DEL 30 DE ABRIL DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión en presencia de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel Ma. Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

En conformidad a la orden del día, sufrieron la primera lectura constitucional los dos proyectos de decreto que ha propuesto el Poder Ejecutivo y que trata el acta anterior.

En seguida se dió lectura a un oficio del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, que dice así:

Señor Presidente: En este Ministerio se ha recibido la nota de V. S. de fecha 23 del presente mes, como asimismo los documentos que en ella me incluye. He sometido al Poder Ejecutivo la solicitud que a ese Honorable Cuerpo dirigió el Vice-Presidente del Colegio Seminario, pero nada se ha resuelto aún sobre el particular, por habérselo impedido sus muchas ocupaciones.

Esta circunstancia me priva del gusto de dar a V. S. el informe que me pide sobre los diferentes puntos que contiene la precitada solicitud, asegurándole, no obstante, que haré todos mis esfuerzos por obtener la decisión del Gobierno, a fin de satisfacer lo más pronto posible los deseos del Honorable Senado. Dios guarde a V. S. muchos años. Firmado: Jacinto de Castro.

Se dió lectura a la Memoria de Relaciones Exteriores, redactada en los términos siguientes: (*)

Acabada esta lectura, la Comisión encargada de abrir concepto sobre dicha Cartera, presentó el siguiente informe:

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 16.

Honorables Señores: La Comisión a la que habéis tenido a bien encomendar el informe sobre la Memoria de Relaciones Exteriores, tiene el honor de exponeros en la forma siguiente, el fruto de su examen concienzudo y detenido. La Comisión se complace en que las dificultades pendientes entre nuestro Gobierno y el de la Dinamarca, a consecuencia de la captura hecha por la flotilla de Báez de algunos buques daneses durante el bloqueo establecido frente a Puerto de Plata, se hayan arreglado de una manera conveniente y satisfactoria, sintiendo al mismo tiempo que la cuestión suscitada de entre nuestro Gobierno y el del Rey de Holanda, con motivo del embargo hecho por la República de la bombarda "Terror", que fué vendida fraudulentamente y que pertenecía a la Marina de Guerra dominicana, no esté igualmente zanjada. Pero la Comisión confía en que haya quedado planteada como el Señor Ministro asegura, en términos " que ni dejan duda sobre su éxito, ni permiten que nazca de ella dificultad alguna".

La Comisión se ha impuesto con suma satisfacción del Protocolo que transa y fenece la cuestión suscitada entre nuestro Gobierno y los de Inglaterra, Francia y España, con motivo de la desmonetización del papel moneda emitido por Báez, cuestión erizada de dificultades, y cuyo arreglo presenta la rara circunstancia de haber efectuado a gusto y contento de todas las partes interesadas.

Según una comunicación oficial dirigida al Gobierno, nuestro Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario en la Corte de Madrid, fué recibido por S. M. la Reina.

La Comisión extraña mucho que el Ministro encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores, al dar cuenta de todo lo concerniente a su ramo, a S. E. el Jefe del Poder Ejecutivo, no le haya dicho una sola palabra acerca de esta misión sin duda importante.

Por lo demás, la Comisión se congratula de que dicho Señor Ministro se encuentre en la aptitud de poder asegurar que la política de las naciones que han reconocido la soberanía de la República, no es, ni puede ser otra cosa que la misma que ha adoptado nuestro Gobierno; sobre todo, si como parece indicarlo S. S. esa política tiene por norte

nuestra completa independencia de todo extraño influjo, el mantenimiento de la dignidad nacional, la conservación de la integridad del territorio y el sostenimiento firme de los derechos de la Nación.

Tal es el informe que la Comisión, después de un maduro examen y de profundas reflexiones, ha creído conveniente presentaros. Santo Domingo, Abril 30 de 1860. Bobadilla. — M. J. Delmonte.

Habiendo terminado sus trabajos las diversas Comisiones encargadas de formular los informes sobre las Memorias del Ministerio, se acordó traerlas a la vista para tomarlas en consideración en la sesión próxima, en virtud de lo dispuesto en las anteriores.

El Honorable Abreu manifestó que, aunque se le había acordado una licencia, no hacía uso de ella por el presente, reservándose para más tarde el emplearla; y se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 1º DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Vice-Presidente Manuel Joaquín Delmonte, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel Ma. Valverde y Melitón Valverde, Secretario; se abrió la sesión. Leída el acta de la anterior, fué aprobada.

Trayendo la orden del día el examen de las Memorias ministeriales, se presentó éste dándo lectura al informe que presentó la Comisión, sobre la Cartera de Justicia e Instrucción Pública.

El Honorable Bonilla propuso que se revisase la Ley sobre el Comercio Marítimo, en virtud de la indicación del Ministro y del dictamen de la Comisión. La màyoría opinó a favor de la proposición, y el Presidente entonces nombró una Comisión compuesta de los Honorables Delmonte, Bonilla y Manuel María Valverde para que presentasen el proyecto de revisión de dicha ley.

Se resolvió también, en cuanto a la observación que hace el Ministro sobre el Código Penal Militar, que el Senado se ocuparía de ésto cuando el Poder Ejecutivo presentase su proyecto, lo mismo que estaba dispuesto a reformar la Ley de Universidad, desde el momento que le fuese enviado el proyecto de ley de que trata la Memoria. Con esto quedó concluído su examen y levantada la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- M. Valverde.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 2 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Manuel Joaquín Delmonte, Vice-Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Manuel Ma. Valverde y Melitón Valverde, Secretario.

Se leyó la orden del día y se procedió conforme a ella, dando la segunda lectura constitucional a los dos proyectos de decreto propuestos por el Poder Ejecutivo.

Continuó el examen de las Memorias ministeriales, y concluído el de la Cartera de Justicia en la sesión anterior, tuvo lugar en este día el de la Cartera del Interior, Policía y Agricultura.

No hubo ninguna observación; y el Senado declaró que estaba dispuesto a cooperar a todas las mejoras que proponía el Ministro, a discutir los proyectos que se le presentasen, y cuando se le indicasen los medios para satisfacer a esos gastos.

Pasó la discusión sobre la Cartera de Hacienda y el Honorable Manuel Valverde propuso con aprobación de todos los Senadores, que para cumplir con el 4º inciso del Art. 26 de la Constitución, se pidiese al Ministro el Presupuesto General del Estado para que el Senado pudiese dar el de los Gastos Públicos.

El Honorable Presidente hizo a esta proposición la adición siguiente, que fué acogida en esta forma:

Que se invitase al Ministro a presentarse en el Senado para que hiciese las aclaraciones siguientes:

1º Que informase sobre la razón por la cual no se han impreso y publicado las Cuentas Generales de la República del año pasado, conforme a la Constitución y a la Ley de Hacienda.

2º Sobre el estado en que se encuentra la Hacienda Pública y a cuanto ascenderán sus rentas, sus ingresos y egresos; y además, su deuda interior y exterior.

3º Por qué no se ha presentado la Ley de Presupuestos para el año próximo venidero.

4º Si se ha planteado y puesto en ejecución la Ley que dió el Senado el año pasado, sobre retribuciones a los empleados públicos.

5º Si también está en ejecución la Ley de Hacienda y qué efectos ha producido.

Y se acordó oficiar al Ministro para que en la sesión del Lunes viniese al Senado a dar las aclaraciones que se le pedían.

Leídos seguidamente los informes sobre las Carteras de Guerra y Marina y de Relaciones Exteriores, fueron aprobados ambos por la mayoría, y los Honorables Melitón y Ml. María Valverde dieron su voto negativo para la aprobación del informe de la Comisión sobre esta última Cartera; y con

República Dominicana BIBLIOTECA DEL CONGRESO

respecto a la primera, el Senado a unanimidad declaró lo mismo que en las examinadas antes: que estaba dispuesto a discutir el proyecto de ley que ofrecía el Ministro del ramo.

Terminados los trabajos de examen, que mandaba la orden del día, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 4 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario, se abrió la sesión.

Se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

Dióse la 3ª lectura constitucional a los dos proyectos de decreto que propuso el Poder Ejecutivo con fecha 25 y 26 de Abril próximo pasado, y no se les hizo ninguna observación.

El Honorable Presidente propuso que se formulase la ley de Patentes para el año venidero de 1861, y aprobada la proposición por todos los Senadores, nombró en Comisión a los Honorables Vice-Presidente y Secretario del Senado para formular el debido proyecto de ley.

No teniendo los Honorables Senadores ninguna proposición que hacer, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- P. P. de Bonilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.*

SESION DEL 7 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, Secretario, se abrió la sesión, hallándose presente el Señor Ministro de Hacienda y Comercio.

Se leyó el acta de la anterior, y fué unánimemente aprobada.

Habiéndose recibido un oficio del Ministro de Hacienda, por el cual, en contestación al del Senado, ofrecía presentarse en esta sesión, para dar a esta Honorable Corporación las aclaraciones que le pidiese, y estando presente, como queda dicho, el mencionado Ministro, se procedió a la orden del día.

El Honorable Presidente expresó al Señor Ministro el objeto de su llamamiento, manifestándole la necesidad que el Senado tenía de saber el estado de la Hacienda pública para poder armonizar sus resoluciones con el estado del Tesoro; para lo cual el Senado había determinado hacerle las siguientes interpelaciones:

1º Cuál es la razón de no haberse impreso aún y publicado las Cuentas generales de la República pertenecientes al año pasado, conforme a la Constitución y a la Ley de Hacienda.

2º Sobre el estado en que se encuentra y a cuanto ascenderán sus rentas, sus ingresos y sus egresos y además su deuda interior y exterior.

3º Por qué no se ha presentado la Ley de Presupuestos para el año próximo venidero.

4º Si se ha planteado y puesto en ejecución la ley que dió el Senado, el año pasado, sobre retribución a los empleados públicos.

5º Si también está en ejecución la Ley de Hacienda y qué efectos ha producido.

Habiéndose hecho las interpelaciones por separado, contestó el Ministro: Que hacía tres meses, se le encargó de la Cartera del Ministerio de Hacienda; que su primer cuidado fué examinar el estado de las Cuentas que aun no se habían acabado de centralizar en la Contaduría General, pues que varias Administraciones, con motivos de la guerra civil, las habían retardado; y que, por medio de sus reiteradas instancias, había logrado allí la centralización; pero que en la Cámara de Cuentas faltaba aún por examinar un trimestre de las Cuentas del año pasado; pues por eso dijo en su Memoria que esperaba presentar otra sobre las Cuentas generales del Estado.

En cuanto a la deuda interior de la República, dijo, no podía saberse fijamente a cuanto ascendía, porque no se habían acabado de recoger ni pagar todos los vales dados durante la guerra civil, pero que, según su parecer, no se deberán más de ocho mil pesos fuertes; que el Senado sabía que, con su acuerdo, el Poder Ejecutivo había nombrado una Comisión para residenciar las diferentes oficinas de Hacienda pública de esta Ciudad y Puerto Plata, y que aun no se le habían sometido sus resultados; que el Gobierno ha pagado más o menos trescientos mil pesos fuertes de gastos hechos en lá guerra civil; que se han amortizado de ocho a diez millones de billetes deteriorados y que ésto no ha dejado de producir un conflicto.

Hasta ahora, continuó, no se podía calcular la deuda externa, porque aun no se habían recogido los billetes de Caja emitidos durante la Administración Báez, pues que la Comisión no había terminado sus operaciones. Con respecto al Presupuesto de Gastos Públicos, dijo que hará todos sus esfuerzos por presentarle, aunque no fuese sino aproximadamente, para satisfacer de un todo los deseos del Senado.

El Honorable Manuel M. Valverde expuso al Ministro que había llegado a su conocimiento la operación que se efectuaba en la Contaduría de los billetes emitidos durante la Administración Báez, lo que producía el cálculo siguiente:

Contó el Contador especial en la primera semana	600.000
En la segunda	500.000
Total de dos semanas	$ 1.100.000

A razón de $25 por mes ha ganado en este tiempo al cambio de 250 por uno, 3.125 pesos nacionales corrientes.

Hecho el cálculo proporcional, resulta que cuesta la contaduría de los billetes que se amortizan $. 3-52 papeletas corrientes por cada cien de aquellos que se cuentan, o sea un F. 7.04 por ciento de los mismos billetes. Así, calculando que son 80.000.000 y siguiendo la proporción, resultará que costará al Gobierno la contaduría de 1.184 pesos fuertes, y se emplearán 47 meses y una semana.

El Ministro contesta: que era cierto lo que acababa de exponer el Honorable Manuel María Valverde; pero que él había tomado ya disposiciones para evitar esos inconvenientes.

El Honorable Presidente, le hizo presente que desearía mucho se comprendiese que tanto el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo, sin las Cuentas de la República no podían tomar medidas acertadas y que el año venidero se presentaría un conflicto de grande importancia, porque no pudiendo extraerse suma alguna del Erario público, fuera de los fondos decretados por la Ley de Presupuestos, si ésta no tenía efecto, se hacía una violación al Pacto Fundamental, ni era posible que los negocios públicos marchasen sin la legalidad y arreglo debido, y que estas consideraciones eran las que habían impulsado al Senado para las presentes aclaraciones. A lo que contestó el Ministro que estaba muy per-

suadido de esta verdad y que él también deseaba la legalidad y el mejor orden posible, y que sus esfuerzos tendían constantemente a introducirle y sostenerle en todos los ramos sujetos a su inspección.

Y para dejar contestadas las otras interrogaciones; añadió que las rentas de la República consistían en los derechos de importación y exportación, en las de patentes, papel sellado, registro y bienes nacionales, de manera que podían calcularse los ingresos a *cuatrocientos mil pesos* aproximadamente, por estar sujetos estos ramos a eventualidades. Respecto a la Ley sobre retribuciones a los empleados públicos, había sido imposible ponerse en ejecución por las grandes atenciones que habían ocupado el Gobierno, teniendo que pagar la deuda interna y otros gastos absolutamente indispensables que habían absorbido todos los ingresos del Erario público. Finalmente, que la Ley para el régimen de la Hacienda pública dada el año pasado, estaba en vigor y producía muy buenos efectos, con lo que creía haber satisfecho los deseos del Senado.

Este le reiteró que todos sus conatos se cifraban en marchar de acuerdo con el Poder Ejecutivo y en que hubiese la regularidad y el orden debidos en la administración e inversión de los fondos de la Nación, de que no se consideraban sino meros administradores. Concluído ésto, se retiró el Señor Ministro.

Se dió lectura a dos solicitudes: la primera hecha por los Señores Carlos Nouel, Apolinar de Castro y Manuel de J. Heredia, y la segunda por las autoridades del Puesto Militar de Macorís, e impuesto el Senado de su contenido, pasaron a la Comisión de peticiones; y sin más nada se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 8 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, Secretario, se abrió la sesión.

Se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

Trayendo la orden del día la discusión de los decretos que ha propuesto el Poder Ejecutivo, se procedió a ellas, y discutido el artículo único del primero que dice así: *Se autoriza al Gobierno para aplicar al fomento de la agricultura las cantidades que estime necesarias, empleándolas en aplicaciones reproductivas y dando cuenta al Senado en su oportunidad;* se determinó invitar al Ministro para la sesión del día 10, a fin de discutir con él y recibir las explicaciones necesarias con respecto al mencionado decreto.

Se discutió el segundo proyecto y hechas algunas modificaciones, fué aprobado en todas sus partes y sancionado del modo siguiente:

SENADO CONSULTOR

A propuesta del Poder Ejecutivo,

Considerando: que el desarrollo del comercio es una de las causas más importantes de la riqueza nacional y siendo conveniente atraer a los puertos de la República con franquicias y ventajas de todo género las banderas de las naciones comerciales y amigas para aumentar las rentas y formentar los elementos de prosperidad que en cierra nuestro suelo privilegiado;

En nombre de la Nación ha venido en dar el siguiente

DECRETO:

Art. 1º Desde el día de la publicación del presente Decreto, los buques de las naciones amigas con las que

la República no tiene celebrados Tratados, quedan asimilados, en cuanto al pago de los derechos de importación y exportación, toneladas, faro y todos los demás que conciernen al comercio, a los de las naciones más favorecidas.

Art. 2º Quedarán privados de las ventajas de esta medida los buques de aquellas naciones que, transcurrido un año después de la publicación del presente decreto, no hubieren acordado a los de la República Dominicana igual beneficio.

Art. 3º El presente Decreto deroga cualquiera otra disposición que le sea contraria y será enviado al Poder Ejecutivo, para los fines constitucionales.

Dado en el Palacio del Senado Consultor, a los 8 días del mes de Mayo de 1860 y 17º de la Patria.

El Honorable Presidente hizo la siguiente proposición: Señores Senadores: El Ministro de Hacienda, en la sesión de ayer, entre otras cosas ha expuesto que falta por centralizar un trimestre de las Cuentas del año pasado; que a su entrada en el Ministerio, hacía tres meses, hizo todos los esfuerzos, tanto en la Contaduría General, como en la Cámara de Cuentas, para que verificase la centralización general que aún está pendiente. Yo creo que en materia de tanta importancia, una resolución debe tomarse, tanto para lo presente, como para lo venidero. En consecuencia, la discusión sobre el particular está abierta.

Fué tomada en consideración y aplazada su discusión para una de las sesiones próximas; y se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 9 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, Melitón Valverde, Secretario.

Se abrió la sesión, y se dió lectura al acta de la anterior que fué aprobada.

El Honorable Pedro Bonilla, miembro de la Comisión de peticiones, presentó el siguiente informe, redactado en estos términos:

La Comisión encargada de abrir concepto sobre la solicitud hecha por las autoridades del Puesto Militar de Macorís, tiene el honor de exponer que habiendo examinado con escrupulosa atención la escritura de donación que hicieron en 8 de Octubre de 1821 Juan Ramírez, Mateo Acosta, Felipe Nieto, Juan Felipe Sánchez y Antonio González, vecinos de la Ciudad del Seibo, aparece que ellos cedieron una caballería de tierra de la que poseían en propiedad, en los terrenos de la Yeguada del Sur, para establecer una población en la boca del Soco, bajo los linderos siguientes: De la boca del río del Soco toda la orilla de la mar a la playa nombrada Candelaria, de aquí buscando por el bajo del Palo al caño del Naranjal, éste abajo a entrar en el río del Soco, aguas vertientes, hasta donde se comenzó, reservándose expresamente en que volviese a ellos el terreno, en el caso en que no tuviera efecto la población.

De lo que se desprende que el terreno cedido fué en la boca del río del Soco y no en la boca del de Macorís, y que por la reserva que hicieron los donantes, no habiendo tenido efecto la población allí, de hecho y de derecho quedó nula y sin efecto la donación, a menos que hoy, los mismos que la hicieron la revalidasen, cediendo una parte del terreno para la población de Macorís; y la Comisión es de opinión que así debe declararlo el Senado, pues la población del Macorís no puede apropiarse ningún

derecho sobre el terreno de que se trata. Santo Domingo 9 de Mayo de 1860. - Pedro Pablo de Bonilla. - Franco. Xavier Abreu.

El Senado, acogiendo el dictamen de la Comisión, lo aprobó en todas sus partes: quedando así acordado.

Se dió lectura a un oficio del Ministro del Interior en contestación al del Senado y por el cual ofrece asistir a la sesión del día 10 del corriente; con el objeto de discutir el proyecto de decreto, remitido por el Poder Ejecutivo en que propone votar una suma para el fomento de la agricultura en diferentes comarcas, y de dar al Senado las aclaraciones que tuviese a bien pedirle sobre esa o cualquiera otra materia.

Habiendo tomado el Senado conocimiento de este oficio, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.*

SESION DEL 10 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, Secretario, se abrió la sesión, hallándose presente el Señor Ministro de lo Interior.

Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

Trayendo la orden del día la discusión del decreto que propuso el Poder Ejecutivo para que se autorizase a emplear las sumas que creyese necesarias para el fomento de la agricultura en algunas comarcas, etc., etc.; y habiendo sido invitado el Ministro de lo Interior con el objeto de que diese algunas aclaraciones sobre el particular, el Honorable Presidente manifestó al mencionado Ministro que el Senado deseaba saber la suma que el Poder Ejecutivo creía necesa-

ria para el efecto, y tener algunas explicaciones sobre el objeto de su inversión.

El Ministro dijo que el objeto de ese decreto era tendente a favorecer la industria en algunas poblaciones empobrecidas, que por falta de recursos había decaído el cultivo de algunos ramos, y de crear también en muchas de ellas otros ramos de riqueza, que por la misma causa existían aún improductivos. Con respecto a la cantidad que debería votarse añadió, que no pudiendo el Poder Ejecutivo determinar las erogaciones que haría, el Senado juzgaría cuál debería ser la suma que bastase para ese objeto.

El Senado unánimemente aprobó la conveniencia del decreto; pero el Honorable Bonilla objetó que, ignorándose a cuanto ascendían las rentas de la Nación, por no haberse presentado las Cuentas durante dos años consecutivos, no creía debiera votarse ninguna suma, mientras el Senado no supiese a cuanto montaban los ingresos y egresos de la República.

El Ministro observó que no creía que fuera éste un motivo para negar al Poder Ejecutivo los recursos necesarios, los que debería emplear en bien del país, tanto más cuanto que se votara no sería un gasto sino una suma reproductiva; y que ésta era una medida política que el Gobierno creía conveniente tomar para evitar el desequilibrio de las Provincias con la emigración de las más pobres a las más productivas, que, además, la autorización que se pedía era para satisfacer esa necesidad especial, y no para ser distraída a otro objeto.

El Honorable Bonilla replicó que no se oponía en manera alguna a que se votase la suma pedida por el Poder Ejecutivo sino a que no se hiciese sino después que se supiera a cuanto ascienden las rentas de la Nación.

El Honorable Abreu dijo que, consecuente con lo que había opinado en sesiones anteriores, proponía se aplazase la discusión de ese decreto hasta que se presentasen las Cuentas de la República.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Después de largas discusiones se resolvió por mayoría tomar en consideración el decreto, para cuando se formulase la Ley de Presupuestos.

El HONORABLE PRESIDENTE: Ya ha visto el Señor Ministro cuál ha sido el objeto del Senado al llamarlo a su seno: obtener las aclaraciones que ha creído necesarias; pero no el hacer oposición al Poder Ejecutivo como se ha hecho entender al Gobierno.

El MINISTRO: El Senado está en su derecho y puede llamar a los Ministros cada vez que lo crea necesario para interpelarlos sobre cuanto juzgue conveniente: por mi parte, así lo comprendo y estoy dispuesto a dar todas las aclaraciones que se me pidan sobre cualquier otro particular; así suplico al Senado que si existe alguna falta en que haya incurrido, se me haga presente, para corregirla o renunciar la Cartera que se me ha encargado.

El HONORABLE BONILLA: Deseamos complacer al Señor Ministro y dar a la vez una prueba inequívoca de que el Senado ni ninguno de sus miembros individualmente hace oposición sistemática al Poder Ejecutivo, sino por el contrario que desean marchar de acuerdo en cuanto sea permitido, y guardar la más perfecta armonía entre ambos poderes, pondré de manifiesto una falta que ha pasado como desapercibida y que corresponde a la Cartera de lo Interior y Policía.

Consta de las resoluciones tomadas por el Consejo de Secretarios de Estado una del primero de Febrero pasado, en la que invadiéndose las atribuciones del Senado, se creó el empleo de Capellán del Jefe del Estado, nombrándose como tal al digno Presbítero Señor Gabriel Moreno, con una dotación de 32 fuertes mensuales que también le fué asignada con manifiesta infracción de la Constitución, puesto que sólo al Senado corresponde la creación y supresión de los empleos públicos no fijados por la Constitución, señalar los sueldos, disminuirlos o aumentarlos conforme al 20º inciso del Art. 26.

A esto contestó el Ministro que el Gobierno tenía la facultad de nombrar Comisiones y que éste no había creado un empleo y sí sólo una Comisión, lo que por la Constitución no le estaba prohibido.

El Honorable Bonilla dijo que desearía que el Señor Ministro le explicase la diferencia que había entre un *empleo* y una *Comisión*.

El Ministro satisfizo a esta interpelación diciendo que las comisiones son temporales y pueden ser renovadas a voluntad del Poder Ejecutivo, y que por el contrario los empleados son permanentes.

El Honorable Bonilla replicó que por nuestra Constitución todos los empelos son temporales, desde el Presidente de la República hasta el último empleado, y que conforme a lo expuesto por el Señor Ministro, los Secretarios de Estado no son empleados, sino comisionados.

El Ministro respondió afirmativamente.

El Honorable Presidente manifestó que no veía en esta discusión un objeto determinado y que tuviese un fin útil, porque además de que no se había llamado al Ministro para que diese explicaciones sobre el particular, encontraba que la nominación de un Capellán que dijese misa a las tropas y que administrase el pasto espiritual, era casi un deber en un país donde la religión Católica es la dominante y donde se profesa su culto generalmente; que, además, el Gobierno en este particular no pudo haber hecho otra que designar el Capellán, porque las facultades espirituales las debe recibir de su Prelado; y que en cuanto al sueldo pudo muy bien haberle sido señalado de la suma de gastos extraordinarios que se le votan al Gobierno.

Habiendo observado el Honorable Abreu que el Poder Ejecutivo había expedido salvoconducto sin la aprobación del Senado, respondió el Ministro que había cierto número de individuos que habían sido expulsos sin conocimiento del Senado, y que el Gobierno, autorizado por él, en circunstancias azarosas, tomó por sí solo las disposiciones que creyó

oportunas, y que así, no habiendo sido expulsos esos individuos con la anuencia del Senado Consultor, no se creyó necesario el acuerdo para indultarlos.

El Honorable Presidente añadió que, según las disposiciones del inciso 22, Art. 35 de la Constitución, el Poder Ejecutivo en casos de conmoción a mano armada o cuando fuese atacada la seguridad pública, podía de acuerdo con el Senado tomar cuantas medidas juzgase convenientes, haciéndolas cesar luego que las circunstancias lo permitieran; que es demasiado sabido que el Poder Ejecutivo pidió esta autorización cuando los acontecimientos de Azua, y que algunos individuos sospechosos habían sido expulsos sin el conocimiento del Senado en virtud de dichas facultades, y que a éstos muy bien pudo el Poder Ejecutivo hacerlos volver al país sin la anuencia del Senado, si creyó que habían cesado las circunstancias que hicieron alejarlos del país, como una medida de precaución; no pudiendo suceder lo mismo con los que habían sido extrañados en virtud de una sentencia judicial o los que se fueron con el ex Presidente Báez, que están en otra categoría y bajo el peso de un decreto del Gobierno.

Concluídas las presentes observaciones, se retiró el Ministro de lo Interior y agotada la orden del día, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.*

SESION DEL 14 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los catorce días del mes de Mayo de mil ochocientos sesenta, se abrió la sesión del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo

de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.

La orden del día trajo la discusión de la moción hecha por el Honorable Presidente, sobre la falta de impresión de las Cuentas generales de la República del año pasado, que debieron imprimirse y publicarse desde Enero de este año y aun no se ha verificado; faltando por centralizar el último trimestre según lo expuesto por el Ministro de Hacienda. Tomaron parte en esta discusión todos los Honorables Senadores reconociendo el grandísimo perjuicio que se experimentaba con esta falta, bien fuese por decuido, omisión o negligencia de los Administradores de la Contaduría General o de la Cámara de Cuentas. Y el Honorable Presidente dijo que para remediar el mal en cuanto fuese posible, era de necesidad decir al Ministro de Hacienda: 1º Que activase la centralización de las cuentas y su impresión para que se presentasen al Senado con el informe correspondiente de la Cámara de Cuentas, a fin de llenar el voto de la Constitución; 2º Que para evitar en lo sucesivo semejante desorden se le recomendase redoblar su celo y cuidado sobre el particular; 3º Que se dijese también que diese órdenes muy positivas y terminantes para que por vía de una disposición reglamentaria (según lo opinado por la Comisión nombrada para verificar la Cartera de Hacienda), se le pasase mensualmente un estado de las cuentas de las diferentes Administraciones, de las que remitiría copia al Senado, debiendo en este año acelerarse los trabajos para que no se repitiese la misma falta, encargándole que cualquiera que fuese la oficina o el empleado culpable de omisión, descuido o negligencia, lo sometiera a juicio para que fuese castigado con las penas de la ley, sin perjuicio de las demás medidas que el Ministro como Jefe del ramo y personalmente responsable, juzgase convenientes para asegurar el cabal desempeño de las funciones de los empleados del ramo y el que se cumpliese con las disposiciones de la Constitución y las leyes.

Esta proposición fué acogida por algunos Senadores, pero el Honorable Bonilla se opuso a ella, diciendo que le parecía demás el estado mensual de las cuentas y su impresión, como opinó el Honorable Melitón Valverde, porque eso sería multiplicar más el trabajo y las dificultades; y el Honorable Abreu hizo la siguiente proposición apoyada por los Honorables Bonilla y Manuel María Valverde: Que en atención a que las Cuentas de la República estaban en retardo y que el Senado no podía concluir sus sesiones sin votar la Ley de Presupuestos, pedía la prórroga de las sesiones por un mes más, después del 27 de los corrientes, con el objeto principal de verificar dichas Cuentas.

Se tomó en consideración esta proposición y quedó aplazada la discusión para continuarla en las sesiones consecuentes.

Se dió lectura a un oficio del Ministro de Justicia e Instrucción Pública que dice así:

Honorable Señor: He sometido a la apreciación del Gobierno la nota que su Señoría tuvo a bien dirigirme con fecha 23 de Abril próximo pasado, como asimismo la solicitud del Vice-Rector del Seminario y el informe de la Comisión, y en cumplimiento de los deseos de Su Señoría paso a exponerle el dictamen del Gobierno sobre el particular.

El Gobierno comprende cuán grande es la utilidad del Colegio Seminario y no duda que las fundadas y lisonjeras esperanzas que le han hecho concebir las buenas disposiciones de que se halla animado el Vice-Rector, obtendrán su realización en un porvenir no lejano.

Considerando de grande conveniencia el restablecimiento de la antigua Universidad, se ordenó la reparación por cuenta del Gobierno del ex Convento de Regina, a fin de que sirviese de local a la dicha Universidad, en atención a que el Colegio Seminario no había hecho uso de él, a pesar de estarle destinado por la ley. Pero hoy, en vista de la solicitud del Vice-Rector, comisionó al Señor Ministro de lo Interior para que se viera con él, y le preguntase si no había inconveniente en que el ex

Convento sirviese de local al Colegio Seminario y a la Universidad, y me cabe la satisfacción de poner en conocimiento del Honorable Senado que el Señor Vice-Rector, animado como el Gobierno del vivo deseo de fomentar en el país la instrucción pública, ha convenido, después de visitar el mencionado edificio, en que muy holgadamente puede establecerse en él el Colegio Seminario y la Universidad.

Respecto a la diferencia que existe en el valor asignado al Seminario, el Senado decidirá lo que crea equitativo y justo, teniendo en consideración el mal estado rentístico del país. Cuanto a las dos casas de que se habla, el Gobierno cree que siempre que el Colegio Seminario se restablezca conforme a la ley, y que sus cátedras se regenteen con esmero, por no privar a ese establecimiento de sus recursos, aun cuando la casa destinada hoy al Arzobispo no produjo nunca renta alguna, abonaría por el alquiler de ellas una suma de 20 o 30 ps. ftes. mensuales de la Caja pública.

Muy grande considera el Gobierno la utilidad del Colegio Seminario y se atreve a esperar mucho de lo muy animado que se encuentra el Vice-Rector y espera que también se apreciará lo utilísimo y necesario de una fuente de instrucción pública superior, para los demás ramos de la Administración.

El Senado, necesitando tener a la vista la Ley de fundación del Seminario, determinó aplazar la decisión de este negocio para una de las sesiones próximas.

La Comisión de peticiones presentó el siguiente dictamen que leyó el Honorable Bonilla y fué tomado en consideración; dice así:

Señores Senadores: La Comisión encargada de abrir concepto sobre la proposición dirigida al Senado por tres abogados dominicanos sobre la traducción de los Códigos franceses, merece sin duda que el Senado la tome en consideración, por cuanto puede contribuir a la grande obra reclamada por una de las más imperiosas necesidades del país tenga su realización.

Por lo tanto, la Comisión al dar su dictamen opina que cuanto más nacional sea el trabajo de nuestra le-

gislación forense, tanto más perfectamente adecuado al objeto ha de resultar, y bajo este respecto sería de desear que se hiciese, si fuera posible, entre nosotros, sin encomendar nada a manos extrañas, sino en último caso.

Además, pues, que los proponentes dicen que tienen ya gran parte de la traducción hecha, opina también la Comisión que el Senado debe pedir sin retardo ese trabajo a sus autores, para poder determinar lo conveniente, previo examen.

Santo Domingo, Mayo 14 de 1860.

Pedro P. de Bonilla. - Francisco X. Abreu.

No habiendo otra cosa de que tratar se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- M. M. Valderde.*

SESION DEL 15 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honosables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, Secretario; se abrió la sesión. Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.

Trayendo la orden del día la discusión de la moción hecha por el Honorable Abreu sobre la prórroga de la Sesión legislativa, el Honorable Presidente declaró abierta la discusión sobre este punto, y asintiendo a dicha proposición todos los Senadores, se resolvió a unanimidad prorrogar las sesiones legislativas del Senado por un mes más, a contar del 27 de Mayo corriente y que se formulase el decreto sobre el particular.

Habiéndose tratado de la proposición hecha en la sesión pasada por el Honorable Presidente, todos los Senadores estuvieron acordes sobre los 1º y 2º puntos que son los siguientes:

1º Que era de necesidad decir al Ministro de Hacienda que activase la centralización de las Cuentas y su impresión para que se presentasen al Senado con el informe correspondiente de la Cámara de Cuentas, a fin de llenar el voto de la Constitución; y 2º que para evitar en lo sucesivo semejante desorden se le recomendase redoblar su celo y cuidado sobre el particular; y que hiciese cumplir las disposiciones del 9º inciso del Ar.t 1º y de los Arts. 5º y 6º de la Ley de Hacienda en vigor, y las del Art. 10 en el 4º inciso de la Ley de Cámara de Cuentas, según lo impera el Art. 40 de la Constitución.

En cuanto al tercer punto de la proposición del Honorable Presidente (véase el acta anterior), el Honorable Melitón Valverde apoyó en parte ese concepto, opinando porque se imprimiesen *mensualmente* las Cuentas de las administraciones particulares de la República, creyendo esto un requisito indispensable para el mejor desempeño y buen orden de la Hacienda pública.

El Honorable Bonilla dijo que creía innecesaria esta medida, dificultosa por la aglomeración de trabajo que se acumulaba a esas administraciones, y que, además, la Constitución sólo imperaba la publicación *anual* de las Cuentas de la República.

El Honorable Presidente sostuvo su dictamen por creerlo conforme a la ley; y puestas a votación las diferentes opiniones, la mayoría no aceptó el tercer punto de la proposición del Honorable Presidente, opinando como el Honorable Bonilla; y se acordó comunicar al Señor Ministro de Hacienda lo resuelto en esta sesión.

Discutida la solicitud del Señor Vicario General, el Senado resolvió que se le comunicase la contestación del Ministro; y, con respecto a lo demás, que se tendría presente esa solicitud al formular la Ley de Presupuestos.

No teniendo los Senadores ninguna otra moción que hacer, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.*

SESION EXTRAORDINARIA DEL 17 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunido extraordinariamente el Senado Consultor en la sala donde celebra sus sesiones, compuesta la mayoría de los Honorable Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario; se abrió la sesión.

El Honorable Presidente dió cuenta al Senado de un oficio del Poder Ejecutivo, fecha del día de ayer, que dice lo siguiente:

Las circunstancias graves que está atravesando la República, ponen al Gobierno en la indispensable necesidad de solicitar del Honorable Senado la competente autorización para poder disponer del dinero papel que se está confeccionando en virtud del acuerdo de esa Honorable Corporación, de fecha 29 de Marzo pasado, destinándole para las necesidades urgentes de movilización de tropas y demás, en vez del primer objeto para que se había propuesto.

Después de haber conferenciado largamente sobre el particular, teniendo en consideración: que el Ministro de Hacienda en la sesión del día 7 de los corrientes informó al Senado que se habían quemado sobre diez millones de pesos en billetes de Caja, y que ésto junto con el pago de más de trescientos mil pesos fuertes de la deuda interior habían puesto al Tesoro en un estado angustioso, y no debiendo la suma ya votada por resolución del 19 del pasado distraerse del objeto único para que fué destinada; siendo de necesidad reemplazar los diez millones de pesos que se han incinerado, y considerando además la apremiante urgencia del momento, se resolvió decir al Poder Ejecutivo:

Que el Senado, teniendo en cuenta la penuria del Tesoro, en vista de las necesidades graves del momento y para subvenir a ellas, lo autoriza para que haga imprimir inme-

diatamente y poner en circulación diez millones de pesos de los mismos tipos que los que circulan, pudiendo, si la necesidad actual es muy urgente y perentoria, disponer de las sumas que estime necesarias de los diez millones que se le autorizó a emitir por la resolución del 19 del mes pasado, con calidad de que se repongan a la mayor brevedad, para que el objeto de la dicha resolución sea cumplido y ejecutado en todas sus partes.

Concluído esto, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 18 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Después de leída y sancionada el acta de la sesión anterior, en virtud de lo acordado en aquella sesión, el Honorable Presidente nombró a los Honorables Bonilla y Manuel Valverde para que presentasen el proyecto de decreto prorrogando las sesiones legislativas.

Se leyó una nota oficial del Ministro de Justicia e Instrucción Pública que dice así:

Señor Presidente: Me cabe la satisfacción de remitir al Honorable Senado un proyecto de ley de Universidad presentado al Poder Ejecutivo por la Junta Superior Directiva de Estudios. Dios guarde a V. S. muchos años. - Jacinto de Castro.

Acabada la lectura de este oficio EL HONORABLE ABREU pidió la palabra y dijo así: Honorables Señores: El año pasado sancionó el Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo, una Ley de Universidad que nunca ha sido puesta en prác-

BIBLIOTECA DEL CONGRESO 305

tica, y que, de hecho, está en receso, sin que sepamos por qué. Natural me parece, Señores, que al proponerse a esta Legislatura un nuevo proyecto de ley sobre la misma materia, se nos diesen razones suficientes para decidir al Senado a considerar nula una ley sancionada en toda forma, para elaborar otra de la misma naturaleza. La extrañeza del caso pediría, sobre todo, que en éste, más que en ningún otro, se observase lo prescrito por el Art. 22 de la Constitución, que atribuye la iniciativa de todo proyecto de ley o decreto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, mientras que en el presente, el proyecto, sometido al Senado, por un lacónico oficio del Señor Ministro del ramo, indicando que la Comisión Superior Directiva de Estudios lo remitió al Poder Ejecutivo, pero no expresa que el mismo Ejecutivo lo haya adoptado, ni que sea él quien, conforme al ya citado artículo de la Constitución, ejerza en este nuevo proyecto su derecho de iniciativa. Esta circunstancia, Señores, requiere en mi sentir que el mencionado proyecto sea enviado al Ejecutivo, a fin de que si quiere adoptarle y presentarle como suyo, en uso de la facultad que le atribuye la Constitución, el Senado entonces proceda a su examen y discusión.

El Senado unánimemente acogió esta proposición, acordándose en consecuencia que se devolviese al Ministro el mencionado proyecto de ley, para que, si el Poder Ejecutivo lo acogía como suyo, en virtud del derecho de iniciativa que le concede la Constitución, lo presentase de nuevo.

Se abrió la discusión sobre la proposición hecha por los Señores Carlos Nouel, A. de Castro y M. de J. Heredia en sesiones anteriores, con respecto a la traducción de los Códigos franceses que rigen en la República.

Se leyó el informe de la Comisión de peticiones, presentado en la sesión pasada.

El Honorable Presidente dió su opinión como sigue: Yo opino que esta solicitud sea enviada al Ministro encargado de la Instrucción Pública, para que dé cumplimiento al Decreto del Senado con fecha 22 de Mayo de 1855.

SENADO de la Republica Dominica

Todo está previsto y todo está ordenado en el referido Decreto, y si se hubiera cumplimentado, no habría para qué ocuparnos de esta materia.

El referido Decreto no ha sido derogado por ninguna ley posterior, y debe considerarse en su fuerza y vigor, pues aunque el Senado en la Legislatura pasada acordó nombrar de su seno una Comisión para que se ocupase en la traducción de los Códigos, esto no fué sino por el deseo ardiente que tiene de que se remedie un mal tan trascendental como el que la legislación no esté al alcance y comprensión de los Jueces ni de los asociados; pero no habiéndose derogado el Decreto expresamente, ni pudiendo llevarse a cabo el buen deseo del Senado, debe cumplirse con dicho Decreto y someterse al Ministro del ramo para que satisfaga sus deseos, y no nos ocupemos más de una materia que está prevista y decidida por una ley que no ha recibido ningún principio de ejecución.

La Comisión sostuvo su opinión apoyándose en que creía ya derogado de hecho el Decreto que dió el Senado Consultor con fecha 16 de Mayo de 1855, con motivo de haber nombrado el Senado en la Legislatura pasada una Comisión de tres de sus miembros para traducir y localizar dichos Códigos, y habiéndose dado principio a ello. El Presidente sostuvo su opinión en razón de que una ley no puede ser derogada sino por otra ley, y la mayoría acogió el dictamen de la Comisión.

No teniendo los Senadores ninguna otra moción que hacer, se levantó la sesión.

El Presidente del Senado Consultor, *Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 21 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Presidente Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario, y se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

La Comisión, compuesta de los Honorables Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, presentó el proyecto de decreto que se le había encomendado, redactado en los siguientes términos:

Considerando: que estando al terminarse la Sesión legislativa sin haberse decretado el Presupuesto general del Estado, en vista de aquel que debiera presentarle el Poder Ejecutivo.

Considerando: que la Cámara de Cuentas no le ha sometido aún el resultado del examen de la Cuenta anual sobre la recaudación e inversión de los fondos públicos para examinarla, aprobarla o reprobarla, según lo previene el 3º inciso del Art. 26 de la Constitución.

En uso de las facultades que le confiere el 10º inciso del citado artículo.

En nombre de la República,

HA VENIDO EN DECRETAR Y DECRETA

Art. 1º Se prorroga la Sesión legislativa por el término de treinta días, que principiará el 27 del corriente.

Art.2º El presente Decreto será enviado al Poder Ejecutivo para los fines convenientes.

Dado, etc., etc.

Fué leído, aprobado y sancionado en la forma acostumbrada, quedando con esto levantada la sesión.- *Bobadilla.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 22 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y dos días del mes de Mayo de mil ochocientos sesenta, se abrió la sesión del Senado Consultor, presentes los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Manuel Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

El Honorable Bonilla presentó y leyó un proyecto de ley sobre visitas domiciliarias que fué apoyada por el Honorable Manuel María Valverde, y cuyo tenor es el siguiente:

El Senado Consultor, usando de su iniciativa y previas las tres lecturas constitucionales.

Considerando: que por la 12ª disposición del Art. 8 de la Constitución, no puede verificarse ninguna visita domiciliaria sino en los casos previstos por la Ley, y con las formalidades que ella prescriba, ha dado la siguiente

L E Y

SOBRE VISITAS DOMICILIARIAS

Capítulo I

Art. 1º La casa de un dominicano no podrá ser allanada sino en los casos siguientes:

1º De incendio o inundación.

2º Cuando se oigan voces dentro de una casa, que induzcan vehemente sospechas de que se está perpetrando algún crimen.

3º Cuando se denuncie haberse visto personas que han escalado una casa o introducídose en ella clandestinamente o en el silencio de la noche.

4º Cuando un marido, padre, madre, tutor, etc., reclamen la extracción de su esposa, hijo, pupilo, etc., que les hayan sido robados o seducidos, y que estén ocultos en alguna casa.

5º Cuando haya de extraerse un reo contra quien se haya decretado prisión por causa criminal.

6º Cuando se denuncie que en alguna casa se celebran reuniones secretas con el objeto de conspirar contra la seguridad del Estado.

7º Cuando se denuncie que en alguna casa hay fábrica de moneda falsa, o depósito de armas, bienes robados, efectos de comercio introducidos en contrabando.

8º Cuando conforme a la ley deban examinarse los papeles y correspondencia privada de alguna persona.

Art. 2º Para evitar la fuga de las personas o la extracción de armas, papeles, efectos, etc., pondrá el Juez guardias o personas honradas en las calles inmediatas a la casa, a fin de que detengan y hagan conducir a su presencia los individuos que salgan y las cosas que se intenten extraer.

Capítulo II

Art 3º Cuando haya lugar a una visita domiciliaria, se llevará a efecto, por el Alcalde o por el Juez de Instrucción, acompañado el primero de su Secretario y dos vecinos honrados, y el segundo de su Secretario y del Procurador Fiscal, quienes, llegados a la casa, llamarán a su dueño y le harán saber que se va a proceder a una visita domiciliaria conforme a la ley. Si el dueño de la casa se negase a ella, se le hará una segunda intimación y si a ésta también se negase, se procederá a la visita, empleándose la fuerza necesaria.

Art. 4º Si la puerta de la casa estuviese cerrada, el Juez llamará por tres veces en voz alta con intervalos regulares, anunciando que es la autoridad pública; si a la tercera vez no se le abre la puerta, franqueará la entrada con la fuerza.

Art. 5º La resistencia de que hablan los Arts. 3º y 4º se castigará con una multa de cinco o cien francos, o con una prisión de diez a cincuenta días.

Art. 6º El registro de la casa sólo se extenderá a los lugares en que puedan estar ocultas las personas u objetos que se solicitan, no tocándose a los papeles y correspondencia epistolar, sino en los casos que designa la ley.

Art. 7º En los casos 1º y 2º del artículo 1º, se procederá al allanamiento de la casa sin ninguna demora.

Art. 8º El Juez extenderá un acto de todo lo que practicase para la visita domiciliaria y de sus resultados, poniendo por encabezamiento las declaraciones, denuncias, avisos o peticiones de auxilio en su caso.

Las costas de estas diligencias las pagará el dueño de la casa allanada en los casos 4º, 5º, 6º y 7º, si resultare culpado en la ocultación.

Art. 9º El Juez que allanase la casa a un dominicano fuera de los casos, o sin los requisitos previstos en esta ley, queda sujeto a una multa de 20 a 500 francos.

Art. 10º Las multas que se impusieren conforme a esta ley, se aplicarán al Tesoro público.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

El Senado tomó en consideración el presente proyecto de ley, para que pasase a ser discutido en otra sesión. No habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 23 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y tres días del mes de Mayo de mil ochocientos sesenta, se abrió la sesión del Senado Consultor, presentes los Honorables Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Después de leída y sancionada el acta de la sesión anterior, en conformidad a la orden del día, se dió la primera lectura constitucional a la ley sobre visitas domiciliarias.

El Honorable Bonilla presentó un proyecto de ley apoyado por el Honorable Manuel María Valverde y que fué

tomado en consideración por el Senado; su redacción es como sigue:

El Senado Consultor, usando de su iniciativa y previas las tres lecturas constitucionales,

Considerando: que la correspondencia y papeles privados no pueden ser interceptados ni examinados sino por la autoridad competente, en los casos y con las formalidades prescritas por la ley, según la 18ª disposición del Art. 8º de la Constitución, ha dado la siguiente

L E Y

SOBRE INTERCEPTACION Y EXAMEN DE LOS PAPELES Y CORRESPONDENCIA PRIVADA

Art. 1º La correspondencia y papeles privados no pueden ser interceptados, examinados, ni registrados, sino en los casos siguientes:

1º Cuando haya tenido lugar la visita domiciliaria conforme al caso 5º del Art. 1º de la Ley sobre visitas domiciliarias.

2º Cuando dichas cartas o papeles vengan directamente o indirectamente de país enemigo.

3º Cuando de dichas cartas o papeles resulten citas que es necesario evacuar para el descubrimiento de la verdad.

4º Cuando éstos sean dirigidos de la República, directa o indirectamente, a país enemigo o a personas que hayan dado pruebas de desafección a la República.

5º También podrán interceptarse y examinarse los papeles y correspondencia de cualquier persona a quien se le justifique por dos testigos, o por un documento fehaciente, un acto de espionaje, traición o infidelidad a la República.

Art. 2º Siempre que hayan de interceptarse y examinarse los papeles y cartas de que habla esta Ley, se verificará el examen por los Alcaldes, acompañados de sus Secretarios y de dos testigos, o bien el Juez de Instrucción acompañado de su Secretario y del Procurador Fiscal.

Art. 3º Si los papeles o cartas que deban examinarse fuesen de aquellos a que se refiere el párrafo 2º del

Art. 1º y no revelasen maquinación o traición contra el Estado, ni cosa alguna que tienda a turbar el orden y tranquilidad pública, serán incinerados inmediatamente; pero en caso contrario serán retenidos para que se haga de ellos el uso que corresponda.

Art. 4º En todos los demás casos se verificará el registro y examen con el mayor sigilo, previo el correspondiente juramento por los encargados del examen de guardar secreto de cuanto por aquel acto supieren, quedando sujetos, si algo revelaren, a ser perseguidos en justicia por los interesados, juzgados y condenados a las penas establecidas por el Art. 366 del Código Penal como perjuro y también a la indemnización a que haya lugar.

Art. 5º No podrá hacerse uso en juicio ni fuera de él, de ninguna de las noticias que contengan los papeles y cartas examinadas, siempre que estas noticias versen sobre asuntos puramente particulares.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación conforme a la Constitución.

No teniendo los Senadores otra moción que hacer, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 24 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

En la Ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cuatro días del mes de Mayo de mil ochocientos sesenta, se abrió la sesión del Senado Consultor, presentes los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior; se dió la primera lectura constitucional al proyecto de ley presentado en la anterior sesión, sobre examen e interceptación de

los papeles y correspondencia privada, y terminada la orden del día, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 25 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Pedro Pablo de Bonilla, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Pasando luego a la orden del día, se dió la segunda lectura constitucional a la ley sobre visitas domiciliarias.

El Honorable Presidente propuso se nombrase una Comisión que redactase un proyecto de ley de Presupuestos; y el Honorable Manuel María Valverde pidió la palabra y dijo: que habiendo dado el Senado un decreto de prórroga de sus sesiones con el objeto de examinar las Cuentas generales de la República que debían presentarse, creía conveniente esperar la presentación de aquéllas y los Presupuestos que también debía enviar al Senado el Poder Ejecutivo, para, en vista de ellos, según lo dispone la Constitución, decretar la Ley de Gastos Públicos.

La mayoría acogió este último parecer, y en este punto se declaró cerrada la sesión.- *Bobadilla.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 28 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Tomás Bobadilla

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Tomás Bobadilla, Presidente; Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde, y Melitón Valverde, Secretario.

Después de leída y aprobada el acta de la sesión anterior, el Honorable Presidente expuso a los Senadores que debía procederse a la renovación del bufete del Senado Consultor por haberse cumplido ya el término de su nombramiento, así como el de los Honorables Vice-Presidente y Secretario del Senado.

Se procedió a la elección en la forma acostumbrada, y del primer escrutinio resultó que para Presidente obtuvo el Honorable Delmonte 3 votos, el Honorable Bobadilla 2, y el Honorable Pérez 1; no habiendo resultado elección, se votó por segunda y tercera vez, resultando en ambos escrutinios con 2 votos cada uno de los Honorables ya citados: hecha la cuarta votación, obtuvo entonces el Honorable Delmonte 4 votos, el Honorable Bobadilla 1, y el Honorable Rafael Pérez 1, y quedó electo Presidente del Senado por mayoría de votos el Honorable M. J. Delmonte.

Efectuada la votación para el nombramiento del Vice-Presidente, el Honorable Rafael Pérez tuvo 4 votos y el Honorable Bobadilla 2, y fué electo Vice-Presidente del Senado el Honorable Rafael Pérez, pasando inmediatamente a ocupar la presidencia por ausencia del Presidente electo.

Seguidamente se procedió a la votación para Secretario, y resultando del escrutinio los Honorables Manuel María Valverde y Bonilla con 3 votos cada uno, se hizo nueva votación y fué electo por mayoría el Honorable Bonilla.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

En conformidad a la orden del día, se leyó por tercera vez el proyecto de ley sobre visitas domiciliarias, y se acordó dejar su discusión para la sesión siguiente: y asimismo se dió la segunda lectura constitucional al proyecto de ley sobre examen e interceptación de los papeles y correspondencia privada.

No habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *Bobadilla.- M. M. Valverde Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 29 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Rafael Pérez

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Rafael Pérez, Vice-Presidente; Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde, Manuel María Valverde, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior, que fué aprobada. Leída la orden del día, se procedió en conformidad a la discusión del proyecto de ley sobre visitas domiciliarias.

Se aprobó el Considerando, y después de leído el Art. 1º (véase el acta del día 22), EL HONORABLE BOBADILLA dijo que, teniendo que hacer observaciones al proyecto en su conjunto y en la forma, pedía el permiso para leer las que había reunido, y, habiéndosele concedido, se expresó en los términos siguientes:

Honorables Senadores: He visto con escruplosa atención el proyecto de ley sobre visitas domiciliarias. Deseo sinceramente satisfacer el voto de la Constitución que impera no se verifique ninguna visita domiciliaria sino en los casos previstos por la ley; no ignoro que la libertad

SENADO
de la
República Dominicana

de cada miembro de la sociedad reside en el cuerpo entero, y que la libertad del cuerpo entero existe en cada miembro de ella; la seguridad es la libertad, pero ella hace que cada ciudadano goce en el país de su libertad, él goza porque no está sujeta su voluntad sino a lo que está prohibido; en las cosas prohibidas goza también, porque se abstiene, y si se abstiene es porque ha querido abstenerse.

El Art. 1º de la citada Ley dice: "La casa de un ciudadano no podrá ser allanada, sino en los casos siguientes": creo que valdría más decir: "La casa de un dominicano es un asilo inviolable y sagrado, nadie podrá franquearlo de día ni de noche sino: 1º en caso de incendio o inundación. 2º Cuando se oigan voces dentro de una casa que induzcan vehementes sospechas de que se está perpetrando algún crimen. 3º Cuando los amos de la casa o algunos de ellos pidan auxilios a la vecindad" Creo que en todos estos casos los ciudadanos deben espontáneamente prestarse a socorrer cualquiera necesidad de las ya indicadas, sin que sea necesario, como lo requiere el proyecto de ley, recurrir al Alcalde para que haga el allanamiento, porque, siendo imperante la necesidad y debiéndose todos los hombres, por un principio supremo de humanidad, darse mutuos socorros, vendría a suceder que los males podrían producir todos sus efectos, sin que por la prohibición de la ley pudiese ninguno atender a necesidades tan apremiantes.

Me fortifica en esta idea la disposición terminante del Art. 106 del Código de Instrucción Criminal que dice: "Todo depositario de la fuerza pública y aun toda persona será obligada a coger al prevenido franganti delito o perseguido, séase por el clamor público, séase en los casos asimilados al flagrante y de conducirlo ante el Procurador Fiscal sin que sea necesario mandato de comparecencia (amener), si el crimen o delito lleva la pena aflictiva o infamante".

La captura de los delincuentes y su castigo interesan al buen orden de la Sociedad y a la seguridad de todos. Observo aquí que en el 3er. inciso del citado artículo 1º del proyecto se dice: "Cuando se denuncie por testigos haberse visto personas que han escalado una casa o introducídose en ella clandestinamente o en el silencio de

la noche". El caso, a mi modo de entender, se asimila al flagrante delito, pero confieso que no puedo entender como diga esta disposición: "Cuando se denuncie por testigos", que se dijese: "Cuando se denuncia y justifique por testigos"; entonces se dejaría entender que debía haber denunciación y justificación de testigos, porque denunciar es declarar en juicio a alguna persona, y los testigos se requieren para justificar la denuncia; más en un caso urgente, cuando se ha visto escalar una casa para introducirse en ella clandestinamente o en el silencio de la noche, ir al Juez a denunciar el hecho, justificarle con testigos, para que se verifique el allanamiento, es lo mismo que proteger la impunidad y no remediar el mal.

Después de establecer los casos excepcionales, me parecía que vendría muy bien una disposición que dijese que cuando un particular allanase la casa de un ciudadano, o se introdujera en ella violentamente, incurría en tal o cual pena.

Después parece que vendría muy bien la disposición de que: La casa de un dominicano no puede ser allanada sino en tales casos, etc., y expresando las formalidades.

Y al mismo tiempo me parece que debía consagrarse una sanción penal para el Juez u otro funcionario público que procediere al allanamiento sin haber llenado los requisitos y formalidades de la Ley.

He observado que en el parágrafo 1º y único del inciso 7º, Art. 1º se dice que para evitar la fuga de las personas o la extracción de armas, papeles, efectos, etc., pondrá el Juez guardias o personas honradas que rodeen la casa para que detengan y hagan conducir a su presencia a los individuos que salgan y las cosas que se intenten extraer.

A mi modo de ver, esto necesita de alguna aclaración y acomodamiento a los casos y circunstancias que puedan presentarse; porque, aunque es verdad que el legislador no puede preverlos todos, pero debe hacer cuanto pueda, para dar reglas generales, útiles y convenientes, cosa que no induzcan en perplejidad al que deba ejecutar la ley.

Es necesario, también, tener presente la disposición del Art. 108 del Código de Instrucción Criminal, que dice: "El oficial encargado de la ejecución de un mandato

de depósito o de arresto, se hará acompañar de una fuerza suficiente para que el prevenido no pueda sustraerse a ley", etc., etc.

La práctica siempre ha sido, cuando hay que arrestar a alguno, impetrar el Ministro ejecutor del mandato de arresto, el auxilio de la fuerza pública; acompañado de ésta, y notificado el mandato, si el prevenido obedece no hay ninguna dificultad; pero si hace rebelión, la ley tiene trazado el modo de constatarla, las penas establecidas, y si es necesario allanar alguna casa el Oficial ejecutor, entonces establece las centinelas, rodea la casa de guardias y solicita la asistencia del Alcalde para el allanamiento.

Creo también que la ley debe prever el grado de fuerza que pueda o deba emplearse, para dejar siempre bien puesta la autoridad y para no exponer a persecuciones a los Jueces y ejecutores de los mandatos de justicia.

Dice el Art. 4º del proyecto: "Si la puerta de la casa estuviese cerrada, se llamará por tres veces en alta voz, anunciando que es la autoridad pública, y que si a la tercera vez no se abriese, se franqueará la entrada por la fuerza". Me parece que diría mejor: "Se descerrajará la puerta, haciendo el Juez que le acompañen carpinteros o herreros", porque esa fuerza indefinida no se sabe qué latitud tiene, si es que la han de tumbar, si es que la han de hacer fuego o de otra manera.

Dice el Art. 5º: "La resistencia de que hablan los Arts. 3º y 4º se castigará con una multa de 5 a 100 francos, o con una prisión de 10 a 50 días".

Téngase presente que toda rebelión, resistencia, desobediencia y otras faltas a la autoridad pública, forman un tratado en nuestros Códigos que se pueden calificar crímenes o delitos, según las circunstancias que les acompañen, y que es necesario armonizar las penas con las ya establecidas en la legislación presente, porque la resistencia puede elevarse hasta la graduación de un crimen, y si ha sido hecha por una o dos personas con armas, dice el Art. 212 del Código Penal, será castigada con una prisión de 6 meses a dos años, y si ha sido sin armas, con una prisión de seis días a seis meses.

He observado también que el proyecto que nos ocupa deja un gran vacío, porque parece que sólo se ha hecho

para las ciudades y pueblos y no para los campos, donde con mas frecuencia se cometen crímenes y delitos, y donde parece que la acción de la ley debía ser más eficaz para la captura de los delincuentes, porque, de otro modo, o daríamos pábulo a la impunidad, o le abriríamos una brecha de persecuciones a los Oficiales auxiliares de la policía campestre que tiene que ir a las casas a capturar a los delincuentes o perseguir a los desertores, y es claro que si tienen que venir a las ciudades y pueblos en busca de los Alcaldes para los allanamientos de las casas, desde luego no hay que contar con la captura de los delincuentes, ni con el arresto de los desertores, porque, exigiendo tanta demora el cumplimiento de las formalidades que prescribe la ley, todos tendrían el tiempo de evadirse, y nuestra sociedad se convertiría en un caos de confusiones y las leyes carecerían de aquella acción pronta, útil y benéfica que les es tan necesaria para asegurar la tranquilidad y el reposo público, sin los cuales no hay seguridad, y sin seguridad no hay libertad.

En consecuencia, estoy por la ley y la adopto para que sea sometida a discusión con las enmendativas que propongo y las demás que puedan surgir de los debates.

El Honorable Abreu propuso que, después de la lectura de cada artículo e inciso, se hiciesen separadamente a éstos las observaciones que en conjunto presentaba el Honorable Bobadilla.

El Honorable Melitón Valverde opinó que los autores del proyecto de ley, teniendo a la vista las objeciones que le había hecho el Honorable Bobadilla, le reformasen, acogiendo las que creyesen justas y convenientes. Después de varias discusiones se adoptó esta última opinión, para hacer más fácil la discusión.

Los Honorables Delmonte y Manuel María Valverde presentaron el siguiente proyecto de ley sobre estado de sitio:

El Senado Consultor, previas las tres lecturas constitucionales:

Considerando la necesidad y conveniencia de definir de un modo claro y preciso los principios que regulan

el estado de sitio y sus efectos, no sólo para prevenir tropiezos y conflictos entre las respectivas autoridades a quienes incumbe, sino para que sepan positivamente los ciudadanos la suma de derechos de que en tales casos quedan legal y temporalmente despojados en bien de la causa pública, ha dado la siguiente

L E Y

Capítulo I

DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE SITIO

Art. 1º Cuando una Provincia, Común, Plaza u otra porción cualquiera del territorio dominicano, sea declarado en estado de sitio, en conformidad con el Art. 6º de la Constitución, el decreto que expida al efecto el Poder Ejecutivo expondrá las causas que lo motiven, y designará con la mayor claridad los lugares a que se apliquen.

Art. 2º Se reputará, además, en estado de sitio, sin necesidad de previa declaratoria, toda Plaza, Común o Provincia atacada por tropas enemigas o por facciosos. En tales casos, cesará el estado de sitio, tan pronto como pase el peligro que lo cause.

Capítulo II

DE LOS EFECTOS DEL ESTADO DE SITIO

Art. 3º Una vez declarado el estado de sitio por el Poder Ejecutivo, los poderes de que está revestida por la Constitución la autoridad civil para el mantenimiento del orden y de la policía interior, se transfieren todos al Comandante de Armas, quien los ejercerá exclusivamente bajo su responsabilidad personal. No obstante, la autoridad civil continuará ejerciendo la parte de estos poderes que la autoridad militar haya creído conveniente delegarle. Los oficiales del orden civil podrán, además, ser requeridos para cooperar a todas las medidas de orden y policía que interesen a la seguridad común.

Art. 4º En las plazas en estado de sitio, los Tribunales militares, cualquiera que sea su denominación, conocerán de los crímenes y delitos contra la seguridad del Estado, la Constitución, y contra el orden y la paz pública, sin atender a la calidad de los autores principales y sus cómplices. El conocimiento de los demás delitos y

contravenciones, quedará a cargo de los Tribunales ordinarios, cesando todo procedimiento civil.

Art. 5º La autoridad militar tiene derecho: 1º de hacer pesquisas, de día y de noche, en el domicilio de los ciudadanos; 2º de alejar las personas sospechosas, y a los que hayan sufrido penas aflictivas o infamantes; 3º de ordenar la entrega de las armas y municiones y de proceder a su pesquisa y conducción a los parques respectivos; 4º de prohibir las publicaciones y reuniones que juzgue capaces de alterar el orden público.

Art. 6º Los ciudadanos continuarán, sin embargo, ejerciendo todos los demás derechos garantidos por la Constitución y cuyo goce no haya sido suspendido en virtud de los artículos precedentes.

Art. 7º En el estado de sitio, el Comandante de Armas determina el servicio de las tropas, de la guardia civil y el de todas las autoridades civiles y militares, sin más regla que sus instruccions secretas y los movimientos del enemigo.

Art. 8º El Poder Ejecutivo, cuando lo juzgue conveniente, podrá conferir a los Gobernadores Políticos, el todo o una parte de los poderes que establece esta ley a la autoridad militar, bajo las órdenes inmediatas de los Gobernadores Políticos.

Capítulo III

De la cesación del estado de sitio

Art. 9º Toca al Poder Ejecutivo decretar la cesación del estado de sitio, "motu propio" o bien a requerimiento del Senado Consultor.

Art. 10. Los Tribunales militares, aun después de haber cesado el estado de sitio, continuarán conociendo de las causas que hubiesen empezado a instruir, hasta pronunciar sentencia definitiva.

Art. 11. La presente ley deroga cualquiera disposición que le sea contraria, y será enviada al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Habiéndose declarado que quedaba tomado en consideración el presente proyecto de ley, y no habiendo más de que tratar, se levantó la sesión. Santo Domingo, 29 de Mayo de 1860.- *Bobadilla.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 31 DE MAYO DE 1860

Presidencia del Honorable Rafael Pérez

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Rafael Pérez, Vice-Presidente; Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde, M. M. Valverde, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario.

Después de leída y sancionada el acta de la sesión anterior, se dió lectura a un oficio del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, por el cual remite de nuevo el proyecto de ley de Universidad en nombre del Poder Ejecutivo.

Acabada la lectura de este oficio y del proyecto adjunto, EL HONORABLE BOBADILLA pidió la palabra y dijo así: Honorables Senadores: He oído la lectura del oficio del Ministro encargado del ramo de Instrucción Pública, y el negocio me induce a traer la opinión de un político muy moderno, que dice así: "Yo no sé que fiebre devora a los escritores políticos. La mayor parte salen del dominio de las cosas reales para correr el país de un hermoso ideal; y casi todos olvidan que hay un punto de perfección al cual es insensatez aspirar. Ellos olvidan que es necesario dar a las leyes el tiempo de fijarse, de incluirse en las costumbres, de hacerse en el espíritu del pueblo, porque sólo por este medio es que ellas pueden ser útiles; diremos mejor que ellas pueden ser verdaderas leyes. Cada uno se apresura a proponer leyes nuevas, a fin de unir su nombre a una época cualquiera y de vivir bien o mal; mas éstas leyes mueren antes que los legisladores a quienes su caída no corrige. En tanto que la ley antigua no repugna visiblemente a la Nación, no es tiempo de cambiarla. El amor propio sólo puede persuadir a nuestros especuladores que el bien futuro es preferible existente, y la frivolidad del espíritu de algunas Naciones de Europa hace una moda y un juego de todas estas instituciones po-

líticas. Cuando un pueblo se ríe de sus leyes, toca al momento en que no tiene necesidad de ellas".

En la Legislatura pasada, el Poder Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de ley sobre instrucción pública superior, que fué acogido, discutido y aprobado con muy pocas variaciones. Los periódicos de esta Capital hicieron grande elogio de la ley y del Ministro del ramo. Sin haberse planteado y sin que haya recibido siquiera un principio de ejecución, si no en el todo, en la parte que hubiera sido posible, hoy se nos presenta otro proyecto, se nos dice que aquél es inconveniente, pero no se nos dice expresamente cuáles son las razones de inconveniencia.

Se nos pide en el nuevo proyecto el restablecimiento de la antigua Real y Pontificia Universidad de esta Ciudad, fundada en virtud de un Real Decreto dado en 26 de Marzo de 1754, cuyos estatutos tengo a la vista.

Restablecer es una cosa; y fundar es otra. La antigua Universidad era anexa al Convento de Padres Domínicos, y para restablecerla sería necesario restablecer el Convento, lo que es imposible. Para fundar de nuevo una Universidad, que sería lo más propio, era necesario que hubiera ya estudios superiores y un número suficiente siquiera de cinco doctores que pudieran componer el claustro menor, a saber: un Rector, un Vice-Rector, dos Conciliarios y un Fiscal, a quienes se confía lo directorio y económico del establecimiento; y sin este número de doctores, ¿cómo fundar una Universidad? Júntense, pues, los doctores, pídase el establecimiento y la fundación de una Universidad, y yo daré gustoso mi voto y contribuiré con todos mis esfuerzos a plantear la obra, que la considero de grande utilidad; pero consecuente con mis principios y mientras no se me diga expresamente cuáles han sido y son los inconvenientes que ha habido para poner en ejecución, si no en el todo, una gran parte de los que contiene, en cuanto a instrucción superior la ley anterior, yo no estoy por la adopción del proyecto que se nos somete hoy. Désele impulso tanto cuanto se quiera a la instrucción su-

perior; búsquense los preceptores, dótense las cátedras y dígasenos cuáles son los doctores que van a regentear la Universidad, y entonces muy espontáneamente daré mi voto. Fuera de ésto parecería una manía el estar haciendo leyes que no reciben siquiera un principio de ejecución, y que por la esencia y naturaleza de las cosas no pueden llevarse a cabo, porque no puede haber Universidad sin doctores y sin estudiantes. Este es mi voto.

Pasando a la orden del día, dióse la tercera lectura al proyecto de ley sobre interceptación de cartas. Unánimemente aprobada su conveniencia, se aplazó la discusión para otro día. También sufrió la primera lectura constitucional el proyecto de ley presentado en la sesión anterior sobre el estado de sitio.

Leyóse una carta firmada por los Señores Carlos Nouel, A. de Castro y M. de J. Heredia, por la cual remiten una parte de la traducción de los Códigos, cumpliendo con lo que resolvió el Senado en su sesión del 18 de los corrientes.

Seguidamente, el Senado pasó a ocuparse de la orden del día, y se procedió a la discusión del nuevo proyecto de ley reformado sobre visitas domiciliarias.

Se discutió el Art. 1º con los ocho incisos de que consta y el Honorable Bobadilla, persistiendo en su opinión emitida en la anterior sesión, dijo que debía aclararse el texto de los incisos 1º, 2º y 3º para no privar a los ciudadanos, por una mala interpretación, del socorro de los particulares en caso de necesidad.

Los Honorables Valverde y Bonilla replicaron a esta objeción, que al ley era dictada para la autoridad, porque fácilmente se comprendía que un particular no podía allanar la casa de un ciudadano; y que no teniendo ese derecho, la ley no hablaba con él.

Insistiendo el Honorable Bobadilla en que las leyes eran para el pueblo, se acordó añadir al Art. 1º un párrafo final, conforme a la opinión emitida por el Honorable Bobadilla.

AGN
República Dominicana
BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Fué aprobado el Art. 2º en todas sus partes; y siendo avanzada la hora, se aplazó la discusión para la sesión próxima y se levantó la de este día.- *M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.- Bobadilla.*

SESION DEL 4 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Rafael Pérez

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Vice-Presidente Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; se abrió la sesión. Fué leída y aprobada el acta de la anterior.

En conformidad con la orden del día, se dió lectura (la segunda) constitucional al proyecto de ley sobre el estado de sitio.

El Honorable Bobadilla pidió la palabra y dijo que no veía la conveniencia y necesidad de dicha ley; que la Constitución facultaba al Poder Ejecutivo para la declaratoria del estado de sitio de acuerdo con el Senado, y para que dictase también todas las medidas de seguridad que creyese necesarias en caso de invasión extranjera o de conmoción interior. Manifestó además el Honorable Bobadilla el sentimiento que experimentaba en no estar de acuerdo con los autores de dicho proyecto, e hizo a varios artículos las siguientes objeciones: En cuanto al 1º y 2º, dijo que no los creía conformes a la Constitución, porque coartaban en parte las facultades que aquélla, en tales casos, acordaba al Poder Ejecutivo; que estaba previsto también por la Constitución lo que decían los artículos 8º y 9º, y que tocante al Art. 10 creía injusto que los Tribunales militares pronunciasen sentencia, aun después de haber cesado el estado de sitio, privando a los ciudadanos de las mayores garantías

que le concede el procedimiento de causa por los Tribunales ordinarios. Finalmente dijo que creía inconveniente dicha ley, e inconstitucional si se quería; y que en todos los casos en que se hablase de ella, salvaba su voto.

El Honorable Valverde defendió el proyecto en todas sus partes, apoyándose en que no estaba en contradicción con nuestro Pacto Fundamental, y que sólo se dictaban las reglas que deberían observarse en tales casos, para que las autoridades estuviesen más al corriente de sus deberes en esas circunstancias y evitar tropiezos y conflictos en la ejecución de las órdenes del Poder Ejecutivo. Que era necesidad que en momentos de guerra o conmoción, cesase la autoridad civil, delegando estas facultades a la militar, y que tocante a la última disposición, aunque opinaba en parte como el Honorable Bobadilla, creía que el objeto de ese artículo era de no interrumpir el curso de las causas. Después de varias discusiones, se aplazó ésta para cuando se diese la tercera lectura a dicho proyecto.

En seguida se pasó a la segunda discusión de la ley sobre visitas domiciliarias. Fué discutido el Art. 3º.

Los Honorables Bonilla y Melitón Valverde dijeron que no creían conveniente que los Alcaldes hiciesen uso de la fuerza armada para las visitas domiciliarias, sino en los casos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º del Art. 1º, pues siempre estarán por prestar a los ciudadanos la mayor garantía posible.

Los Honorables Bobadilla, Pérez y Abreu, dijeron que para que la autoridad fuese respetada, era de necesidad que pudiese hacer uso de la fuerza armada, en los casos necesarios; y fué decidido así por la mayoría.

El Art. 8º fué modificado de este modo: *El Juez que allanase una casa fuera de los casos designados por esta Ley o sin los requisitos prescritos en ella, incurrirá en el primer caso en una multa de 25 a 500 pesos fuertes, sufrirá una prisión de seis días a seis meses, y será además responsable de los daños y perjuicios; en el segundo caso solo incurrirá en la multa.*

Terminada la discusión, el Honorable Bonilla propuso se interpelase al Ministro de Hacienda para que impusiese al Senado sobre la emisión de billetes que autorizó a emitir al Poder Ejecutivo con fecha 17 de Mayo de este año.

El Honorable Melitón Valverde apoyó la proposición.

El Honorable Bobadilla dijo que el Senado no podía dar su voto para esta interpelación sin saber su objeto, o las causas que la motivaban, y el Honorable Bonilla se reservó presentarlas en la sesión próxima.

Agotada la orden del día, se levantó la sesión.- *Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 5 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Rafael Pérez

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesto de los Honorables Vice-Presidente Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; se abrió la sesión.

Después de leída y aprobada el acta de la anterior, se pasó, conforme a la orden del día, a la discusión del proyecto de decreto sobre examen e interceptación de papeles y de la correspondencia privada.

Fueron aprobados el Considerando y los incisos 1º y 2º del Art. 1º El Honorable Bobadilla propuso una aclaración al inciso 3º, que fué aceptada; se modificó también el inciso 5º a propuesta del Honorable Bobadilla, quien creía conveniente se redactase así: *Podrán interceptarse las cartas y examinarse los papeles y la correspondencia de cualquiera dominicano de quien se tengan vehementes sospechas de que es infiel a la República, desafecto al Gobierno y que perturba el reposo público.* Después de varias discusiones, la mayoría decidió que en vez de *vehementes sospechas* se dijese:

de quien se tengan pruebas de infidelidad, de espionaje o de traición contra la República.

Leído el Art. 2º, el Honorable Bobadilla pidió la reforma de éste y la adición de un inciso, la que proponía de este modo: *Cuando la autoridad pública juzgue conveniente interceptar las cartas de una persona y examinar sus papeles, hará comparecer al Alcalde del lugar y a su Secetario,* y *debidamente citada la persona, se procederá a las operaciones; y si fuese necesario se levantará acta para las demás prosecuciones a que hubiere lugar.*

El Honorable Manuel María Valverde fué de opinión que no se dijese: *Cuando la autoridad pública deba proceder conforme a la Ley, etc., etc.;* y fué aprobada. El inciso propuesto y aceptado, dice así: *Las disposiciones de la presente Ley en nada derogan ni alteran la de los artículos 14, 15 y 16 del Código de Comercio.*

Se dió lectura al Art. 3º, y EL HONORABLE BOBADILLA hizo la siguiente observación: Me parece inconducente la disposición del artículo 3º: ¿por qué y para qué quemar papeles o cartas venidas del enemigo que no revelen maquinación o traición contra el Estado, ni cosa alguna que pueda turbar el orden y la tranquilidad pública? Quemar gacetas o cartas, documentos y papeles que ningún perjuicio traen y que pueden interesar a las familias, no me parece que deje ninguna utilidad al orden y a la seguridad pública, y que esto podía dejarse a la discreción de la autoridad.

Los demás Senadores no acogieron esta alteración al artículo, fundándose en que está prohibido todo comercio con el enemigo y que al dar la autoridad pública a cualquier individuo las cartas o papeles que viniesen de territorio enemivo se establecía, no ya tácita, sino muy abiertamente, la correspondencia con él.

El Art. 4º fué enmendado y modificado de este modo: *En todos los casos se verificará el registro y examen con el más sagrado sigilo, quedando los que revelasen los secretos*

contenidos en estos papeles, sujetos a las penas establecidas en el Art. 378 del Código Penal.

Los Art. 5º y 6º fueron aprobados.

El Honorable Bobadilla, al concluir la discusión de estos artículos, hizo la siguiente moción: Como no puede hacerse ley contraria a la letra o al espíritu de la Constitución, me parece que también debe ponerse un artículo que diga: *Las disposiciones de la presente ley en nada perjudican a las medidas extraordinarias de seguridad que el Poder Ejecutivo pueda tomar en los casos del inciso 22, Art. 35 de nuestro Pacto Fundamental,* porque todas las leyes deben ponerse de acuerdo con él y deben guardar entre sí cierta relación y coherencia, teniendo siempre presente la utilidad y necesidad públicas.

El estado anormal del país, las circunstancias que concurren en él, las banderías políticas que se han desplegado y los enemigos que tiene la tranquilidad y el reposo público, es lo que me obliga a estas observaciones, porque creo que la autoridad pública es el primer deber que ha de ocupar a un Gobierno, y que cuantas medidas se tomen para el efecto, son buenas con tal que dejen buenos resultados y que afiancen la tranquilidad, el bienestar de las familias y el orden en general.

Esta proposición no fué acogida, pues el Honorable Manuel Ma. Valverde dijo que no había ley superior a la Constitución, y que en esos casos que indicaba el Honorable Bobadilla, prevalecía lo que imperaba ella; los Honorables Abreu, Bonilla y Melitón Valverde hicieron las mismas consideraciones y habiendo mayoría por la no adición del artículo propuesto por el Honorable Bobadilla, se terminó la discusión.

Se dió lectura a un oficio del Ministro del Interior, por el cual remite al Senado un proyecto de ley sobre visitas domiciliarias que el Poder Ejecutivo somete a la aprobación del Senado Consultor. Leyóse el proyecto de ley que dice así:

PROYECTO DE LEY SOBRE VISITAS DOMICILIARIAS

Considerando: Que el bien de los pueblos exige que la seguridad pública no se vea amenazada con el entorpecimiento y trabas que hallen las autoridades encargadas de su vigilancia, en la ocultación fácil que se proporciona al crimen;

Considerando: Que el temor de que una autoridad abuse de las facultades que la ley le dé para el cumplimiento de su deber, no debe hacer privar a los demás de esas facultades, pues que para aquéllas hay leyes represivas que les exijan la responsabilidad; el Gobierno, usando de la iniciativa que le concede el Art. 35 de la Constitución, tiene el honor de proponer al Senado el siguiente proyecto de

LEY

Art. 1º Toda autoridad encargada de vigilar por el orden público y la observancia de la ley, procederá sin otra formalidad a la persecución y aprehensión de cualquier individuo sospechado de haber cometido crimen o delito, o de cualquier sentenciado y penado, o de cualquier persona, que no obedeciere al llamamiento de la autoridad; sea cualquiera el lugar donde se oculte.

Art. 2º Las autoridades que tengan que proceder a la investigación de papeles, o de cualquier otro cuerpo de delito, siempre que para ello haya precedido auto o decreto de Juez o Autoridad competente que los faculte, procederán a la dicha investigación en nombre de la ley, y en cualquier lugar donde se repute hecha la ocultación.

El Senado tomó conocimiento del presente proyecto y pasó a ocuparse de la orden del día.

El Honorable Bonilla, según lo había ofrecido en la sesión anterior, presentó los motivos que le impelían a interpelar al Señor Ministro de Hacienda, y dijo que había notado que los billetes de Caja nuevamente emitidos y cuya autorización recibió del Senado. el Poder Ejecutivo, no aparecían emitidos en virtud de este acuerdo, sino por el Decreto de S. E. el General Libertador con fecha 16 de Agosde 1858, y que, creyendo que no debiera ser así, juzgaba

oportuno que el Señor Ministro diese al Senado las aclaraciones necesarias sobre el particular.

Fué acogida a unanimidad esta proposición y se resolvió oficiar al mencionado Ministro, invitándole a asistir al Senado en la sesión siguiente para los fines indicados.

Se dió lectura a una solicitud del Alcalde de Bayaguana, y habiéndose impuesto el Senado de su contenido, pasó a la Comisión de peticiones y se levantó la sesión.- *Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.- Bobadilla.*

SESION DEL 6 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Presidente Manuel Joaquín Delmonte; Vice-Presidente Rafael Pérez; Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; se abrió la sesión y se dió lectura del acta de la anterior que fué aprobada unánimemente.

Se leyó un oficio del Señor Ministro de Hacienda por el cual ofrecía presentarse en el Senado en esta sesión, en virtud del llamamiento que se le había hecho.

La orden del día traía la sanción de la ley sobre visitas domiciliarias, y habiendo observado el Honorable Vice-Presidente que estaba sobre la mesa el proyecto de ley sobre visitas domiciliarias que había enviado el Poder Ejecutivo, hubo la discusión siguiente:

El Honorable Abreu pidió la palabra y dijo que el Senado se había ocupado ya en la formación de una Ley sobre visitas domiciliarias, la que había sufrido las tres lecturas constitucionales y la discusión, artículo por artículo, habiendo recibido la sanción en cada uno de ellos, que por lo tanto creyendo sancionada la ley, opinaba que debía enviar-

se ésta al Poder Ejecutivo acompañada del nuevo proyecto propuesto, para que hiciese él las observaciones que creyese justas y legales.

El Honorable Rafael Pérez opinó en contra, fundándose en que aun no se había sancionado la ley, pues estaba sujeta a modificaciones, y que, por lo tanto, podía tomarse en consideración y discutirse el proyecto del Poder Ejecutivo.

El Honorable Abreu replicó que el Senado había sancionado el fondo, el espíritu de cada artículo, y que solamente podía dicha ley sufrir modificaciones en cuanto a la redacción.

Del mismo modo opinó el Honorable Bonilla, y dijo que la ley estaba sancionada, pues había recibido su sanción artículo por artículo, según lo imperaba el Reglamento.

El Honorable Presidente dijo que, no habiendo asistido a la última sesión, ignoraba si la ley en cuestión estaba o no sancionada; pero que desde el momento que en sentir de los preopinantes, era todavía susceptible de modificaciones, no debía considerarse como tal; que, además, el Poder Ejecutivo tenía por la Constitución la iniciativa en las leyes, lo mismo que el Legislativo, y que en el peregrino caso en que se encontraba el Senado, con dos proyectos de ley entre manos sobre un mismo objeto, el único medio de conciliarlos todos era refundirlos en uno, a ver si éste lograba obtener la sanción de ambos poderes.

El Honorable Manuel María Valverde dijo que no creía parlamentario ni posible el régimen propuesto, no pudiendo darse para una misma ley dos iniciativas simultáneas, pues en casos tales ésta se obtenía a prevención como sucede en todas las materias de jurisdicción atributiva, siendo de opinión de que el proyecto de ley que se había discutido ya por el Senado siguiese su curso constitucional. El mismo Senador añadió que la prevención que se sustentaba era a sus ojos una anticipación inútil e injustificable, toda vez que al Poder Ejecutivo compete por derecho el objetar las leyes,

pudiéndose aplazar muy convenientemente para entonces los reparos que hayan de hacerse de ésta.

El Honorable Presidente repuso que no veía inconveniente ninguno en que se adoptase el expediente propuesto por él, con lo que se evitaría quizás que volviese la ley al Senado objetada por el Poder Ejecutivo y se quedase como otras muchas en proyecto, lo que sería lamentable.

Continuó la discusión y puesta en última a votación, fué acordado por la mayoría que se diese la sanción a la ley discutida y aprobada ya por el Senado, y se enviase al Poder Ejecutivo, para los fines constitucionales; en consecuencia, se procedió a ello y fué aprobada y sancionada en su conjunto.

Presentóse el Ministro de Justicia e Instrucción encargado de la Cartera del Interior y Policía y expuso al Senado el estado de desmoralización y desorden en que la facción que se levantó en las fronteras del Sur ha dejado aquellos pueblos, y la facilidad con que los rebeldes, refugiados en el territorio haitiano después de su derrota, pueden seguir cometiendo asesinatos, depredaciones y otros actos de violencia, capaces de arruinarlas completamente si no se toman medidas enérgicas y eficaces providencias, bastantes a cortar el mal de raíz; en virtud de lo expuesto, añadió que se hacía indispensable autorizar al Poder Ejecutivo para que tomase todas las medidas que juzgase necesarias al efecto en conformidad con el Art. 35 de la Constitución, atribución 22.

El Senado tomó en consideración la exposición hecha por el Señor Ministro, después de lo cual se retiró éste.

Presente el Señor Ministro de Hacienda, el Honorable Presidente propuso al Senado que pasase a una sesión secreta, y apoyada ésta proposición por los Honorables Pérez y Abreu, quedó en receso la pública.

Terminada la sesión secreta se procedió de nuevo a los trabajos del día.

Declarada la urgencia, se abrió la discusión sobre lo expuesto en la sesión de este día por el Ministro encargado de la Cartera del Interior, y estando de acuerdo todas las opiniones; vista la manifestación arriba expresada por el Señor Ministro en nombre del Poder Ejecutivo; el Senado Consultor, usando del derecho que le confiere el párrafo único del Art. 35, resolvió prestar su asenso al Poder Ejecutivo para que use de las facultades pedidas, las que ejercería en los términos prescritos por la Constitución.

Dióse la tercera lectura constitucional al proyecto de ley sobre el estado de sitio, y puesta a discusión su conveniencia, el Honorable Rafael Pérez opinó en contra, fundándose en que imperando la Constitución que el Poder Ejecutivo era quien debía hacer la declaratoria del estado de sitio, creía inútil la ley en vista de este artículo de la Constitución. El Honorable Presidente objetó esta opinión diciendo que la ley no invadía esta facultad del Poder Ejecutivo, que su objeto era el de señalar las reglas que deberían observarse una vez hecha la declaratoria del estado de sitio; que su conveniencia y necesidad estaban patentes en vista de que no había ley sobre el particular, siendo además indispensable que las autoridades supiesen cuales eran sus atribuciones y sus deberes en estos casos y que los ciudadanos no creyesen invadidos sus derechos por la autoridad, pues que la ley los determinaba y los limitaba.

Los demás Senadores opinaron en este sentido y fué aprobada la conveniencia de la ley por la mayoría.

Terminado esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

SESION DEL 5 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Presidente; Melitón Valverde, Manuel María Valverde, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario; se abrió la sesión y se leyó el acta de la anterior que fué aprobada.

Proclamada la orden del día se procedió a dar la última discusión al proyecto de ley sobre interceptación y examen de la correspondencia y de papeles privados; y hechas algunas observaciones, fué aprobado artículo por artículo y sancionado el conjunto del modo siguiente:

El Senado Consultor, usando de su iniciativa y previas las tres lecturas constitucionales,

Considerando: Que la correspondencia y papeles privados no pueden ser interceptados ni examinados, sino por la autoridad competente, en los casos y con las formalidades prescritas por la ley, según la 18ª disposición del Art. 8º de la Constitución, ha dado la siguiente

LEY

SOBRE INTERCEPTACION Y EXAMEN DE LOS PAPELES Y CORRESPONDENCIA PRIVADA

Artículo 1º La correspondencia y papeles privados no pueden ser interceptados, examinados o registrados sino en los casos siguientes:

1º Cuando haya tenido lugar la visita domiciliaria conforme al caso 5º del Art. 1º de la Ley sobre visitas domiciliarias.

2º Cuando las cartas o papeles vengan directa o indirectamente de país enemigo.

3º Cuando dichas cartas o papeles hagan remisión a otros que sean necesario examinar para el descubrimiento de la verdad.

4º Cuando éstos se dirijan de la República directa o indirectamente a país enemigo.

5º También podrán interceptarse y examinarse los papeles y correspondencia de cualquier persona de quien se tengan pruebas de infidelidad, de espionaje, o de traición contra la República.

Artículo 2º Cuando, conforme a la ley, deba procederse a interceptación y examen de cartas y papeles privados, se verificará éste por los Alcaldes acompañados de sus Secretarios y de dos testigos, o por el Juez de Instrucción acompañado de su Secretario.

§ Las de la pesente Ley en nada alteran la de los Artículos 14, 15, 16 del Código de Comercio.

Artículo 3º Si los papeles o cartas que deban examinarse fueren de aquellos a que se refiere el párrafo 2º del Art. 1º y revelaren maquinación o traición contra el Estado, y cosa alguna que tienda a turbar el orden y tranquilidad pública, serán incinerados inmediatamente, pero en el caso contrario se retendrán para que se haga el uso que corresponda.

Artículo 4º En todos los demás casos se verificará el registro y examen con el mayor sigilo, quedando los que revelaren los secretos contenidos en estos papeles, sujetos a las penas establecidas en el Art. 378 del Código Penal.

Artículo 5º No podrá hacerse uso en juicio ni fuera de él, de ninguna de las noticias que contengan los papeles y cartas examinadas, siempre que estas noticias versen sobre asuntos puramente particulares.

Art. 6º La presente Ley deroga cualquiera disposición que le sea contraria; y será enviada al Poder Ejecutivo par los fines constitucionales.

Dada en el Senado Consultor, a los 8 días del mes de Junio de 1860 y 17º de la Patria. — El Presidente del Senado. M. J. Delmonte. — El Secretario, P. P. de Bonilla.

Siguiendo el orden de los trabajos del día, el Honorable Presidente declaró abierta la discusión sobre el proyecto de ley que regula el estado de sitio.

No tuvo observaciones el Considerando; fué aprobado el Art. 1º; el 2º fué discutido largamente, opinando el Honorable Bonilla que no estaba este artículo en conformidad con el 62 de la Constitución. A este parecer se adhirió el Honorable M. M. Valverde.

Los Honorables Delmonte y Melitón Valverde fueron de distinta opinión, probando su conveniencia en la que to-

dos estaban de acuerdo y aduciendo otras razones también, para probar que dicho artículo no era contrario a la Constitución, porque ésta no hablaba de una plaza atacada por tropas enemigas o por facciosos, cuando se hubiese hecho fuego sobre ella; que en tales casos no podía dejar de reputarse en estado de sitio la Plaza, Común o Provincia atacada.

Habiendo igualdad de votos en las dos opiniones emitidas, fué aplazada la discusión de este artículo para otra sesión.

El Art. 3º pasó sin observación. El 4º fué discutido y modificado, habiéndose omitido el párrafo que decía así: *Sin atender a la calidad de los autores principales y sus cómplices,* porque la Constitución define los Tribunales que deberán juzgar a ciertos ciudadanos, cuales son los altos funcionarios.

Los demás artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º fueron discutidos y no sufrieron ninguna alteración; terminado esto, se levantó la sesión de este día.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 11 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor de la República, se abrió la sesión presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Presidente; Rafael Pérez, Vice-Presidente; Tomás Bobadilla, Francisco Jovier Abreu, Melitón Valverde, Manuel María Valverde, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario.

Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

Conforme a la orden del día, se continuó la discusión del proyecto de ley sobre el estado de sitio, y el Honorable Bobadilla dijo que, habiendo opinado desde las primeras

lecturas de dicha Ley que no la creía conveniente, se abstenía de tomar parte en la discusión y que no aprobaba ninguno de los artículos, ni el conjunto de dicha ley.

Principióse la discusión y fué aprobado el Considerando; fueron borrados el Art. 1º y 2º que componían el Cap. 1º, que trataba sobre la declaratoria del estado de sitio, pues el Honorable Abreu opinó, y la mayoría fué de la misma opinión, que la declaratoria del estado de sitio tocaba al Poder Ejecutivo por el Art. 62 de la Constitución; y que estando esto previsto, creía innecesaria la repetición.

Fueron aceptados los Artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º; el Art. 9º fué modificado de este modo: *Toca al Poder Ejecutivo decretar la cesación del estado de sitio;* fué aprobado también el Art. 10 y quedó sancionada la ley.

La Comisión de peticiones, abrió concepto sobre la solicitud del Alcalde de Bayaguana, y es como sigue:

La Comisión de peticiones en vista de la que se ha dirigido a esta Honorable Corporación por el Alcalde Constitucional de la Común de Bayaguana y Síndico de aquel Ayuntamiento, pidiendo se les autorice a efectuar la venta de veinte y cinco árboles de caoba que se encuentran en los terrenos del ejido de aquella población, para invertir su producido en la reedificación de la iglesia, la Comisión opina que, siendo tan laudable el objeto a que se destina el valor de dichos árboles de caoba que pertenecen a la Común por encontrarse en los terrenos del ejido, se autorice la venta en favor del mejor postor con la previa condición que el producido de su venta no pueda destinarse a otra cosa sino a la reedificación de la iglesia. Santo Domingo, Junio 11 de 1860. — Firmados, Abreu. — Bonilla.

El Senado, aprobando el dictamen de la Comisión, acordó autorizar al Ayuntamiento de Bayaguana para vender a mayor beneficio posible 25 árboles de caoba de los que se encuentran en el ejido del pueblo, a cargo de invertir su producido en la reparación de aquella iglesia parroquial.

La Comisión encargada de formular un proyecto de revisión de la ley sobre el Comercio Marítimo, presentó el

trabajo que le fué encomendado; el Honorable Bonilla, miembro de la Comisión, dió lectura al referido proyecto, con lo cual se declaró cerrada la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 12 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunidos todos los miembros que componen el Senado Consultor, Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Presidente; Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y se aprobó.

Leída la orden del día se procedió a la discusión que había quedado aplazada sobre la proposición de traducción de los Códigos franceses que rigen en la República. Leyóse el dictamen de la Comisión nombrada para abrir concepto sobre el particular, inserta en el acta del 14 de Mayo; se reprodujo la opinión del Honorable Bobadilla, dada en la sesión de ese mismo día; y el Honorable Bonilla dijo que él creía que la intención del Senado, al pedir la parte de la traducción hecha, había sido para enterarse de si estaba o no perfecta y poder decir al Poder Ejecutivo si los traductores eran o no capaces de llenar cumplidamente esta comisión.

El Honorable Delmonte fué de opinión de que el Senado no debía decir nada sobre este punto; que estaba fuera de los límites de sus atribuciones el entender o entrar en proposiciones y hacer contratos; que el Poder Ejecutivo era hábil para ello y que el Senado no podía salirse del círculo de las funciones que le estaban trazadas por la Constitución.

A petición de un Senador, se resolvió aplazar esta discusión para otro día; y en seguida se dió la primera lectura constitucional a la ley de Universidad.

El Honorable Bobadilla reprodujo la opinión que emitió el día de la presentación de dicha ley. Los Honorables Pérez y Abreu fueron de la misma opinión, apoyándose en que no sabían cuáles eran las razones de inconveniencia de la ley anterior, para que fuese derogada.

El Honorable Melitón Valverde opinó que era conveniente y que estaba por su discusión. El Honorable Bonilla dijo que la creía conveniente y necesaria; que se apartaba de que el Poder Ejecutivo hubiese puesto o no en ejecución la anterior, puesto que fué remitida por él como lo ha sido ésta; y por lo tanto opinaba en favor de la ley.

Puesta a votación la utilidad de la ley, la mayoría opinó en contra por no estar expresos los inconvenientes que se atribuyen a la ley actualmente en vigor.

El Honorable Rafael Pérez hizo la siguiente moción apoyada por el Honorable Bobadilla, la que fué tomada en consideración:

Honorables Senadores: Nombrado por la Provincia del Seibo, me cabe la satisfacción y el honor de recordar hoy que ella ha sido una de las que ha hecho los mayores esfuerzos para fundar la República y sostener su libertad e independencia.

Cuando la Separación, contribuyó con una gran cantidad de ganado para el sostenimiento del Ejército, y sus habitantes hicieron este donativo gratuíto a la Patria, no habiendo querido admitir indemnización alguna; después ha contribuído, como las demás, con su contingente respectivo para sostener el orden y la libertad adquirida.

Sus habitantes, casi en su mayor parte, no se ocupan sino en la crianza de animales y las grandes secas que han experimentado les ha proporcionado pérdidas considerables; así es que hoy, tratando de hacer una gran reparación a la iglesia parroquial, habiendo hecho un llamamiento a la piedad y religiosidad de los vecinos, se encuentra un déficit que ellos no pueden sufragar, y sería sensible el que no se llevase al cabo la reedificación, o que

la iglesia material desapareciera por falta de recursos Por estos motivos, propongo que el Senado Consultor vote una suma de quinientos pesos fuertes para poder concluir con ellos la reedificación de aquella iglesia parroquial, en atención a que el Gobierno de la República es protector nato de la religión y debe interesarse en la fomentación del culto. — Santo Domingo, Junio 12 de 1860 y 17º de la Patria. — Rafael Pérez. — Apoyó esta opinión: Bobadilla.

Se dió la primera lectura a los capítulos 1º, 2º, 3º y 4º de la ley sobre el Comercio Marítimo, presentada en la sesión anterior, y con esto se levantó la de este día.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.- Bobadilla.-* Es copia.- *P. P. de Bonilla,* Secretario.

SESION DEL 13 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Presente la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; fué leída y aprobada el acta de la anterior.

Se continuó la primera lectura del proyecto de ley sobre el Comercio Marítimo, principiando en el Capítulo 5º en el cual quedó aplazada, hasta el undécimo y último de la ley.

Concluído esto y siendo la hora muy avanzada, se levantó la sesión.- *M. M. Valverde.- M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 18 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Melitón Valverde, y Pedro Pablo de Bonilla, Secretario.

Leyóse el acta de la sesión anterior y fué unánimemente aprobada.

Dióse lectura a un oficio del Ministro Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores, conteniendo los siguientes conceptos:

Habiéndose presentado algunas dificultades para el arreglo que directamente intenté con el Señor Durán de Saintandré, antes de dejar ese Señor el Consulado francés en ésta, y queriendo obviar inconvenientes, tanto él como yo, convinimos en que los reclamos existentes en el Consulado de Francia contra el Gobierno de la República, fuesen sometidos al arbitraje de dos Cónsules de naciones amigas, residentes en Santo Domingo. A cuyo fin extendimos y firmamos el Protocolo que adjunto tengo la honra de someter a la aprobación del Senado, conforme a los términos del 9º inciso del Art. 26 de la Constitución.

Acompaño asimismo a V. S. copia de la nota que pasó a este Ministerio el Consulado de Francia, conteniendo el resumen de los reclamos a que se refiere el Protocolo, etc., etc.

El Senado se impuso de los reclamos hechos por el Cónsul de S. M. el Emperador de los franceses, y del Protocolo ajustado y firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República y el dicho Cónsul; quedando aplazada la decisión sobre este negociado para otra sesión.

Leyóse un oficio del Ministro del Interior remitiendo la Ley votada por el Senado sobre visitas domiciliarias, con varias observaciones que hace a dicha Ley el Poder Ejecutivo.

Procediéndose luego a los trabajos del día, se dió la 2ª lectura constitucional al proyecto de ley sobre el Comercio Marítimo.

Habiéndose abierto después la discusión sobre la moción hecha en sesiones anteriores por el Honorable Rafael Pérez, de que se votase una suma de 500 pesos fuertes para la reedificación de la iglesia de Santa Cruz del Seibo, el Honorable Bonilla, observó que el Poder Ejecutivo había oficiado al Senado sobre este mismo punto, habiéndose acordado entonces que en la Ley de Presupuestos se votaría la suma pedida; y fué unánimemente acogida esta observación.

Se presentó el Señor Ministro Encargado de la Cartera del Interior y manifestó al Senado que, estando dispuesto el Poder Ejecutivo a acordar la gracia impetrada por Ramón de la Rosa, acusado de deserción en presencia del enemigo y condenado a la pena de muerte por el Consejo de Guerra del Cuartel General en San Juan, solicitaba del Senado que prestase su acuerdo para ejercer la gracia que se le había pedido, si lo estimaba conveniente.

Fué tomada en consideración la consulta hecha por el Señor Ministro, para resolver lo conveniente en la sesión siguiente.

La Comisión nombrada para formular el proyecto de ley de patentes, lo presentó, y fué tomado en consideración.

El Honorable Bobadilla, hizo la moción siguiente, apoyada por el Honorable Melitón Valverde: Señores: No nos quedan más que nueve días de Sesión legislativa y hasta ahora no se han presentado por el Poder Ejecutivo las bases que deben servir para la Ley de Gastos Públicos en el próximo año de 1861, sin embargo de que el Ministro de Hacienda quedó de remitir el Presupuesto. Opino que sería muy conveniente interpelarle para que explique las razones por qué no lo ha hecho, porque creo que esta ley es de primera necesidad, y en ella deben tomar parte ambos Poderes, para que pueda verificarse el arreglo de la contabilidad: y además, habiendo acordado ya el Senado que se haga el abono

de algunas sumas parciales que deben figurar en la expresada Ley de Gastos Públicos; y si no tiene lugar ésta, resultaría que esos gastos de justicia y de benevolencia que el Senado ha acordado, tanto a favor del Seminario Conciliar, como para la reedificación de algunas iglesias, entre ellas la del Seibo, quedarán sin efecto.

Fué aceptada la presente proposición y se acordó oficiar al referido Ministro de Hacienda, para que en la sesión del día siguiente, se presentase al Senado a dar las aclaraciones que se le pidiesen. Con esto se terminó y levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.- Bobadilla.*

SESION DEL 19 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Presente la mayoría del Senado Consultor, compuesto de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; dióse lectura al acta de la anterior y fué aprobada.

Compareció el Señor Ministro de Hacienda, en virtud del llamamiento que le hizo el Senado, para responder a la interpelación que propuso el Honorable Bobadilla, y manifestó que a pesar de los inconvenientes que ocasionaba el estado de guerra actual, estaba dispuesto a presentar el Presupuesto que había regido el año pasado.

El Senado, deseando cumplir una de sus principales atribuciones y llenar el voto de la Constitución, acogió la proposición del Señor Ministro.

Se trajo a la vista el recurso en gracia interpuesto por el reo Ramón de la Rosa, por ante el Poder Ejecutivo y presentado al Senado para los fines constitucionales.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Después de haberse discutido sobre el particular, se tomó el acuerdo siguiente:

EL SENADO CONSULTOR

Visto el recurso en gracia interpuesto por ante el Poder Ejecutivo por Ramón de la Rosa, soldado del batallón de San Cristóbal, condenado a muerte por el Consejo de Guerra especial, formando en el Cantón General de Las Matas, por crimen de deserción en presencia del enemigo;

A pesar de que los fallos de los Consejos de Guerra, permanentes o especiales, están sujetos a apelación por ante la Suprema Corte de Justicia, como Corte Marcial, según el Art. 45, atribución 10ª de la Constitución, y de que, en principio, no debe usarse nunca del recurso en gracia mientras no se hayan recorrido todos los grados de jurisdicción y agotado los medios legales de reformar una sentencia;

Tomando en consideración que no habiendo apelado Ramón de la Rosa en el término fatal que prescribe el Art. 233 del Código Penal Militar, ha dejado caducar su derecho a usar de aquel recurso, no quedándole al presente otro que el de implorar la clemencia del Gobierno;

Atendidas las razones que al recomendar el referido recurso en gracia ha expuesto el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, encargado de lo Interior y Policía,

ACUERDA:

El Senado Consultor presta su anuencia al Poder Ejecutivo para conmutar la pena de muerte al mencionado Ramón de la Rosa, y lo excita al mismo tiempo a dar las providencias que estime necesarias, para que, en lo sucesivo, los Presidentes de los Consejos de Guerra, permanentes o especiales, impongan a los reos del derecho que les acuerda la ley de apelar por ante la Suprema Corte Marcial contra toda sentencia de condenación, en obsequio de la humanidad y de la mejor administración de Justicia.

Se abrió la discusión sobre el convenio efectuado entre el Cónsul francés y el Ministro de Relaciones Exteriores, tocante a los reclamos hechos por el Cónsul; y el Senado después de haber deliberado, aprobó el convenio celebrado entre el Ministro de Relaciones Exteriores y el Cónsul de S.

M. el Emperador de los franceses, con fecha (*) de Marzo de este año, para someter a arbitraje los reclamos hechos contra el Gobierno de la República, por C. Teucheré, Caneu y Co., Bertrana Veron, Grandgerard, y Largier, súbditos franceses.

Se dió la primera lectura constitucional al proyecto de ley de patentes.

Vistas las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a la Ley, votada por el Senado, sobre visitas domiciliarias, fueron discutidas, y no habiéndose acogido todas, se determinó comunicarlo al Poder Ejecutivo, a fin de dar cumplimiento al Art. 23 de la Constitución.

Habiendo quedado aplazada la discusión sobre la solicitud hecha para la traducción de los Códigos franceses que rigen en la República, se reprodujo la opinión del Honorable Bobadilla sobre este punto, y el Honorable Delmonte repitió lo que anteriormente había dicho sobre el particular; y el Senado, de acuerdo con las opiniones emitidas, resolvió que se remitiese esa petición al Ministro de Justicia, como negocio de su incumbencia.

No habiendo más proposiciones, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 20 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla.

(*) En blanco en el original.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior, y después de varias observaciones fué aprobada.

Se leyó un oficio del Ministro de Guerra y Marina por el cual el Poder Ejecutivo hacía presente a esta Honorable Corporación, que habiendo recibido la Ley sobre el estado de sitio, dada por el Senado Consultor con fecha 13 de los corrientes, se abstenía de poner el *exequátur* a la referida Ley; pues advertía que en el Art. 2º no se explicaba de una manera clara y terminante, si en los casos en que debieran funcionar los Tribunales militares, quedaba subsistente la instancia que hoy está establecida ante la Suprema Corte de Justicia; y devolvía la Ley por si el Senado creyese esta observación fundada; y quedó sobre el bufete para discutirla en una de las próximas sesiones.

En conformidad a la orden del día, se dió la tercera lectura constitucional al proyecto de ley sobre el Comercio Marítimo, y quedó abierta la discusión para la sesión siguiente.

No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 21 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Presente la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión.

Después de leída y aprobada el acta de la anterior, se procedió a la orden del día y se dió la segunda lectura constitucional al proyecto de ley de patentes para el año de 1861.

Se principió la discusión de la ley sobre Comercio Ma-

rítimo y hechas varias modificaciones y aumentaciones, fueron aprobados los capítulos 1º, 2º hasta el décimo. Leído el Art. 88 que dice: *Las sentencias sobre comiso no están sujetas a apelación,* EL HONORABLE BOBADILLA dijo: Honorables Senadores: Son graves los efectos que se atribuyen a una sentencia soberana, dada en último resorte o que adquiere el carácter de la cosa juzgada, porque también pueden ser graves los asuntos que se traten en ella, tales como la vida, el honor y la hacienda de los particulares; por eso, en todos los Estados se ha creído justo no se aventuren los juicios en una sola sentencia, porque puede haber imposibilidad en las partes, para suministrar documentos y pruebas para la aclaración de los hechos; puede haber omisión en no dar los debidos pasos en defender bien el derecho, y, lo que es más, puede haber falta de entendimiento o de voluntad de parte del Magistrado que falló en la sentencia, y en todos estos casos sería duro que no quedase recurso y que los legisladores no proveyesen el remedio; sería aún más, contrario al derecho natural prohibirle al que le duele que se queje, y por eso se han creado remedios para el que sufre algún agravio.

En España, de donde nosotros descendemos con orgullo, los remedios son la querella de nulidad, la apelación, la suplicación y el recurso de injusticia notoria. La apelación que es una legítima reclamación hecha ante Juez superior dentro de un tiempo prefijo, contiene el efecto suspensivo y el efecto devolutivo; el primero consiste en que el juez que da la sentencia puede ordenar que se suspenda su ejecución, y el segundo es el que le atribuye el Tribunal Superior cuando la confirma y devuelve el conocimiento y la ejecución al tribunal *a quo*. No sucede lo mismo en la legislación que nos rige actualmente; por regla general, la apelación es suspensiva, a menos que en ciertos casos determinados por la ley, no se ordene la ejecución provisional con fianza o sin ella.

También es verdad que hay casos en que se niega la apelación, como cuando la suma es de menor cuantía y se supone que los gastos del recurso son superiores al objeto

principal de la demanda; cuando se trate de frutos que estén pendientes para cogerse, o de cosas que con el tiempo perecen y se consumen; cuando se trata de penas de simple policía o en otros casos que determinan las leyes.

Nuestra legislación en vigor sólo provee de dos vías, que se llaman ordinarias y extraordinarias. La primera es la oposición y la apelación; la segunda, que no puede emplearse sino en ciertos casos, son la tercera oposición, la.... (*) civil, y la responsabilidad personal.

En la cuestión que nos ocupa, establecer que las sentencias de comiso sean dadas sin apelación, es en mi concepto contrariar el derecho natural y los principios que consagra el derecho escrito de todas las naciones cultas.

Pueden ser de grande importancia los intereses que se ventilen y aunque fuesen de poco valor, sujetando éstos la ley a la decisión de los Alcaldes, pueden atravesarse intereses de grande importancia, como el honor y la reputación de un comerciante, porque suponerle que defrauda los derechos de la Nación, es suponerle un robo a la masa del Estado y de sus conciudadanos, porque las rentas del Estado que se establecen con justicia y equidad, que se emplean en el mantenimiento del orden, de la tranquilidad y de la seguridad pública, y que, por lo tanto, son equitativas y justas, deben ser pagadas fielmente; cualquiera sustracción supone un crimen o delito punibles con mayores o menores penas, y claro es que una causa semejante lastima el crédito y la reputación, y por lo tanto debe la ley abrirle con franqueza las puertas de un recurso favorable a los interesados, porque la latitud de la defensa no tiene límites, no conviene ponerle coartación, y porque los legisladores deben rodear a las partes de todas las garantías necesarias, a fin de que aquella libertad natural que se renuncia en el acto de la asociación, se convierta en una égida protectora y saludable.

Suponiendo el caso en que la sentencia defraudara

(*) En blanco en el original.

por error u otro motivo los derechos del Fisco, ¿no sería una ventaja el que éste encontrase también un remedio favorable contra el agravio o la injusticia que se le hiciese?

Por todas estas razones, yo no opino, ni voto por el artículo de la Ley que ordena que las sentencias, en causa de comiso, sean sin apelación.

Dígase que las sentencias serán ejecutoriables, no obstante oposición o apelación, cuando haya peligro en que los efectos secuestrados o cogidos en contravención puedan perecer o desmerecer; dígase que su producido permanezca en las cajas del Fisco, que brinda suficientes garantías, hasta que la sentencia haya adquirido el carácter de la cosa juzgada, para que entonces se distribuya entre los coparticipantes; pero no se le quite a las partes ni al Fisco un remedio saludable, previsto por la ley y conforme al derecho natural. Este es mi voto.

El Honorable Delmonte opinó del mismo modo, y habiéndose prolongado la discusión sobre este punto, se aplazó para continuarla en la sesión próxima, y se levantó la de este día.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 22 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior, que fué aprobada.

Se abrió un pliego del Señor Manuel Galván, miembro de la Cámara de Cuentas, pidiendo al Senado tenga a bien nombrar quien le reemplace en el puesto que ocupa, en ra-

zón de que motivos muy poderosos le obligan a hacer renuncia de ese cargo.

Conforme a la orden del día, se procedió a la discusión de la observación hecha por el Poder Ejecutivo a la Ley sobre estado de sitio, la que fué acogida por el Senado añadiendo al Art. 2º el párrafo siguiente, que se aprobó por la mayoría y que dice: § *No obstante, la Suprema Corte de Justicia, continuará conociendo de todos los recursos de apelación de las sentencias criminales y correccionales, y ejercerá, además, las atribuciones que como Suprema Corte Marcial, le confiere el Art. 45 de la Ley Fundamental.*

Continuó la discusión de la ley sobre Comercio Marítimo y se modificó el Art. 86 de esta manera: *Todas las mercancías y efectos que hayan caído en comiso, serán estimados inmediatamente por tres peritos nombrados por el Interventor, a fin de saber a qué Tribunal compete la causa, según su cuantía. Los efectos corruptibles se venderán en pública subasta dentro de ocho días y su producido se depositará en Tesorería para entregarse a su debido tiempo a quien corresponda, sin que en ningún caso haya lugar a reclamo alguno.*

Discutido el Art. 88, estando acordes todos los Honorables Senadores, se decidió suprimirlo, y fueron aprobados todos los demás artículos.

Se recibió un oficio del Ministro de Hacienda, quien a nombre del Poder Ejecutivo remitía el siguiente proyecto de decreto:

El Poder Ejecutivo, usando de su iniciativa propone el siguiente

DECRETO:

Considerando: que el Gobierno debe velar por la seguridad y conservación de las propiedades de los particulares y por el buen orden público.

Considerando: que han sido muy reiteadas las falsificaciones de papel moneda que circula en la República y que es necesario tomar una medida que corte de raíz un mal de tanta trascendencia,

HA VENIDO EN DECRETAR Y DECRETA

Art. 1º Todo aquel que falsificare los billetes de Caja que tengan curso legal en la República, o que tuviere participación en la introducción, emisión o circulación en el territorio dominicano de los billetes falsificados, será condenado a la pena de muerte y a los daños y perjuicios que hubiere irrogado.

Art. 2º Aquellos que teniendo conocimiento de que se ha introducido en el territorio de la República, cantidad de billetes falsos; aquellos que de cualquiera manera favorezcan y ayuden a la fabricación, emisión o introducción de billetes de Caja falsos y aquellos que, descubriéndoles, no den aviso a la primera autoridad, serán considerados como cómplices del crimen de falso y castigados con la misma pena establecida en el artículo anterior.

Art. 3º No incurrirán en pena alguna aquellos que justificaren haber recibido y devuelto a la circulación billetes falsos recibidos por ellos, como de buena ley. Sin embargo, todo aquel que hiciere uso de los billetes falsificados después que se hubiere conocido la falsedad, será castigado con un encarcelamiento de seis meses a un año y una multa de doscientos francos a mil francos, sin perjuicio de penas mayores en caso de complicidad.

Dado en el Palacio Nacional a los 22 días del mes de Junio de 1860 y 17º de la Patria. — Pedro Ricart y Torres.

Declarada la urgencia, fué tomado en consideración y sufrió la primera lectura constitucional.

Leyóse un oficio del Ministro de Justicia, quien remitía adjunto otro de la Suprema Corte de Justicia dirigido al Senado, pidiendo la interpretación de varios artículos de ley.

El Honorable Presidente nombró una Comisión para que abriese concepto sobre el particular, componiéndose ésta de los Honorables Bobadilla y Manuel María Valverde.

Los Honorables Senadores acordaron, por la premura del tiempo reunirse el día de mañana, a pesar de ser día franco, para discutir y sancionar la ley de patentes.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.*

SESION DEL 23 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla: se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Habiéndose reunido el Senado en este día con el objeto de discutir la ley de patentes para el año de 1861, se procedió a la discusión y fueron enmendados y aumentados los Arts. 13, 14, 15, 16, 17 y 18, habiéndose aprobado después, lo mismo que todos los demás artículos de la ley.

Concluída la discusión de esta ley se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 25 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla; después de leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se pasó a la orden del día.

Se dió la segunda lectura constitucional al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre monederos falsos.

Dióse la última lectura a la Ley de Patentes y aprobados separadamente todos los artículos de que se compone, fué sancionado el conjunto.

Habiéndose traído a la vista la renuncia hecha por el Señor Manuel Galván del cargo de miembros de la Cámara

de Cuentas, el Senado, tomando en consideración los motivos que expuso, acordó admitirla.

No habiendo ocurrido otra cosa, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 26 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior. Conforme a la orden del día, se dió la última lectura a la Ley sobre el Comercio Marítimo que fué sancionada artículo por artículo y finalmente su conjunto; y se envió al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Concluído esto y siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 27 DE JUNIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se dió la tercera lectura constitucional al proyecto de ley sobre

BIBLIOTECA DEL CONGRESO República Dominicana

monederos falsos, y puesta a discusión su conveniencia, el Honorable Bonilla fué de opinión de que la ley no era conveniente, en virtud de que el Código Penal establecía penas severas aun para tales crímenes, pues en la alternativa de escoger entre la pena de trabajos forzosos y perpetuos, o la muerte, estimaba esta última preferible.

El Honorable Delmonte combatió esta opinión observando que no existe aquí la perpetuidad de las penas; que las cárceles no prestan la seguridad necesaria para el debido castigo de los delincuentes y citó hechos bastantes lamentables en los que aparecían, por estos motivos, vanas las disposiciones de la ley y la Justicia inconsiderablemente burlada; así, pues, dijo, se hacía de necesidad prevenir, si era posible, este crimen con penas que no diesen al culpable las probabilidades de quedar impune y quitar todo recurso de que eludiese el cumplimiento de su sentencia.

El Honorable Rafael Pérez opinó del mismo modo y dijo que un gran mal exigía un gran remedio.

El Honorable Abreu dijo que, aunque el Código establece penas bastante fuertes para tales crímenes, habían sido ilusorias, y que siendo este delito tan trascendental y tan grave, que destruía la fortuna pública y el crédito nacional, debía atemorizarse vigorosamente a los que pretendiesen cometerlo, sin que encontrasen en apoyo de sus pretensiones el aliciente de evitar su castigo.

Puesta a votación la conveniencia de la ley, fué acogida por la mayoría; fueron discutidos todos los artículos, y después de haber sido reformada y modificada, se aprobó y sancionó artículo por artículo y el conjunto finalmente.

Habiéndose traído a la vista la solicitud hecha por los encargados de la fábrica de la iglesia de Santiago, para que se les autorizase a vender el solar del ex Convento de la Merced, y alcanzando el justiprecio de dicho solar a 3.000 pesos fuertes, el Honorable Presidente manifestó cuán triste era privar a la Ciudad de Santiago de ese suelo, en el cual podría más tarde fabricarse una grande iglesia, un colegio, o

cualquier otro edificio de utilidad pública, y propuso se votase la suma de *pesos fuertes* 3.000, cantidad en que se había justipreciado dicho solar, para la conclusión de la mencionada obra. Todos los Senadores opinaron del mismo modo y quedó así acordado.

También se tomaron en consideración otras dos solicitudes por las que se pedía al Senado votase las sumas de F. 600 para la reedificación de la iglesia del Seibo, y F. 500 para la de San Carlos; y el Senado, después de haber deliberado, acordó votar las mencionadas sumas para el objeto indicado; las que se pagarían según lo permitiesen las circunstancias del Erario.

Vista la solicitud del Vicario General, Vice-Rector del Colegio Seminario y el informe del Ministro de Justicia sobre el particular; en atención a que la asignación hecha por la ley no alcanza a cubrir los gastos del Seminario, y teniendo en consideración las observaciones del Ministro de Justicia e Intrucción Pública, se acordó votarle 600 pesos fuertes anuales, comprendidos en esta cantidad los doce mil pesos nacionales, de que trata la Ley que crea el Seminario.

Se recibió un oficio del Presidente de la Cámara de Cuentas, quien remitía inclusos el informe y las Cuentas generales de la República, correspondientes al año 1859.

Se dió lectura al informe redactado en los siguientes términos:

Honorables Senadores: La Cámara de Cuentas os pide las más sinceras excusas por la tardanza con que os remite hoy el informe y centralización de las Cuentas generales de la República correspondientes al año vencido; la Cámara reserva para más tarde el daros con mayor extensión las razones que motivaron el retardo de las cuentas.

De antemano y aunque fuera de propósito, la Cámara os hace presente que ninguna culpa ha tenido en la falta de cumplimiento a lo que imperan la Constitución y las leyes.

La tardanza con que fueron remitidas las Cuentas y

la escrupulosidad con que han sido examinadas, han impedido a la Cámara el presentaros a su debido tiempo este informe. Cuentas existen que no figuran en la centralización por haber sido remitidas tan tarde, que la Cámara ha creído conveniente no hacerlas figurar, por no haberlas podido examinar y éstas son las de los paquetes y correos de esta Capital.

La escrupulosidad de la Cámara en el examen de las Cuentas la obligó a solicitar del Señor Ministro de Hacienda, una copia de las resoluciones del Gobierno, respecto a las donaciones y sueldos acordados a un gran número de empleados, pues la Cámara ningún conocimiento tenía sobre ésto y, sólo sí, notaba la gran diferencia que existía entre los documentos y la Ley de Gastos Públicos.

También se devolvieron varios documentos al Contador General de Hacienda para su legalización, por creer la Cámara que éstos carecían de otros requisitos; pues son documentos en que figuran grandes sumas egresadas y sólo aparecen con la única firma del encargado de Obras Públicas y con el "Páguese" del Administrador de Hacienda; después fueron devueltos acompañados de una copia de la orden del Señor Ministro de Hacienda, en la que comunica al Administrador particular la resolución del Gobierno respecto a la inversión de esos fondos, destinados a la reparación de las casas pertenecientes a la Nación.

La Cámara de Cuentas ve con placer los grandes ingresos operados durante el año vencido. No es menos la satisfacción que experimenta la Cámara al participaros el desvelo y aun los sacrificios que se ha impuesto el Gobierno de la República para pagar, en su mayor parte, la deuda con que se recargó el país a causa de los diferentes y lamentables trastornos políticos.

Honorables Senadores: Nada es más satisfactorio para la Cámara como pediros el descargo de los funcionarios en el ramo de Hacienda, en razón del buen desempeño de sus cometidos, reservándose para dar más tarde informe sobre la Administración General de Correos, cuando sean examinadas sus cuentas, y entonces pedir el descargo de este funcionario, si hubiere lugar.

Esto es, Honorables Senadores, cuanto tiene el honor de presentaros la Cámara de Cuentas en cumplimiento de sus deberes para con la Nación.

Santo Domingo, Junio 26 de 1860. — Firmado, P. A.

Lajara, Presidente. — Gabriel J. Luna. — Manuel Galván. — Miguel Garrido. — L. Delmonte, Secretario.

Habiéndose recibido las Cuentas generales de la República al cerrarse la Sesión legislativa, y no siendo posible examinarlas en este mismo día, el Senado acordó dejar el examen de ellas para la próxima Sesión legislativa.

Se recibió el Presupuesto de Gastos públicos remitido por el Poder Ejecutivo para los fines constitucionales; y como el Art. 55 de la Constitución exige que se vote por una ley, no habiendo el tiempo necesario para ello, se acordó quedase en receso.

La Comisión nombrada para abrir concepto sobre la consulta hecha por la Suprema Corte de Justicia, presentó su informe concebido en éstos términos:

Honorables Señores: La Comisión nombrada para abrir concepto sobre la nota oficial del Ministro de Justicia, que acompaña la consulta que hace con fecha 21 de los corrientes la Suprema Corte de Justicia, con el fin de fijar el verdadero sentido del Art. 60 de la Ley Orgánica en vigor, y ponerlo en armonía con el "Tratado de arbitraje" que trae el Código de Procedimiento Civil adoptado en la República; después de haber examinado la materia con la más detenida reflexión, encuentra:

Que el citado artículo de una manera absoluta dice: "Que los Alcaldes pondrán a las sentencias arbitrales la ordenanza de ejecución revestida de las formas ejecutoriables sin las cuales no producirán efecto alguno".

Esta disposición, que es imperante y que deroga cualquiera otra contenida en el Código de Procedimiento Civil, debe cumplirse y ejecutarse, porque los referidos Códigos fueron adoptados en todo lo que no sean contrarias sus disposiciones a la Constitución y las leyes de la República: resultando también de aquí una gran ventaja y utilidad, cual es que los habitantes de las Comunes lejanas de aquéllas en donde hay establecidos Tribunales de Primera Instancia, no tengan para que hacer el costo de un viaje y grandes erogaciones para sólo hacerle poner por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia, la ordenanza de ejecución, a las sentencias arbitrales, sean comerciales o de cualquiera otra naturaleza.

Además, como la sentencia arbitral es apelable, suspende la ejecución, y ningún perjuicio irroga a las partes que ocurriendo al Tribunal de Primera Instancia, pueden deducir sus agravios y llevar su recurso hasta la Suprema Corte de Justicia, pues además de que el Art. 63 de la citada Ley Orgánica dice en el inciso 4º: "Que es atribución de los Tribunales de Primera Instancia conocer en primera instancia de las causas que principien conforme a la ley, que tanto ante los Alcaldes, como ante los Jueces árbitros, y que se le sometan en apelación"; pues ni la Constitución ni las leyes, como lo dice muy bien la Suprema Corte, determinan los grados de jurisdicción.

La citada Ley Orgánica establece que las apelaciones de los Tribunales de Primera Instancia se lleven ante la Suprema Corte, no obstante la disposición del Art. 1.023 del Código de Procedimiento Civil y sus concordantes que deben estimarse derogadas, porque en las leyes no sólo se ha de estar a los términos, sino que se debe apreciar el espíritu de ellas; por todo lo que:

Considerando que la Jurisdicción la establece la ley, que la disposición del Art. 60 es absoluta, clara y terminante y derogatoria de todo lo que establece el Código de Procedimiento Civil sobre el particular, y que por lo tanto no existe antinomia o contradicción entre las expresadas leyes, porque la una deroga la otra, la Comisión es de opinión que el Senado diga que el Art. 60 de la Ley Orgánica debe cumplirse literalmente, y que en los casos en que haya lugar a apelaciones, juzgando los Tribunales de Primera Instancia, en primera instancia, se debe y puede apelar por ante la Suprema Corte de Justicia, cuya decisión es en último recurso, con tal que el objeto de la demanda exceda de cien pesos fuertes o su equivalente en papel, ya sea en materia civil o comercial, porque tal es el sentido y espíritu de la Ley Orgánica, debiendo observarse en los arbitramentos las demás reglas que establecen los Códigos, siempre que no contraríen el genuino sentido y el espíritu de la Constitución y leyes patrias.

Este es nuestro parecer, salvo, etc., etc.

Santo Domingo, Junio 26 de 1860. — Bobadilla. — M. M. Valverde.

El Senado en razón de la importancia de esta materia, resolvió se aplazase la decisión de este asunto para la próxima Sesión legislativa.

Habiéndose agotado los trabajos del día, EL HONORABLE PRESIDENTE tomó la palabra y pronunció una alocución concebida en los siguientes o parecidos términos: Honorables Señores: Hoy terminan las tareas legislativas del Senado Consultor..... Durante este período, venciendo dificultades de todo linaje, y a veces hasta con sacrificio de nuestro amor propio, en pro de la cosa pública, hemos cumplido el mandato que nos confirieran los Pueblos, si no con el acierto y brillantez que quisiéramos, a lo menos del mejor modo que lo han permitido las circunstancias. Por mí lo digo, Señores, y aun me atrevo a decirlo por todos mis dignos compañeros, sobre este punto, nuestra conciencia está tranquila, y la Patria nada tiene que reprocharnos....

En esta Sesión ha votado el Senado Consultor las siguientes leyes: Una sobre visitas domiciliarias; otra sobre examen e interceptación de papeles y correspondencia privada; otra sobre el estado de sitio; otra sobre patentes para el año 1861; otra sobre Comercio Marítimo; y otra sobre monederos falsos.

Decretos: Uno que concede a la viuda del General Jerónimo de Peña la casa de madera que habitaba en la villa de Moca; otro que acuerda a los hijos menores del General Casimiro Félix, una pensión anual de ciento veinte pesos fuertes, durante 20 años; otro que separa el Pueblo de Sabana de la Mar de la Península de Samaná, y lo agrega a la Provincia del Seibo; otro derogando el de 4 de Enero que ordenaba la emisión de 50.000 pesos fuertes en billetes de $1, 5, 10 y 20; otro que abre el puerto de Monte Cristi, para la exportación de ganado vacuno; otro que abre el puerto de La Romana al comercio extranjero; otro que iguala a todos los buques extranjeros en el pago de los derechos de puerto; otro que prorroga la Sesión legislativa por un mes.

Acuerdos: Uno por el cual el Senado presta su anuencia para que el Poder Ejecutivo use de las facultades extraordinarias que le concede la Constitución; otro autorizando al Poder Ejecutivo para emitir diez millones de pesos pa-

ra cambiar las papeletas deterioradas; otro para que se emitiesen diez millones de pesos para los gastos de la guerra; otro prestando la anuencia del Senado al Poder Ejecutivo para conmutar la pena de muerte a Ramón de la Rosa.

Réstanos solamente sancionar el siguiente decreto que someto a vuestra aprobación:

En nombre de la República Dominicana

EL SENADO CONSULTOR,

Considerando: que han transcurrido los noventa días fijados por la Constitución para las sesiones legislativas y los treinta en que fué prorrogada la presente por Decreto del Senado de fecha 21 de Mayo último

HA VENIDO EN DECRETAR Y DECRETA

Art. 1º Queda cerrada la quinta Sesión legislativa del Senado Consultor.

Art. 2º El presente Decreto, será remitido al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dado en el Palacio del Senado Consultor a los 27 días del mes de Junio de 1860 y 17º de la Patria.

Se sancionó el presente Decreto y levantándose esta acta que fué aprobada unánimemente, quedando cerrada la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION CONSULTIVA DEL 17 DE JULIO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se declaró abierta la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Presidente; Rafael Pérez, Vice-Presidente; Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu y Manuel María Valverde, nombrado Secretario para esta sesión.

Habiéndose recibido una nota oficial del Poder Ejecutivo por la que solicita el acuerdo del Honorable Senado Consultor, para conceder salvoconducto al Señor Juan de la Rosa Rodríguez, que se encuentra expulso, a causa de los acontecimientos del 30 de Agosto del año pasado, el Honorable Presidente declaró abierta la discusión.

El Senado, después de haber deliberado, resolvió, accediendo a los deseos del Poder Ejecutivo, prestar su acuerdo para dicha gracia. El Honorable Bobadilla salvó su voto. Se dió lectura a un oficio del Vice-Presidente de la República por el cual impone al Senado, que, con motivo de la desastrosa guerra que aflige desde algún tiempo a Venezuela, le fueron hechas al Gobierno de la República proposiciones por un dominicano allí residente de aprovecharse del pánico que existía entre los isleños canarios que habitaban en aquel territorio y favorecer la emigración de ellos para el nuestro.

El Gobierno, que creyó de suma importancia aprovechar esta circunstancia para iniciar en el país uno de los elementos principales para su progreso, aceptó las proposiciones, habiéndose empezado felizmente la inmigración de los mencionados isleños. También se hace presente en esta nota, que, a pesar de que el costo de la actual inmigración es tan módico, cual no puede esperarse conseguir ninguna, los gastos ascenderán a sumas que sin duda pasarán de las que el Gobierno pueda disponer de lo votado para gastos extraordinarios. En esta virtud, el Poder Ejecutivo excita al Senado a votar una suma para poder continuar la corriente establecida y llevarla hasta donde más se pueda, según los recursos y circunstancias.

El Honorable Presidente declaró abierta la discusión sobre el particular, estableciéndola primeramente sobre este punto: si el Senado en Sesión consultiva podía votar sumas además de las indicadas en el Presupuesto General del Estado.

El Honorable Abreu pidió la palabra, y habiéndosela acordado, dijo que la solicitud que hacía el Poder Ejecutivo era urgente y al mismo tiempo tan necesaria como útil; que ningunas sumas podían ser mejor empleadas que las que se dedicasen a tan laudable objeto, las cuales casi igualaban en importancia a las que se votaran para la defensa de la Patria; que si el Senado en Sesión consultiva, no podía votar sumas fuera de las del Presupuesto, opinaba que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Senado Consultor, podía decretar la erogación de las sumas que le fuesen necesarias para satisfacer a esos gastos.

El Honorable Presidente, abundando en la opinión expresada, hizo empero la observación de que el Poder Ejecutivo no podía dar el decreto de que habla el Honorable Abreu, y opinó que se autorizase al Poder Ejecutivo a emplear las cantidades necesarias para la empresa, salvo dar cuenta al Senado en la Sesión legislativa.

El Honorable Bobadilla: Estoy por ambas opiniones, pero haré algunas distinciones sobre la mía. La medida, como ha dicho el Honorable Abreu, bajo todos aspectos es útil, necesaria, política y humanitaria, y no creo que en el Senado haya quien no la acoja.

Leyes existen sobre inmigración desde hace tiempo, y aun no habíamos visto ensayarse ésta; así es sorprendente que hoy, en medio de una revolución, acometamos esta empresa, brindando nuestro suelo y nuestras garantías a aquellos infelices que padecen los horrores de una guerra desastrosa. Estamos en Sesión consultiva; el último día de nuestras sesiones legislativas presentó el Ministro el Presupuesto de Gastos para el año venidero, que alcanza a menos de 250 mil pesos fuertes, y habiéndosenos dicho antes que las rentas alcanzarían a cuatrocientos mil, opino que debe autorizarse al Poder Ejecutivo a emplear este sobrante que creo suficiente, para que se dé a la inmigración todo el ensanche que sea posible.

El Senado, después de haber deliberado, considerando que la medida en cuestión es altamente humanitaria, política y bajo todos conceptos de suma utilidad para la República, acordó autorizar al Poder Ejecutivo a hacer cuantos gastos fuesen necesarios al efecto, saldar cuenta en su oportunidad al Cuerpo Legislativo, para legalizar la erogación.

Agotada la materia, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 2 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, hallándose presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior. El Honorable Presidente hizo dar lectura a un oficio que le había dirigido el Presidente de la Cámara de Cuentas, por el que suplica al Honorable Senado Consultor, nombre, si lo juzga oportuno, al miembro de la Cámara de Cuentas que deba reemplazar al Señor Manuel Galván, cuya renuncia de este empleo fué admitida por el Senado. El objeto de la Cámara, dice el oficio, es de completar el número de sus miembros y dar principio a los trabajos de que tenga que ocuparse, tan luego como le sean remitidas las cuentas del primer semestre de este año.

El Senado tomó en consideración esta representación del Presidente de la Cámara de Cuentas, para resolver en la sesión próxima lo más conveniente sobre este particular, y no habiendo otra materia de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.*

365

SESION CONSULTIVA DEL 16 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Hallándose presente la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu y Manuel María Valverde. Fué nombrado Secretario para ésta el Honorable Valverde, por enfermedad del titular, y se leyó el acta de la sesión anterior que fué aprobada a unanimidad.

Se abrieron cuatro pliegos dirigidos al Senado Consultor, por cuatro miembros de la Cámara de Cuentas, pidiendo se les acuerde su dimisión del puesto que ocupan y exponiendo al mismo tiempo los motivos de su renuncia.

El Senado acordó las dimisiones que se le pedían y resolvió nombrar en otra sesión a los nuevos funcionarios que deban componer la Cámara de Cuentas.

No ocurriendo otra cosa se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.*

SESION DEL 18 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión. Se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Después de ésto se dió lectura a un Decreto del Poder Ejecutivo por el cual queda convocado el Senado Consultor para constituirse en Sesión legislativa extraordinaria con el objeto de tomar conocimiento de la relación circunstanciada

que se le ha dado, del uso que se ha hecho, con el acuerdo del Senado, de las facultades que concede la atribución 22 del dicho Art. 35; con el de acordar, asimismo, si lo tienen a bien, las que nuevamente se someten a su decisión; ocuparse en el examen de las Cuentas y Presupuestos del Estado, que le fueron presentados al expirar la Sesión legislativa ordinaria de este año; así como también de los demás asuntos pendientes cuyo examen exija la conveniencia pública.

En virtud de este Decreto, el Honorable Presidente, vista la 9ª atribución del Art. 35 de la Constitución, en nombre de la República, declaró al Senado Consultor constituído en Sesión legislativa extraordinaria.

Se dió lectura a un Mensaje del Vice-Presidente de la República, y a una nota adjunta, que dirigió el General Libertador al Ministro de Guerra y Marina.

He aquí el Mensaje:

Señor Presidente: El Gobierno tiene hoy la satisfacción de cumplir el último precepto de la atribución 22 del Art. 35 de la Constitución, dando cuenta al Senado del uso que S. E. el Libertador ha hecho de las facultades extraordinarias que el referido artículo atribuye al Poder Ejecutivo, y que por éste le fueron delegadas para llevar a cabo la obra de pacificación del país y la reorganización de las Comunes fronterizas del Sur.

Por la copia autorizada, que del Mensaje de S. E. remito a V. S., verá el Senado, sin duda con el mismo placer que lo ha visto el Gobierno, que el uso hecho por S. E. de las referidas facultades ha sido tan prudente y moderado, como lleno de acierto y feliz aplicación; y que los resultados han sido superiores a toda esperanza.

Mucho habíamos confiado en el tino y buena suerte del que siempre ha sido el salvador de la Patria; pero el mal era tan profundo, era tanta la inmoralidad que se había introducido, tanta la audacia de las instigaciones de nuestros enemigos, que no concebíamos la posibilidad de tranquilizar el país en tan poco tiempo. Venturosamente, el Libertador echó sobre sus hombros la grave responsabilidad de tan difícil empresa y la coronó tan pronto como fué su voluntad. Los rebeldes desaparecieron; los

agentes haitianos se escondieron acobardados, y la ley volvió a imperar en el campo en que se enseñoreaba la inmoralidad. ¡Bastó para ésto que resonará en las fronteras el nombre glorioso de Santana!

Sin embargo, Señores Senadores, no nos ocultemos nuestra situación. La República goza de perfecta tranquilidad en todos sus ángulos, y si en alguno de ellos aquélla se turbara, nos sobran los medios de restablecerla y de escarmentar a los que la alteraran.

Pero si ésto es cierto no lo es menos que aun subsisten los elementos deletéreos que han venido minando nuestro reposo mucho tiempo ha; y en el estado de progreso rápido en que hoy se encuentra el país, es preciso a toda costa conservarle ese reposo, para desarrollar en él los gérmenes de riqueza en que abunda.

La experiencia nos enseña que doquiera que levantan la cabeza los enemigos de la República, son vencidos; pero esa misma experiencia nos demuestra que sólo teniendo la autoridad la energía y unidad de acción que es menester, puede evitar que la rebelión sacuda de vez en cuando su tea incendiaria sobre las más pacíficas Provincias del Estado, y cause males sin cuento.

Mientras el partido parricida, que ha mandado sus espurios hijos a traernos al Yaque la bandera haitiana, pueda levantar la cabeza, mientras un enemigo ambicioso se mantenga en acecho para robarnos nuestra independencia, el Pueblo Dominicano ha menester hacer el sacrificio de aquella parte de sus libertades políticas que ha previsto la Constitución en la atribución 22 del Art. 35 y robustecer con ese sacrificio la autoridad que vigile por la conservación de esas mismas libertades; sin eso se realizaría al fin el plan de sus enemigos. Ellos están convencidos de que somos bastante fuertes para no dejarnos vencer; pero se prometen nuestra ruina a fuerza de disturbios; y ese maquiavélico sistema tendría un completo éxito si el Gobierno y el Senado no adoptasen a toda costa, la única medida salvadora que pueda evitarlo.

El uso que el General Libertador ha hecho de las facultades extraordinarias que se le delegaron, nos da a conocer cuan digno es de que se reitere en su persona igual confianza, reservando el uso de dichas facultades para cuando ejerza en persona el mando como Presidente de la República. De ese modo, el país puede descansar tranquilo al abrigo de todo temor de trastorno; y dedicándose

al fomento de su riqueza da un ejemplo al mundo de lo que será en el porvenir, si una Administración fuerte asegura su tranquilidad.

El Senado, consultando las consideraciones que preceden, no podrá menos, sin duda, de prestar su acuerdo para la delegación en la persona del Libertador, de las facultades que le permitan tomar todas las medidas que sean necesarias, para el mantenimiento del orden y el afianzamiento de la seguridad pública.

Con sentimientos de distinguida consideración de V. S. affmo. servidor Q. B. S. M. — A. Alfau. — Santo Domingo, Agosto 16 de 1860. — Señor Presidente del Honorable Senado Consultor.

Memoria del General Libertador

Señor Ministro: Para llenar debidamente el precepto constitucional y que el Poder Ejecutivo pueda hacer al Legislativo, la relación circunstanciada que previene la atribución 22ª del Art. 35 del Pacto Fundamental, paso a hacer a V. E. una reseña del uso que he hecho de las facultades extraordinarias, que, conforme al acuerdo con el Senado Consultor, me delegó el Gobierno, al confiarme la misión de pacificar la Provincia de Azua y restablecer el orden en las fronteras del Sur.

Hecho cargo del mando, emprendí mi marcha el día 18 de Mayo, y desde la Común de San Cristóbal hube de ocuparme de la movilización de los hombres que debían incorporarse al Ejército, pues allí recibí la noticia de que la facción capitaneada por Domingo Ramírez hacía progresos en las poblaciones fronterizas; y me fué forzoso acelerar la marcha hasta llegar a Azua, después de haber tomado en Baní las medidas enérgicas que eran necesarias.

Mi entrada en Azua, tuvo lugar el día 22, y lo primero que dispuse fué la organización del Ejército para no dilatar las operaciones de la guerra, y después de haberle arengado eficazmente, dando la proclama de la misma fecha, le despaché sobre los puntos más amenazados.

El parte de la ocupación de Neiba por los rebeldes, me obligó a permanecer en Azua hasta que las tropas al mando del General Lorenzo de Sena, que habían salido de la misma plaza para reunirse al Ejército, acantonado en San Juan, hicieron contramarcha inmediatamente después que se le avisó lo ocurrido, y volvieron a tomar po-

sesión de la citada plaza; y, en consecuencia, seguí para la Común de San Juan, en donde hice mi entrada el día 25.

Al amanecer de aquella misma mañana, un corto número de hombres que el arrojo del Jefe de operaciones le hizo creer suficiente, había salido para atacar a los insurrectos de Vallejuelo y desalojarlos de aquella posición; y, poco después de mi llegada, tuve el sentimiento de saber que la tentativa había sido infructuosa.

Establecido el Cuartel General, me ocupé en organizar un sistema regular de transporte para el aprovisionamiento del Ejército que ya ascendía a más de cuatro mil hombres; tomando en requisición todos los animales útiles para ese servicio, así de la Común de Azua, como de las de San Juan y Las Matas, cuyos habitantes prestaban sin violencia, y cuando pude contar con tropas bien organizadas para llevar a cabo un plan de ataque, adelantando de ese modo las operaciones a fin de no dar tiempo a que el enemigo se fortificase en sus posiciones, dispuse para el día 31 del citado mes, un ataque general combinado sobre todos los puntos en que se encontraban los facciosos; en esta forma: mil hombres por Las Matas entrando por La Rancha, trescientos treinta de Neiba por el camino del Aguacate, ambas expediciones contra El Cercado, y cuatrocientos sobre la avanzada establecida en Vallejuelo, punto desde el cual se dispararon los primeros tiros a las tropas leales, habiendo dejado en la plaza de Las Matas dos mil, y la correspondiente reserva en San Juan.

Del feliz éxito de esa disposición, tiene conocimiento el Gobierno, por la nota que dirigí a V. E. el 4 de Julio.

Desde aquella época, la facción no pisó más en suelo seguro y tuvo que retirarse a Haití, llevándose delante cuantas familias habitaban aquellos lugares, con la sola excepción de los que habiendo quedado a retaguardia de nuestras tropas por pertenecer a Vallejuelo, jurisdicción de la Común de San Juan, no tuvieron salida directa para Haití como El Cercado; por cuyo motivo y encontrándose cortadas, hubieron de presentarse al Jefe de Vallejuelo, quien las remitió al Cuartel General bajo segura escolta.

La facción, aunque vencida, no quedó menos en posibilidad de hacernos el daño de retener las familias más allá de los límites actuales de la República, porque tolerada, o mejor dicho, consentida por los haitianos, pudo el traidor Domingo Ramírez establecer guardias que impi-

diesen la vuelta al territorio dominicano, de aquellos que por la fuerza tuvieron que entrar en el territorio haitiano y que se habían acogido desde luego al perdón que les ofrecí en mi Proclama del 25 de Mayo.

Para evitar el desorden que en esos casos suele ser la consecuencia de la victoria, dí órdenes muy terminantes a los Jefes de ejecución para que la propiedad fuese respetada, estableciéndose cierta vigilancia sobre las de los rebeldes refugiados en Haití; y les hice especial recomendación de acoger benévolamente a cuantos se fuesen presentando; inclusive los mismos que desde un principio aparecieron como sostenedores y no autores del alzamiento. Estas disposiciones produjeron el buen efecto que deseaba, pues casi todas las familias de El Cercado han ido paulatinamente presentándose, y se encuentran ya en sus hogares más de doscientas, según los últimos partes que he recibido.

En cuanto a las de Vallejuelo, que por su posición topográfica flanquea a San Juan, era necesaria una medida política. En consecuencia, después de trasladadas al Cuartel General y juzgando conveniente alejarlas de aquellos puntos, las mandé establecerse en la Común de San José de Ocoa, a reserva de lo que el Gobierno determine.

En seguida nombré un Consejo de Guerra especial en los términos previstos por el Art. 128 del Código Penal Militar, y la primera causa que se le sometió fué la del nombrado Ramón de la Rosa, por deserción en presencia del enemigo, a quien condenó a la pena de muerte, y la cual le fué conmutada legalmente por la de cinco años de trabajos forzados.

Agotados los medios de persuasión que creí deber emplear para hacer volver a los dominicanos que habían sido engañados, y cuando por otra parte veía que el mal que había ocasionado el desorden no estaba cortado, dí la proclama del 15 de Junio, abriendo de nuevo las puertas de la Patria a los que habían sido tan débiles para escuchar la voz de los malvados, siempre que se presentasen en un breve término, y condenando al último suplicio a los cabecillas de la facción y a aquellos que, no aprovechándose del perdón que les ofrecía, continuasen unidos a los enemigos de la República; y poco después a la Orden del día, de 20 del mismo mes declarando fuera de la ley a los en ella designados y condenando a la pena de muerte

a los que ocultaren a los mismos, o que, sabiendo su paradero, no los denunciasen a la autoridad.

A consecuencia de estas medidas, como por efecto dí órdenes especiales para perseguir a los fugitivos que aun no se habían refugiado en la parte haitiana, se presentaron todos, durante mi permanencia en Neiba, entre los cuales Juan de Dios de Vargas, después de haberle otorgado el perdón de la vida que solicitó, y que, como digo, le concedí, en atención a que no había derramado la sangre dominicana.

La inmoralidad en que estaba enviciada una parte de las poblaciones fronterizas, continuaba aún, a pesar de mi presencia y la del Ejército y no obstante las medidas enérgicas que se habían tomado. Esa persistencia me hizo comprender la necesidad de reprimir con mano fuerte un vicio que había sido el origen de todos los desórdenes y, en su consecuencia, dí la Orden del día de 2 de Julio, condenando a la pena de muerte a todos los que fuesen a robar animales u otros objetos de propiedad haitiana, o que ejerciesen ese tráfico en nuestro territorio; así como a las autoridades que, olvidándose de su deber, consintiesen o tolerasen esas "depredaciones", y ofreciendo, en fin, un premio a los que denunciaran y probaran semejante abuso.

El resultado de esta medida ha sido satisfactorio, porque, cortando el mal de raíz, ha obligado al Gobierno haitiano, a publicar en sus fronteras otra igual, que nos da la doble garantía de que en lo sucesivo se respetará la propiedad dominicana.

Aquellos males, sin embargo, necesitan de otras medidas que surtiesen un completo efecto. De todos los informes que había tomado, resultaba que el Coronel Juan Rondón era uno de los autores del robo que devastaba las poblaciones de Las Matas y San Juan, pues empleaba a sus subordinados en ese criminal ejercicio, en uno y otro territorio y comprendiendo que sin obrar severamente había de ser ineficaz toda otra disposición, procedí a la prisión, así del referido Coronel, como de sus cómplices, su hermano el Teniente Rumaldo y el Capitán Juan Rodríguez, todos domiciliados en Las Matas. Los cargos que pesan contra el Coronel Rondón, aparecen en el proceso formado al efecto y que acompaño a V. E. Asimismo juzgué conveniente alejar de las fronteras las familias de esos individuos y las de los acogidos en Haití, y como la del Coronel Juan Rondón no conviene que vuelva jamás a

residir allí, creí de justicia resarcirle en parte las pérdidas que debía sufrir y mandé justipreciar sus propiedades por medio de peritos, cuyo acto acompaño, para que el Gobierno determine lo que fuese conveniente; mientras tanto, aquellas propiedades han sido entregadas a la autoridad para servicio del Estado.

Los desórdenes que fueron origen del trastorno ocasionado a la República, hicieron necesario que la ley fuese aplicada, y el Consejo de Guerra especial, a quien se le sometieron las causas de once delincuentes, distribuyó el castigo conforme al mayor o menor grado de culpabilidad de los acusados, y condenó a cuatro de ellos a la pena de muerte.

Consideraciones políticas de alta importancia, que tenían relación con el plan que me había propuesto de hacer volver el mayor número de dominicanos refugiados en Haití, me convencieron de la necesidad de hacer uso de las facultades extraordinarias que me delegó el Gobierno para perdonar la vida, conmutando aquella pena a Francisco Encarnación y a Ezequiel Aquino en la de trabajos forzados a perpetuidad, y a Juan de Dios de Vargas y José Lasala, por la de cinco años de cárcel; con prohibición perpetua de residir en la Provincia de Azua.

Los demás condenados corren la suerte que les deparó el Consejo, cuyo proceso y la sentencia acompaño.

Pacificadas ya las fronteras y restablecido el orden en toda la Provincia, era menester consolidarlo, tomando medidas administrativas que para lo sucesivo asegurasen la estabilidad del que se había conseguido. Para lograr ese fin, creí conveniente que una población tan considerable como la de El Cercado y tan ventajosamente situada en frente de los haitianos, que necesariamente ha de guadar una parte de las fronteras, fuese constituída en Puesto Militar; en el mismo caso se hallaba Sabana Mula, perteneciente a Bánica y en donde se encuentra hoy la población; y ambos puntos fueron en efecto constituídos Puestos Militares dependientes de la Común de Las Matas. Para Comandante de Armas del primero, nombré al Coronel Eugenio Comas, con la asignación de cuarenta pesos fuertes mensuales, y para el segundo, al que lo era, General de Brigada Juan Contreras, con el sueldo que ya tenía. La asignación más crecida al primero se hizo necesaria porque el llamado a aquel destino estaba domiciliado en San Juan, tenía que abandonar sus intereses,

y vivir en un punto en donde no tendrá más recursos que el sueldo que se le señala.

La erección de estos puntos en Puestos Militares exigía además el nombramiento de autoridades para la administración de Justicia, y en El Cercado conferí la Alcaldía al Señor José María Guzmán, que servía la de Las Matas, y para ésta hube de nombrar al Señor Manuel Santana, que era uno de los Suplentes, todo provisionalmente. No pude hacer otro tanto en Sabana Mula, por no haberme llegado a tiempo los informes que para el efecto pedí.

La Común de San Juan, que se encuentra a tanta distancia de la Capital, se ha resentido hasta ahora del abandono en que se encontraba la administración de Justicia, y a consecuencia de ésto, se hallaba en tal desorden aquélla, que no pude menos de atender a la multitud de quejas que se me dieron, durante mi permanencia en ella. Bien pronto conocí que el mal residía tanto en el personal que componía la referida administración, ya por la codicia de los otros, como por la infinidad de picapleitos que causaban la ruina de aquellas familias, y creí conveniente corregirlo, confiando la Alcaldía al Señor Francisco Herrera, en reemplazo del que la servía, y las plazas de Suplentes a los Señores Eugenio Ramírez y Bautista Piña, comunicando al efecto instrucciones al nuevo Alcalde, que si se observan, como lo espero, quedará asegurado el sosiego de las familias y la paz general.

La administración de Hacienda fué objeto de igual reforma, sustituyendo al Señor Anacleto Piña por el Señor José Soto.

También nombré un Comisario de Policía con la asignación de ocho pesos fuertes mensuales.

La carencia que había en Las Matas, San Juan y Azua, de un local en que asegurar los presos me determinaron a hacer construir una cárcel sólida en cada una de esas plazas, con toda la economía posible. Las dos primeras están enteramente concluídas, y la última debe estar a esta fecha muy adelantada.

Mandé organizar en el Puesto Militar de El Cercado un Batallón militar y una Compañía de Caballería. Igual organización hube de hacer en Las Matas y en San Juan, para facilitar el mejor servicio de las fronteras.

Réstame sólo hablar a V. E. de algunos nombramientos militares y pases de algunos individuos de un cuerpo

a otro, que las necesidades del servicio me obligaron a hacer.

Por último, arregladas convenientemente las fronteras, vigiladas por una guarnición de cuatrocientos hombres, bien armados y equipados, y restablecido el orden en la Provincia, debí retirarme para esta Capital con el Ejército.

Estos son, Excmo. Señor, los pormenores que he creído deber dar a V. E. para que los trasmita al Gobierno, y me cabe la satisfacción de anunciarle que con el auxilio de la Divina Providencia y la actividad del Gobierno, el éxito de mi misión ha sido tan completo y feliz como lo ve V. E. por los resultados. La Providencia de Azua, amenazada en varios puntos más que por una facción armada por un desorden general que la minaba, queda hoy en perfecto arreglo, pudiendo asegurar a V. E. que el enemigo común, que con sus instigaciones introdujo la inmoralidad en nuestras fronteras, no repetirá sus insidiosos y ocultos ataques, pues quedan organizados los elementos de resistencia necesarios para rechazarlos y dispuesto el que suscribe a prestar de nuevo sus servicos en defensa de la Patria. — Dios guarde a V. E. muchos años. — Santana. — Santo Domingo, Agosto 8 de 1860. — Al Excmo. Señor Ministro de Guerra y Marina, etc.

Acabada la lectura de las presentes notas oficiales, se abrió la discusión sobre las materias de que tratan y quedó aplazada para la próxima sesión; con lo cual se levantó la de este día.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.*

SESION DEL 20 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, hallándose presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla; se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO República Dominicana

Proclamada la orden del día, se leyó el Mensaje del Vice-Presidente de la República, presentado en una de las sesiones anteriores y la Memoria del General Libertador, sobre los resultados de su misión a las fronteras del Sur.

El Honorable Presidente dijo que debía dividirse la discusión en dos puntos, a saber: sobre la cuenta dada acerca del uso que ha hecho el Poder Ejecutivo de las facultades extraordinarias que le son atributivas por el Art. 35 de la Constitución en su inciso 22: y sobre el acuerdo que pide al Senado el Vice-Presidente de la República, para que haga uso de estas mismas facultades el Libertador, Presidente actual. En consecuencia, se declaró abierta la discusión sobre el primer punto.

El Honorable Bobadilla dió su opinión como sigue:

Honorables Senadores: He oído con suma atención la cuenta que ha dado el Poder Ejecutivo de las facultades extraordinarias que ha ejercido con el acuerdo del Senado y que se trasmitieron al Excmo. Señor General Libertador, Comandante en Jefe del Ejército que marchó a las fronteras del Sur a sofocar la rebelión que el traidor Domingo Ramírez y otros, en connivencia con los haitianos, suscitaron, y que, naturalmente, debía producir una conmoción general en toda la República y enormes gastos que se han reclamado a aquel Gobierno por haber violado la tregua que existía contra las reglas que establece el derecho de gentes, la buena fe, el respeto mutuo de las naciones, su dignidad y conveniencia propia.

Todo cuanto ha hecho el General Libertador, merece un voto de aprobación y de gracias. Un Gobierno fuerte y moderador, que está de asiento en la omnipotencia de la opinión pública, que es indestructible, las más veces no necesita derramar sangre para sofocar las revoluciones, y así ha sucedido ahora; la presencia del Libertador; la amnistía que concedió a los que incautamente se dejaron seducir; su conducta moderada, los oficios de padre que ejerció allí; han dado los más felices resultados, las miras de nuestros

pérfidos enemigos se han frustrado, y hoy le cabe a la Nación el gusto de haber restablecido el sosiego, el orden y la tranquilidad en los pueblos fronterizos del Sur, teatro de los acontecimientos, sin efusión de sangre y el que aquellos hermanos extraviados hayan vuelto a entrar en el seno de la madre común, en sus hogares y propiedades que fueron debidamente respetadas, por las órdenes terminantes del ilustre Jefe a quien siempre ha conducido la mano invisible de la Providencia; pero en mi pobre opinión, aún no veo concluída del todo la cuestión. Los haitianos han violado la tregua, han violado el derecho de gentes, nos han hostilizado, nos han damnificado, y el honor de la Nación está empeñado en castigar su falta, o en que le den una satisfacción conveniente y nuevas garantías para el porvenir, si es que la tregua debe continuar, como se ha aceptado de nuestra parte, con el acuerdo de las grandes potencias mediadoras.

La República no rehusa jamás la paz a condiciones convenientes, mas de ninguna manera puede temer la guerra con la República haitiana; en más de cien combates hemos medido nuestras fuerzas: el triunfo siempre ha estado de nuestra parte; por consiguiente, la misión encomendada al General Libertador aun no está terminada. La cuestión de hecho está resuelta por ahora; la de derecho debe arreglarse, y debe arreglarse de una manera satisfactoria y que corresponda al honor y a la dignidad de la Nación.

¿Y quién mejor puede hacerlo que aquel que tantos días de gloria ha dado a la Patria, que merece la confianza general de sus conciudadanos y que, con la más grande moderación, se ha comportado diferentes veces, trazando ejemplos de abnegación y patriotismo y de generosidad, aun con sus propios enemigos; procurando siempre evitar el derramamiento de sangre dominicana y que por todas partes reine el orden, la estabilidad y seguridad de la República y las garantías de los ciudadanos?

Para mí, son muy notables las palabras con que se expresa el encargado del Poder Ejecutivo: "mientras el par-

tido parricida, dice, que ha mandado sus espurios hijos a traernos al Yaque la bandera haitiana, pueda levantar cabeza; mientras un enemigo ambicioso se mantenga en acecho para robarnos la independencia, es necesario hacer el sacrificio de las libertades políticas, que ha previsto la atribución vigésima segunda del Art. 35 de la Constitución". Dice más: "ellos están convencidos de que somos bastante fuertes para no dejarnos vencer; pero se prometen nuestra ruina a fuerza de disturbios, y ese maquiavélico sistema tendría un completo éxito si el Gobierno y el Senado no adoptasen, a toda costa, la única medida salvadora que pueda evitarla".

A más de esta referencia, que sin duda se hace al efímero y descontento partido de Báez, que desgraciadamente existe entre nosotros, hay también otros elementos que producen necesariamente inquietudes y alarmas, y que yo me abstengo por ahora de enumerar. No me contraigo solamente a las noticias alarmantes que nos vienen algunas veces de las Provincias del Cibao. No me contraigo a los Generales Valverde y Mallol y otros hombres honrados, patriotas y de buena fe, que, conociendo su propia conveniencia y la del país, están unidos inseparablemente a la mayoría de la Nación, sostienen el orden y desean la paz y que la República florezca; pero en diferentes ángulos de la República resuenan los gritos de agitaciones contra el reposo y la tranquilidad pública, porque no faltan en ella algunos hombres, aunque en pequeño número, que pretenden medrar y figurar por medio de los disturbios políticos, y que disparan sus tiros contra la Administración actual, para tenernos en un continuo estado de inquietud, para empobrecer la República y entorpecer las vías de progreso y de adelantamiento que se han inaugurado, y yo veo, con duplicadas razones, la necesidad con que se reclaman amplias facultades para afianzar la seguridad pública, la garantía de la sociedad y la conservación de la República.

Por lo tanto, voto porque se aprueben todas las medidas que tomó el General Libertador en virtud de las facultades de que fué investido, y voto, también, para que continúe en el ejercicio de ellas, como lo solicita el Poder Ejecutivo, mientras las circunstancias lo exijan, porque la salud del pueblo es la Suprema Ley.

El Honorable Delmonte dijo: Las medidas tomadas por el General Libertador no deben considerarse aisladas y separadamente; de su conjunto se desprende un resultado final que las corona; patente está. Este resultado no puede ser más satisfactorio, por lo tanto las apruebo, y, como el Honorable Bobadilla, opino que se le acuerde un voto de gracias. El Honorable Rafael Pérez opinó del mismo modo.

Puesto a votación el punto que se trata, el Senado, a unanimidad, aprobó la cuenta que le ha sido dada, sobre el uso de las facultades extraordinarias que concede la Constitución, y acordó un voto de gracias al General Libertador.

Puesto a discusión el segundo punto del Mensaje de S. E. el Vice-Presidente de la República, después de haber deliberado detenidamente, el Senado resolvió acordar al Poder Ejecutivo las facultades extraordinarias que le atribuye la Constitución en el Art. 35, inciso 22, cuando éste sea ejercido personalmente por el General Libertador.

En consecuencia, el Presidente nombró en Comisión a los Honorables Bonilla y Valverde para redactar un proyecto de decreto, conforme a la primera resolución, y a los Honorables Pérez y Abreu para redactar un acuerdo concediendo, según lo determinado en la segunda resolución, facultades extraordinarias al actual Presidente de la República.

Conforme a la orden del día, se procedió al nombramiento de los miembros que deben componer la Cámara de Cuentas, y, resultaron electos a unanimidad los Señores: Pablo A. Lajara, Alejandro Gazán, Manuel Galván y José María Pérez.

Concluído esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Bobadilla.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 21 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión.

Se dió lectura al acta de la anterior y fué aprobada.

La Comisión encargada de redactar el decreto acordado en la sesión pasada, lo presentó y fué tomado en consideración. Declarado de urgencia, se reputó esta la primera lectura constitucional.

También presentó el fruto de su trabajo la Comisión nombrada para redactar el proyecto de acuerdo tendente a conferir las facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en los términos siguientes:

Visto el Mensaje del Poder Ejecutivo en que, al dar cuenta a la Representación Nacional del uso que con su acuerdo ha hecho de las facultades extraordinarias que en determinados casos le son atributivas, según el Art. 35, inciso 22 de la Constitución, dice expresamente que, si bien la República goza de perfecta tranquilidad en todos sus ángulos, merced a las prudentes y eficaces medidas tomadas en la Provincia de Azua por S. E. el General Libertador, como delegado del Gobierno, no es por eso menos cierto que aun existen elementos deletéreos que han venido minando nuestro reposo mucho tiempo ha.

En atención a que los graves acontecimientos que perturbaron posteriormente la tranquilidad pública, junto con la experiencia de tantos otros sucesos pasados de igual carácter, corroboran la opinión general de que los ene-

migos de la República, impotentes para sojuzgarla por la sola fuerza de las armas, trabajan asiduamente contra su independencia y progreso promoviendo a cada paso disturbios y trastornos, cuyas fatales consecuencias amenazan constantemente la sociedad.

Considerando que es de la más imperiosa necesidad poner a todo trance término a una situación que, teniendo en continua alarma los ánimos paraliza todos los gérmenes de riqueza y prosperidad pública, y lleva gradualmente el país a su completa ruina.

Atendida la excitación hecha por S. E. el Vice-Presidente encargado del Poder Ejecutivo en el referido Mensaje para que se dé a la autoridad suprema, en la persona del actual Presidente del Estado, toda la robustez y energía necesarias, según lo previene la Constitución, como solo remedio eficaz, en tales circunstancias, y como única garantía de paz y estabilidad para la Nación; bien persuadido por otra parte el Senado Consultor, según la moderación y cordura con que el General Libertador ha hecho uso de las facultades extraordinarias, cada vez que la Nación lo ha investido de ellas, de que ningún riesgo corren las libertades públicas, con la reiteración de tan alta confianza,

ACUERDA:

El Poder Ejecutivo, cuando sea personalmente ejercido por S. E. el Libertador Presidente Santana, durante el actual período constitucional, está facultado para tomar todas aquellas medidas que crea indispensables para la conservación de la República, en los términos prescritos en el Art. 35, atribución 22ª del Pacto Fundamental.

Dado, etc.

Palacio del Senado Consultor a los 21 días del mes de Agosto de 1860 y 17º de la Patria. — El Presidente del Senado. — M. J. Delmonte. — El Secretario, P. P. de Bonilla.

Habiendo sido adoptado y sancionado el presente acuerdo, se remitió al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales, y se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.*

SESION DEL 23 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Manuel María Valverde, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Conforme a la orden del día, se dió la segunda lectura constitucional al proyecto de decreto que aprueba la cuenta dada por el Poder Ejecutivo en el Mensaje del 16 de Agosto.

Dióse lectura a una representación del Presidente del Tribunal de Primera Instancia. Acompañaban este documento tres piezas más, que fueron leídas también, y el Senado aplazó la discusión de esta materia para otra sesión, con la cual se levantó la de este día.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Melitón Valverde.*

SESION DEL 24 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, hallándose presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Trajo la orden del día la discusión de la solicitud hecha por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia, y habiendo dado lectura a dicha solicitud, el Honorable Bonilla dijo que era de parecer que se nombrase una Comisión

para que abriese concepto sobre la cuestión que iba a tratarse.

El Honorable Presidente observó, que al leer la representación dirigida al Senado, salta a los ojos desde luego la informalidad que contiene, cual es la de estar formulada a nombre de todos los miembros que componen el Tribunal de Primera Instancia, incluso el Ministro Fiscal, y estar firmada tan sólo por el Presidente, sin que éste hubiese presentado los poderes especiales de dichos Magistrados, según lo impera la ley, ya que éstos no aparecían apoyando la representación con su firma; opinando, además, el Honorable Presidente, que creía indispensable se llenase este requisito antes de ocuparse de ella.

Después de haber deliberado, el Senado, atendiendo y aprobando lo expuesto por el Honorable Presidente, resolvió se devolviese al peticionario la solicitud en cuestión, para que se conformase a la ley.

Fueron nombrados en Comisión los Honorables Pérez y Bobadilla para examinar las Cuentas Generales de la República y el informe que de ellas da la Cámara de Cuentas; y los Honorables Abreu y Melitón Valverde para formular un proyecto de ley de Presupuestos, en vista del que presentó el Poder Ejecutivo al terminar la pasada legislatura.

Hecho esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Melitón Valverde.*

SESION DEL 25 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde y Pedro

Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

En conformidad a la orden del día, se dió la tercera lectura constitucional al decreto de que habla el acta del día 23; y se declaró abierta la discusión.

Después de varias modificaciones que se le hicieron, fué aprobado y sancionado a unanimidad en los términos siguientes:

EL SENADO CONSULTOR

En nombre de la República Dominicana.

Previas las tres lecturas constitucionales,

Visto el Mensaje que con fecha 16 de los corrientes le ha presentado el Poder Ejecutivo dando cuenta, en cumplimiento de la 22ª atribución del Art. 35 de la Constitución, del uso que ha hecho de las facultades extraordinarias que con su acuerdo ejerció durante los últimos acontecimientos ocurridos en las fronteras del Sur.

Atendido que, por las providencias con tanto acierto tomadas en esas difíciles circunstancias por el Ilustre General Libertador, Presidente de la República, ha quedado restablecido el orden en los pueblos fronterizos, asegurada la Independencia Nacional y frustrados los maquiavélicos designios del enemigo común,

HA VENIDO EN DECRETAR Y DECRETA

Art. 1º Se aprueban las medidas tomadas por S. E. el General Libertador, en el ejercicio de dichas facultades, y que están consignadas en su Memoria de 8 del corriente, como asimismo, la creación de los Puestos Militares de El Cercado y Sabana Mula, y el nombramiento de autoridades y empleados, con las dotaciones que les han sido señaladas.

Art. 2º En nombre de la Nación se da un voto de gracias al General Libertador, por los grandes servicios que acaba de prestar, salvando la República con su valor, celo y patriotismo, de los inminentes peligros que la amenazaban.

Art. 3º El presente Decreto se remitirá al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, a los 25 días del mes de Agosto de 1860 y 17º. — El Presidente, (Firmado) M. J. Delmonte. — El Secretario, Pedro P. de Bonilla.

Hecho esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- M. M. Valverde.*

SESION DEL 27 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; leyóse el acta de la anterior y fué unánimemente aprobada.

Habiéndose de nuevo remitido al Senado la representación hecha por el Tribunal de Primera Instancia de esta Capital, firmada por todos sus miembros, el Honorable Presidente hizo darle lectura y declaró abierta la discusión sobre el particular.

El Honorable Bonilla propuso que se nombrase una Comisión que informase y abriese concepto tocante a dicha solicitud.

El Presidente opinó en contra de esta proposición, observando que el Tribunal pide que el Senado se advoque su causa y lo juzgue, mientras que este Honorable Cuerpo no puede juzgar más que a la Suprema Corte de Justicia, y a sus propios miembros: que, en este caso, declarada desde luego la incompetencia del Senado, era inútil nombrar una Comisión.

El Honorable Bonilla: Al proponer que se nombre una Comisión, ha sido por seguir la práctica establecida, siempre que se dirige una petición al Senado, y para que ella

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

informe sobre el valor de la solicitud, que examine los documentos y declare si es o no de la competencia del Senado.

El Honorable Presidente: ¿Entonces, para qué una Comisión? ¿Para qué distraernos de nuestras importantes tareas legislativas, cuando nada podemos hacer? Si el Tribunal se quejase de la Suprema Corte, sin consultar otra cosa, el Senado primeramente debería constituírse en Corte de Justicia; mientras tanto que el Tribunal no se queja, que pide una cosa que nosotros no podemos acordar ¿en qué nos fundaríamos para juzgar al Tribunal de Primera Instancia, cuando sus Jueces naturales son la Suprema Corte de Justicia? Y si la Comisión ha de decir lo mismo que debemos declarar en este momento, ¿para qué nombrarla? ¿para qué retardar inútilmente la decisión de este importante asunto, y distraer nuestra atención de las discusiones legislativas que la ocupan actualmente?

Todos los Honorables declararon la incompetencia del Senado para juzgar al Tribunal de Primera Instancia, la inutilidad, por lo tanto, de ocuparse más de este asunto y en consecuencia se tomó la Resolución siguiente:

En atención a que, si bien es cierto que como Corte de Justicia ejerce el Senado Consultor una jurisdicción criminal en muchas circunstancias, no lo es menos que están especificadas en el Art. 26, incisos 2º, 5º y 6º de la Constitución a que la competencia del Senado en esos casos se determina menos por la naturaleza de los crímenes y delitos que por la calidad de las personas acusadas de haberlos cometido, no pudiendo arbitrariamente extenderla a otras no designadas en la Ley Fundamental, ni más allá de los límites fijados, sin cometer un exceso de poder, con mengua del derecho privativo de los Tribunales de Justicia; y a que, según el Art. 148 de la Ley Orgánica Judicial, los Jueces de Primera Instancia están sujetos a la jurisdicción de la Corte Suprema por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que, en ningún caso, ni por motivo alguno, puedan ser distraídos de sus Jueces naturales, Art. 8º, 9º inciso de la Constitución, quedándoles solamente abierto el recurso de queja en res-

ponsabilidad personal, cuando haya lugar y en los términos previstos por la ley; se declara inadmisible la demanda en cuestión, ordenando la devolución de las piezas a los interesados.

Agotada la orden del día, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 28 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Rafael Pérez, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; leyóse el acta de la anterior y fué aprobada.

Debiéndose renovar el bufete del Senado Consultor, se procedió a la elección, la que resultó como sigue: Para Presidente: el Honorable Delmonte con 4 votos; para Vice-Presidente: el Honorable Abreu, y para Secretario: el Honorable Melitón Valverde con cuatro votos ambos. Y quedó así instalado el nuevo bufete.

La Comisión encargada del examen de las Cuentas Generales de la República presentó su opinión por escrito, haciendo presente, primero: la falta de impresión y publicación en tiempo oportuno de dichas Cuentas, según lo impera la Constitución, y notando, además, varias otras irregularidades de que en su concepto adolecían; por todo lo cual, concluyó pidiendo se remitiesen al Ministro de Hacienda las Cuentas Generales de la República, junto con el informe de la Cámara de Cuentas, para que se diese cumplimiento a lo que ordena la Ley de su creación, Art. 21.

El Senado adoptó la opinión de la Comisión, y a pro-

puesta del Honorable Presidente se acordó acompañar este dictamen, con los demás documentos a que se refiere.

La Comisión nombrada para redactar el proyecto de ley de Presupuestos, en vista del presentado por el Poder Ejecutivo, observó que no se encontraba éste conforme a la Constitución, pues carecía de la indicación de las entradas, según lo prescribe el Art. 26, inciso 4º, de la misma; y opinó porque se devolviese al Ministro del ramo para los fines consiguientes.

Fué aprobado a unanimidad el presente dictamen, quedando así acordado.

A solicitud del Honorable Rafael Pérez, se le concedió licencia por el término de un mes para ausentarse de la Capital.

No ocurriendo otra cosa, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Bobadilla. Melitón Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 29 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Rafael Pérez, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, se abrió la sesión. Leída el acta de la anterior, fué unánimemente aprobada.

Se trajo a vista la consulta de la Suprema Corte de Justicia que quedó aplazada en la pasada Sesión legislativa, y se dió lectura a la opinión de la Comisión, la cual está inserta en el acta del 27 de Junio último.

El Honorable Presidente declaró abierta la discusión.

El HONORABLE BONILLA tomó la palabra y dijo: Disiento de la opinión de la Comisión, porque sería injuriar al le-

gislador, suponerle contradictorio e inconsecuente al dictar las disposiciones de una ley y con intervalo de tan pocos artículos. Si se interpretase el Art. 60 de la Ley Orgánica, en los términos absolutos en que se expresa y no con las restricciones que establecen los Arts. 27, 28 y 29 de la misma ley, que demarcan las atribuciones de los Alcaldes, fijándoles la cuantía hasta la cual pueden conocer como Jueces de excepción, tanto en último resorte como a cargo de apelación, pues las disposiciones anteriores de una ley son las que rigen las posteriores y no éstas a las anteriores; en cuyo concepto y no debiendo presumir semejante antinomia e inconsecuencia de parte del legislador, es necesario convenir en que la facultad acordada a los Alcaldes por el Art. 60 de la Ley Orgánica de poner el decreto en ejecución a las sentencias arbitrales, debe entenderse en los casos solamente en que el fallo de los árbitros, verse sobre una cuantía de que los Alcaldes pudieren conocer si le hubiese sido sometida, pero de ningún modo cuando ella exceda los límites de su competencia.

En cuanto a las apelaciones de las sentencias arbitrales, soy de opinión que conforme al Art. 63 de la citada Ley Orgánica, los Tribunales de Primera Instancia conocen de todas, sin la excepción que hace la Comisión, de que no se puede apelar de las sentencias arbitrales, que recaigan sobre menor cuantía y de las que los Alcaldes juzgarían en último resorte, pues esto sería querer subordinar arbitrariamente la jurisdicción de los árbitros a la de los Alcaldes, sin advertir que a éstos se la atribuye la ley en tanto que a los árbitros se la confieren las partes; y cuando éstas no renuncian al derecho de apelación, el fallo de los árbitros está siempre sujeto a este recurso, cualquiera que sea la cuantía sobre que recaiga su decisión.

El Honorable Melitón Valverde apoyó este dictamen y fué rebatido por los demás Senadores, fundándose en que el Art. 60 de la Ley Orgánica, que quiere interpretar el Hono-

rable Bonilla, habla en términos absolutos que no admiten interpretación.

Puesto este punto a votación, la mayoría decidió conforme al dictamen de la Comisión. En cuanto al segundo punto de la opinión del Honorable Bonilla, el Honorable Bobadilla objetó que definiendo los artículos 27, 28 y 29 de la misma ley las atribuciones de los Alcaldes, no se pueden apelar siendo la suma de menor cuantía, en cuyo caso ellos juzgan en último resorte según la ley.

Y siendo la hora avanzada, se aplazó la decisión de esta materia para otro día, y se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- Melitón Valverde.*

SESION DEL 31 DE AGOSTO DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Rafael Pérez, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

Se abrió la discusión sobre la consulta hecha por la Suprema Corte de Justicia y aplazada en la sesión anterior.

El Honorable Bobadilla se expresó en éstos términos: Decidido que los términos del Art. 60 de la Ley Orgánica son absolutos y que los Alcaldes son los que deban poner el *exequátur* a las Sentencias arbitrales; en cuanto a las apelaciones, ya he opinado como miembro de la Comisión, que excediendo la suma de $100 fuertes, o su equivalente en papel, deben llevarse ante los Tribunales de Primera Instancia, y en último recurso ante la Suprema Corte.

Varias razones nos han servido de apoyo: La 1ª es que la misma Ley Orgánica ha consagrado en principio, que en

las demandas que no excedan de 100 pesos, no hay recurso de apelación. 2ª Que en todos los países donde hay derecho escrito, en las demandas de menor cuantía, no se admite el recurso de apelación, porque los Costos y gastos excederían con mucho a la suerte principal, y se considera como una especie de calamidad pública la multiplicación de pleitos, y los legisladores deben evitar este mal en cuanto esté en sus facultades; por consiguiente, reitero mi opinión y voto como antes, que las apelaciones de tales sentencias arbitrales, excediendo de cien pesos, sean llevadas a los Tribunales de Primera Instancia y en último recurso ante la Suprema Corte; para dejar cumplido el voto de la Ley parece que por disforme que quiera suponerse, es preciso acatarla porque es Ley, y porque fué hecha según nuestra localidad, nuestra conveniencia pública y las circunstancias que la motivaron.

El Honorable Bonilla: Consecuente con mi opinión, diré que estoy perfectamente de acuerdo con el Honorable Bobadilla; en cuanto a que no se pueda apelar de las sentencias de los Alcaldes, cuando éstos juzgan en último recurso, pero las atribuciones de los Alcaldes están constituídas por la Ley Orgánica mientras las de los árbitros no; la Ley Orgánica no habla de los árbitros, y no hay en ésta un artículo que derogue la disposición de los Códigos sobre este particular.

Siendo la hora avanzada y estando el Senado en estricta mayoría, se aplazó la decisión de este asunto para una de las próximas sesiones.

Se leyó un pliego dirigido al Presidente del Senado por el Señor José Román, haciendo renuncia del empleo de Ministro de la Suprema Corte, por haber sido nombrado Interventor de Aduana de esta Capital, y se le admitió la renuncia.

A propuesta del Honorable Manuel María Valverde, el Senado acordó oficiar al Poder Ejecutivo anunciándole que estaba dispuesto a discutir las leyes quedadas en receso, por

haber sufrido observaciones, a fin de dar cumplimiento a la disposición del Art. 23 del Pacto Fundamental. No habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Melitón Valverde.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 6 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, nombrado Secretario provisional, se abrió la sesión.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.

En conformidad a la orden del día, y habiendo quedado concretada la votación de un miembro para la Cámara de Cuentas entre los Señores Bernardo de J. González y A. Victoria, se procedió a ella de nuevo y cada uno obtuvo dos votos; hecha la votación otra vez con igual resultado, se declaró que no había elección; y se difirió ésta para una de las próximas sesiones.

Se leyó un oficio del Ministro de lo Interior en que, a nombre del Poder Ejecutivo y cumpliendo con el 12º inciso del Art. 26 de la Constitución, presentaba al Senado, para la elección del Arzobispo de esta Arquidiócesis, la terna compuesta de los Presbíteros Andrés Rosón, Cura párroco de la Común de Baní, Dr. Regalado, Cura de la de Puerto Plata, y Antonio Gutiérrez, Cura de la Parroquia de Santa Cruz del Seibo.

El Honorable Presidente, preguntó a los Senadores si estaban dispuestos a la votación; y habiendo asentido todos, se procedió a ella por escrutinio secreto y dió por resultado,

a unanimidad de votos, la elección del Presbítero Don Andrés Rosón, para Arzobispo de esta Arquidiócesis.

No ocurriendo otra cosa, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION ESPECIAL DEL 8 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, se abrió la sesión, presentes todos los miembros del Poder Ejecutivo.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, siendo el objeto de la reunión de los dos Poderes del Estado, discutir las observaciones hechas a la Ley votada por el Senado, sobre visitas domiciliarias, el Honorable Presidente declaró abierta la discusión.

Se emitieron varias opiniones en apoyo de la Ley y de las observaciones que se le habían hecho; y después de largos debates, habiendo convenido todos los miembros del Senado y del Poder Ejecutivo en el sentido de la Ley, fué acordada como sigue:

En nombre de la República Dominicana

EL SENADO CONSULTOR

Usando de su iniciativa y previas las tres lecturas constitucionales;

Considerando: que por la 12ª disposición del Art. 8º de la Constitución, no puede verificarse ninguna visita domiciliaria sino en los casos previstos por la ley y con las formalidades que ella prescriba, ha dado la siguiente

LEY SOBRE VISITAS DOMICILIARIAS

Capítulo I

Art. 1º No podrá procederse a una visita domiciliária sino en los casos siguientes:

1º Cuando se denuncie oírse voces dentro de una casa que induzcan vehemente sospechas de que se está perpetrando algún crimen.

2º Cuando un marido, padre, madre, o tutor reclamen la extracción de su esposa, hijo o pupilo, que le hayan sido robados y estén ocultos en alguna casa.

3º Cuando deba extraerse un reo contra quien se hubiere decretado prisión por causa criminal.

4º Cuando se denuncie que en alguna casa se celebran reuniones secretas con el objeto de conspirar contra la seguridad del Estado.

5º Cuando se denuncie que en alguna casa hay fábrica de moneda falsa, depósito de armas, u objetos robados.

6º Cuando conforme a la ley deban examinarse los papeles y correspondencia privada de alguna persona.

7º Cuando sea necesario proceder a la persecución o aprehensión de algún individuo prevenido de haber cometido crimen o delito o de un sentenciado o penado, o de cualquier persona que no obedeciese al llamamiento de la autoridad, sea cual fuere el lugar donde se oculte.

Art. 2º Para evitar en los casos que haya de efectuarse una visita domiciliaria, la salida de las personas o la extracción de armas, papeles, efectos o cuaquier otro objeto, la autoridad que proceda a ella, pondrá guardias alrededor de la casa, para que detengan y conduzcan a su presencia a los individuos que salgan y las cosas que se intentaren extraer.

Capítulo II

Art. 3º Cuando haya lugar a una visita domiciliaria ésta se verificará por el Alcalde acompañado de su Secretario y de dos testigos abonados, pudiendo emplear la fuerza pública cuando sea de necesidad; y si fuere en el campo, se hará la visita por el Alcalde Pedáneo o el Inspector de Agricultura con la custodia correspondiente, quienes, llegados a la casa, llamarán al amo o a quien lo represente y le harán saber que se va a proceder a una visita domiciliaria conforme a la ley.

Si el amo de la casa se negare a ello, se le hará una segunda intimación y, si persistiere en su negativa, se procederá a una segunda intimación y, si persistiera en su negativa, se procederá a la visita domiciliaria, empleándose la fuerza si fuere necesario.

En los casos de flagrante delito, la autoridad que persiguiere al reo podrá hacer también la visita domiciliaria.

Cuando la seguridad de la República lo exija, si se tratase de aprehender a un reo de Estado, podrá proceder a la visita domiciliaria el Gobernador Político o el Alcalde, el Comandante de Armas o el Comisario de Policía.

Art. 4º Si la puerta de la casa estuviere cerrada, el Juez llamará por tres veces en voz alta y con intervalos regulares, anunciando que es la autoridad pública; si a la tercera vez no se abriere la puerta, la hará descerrajar o tumbar, si fuere necesario.

Art. 5º La resistencia a la autoridad en los casos de los dos artículos precedentes, será castigada conforme a las disposiciones de los artículos 209 hasta el 221 inclusive del Código Penal.

Art. 6º El registro de la casa sólo se extenderá a los lugares en que puedan estar ocultas las personas u objetos que se solicitan, y no se tocará a los papeles ni correspondencia epistolar, sino en los casos que previene la ley.

Art. 7º El Juez extenderá un acta de lo que hubiese practicado para la visita domiciliaria y de sus resultados, poniendo por cabeza las denuncias o requerimientos que le hayan sido hechos.

Cuando la visita domiciliaria tenga lugar en los campos, bastará que la autoridad que proceda a ella se presente a la superior a dar cuenta de lo que hubiese practicado.

En los casos 2º, 3º, 4º, y 5º del Art. 1º, si el amo de la casa allanada resultase culpado en la ocultación, será condenado en costas.

Art. 8º La autoridad que allanase una casa fuera de los casos designados en esta ley, o sin los requistos que ella prescribe, queda sujeta por este abuso a las penas de derecho.

Art. 9º La presente ley deroga cualquiera disposición que le sea contraria y se remitirá al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dada, etc.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Habiendo quedado aprobada la ley por ambos Poderes, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 13 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Francisco Javier Abreu

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Vice-Presidente, Francisco Javier Abreu; Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, se abrió la sesión. Fué leída y aprobada el acta de la anterior.

Se dió lectura a un oficio del Ministro del Interior por el que remite el decreto siguiente dado por el Poder Ejecutivo:

Atendiendo a que es de suma urgencia convocar nuevamente al Senado en Sesión legislativa extraordinaria, para que pueda conocer de un proyecto de ley de preferente despacho; y en virtud de la 9ª atribución que el Art. 35 de la Constitución confiere al Poder Ejecutivo,

HA VENIDO EN DECRETAR Y DECRETA

Art. único. Se renueva la convocatoria que el 16 del próximo pasado Agosto se hizo del Senado Consultor en Sesión legislativa extraordinaria; para que conozca, además de los asuntos en que se ocupa, del examen, discusión y sanción de un proyecto de ley, que le presentará el Gobierno y tiene por objeto reprimir el vicio del robo.

En seguida leyóse el proyecto de ley de que trata la convocatoria, y el Senado después de haber considerado la recomendación del Poder Ejecutivo declaró de urgencia la ley y se procedió a darle su primera lectura constitucional. Terminada ésta, se levantó la sesión.- *Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 15 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Manuel Maria Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, se abrió la sesión. Se leyó el acta de la anterior y fué unánimemente aprobada.

En conformidad a la orden del día, se dió la segunda lectura constitucional al proyecto de ley, propuesto por el Poder Ejecutivo sobre el delito de robo.

El Honorable Presidente hizo dar lectura a un oficio del Ministro del Interior por el cual el Poder Ejecutivo, considerando que el estado de paz y tranquilidad de que goza la República permite levantar el confinamiento que por la seguridad de ésta han sufrido algunos dominicanos, propone al Senado se sirva acordar esta gracia, si no hay inconveniente, de que vuelvan al territorio de la República los expulsos: Epifanio Gómez, Nicolás Ramírez, Ramón García, Marcos Méndez, José Corporán, Daniel Acevedo, José Aguirre, Comandante Baltasar Belén, Inocencio Gatón, Teófilo Neracj, David García Brook, Abraham Jones, Damián Castillo, José Belén Camán, José Gertrudis Araújo, Juan Gregorio Camarena, Eusebio Montás, Federico Pérez, Pedro Ma. Mena e hijo, Manuel Cestero, Cosme Damián, Gregorio García, León Francisco, Federico Robinsón, Juan María Benzo, Teolemac Saint Marc, Juan Francisco Guerrero, Pedro Salvador, Juan de Altagracia, Florencio Cáceres, Eugenio Levanto, Paulino Peralta y Carlos Herrera.

Por un oficio posterior, se incluye en el número de los agraciados a los expulsos Señorita Dolores Baralt y Juan Mendoza.

Terminada la lectura de los oficios que anteceden, el Honorable Abreu pidió la palabra y dijo que, hablando el

oficio de expulsos dominicanos, se veía en el número de los agraciados a un extranjero, cuyo extrañamiento del país, según la voz pública, provenía de habérsele cogido comunicaciones con el enemigo común, ofreciendo a éste sus servicios de espía en la República; y que, por lo tanto, creía del deber del Senado la averiguación de este asunto, y opinaba que se oficiase al Poder Ejecutivo pidiéndole las aclaraciones necesarias sobre el particular.

Discutida esta moción por todos los Senadores, fué acogida a unanimidad.

Acordado esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 17 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, se abrió la sesión.

Se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Conforme a la orden del día, se dió la tercera lectura constitucional al proyecto de ley sobre delitos de robo, y se puso a discusión su conveniencia.

El HONORABLE DELMONTE dijo: Juzgo oportuna la ley en cuanto al principio, pues no estoy lejos de creer conveniente que se haga en la República Dominicana, lo que en Inglaterra se hace con los ladrones: yo creo que es necesario aplicar a éstos la pena de muerte, porque, de lo contrario, no hay seguridad para la propiedad, no hay sociedad posible, no hay Patria, en fin; pero también quiero que se

rodee a la inocencia de todas las garantías que es justo acordarle. Sin embargo, no apruebo los Considerandos del proyecto de ley que se nos ha remitido, por no ser esas las verdaderas causas del mal que se intenta destruir, ni apruebo tampoco el contenido de varios artículos de ese mismo proyecto; mas al tratar hoy de la conveniencia de la ley, opino que ella es oportuna y necesaria.

El Honorable Bobadilla: Yo juzgo la ley anticonstitucional; porque la Constitución dice que los ciudadanos no podrán ser distraídos de sus Jueces naturales ni juzgados en causas civiles ni criminales por Comisiones, sino por Tribunales creados con anterioridad a la ley; porque el Art. 6º del proyecto de ley ordena que las sentencias sean remitidas al Poder Ejecutivo y los Poderes se ejercen separadamente; además, no creo, como dice el tercer Considerando, que sean ineficaces las leyes vigentes sobre este punto, sino que el mal provendrá, tal vez, de mal aplicación por parte de los Jueces.

El hombre muerto, Señores, no es nada útil para la sosiedad; del hombre vivo se puede sacar siempre algún provecho: es verdad que robar es contra el derecho divino, contra el derecho natural y el derecho civil; pero las penas deben ser proporcionadas al delito; el rigor de ellas no hace sino multiplicarlos, porque cuando la pena es excesiva, repugna a la conciencia.

Por consiguiente, veo que es de necesidad reprimir el robo, mas no pueden por ésto alterarse las formas de los juicios. Así, voto porque se castigue a los ladrones de las fronteras, a los ladrones famosos, a los de camino y otros, pero nunca votaré por la pena de muerte sin un examen y graduación en el delito.

El Honorable Delmonte: Yo diré, Señores, que es conveniente la ley; y si en Inglaterra, donde la sociedad tiene más elementos de seguridad y de orden, se ahorca a los ladrones, entre nosotros donde esa seguridad se ve a menudo amenazada, donde los Tribunales, sea por ignorancia o ex-

cesiva lenidad, no ejercen en toda su fuerza la acción represiva de la ley, ¿tendremos menos motivos para establecer esa pena? Aquí, donde existen haciendas en despoblado, donde la policía no es suficiente para ejercer la vigilancia necesaria, no podrá florecer la agricultura, porque cuando el cultivador no tiene la seguridad de cosechar, no siembra.

Además, no creo que el Tribunal de que habla el proyecto de ley, sea una Comisión; porque desde que su instalación es anterior a la perpetración del crímen, sus miembros son los Jueces naturales de los acusados. No estoy por el Art. 6º, porque el que puede aprobar puede desaprobar, y aquí el Poder Ejecutivo queda constituído en Tribunal de Apelación; sería mejor decir que el condenado podrá interponer el *recurso en gracia*, lo que es constitucional; pero esto pertenece a los detalles de la ley, y sólo se trata ahora de su conveniencia.

Discutido suficientemente este punto, se puso a votación y fué declarada la conveniencia a unanimidad de votantes.

En vista de un oficio del Ministro de Justicia, por el cual pone a conocimiento del Senado que se ha cumplido el período constitucional del Señor José Salado, Ministro de la Suprema Corte de Justicia, como también que hay una vacante por la dimisión que de su cargo hizo el Señor José Román, y que fué aceptada por el Senado, se procedió al nombramiento de un Ministro para la Suprema Corte y, verificado el escrutinio, resultó reelecto el Señor José Salado, a unanimidad de votantes; con lo cual se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, se abrió la sesión. Leída y aprobada el acta de la anterior, se procedió a dar cumplimiento a la orden del día.

Se leyó el proyecto de ley sobre el delito de robo y se declaró abierta la discusión.

Hallándose presente en la sesión el Ministro de lo Interior, pidió la palabra y apoyó el proyecto de ley, exponiendo el pensamiento del Poder Ejecutivo, enumerando los sucesos que daban lugar a la formulación de una ley excepcional sobre la materia, y apremiando la urgente necesidad de ella.

En apoyo también de la ley, citó el ejemplo de otras naciones, que en iguales casos se habían visto obligadas a dar leyes tan severas como la presente, las que habían producido saludables efectos, modificándose después, pasadas las circunstancias anormales que las motivaron.

El Honorable Bobadilla hizo al proyecto de ley las mismas observaciones que expuso al tratar de su conveniencia, consignadas en el acta anterior.

El Honorable Presidente, fijando el régimen de los debates, opinó que se modificasen los Considerandos de dicho proyecto; y habiendo sido aprobada esta opinión, hizo dar lectura al Art. 1º; se abrió el debate sobre éste, y el Honorable Bonilla dijo que, además de ser excesiva la pena impuesta por este artículo, juzgaba injusta la gradación de ella aplicando por el robo del valor de diez pesos fuertes, de cinco a diez años de trabajos forzados; y por el de diez pesos y dos reales, la pena de muerte.

El Ministro replicó a este argumento que pecaba de probar demasiado, puesto que en cualquier gradación sucedería lo mismo, y que más injusto sería no observar ninguna y aplicar la pena de muerte por las más simples pequeñeces, que es lo contrario de lo que intenta probar el argumento del Honorable Bonilla.

El Honorable Delmonte opinó que se modificara el artículo incluyendo algunas de las cinco causas agravantes que indica el Art. 381 del Código Penal.

El Ministro contestó que era hacer ineficaz la ley el quitarle toda la fuerza que tiene en el proyecto, y que, en las circunstancias normales, bastarían las disposiciones de las leyes vigentes en casos no excepcionales, diferentes de los casos en que se encuentran varios puntos de la República.

Después de prolongadas discusiones de los Arts. 1º, 2º y 3º, se propuso que sólo se aplicase la pena de muerte en casos de reincidencia, y disminuir el mínimum de la pena de trabajos forzados de que habla el Art. 1º.

Siendo la hora avanzada, se suspendió la sesión.- *M. J. Delmonte.- Melitón Valverde.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 19 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión, hallándose presente el Señor Ministro de lo Interior como órgano del Gobierno. Se dió lectura al acta de la sesión anterior que fué aprobada.

En conformidad a la orden del día, se continuó la discusión del proyecto de ley sobre delito de robo.

Aceptada la modificación de los Arts. 1º, 2º y 3º el Honorable Presidente propuso para que se discutiese la redacción de ellos, en el sentido siguiente:

Art. 1º El delito de robo simple será castigado, por la primera vez, con la pena de cinco a diez años de presidio.

Art. 2º Serán castigados con la pena de muerte los robos que hayan sido precedidos o acompañados de incendio, de homicidio, heridas o golpes, los cometidos con salteamiento de caminos y los actos de piratería.

Art. 3º Las sustracciones de que trata el Art. 380 del Código Penal serán castigadas, a querella de parte, con una prisión de tres meses a un año, sin perjuicio de las reparaciones civiles a que hubiere lugar.

Se le hicieron las observaciones siguientes: en el Art. 2º, en el número de las circunstancias agravantes, incluir los *robos sacrílegos;* y en el Art. 3º se exceptuó de la penalidad a los autores de sustracciones, cuando éstas fuesen cometidas por los padres u otros ascendientes en detrimento de los hijos u otros descendientes.

Fueron aprobadas por la mayoría. Sobre este último punto, el Honorable Bobadilla salvó su voto.

En seguida se pasó a la discusión de los Arts. 4º y 5º del proyecto de ley, y el Honorable Bobadilla dijo que, deseando ir de acuerdo con la Constitución, era preciso fijar los términos en que está concebido el inciso 9º del Art. 8º de la Constitución, que dice: *que los dominicanos no pueden ser distraídos de sus jueces naturales, ni juzgados en causas civiles ni criminales por Comisión alguna, ni sentenciados sino por el Juez o Tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley;* y que, a su modo de entender, más es una Comisión la que presenta el proyecto de ley que un Tribunal ordinario: que, además, encontraba que el Art. 5º del proyecto de ley en discusión, abreviaba las formas y términos de los juicios, lo que es también contrario a la Constitución, porque no sólo despoja a los acusados de una garantía, sino que también se le quita a los Jueces y a los encarga-

dos de la vindicta pública, que es innegable que la declaración oral de los testigos produce de ordinario grandes luces de que nace la convicción de los Jueces, porque en las preguntas y repreguntas que se hacen, en la confrontación del testigo con el reo, en las tachas legales que se puedan deducir contra los testigos, de ahí resulta una gran luz que debe contribuir al acierto en la administración de Justicia: que nadie puede poner límites a la defensa natural y que ha observado en la ley que no se le nombra defensor al acusado cuyo consejo es indispensable y lo requieren las leyes a pena de nulidad, y sólo se dice que se leerán en público las declaraciones y las defensas; y que desearía se le aclarasen estos diferentes puntos, para poder fijar con acierto su opinión.

El Ministro rebatió éstas opiniones diciendo que el Tribunal establecido por esta ley no es una Comisión, puesto que se constituye antes de cometerse el delito; y que por Comisión se entiende el nombramiento de ciertos individuos para juzgar cierto delito ya cometido; y, que el nombramiento de este Tribunal era conforme a la Constitución, porque ella dice en el Art. 42 que el Poder Judicial se ejerce por una Suprema Corte de Juticia, Tribunales de Primera Instancia y de Comercio, Consejos de Guerra, Alcaldes de Comunes y *demás* que el Poder Legislativo establezca en casos necesarios, y en este último caso se encuentra el Tribunal en cuestión.

Tocante al Art. 5º observó que las declaraciones orales de los testigos no harían más que, o embrollar el asunto, o hacer quedar impune el delito; que son muy buenas y muy justas estas reglas establecidas en países donde los testigos no tienen que apartarse a tres o cuatro millas a lo más, para dar sus declaraciones; donde se les remunera el tiempo y los gastos que se le ocasionan, y donde, por la mayor ilustración de sus habitantes, no es tan de temer que oscurezcan la verdad por ignorancia o por turbación al encontrarse en presencia de los jueces, como sucede aquí frecuentemente;

y que, por este motivo, por la distancia que tienen que recorrer los testigos sin ningua remuneración, se haría ineficaz la ley, resultando que, o la inocencia estaría de continuo amenazada, o quedaría muchas veces impune el delito: por lo que juzgaba más conveniente al reo las declaraciones escritas.

Después de prolongados debates sobre el particular, se resolvió aplazar la discusión de esta materia.

El Honorable Presidente observó al Señor Ministro que, en la sesión del día 15, un Señor Senador había propuesto se pidiesen aclaraciones sobre la gracia que deseaba conceder el Poder Ejecutivo al extranjero Federico Robinsón.

El Ministro contestó que, por una carta recibida de Saint Thomas, se avisó al Gobierno que el extranjero Federico Robinsón ofrecía sus servicios al Gobierno haitiano en calidad de espía; y, en consecuencia, había sido preso.

Que el Cónsul de una Nación amiga había suplicado al Poder Ejecutivo que se sobreyese en el juicio, y que se expulsase a dicho Señor, a lo que accedió el Gobierno, atendiendo también a que la naturaleza del documento que lo acusaba podía no prestar, en tela de juicio, motivos suficientes para su condenación, que después por dos ocasiones, el mismo Cónsul había pedido su indulto y el Poder Ejecutivo se lo había negado; pero que esta vez, en consideración a los servicios que había prestado a la República el dicho Cónsul, el Gobierno no creyó inconveniente acordárselo; máxime cuando él salía garante de su conducta.

Retiróse el Ministro y el Senado pasó entonces a ocuparse del acuerdo que pide el Poder Ejecutivo para conceder salvoconducto a los expulsos de que tratan las notas del Poder Ejecutivo de fecha 12 y 14 de los corrientes.

Se abrió la discusión sobre el particular y el Honorable Bobadilla dijo que opinaba del mismo modo que se había expresado otra vez, cuando se trató de conceder indultos a varios expulsos; y que añadía que éste, en su concepto, era un elemento de nuevos disturbios para el país.

AGN

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana
405

El Honorable Delmonte dijo que una vez que el Poder Ejecutivo asegura que el estado de tranquilidad en que se encuentra la República, permite la vuelta al país de los individuos indicados en sus notas oficiales de 12 y 14 de los corrientes, era de opinión que se prestase el acuerdo para dicha gracia.

Los demás Honorables fueron de esta última opinión, y el Senado resolvió por mayoría prestar su anuencia para la gracia que desea ejercer el Poder Ejecutivo.

Concluído esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- Melitón Valverde.- M. M. Valverde.*

SESION DEL 20 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, se abrió la sesión. Se dió lectura al acta de la anterior y fué aprobada.

Se abrió la discusión sobre los artículos 4º y 5º del proyecto de ley sobre el delito de robo; y después de algunos debates, fué aplazada para continuarla en la sesión siguiente; con lo cual se levantó ésta.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.*

SENADO
de la
Republica Dominicana
BIBLIOTECA

SESION DEL 25 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla, Melitón Valverde, se abrió la sesión, presente el Señor Ministro de lo Interior, órgano del Poder Ejecutivo. Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

El Honorable Presidente hizo dar lectura a varios oficios que le habían sido dirigidos: el primero del Ministro de Justicia, encareciendo la necesidad de establecer Tribunales de Primera Instancia, uno en la Provincia de Azua, y otro en la del Seibo; cuya creación propone al Senado, en nombre del Poder Ejecutivo.

El segundo oficio del Ministro de Hacienda y Comercio, informando que la suma de billetes de Caja, cuya emisión fué autorizada por el Senado, se ha invertido en los gastos que ha tenido que sufragar el Estado tanto para el servicio de las fronteras, durante la última movilización del Ejército, como también para favorecer la inmigración de isleños canarios; y pidiendo al mismo tiempo una nueva autorización para emitir diez millones más, con este último objeto.

El tercer oficio que fué leído, del Ministro Encargado de las Relaciones Exteriores, acompañando la Convención celebrada el 7 de los corrientes con el Gobierno de S. M. Británica, en cumplimiento de lo estipulado en el Art. 10 del Tratado de amistad, comercio y navegación entre la República y la Gran Bretaña, para que, conforme al 9º inciso del Art. 26 de la Constitución, el Senado se sirva tomarle en consideración.

El Senado, impuesto del contenido de estas notas, determinó ocuparse de ellas en otra sesión.

Se pasó luego a la orden del día y, en conformidad, se dió lectura al proyecto de ley sobre delito de robo. Abierta la discusión en el Art. 4º donde quedó anteriormente aplazada, el Honorable Bonilla leyó el Art. 47 de la Constitución, que dice: *Para facilitar la administración de Justicia, se divide el territorio en dos Distritos Judiciales. El de Santo Domingo que comprenderá en su jurisdicción a las Provincias de Azua, Seibo y Santo Domingo; y el de Santiago, que comprenderá la Provincia de este nombre y la Concepción de la Vega, etc.;* y concluyó diciendo que los cánones constitucionales atribuyen la facultad de juzgar a los dichos Tribunales de Primera Instancia, y que al proponerse en la ley en cuestión un Tribunal distinto, desearía que el Senado pudiese encontrar el medio de obviar esas dificultades.

El Ministro pidió la palabra y dijo que, a ser cierto el argumento del Honorable Bonilla, no se hubieran podido establecer el Tribunal de La Vega, los demás y aun otros, como los Consejos de Guerra. Hay más, añadió, la Constitución (Art. 42) dice: *El Poder Judicial se ejerce por una Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Primera Instancia y de Comercio, Consejos de Guerra, Alcaldes de Comunes y demás que el Poder Legislativo establezca en caso necesario;* de suerte, que el que se intenta establecer pertenece a este último caso y se establece conforme a la Constitución. Es preciso saber que hay Tribunales excepcionales, porque hay circunstancias que exigen su creación, y el Poder Ejecutivo ha creído éste necesario, para que la ley llevase una ejecución más estricta que la que procede de otros Tribunales que conocen de distintas causas. El Art. 47 no habla de éstos sino de los ordinarios: además, dice este mismo artículo, que podrán subdividirse en otros cuando se juzgue necesario, lo que es muy diferente a que la Constitución prohiba la creación de otros. En este caso, lo que se debe indagar, es saber si es necesario que haya un Tribunal excepcional.

El Honorable Bonilla dijo: Es preciso que se armonice el Art. 47 con el 42; la Constitución faculta a aumentar los Distritos, es decir, los Tribunales ordinarios, pero no faculta a crearlos excepcionales.

El Honorable Delmonte objetó a esta opinión diciendo que, si la Constitución hubiera querido prohibir que se estableciesen Tribunales con otras denominaciones, no diría, y *demás Tribunales de otro nombre, que se crean convenientes*; ese *demás* se contrae a los Tribunales que se creen bajo cualquiera denominación.

El Honorable Abreu dijo: Para terminar la cuestión que nos ocupa, recordaré al Honorable Bonilla que el Senado votó una Ley de Conspiradores, creando un Tribunal especial para conocer del crimen de conspiración: Tribunal es éste, creado en virtud de una ley. En el mismo caso se encuentra éste para conocer del delito de robo; y creo que los que votaron aquella Ley examinaron antes la Constitución, la votaron en razón de su conveniencia y juzgo que sin infringir el Pacto Fundamental. Por lo tanto, no hallo inconveniencia en decretar la ley con las muchas observaciones de que es susceptible para dar garantías a los asociados.

El Honorable Valverde observó una promiscuidad de atribuciones judiciales y administrativas, por cuanto se manda a conocer en esas causas a los Gobernadores Políticos, Comandantes de Armas y demás, cosas que prohibe expresamente el Art. 4º de la Constitución.

El Ministro replicó: Voy, pues, a hacerme cargo de la observación muy fundada del Honorable Valverde; conviene que los Tribunales tengan independencia, pero no hay impedimento en que los empleados del Gobierno puedan ejercer funciones judiciales. Es quimera pensar en la separación de los empleos entre nosotros, donde, preciso es decirlo, nos faltan los hombres; además, el Poder Ejecutivo creyó encontrar más garantía en las personas de más ilustración y más aptas en las Comunes para ejercer los cargos judiciales, siendo éste el objeto del Gobierno.

El Honorable Bobadilla hizo dos observaciones: la falta de Secretario, cargo que esta ley no establece; y, si en los delitos de que se trata hay indemnizaciones civiles, que son inherentes al robo, ¿cómo se introducen estas demandas?, ¿cómo se instruyen?

El Ministro contestó, que por querella o de oficio, y el Honorable Presidente observó que todo lo que no se oponga a esta ley, queda siempre en vigor.

Se propuso que el Comandante de Armas fuese quien instruyese las causas. El Honorable Bonilla dijo, que votaba en contra, pues el nombramiento de los Jueces tocaba al Poder Ejecutivo y que en la presente ley quedaban nombrados ya por el Poder Legislativo.

El Honorable Presidente y el Ministro del Interior rebatieron esta opinión, diciendo que esos cargos estaban solamente designados, puesto que los individuos que desempeñasen los destinos, a los que se atribuyen las funciones judiciales de que habla la ley, habían de ser nombrados por el Poder Ejecutivo, y eran revocables por él mismo, lo que no podría ser si estuviesen nombrados por el Poder Legislativo.

Hubo largos debates sobre este punto y se aplazó la discusión. Sin más nada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.*

SESION DEL 26 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión, hallándose presente el Señor Ministro del Interior y Policía.

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, se continuó, conforme a la orden del día, la discusión del proyecto de ley sobre el delito de robo.

Se dió lectura al Art. 4º, y el Honorable Bonilla opinó en contra apoyándose en el Art. 44 de la Constitución, y propuso que el Tribunal de que habla el proyecto de ley, se compusiese de un Presidente y tres vocales, cuyo nombramiento se dejaría al Poder Ejecutivo.

El Ministro del Interior pidió la palabra y dijo que la Constitución lo que ha querido, al asentar como principio la inamovibilidad de los Jueces, es establecer la imparcialidad en el juicio; y el Poder Ejecutivo ha querido asegurarla, creando, no Tribunales *ad hoc,* sino en todas las Provincias a la vez, con igual forma y elección en el personal, para que los pueblos vean que sólo se trata de darles garantías, por cuyo motivo se designan en la misma ley las notabilidades que deban componer el Tribunal; que la Administración que hoy existe seguirá este pensamiento, haciendo al mismo tiempo, lo que crea más constitucional; que, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no tendrá inconveniente en aceptar el pensamiento del Honorable Bonilla, que tendía a dejar ese nombramiento a su elección, pero que veía menos garantías de este modo, y encontraba éstas en que fuesen designados el Gobernador Político, como una de las personas más aptas en la Provincia y que representa al Gobierno, y los demás funcionarios que designa el proyecto de ley; personas todas que deben juzgarse de las más aptas e ilustradas en la Común donde desempeñan sus destinos.

El Ministro añadió que si, según la opinión del Honorable Bonilla, se dejaba el nombramiento de los Jueces del Tribunal al Poder Ejecutivo, se declarase al mismo tiempo por otro artículo la compatibilidad de los cargos judiciales con los empleos de Gobernador Político y Comandante de Armas, que designa el proyecto de ley.

El Honorable Presidente observó que se desviaba la discusión al tratar este punto, y siguióse ésta sobre el mismo Art.

4º. Después de largos debates, se pasó a votación si se admitía o no el referido artículo, según consta en el proyecto. Habiéndose rechazado a unanimidad, el Honorable Presidente propuso el Art. 4º con estas modificaciones: que el nombramiento del Fiscal fuese por el Poder Ejecutivo, y, además, la adición de un Secretario nombrado por el mismo Tribunal.

Discutido de nuevo el artículo, y puesto a votación, la mayoría votó en contra.

Entonces el Honorable Presidente propuso que se atribuyese el conocimiento del delito de robo a los Consejos de Guerra, creados por la Ley de 26 de Junio de 1855, y el Honorable Bonilla propuso que se atribuyese el conocimiento de esas causas a los Tribunales de Primera Instancia.

El Honorable Presidente dijo: Se sabe ya y es inútil hablar más sobre este punto, que los Tribunales de Primera Instancia, cualquiera que sea el motivo, son *ineficaces* para cortar el mal que se intenta remediar; la experiencia nos lo ha demostrado; por el contrario, ni se infringe ninguna ley, ni encuentro ningún inconveniente en que los Consejos de Guerra que establece la Ley de 26 de Junio de 55, conozcan también del delito de robo, y lo creo muy eficaz.

El Honorable Bobadilla dijo, que la Constitución ha delegado a los Tribunales de Primera Instancia el conocimiento de las causas civiles y criminales, y cree que éstos serán eficaces, si se les obliga a juzgar a breve término.

Insistiendo además en la inamovibilidad de los Jueces y que no quería desviarse ni infringir la Constitución, el Honorable Presidente preguntó: ¿Cuál cánon constitucional se infringió al establecer los Consejos de Guerra de 26 de Junio, y qué inconvenientes había para que estos Consejos no conociesen del delito de robo? Además, añadió, hay delitos en que parece más excusable la indulgencia, pero no veo por qué se deba tenerla con los ladrones, porque ellos mismos se segregan de la sociedad, y están en verdadera lucha con ella; y cuando se someten a estos Consejos de Guerra a hombres que, aunque hayan cometido delitos políticos,

no pierden por eso el aprecio de la sociedad, ¿por qué no someter a esos mismos Consejos, aquellos que la deshonran y destruyen? Además, se debe tener en cuenta la economía de tiempo y la del personal, pues no se halla con facilidad en las Provincias el número de individuos necesarios para componer otros Tribunales y se evitan al Erario nuevos gastos.

El Honorable Abreu opinó como el Honorable Bonilla, en cuanto a su primera proposición: que se dejara al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar los Jueces, porque creía que estos Jueces no son inamovibles; pues que la inamovibilidad, en su concepto, sólo se refiere a la Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales ordinarios, apoyando su aserto con los artículos 47 y 48 de la Constitución, y concluyendo que sólo rechazaba la indicación de los individuos que debieran componer el Tribunal, no oponiéndose a otra cosa con respecto al Art. 4º del proyecto de ley.

Prolongadas las discusiones, y siendo la hora avanzada, se aplazó el debate, y se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.- M. M. Valverde.*

SESION DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, y el Ministro de lo Interior como órgano del Gobierno.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

En seguida se pasó a la discusión del proyecto de ley sobre el delito de robo, que fué aplazada en el Art. 4º, y fué abierta de nuevo sobre la última proposición del Hono-

rable Delmonte discutida en la sesión anterior: que se atribuya el conocimiento del delito de robo a los Consejos de Guerra creados por la Ley de 26 de Junio de 1855.

El Honorable Presidente tomó la palabra, expresándose así: Rechazado el artículo 4º del proyecto de ley y las modificaciones propuestas, me ha parecido conciliarlo todo haciendo esta proposición; pues si se ha nombrado o se nombra a los miembros que componen esos Consejos para juzgar los delitos políticos, y a personas que pueden ser de consideración, con más razón en causas de robo, el mismo Tribunal debe satisfacer para juzgar estos delitos y esas personas que los cometen; a más de que ahorramos tiempo, porque ya están creados el personal y el procedimiento.

El Honorable Manuel María Valverde, propuso que se atribuyese a los Consejos de Guerra ordinarios el conocimiento de esas causas, creando para éstas un nuevo procedimiento.

El Honorable Presidente observó que éstos, compuestos de oficiales de poca graduación, no prestaban las mismas garantías.

El Honorable Bonilla: A la proposición que hizo el Honorable Presidente en la sesión anterior y que se discute hoy, respondí entonces opinando y proponiendo que los Tribunales de Primera Instancia, fuesen los que conocieran de tales causas; la razón es porque en el inciso 25 del Art. 26 de la Constitución, tratando de las atribuciones del Senado, dice: *Decretar la creación o supresión de Tribunales y Juzgados en las Provincias y Comunes que no hayan sido creados por la Constitución;* y así, por este canon constitucional, donde aquellos Juzgados están establecidos no pueden establecerse otros.

El Ministro de lo Interior: Lo expuesto por el Honorable Bonilla significa que donde hay establecido un Tribunal de Primera Instancia no se puede establecer otro de Segunda Instancia; pero no quiere decir que si la necesidad lo exige no se puedan crear otros, como los Consejos de Gue-

rra y demás. De lo contrario, si se entendiese, como cree el Señor Senador, ¿cuáles otros delitos inventaríamos para los demás Tribunales? Claro es que ninguno, porque todos estarían sujetos a los ordinarios.

Es preciso convenir que la Constitución, al sentar sus principios, no es con otro objeto sino el de que bajo su influjo se ejerza el bien, y no el mal, y que este Código venerado, que es la Suprema Ley, no ha sido creado sino para la salud del pueblo; por lo tanto, obrando en este sentido, lo que no está prohibido expresamente, debemos hacerlo. Diré, por último, que atribuir el conocimiento de estas causas a los Tribunales de Primera Instancia, es inutilizar la ley, pues si no se aplican las penas menores, ¿cómo podremos esperar que sean aplicadas las mayores?; lo que sería además dar a la ley un carácter de severidad sin objeto, y sin que la sociedad probase sus buenos efectos.

Puesta a votación la proposición del Honorable Presidente, fué acogida por la mayoría.

Pasóse luego a la discusión del Art. 5º y el Honorable Abreu opinó que la manera de enjuiciar fuese la que se ha establecido para los dichos Consejos de Guerra, con las modificaciones que se creyese convenientes.

El Ministro: Creo que ofrecen más garantías civiles las formas que establece el proyecto del Poder Ejecutivo, y ofrece estas garantías, tanto en la manera de enjuiciar, como hasta en los debates, a pesar de sus formas breves; pues si no ha dejado más latitud para conocer la verdad en las formas lentas que establece, tampoco se nota la ausencia de testigo ni falta de sus declaraciones, y si se requiere, además, que haya defensa escrita, es para que el Poder Ejecutivo tenga a la vista todo lo declarado y lo dicho en favor del reo, lo que no existe en los Consejos de Guerra.

Con las formas que trae esta ley, está más garantida la sociedad, porque a esos Jueces que están constituídos en jurados, se les da tiempo, se les exige y obliga a tomar todas las declaraciones necesarias.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

El HONORABLE PRESIDENTE: Observo que nada dice el proyecto de que la parte acusada pueda requerir la presencia de los testigos.

El MINISTRO: El Tribunal a nadie le puede privar lo que no priva a la ley; así el Tribunal apreciaría la citación de los testigos, porque la ley ni lo manda ni lo priva; así lo cree el Poder Ejecutivo.

El HONORABLE PRESIDENTE propuso: *El Tribunal podrá a requerimiento de la parte pública o del acusado, si cree necesario la citación, traer los testigos para oírles.*

Fué aprobada esta modificación, y puesto a votación el Art. 5º para que fuese o admitido o rechazado; la mayoría lo aceptó con la modificación propuesta y esta otra: *que la instrucción se hará del mismo modo en todas las Comunes.*

Se puso a discusión el Art. 6º y EL HONORABLE PRESIDENTE opinó en contra diciendo: Por la Constitución, los Poderes del Estado son independientes y se ejercen separadamente y por el artículo de que se trata el Poder Ejecutivo tiene mucha intervención en la justicia, porque el que aprueba, puede desaprobar; y estamos en la Constitución con el derecho de gracia. La confusión de Poderes produce el despotismo, y en este artículo se constituye al Poder Ejecutivo en Suprema Corte de Justicia. Si el derecho de gracia es constitucional, ¿por qué quitarlo?

El MINISTRO: Sin embargo, cuando el Poder Ejecutivo hace gracia en conmutar la pena, pesa siempre una condenación sobre el acusado y hay tanta garantía para la sociedad en proteger a un inocente como en castigar a un ladrón famoso.

El HONORABLE DELMONTE: Desde que se atribuye al Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Senado, el derecho de dar indultos con las excepciones que el interés de sociedad exige, y de conmutar la pena, como lo prescribe la Constitución, el Poder Ejecutivo puede, consultando al Senado, conmutar la pena o indultar al condenado si lo juzga ino-

SENADO de la República Dominicana

cente. La mayoría del Senado acogió esta opinión, y conforme a ella se votó el Art. 6º, con lo cual se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 28 DE SETIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión, hallándose presente el Ministro de lo Interior.

Se leyó el acta de la sesión anterior, y fué aprobada.

Trayendo la orden del día la continuación de los debates aplazados en la sesión anterior, se dió lectura al proyecto de ley, concebido en los términos siguientes:

Considerando: que el desorden que han estimulado las autoridades haitianas y de que han sido teatro las fronteras del Sur, desorden que tantos sacrificios ha costado al país, no ha tenido otro origen más que desbordamiento del robo; que ningún arreglo eficaz puede tener lugar sin remediar radicalmente el mal que fué causa de aquellos desórdenes.

Considerando: que el mismo vicio se va generalizando en toda la República y amagaría si continuase, con la reproducción de los males pasados.

Considerando: que sea por la ineficacia de la ley; ya por la complicación de las formas en el modo de enjuiciar, ya en fin por la lenidad de los actuales Tribunales, el robo queda constantemente impune y sus perpetradores ostentan un osado desprecio de la ley.

Considerando: que por poco que el mal progrese, la República dejará de tener las condiciones de seguridad necesarias para su existencia y la sociedad se disolvería y convertiría en un caos de desmoralización.

Considerando: que ésta es una de las circunstancias que más contribuyen a mantener la situación en un estado alarmante, y usando de la iniciativa que concede la Constitución al Poder Ejecutivo, propongo al Senado, en nombre de dicho Poder, el siguiente proyecto de

LEY

Art. 1º El delito de robo que se cometa, desde el día de la publicación de este Decreto, por cantidad que no exceda de diez pesos fuertes, será castigado con la pena de cinco a diez años de trabajos forzados.

Art. 2º El robo que se haga de un valor mayor de diez pesos fuertes, será castigado con la pena de muerte.

Art. 3º Todo robo, sea cualquiera el valor de la cosa robada, que sea cometido con violencia, escalamiento u otra circunstancia de las conocidas en el derecho como agravantes, será castigado con la pena de muerte.

Art. 4º El conocimiento de las causas de robo queda atribuído, por este decreto, a un "Tribunal Especial del Crimen" que se establecerá en cada cabeza de Provincia. Este Tribunal se compondrá del Gobernador Político de la misma Provincia, del Alcalde Constitucional, del primero de sus Suplentes, del Comandante de Armas y del Oficial Civil, que hará las veces del Fiscal y será presidido por el primero de dichos funcionarios.

Art. 5º El Tribunal conocerá sumariamente de todas las causas de robos que se cometieren en la Provincia, instruirá una sumaria información del delito, y con presencia de esta sumaria, oídas las partes, y leídas en juicio público las defensas de los reos, pronunciará sentencia. Cuando el delito fuese cometido en otra Común donde no resida el Tribunal, el Alcalde, asistido de un Suplente y del Comandante de Armas, hará la formación sumaria de que habla este artículo, y al mismo tiempo que a los reos la remitirá al Tribunal de la cabeza de Provincia, cerrada y sellada para que obre sus efectos.

Art. 6º La sentencia del Tribunal Especial Criminal, no será ejecutiva sino después de aprobada por el Gobierno, a cuyo efecto se le remitirán por el Presidente las piezas de procesos, cerradas y selladas. El Gobierno, en su caso, comunicará las órdenes convenientes a los Comandantes de Armas respectivos, para hacer ejecutar las sentencias en la misma Común, y en el lugar público más inmediato a aquel en que se hubiese cometido el delito.

Art. 7º Los Jueces del Tribunal Especial del Crimen, o de los demás encargados en las Comunes de instruir las sumarias, que por cohecho u otro motivo de parcialidad hubiesen contribuído a hacer quedar impune un delito de los previstos en el presente Decreto, sufrirán la pena de ser destituídos de sus empleos, quedarán inhabilitados para ejercer ningún cargo público y responsables con sus bienes del daño que hubiesen causado con su negligencia o mala fe.

Art. 8º Quedan derogadas las leyes, decretos y otra cualquiera disposición contrarias al presente Decreto.

Se continuó la discusión de esta ley y agotados los debates, se aplazó su sanción para una de las sesiones subsecuentes. Con lo cual se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 1º DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión.

Se dió lectura al acta de la anterior y fué aprobada.

Trayendo la orden del día la sanción de la Ley sobre el delito de robo, fueron leídos todos los artículos de que se compone, redactados conforme a las reformas y adiciones que sufrió el Proyecto; y habiendo sido aprobado cada artículo separadamente, se sancionó el conjunto de la Ley, cuyo tenor es el siguiente:

En nombre de la República Dominicana

EL SENADO CONSULTOR

A propuesta del Poder Ejecutivo y previas las tres lecturas constitucionales,

Considerando: que el desorden que han estimulado las autoridades haitianas y de que han sido teatro las fronteras del Sur, no ha tenido otro origen que el desbordamiento del robo;

Considerando: que ningún arreglo eficaz puede establecerse, sin extirpar antes aquel mal radicalmente;

Considerando: que sea por incuria de los magistrados y oficiales encargados del ministerio público, o excesiva lenidad de nuestros Tribunales ordinarios, ese delito queda casi siempre impune, ostentando sus perpetradores un osado desprecio de la ley;

Considerando: que por poco que la desmoralización progresara, la República dejaría de tener las condiciones necesarias para su existencia; y que, a males tan graves, es preciso aplicar pronto y eficaz remedio, ha dado la siguiente

LEY

Art. 1º El delito de robo simple será castigado, por primera vez, con la pena de cinco a diez años de presidio.

Art. 2º En caso de reincidencia, o cuando el robo haya sido cometido de noche, o por dos o más personas, o con violencia, o amenaza de hacer uso de armas, o por medio de fracción exterior, escalamiento o llaves falsas, en una casa, pieza, cuarto, alojamiento habitado, o sus dependencias, el culpable será condenado a muerte.

Art. 3º Serán castigados con la misma pena los robos que hayan sido precedidos o acompañados de incendio, de homicidio, heridas o golpes; los robos sacrílegos, los cometidos con salteamiento de caminos y los actos de piratería, aun cuando no exista la circunstancia de reincidencia.

Art. 4º Para que haya reincidencia, no se requiere que los dos o más robos hayan sido cometidos bajo el imperio de esta ley; bastará al efecto que el reo haya sido con anterioridad a su publicación, condenado por el mismo delito.

Art. 5º Las sustracciones de que trata el Art. 380 del Código Penal, serán castigadas a querella de parte, con una prision de tres meses a un año, sin perjuicio de las reparaciones civiles a que haya lugar.

Exceptúanse de esa disposición las cometidas por los padres u otros ascendientes, en detrimento de sus hijos u otros descendientes, y de las cuales conocerán los Tribunales ordinarios.

Art. 6º En los casos del artículo anterior, la parte querellante podrá suspender en todo tiempo los efectos del juicio, bastando a este fin la presentación de un escrito al Presidente del Tribunal de que se hablará después, quien en su vista proveerá conforme.

Art. 7º El conocimiento de las causas de robo queda atribuído a los Consejos de Guerra creados por la Ley de 26 de Junio de 1855, los cuales conocerán sumariamente de todas las causas de este género en la extensión de su jurisdicción.

Art. 8º El Alcalde, acompañado de uno de sus Suplentes y del Comandante de Armas de la Común donde se cometiese el delito instruirá una sumaria información. Esta sumaria, cerrada y sellada, será remitida, al mismo tiempo que el reo, al Presidente del Tribunal que establece el Art. 7º.

Art. 9º Entre las veinte y cuatro horas después de la recepción de las piezas y de la llegada del reo a la cárcel pública de la Capital de Provincia donde haya de juzgársele, será interrogado por el Presidente del Tribunal o por el Juez que éste delegare al efecto.

Art. 10. Concluído el interrogatorio, el Juez preguntará al reo si ha elegido defensor para ayudarle en su defensa, y, en caso de negativa, se le nombrará de oficio en el acto.

Art. 11. El defensor podrá comunicar con el reo después de su interrogatorio. Podrá también tomar comunicación de todas las piezas del proceso, sin extraerlas de la Secretaría.

Art. 12. Tres días después del interrogatorio, a más tardar, el Presidente convocará al Tribunal por medio de una circular, la cual indicará el lugar, día y hora en que habrá de reunirse.

Art. 13. El Fiscal redactará una acta de acusación, que hará notificar al reo, a lo menos veinticuatro horas antes del día señalado para el juicio.

Art. 14. Reunido el Tribunal en sesión pública el día fijado, comparecerá el reo a su presencia, sin prisiones, acompañado solamente de la custodia necesaria para impedir su evasión.

El Presidente le preguntará su nombre, apellido, edad, profesión, domicilio y el lugar de su nacimiento; y hará tomar nota de sus respuestas.

Art. 15. En seguida, se dará lectura del acta de acusación y de la información sumaria. Acto continuo, el Fiscal expondrá claramente el hecho y hará la acusación fiscal apoyándola en la ley y robusteciéndola con las razones legales que creyere convenientes, y después de lo cual, leída la defensa del reo y oídas las partes contradictoriamente, los Jueces se retirarán a la Cámara del Consejo, para deliberar.

Art. 16. El Presidente propondrá las cuestiones y recogerá los votos, que se emitirán siempre de palabra, empezando por el Juez de menor graduación.

Art. 17. Vuelto el Tribunal a la audiencia, el Presidente proclamará el resultado de la votación.

Si el reo fuere declarado culpable del delito que se le imputa, el Fiscal requerirá la aplicación de la pena. El defensor del reo podrá hacer respecto de ella, las observaciones que juzgare convenientes.

Art. 18. Retirados de nuevo los Jueces a la Cámara del Consejo, se acordará la sentencia por mayoría absoluta de votos, en los términos que prescribe el Art. 16.

Art. 19. La sentencia deberá expresar el texto de la ley en que se funda, y será firmada por todos los Jueces antes de su publicación, bajo las penas que establece el Art. 370 del Código de Instrucción Criminal.

Art. 20. El Presidente pronunciará la sentencia en alta voz, en presencia del público y del reo.

Art. 21. Si la declaratoria fuese de inculpabilidad, el reo será puesto inmediatamente en libertad, si no estuviese preso por otra causa.

Art. 22 Durante el juicio, podrá el Tribunal, cuando lo crea indispensable para el descubrimiento de la verdad, ordenar la comparecencia de uno o más testigos para que sean examinados, sea de oficio, o bien a requerimiento del Fiscal o del acusado.

Art. 23. Una vez comenzados los debates, deberán continuar sin interrupción, no pudiendo suspenderse sino por el tiempo necesario para el descanso de los Jueces y los acusados.

Durante los debates, hasta el pronunciamiento de la sentencia, deberán estar los Jueces enteramente incomunicados.

Art. 24. En caso de condenación capital, el reo interpondrá el recurso en gracia al Poder Ejecutivo, entre las veinticuatro horas de pronunciada la sentencia; de lo

contrario, lo hará de oficio el Presidente del Tribunal entre las veinticuatro horas siguientes.

En ambos casos, deberá el Presidente remitir el proceso, cerrado y sellado, al Secretario de Estado en el despacho de lo Interior y Policía, suspendiéndose — entre tanto — la ejecución de la sentencia.

Art. 25. Tanto los Jueces del Tribunal, como los demás encargados de instruir las sumarias que por cualquier motivo de parcialidad hubieren contribuído a dejar impune uno de los delitos previstos en esta Ley, o prevaricaren de cualquier otro modo, serán condenados por el Tribunal competente a la degradación cívica y a las indemnizaciones legales, sin perjuicio de las demás penas a que se hubieren hecho acreedores.

Art. 25. La presente Ley deroga toda disposición que le sea contraria y será remitida al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dada en el Palacio del Senado Consultor, en la Capital de la República, el 1º de Octubre de 1860 y 17º de la Patria.

Concluída ésta, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Melitón Valverde.*

SESION DEL 3 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde.

Leyóse el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Según la orden del día se trajo a la vista un oficio del Ministro de Hacienda, por el cual informa que la suma de billetes de Caja, cuya emisión fué autorizada por el Senado, se ha invertido en los gastos que ha tenido que sufragar el

Estado, tanto para el servicio de las fronteras durante la última movilización del Ejército, como también para favorecer la inmigración de isleños canarios; y pide además una nueva autorización para emitir diez millones más con este último objeto.

El Senado, después de haber deliberado detenidamente, acordó decretar la emisión de diez millones de pesos nacionales, para los fines indicados; y el Honorable Melitón Valverde fué encargado de redactar este decreto.

También se dió lectura a otro oficio del Ministro de Justicia, presentado en una de las sesiones pasadas, proponiendo la creación de dos Tribunales de Primera Instancia, uno en la Provincia de Azua y otro en la del Seibo.

El Honorable Abreu observó, que, no pudiéndose tratar en esta Legislatura de aquellas materias no indicadas en la convocatoria, debía diferirse esta cuestión para la próxima Sesión legislativa ordinaria.

Todos los Senadores opinaron del mismo modo, quedando así acordado.

Se dió lectura a una representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en que expone que el Honorable Senado en 20 de Junio del año pasado de 1859 acordó que los $132.25 cts. fuertes, suplidos por el peticionario en la misión de Las Matas, le fueran satisfechos por el Tesoro público, así como el sobresueldo de $60 fuertes mensuales que le había acordado el Poder Ejecutivo en 22 de Mayo de 1857, le fuera también abonado desde el 1º de Julio de 1857, hasta el 1º del mismo mes, año 1858; que los anteriores derechos que a percibir esas sumas tenía, como deuda legítima de la Nación a quien servía, se hallan, al presente, convertidos en perfectos, si antes no lo fueran, en virtud de la solemne e irrevocable declaratoria hecha por el primer Poder del Estado; y como lo declarado y acordado no ha tenido aún efecto, por haber juzgado oportuno el Poder Ejecutivo hacer observaciones, el exponente ruega de nuevo al Senado, se digne resolver sobre el particular, para

ver terminado de una vez su justo como prolongado reclamo.

Por las razones más arriba indicadas, se acordó aplazar la discusión de esta materia, para la próxima Sesión legislativa ordinaria.

Sin otra cosa, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 5 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde.

Leída y aprobada el acta de la anterior, el Honorable Melitón Valverde, dió lectura al proyecto de decreto, cuya redacción se le encomendó, y que autoriza al Poder Ejecutivo para imprimir diez millones de pesos nacionales, con el objeto de favorecer la inmigración de isleños canarios. Dicho proyecto recibió en esta sesión la primera lectura constitucional.

El Honorable Bonilla dió lectura a una resolución que estaba encargado de redactar, por la cual se interpreta y explica el sentido del Art. 60 de la Ley Orgánica, en vista de la consulta hecha por la Suprema Corte de Justicia.

En seguida, EL HONORABLE ABREU hizo la moción siguiente, apoyada por el Honorable Bobadilla: En la sesión de 28 de Agosto último, el Senado acordó devolver al Ministro de Hacienda las Cuentas generales de la República, junto con la opinión de su Comisión. Ese mismo día acordó también devolver al referido Ministro el Presupuesto envia-

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

do por el Poder Ejecutivo por carecer de la indicación de las entradas y no encontrarse por ésto conforme a lo imperado en el Art. 26 de la Constitución, en su inciso 4º, y hasta esta fecha no han sido presentados de nuevo. Ahora bien, Señores, el Senado ha concluído todos los asuntos pendientes, y los demás que han sido objeto de las dos convocatorias del Poder Ejecutivo. Más como este Honorable Cuerpo no puede estacionarse, ni deben prolongarse indefinidamente sus sesiones legislativas, hago la proposición siguiente: que se oficie al Poder Ejecutivo haciéndole presente esta circunstancia, y que el Senado aguarde la devolución de dichas piezas; para que, en vista de la contestación del Poder Ejecutivo, el Senado determine lo que juzgue más conveniente.

El Presidente observó que creía esta moción más oportuna, cuando se hubiesen terminado todos los trabajos del Senado, exceptos aquellos a que se refiere; y el Honorable Abreu retiró su proposición para reproducirla en su oportunidad.

Siendo la hora avanzada, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 6 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presente los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde.

Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

Conforme a la orden del día, se aprobó y sancionó la Resolución de que trata el acta precedente, y es como sigue:

EL SENADO CONSULTOR

Vista la consulta hecha por la Suprema Corte de Justicia en fecha 21 de Junio último y transmitida al Senado por órgano del Ministro del ramo, sobre si debe entenderse y aplicarse el Art. 60 de la Ley Orgánica, en el sentido absoluto que se desprende de su letra, o si los Alcaldes están únicamente autorizados a poner la ordenanza de ejecución en aquellas decisiones arbitrales, cuya cuantía fuere de su competencia para juzgarles si se les sometiera la acción, y que se hallan comprendidas en los artículos 27, 28 y 29 de la precitada ley; y cuando la decisión fuere pronunciada por arbitradores y amigables componedores, cualquiera que sea la cantidad o interés de la cuestión.

Considerando: Que la interpretación y explicación de las leyes corresponde al Senado Consultor, conforme a la 8ª atribución del Art. 26 de la Constitución.

Considerando: Que los Códigos de la Restauración se adoptaron en todo lo que no fuesen contrarios a la Constitución y leyes de la República, y que la Ley Orgánica de Tribunales es posterior a la adoptación de los referidos Códigos.

RESUELVE

El Art. 60 de la Ley Orgánica debe entenderse y aplicarse en el sentido absoluto que se desprende de su letra, no obstante las disposiciones de los Artículos 1.021 y 1.022 del Código de Procedimiento Civil.

La presente Resolución será enviada al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Dada en el Palacio del Senado, etc.

Puesto a discusión el convenio que por órgano del Poder Ejecutivo remitió al Senado el Ministro de Relaciones Exteriores, fué aprobado.

El Honorable Bonilla opinó que para la aprobación del citado convenio, se diese un decreto; la mayoría fué de opinión contraria, y se decidió que se aprobase por medio de un Acuerdo, el que fué redactado en los términos siguientes:

EL SENADO CONSULTOR

Vista la declaración hecha y firmada en esta Capital el 7 del mes próximo pasado por el Plenipotenciario de la República y el de S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, en que se pacta que cualquiera de las altas partes contratantes tendrá el derecho de hacer a la otra el 10 de Setiembre de 1860, o en cualquiera tiempo después, la notificación de su intención de terminar, al vencimiento de doce meses contados desde la fecha de la notificación, las estipulaciones relativas a comercio y navegación del Tratado celebrado entre ellos, el 6 de Marzo de 1850.

En uso de la 9ª atribución del Art. 26 de la Constitución,

ACUERDA

Se aprueba en todas sus partes la referida Convención, a fin de que se proceda a las demás formalidades de estilo.

Dado, etc., etc.

Aprobado el presente Acuerdo por los Senadores, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- M. Valverde.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 8 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde. Se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

En conformidad con la orden del día, se dió la 2ª lectura constitucional al proyecto de decreto que acuerda la autorización pedida por el Poder Ejecutivo para la impresión de diez millones de pesos nacionales.

En seguida se dió lectura a un oficio del Ministro del Interior, por el cual el Poder Ejecutivo devuelve al Senado la Ley que sancionó este Honorable Cuerpo el día 1º de este mes, haciéndole las dos observaciones siguientes: 1ª que separándose la Ley del proyecto presentado por el Gobierno, consagra el principio de no aplicar la pena de muerte por el delito de robo, y sólo sí lo hace por las circunstancias agravantes con que se ejecute aquél, dejando al arbitrio de los que la apliquen no declarar nunca, si les place, la existencia de éstas; y 2ª que a las formas simples que se propusieron para el juicio en el referido proyecto se han sustituído otras más complicadas que harían la ley tan inaplicable como las comunes que hoy se hallan insuficientes para cortar el mal que se trata de remediar.

Según la práctica establecida en el Senado, se aplazó la discusión de estas observaciones para otra sesión; con lo cual se levantó la de este día.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 9 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

En cumplimiento de la orden del día, se abrió la discusión tocante a las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley que sancionó el Senado el 1º del corriente, sobre el delito de robo.

Todos los Senadores opinaron en contra de las observaciones.

El Honorable Bobadilla se expresó así: Estoy por el principio de que el robo se castigue con severidad; no he asistido a la sanción de la Ley; mas no estoy, ni por el todo de la Ley, ni apruebo tampoco las observaciones del Poder Ejecutivo; y daré mi opinión cuando se discutan éstas en la reunión de los dos Poderes del Estado.

El Honorable Presidente observó que ningún Senador tenía derecho de opinar en contra de una Ley ya votada por el Senado; y que la cuestión presente se reducía tan sólo a apreciar o no las observaciones del Poder Ejecutivo.

El Honorable Bobadilla replicó que no las apreciaba.

Puesta la materia a votación, las referidas observaciones fueron desechadas a unanimidad; y, en consecuencia, se acordó comunicarlo al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Terminado esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 10 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde.

Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.

En seguida se dió la tercera lectura al proyecto de decreto de que habla el acta de fecha 8 del corriente, y se procedió a su discusión. Después de algunas modificaciones, to-

dos los Senadores aprobaron el citado Decreto, y quedó sancionado.

El Honorable Abreu reprodujo la moción que con apoyo del Honorable Bobadilla hizo en la sesión del 5 del corriente, y el Senado, después de una corta discusión, acordó oficiar al Poder Ejecutivo haciéndole presente que, habiendo terminado ya los demás asuntos pendientes para que fué convocado extraordinariamente, sólo aguarda la devolución de las Cuentas de la República y del Presupuesto general del Estado, remitidos al Ministro de Hacienda, en 28 de Agosto último, con el objeto expresado en el acta de ese día, para poder dar término a los trabajos legislativos de la Sesión presente.

Agotada la orden del día, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 22 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión. Se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

Se dió lectura a un oficio del Ministro del Interior por el cual expone que el Poder Ejecutivo considerando las circunstancias atenuantes que concurrieron en el hecho por qué fué condenado el Señor Bertrand Verón a la pena de dos años de prisión, cree conveniente indultarle diez y ocho meses de la dicha pena, si el Senado tiene a bien prestar su acuerdo, según lo exige el Art. 35 del Pacto Fundamental, en el párrafo único de su vigésima cuarta atribución.

Se aplazó para la sesión próxima la decisión de este asunto.

Se leyó igualmente una solicitud del General de Brigada Ceara, quien hace presente al Senado que, consagrado al servicio militar desde el año 1844, ha envejecido en él, y se encuentra hoy en la miseria, sin una pequeña finca que legar a su familia, por lo que solicita se le conceda en propiedad una casa en el lugar de su domicilio, o en otro cualquiera.

No pudiendo el Senado ocuparse de esta materia en esta Sesión legislativa extraordinaria, quedó en receso dicha petición.

Presentóse el Señor Ministro de Justicia y a nombre del Poder Ejecutivo, expuso que, palpándose la necesidad de crear dos Tribunales de Primera Instancia, uno en la Provincia del Seibo y otro en la de Azua, se había hecho la proposición al Senado, y que hoy la reiteraba por si se creyese oportuno tomarla en consideración.

El Honorable Abreu dijo que, estando el Senado en Sesión legislativa extraordinaria, no había podido ocuparse de este asunto, por no estar contenido en la convocatoria del Poder Ejecutivo, y que no podía tomarse en consideración, a menos de una nueva convocatoria extraordinaria para este objeto. Todos los Senadores opinaron del mismo modo. El Señor Ministro dijo que manifestaría ésto al Poder Ejecutivo, y se retiró.

No habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 23 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Tomás Bobadilla y Manuel María Valverde, que fué nombrado Secretario para esta sesión por ausencia del titular.

Se dió lectura al acta de la sesión anterior y quedó aprobada.

Se abrió la discusión conforme al orden del día sobre el acuerdo que ha pedido el Poder Ejecutivo para indultar al Señor Bertrand Verón diez y ocho meses de la pena, de dos años de prisión a que fué condenado.

El Honorable Bobadilla: Honorables Senadores: Los actos de un Gobierno deben siempre estar revestidos de verdad, de justicia, de legalidad y de moralidad, porque si es cierto que las primeras sociedades se formaron por la necesidad y la conveniencia, ninguna ha existido ni puede existir sin justicia, sin religión y sin buenas costumbres.

Se invocan circunstancias atenuantes a favor del Señor Bertrand Verón para concederle un indulto particular, sin expresarse siquiera cuáles sean esas circunstancias. Si circunstancias atenuantes pudo haber en su causa, el Tribunal que conoció de ella las apreció debidamente y los Poderes a quienes está facultado indultar parece que no deben hacer mérito de ellas.

Una casualidad puso en mis manos la sentencia dada contra Verón, que la considero justa y equitativa, toda vez que el hecho por que fué juzgado tiene en sí caracteres de gravedad. El, en estado de embriaguez y de enajenación mental (según lo alegó en el juicio), acometió a un artesano padre de familia, le dió golpes, le arrastró y le ha dejado

inválido de una pierna; públicamente injurió al actual Jefe del Poder Ejecutivo, a los altos funcionarios, y prorrumpió en palabras alarmantes. Si, después de todo esto, el Ejecutivo, superior a las injurias personales, por un acto de generosidad y magnanimidad, quiere indultarle, concédase el indulto; pero no se consagre el principio que las circunstancias atenuantes sean motivo para obtener gracia, porque la apreciación de ellas corresponde a los Tribunales de Justicia, y porque los hechos inmorales no se pueden invocar, ni aun en los Tribunales, como circunstancias atenuantes, ni como medios de excusa.

El Señor Presidente: Yo abundo en la opinión emitida por el Honorable Bobadilla; creo que las circunstancias atenuantes, si son, como no deja duda, motivo legal para la moderación de la pena aplicable por el Juez, no lo son para obtener indulto; pues, de lo contrario, resultaría el reo doblemente agraciado, y mucho más allá de lo que demandan la equidad y la justicia.

Sin embargo, Señores, no contestemos al Poder Ejecutivo el derecho de motivar la concesión de un indulto particular, en lo que más le plazca, toda vez que la Constitución deja a ambos Poderes una entera libertad sobre este punto; y veamos si el Senado está dispuesto a prestar su acuerdo para disminuir la pena al Señor Verón.

En cuanto a mí, voto por el indulto en cuestión, entre otras razones, por la de no privar al actual Jefe del Poder Ejecutivo de la satisfacción de ejercer un acto de magnanimidad perdonando injurias personales.

El Honorable Abreu fué de la misma opinión que el Honorable Bobadilla. Los demás Senadores opinaron igualmente; y quedó acordada la gracia.

Se recibió el Presupuesto general del Estado remitido por el Ministro de Hacienda, y pasó a la Comisión nombrada anteriormente para redactar el proyecto de ley; acordando, además, el Senado que el Secretario oficiase al referido Ministro acusándole recibo del Presupuesto, y hacién-

dole presente que reposan aún en dicho Ministerio las Cuentas generales de la República.

No ocurriendo otra cosa, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Bobadilla.*

SESION DEL 26 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde.

Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.

Dióse lectura a un decreto de convocatoria, remitido con oficio por el Ministro del Interior, concebido en los términos siguientes:

Atendiendo: que, establecidos Tribunales de Primera Instancia en la Provincia de Santo Domingo, La Vega y Santiago, exige la equidad que se haga disfrutar de igual beneficio a las dos restantes.

Atendiendo, asimismo, que las razones que obraron para establecer el dicho Tribunal de Primera Instancia en la Provincia de La Vega, obran también para que se haga otro tanto en las de Azua y el Seibo.

Atendiendo, en fin, a que la conveniencia pública reclama la prontitud de esta medida; usando de la facultad que me concede el Art. 35 de la Constitución, he venido en decretar y

DECRETO

Se convoca al Senado Consultor para reunirse en Sesión legislativa extraordinaria el día 26 del corriente, con el objeto de establecer, si lo tiene a bien, Tribunales de Primera Instancia, en las Capitales de Provincias de las de Santa Cruz del Seibo y Compostela de Azua.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

En virtud del presente Decreto, el Honorable Presidente declaró constituído el Senado en Sesión legislativa extraordinaria, para conocer del asunto que indica la convocatoria.

En seguida, a propuesta del Señor Presidente, apoyado por otro Senador, se pasó a una sesión secreta, terminada la cual, se volvió a la sesión pública.

Se nombró una Comisión, compuesta de los Honorables Bonilla y Manuel María Valverde para redactar un proyecto de decreto estableciendo Tribunales de Primera Instancia en la Provincia de Azua y en la del Seibo, con lo cual se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Bobadilla.*

SESION DEL 29 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión. Leyóse el acta de la anterior y quedó aprobada.

Se recibió un oficio del Senador Rafael Pérez, en el que expone que, hallándose enfermo, no ha podido regresar a esta Capital para volver a ocupar su puesto en el Senado; pide se le prorrogue la licencia que se le concedió para ir al lugar de su domicilio.

El Senado, apreciando los razones en que apoya su excusa el Honorable Pérez, determinó prorrogarle dicha licencia mientras se restableciese su salud.

La Comisión nombrada para redactar el decreto creando Tribunales de Primera Instancia en la Provincia del Seibo y en la de Azua, presentó el proyecto, y, declarado de urgencia, recibió su primera lectura constitucional. Se leyó

un oficio del Ministro de lo Interior, por el que remite al Senado varias piezas referentes a la cuestión que se ha suscitado entre las Provincias de Santiago y La Vega, sobre a cuál de ellas pertenece la Sección de San José; y se decidió, por mayoría, que estando el Senado en Sesión legislativa extraordinaria, difiriese este asunto para la próxima Sesión ordinaria.

A propuesta del Honorable Presidente, se procedió a la elección de un miembro que faltaba en la Cámara de Cuentas, resultando del escrutinio el Señor Manuel Rodríguez Urdaneta con cuatro votos y el Señor Bernardo de Jesús González con dos, quedando electo el primero de dichos Señores. Concluído esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.*

SESION DEL 31 DE OCTUBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión. Se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

En conformidad a la orden del día, se dió la segunda lectura constitucional al proyecto de decreto de que habla el acta anterior.

No ocurriendo otra cosa, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 1º DE NOVIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Se leyó un oficio del Señor M. Rodríguez Urdaneta, aceptando el cargo de Miembro de la Cámara de Cuentas.

Conforme a la orden del día, se dió la tercera lectura constitucional al proyecto de Decreto a que se refiere el acta de la sesión anterior, y puesto a discusión después de varias modificaciones, fué aprobado y sancionado en los términos siguientes:

En nombre de la República Dominicana

EL SENADO CONSULTOR

A propuesta del Poder Ejecutivo, y previas las tres lecturas constitucionales.

Considerando: que la gran distancia que separa la Capital de la República de las Provincias de Compostela de Azua y Santa Cruz del Seibo, comprendidas todas en un solo Distrito Judicial, es causa de que los habitantes de estas últimas experimenten retardo en la administración de la Justicia, y con el fin de remediar este mal,

DECRETA

Art. 1º Se crean dos Distritos Judiciales que comprenderán, el uno: la Provincia de Compostela de Azua, y el otro: la de Santa Cruz del Seibo.

Art. 2º En cada uno de estos Distritos se establecerá un Tribunal de Primera Instancia con su asiento en la Capital de la Provincia y cuyo personal será el que fija la Ley Orgánica de Tribunales de 19 de Marzo de 1855.

Art. 3º Los referidos Tribunales ejercerán la jurisdicción que le atribuyen las leyes en toda la extensión de su respectivo Distrito.

El Distrito de Santo Domingo queda circunscrito a la Provincia Capital.

Art. 4º Las causas, así civiles y comerciales como criminales, que competan a dichos Tribunales y que estén pendientes en el de esta Capital, serán remitidas al que corresponda para su pronto despacho, con excepción de las que se encuentren en estado de sentencia.

Art. 5º El presente Decreto deroga toda otra disposición, etc.

Terminada la sanción del presente Decreto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.*

SESION DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde. Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.

En conformidad con la orden del día, la Comisión encargada de redactar la ley de Presupuestos formuló su proyecto y varias observaciones que hizo a los Presupuestos presentados por el Poder Ejecutivo; se leyeron éstas y en seguida se dió la primera lectura constitucional al proyecto de ley.

Agotada la orden del día, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.*

SESION DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión; leyóse el acta de la anterior y quedó aprobada.

En conformidad con la orden del día, se dió la segunda lectura constitucional al proyecto de ley de Presupuestos.

A petición del Honorable Bobadilla, se le concedió licencia por un mes, para que pudiera ausentarse de esta Capital.

No ocurriendo otra cosa, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde; leyóse el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se dió la tercera lectura constitucional al proyecto de ley de Presupuestos y fué tomado en consideración.

Se leyó un oficio del Ministro de Hacienda, por el que remite una solicitud y varios documentos adjuntos, que dirigió a ese Ministerio el Señor Pedro Valverde, Gobernador

Político de esta Provincia, sobre la venta de cinco cuadrados de tierra; y como por ley no está autorizado el Gobierno a la venta de terrenos, lo somete a la consideración del Senado.

Abierta la discusión, el Honorable Bonilla opinó que el Senado no podía conocer de este asunto, en razón de que en Sesión legislativa extraordinaria, no debe ocuparse sino de los asuntos para que se le convoca.

El Honorable Bobadilla, en apoyo de la opinión anterior, dijo que, por el 16º inciso del Art. 26 de la Constitución, toca al Senado *decretar lo conveniente para la enajenación de los bienes nacionales* y que este decreto no podía darse en esta Sesión extraordinaria.

Se aplazó la discusión de este asunto para otro día y se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Presente la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Pedro Pablo de Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

Se abrió la discusión sobre las observaciones que hizo la Comisión de Presupuestos presentados por el Poder Ejecutivo, y fueron aprobadas: son las siguientes:

Incluir en las asignaciones eclesiásticas, las sumas votadas por el Senado:

Para la iglesia de Santiago	F.	3.000
Para la del Seibo	”	600
Para la de San Carlos	”	500

Asignar a los Tribunales de Azua y Seibo, los mismos sueldos que al de Santo Domingo, que hace 3.652 F. y 3.600 Ns.

Al Colegio Seminario, en virtud de una resolución tomada por el Senado en fecha 27 de Junio último, en lugar de 1.200 ns.- 600 fts.

Aprobadas las observaciones se sancionó la ley. (*)

Conforme a la orden del día, se continuó la discusión aplazada en la sesión anterior, sobre la solicitud que hace el Señor Pedro Valverde, Gobernador Político de la Capital, de que se autorizase la venta de cinco cuadrados de tierra que lindan con los de su propiedad y que tiene arrendados como pertenecientes al Gobierno.

El Honorable Abreu dijo: Sin que se tenga por inconsecuencia mía porque comprenda las razones en que se apoya el Honorable Bonilla, en razón de la pequeñez de la materia, objeto de la petición y de la urgencia que tiene el solicitante, soy de opinión que el Senado se ocupe de este asunto.

El Honorable Bonilla opinó, como en la sesión anterior, que el Senado no puede ocuparse en Sesión legislativa extraordinaria sino de los asuntos para que ha sido convocado.

Puesta la materia a votación, la mayoría acogió la opinión del Honorable Bonilla, y, no habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

(*) Véase Colección Leyes, 1860, doc. Nº 672.

SESION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, el Honorable Presidente declaró abierta la sesión. Se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

Trayendo la orden del día la renovación del bufete del Senado, se procedió a la elección de los funcionarios por votación secreta, y fueron electos a unanimidad de votos (menos uno):

Para Presidente el Honorable Manuel J. Delmonte; para Vice-Presidente el Honorable Francisco Javier Abreu y para Secretario el Honorable Manuel María Valverde;

Los que quedaron inmediatamente instalados.

Se abrió la discusión sobre las Cuentas generales de la República, y se trajo a la vista el informe de la Comisión del Senado.

El Honorable Bonilla se expresó así: La Cámara remitió las Cuentas con su informe; el Senado nombró una Comisión de su seno para que examinase y abriese concepto; y como en su informe nota varias irregularidades, no creo que, si éstas se comprueban y resultan esenciales, el Senado pueda prescindir de desaprobarlas.

El Honorable Delmonte propuso se interpelase al Ministro de Hacienda, para que diese explicaciones sobre una de las irregularidades que ha notado la Comisión, y que consiste en que una partida de 1.743. 220 pesos nacionales, que aparece en los Egresos de las Cuentas Generales del año expirado, no figura en la columna de Ingresos.

El Honorable Bonilla replicó que no creía necesario la interpelación, puesto que el Ministro había visto el informe de la Cámara de Cuentas y la opinión de la Comisión del Senado y no había hecho observaciones.

El Honorable Delmonte dijo que la interpelación que proponía no ligaba en nada al Senado; pero que al dar un paso de tanta transcendencia, como la aprobación o desaprobación de las Cuentas, debían oírse las explicaciones del Ministro sobre ese punto para proceder con pleno conocimiento de causa.

El Honorable Manuel María Valverde opinó como el Honorable Delmonte.

El Honorable Abreu dijo que creía inútil la interpelación, puesto que el Ministro debía haber visto los conceptos de la Cámara de Cuentas y del Senado; y opinaba se desaprobasen las Cuentas generales, fundándose en uno y otro informes ya citados.

El Honorable Delmonte dijo, que el Ministro no estaba *obligado* a aprobar o desaprobar, pues, según la Constitución, esto es facultativo; y que únicamente se le interpelaba para que diese explicaciones sobre un solo punto.

El Honorable Manuel María Valverde adujo iguales razones en favor de esta proposición, porque juzgaba muy apreciable la opinión del Ministro sobre este particular.

El Honorable Melitón Valverde se adhirió a esta opinión.

Recogidos los votos, se resolvió por mayoría interpelar al Ministro de Hacienda y oficiarle para que asistiese el Sábado 1º de Diciembre a la sesión de ese día, a fin de dar las apetecidas explicaciones.

Acordado esto, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 1º DE DICIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Presente la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión. Leyóse el acta de la anterior y quedó aprobada.

Se presentó el Ministro de Hacienda en virtud del oficio que le dirigió el Senado, invitándole a que asistiese a la sesión de este día, y el Honorable Presidente le interpeló de este modo: Señor: Al ocuparse del examen de las Cuentas, el Senado ha notado, en la sesión pasada, que el estado de egresos de las Cuentas generales del año 50 registra una partida que no se ve figurar en la columna de ingresos; irregularidad tanto más difícil de explicar, cuanto que dicha partida parece corresponder al año económico de 58 e ingerida indebidamente en las Cuentas de 59; y al resolver en materia de tanta trascendencia, el Senado desea tener explicaciones sobre este punto.

El Ministro contestó que esa partida había sido remitida en 58 por la Contaduría de Santiago a los Administradores del Seibo y del Cantón del Caimito, para el cambio de las papeletas emitidas por Báez, las que fueron incineradas en 59, después de la contrarrevolución del 27 de Julio, según consta de los procesos verbales levantados al efecto; y que como aquella Administración no había sido descargada de esa suma, figuraba como parte de la existencia de ella misma, que consta en el estado de ingresos.

El Senado tomó en consideración las aclaraciones que hizo el Ministro, y aplazó la decisión sobre esta materia para la próxima sesión, con lo cual se levantó la de este día.- *M. J. Delmonte.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.*

AGN



SESION DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión. Fué leída y aprobada el acta anterior.

Conforme a la orden del día, se continuó la discusión que se aplazó en la sesión anterior, sobre las Cuentas generales de la República.

El Honorable Abreu dijo que las explicaciones que había dado el Ministro acerca del punto sobre el cual se le interpeló, le parecían satisfactorias, pero no absolutamente convincentes; y que, estando en la imposibilidad de examinar los estados generales de las Cuentas, mientras no pudiese apreciar los detalles proponía se retardase la aprobación o desaprobación de ellas hasta que se cumpliese con el precepto constitucional que ordena la impresión de las Cuentas generales de la República.

El Honorable Bonilla dijo que era terminante y muy explícito el texto del inciso 3º del Art. 36 de la Constitución, que manda examinar y aprobar o reprobar el resultado del examen de la cuenta anual sobre la recaudación o inversión de los fondos públicos que debe presentarle la Cámara de Cuentas; y que, por lo tanto, no era de opinión se difiriese para otro tiempo su aprobación o desaprobación, habiendo remitido la Cámara los estados generales y convocándose el Senado extraordinariamente para este fin.

El Honorable Delmonte: Opino como el Honorable Abreu, porque al Senado no se le señala un término perentorio para dar su decisión sobre este punto; y porque la convocatoria no puede obligar al Senado a aprobar o desaprobar las Cuentas, toda vez que él encuentre una causa poderosa para diferir esta operación.

No estando agotadas las discusiones sobre esta proposición y siendo la hora avanzada, se aplazó para la sesión

próxima la continuación de los debates, lo mismo que el nombramiento de un Ministro para la Suprema Corte de Justicia; y se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Presente la mayoría del Senado Consultor, se declaró abierta la sesión; se dió lectura al acta de la anterior y quedó aprobada.

Trayendo la orden del día la continuación de los debates sobre la moción que hizo el Honorable Abreu en la sesión pasada, prosiguieron las discusiones, apoyando dicha proposición los Honorables Delmonte y M. M. Valverde.

El Honorable Bonilla, dijo que su opinión era se aprobasen o desaprobasen las Cuentas en esta misma sesión; y que antes de opinar en favor de la proposición que se dilucidaba, prefería se pidiesen a la Contaduría los estados parciales de las Cuentas de la República para examinar las de la Cámara en confrontación con aquéllos.

El Honorable Melitón Valverde apoyó esta opinión.

Puestos a votación estos dos conceptos, la mayoría acordó, acogiendo la proposición hecha por el Honorable Abreu, diferir la aprobación o desaprobación de las Cuentas generales de la República, hasta que, según lo impera la Constitución, fuesen éstas impresas y publicadas, a fin de poder examinar debidamente.

En seguida se procedió al nombramiento de un Ministro para la Suprema Corte de Justicia, y hecha la elección por escrutinio secreto, dió el resultado siguiente: El Señor Leonardo Delmonte obtuvo cuatro votos; el Señor Luis Durocher uno; quedando electo el Señor Leonardo Delmonte.

En nombre de la República Dominicana

EL SENADO CONSULTOR

Considerando: que están ya agotadas todas las materias que fueron objeto de la Convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo, ha venido en decretar y

DECRETA

Art. Unico: queda cerrada la presente Sesión legislativa extraordinaria del Senado Consultor.

Este Decreto será remitido al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales.

Sancionado dicho Decreto y la presente acta, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION CONSULTIVA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión; fué leída y aprobada el acta de la anterior.

Se dió lectura a un oficio del Ministro de lo Interior por el que, a nombre del Poder Ejecutivo somete al Senado la solicitud que hace el Ayuntamiento de Puerto de Plata por conducto del Gobernador de su Provincia, sobre la venta de varios solares de aquella Común para emprender la reparación del puente de entrada de la misma; remitiendo adjunto el presupuesto de gastos, y el del precio de dichos solares.

El Senado, después de haber deliberado, atendiendo a que este asunto es de exclusiva atribución del Poder Legislativo, según el Art. 26 del Pacto Fundamental, resolvió aplazar su decisión hasta la próxima Legislatura.

Agotada la materia, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Bobadilla.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

Se dió lectura a un oficio del Ministro de lo Interior, en que, a nombre del Poder Ejecutivo, propone al Senado se le autorice a decretar provisionalmente la apertura del puerto titulado *Puerto Viejo de Azua* para la exportación de ganados solamente, en los términos que se acordó para el puerto de Monte Cristi, a reserva de dar cuenta en el Mensaje que habrá de presentar al Cuerpo Legislativo en Febrero próximo.

El Honorable Abreu fué de opinión se autorizase al Poder Ejecutivo a declarar abierto el referido puerto para la exportación de ganados únicamente, en atención a las razones expuestas en el citado oficio: "de que no puede hacerse el embarque de las reses en el puerto habilitado de Azua, por ser necesario llevarlas a nado a una gran distancia, con perjuicio de los intereses del comercio, y que la Provincia de Azua, con una frontera abierta por la parte haitiana, no tiene medios de exportar la principal riqueza que tiene en dicha frontera, de lo que resulta, no sólo la baja de precio de ese renglón comercial en la dicha Provincia, sino que se estimula el tráfico desmoralizador con los enemigos".

El Honorable Bonilla dijo que en el inciso 24º del Art. 26 de la Constitución, se lee en las atribuciones del Senado: "decretar todo lo relativo al comercio extranjero, *puertos* de importación y exportación, etc., etc.," y el Art. 4º de la misma, dice que los Poderes del Estado son independientes, se ejercen separadamente, y sus encargados no pueden *delegarlos,* ni salir de los límites que les fija la Constitución; que por lo tanto este decreto debía darlo el Senado, porque no podía delegar esta atribución, y opinaba que tan sólo se

autorizase al Poder Ejecutivo a conceder el permiso que se le pedía en esta ocasión para el embarque de ganado, hasta que el Cuerpo Legislativo decretase la apertura de dicho puerto.

El Senado después de haber deliberado, conciliando la expresa prohibición que impone a los Poderes del Estado el Art. 4º de la Constitución, con las razones de conveniencia y alta política que militan en favor de la medida, resolvió autorizar al Poder Ejecutivo para acordar el permiso que solicita y cualesquiera otros que se presenten de igual naturaleza, para el precitado puerto, hasta la próxima Sesión legislativa en que se decrete su apertura constitucionalmente.

No habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Pedro P. de Bonilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.*

SESION DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión; se leyó el acta anterior y quedó aprobada.

Se trajo a la vista una consulta del Poder Ejecutivo sobre la que le hace el Ayuntamiento de esta Capital, acerca de la proposición del Señor I. M. Pérez, de poner a su costa una barca nueva en el paso de Haina, con la expresa condición de que se le conceda durante 4 años el producto de ella, comprometiéndose a dejarla en buen estado al fin de dicho término, a favor del Ayuntamiento; y después de una ligera discusión, se acordó contestar al Poder Ejecutivo que el Art. 35 de la ley sobre la materia faculta a los Ayuntamientos a administrar sus bienes y propiedades, pudiendo arrendarlos con las condiciones que juzguen más ventajosas,

previa la aprobación del Gobernador de la Provincia; y en cuanto a otra consulta que hace el Ayuntamiento, sobre si puede prohibir el paso de las carretas por la barca de Haina, opinó el Senado negativamente, en atención a los grandes perjuicios que esta medida causaría al comercio y al público en general.

Agotada la materia, y no habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- M. M. Valverde.- Franco. X. Abreu.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1860

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión; leyóse el acta de la anterior y quedó aprobada.

A continuación se dió lectura a un oficio del Ministro del Interior que dice así: "Señor Presidente: El Señor Ignacio González, uno de los expulsos del país, por los sucesos políticos ocurridos en Agosto de 1859, había solicitado un salvoconducto, y como quiera que el mismo individuo había de antemano puesto en duda la nacionalidad a que pertenecía, se le respondió que antes de resolver sobre su solicitud, era preciso que hiciera su sumisión al Gobierno de la República Dominicana. Desgraciadamente la persona encargada por González de las precitadas diligencias, le hizo entender que bastaba que llenase aquel requisito para que pudiese emprender su viaje. González hizo la referida sumisión que se recibió por el paquete último, y antes de que se hubiese resuelto sobre la concesión de la gracia que solicitaba, se ha presentado en el puerto.

El Gobierno no había vacilado en el partido que había de tomar, si otra circunstancia no viniera a complicar la situación de González. La salud de éste se halla tan deterio-

rada que su vida peligra, y como el Poder Ejecutivo no había encontrado un motivo fundado para negarle la gracia que solicitaba, tampoco ha creído deber tomar la severa medida de exponer su vida con una providencia severa, y queriendo conciliar el decoro del Gobierno con lo que exige la humanidad, ordenó desde luego que el referido González pudiera bajar a tierra, manteniéndose en arresto, mientras el Poder Ejecutivo y el Senado Consultor disponían de acuerdo sobre su ulterior destino. En esta situación, cree el Gobierno que convendría dar el salvoconducto al Señor González, y sólo espera para hacerlo el acuerdo del Senado, etc., etc.

Este Honorable Cuerpo, después de haber deliberado tomando en consideración las razones expuestas por el Poder Ejecutivo, resolvió unánimemente prestar su acuerdo para conceder al Señor González la gracia que solicitaba.

Agotada la materia, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESIONES DEL

SENADO CONSULTOR

1861

AGN



SESION DEL 16 DE ENERO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

Se dió lectura a un oficio del Ministro Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores, por el que remite al Senado los comprobantes de una reclamación que ha hecho a ese Ministerio el Cónsul de S. M. Británica y recomendando el despacho de otra que dirigió a este Honorable Cuerpo la casa de los Señores Bothe, Chesman & Cia., de Puerto de Plata.

Se nombró una Comisión, compuesta de los Honorables Bobadilla y Abreu, para que abriese concepto sobre este asunto, y no habiendo otra materia de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 24 DE ENERO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Presente la mayoría del Senado Consultor, el Presidente declaró abierta la sesión: se leyó el acta de la anterior y fué aprobada.

Trayendo la orden del día la dilucidación de la solicitud de los Señores Bothe, Chesman & Cia., recomendada por el Ministro de Relaciones Exteriores, la Comisión del Senado encargada de abrir concepto sobre el particular, presentó y leyó su informe en los términos siguientes:

Honorables Senadores: La Comisión nombrada para abrir concepto sobre el oficio que con fecha 14 de los corrientes, ha pasado el Ministro encargado de la Cartera de las Relaciones Exteriores, recomendando una solicitud de los Señores Bothe, Chesman & Cía., negociantes de Puerto de Plata; pidiendo el abono de la suma de $1,163.87 fuertes por una confiscación que tuvo lugar, en virtud de una sentencia de la Alcaldía de aquella Ciudad que después fué revocada por otra del Tribunal de Primera Instancia de la Ciudad de Santiago, habiendo examinado atentamente las piezas que se le han remitido, y, después de las investigaciones necesarias, encuentra que, en el Senado no está pendiente la tal solicitud, porque aunque es verdad que con fecha de 1º de Octubre del año pasado le fué dirigida, los interesados la retiraron después, como lo corrobora la reproducción de la misma pieza con documentos que la apoyan, que se encontraban en su poder; y que hoy se someten de nuevo en el citado oficio.

Aunque el Senado quisiera en estos momentos tomar en consideración la expresada solicitud, no puede hacerlo a juicio de su Comisión: 1º porque para votar una suma o incluirla en la Ley de Presupuestos debería estar en Sesión legislativa; 2º porque para ello sería necesario que el negocio pasase por su tramitación correspondiente.

Tratándose de la ejecución de una sentencia, deben llenarse las formas protectoras de la ley, y cuando el Ministro de Justicia encuentre justo el reclamo, antes de autorizar el pago debe pedir el consentimiento del Senado, según el Art. 55 de la Constitución.

Ahora, cree la Comisión que el Senado encargado de decretar lo conveniente para la conservación de los bienes nacionales y de su buena y legal administración, no puede menos en fuerza de su deber, de observar que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia parece contraria a la ley y que los intereses fiscales, lejos de haber sido debidamente defendidos, se han defraudado; lo que debe llamar la atención del Ministro del ramo, para obrar según la Constitución y las leyes, y hacer que se interpon-

gan todos los recursos necesarios, y que si se ejecutare la sentencia, porque se estime que haya adquirido el carácter de la cosa juzgada, se haga efectiva la responsabilidad sobre quien sea de derecho.

En consecuencia la Comisión es de opinión, que se devuelvan los referidos documentos con el oficio correspondiente al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines de derecho. — Bobadilla. — Abreu.

Concluída la lectura de este informe, se declaró abierta la discusión.

El Honorable Presidente: El oficio del Ministro no está a nombre del Poder Ejecutivo; según la Constitución, los Ministros tienen el derecho de ser oídos, pero es como órganos del Poder Ejecutivo; en dicho oficio se habla de un reclamo que se dice estar pendiente en el Senado; observaré, pues, que al Senado no se le dirigen reclamos, sino peticiones, según el 8º de la Constitución, y aún así, éste es un derecho que no está concedido a los extranjeros, según lo ha establecido ya el Senado en otras circunstancias. La referida reclamación se apoya en una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Santiago; para obtener este permiso, debe venir la solicitud por la vía constitucional, que es el Ministro del ramo: así no hay petición, ni puede hacerse reclamo; por todos estos motivos, opino como la Comisión, que se remitan por conducto de esta Secretaría, al Ministro de las Relaciones Exteriores las piezas referentes a esta solicitud, acompañado también del informe que ha dado la Comisión del Senado.

El Honorable Bonilla hizo dar lectura a la nota oficial, y concluída aquella, dijo: El Ministro no nos hace una consulta, sino que recomienda un reclamo: la Comisión ha opinado; no existe, pues, ninguna solicitud pendiente, y la que se nos remite hoy es extemporánea; opino, pues, que se diga, que estamos en Sesión consultiva; que el Senado no puede ocuparse de la solicitud que se le dirige, 1º por no estar en Sesión legislativa, y 2º porque no viene por el conducto constitucional, ni a nombre del Poder Ejecutivo.

Todos los Senadores, excepto el Honorable Bonilla, opinaron como el Honorable Delmonte, y se resolvió por mayoría que la Secretaría del Senado remitiese al Ministro de Relaciones Exteriores las piezas referentes al reclamo de los Señores Bothe, Chesman y Cia., acompañándole copia del informe de la Comisión.

Agotada la materia, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- M. Valverde.*

SESION DEL 31 DE ENERO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Rafael Pérez, Manuel María Valverde, Pedro Pablo de Bonilla y Melitón Valverde, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

El Honorable Presidente hizo presente al Senado que el Honorable Manuel María Valverde ejercía interinamente las funciones de Senador, por la renuncia que hizo de este cargo el Señor Dubocq, y que el Colegio Electoral de la Provincia de Santiago que ha debido reunirse en Diciembre último, no ha remitido aún al Senado el acta por la cual se nombrara otro Senador en reemplazo del Honorable Valverde.

Se declaró abierta la discusión sobre este particular, y el Honorable Manuel María Valverde se retiró de la sesión. El Senado después de haber deliberado resolvió, que por la Secretaría se oficiase al Ministro de lo Interior para que se sirviese dar informes a este Honorable Cuerpo acerca de las operaciones del Colegio Electoral de la Provincia de Santiago.

No habiendo otra cosa de que tratar se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 12 DE FEBRERO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde, Rafael Pérez y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

Se abrió la discusión sobre la materia de que trata el acta precedente de fecha 31 de Enero, y no habiéndose recibido los informes pedidos al Ministro de lo Interior, acerca de las operaciones del Colegio Electoral de Santiago, un Senador hizo presente al Senado que aquella Corporación no se había reunido, según le constaba por noticias particulares; y todos los Honorables opinaron por el nombramiento de un Senador, hasta que el Colegio Electoral proceda a la elección del que deba ejercer este cargo en propiedad.

En consecuencia, se hizo la votación secretamente y resultó de ella reelecto, a unanimidad, el Honorable Manuel María Valverde, para llenar las funciones de Senador hasta su reemplazo; según lo dispone la Constitución del Estado. En seguida, se presentó y prestó juramento el nuevo Senador.

Hecho esto se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla*

SESION DEL 27 DE FEBRERO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

En la Ciudad de Santo Domingo, el día veinte y siete de Febrero de mil ochocientos sesenta y uno y 18º de la Patria, se reunió el Senado Consultor para celebrar la solemne sesión que en el Art. 20 prescribe nuestro Pacto Fundamental, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Francisco Javier Abreu, Tomás Bobadilla, Pedro Pablo de Bonilla, Melitón Valverde y Manuel María Valverde.

Sancionada que fué el acta de la sesión anterior, el Honorable Presidente (y Vice-Presidente) envió una Comisión al Poder Ejecutivo invitándole a pasar a la sala de sus sesiones.

Pocos momentos después, se presentaron los Señores Presidente y Vice-Presidente de la República y los Secretarios de Estado, acompañados de los cuerpos diplomáticos y eclesiásticos y de otros altos funcionarios.

Puestos todos de pie, el Presidente del Senado, en alta voz dijo: *En nombre de la Nación y virtud del Art. 20 de la Constitución del Estado, la 6ª Sesión legislativa del Senado Consultor está abierta.*

El Presidente de la República presentó entonces al Senado las Memorias de sus respectivos Ministros y el Mensaje constitucional que dice así: (*)

El Honorable Presidente del Senado contestó en los términos siguientes: Señor Presidente: Grande es la satisfacción que experimenta el Senado Consultor, que tengo la honra de presidir, al ver en su seno al primer Magistrado de la República sometiendo al juicio de la Representación Nacional todos los actos de su Administración, en señal de acatamiento al incontestable principio de la Soberanía del

(*) Véase Apéndice, doc. Nº 17.

Pueblo, consagrado en su Pacto Fundamental, y que constituye la más robusta fuerza del Poder en los países republicanos.

El Mensaje que acabáis de presentar y cuyo contexto revela vuestro infatigable anhelo por el bien de nuestros compatriotas, es, Señor, bajo todos aspectos, digno de la mayor atención, y los particulares que encierra habrán de ser objeto de nuestras profundas meditaciones. En su oportunidad saldrán a luz las medidas legislativas a que dieren lugar. Mientras tanto, contad, Señor, con todos nuestros esfuerzos para desempeñar dignamente el honroso mandato que nos confirieran los pueblos, así como cuenta el Senado con la franca cooperación del Poder Ejecutivo, tan necesaria para la marcha regular de los negocios públicos.

Diez y siete años ha, Señor Presidente, que enarbolamos el glorioso estandarte de la Separación, y en este corto período, la débil nave de nuestro naciente Estado, ha surcado fatigosa y a veces sin rumbo cierto, el borrascoso mar de la política, sin que ni los repetidos embates de sus tenaces enemigos, ni la torpeza y malignidad de algunos hijos espúreos de la Patria, a cuyas indignas manos estuviera un tiempo confiada su dirección, hayan sido bastante a hacerla naufragar; sin duda porque el cielo vela por su conservación; sin duda porque el Pueblo Dominicano está resuelto a defender a todo trance sus preciosos derechos, tan caramente adquiridos; sin duda, en fin, porque, un gran número de distinguidos ciudadanos diseminados en todos los puntos de la República, y a cuyo frente os encontráis cada vez que las circunstancias lo exigen, han tomado sobre sus hombros la consolidación de la santa obra inaugurada el 27 de Febrero de 1844, cuyo aniversario celebramos hoy.

Mucho se ha hecho, a la verdad, en el transcurso de esos 17 años; empero mucho nos falta todavía para llegar al término deseado, pues quedan enemigos que combatir, dificultades que vencer, intrigas que desbaratar. Sin embargo, nada debe arredrarnos, Señor; existen aún los valien-

tes que en cien combates abatieron el orgullo a nuestros antiguos dominadores; aún arde en nuestros pechos el santo amor de la Patria, y la historia demuestra cuán vano es pretender avasallar a un pueblo que quiere ser libre. La voluntad del que nos cabe el honor de representar, es en ese punto bien conocida, Señor, a la par que la ciega confianza con que, presuroso y denodado, sigue por doquiera la voz del ilustre Caudillo de su elección.

Continuad, pues, Señor, continuad trabajando en la fusión de los partidos que tan fatalmente nos desunieran, hasta hacerlos desaparecer para siempre de nuestro suelo; manténganse en perfecta armonía los grandes Poderes del Estado, a fin de ayudarse mútuamente a labrar la felicidad común; haya unión entre todos los Dominicanos y, auxiliados por la Divina Providencia, cogeremos, quizás no muy dilatado, el fruto de tantos sacrificios y legaremos a nuestros hijos, gloria, Patria y libertad.

¡Viva la República! ¡Viva la Independencia! ¡Vivan el Presidente y Vice-Presidente de la República!

Terminado este acto, se retiró el Poder Ejecutivo acompañado de una Comisión del Senado, y en seguida se procedió a la renovación del bufete, quedando reelecto Presidente a mayoría de votos el Honorable Manuel Joaquín Delmonte; y electos Vice-Presidente, el Honorable Tomás Bobadilla, y Secretario el Honorable Pedro Pablo de Bonilla.

Agotada la orden del día se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 28 DE FEBRERO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, con presencia de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Manuel María Valverde, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

Trayendo la orden del día el nombramiento de las Comisiones para examinar las Memorias de los Secretarios de Estado, el Honorable Presidente nombró las siguientes:

Para la Cartera de Justicia e Instrucción Pública, al Honorable Abreu.

Para la de lo Interior y Policía, al Honorable Melitón Valverde.

Para la de Hacienda, al Honorable Tomás Bobadilla.

Para la de Guerra y Marina, al Honorable Rafael Pérez.

Y para la de Relaciones Exteriores, al Honorable Manuel María Valverde.

Se nombró también la Comisión de peticiones y fué compuesta de los Honorables Pérez y Bonilla, con lo cual se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- M. Valverde.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 4 DE MARZO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Melitón Valverde, Manuel

María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

Se dió lectura a dos oficios del Ministro de Hacienda, por los que remite varias piezas en apoyo de un reclamo de los Señores Cambiaso y Ventura, y otro de los mismos y del Señor José Mateo Perdomo.

Después de un ligero debate, se acordó pasasen a la Comisión de peticiones.

Seguidamente se leyeron varias peticiones pendientes desde la última Sesión legislativa extraordinaria, cuyo examen fué aplazado para la presente Legislatura.

La primera es una representación del Señor Félix Mercenario, ciudadano dominicano, avecindado en esta Ciudad Capital, que expone haber sido una de las principales cabezas de la gloriosa Separación dominicana, y manifiesta en el contexto de su escrito, (apoyado con numerosas auténticas certificaciones), los sacrificios que hizo, las obligaciones con que empeñó su crédito, y el éxito de la Revolución de Febrero, debido en parte a los servicios que prestó en aquella difícil cuanto apurada situación, dejando así patentizados rasgos de abnegación y de patriotismo poco común. Enumera, además, otros servicios que prestó después, todos los que han ocasionado la pérdida de sus bienes de fortuna, hallándose hoy en la ancianidad, sin recursos, y privado de las fuerzas suficientes para procurárselos; por lo que pide a la Representación Nacional tome en consideración su situación deplorable y la remedie del modo que lo estime conveniente.

La segunda solicitud es del Señor Pedro Valverde y Lara, Gobernador Político de la Provincia Capital, al Poder Ejecutivo remitida al Senado por el Ministro del ramo, en que pide se le vendan cinco cuadrados de tierra, que lindan con los terrenos donde está estableciendo una hacienda, en las inmediaciones del pueblo de San Carlos.

La tercera es del Señor Juan Nepomuceno Tejera, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, inserta en el acta

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

del día. Todas estas solicitudes pasaron igualmente por resolución del Senado, a la Comisión de peticiones.

Con respecto a la solicitud, también pendiente, del Ayuntamiento de Puerto Plata, remitida al Senado por conducto del Ministro de lo Interior, referente a que se le autorice para vender varios solares comunales de aquella Ciudad, con el objeto de reparar algunos puentes de la misma, se nombró en Comisión al Honorable Bobadilla para que abriese concepto; y el Honorable Melitón Valverde fué encargado de informar sobre la cuestión que sostienen las Provincias de Santiago y La Vega, relativamente a cuál de las dos pertenece la Sección de San José. Terminados los trabajos del día, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 11 DE MARZO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunidos todos los miembros del Senado Consultor, Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, Manuel María Valverde, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión.

Sancionada que fué el acta de la anterior, se dió lectura a un oficio del Presidente de la Cámara de Cuentas, exponiendo siente sobremanera el que hasta la fecha no haya recibido el Senado el Estado General de las Cuentas de 1860, acompañados del informe correspondiente, a causa del retardo de las Administraciones de Puerto Plata y Santiago en la remisión de las cuentas del 4º trimestre, a la vez que la Contaduría General no ha remitido aún el estado de las operaciones de su Caja durante el año vencido; sobre lo cual,

dice, ofició al Ministro de Hacienda y al Contador, porque de éste dependen la realización completa de los trabajos de la Cámara; lo que hace saber al Senado, para que no se atribuya a la Cámara el no haber cumplido con la exactitud que se proponía en el desempeño de sus obligaciones. El Senado quedó enterado.

En seguida, el Honorable Bonilla, miembro de la Comisión de peticiones, dió lectura a los conceptos siguientes:

Honorables Señores: La Comisión de peticiones ha visto y examinado detenidamente, las que con fechas de 16 y 18 del mes de Julio del año pasado dirigieron al Poder Ejecutivo con los documentos que la acompañan los Señores José Mateo Perdomo y la Sociedad Ventura y Cambiaso de este comercio, reclamando el primero el valor de la goleta nacional "Separación" de que era armador y que se perdió en el mes de Julio de 1857 en el puerto de Barahona, donde fué detenida por la autoridad local en cumplimiento de la orden del Gobierno de la época y la que permaneció anclada en dicho puerto hasta que se sumergió. Y los segundos pidiendo se les abone por el Tesoro público la suma de 1.805 pesos fuertes, valor del cargamento de dicha goleta. En cuya virtud, la Comisión opina que, versando estas reclamaciones sobre materia puramente contenciosa y cuyo conocimiento es de las atribuciones de los Tribunales de justicia, a quienes compete por las leyes conocer y decidir lo que en derecho corresponda, el Senado debe declararse como incompetente, pues hacer lo contrario sería invadir las atribuciones del Poder Judicial, con manifiesta infracción del Art. 4º de la Constitución. — R. Pérez. — Bonilla.

El Honorable Bobadilla presentó y leyó su informe redactado en estos términos:

Honorables Senadores: Nombrado en Comisión para abrir concepto sobre la solicitud del Ayuntamiento de Puerto Plata, pidiendo se le autorice a vender varios solares pertenecientes a la Común para con su producido construir una Casa Consistorial y reparar los puentes que facilitan las comunicaciones de la población, después de haber examinado los documentos que se encuentran en el expediente de la materia, aparece, que, por acuerdo del

Senado de fecha 17 de Abril del año próximo pasado, resolvió el Senado que aquel Ayuntamiento hiciese su solicitud por la vía ordinaria, y acompañado de los documentos necesarios, como son: el presupuesto de gastos para dichas obras, el avalúo de los solares y el apoyo del Gobernador de la Provincia. Hasta ahora sólo se ha sometido en comunicación un presupuesto de gastos para el puente que se pretende construir de mampostería, ascendente a la suma de 1.852 pesos fuertes y por la nota oficial No. 39 fecha 22 de Setiembre del mismo año pasado se dice que sólo se ofrece por la compra de los dichos solares la suma de $F1.000, de manera que faltarían siempre 852 pesos, para que pudiese realizarse la obra, sin que aparezca la tasación que debió hacerse por expertos de los referidos solares, y como lo impera la ley cuando se trata de la enajenación de bienes de menores, a los cuales se asimilan en sus efectos y privilegios los bienes que pertenecen al dominio público. Por consiguiente, no se ha llenado cumplidamente la resolución del Senado, ni éste puede autorizar la enajenación sino en virtud de causa de utilidad y necesidad conocida y con las formalidades y requisitos que prescriben las leyes, porque por imperante que sea la necesidad y la utilidad, no pueden dejar de llenarse las formas establecidas. Hay también que observar que si hay un déficit que llenar de 852 pesos fuertes para solo el puente, parece inútil el ir a sacrificar las propiedades de aquella Común sin tener la seguridad de llevar a cabo las obras proyectadas; y para allanar dificultades, parece indispensable tener a la vista el estado de los fondos de aquel Ayuntamiento, sus ingresos y rentas para venir en conocimiento de si se puede o no emprender las obras, con la certeza material de que tendrán un feliz resultado, sin malversación alguna de las propiedades comunales que forman parte del dominio público y que sólo se pueden y deben enajenar en los casos y de la manera y forma que prescriben el derecho político y leyes civiles que nos rigen. — Santo Domingo, Marzo 7 de 1861.

Siguiendo la práctica establecida, el Senado aplazó para la sesión próxima la discusión de estas materias, y no habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Bobadilla.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 13 DE MARZO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunidos los miembros del Senado, Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, Manuel María Valverde, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión; se leyó el acta de la anterior y quedó aprobada.

La Comisión de peticiones presentó los siguientes informes, que leyó el Honorable Bonilla:

La Comisión de peticiones, en vista de la que en fecha de 20 de Octubre del año pasado dirigió al Poder Ejecutivo el Señor Pedro Valverde, Gobernador Político de esta Provincia, pidiendo la venta de cinco cuadrados de tierra correspondientes al Estado y que lindan con terrenos que posee en las inmediaciones de San Carlos y en que está estableciendo una hacienda a costa de grandes sacrificios; cuya solicitud ha sido remitida por el Señor Ministro Secretario de Estado del Despacho de lo Interior al Senado Consultor para que determine lo que estime por conveniente, pues por más que desee el Gobierno acceder a dicha solicitud le está prohibido por la Ley la venta de terrenos; en cuyo concepto la Comisión opina que, siendo de las atribuciones del Senado Consultor la autorización para la referida venta, decrete se vendan al Señor Pedro Valverde los cinco cuadrados de tierra, previo el competente justiprecio. Santo Domingo, Marzo 13 de 1861. — Bonilla. — Pérez.

La Comisión de peticiones ha visto y examinado la que, con fecha 7 de Agosto del año pasado, dirigió al Senado Consultor el Señor Félix Mercenario, acompañada de numerosos documentos que acreditan los acrisolados servicios personales y pecuniarios prestados por él a la causa de nuestra gloriosa Independencia; como también el estado de indigencia en que, a consecuencia de la revolución, se halla reducido en una edad más que septuagenaria; y bien consultado, la Comisión opina que la Representación Nacional cumplirá con un deber de justicia y gratitud apreciando los servicios patrióticos del

Señor Félix Mercenario, votando en su favor una suma que baste a remediar su angustiada situación, suma que en sentir de la Comisión no deberá ser inferior a la de dos mil pesos fuertes. — Santo Domingo, Marzo 13 de 1861. — Bonilla. — Rafael Pérez.

Se aplazó la discusión de estas peticiones, y en seguida se pasó a la de los informes presentados anteriormente. En primer lugar se dió lectura al reclamo del Señor José Mateo Perdomo, armador de la goleta nacional *Separación*, detenida en Barahona por las autoridades de aquel lugar, cuando la revolución de 7 de Julio, permaneciendo allí anclada hasta que se sumergió enteramente, lo que comprueban varios documentos traídos en apoyo. Por lo que, y habiendo sido secuestrada esta propiedad por orden del Gobierno de la Revolución, ocurre al Poder Ejecutivo para que se digne ordenar el pago del valor de dicho buque, que estima en cuatro mil pesos fuertes.

Acto continuo se leyó la solicitud de los Señores Cambiaso y Ventura, comerciantes extranjeros, de este domicilio, concerniente al cargamento que se encontraba a bordo de la mencionada goleta, ascendiendo a mil ochocientos cinco pesos fuertes la cuenta presentada, cuya suma piden le sea pagada por ser así de justicia.

Leído el informe de la Comisión que opina: que versando estas reclamaciones sobre materia puramente contenciosa, cuyo conocimiento es de las atribuciones de los Tribunales de Justicia, etc., el Senado debe declararse incompetente, porque hacer lo contrario sería invadir las atribuciones del Poder Judicial, con manifiesta infracción del Art. 4º de la Constitución.

El Honorable Bobadilla dijo: Desearía saber cuáles son los fundamentos en que la Comisión se apoya, para considerar contencioso el asunto de que se trata.

El Honorable Bonilla: Lo creo contencioso, por la naturaleza misma del asunto, pues corresponde a los Tribunales de Justicia la indagación de la verdad en tales casos,

el experticio de los objetos que se reclaman y el justo precio de su valor real.

El Honorable Bobadilla: Está consagrado como principio absoluto en la Constitución que nadie puede ser despojado de su propiedad, por ser ésta sagrada e inviolable, sino por vía de apremio o pena legal, etc. Ha habido fuerza mayor, porque los agentes del Gobierno ordenaron la detención del buque y el Capitán debió obedecer. El Gobierno dió esta orden porque así convenía a los intereses de la comunidad, luego, él es responsable, pero es muy fuerte e injusto también que el Gobierno se sirva de la propiedad de un individuo y que después le responda remitiéndole a los Tribunales. El Estado debe pagar, puesto que el Senado aprobó los actos de aquel Gobierno y el reclamo es legítimo. La cuestión quedaría reducida a si las maderas valían tal ó cual suma y en cuanto al experticio que no está en forma legal, todo esto pertenece a la Administración.

El Honorable Pérez: Al opinar de aquel modo, como miembro de la Comisión, es porque tuve a la vista que la base fundamental del reclamo estriba en la orden del Comandante Bobadilla y que los precios son excesivos.

El Honorable Abreu: En contestación a lo que acaba de decir el Honorable Pérez y para satisfacer a la Comisión que sólo tuvo a la vista el requerimiento de Bobadilla, diré que es preciso saber que él es la persona a quien fué dirigido el referido buque, y el Capitán debió obedecer, porque Bobadilla representaba al armador de la goleta, pero en cuanto a la retención del buque es necesario advertir que más tarde emanó de una orden del representante del Gobierno de Santiago en estas Provincias; así es que el Honorable Pérez, fundado tan sólo en el primer documento, tuvo razón para opinar como lo hizo, no teniendo en cuenta la orden del General Juan Luis Franco Bidó.

El mismo Honorable Pérez pidió se diese lectura de la referida orden, y, habiéndose verificado, quedó satisfecho de su contenido.

El Honorable Bonilla: En la solicitud del que se dice armador de la goleta, no aparece documento que justifique fué mandada al Petit Trou, ni aparece Bobadilla como encargado; todas estas dificultades me hicieron opinar porque se remitiese el asunto a los Tribunales.

El Honorable Abreu: Pocos son los que ignoran que existía un contrato referente a ciertos cortes de madera entre los Señores Bobadilla, Cambiaso y Ventura, y que aquél era su agente en ellos; además, no veo la necesidad del documento que acredite que a él se dirigió el buque; pues sólo es del caso saber que se ordenó su retención, y que en este estado se perdió.

El Honorable Manuel Ma. Valverde: Opino, como la Comisión, porque se remita el conocimiento de este negocio a los Tribunales, pues la administración de la Justicia es atributiva y exclusiva de éstos; así en las materias ordinarias como en las que corresponden a lo contencioso administrativo.

El Senado legisla, evacúa consultas, recibe peticiones; pero no administra justicia, no evacúa citas, no oye testigos, no examina documentos ni da sentencias; y todas éstas cosas debería hacer el Senado, si en la especie presente desecha el dictamen de su Comisión, que se funda en los preceptos de nuestro Pacto Fundamental, en la práctica seguida hasta aquí y en los principios del Derecho Administrativo. Yo creo que la opinión que en contra sustenta el Honorable Bobadilla, no sólo no se apoya en principios, sino que despoja a la parte privada de las ventajas de un juicio ordinario y de su apelación.

El Honorable Pérez: No debemos averiguar cómo ni por qué el buque tocó allí; lo que debe hacer fuerza y que la ejerce verdaderamente en mi sentir, es la detención ordenada por la autoridad.

El Honorable Bobadilla: Ya se ha visto la resolución de la Junta Popular de la Ciudad de Azua que fué entonces el primer Gobierno de aquella Provincia. Además,

por oficio del Teniente Coronel Antonio Mota, que era Comandante de Barahona, resulta que a los dueños de las maderas no se les permitió sacarlas del buque, y ni aún reconocer el estado en que se encontraban, porque decía él que era necesario una resolución de la autoridad. En principio yo creo que el Gobierno debe indemnizarles; pues creo justo el reclamo, aunque no el experticio, y a la Administración de Hacienda toca el hacer la liquidación, o pedir el experticio o justiprecio del buque y las maderas, sin necesidad de una contienda judicial que sería muy especial para este sólo caso, cuando el Gobierno ha pagado todas las deudas contraídas en la revolución, sin necesidad de haber ido a los Tribunales.

El Honorable Presidente: Abundo en la opinión del Honorable Bobadilla, pues aunque es cierto que el asunto es contencioso administrativo, no existen aquí, como en Francia, Tribunales especiales encargados de decidir de esas cuestiones, y no parece justo remitirlos a los Tribunales ordinarios, que al reconocer el derecho de los reclamantes recargará al Erario con las costas procesales.

Discutida largamente la materia, el Presidente puso a votación si se adopta la opinión de la Comisión o si debe reconocerse el derecho que tienen los reclamantes para ser indemnizados, y de si se autoriza al Gobierno para liquidar de común acuerdo o bien por los trámites legales. La mayoría fué de esta última opinión estando por la de la Comisión los Honorables Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde.

Se pasó luego a la discusión de la solicitud del Ayuntamiento de Puerto Plata, sobre la venta de los solares comunales de aquella Ciudad, para reedificar los puentes de la misma, y leído el informe de la Comisión, inserto en el acta anterior, fué acogido a unanimidad.

Se abrió la discusión sobre la solicitud del Señor Juan Nepomuceno Tejera, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y habiéndose dado lectura a las observaciones que hizo

el Poder Ejecutivo a la referida nota del Senado sobre este particular, el Honorable Pérez, miembro de la Comisión de peticiones, dijo que no había tenido a la vista estas observaciones al formular la opinión de su informe; por lo que se acordó remitir a la Comisión la referida solicitud para que abriese nuevo concepto.

Agotada la orden del día, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

SESION DEL 15 DE MARZO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor, se abrió la sesión, presentes los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, Manuel María Valverde y Pedro Pablo de Bonilla. Se leyó el acta de la sesión anterior y fué aprobada.

Se dió lectura a un oficio del Ministro de Hacienda por el que remite los documentos referentes a un reclamo del Señor A. Coén; y el Senado resolvió se pasasen a la Comisión de peticiones para que ésta abriese concepto.

Por otro oficio del Ministro del Interior, se remitió al Senado uno del Ayuntamiento de Puerto de Plata, pidiendo se le autorice a vender varios solares que indica en dicho escrito.

El Senado, en atención que esta solicitud está implícitamente comprendida en la resolución tomada en la sesión del 13 de los corrientes, pasó a la orden del día.

Se dió lectura a las peticiones del Señor Pedro Valverde y del Señor Félix Mercenario y a los informes que sobre ellas dió la Comisión de peticiones, insertos en el acta anterior, y el Senado, después de haber deliberado, acogió su

dictamen en ambos casos, acordando lo siguiente:

Autorizar al Poder Ejecutivo para vender al Señor Pedro Valverde, previo el competente justiprecio, los cinco cuadrados de tierra a que se refiere, pertenecientes al Estado y que lindan con los de su propiedad en las inmediaciones del pueblo de San Carlos, en donde está estableciendo una hacienda.

Votar a favor del Señor Félix Mercenario la suma de F. 2.000 fuertes, para satisfacer en cierto modo esta sagrada deuda de la Patria.

El Honorable Bonilla leyó las siguientes opiniones acerca de las solicitudes del Señor Juan Nepomuceno Tejera y de los Señores Cambiaso & Ventura:

El infrascrito, miembro de la Comisión de peticiones, no estando de acuerdo en la que ésta debiera emitir sobre la que ha dirigido al Senado el Señor Juan Nepomuceno Tejera, Presidente de la Suprema Corte de Justicia; expresa la suya en los términos siguientes: Que al decretar el Senado en la Legislatura pasada de 1859, que se pagase por el Tesoro público al dicho Señor Tejera, las sumas reclamadas por él y que se le adeudaban tanto por los gastos que suplió en la misión de Las Matas de que fué encargado por el Gobierno, como por los sobresueldos que se habían devengado desde el 1º de Julio de 1857 hasta la misma fecha de 1858, tuvo a la vista las órdenes y disposiciones gubernativas que le daban derecho al Señor Tejera y, además, por haber sido mantenida la Corte con su asiento en esta Capital, por el Gobierno del Cibao; por consiguiente, el infrascrito es de opinión que se mantenga el acuerdo tomado por el Senado en la Legislatura de 1859. — Santo Domingo, 15 de Marzo 1861. — (Firmado). Bonilla.

Honorables Senadores: No estando acorde los miembros de la Comisión de peticiones en la dirigida con fecha 18 de Abril del año pasado al Poder Ejecutivo por los Señores Cambiaso y Ventura de este comercio, reclamando la suma de 347 pesos 50 cts. fuertes, valor de siete piezas de madera de caoba de su propiedad, que la autoridad de Samaná cogió para hacer cureñas en Agosto de 1857, y cuya solicitud ha sido remitida al Senado por el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, a nombre del

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Ejecutivo, para que determine lo que estime conveniente; opino del modo siguiente: que dicho reclamo sobre naturaleza contenciosa administrativa debe enviarse a los Tribunales de Justicia, a quienes compete conforme a las leyes estatuir lo que corresponda en derecho y sea de justicia. — Santo Domingo, Marzo 15 de 1861. — Bonilla.

El Honorable Rafael Pérez, miembro de la Comisión de peticiones, ofreció dar sus informes sobre estos mismos particulares en la sesión del Lunes próximo.

Acto continuo, el Honorable Pérez presentó el siguiente informe: La Comisión encargada de informar sobre la Memoria de Guerra y Marina, después de haberla visto detenidamente opina: que dicha Memoria no está sujeta a ulteriores disposiciones, no refiriéndose ella a ningún particular que los requiera.

Se aplazó la discusión de esta materia.

Y no habiendo otra cosa de que tratar, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- M. M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.- Bobadilla.- M. Valverde.*

SESION ESPECIAL DEL 16 DE MARZO DE 1861

Presidencia del Honorable Manuel Joaquín Delmonte

Reunida la mayoría del Senado Consultor compuesta de los Honorables Manuel Joaquín Delmonte, Tomás Bobadilla, Francisco Javier Abreu, Rafael Pérez, Manuel María Valverde, Melitón Valverde y Pedro Pablo de Bonilla, se abrió la sesión.

Aprobada y sancionada el acta de la anterior, se dió lectura al siguiente oficio del Poder Ejecutivo:

Señor Presidente: El Poder Ejecutivo me encarga que en su nombre, y especialmente en el de S. E. el General Libertador, recomiende a ese Honorable Cuerpo la conveniencia que, a su entender, habría de aliviar la

suerte de los sexagenarios servidores de la República, el Coronel Toribio Mañón y el Teniente Coronel Domingo Molina, tanto por la avanzada edad de ambos, como por su excesiva miseria después de haberse inutilizado en el servicio; así como la de la viuda del Coronel Francisco Díaz, que se halla también en la indigencia.

Por todos estos motivos, espera el Gobierno que ese Honorable Cuerpo tomará en consideración el estado precario de los dichos individuos y les acordará algún alivio en su suerte, entre los límites que le concede la Constitución. — Dios guarde, etc. — Firmado, Felipe F. F. de Castro.

El Honorable Bonilla, terminada la lectura de esta nota, opinó que conforme a la práctica establecida se aplazase la resolución de este asunto para la sesión próxima. Apoyaron esta opinión los Honorables Melitón y Manuel María Valverde; la mayoría decidió que se conociese en este mismo día y se diera la resolución a que hubiera lugar.

El Honorable Bobadilla propuso que se votase la suma de 500 pesos fuertes a cada uno de los individuos que señalaba en su nota el Poder Ejecutivo.

El Honorable Bonilla opinó por $F. 2.000 y el Honorable Abreu por $F. 600. La mayoría fué de este último parecer, y el Senado, accediendo a la particular recomendación del Presidente de la República y deseando remunerar en parte los servicios prestados a la República por sus fieles servidores, acordó votar a cada uno de los Señores Coronel Toribio Mañón, Teniente Coronel Domingo Molina, y a la Viuda del Coronel Francisco Díaz, cuyo estado de indigencia es de todos conocido, la suma de $F.600 por una sola vez.

Terminado el objeto de la reunión de este día, se levantó la sesión.- *M. J. Delmonte.- Franco. X. Abreu.- Bobadilla.- M. M. Valverde.- M. Valverde.- Pedro P. de Bonilla.*

APENDICE

Documento núm. 1

DECRETO DEL LIBERTADOR DECLARANDO EN TODA SU FUERZA Y VIGOR LA CONSTITUCION DE 23 DE DICIEMBRE DE 1854.

(27 de Setiembre 1858) (*)

Dios, Patria y Libertad — República Dominicana — Pedro Santana, Libertador de la Patria, General en Jefe de los Ejércitos, y por la soberana voluntad del Pueblo encargado de restaurar el imperio de la Constitución y las leyes, etc.

Considerando: Que todos los pueblos de la República se han adherido espontáneamente al Manifiesto dado el 27 de Julio último por las Provincias del Sur; que el referido Manifiesto se opone a las instituciones promulgadas en Moca con fecha 19 de Febrero de este año; 1º porque ni proveen ni pueden proveer a la seguridad y bienestar de la República; 2º porque esas instituciones concebidas y promulgadas en tiempo de guerra civil y disturbios políticos no ofrecen aquella madurez de reflexión y sensatez que materia tan importante requiere; y 3º porque ni los representantes dados a las Provincias del Sur no expresaban la elección libre y legal de la generalidad de los ciudadanos, ni la revisión del Pacto Fundamental entonces vigente se efectuó según la forma y modo que en él se prescribían.

Que los pueblos de la República me confirieron facultades omnímodas para poner en vigor inmediatamente la Constitución del año de 1854 y restablecer un orden legal correspondiente que ofrezca garantías a los asociados.

(*) Véase Colección de Leyes, 1858. Nº 564.

Considerando: Que para corresponder dignamente a la alta prueba de confianza con que me han honrado los Pueblos de la República, por cuantos medios estén a mi alcance debo hacer todo aquello que crea conveniente a la dignidad nacional, a la seguridad y estabilidad de la República bajo el sistema liberal y democrático que los pueblos desde el principio de su existencia política han proclamado,

DECRETO

Art. 1º La Constitución promulgada en 23 de Diciembre de 1854 constituye el Pacto Fundamental de la República, y queda restablecida en toda su fuerza y vigor sin perjuicio de que pueda ser revisada en el modo y forma que ella prescribe.

Art. 2º Las Asambleas primarias se reunirán el primer Lunes de Noviembre próximo, mediante el aviso preventivo que dará a los sufragantes el Alcalde de cada Común, o quien haga sus veces, para que elijan el número de Electores que le corresponda según el Art. 14 del Pacto Fundamental vigente por este Decreto; e igualmente nombrar los miembros de los Ayuntamientos de aquellas Comunes que los tengan.

Art. 3º Los Colegios Electorales se reunirán el primer Lunes de Diciembre próximo para elegir los miembros del Poder Legislativo y al Presidente y Vice-Presidente de la República.

Art. 4º Hechas las elecciones, según lo prescrito por la Constitución hoy puesta en vigor, se remitirán las actas de elecciones al Secretario de lo Interior y Policía.

Art. 5º La ejecución del presente Decreto queda a cargo del Secretario particular en los Despachos del Interior y Policía.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, a los 27 días del mes de Setiembre de 1858, y 15º de la Patria. — Santana.

Documento núm. 2

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, GENERAL PEDRO SANTANA, AL SENADO CONSULTOR (*)

(5 de Enero 1859)

Señores: Bien conocidos son de vosotros los importantes acontecimientos, las poderosas razones de Estado y de conservación nacional que obligaron al Pueblo a depositar en mis manos exclusivamente la dirección suprema de los negocios de la República y a mí a aceptar tan delicado y gravoso encargo, a tiempo que, derrocada la tiranía del ex Presidente Báez, la más imperiosa necesidad de mi espíritu y de mi cuerpo, era el reposo y sosiego de la vida privada.

Tal era, en efecto, mi única aspiración, el solo fin adonde se encaminaban mis deseos, cuando, en 27 de Julio del año próximo pasado, hizo el Pueblo Dominicano un llamamiento solemne a mi patriotismo, señalándome los nuevos males que inminentemente amenazaban a la Patria con el orden de cosas entonces establecido. Yo veía el peligro, como le veía toda la Nación. El "Manifiesto Nacional" fué un supremo esfuerzo que la República hizo para reprimir el ruidoso impulso que la precipitaba por la pendiente de su total disolución. Mi conciencia de patriota me obligaba a aceptar el papel que la voz de mis conciudadanos me asignaba; y en menos de un mes, gracias a la espontaneidad con que todas las poblaciones, bien penetradas de los verdaderos intereses de

(*) "Gaceta Oficial", Nº 22, 13 Enero 1859.

la Patria se adhirieron a la declaración del 27 de Julio, la obra de salvación quedó cumplida.

Colocado yo así y por la soberana voluntad del Pueblo, bien y debidamente expresada, al frente de los destinos de la República, ví desde luego, que me quedaba mucho por hacer. Una desorganización general afectaba a todos los ramos de la Administración. Báez y sus parciales dejaban dilapidada y pillada la Hacienda pública, que en tal extremo de desorden se hallaba cuando capituló Santo Domingo, que, aunque desde entonces se hacen investigaciones sobre los libros de aquella época, no ha podido averiguarse con exactitud el guarismo a que alcanzan las sumas de dinero desfalcadas por aquellos hombres sin honor. Todos los empleados responsables de los desórdenes de la Hacienda eludieron esta responsabilidad, escapándose descaradamente a la sombra de la Capitulación, que tanto a ellos como a Báez obligaba a hacer entrega formal de todo lo que le pertenecía a la Nación. Y su impúdico jefe no tuvo escrúpulo para tentar siquiera en una buena o mala aclaración sobre el uso de los caudales disipados, una justificación cualquiera a los ojos de sus conciudadanos, y de los hombres de bien de todos los países.

Pero eso no es extraño, Señores, cuando ni el más sagrado de los cmpromisos lo ha respetado el ex Presidente Báez. Según el Art. 5º de la Capitulación del 12 de Junio, celebrada por intervención de los Señores Cónsules de Inglaterra, Francia y España, quedaba estipulado que toda la Marina de guerra debía serme entregada, lo cual no se efectuó, pues aunque hasta hoy yo he sido el más exacto en el cumplimiento de aquel convenio, tengo motivos para quejarme de la infidelidad del Señor Báez, quien dispuso de algunos de los buques que figuraban como de la Marina de guerra. Esa circunstancia escandalosa dió lugar a que yo mandara a Curazao un Comisionado especial para que reclamase dichos buques, de cuya diligencia sólo se consiguió la devolución de una parte, y eso después de los mayores esfuerzos.

Ya podéis presumir, Señores Senadores, qué uso harían del crédito nacional unos hombres que así renunciaban su propia dignidad. No solamente quedaron las arcas nacionales sin un centavo, sino que cada día se descubre un nuevo fraude, un nuevo compromiso, una trampa nueva que aquella Administración nefanda ha dejado a car-

go de la República. De todos estos gravámenes se practica actualmente un minucioso examen, cuyo resultado os será sometido en oportunidad.

Una gravísima cuestión está aún pendiente, que se roza también con los intereses de la Hacienda. Es la del papel moneda actualmente fuera de curso, por efecto de una disposición del Gobierno Provisional. La Comisión inspeccionaria y reformadora nombrada por el ex Presidente Valverde en Junio del año pasado, determinó el depósito de ese papel moneda en la Administración de esta Provincia (de Santo Domingo); y como quiera que esa disposición empezó a ser cumplida, allí se encuentran algunas cantidades selladas y rotuladas habiéndose otorgado a cada depositario un vale por el guarismo que dice contener cada bulto. Grandes sumas existen además en manos de particulares, los que no llegaron a efectuar sus depósitos porque antes de la expiración del plazo fijado para él, por Decreto de la Comisión, tuvo lugar el pronunciamiento de estas Provincias, contra las instituciones de Moca. Ese es el estado de tan importante asunto que debe ocupar vuestra sabiduría de preferencia a muchos otros, para dictar sobre él una providencia acorde con la justicia y con los intereses comunes.

Como tratándose de este ramo de la Administración pública no está demás ningún detalle, haré en este lugar una breve recapitulación de las medidas de más consideración, tomadas sobre Hacienda.

Previendo la posibilidad de una falsificación de los billetes de 200 y 150 pesos nacionales emitidos por el Gobierno del Cibao en fecha 16 de Agosto, ordené su amortización, sustituyéndoles en el curso público con una emisión correspondiente de billetes de 50, 20, 10, 5 y 2. En lo sucesivo se pudo apreciar el acierto de la medida, habiendo comenzado a circular varios billetes falsos de los mencionados tipos de 200 y 150 pesos, aunque esa falsificación, por lo tardía, no surtió esta vez sus perjudiciales efectos, habiéndose descubierto y contrarrestado inmediatamente.

En 3 de Setiembre decreté fuesen retirados de la circulación los billetes del tipo de cien pesos nacionales, representando un peso fuerte garantizado con las rentas del Estado. Estos billetes emitidos en 8 de Agosto por el Gobierno del ex Presidente Valverde, habrían perjudicado gravemente los intereses del Fisco, que se hubiera

visto en el caso de recibir un bono de cien papeletas por un peso fuerte, cualquiera que fuese el agio de la moneda nacional.

La penuria del Tesoro público, me movió a dar un Decreto, en fecha 29 de Octubre, ordenando que los tenedores de bonos descontasen solamente la mitad de su valor en pago de derechos de importación y exportación, satisfaciendo los de puerto al contado.

Deseando liquidar las cuentas que la República tiene pendientes en Curazao y Saint Thomas, y desenmarañar, si es posible, el dédalo de los manejos del ex Presidente Báez en sus negocios comerciales (entablados y tratados, por supuesto, a nombre de la República) con algunos comerciantes de aquellas Islas, envié a ellas en calidad de Agente de la República al Señor Teodoro Stanley Heneken en fecha 9 de Octubre para que se entendiese con los Agentes del Señor Báez en el arreglo de dichas cuentas, procurando orientarse bien de ellas y hacer lo más conveniente a nuestros intereses nacionales. Aun no ha regresado el Señor Heneken, y por consiguiente nada de positivo puedo deciros sobre el resultado de su misión.

En fecha 9 de Noviembre se dió una circular estableciendo Comisiones en todas las Comunes de la República, para tomar cuenta y notas de las deudas nacionales. Aun no es conocido el resultado de esta investigación.

Una medida imperada por la justicia, y cuya indicación creo de este lugar, es la que la Representación Nacional debe tomar, tan pronto como sea posible, sobre los derechos cobrados por el Gobierno Báez durante el sitio, por despachos de buques extranjeros destinados a cargar en nuestras costas, atendido que, por un Decreto del Gobierno Provisional, se desconocía la autoridad de Báez para acordar esos permisos, y se exigía a los buques se proveyesen de ellos o regularizasen en una de las Aduanas dependientes del Gobierno de Santiago lo que daba lugar a que estos buques pagasen un doble derecho.

Con el fin de contrarrestar el agio de la moneda nacional, y dar alguna fijeza al cambio, decreté en fecha 24 de Diciembre que en las Administraciones principales de Provincia se admitirían depósitos voluntarios de papel moneda, otorgándose a los interesados vales por las sumas depositadas, y expresando su valor calculado en moneda fuerte al cambio corriente. Estos vales, mientras se puedan amortizar con moneda fuerte efectiva, se admitirán

BIBLIOTECA DEL CONGRESO

en pago de derechos de importación y exportación, disfrutando de un interés anual de seis por ciento.

Como una medida de conveniencia, he dado un Decreto, con fecha 30 del mes próximo pasado, para que sólo sean los buques nacionales los que exclusivamente hagan el comercio de cabotaje, exceptuando algunos puntos de la costa, donde será permitido tomar carga a los buques extranjeros. De esta medida resulta que se hará menos posible el contrabando; que el crédito de nuestras costas no sufrirá tanto, pues se evitarán los repetidos naufragios de buques extranjeros, y que las exageradas noticias sobre lo insalubre de nuestro litoral, quedarán desvanecidas.

Tales son, Señores Senadores, las medidas de más trascendencia que yo he debido tomar sobre la Hacienda, a fin de hacer frente a las muchas e imperiosas necesidades del país, y de afirmar cuanto fuese posible el crédito nacional, muy vacilante, al encargarme yo de los negocios. De ellas, unas han surtido ya sus favorables efectos, otras inspiran grandes esperanzas, y todas, con orgullo lo digo, han tenido una general aceptación, como dictadas por el patriotismo, la razón de Estado y la justicia, basadas sobre la probidad y buena fe que deben caracterizar a todo Gobierno celoso de su buen nombre, y tendentes, en fin, al bienestar y conveniencia generales.

Por lo demás, Señores Senadores, todos mis pasos y actos he tratado de arreglarlos estrictamente al texto de la Constitución que el Pueblo me había encargado de restablecer. A este fin, y para que cuanto antes fuese cumplida la soberana voluntad de la Nación, en fecha 27 de Setiembre declaré por un Decreto que estaban en vigor la Constitución de 1854 y las leyes y disposiciones basadas sobre ella.

La organización general de los ramos de la Administración ha sido hecha según su letra. Desde el 29 de Julio, cuatro Secretarios particulares han actuado al frente de los diferentes Despachos, si no con la categoría solemne de Secretarios de Estado, sí con su carácter y atribuciones. La Cámara de Cuentas nombrada en 1º de Octubre, está desde entonces en ejercicio, verificando y arreglando las Cuentas generales de la República. En fin, el aparato administrativo ha sido en general tan amoldado a la Constitución, que apenas ha podido apercibirse si el país se encontraba bajo un régimen provisional, habien-

do tenido especial cuidado de no alterar en lo más mínimo las formas de aquel Pacto, a pesar de mis facultades extraordinarias, de lo excepcional de las circunstancias, y a pesar, sobre todo, de que él no se adapte muy perfectamente a las necesidades, exigencias y situación del país; lo que a vosotros toca examinar en oportunidad, según lo indica el mismo Manifiesto Nacional de 27 de Julio de 1858.

Los Tribunales han sido asimismo organizados y funcionan regularmente conforme a la Ley Orgánica de 1855. Las innumerables causas que se hallaban paralizadas al tomar yo el mando, continúan su curso jurídico y principalmente en las criminales se pone por obra, según mis constantes recomendaciones a los Procuradores Fiscales, la mayor eficacia y actividad de su expedición, como tan importante a la conservación de la moral pública y del orden social.

Todo lo posible ha sido hecho en obsequio de la Instrucción Pública. Desgraciadamente lo posible no es mucho, en la crítica situación en que hasta ahora se ha encontrado el país. Sin embargo, el Gobierno, a parte de los esfuerzos que hayan podido hacer los Ayuntamientos, ha restablecido varias escuelas primarias en diferentes localidades.

Os someto adjunta al presente Mensaje copia íntegra de varias resoluciones tomadas en Consejo con mis Secretarios particulares. Por ellas veréis que sobre Policía, Agricultura y lo Interior en general, se ha hecho, cuanto las circunstancias han permitido, para establecer el mejor orden en las poblaciones y en los campos, como para proteger el trabajo y fomentar el progreso material de la República.

Igualmente os someto copia de un contrato ajustado con una Compañía anglo-francesa para la explotación de minas en el país.

Entro además a deciros, que comprendiendo nuestras verdaderas necesidades, tanto para el arreglo de las finanzas, como para dar inmediato y eficaz incremento a la agricultura y el comercio, creí necesario mandar a Europa un Comisionado con el fin de negociar un empréstito a las mejores condiciones posibles. Este Comisionado, que salió de aquí a fines del mes de Octubre, debe muy pronto dar cuenta del resultado de su encargo.

Paso ahora, Señores, a revelaros uno de los asuntos que considero como de los de mayor importancia. Me refiero al estado de la Iglesia. Esta se halla hoy acéfala por el fallecimiento del Prelado y por otras circunstancias que son generalmente conocidas. A mi entrada en esta Capital, el 13 de Junio, una de las desgracias que tuve que lamentar fué la consternación y el luto en que encontré la Iglesia. Hasta la Religión, Señores, puede decirse, que ha sido una de las tantas víctimas de la Administración del Señor Báez. Yo no he debido ser indiferente a semejante situación y, en consecuencia, he practicado las más activas diligencias por remediar el mal, ya poniéndome en comunicación con Su Santidad, ya provisionalmente dictando las medidas que he creído más prudentes, a fin de salvar a todo trance la regularidad del culto.

En cuanto a nuestros asuntos internacionales, voy a instruiros.

La República, Señores, se mantiene en la mejor armonía con las naciones amigas. Estoy satisfecho de la sinceridad y señaladas muestras de simpatías de parte de todos aquellos pueblos que nos han dispensado sus más estrechas relaciones; y muy particularmente de la Gran Bretaña y de la Francia, cuyos buenos oficios por la pacificación de esta Isla han sido siempre interpretados como un obsequio rendido a la humanidad, y como la prueba más inequívoca del gran interés que toman por ver enseñorearse la paz en todos los ámbitos del globo, sin que para ello se alteren los sagrados principios de independencia y soberanía que corresponden a los países libres como el nuestro.

Es mi deber advertiros que el Tratado dominico-inglés está al vencerse; y como se halla estipulado que, un año antes de terminar su duración, cada una de las partes está autorizada a manifestar si quiere o no continuarlo, yo espero, Señores, que vosotros, apreciando los beneficios que reportan a la República nuestras relaciones con la Gran Bretaña, os anticiparéis autorizando al Poder Ejecutivo para que, a su juicio, notifique oportunamente lo que mejor convenga a la Nación.

Felizmente la dificultad que presentaba al país la interpretación del Art. 7º del Tratado dominico-español ha sido allanada, por una justa aclaración del Gabinete de Madrid. No era de esperarse otra cosa de nuestra anti-

gua madre, la España, y de la rectitud de principios que honra al Gobierno de S. M. Católica. Os acompaño una Memoria que relativamente a este asunto me ha presentado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al presente, la mayor parte de los individuos que indebidamente fueron matriculados como súbditos españoles, han vuelto a tomar su nacionalidad dominicana, y prestan sus servicios a la República.

El Tratado celebrado con S. M. el Rey de los Países Bajos ha sido debidamente canjeado y publicado con todas las formalidades de rigor.

Existe en el Despacho de Relaciones Exteriores el Tratado con Hamburgo, cuyo canje lo he reservado al nuevo Gabinete.

Nuestra política internacional, Señores, puedo aseguraros que está precisamente conforme a nuestros deseos. Las potencias de Europa, así como los Estados Unidos de América y las Repúblicas vecinas, dan constantemente pruebas de la mayor deferencia por la República Dominicana.

Pero con respecto a Haití, Señores, desgraciadamnte no sucede así. Nuestra política con ese Estado se mantiene "in statu quo". El armisticio existente está ya al expirar; y por ese motivo, pudiendo acontecer que próximamente haya un rompimiento de hostilidades, he procurado sin pérdida de momentos dejar organizado el Ejército, habilitados completamente nuestros arsenales, y lista nuestra marina. Sin embargo, si la República tiene hechos ya sus aprestos militares, no será la que primero comprometerá el país en los horrores de la guerra. No; antes que entrar de nuevo en una lucha encarnizada, si se propone la prolongación del armisticio, con tal que esa prolongación venga aparejada de condiciones aceptables, no debemos rechazarla; pues con eso habremos dado una prueba de respeto y consideración a las potencias mediadoras y de acatamiento al influjo de la civilización.

Finalmente, Señores, la cuenta de todos mis actos, como encargado de la Administración suprema del país, está consignada a vuestra consideración; y si la conducta que he observado merece el asentimiento de los legítimos Representantes de la Nación, ese asentimiento será el premio más satisfactorio que alcanzaré, al deponer, como realmente depongo, las omnímodas facultades con que me

invistió el Pueblo por el Manifiesto de 27 de Julio próximo pasado.

Restablecido definitivamente el Pacto Fundamental de 1854, queda cumplida la misión que me fué encomendada. Toca ahora a vosotros, Señores, realizar las esperanzas de la Nación. Santo Domingo, Enero 5 de 1859 y 15º de la Patria. — Santana.

Documento núm. 3

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL SENADO EN CONTESTACION AL MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (*)

(5 de Enero 1859)

Excmo. Señor: Los Representantes de la Nación experimentan en este día la más viva satisfacción por estar unidos a V. E. que al título de Libertador de la Patria es también acreedor a los de Padre y amigo con que nos cabe el honor de saludarle muy cordialmente.

Hemos oído muy atentamente la manifestación que V. E. hace de las medidas que ha tomado, desde que los pueblos de las Provincias del Sud, guiados por un instinto de conservación natural, le invistieron de amplias facultades para restablecer la Constitución de 23 de Diciembre de 1854 y un régimen legal adecuado que altamente imperaban las circunstancias de aquel momento.

Todo lo que V. E. ha hecho, ha sido conforme a la voluntad soberana de los Pueblos, y merece la más amplia aprobación de sus elegidos y tomaremos buena nota de las medidas de arreglos y de mejoras que V. E. indica, para adoptarlas y hacer que se pongan en práctica oportunamente.

Ninguna revolución más gloriosa que la que V. E. ha acaudillado. Ninguna dictadura más útil y moderada que la que V. E. ha ejercido. El mundo las contemplará con admiración y aun nuestros propios detractores están obligados a confesar que V. E. es el predestinado para regir los destinos de esta Nación, hija predilecta de la Pro-

(*) "Gaceta Oficial", Nº 22, 13 Enero 1859.

videncia y de los sacrificios patrióticos y nobles de un Pueblo a quien Dios, para salvar en circunstancias supremas, ha puesto bajo su protección fortificando el brazo de V. E. para que empuñe con brío la espada con que a la vez ha de vencer a sus enemigos y sostener y defender la justicia, que es una emanación divina.

Pocos ejemplos se encuentran en los fastos de la historia como el de haber pacificado V. E. en un mes las Provincias del Cibao, sin siquiera quemar una ceba y sin derramar una sola gota de sangre; digo mal: no fué pacificar, fué reunir; tampoco: fué llevar a aquellos hogares de hermanos y amigos los sentimientos de paz y las convicciones del Manifiesto de 27 de Julio del año pasado que ellos acogieron con un vivo entusiasmo; porque hay verdades que brillan por sí solas; y que son indestructibles, inherentes a los principios eternos de la Naturaleza; tal es el sentimiento de la propia conservación.

Un sabio escritor moderno ha dicho: "Que en las revoluciones aun aparentemente retrógradas, hay un paso dado y una luz adquirida para alcanzar alguna verdad". Las que nosotros sacamos por consecuencia de nuestras anteriores agitaciones políticas, son que la República está unida para conservarse, y que esto la hace fuerte y respetable, sin tener nada que temer de sus enemigos exteriores, y del pequeño número de descontentos que puede haber en el interior; que está unida para sostener sus derechos, rechazar, y oponerse a la tiranía: dígalo el hombre que con una ambición positiva, que es la que engendra el amor de las alabanzas, de las prerrogativas personales y exclusivas para sí y su familia, de grandes propiedades y dignidades en tierras y empleos, lleno de la avaricia que arrastra a infinidad de males: que quita a los ciudadanos los medios de subsistir, y producen, por una reacción necesaria, los robos, la prostitución, el charlatanismo, la superstición, la falsedad y la mentira; este ambicioso, digo, abuso del candor y de la buena fe, atropelló los hombres de bien, la Constitución y las leyes, violó los convenios más solemnes, abusó de su poder y de la Religión, nada respetó, ni aún el sexo recomendable; sacrificó a una porción de incautos; pero quedó demostrado que la inmensa mayoría que los rechazó por sus procederes injustos, triunfó, y prevalecieron los principios. El hombre de que hablo es el ex Presidente Báez.

Quedó demostrado también que la opresión y la in-

justicia precipitan a los pueblos a la desobediencia, a la anarquía y a la guerra civil. A que el hombre sin previsión que engañó al pueblo, dejó manchas de sangre imperecederas en los muros de esta Ciudad, siempre cuna de la libertad y de la independencia, legando a sus habitantes el luto, el desconsuelo y la desolación. Si su tenaz resistencia en el mando hubiera tenido por objeto sostener sólo hasta cierto punto el decoro de la Primera Magistratura con honradez y desprendimiento y sin el sacrificio de tantas víctimas inmoladas a su interés y a su crueldad, aun podría disculparse; pero cuando se sabe que él dilapidó el Tesoro público, dispuso de los fondos de la Nación a su antojo y prolongó la situación para comprar por trasmanos las prendas de oro y plata de los que se morían de hambre por las calles en los últimos días del sitio, entonces la más fría naturaleza se revuelve y no se sabe qué calificación darle a un monstruo semejante.

Nunca un pueblo que es libre y que goza de ventajas y garantías sociales se rebela contra sus mandatarios sin causas que lo justifiquen.

Las que tuvo la República, son más que justificadas, y los que inauguraron la Revolución del 7 de Julio para derrocar la tiranía, conservarán siempre un recuerdo de grata memoria en el corazón de los amigos de la libertad, de la justicia y del orden. En cuanto a V. E. no es nuestro ánimo ofender su modestia con la vil adulación; pero hay ciertos hechos que deben transmitirse a la posteridad, y que en ocasiones tan solemnes como ésta, es preciso consagrarlos.

Sepa el mundo, pues, que el General Santana, honrado a toda prueba, y excelente patriota, por una perfidia sin ejemplar, por la más tenebrosa intriga, por ser fiel a su palabra y compromisos, comía el pan del ostracismo cuando la reacción del 7 de Julio, que los pueblos le clamaron como a su Libertador, que su nombre y los ultrajes que se le hicieron fué una chispa eléctrica que inflamó los ánimos, que traído al país y puesto a la cabeza del Ejército, con una moderación admirable, lo organizó, mantuvo el sitio de la Capital, estableció el orden, ninguno pereció por su causa; que amontonando las diatribas y calumnias que se le han prodigado, las ha puesto al nivel de un desprecio aun superior, ha usado de lenidad y mansedumbre con sus enemigos, sacrificando su amor propio por la tranquilidad de la Patria, extendiéndole una

mano de consuelo y de protección a los que vueltos de sus errores o agobiados del peso de las calamidades buscaron y encontraron en él y entre sus hermanos un refugio y una tabla de salvación.

Quiera el Ser Supremo que estas verdades penetren en el corazón de los muy pocos que aun no estén desengañados para que la acción tenaz de las leyes sea innecesaria y para que unidos con sinceridad y estrechados con los lazos de la amistad, de la armonía y la concordia, nos podamos ocupar en restañar las heridas que con sacrílega mano dieran a la Patria en el corazón hijos espúricos y desnaturalizados.

Víctima yo también de la injusticia y de la arbitrariedad más atroz, mucho tendría de que quejarme. Al hablar de Báez y de sus grandes crímenes lo he hecho con repugnancia, pero su conducta es atinente a la situación que nos ocupa; él y sólo él, arrastra el mayor peso de la responsabilidad, y en cuanto a otros hombres de quien también pudiera quejarme, son hoy más desgraciados que yo y prefiero olvidarlos, porque objetos de interés nacional me hacen posponer mis resentimientos particulares.

Señor Libertador: la Nación debe a V. E. un tributo de gracias y de admiración, un tributo de gloria, gloria de que participa el Pueblo por los nobles esfuerzos que ha hecho y porque, conociendo su propia conveniencia y su bienestar, jamás ha querido separarse de las vías de la legalidad; y gloria, en fin, porque unidas las Provincias todas en ideas y sentimientos han dado el imperecedero testimonio de que la República es fuerte e indestructible.

Sírvase V. E. acoger nuestros votos y suplan las emociones del corazón lo que le falte a la palabra...

Cuando los Pueblos eligieron a V. E. como el hombre de toda su confianza mucho esperaban; pero la misión de V. E. aun no está concluída, esperan que continúe guiándoles por los senderos del honor, de la justicia y de la gloria, para que se eternice su memoria y para que la Patria pueda ser próspera y feliz.

El Senado ofrece y asegura su más franca cooperación y hasta que el Poder Ejecutivo se organice definitivamente, tanto por los votos del Pueblo como por los del Senado, V. E. seguirá ejerciendo las amplias facultades con que está investido.

Santo Domingo, Enero 5 de 1859.

AGN



Documento núm. 4

DICTAMEN QUE PRESENTA AL HONORABLE SENADO CONSULTOR EL COMISIONADO QUE SE SIRVIO NOMBRAR PARA HACER UNA RESEÑA DE LAS MEDIDAS QUE EN EL MENSAJE DEL GENERAL LIBERTADOR SE RESERVAN AL CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DEL SENADO (*)

(*12 de Enero 1859*)

Honorables Senadores: Honrado por el Senado con una comisión cuyo desempeño somete ahora a su conocimiento, el que suscribe no puede prescindir de aprovechar la ocasión primera que se le presenta para consignar por escrito los sentimientos de gratitud de que lo ha penetrado el inmerecido honor que los Señores Senadores se han servido dispensarle, eligiéndolo Representante de la Nación por la Provincia de Santiago de los Caballeros. Son, Señores, muy superiores a sus fuerzas los deberes que tan arduo encargo le imponen, pero son aún mayores sus deseos de servir al país que vió nacer sus ascendientes, y la confianza que le inspira la ilustración y patriotismo de los demás miembros del Honorable Senado más que suficiente a suplir lo que faltare de la primera, al que tiene la honra de dirigiros la palabra.

En su sesión del 8 del presente mes, tuvo a bien el Senado conferir al que suscribe el encargo de reseñarle las medidas que del Mensaje del Poder Ejecutivo aparecían sometidas a su deliberación. El Senador comisionado ha leído con detenimiento el discurso de S. E. el Libertador,

(*) "Gaceta Oficial", Nº 24, 25 Enero 1859.

y sólo halla cuatro asuntos reservados allí al conocimiento de este Honorable Cuerpo.

Otros varios hay de que ha conocido el Gobierno, durante el período a que se refiere el Mensaje, y que, en circunstancias normales, habrían sido de atribución del Poder Legislativo; pero sobre éstos nada tiene hoy que hacer el Senado, porque lo acertado del uso que ha hecho el Libertador de sus facultades extraordinarias ha merecido un voto de gracias, pronunciado por el Honorable Presidente a nombre de la Nación, y la gratitud de todo el que reconozca el orden, la paz y la justicia, como bases indispensables para el bienestar de los pueblos.

El primero de los cuatro puntos reservados al examen del Senado, es el conocimiento del uso que han hecho del crédito nacional los hombres de la Administración Báez, que no solamente dejaron las arcas del Estado sin un centavo, sino que marcaron su paso en el Poder con un largo rastro de fraudes; cuya averiguación se practica activamente para someter su resultado a la deliberación del Senado.

El segundo asunto, que se reserva para la decisión del Poder Legislativo, es el de la suerte que debe caber a los tenedores del papel moneda, mandado retirar de la circulación por un Decreto del Gobierno Provisional. La Administración Báez gravó a la Nación con una profusa emisión de ese papel, cuya circulación habría perjudicado en gran manera a los tenedores del que tenía un curso legal fuera del recinto de la Capital sitiada, y fué prohibida. Pero como esta grave cuestión, no puede quedar indefinidamente sin resolverse, el Libertador llama sobre ella la atención del Senado, de preferencia a otras muchas, para dictar, dice, sobre ella, una providencia acorde con la justicia y con los intereses comunes.

El tercer punto de que debe conocer el Senado, es el de los derechos dobles pagados por los buques extranjeros, que fueron a cargar a la costa, durante el sitio que sostuvo en esta plaza el ex Presidente Báez. Desconocida su autoridad por el Gobierno que se dió la Nación, no se tuvieron en cuenta los derechos que su Aduana cobraba a los buques dichos que buscaban carga en los puertos de la República guarnecidos por las tropas leales; y de aquí la injusta exacción de un derecho doble, que el Senado no puede menos de tomar en consideración.

El cuarto y último de los asuntos indicados por el Mensaje, y cuyo conocimiento se reserva el Senado, es el examen en su oportunidad, del nuevo Tratado dominico-inglés, que, a consecuencia de la expiración del término señalado a la validez del actual, debe celebrarse. Pero como en esta materia la Constitución no le da al Poder Legislativo más facultad que la de aprobar o no lo hecho por el Ejecutivo, fuerza es esperar la remisión que dicho Poder ofrece hacer a su tiempo del expresado documento. — Santo Domingo, Enero 12 de 1859. — El Senador comisionado, F. D. F. de Castro. — Honorable Presidente del Senado Consultor.

Documento núm. 5

MEMORIA QUE SOMETE A LA CONSIDERACION DEL HONORABLE SENADO EL QUE SUSCRIBE, SOBRE LA NECESIDAD DE DAR A LA REPUBLICA UNA LEGISLACION PROPIA, ADECUADA A SUS COSTUMBRES Y ACTUAL ORGANIZACION (*)

(12 de Enero 1859)

Honorable Senado: Las circunstancias particulares en que la República Dominicana recobró la independencia que un Estado vecino le había arrebatado al nacer, hubieron de colocarla en una posición anómala que la obligó a tomar prestada la legislación de un pueblo remoto, de costumbres diferentes, de hábitos desemejantes, de idioma extraño, que habita en un clima distinto y organizado con instituciones completamente contrarias.

Al separarse de la parte que fué francesa, la que antes había sido española, los que le dieron libertad no debieron conservarle las leyes que por derecho de conquista se le habían impuesto; ni podían improvisar otras nuevas, en medio de los sacudimientos que fueron consecuencia de aquel acto heroico; hubo pues de adoptarse la legislación francesa como la más perfecta en aquella época.

No experimentaron igual necesidad, al nacer, las demás Repúblicas hispano-americanas; porque ninguna tuvo la desgracia de ver cortar en flor el vástago tierno de la libertad que acababa de plantar, ni experimentó el filo de la espada de un conquistador. Todas ellas pudieron conservar las leyes que rigieron a sus padres, mientras la paz les trajo la holgura necesaria para reformarlas con acierto. Veinte y dos años de dominación extraña

(*) "Gaceta Oficial", Nº 25, 1º Febrero 1859.

habían hecho desaparecer del suelo dominicano hasta el recuerdo de las leyes españolas; y las haitianas habían producido hartas calamidades para pretender conservarlas.

Empero, la legislación francesa, que tanta gloria añade a las de Napoleón I, no podía llenar por completo las miras que se propusieron los padres del naciente Pueblo dominicano. Escrita en una lengua extraña, lleva en sí la cualidad más contraria a su objeto. El derecho natural exige que para que el precepto se tenga por obligatorio haya de ser inteligible.

La ley que no tiene este indispensable requisito, lejos de contribuir a formar las costumbres de un pueblo lo desmoraliza; pues que lo pone en la imposibilidad de observarla, lo habitúa a desobedecerla y, lo que aun es peor, lo mantiene siempre inconforme con la autoridad que se la hace sentir; porque no puede persuadirse de la justicia de una disposición el que no la entiende, y mucho menos creer merecida la privación o el castigo que se le ha impuesto por desobedecer el mandato que no se quiso que entendiera. Cada juez es, a sus ojos, no el intérprete de la ley que para él no existe, sino el tirano que la dicta a su antojo.

El Gobierno comprendió esta necesidad antes de ahora e intentó hacer la traducción de los Códigos franceses; pero, sin duda, tropezó con el inconveniente de la insuficiencia de su trabajo.

La primera razón que hubo de tener para persuadirse de ello es que sería una mengua para la República mantenerla en la carencia de una legislación propia, hecha por ella misma, dando a entender al mundo que es incapaz de regirse a sí misma, pues tiene que obedecer lo que otra soberanía dispuso para la regulación de su Estado. Verdad es que el trabajo de codificación es largo, pesado, penoso; pero también lo es que el Senado puede abreviar la obra del Cuerpo Legislativo haciéndose preparar, por una Comisión, los libros, secciones separadas que habrían de formar el cuerpo completo de Códigos dominicanos, como otros tantos proyectos de ley que él iría discutiendo y sancionando; y el país, a imitación de la misma Francia, iría a su vez adquiriendo gradualmente una legislación que hoy no tiene.

Hay además consideraciones de conveniencia social, de no menos peso que la enunciada anteriormente, y que

aconsejan la inmediata reforma de la actual legislación. Napoleón hizo leyes para un imperio y Luis XVIII la reformó para un reinado; pero ni uno ni otro pensaron en que sirviesen para una república. La organización judicial y administrativa de aquel imperio les llevó la mano a escribir los Códigos de procedimientos civil y criminal; y ellos pudieron contar con un personal inmenso, hábil en la tramitación, y la complicaron tanto cuanto quisieron. La República, que carece de aquel elemento, ha tenido que simplificarla en la práctica, apartándose de la ley escrita; o, lo que es lo mismo, confiar tan sagradas formas a la discreción de los que dictan esas variaciones. Son además tan diferentes los hábitos de ambos pueblos, sus costumbres, el estado de su ilustración, el mayor o menor grado de corrupción de cada uno de ellos, el número de sus respectivos pobladores; es tanta la diferencia del clima, tanta la de las facilidades que una y otra tienen para recorrer las distancias; tantos, en fin, los puntos de oposición que existen entre uno y otro pueblo, que disposiciones contenidas en los Códigos franceses, de incontestable conveniencia para el pueblo a quien se dedicaron, son completamente inadecuadas para uno a quien la civilización no ha corrompido todavía. ¿Qué Juez no repugnará aplicar la pena de muerte por robo, sin derramamiento de sangre, como lo previene el artículo 381 del Código Penal; cuando la jurisprudencia moderna, la más severa, no admite esa pena en el homicidio, aun siendo voluntario, si no es con premeditación? Esta severidad, sin embargo, parecía necesaria en tiempo de Napoleón para evitar que el hombre pacífico fuese asesinado en su lecho.

Las ciencias sociales además, han marchado desde entonces al mismo paso que la civilización, como vemos por el ejemplo citado. Si aquel sabio legislador revisara hoy su obra, tendría mucho que tildar en ella; porque si los principios fundamentales del Derecho no varían, se mudan, sí, los tiempos y con ellos las costumbres e ilustración de los pueblos para los cuales se hacen las leyes. Las disposiciones del artículo 20 del Código Penal son hoy una mancha en aquella grande obra. Si Dracón mismo escribiese aquel artículo en el estado actual de la ciencia, se horrorizaría de mandar aplicar un hierro candente sobre las carnes vivas de un ser humano. Añadir una letra más a ese cruel abecedario, como lo manda el últi-

mo párrafo del mismo artículo, o cortar un miembro vivo, como lo exige el décimo tercio, son penas muy semejantes a las que empleaban los Romanos hace dos mil años para castigar el parricidio, que se reputan hoy infinitamente mayores a la que priva al hombre de la existencia y de todo punto contrarias a la filosofía de la legislación. Semejantes disposiciones tienen el pernicioso efecto de hacer ineficaz la ley y dejar impune el delito. El Juez o Jurado, que contra su conciencia se ve en la necesidad de someter un culpado a un castigo que no admite hoy la civilización, o que gradúa superior al delito; prefiere consentir que ceda la balanza de la justicia a la presión benévola de la humanidad, declarando inocente al reo, más bien que contribuir a la ejecución de un acto que, por salir de los límites que prescribe el derecho natural, deja de ser justo. Mientras la España castigó los desafíos con arreglo a la sangrienta Pragmática de Carlos III, todos los acusados fueron absueltos y sólo se vió condenado aquel a quien la venganza de un poderoso empujó al cadalso. Cuando, por el contrario, la ley es moderada, recibe su natural aplicación y la vindicta pública queda satisfecha.

Sin embargo, la alteración que en concepto del que suscribe debe hacerse en la actual legislación dominicana conviene que sea sobremanera prudente. Que solamente se toque lo inadmisible y se deje para más tarde la revisión de lo conveniente; porque, acostumbrados los Tribunales a las disposiciones de la ley que hoy rige, han formado sobre ella su jurisprudencia y formulado, también por ella, sus conocimientos en la materia.

Señores: El país espera mucho de nosotros y el Senado no debe privarse por más tiempo de la gloria de darle una legislación propia y relevarle de la vergüenza de regirse por la de una Nación de tan opuesta organización política como tan diferentes en usos y costumbres; debe en fin borrar del cuadro de los pueblos civilizados el sorprendente, al par que doloroso, ejemplo de un imperio entre otro imperio, una soberanía sometida a otra soberanía. El Pueblo, Senadores, os pide leyes y vosotros podéis y debéis dárselas. Propongo pues, que el Honorable Senado, se sirva nombrar una Comisión para que ajustándose en cuanto sea conveniente a la actual legislación, prepare los trabajos necesarios para la formación de los Códigos dominicanos.—Santo Domingo, Enero 12 de 1859. — Felipe D. Fernández de Castro. — Honorable Senado.

Documento núm. 6

DISCURSO DEL GENERAL PEDRO SANTANA PRONUNCIADO EN EL ACTO DE PRESTAR JURAMENTO COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (*).

(31 Enero 1859)

PEDRO SANTANA,
Libertador de la Patria, General en Jefe de los Ejércitos y Presidente de la República.

¡Dominicanos! He aquí la tercera vez que favorecido con los sufragios de toda la Nación, me presento como primer Magistrado de ella, ante sus legítimos Representantes, a prestar el juramento solemne de cumplir con lealtad y patriotismo los sagrados compromisos que me ha impuesto la lisonjera deferencia de mis conciudadanos. Vosotros no ignoráis, por consiguiente, ni cuáles son los principios que profeso, ni lo que han sido en la práctica mis anteriores programas gubernativos, cada vez que he ejercido la primera Magistratura del Estado. Conocéis todos mis antecedentes políticos, y cómo he correspondido hasta aquí a vuestra confianza. Así, pues, hoy acepto ésta como doblemente honorífica y satisfactoria para mí, y no puede menos que inspirarme un justo orgullo vuestra elección, porque ella implica positivamente una absolución general, dada por mis conciudadanos a todos los actos de mi carrera pública.

Esta consideración, que bien pudiera eximirme de hacer para vosotros el formulario de mis tendencias polí-

(*) "Gaceta Oficial", Nº 25, 1º Febrero 1859.

ticas, tendencias que os son harto conocidas, y de que me atrevo a asegurar participa la gran mayoría de mis conciudadanos; esta consideración, empero, me hace mayor fuerza para inaugurar mi Presidencia por un programa que, expresando con sinceridad los sentimientos y deseos que me animan, y las convicciones políticas que abrigo, pueda servir al mundo como suficiente explicación del favor que constantemente me dispensa el Pueblo Dominicano.

La primera de las virtudes sociales, según mi concepto, la base fundamental de la prosperidad de los pueblos y de su estabilidad, es la justicia. Sin ella es imposible el orden, imposible la libertad; y yo, en mi fervoroso anhelo de ver reinar en mi Patria la libertad y el orden, siempre he rendido, siempre rendiré, un culto particular a la justicia. Mi más prolijo esmero habrá de ser que ella caracterice todos mis actos de gobernante, que mis paisanos la vean siempre resplandecer en ellos, y que los extraños, las naciones con que nos pongamos en contacto, puedan dar fe y testimonio de que en nuestras relaciones con ellas, prevalecen siempre la rectitud y la justicia, como indicios ciertos de nuestra ilustración.

El progreso moral, intelectual y material de la República que cuantas veces he ejercido el mando ha sido el objeto de mi más eficaz solicitud, aunque con limitado éxito en razón de las azarosas circunstancias en que se ha encontrado el país, ahora que bajo mejores auspicios tomo las riendas del Estado, será el fin perenne, especial y absoluto de mis desvelos y atenciones. Ya como encargado provisionalmente del Poder Ejecutivo he empezado a practicar las diligencias necesarias para que la Iglesia, que se halla en decaimiento por la vacancia del Arzobispado, y por otras desfavorables circunstancias de notoriedad general, recupere su correspondiente auge y esplendor, tan necesarios para empeñar a los pueblos en la senda del orden y de la virtud; y mientras yo permanezca en el poder no omitiré esfuerzo alguno porque se ensanche el culto y por dotarle con Ministros ilustrados y virtuosos, que enseñen al pueblo la moral evangélica, tanto con el ejemplo como con la palabra.

Igualmente la instrucción pública, tan esencial para el adelanto de las naciones, será en lo sucesivo preeminentísimo objeto de la protección y el empeño de mi Gobierno. Yo tengo formado el firme propósito de fo-

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

mentar la educación, y de proporcionar a la generosa juventud dominicana los medios de practicar los estudios científicos que la pongan en aptitud de llevar mañana a su debido cumplimiento los altos designios que la Providencia tenga formados sobre nuestra Patria. Esta misión la considero como sagrada, y he de tentar dejarla cumplida por cuantos medios estén en mi poder.

En cuanto a mejoras materiales, dominicanos, para obtenerlas yo traigo al Poder los elementos que os he ofrecido en todos tiempos: protección al trabajo y a la honradez, protección a los pensamientos y proyectos de utilidad general, protección a la industria, a la agricultura y al comercio; tolerancia de todo lo lícito y honesto; guerra al crimen, a los vicios y a la ociosidad. Este sistema es la palanca más poderosa del progreso y la felicidad de los pueblos; él garantiza la paz y la tranquilidad pública y privada; y, en suma, es el dogma político que, puesto en práctica fielmente, más puede impulsar un país hacia la perfectibilidad social.

Ya en otro lugar de este discurso llevo dicho cuál habrá de ser la índole de las relaciones de mi Gobierno con las demás naciones; y ahora, añadiré, que de mis más importantes cuidados será no sólo de mantenerlas bajo el pie de perfecta armonía en que hoy se encuentran, sino el de mejorarlas y estrecharlas cuanto sea posible, sobreentendido el principio de que las relaciones internacionales influyen poderosamente en el atraso o bienestar de los países, según el carácter y naturaleza de ellas.

Nada os digo de la política que me propongo seguir con Haití, la cual no puede tener una pauta fija, debiendo atemperarse por la actitud que para con la República tome el vecino Estado. Hasta ahora no tengo que añadir o variar a lo que sobre este punto dije en mi Mensaje del 5 de este mes.

En resumen, dominicanos, mi programa gubernativo se encierra en estas tres palabras: Libertad, Orden, Progreso. Yo comprendo la libertad en el orden y no la creo posible sin él. Ella no debe tener más círculo que el de la ley, ni más limitación que el deber. Puesta en acción la libertad así entendida, resultado infalible para los pueblos es el progreso y la pública prosperidad.

Vosotros, dominicanos, que tan sensatos os habéis mostrado en las últimas trabajosas circunstancias que han combatido al país, cooperando, cada cual en su pues-

SENADO
de la
Republica Dominicana

to, al restablecimiento del orden y de los principios; vosotros, que tan patriótico interés habéis puesto en el afianzamiento de la tranquilidad pública, y en reponer a la Patria de los sufrimientos experimentados; vosotros me inspiráis mucha confianza en el porvenir. Continuad, pues, en esa recta vía, segundando con fervor y patriotismo los esfuerzos del Gobierno, y las mejoras sociales, tan apetecidas por todos los buenos ciudadanos, encontrarán entre nosotros una fácil realización.

Por lo demás, no debe extrañaros en este programa la ausencia de las grandes promesas, de las frases pomposas que ordinariamente contienen estos documentos políticos. Yo no soy el hombre de las palabras, sino el de los hechos. Mi constante ahinco es y ha sido porque éstos me acrediten. Vosotros conocéis los de mi vida pública; a ellos, y a los principios que he profesado siempre, debo vuestra estimación; yo no omitiré diligencia ni sacrificio alguno por hacerme de más en más digno de ella, permaneciendo como hasta aquí consecuente con los principios que me la han captado. El más fervoroso deseo de ver feliz a mi Patria, el anhelo de establecer sólidamente el imperio de la justicia y de las leyes, el amor de lo bueno, y la aversión de lo malo; tales han sido los únicos recursos con que, y la ayuda de la Providencia, he contado en todas épocas para aceptar y dejar cubierta la inmensa responsabilidad del mando. Con ellos cuento hoy para gobernar la República otra vez, y en ellos fío para conservar, al separarse del Poder, el bien más precioso que puede poseer el hombre: Una conciencia tranquila. — Santo Domingo, 31 de Enero de 1859 y 15º de la Patria — Santana.

Documento núm. 7

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL SENADO CONSULTOR EN CONTESTACION AL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. (*)

(31 de Enero 1859)

Excmo. Señor Presidente: Nada es comparable a las emociones de alegría que experimenta el alma de los que después que han corrido en una nave una furiosa tempestad, desmantelada aquélla y combatida aún por lo encrespado de las olas, conducida por un diestro y valeroso piloto, llega por fin a puerto de salvamento. Así, los dominicanos hoy, llenos de júbilo, deben regocijarse, porque habiendo vuelto a su verdadero aplomo la sociedad, restablecida la Constitución de Diciembre de 1854, y el régimen legal, instalados los grandes poderes del Estado, podemos decir que la revolución que se inauguró para derrocar un tirano está terminada; y si la moralidad que se desprende de una revolución se ha de buscar en la revolución misma, el triunfo de los principios, la ostentación del valor y de la soberanía del pueblo, la sucesión del orden, la legalidad y el honor nacional, es el cuadro esplendente que brilla delante de nosotros. Según leyes de la naturaleza, una serie de conveniencias que tienden a un centro común, forma el orden, la conveniencia está en los detalles, el orden en el conjunto, y cuando la historia imparcial revele los hechos, el mundo entero nos hará justicia.

La gran parte que V. E. ha tenido en estos sucesos, y sus precedentes gloriosos, adquiridos en su carrera mi-

(*) "Gaceta Oficial", Nº 25, 1º Febrero 1859.

litar y política, siempre lo han puesto a la cabeza de los destinos de esta Nación, que, aunque pequeña, es grande en la heroicidad con que siempre ha combatido por su libertad e independencia, ansiosa por la gloria y esplendor a que está llamada por la riqueza de su suelo y su maravillosa fertilidad, gérmenes de donde han de salir, al andar del tiempo, el progreso de la agricultura, del comercio y de la civilización, unidos a la educación del pueblo, a la religión y a la piedad, que son los manantiales más puros de la felicidad.

La justicia con que V. E. ofrece gobernar, es la verdadera garantía del orden, de la libertad, de la propiedad, de la vida y del honor de los ciudadanos, y la prenda más grande de la seguridad del pueblo.

Espera también la Nación, que V. E. sea firme en sostener las buenas relaciones internacionales. Las naciones, por los progresos de la civilización, su bienestar y perfección, están ligadas por un lazo común, influyente entre unas y otras, porque hay dos movimientos en las sociedades: el movimiento particular a cada una, y el movimiento general de las sociedades que en común arrastra a cada sociedad separada. Así el mundo moral reproduce una de las leyes del mundo físico, la de la atracción, y al hombre no le es dado quejarse porque encuentra cosas útiles a sus destinos en particular y a los del género humano en general, en este bello orden del universo, arreglado por la mano del Criador.

La Nación, por nuestro órgano, felicita a V. E. y se felicita ella también, por los beneficios que espera de su hijo más querido, y a quien ha dado tantas pruebas constantes de adhesión.

Señor Vice-Presidente: También felicitamos a V. S. y esperamos que corresponderá a la alta confianza con que los Pueblos le han honrado, y a que V. S. ha sido acreedor por sus constantes y distinguidos servicios.

Dominicanos! Agrupémonos ante las aras de la Patria, para ayudar al Gobierno en la grande obra de la edificación y para aplicar un bálsamo de salud a las heridas que le hayan dejado los disturbios pasados, que sólo han producido un gran rastro de sangre, llanto, luto, miserias y calamidades. Cada cual tiene un deber que cumplir, y en el cumplimiento de estos deberes está la armonía, la paz, el orden y el progreso.

Unámonos, y uníos a mí para que juntos digamos:
¡Vivan el Presidente y Vice-Presidente de la República!
¡Vivan la Libertad y la Independencia!
¡Viva la Unión!
Santo Domingo, Enero 31 de 1859 y 15º de la Patria.

Documento núm. 8

ALOCUCION DEL GENERAL ANTONIO ABAD ALFAU AL TOMAR POSESION DE LA VICE-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (*)

(31 de Enero 1859)

ANTONIO A. ALFAU,

General de División y Vice-Presidente de la República

Honorables Señores: Acabo de aceptar la Vice-Presidencia de la República. Esta es la segunda vez, Señores, que ocupo puesto tan distinguido. Doble es, pues, la gratitud que debo por esta repetida prueba de deferencia con que la Nación me honra, y dobles son, por tanto, mis compromisos, que si bien he de llenarlos satisfactoriamente, no será de otro modo que secundando con civismo y fidelidad el programa salvador que presenta hoy S. E. el General Libertador.

Como parte del personal de la Administración constitucional que hoy se instala, si llegare el caso en que tenga que entrar a ejercer las funciones del Poder Ejecutivo, protesto, como soldado de la Patria, que en el cumplimiento de mis deberes, la Independencia Nacional y la seguridad de nuestras instituciones, serán objeto a que solícitamente prestaré mi atención.

Señores Senadores, vosotros sois los legítimos Representantes del Pueblo Dominicano; yo deseo que tengáis todo el acierto necesario para que proporcionéis la dicha de vuestros comitentes. Sean pues consagradas todas vuestras tareas en beneficio de la Nación.

Santo Domingo, 31 de Enero de 1859 y 15º de la Patria. — Antonio A. Alfau.

(*) "Gaceta Oficial", Nº 25, 1º Febrero 1859.

Documento núm. 9

MEMORIA QUE PRESENTA AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA ACERCA DE LOS RAMOS DE QUE ESTA ENCARGADO (*)

(2 de Febrero 1859)

Excmo. Señor: En cumplimiento de mi deber, vengo a dar cuenta a V. E. del estado en que se hallan la Justicia e Instrucción Pública, cuyos Despachos— que ya por Decreto de 18 de Agosto de 1858 se había servido V. E. confiarme con el carácter de Secretario Particular suyo— ha tenido a bien encomendarme de nuevo con el nombramiento de Secretario de Estado encargado de dichos ramos.

Conocidas son de V. E., como de todo el Pueblo Dominicano, las justísimas causas que provocaron el glorioso alzamiento de 7 de Julio de 1857; la Nación, en uso de sus imprescriptibles derechos, al par que protestó indignada contra los desórdenes y abusos de una Administración inmoral, desastrosa y aviesa que así violaba los preceptos de la ley como hollaba las libertades patrias, instaló un Gobierno con asiento en Santiago de los Caballeros. Los hombres que formaban parte de esa nueva y legítima Administración, todos ellos probos, ilustres y beneméritos, por faltarles tiempo y espacio para pensar en otra cosa que no fuese el ver de allanar las dificultades del momento y poner fin a la guerra civil, no pudieron ocuparse con asiduidad de los ramos de Justicia e Instrucción Pública. Así que, cuando en 27 de Julio próximo pasado,

(*) "Gaceta Oficial", Nº 26, 8 Febrero 1859.

investido V. E. de facultades omnímodas por todos los pueblos de la República para que restableciese el Pacto Fundamental de 1854 y las leyes de él emanadas fué una de sus primeras diligencias, al ver el tristísimo estado en que se hallaba la administración de Justicia, nombrar personas dignas por sus luces y probidad de desempeñar tan augustas funciones. De entonces acá este importantísimo ramo ha recibido un saludable impulso; los Tribunales han evacuado una multitud de causas judiciales pendientes ante ellos hacía mucho tiempo; y los intereses individuales así como los sociales, de los que es la Justicia la más celosa salvaguardia, cuentan ya con garantías de que estaban huérfanas, merced a los torpes manejos de la Administración del Señor Buenaventura Báez y a la turbación y desasosiego de los tiempos.

Pero, ni este saludable impulso dado por V. E. a la Justicia, ni los buenos deseos cuanto loables esfuerzos de los dignos patriotas, encargados del desempeño de tan altas funciones, alcanzarán jamás a darle aquel prestigio y esplendor de que tan merecidamente goza en otras naciones, si de una vez para siempre no abandonamos los estrechos senderos de la rutina para empeñarnos, con ánimo resuelto y paso firme, por las vastas vías de los justos progresos.

Y por esto, animado yo por el deseo de V. E., aun cuando me duele tener que confesar y declarar el estado por todo extremo lastimoso en que se halla este importantísimo ramo de la Administración, lo confesaré y declararé a V. E., porque fuera de que los males ni los remedia el silencio, ni se palían con mentidas frases, antes por el contrario se agravan y empeoran, cúmple a mi deber de hombre público y de ciudadano señalar las causas del mal e indicar en la esfera de mis atribuciones y facultades, los medios que juzgue más adecuados para extirparlas.

Varias son las causas que embarazan y entorpecen la buena administración de Justicia; señalaré las principales:

1ª La falta de un personal inteligente. Pocos, muy pocos, en número son los hombres que entre nosotros hay, familiarizados con las prácticas del foro, fuente de conocimientos que inútilmente iríamos a buscar en el estudio teórico de la ciencia.

¿Qué importa la integridad del Juez, qué el celo más

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
República Dominicana

acendrado, qué el íntimo deseo, la voluntad constante y perpetua de dar a cada cual el derecho que le corresponde, si uno y otro no poseen la ciencia del conocimiento práctico del hombre, conocimiento indispensable, mayormente en asuntos de materia criminal?...

2ª El estar redactados los Códigos vigentes en lenguaje extranjero. Facilmente se comprende, Excmo. Señor, que si la Justicia ha de ser bien distribuída, menester es que el Derecho, la Legislación y su fórmula, sean conocidos de todos cuantos ejerzan las funciones de Jueces y Magistrados.

No es posible imaginar que sin el estudio concienzudo y sin el conocimiento cabal de nuestros Códigos puedan los encargados de la administración de Justicia llenar ni con mucho la delicada misión que se les ha encomendado; y sube de punto la dificultad si se atiende y considera que la mayor parte de estos funcionarios ignoran el idioma francés, que son muy pocos los que medianamente lo entienden y muy contados los que le poseen a fondo. Es pues grave, gravísimo inconveniente, y que trae aparejado muchos males el dejar subsistir por más tiempo los Códigos en lengua francesa; es de urgente necesidad trasladarlos al castellano, nuestra lengua patria; con lo cual estarán al alcance de todos los ciudadanos, y se evitarán, fuera de los inconvenientes anotados, un sin número de dificultades que a cada paso surgen, merced a las interpretaciones de los textos por fuerza casi siempre arbitrarias, origen y ocasión de articulaciones y de instancias que dan por resultado dilaciones y mayores costas.

3ª La falta de concordancia de los Códigos con la Ley Orgánica y demás leyes patrias. No es mi ánimo, Excmo. Señor, hacer cargos, siquiera indirectos, a los legisladores de la República por haber decretado vigentes en ella los Códigos de la Restauración francesa; porque si bien es verdad que esa Legislación es un monumento levantado por el saber y la experiencia, y por lo mismo de difícil aplicación inmediatamente en un pueblo como el nuestro tan diferente de aquél por la lengua, los usos, las costumbres y hasta cierto punto por las creencias; no es menos cierto que los legisladores de 1845 obraron sabiamente poniendo en vigor los Códigos franceses. Aquellos próceres de la Patria comprendieron lo difícil cuanto arduo que era acometer la empresa de formular y codificar leyes, mayormente para hombres inexpertos en esas

SENADO
de la
República Dominicana

materias que, en pocas horas digámoslo así, se habían improvisado hombres públicos. Y no se ocultó a su natural prudencia y penetración que la legislación francesa no podía adoptarse íntegramente en la República, y por eso dispusieron que se la sometiese a las modificaciones que determinasen la Ley Orgánica y demás leyes patrias. No podía pedírseles más. A nosotros, sus sucesores, toca el formular las modificaciones más o menos radicales, más adecuadas, más precisas que exijan los progresos sociales y nuestras instituciones republicanas. A este fin deben encaminarse todos nuestros esfuerzos, si queremos legar a nuestros sucesores una prueba de nuestro constante anhelo por el esplendor y felicidad de la Patria

Tales son, Excmo. Señor, en sentir mío las principales causas que embarazan y entorpecen la buena marcha de la administración de Justicia; causas por todo extremo graves y de consecuencias funestas para el orden y buen mantenimiento de la República.

Para remediar los males que traen aparejados la 2ª y 3ª se hace preciso invitar al Senado para que revise y corrija las traducciones manuscritas de algunos de los Códigos, que existen en los archivos del Ministerio de mi cargo, con súplica de que nombre una Comisión para la traducción de los demás. Y si el Senado Consultor no puede en la presente Legislatura, por el cúmulo de asuntos que vivamente llaman su atención, llevar a cabo esta tarea encomendada a su celo y patriotismo, nunca desmentidos, el Ejecutivo debe pedirle la autorización y los medios para confiar el arduo trabajo de la localización de los Códigos a letrados españoles; lo cual sería cosa más fácil, llana y hacedera. Cualquiera que sea la determinación del Senado, es de imperiosa necesidad que precisamente se hagan las anotaciones indispensables para poner en perfecta concordancia esos Códigos con la Ley Orgánica y demás leyes patrias.

La Ley Orgánica en vigor exige algunas reformas en su espíritu y letra: estas reformas son tanto más urgentes cuanto que siendo esa ley, en parte, Código de procedimientos, y concediéndose por ella a los Alcaldes facultades que presuponen en quien las ejerce conocimientos jurídicos nada superficiales, conocimientos que, fuerza es decirlo, no tienen estos funcionarios, convendría mucho, ya para obviar éstos y otros inconvenientes, ya por que a decir verdad ninguno de los Alcaldes poseen los

Códigos, ni existen en los archivos de sus respectivas Comunes, convendría mucho, repito, que, cuando en la Ley Orgánica se citan artículos del Código, estos artículos, después de haber sido traducidos, se insertasen íntegros en el texto de dicha ley.

Algunos datos faltan para completar esta sección de mi Memoria; pero, por fuerza tengo que enviarla así al Poder Ejecutivo por no haber suministrado la Suprema Corte los que le he pedido conforme a lo que previene el artículo 98 de la Ley Orgánica.

SECCIÓN DE INSTRUCCION PUBLICA

Muy lastimoso es el estado en que se halla el ramo de Instrucción Pública. A consecuencia de los pasados disturbios políticos, habían quedado en completo abandono todos los establecmientos de enseñanza, así públicos como privados. Para remediar en lo posible ese mal, restableció V. E. las cinco escuelas nacionales creadas por la Ley de Junio de 1855 en las Capitales de Provincias.

Cuatro son las escuelas que hay en la Capital del Estado: una pública y tres privadas.

Todas ellas han celebrado exámenes generales el 23 de Diciembre último, según lo previene la ley vigente sobre la materia; los exámenes, no obstante el poco tiempo que había transcurrido de la reapertura de las escuelas hasta aquella fecha, fueron muy lucidos, según el sentir de la Comisión examinadora.

El Instituto de niñas, que desde 1855 regenteaba con aplauso de todos la Señorita Manuela Calero en el ex Convento de Regina, local que le había sido provisionalmente concedido, fué cerrado durante la Administración del Señor Buenaventura Báez, destinando el local para hospital y cuartel de las tropas.

Restablecido por V. E. el orden público, ocurrió la Señorita Calero al Gobierno solicitando se le volviese a conceder el ex Convento de Regina, para instalar en él de nuevo el Instituto de niñas; V. E. accedió gustoso a la solicitud por su Resolución de 7 de Diciembre último. Muy penetrado yo de los muchos bienes que proporcionaba al país este Instituto, y deseoso de que en lo sucesivo no sufra ningún entorpecimiento, suplico a V. E. solicite del Senado un decreto por el cual se destine el ex Convento de Regina para local de la enseñanza de niñas.

También restableció V. E. por su Decreto de 20 de

Agosto próximo pasado el Colegio Seminario confiando provisionalmente su dirección al Señor Presbítero Fernando A. de Meriño con el nombramiento de Vice-Rector.

Los Seminarios, Excmo. Señor, tienen por objeto formar jóvenes piadosos, prácticos en todas las virtudes e instruídos en letras divinas para que puedan ejercer dignamente las santas funciones del ministerio sacerdotal. El Gobierno debe, pues, favorecer en la esfera de sus facultades y atribuciones el Colegio Seminario de la Capital; pero, a la vez, por razones de política, de conveniencia pública y por la índole misma de nuestras instituciones republicanas, debe el Gobierno dotar al País con un Colegio nacional en el cual encuentre la juventud dominicana todos los elementos de una instrucción clásica y profesional, Colegio que, más tarde, serviría para echar los fundamentos sobre los cuales vuelva a levantarse nuestra antigua Universidad, célebre por haber sido la primera que se instaló en el Nuevo Mundo, y mucho más célebre aún por los claros talentos y vastísima instrucción de sus hijos.

Pueden establecerse en el Colegio nacional cátedras de Latín, Filosofía, Matemáticas, Derecho, Medicina, Cirugía y Farmacia. Debe V. E. prometerse del celo e ilustración de los Honorables Senadores que den al Ejecutivo la autorización y los medios para llevar a cabo un pensamiento tan beneficioso al país. La falta de hombres idóneos en la República para regentear todas las cátedras, fuera de que para algunas asignaturas de cada una de las cátedras contamos con sujetos muy capaces para enseñarlas, no es ni con mucho un obstáculo; de Puerto Rico, Cuba o Venezuela pueden venir profesores, los cuales no pueden considerarse como extranjeros entre nosotros; antes bien, son hermanos nuestros por los vínculos de la lengua, costumbres y creencias y por los de común origen.

En todo el territorio de la República no hay una escuela siquiera fundada por los Ayuntamientos, las que hay se deben al celo del Poder Ejecutivo y al patriotismo de algunos ciudadanos.

El ilustrado Gobernador de La Vega ha cooperado conmigo en la apertura de dos establecimientos de enseñanza, uno en la Común del Cotuí y el otro en la de San Francisco de Macorís. Muy pronto se instalará otro en Jarabacoa, según ofrecimiento del Señor Cura de aquella

Parroquia. Ultimamente se ha abierto una escuela en la Común de Bayaguana gracias a los esfuerzos del Señor Canónigo Francisco Charboneau, que provisionalmente sirve aquel curato.

Sensible es, Excmo. Señor, que los Ayuntamientos, llamados por su instituto al fomento de los legítimos intereses de sus respectivas Comunes, miren con tanta apatía el ramo de Instrucción Pública, uno de los más importantes para el buen mantenimiento de la República, y por consiguiente uno de los que más contribuyen a la felicidad del Estado. En vano dará el Senado medios al Ejecutivo para regularizar y difundir los conocimientos útiles; en vano se desvelará V. E. para que todos los ciudadanos gocen de los beneficios de la Instrucción; todo será en vano, si las Corporaciones municipales no cooperan concienzudamente con la Representación Nacional y el Gobierno a realizar designios tan patrióticos, que si provechosos son al interés individual, no lo son menos al de la sociedad entera.

Importa mucho también que entre nosotros se plantee la enseñanza parroquial. El Sacerdote por sus virtudes, pureza de costumbres y conocimientos, está llamado a ejercer una influencia civilizadora que con dificultad alcanza a ejercer el hombre seglar. Hoy, todos los sabios, sin distinción, reconocen que el estado de cultura moral e intelectual de los pueblos cristianos se debe en mucha parte al clero. Debe, pues, instarse a los Párrocos que no descuiden esa enseñanza, que al par que expliquen a sus feligreses los misterios de nuestra sacrosanta Religión, les expliquen e inculquen con la autoridad de su palabra los sanos principios de los que emanan los preceptos de moral, los deberes del ciudadano con su familia, sus conciudadanos y consigo mismo, así como el sagrado deber de contribuir sobre todo a la paz, progreso, bienestar y esplendor de la Patria.

Por separado presentaré a V. E. las reformas a que me refiero en esta Memoria sobre la Justicia e Instrucción Pública, con indicaciones de las medidas que creo más convenientes para llevarlas a cabo, quedando dispuesto a dar cuantas aclaraciones sean necesarias en las Carteras que han corrido bajo mi cuidado. Suscribiéndose de V. E., Señor Presidente, el más humilde y obediente servidor. — Fauleau. — Santo Domingo y Febrero 2 de 1859 y 15º de la Patria.

AGN



Documento núm. 10

ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, GENERAL PEDRO SANTANA, PRONUNCIADA EN LA APERTURA DE LA SESION LEGISLATIVA DEL SENADO CONSULTOR. (*).

(*27 de Febrero 1859*)

PEDRO SANTANA,

Libertador de la Patria, General en Jefe de los Ejércitos y Presidente de la República

A LOS REPRESENTANTES DE LA NACIÓN

Señores Senadores: Desde hoy entráis a ejercer las más delicadas funciones de vuestro cargo. Vais a usar de la augusta facultad de hacer leyes, de tocar a la legislación vigente, séase para reformarla, séase para aumentarla con providencias que respondan y provean a las exigencias de la situación, y a las necesidades del país. Tranquilo éste hoy, restablecida la unión y la concordia entre todos sus ciudadanos, esperamos confiados verle emprender con paso firme su marcha por la vía de progreso. Misión es vuestra la de mantener esta confianza y darle creces por el acierto de vuestros actos legislativos. Así lo espera de vosotros la Nación que representáis; y yo como su Jefe, cuento con vuestro patriotismo y vuestra sabiduría, como vosotros podéis contar con mi más fervorosa cooperación, para procurar por todos medios la prosperidad de la Patria. — Santo Domingo, 27 de Febrero de 1859 y 16º de la Patria. — Santana.

(*) "Gaceta Oficial", Nº 29, 1º Marzo 1859.

Documento núm. 11

CONTESTACION DEL PRESIDENTE DEL SENADO CONSULTOR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

(27 de Febrero 1859) (*)

Señor Presidente: El Senado Consultor, que tengo el honor de presidir, ve siempre llegar con sumo gozo las solemnes ocasiones en que se hace oír en su seno la persuasiva voz del Ilustre Libertador de la Patria; y ese placer sube de punto, cuando el objeto de la solemnidad es la celebración del aniversario de aquel memorable día en que el Pueblo Dominicano, quebrantando las pesadas cadenas de la servidumbre, lanzó a sus opresores más allá de nuestras fronteras y se constituyó en Nación libre, soberana e independente.

De entonces acá sacrificios ha hecho sin cuento para conservar el precioso derecho de gobernarse y probar al mundo que posee cuantas dotes y elementos son necesarios para mantenerse en aquel rango. Rasgos de heroísmo, dignos de la antigua Grecia, se han visto repetir doquiera por nuestros valientes defensores, sin más ecos que el de la soledad de las selvas, sin más testigos que tal cual compañero de armas, incapaz de aplaudirlos, por su natural propensión a imitarlos; y en esa parte nada tenemos que envidiar a los demás pueblos de la tierra.

Sólo hombres superficiales y egoístas para quienes las mágicas palabras de ¡PATRIA y LIBERTAD! nada significan, podrán quizás poner en duda estos hechos heroicos. Mas vendrá día, no lo dudemos, vendrá día en que la Historia, siempre imparcial, los recoja solícita y los

(*) "Gaceta Oficial", Nº 29, 1º Marzo 1859.

presente a la posteridad, como modelo casi inimitable de abnegación y patriotismo.

Sensible es, Señor, que un Pueblo que con tan escasos elementos y a costa de tanta sangre derramada ha sabido elevarse a la altura de Nación culta y civilizada; sensible es que se encuentre hoy, merced a la desastrosa administración de un mandatario infiel, en posición por todo extremo triste. Vos lo sabéis y nadie lo ignora. Báez, ese hombre de ominosa memoria, aguijoneado por la más sórdida codicia y por refinamiento de maldad, ha dejado el país sumido en un mar de compromisos y embarazos, capaces de arredrar al ánimo más denodado.. Estos males, empero, son remediables, y la empresa no es superior a nuestras fuerzas. Además, la Divina Providencia nos da diariamente mayores pruebas de su constante protección: con tan eficaz auxilio, debemos esperar que, en breve, quedarán allanadas las dificultades del momento y que la nave del Estado llegará felizmente al deseado puerto hacia donde la empuja la oculta pero potente diestra del Altísimo.

El Senado Consultor aprecia en sumo grado la cooperación que le ofrecéis en la importante cuanto ardua misión que le está encomendada, y por mi órgano os asegura que en cualquiera circunstancia se le verá siempre dispuesto a arrostrarlo todo para corresponder dignamente a la confianza del Pueblo dominicano, como para mantener incólumes el decoro y la Independencia Nacional. He dicho.

Documento núm. 12

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL SENADO CONSULTOR EL DIA DE LA CLOTURA DE LA SESION LEGISLATIVA. (*)

(3 de Marzo 1859)

Honorables Senadores: La Sesión legislativa del presente año de 1859 está terminada. Los servidores del Pueblo no pueden olvidar que deben dar cuenta a sus mandantes de la misión que le han confiado y, aunque ésto es fácil de percibirse porque las actas del Senado unas se han publicado ya y otras no dilatarán en ver la luz pública, creo muy oportuno hacer una ligera reseña de los trabajos que se han hecho en el corto espacio de un año, después de rendida esta plaza para satisfacer la confianza que el Pueblo debe tener en los mandatarios que se ha dado, quienes han consagrado todos sus desvelos al bien y a la prosperidad común.

Todo el mundo sabe ya que los actos de la Administración Báez sumergieron al país en la calamidad y la miseria. Aquellos mandatarios infieles, después de una guerra civil desastrosa y cruel que ellos excitaron y sostuvieron indebidamente, nos legaron infinidad de compromisos que necesariamente debían poner trabas y embarazos a la marcha de los negocios y al verdadero aplomo de la sociedad. Las disidencias intestinas no podían menos que haber engendrado descontentos, rencores y resentimientos, que no era fácil desarraigar si se juzga el corazón humano tal como es; pero el Libertador de la Patria, ese hombre extraordinario, que, como dijo el mis-

(*) "Gaceta Oficial", Nº 49, 19 Julio 1859.

mo Báez siendo Presidente del Congreso en el discurso que pronunció en la sesión de 6 de Julio de 1849, era de la gloria del Pueblo confesar que había salvado sus propiedades, sus vidas, sus padres, hijos y mujeres, su nacionalidad, y su religión, impedido que entre nosotros el hijo, derramase la sangre del padre... que le calificó instrumento precioso escogido por el Cielo para depositar en sus manos la espada del orden a fin de defender la razón de un pueblo en la marcha progresiva de la civilización... Ese hombre extraordinario, digo, a su entrada en esta Capital el 13 de Junio del año pasado, comprendió el estado de postración en que se había quedado la Patria: sí, la Patria del 27 de Febrero, fundada sobre tan nobles y generosos sacrificios, su primer cuidado fué afianzar las instituciones que reclaman los pueblos y, en menos de un mes, se operaron sin efusión de sangre las reformas pedidas, llevando por todos los ángulos de la República sentimientos de unión, paz y fraternidad y, haciendo abnegación de sí mismo, relegó a un olvido completo sus padecimientos, sus ultrajes, los tiros que inventar pudo la calumnia y la maledicencia y aun a sus más encarnizados enemigos perdonó las ofensas que le habían hecho gratuitamente; les ha dado garantías no permitiendo que se atropelle a nadie, que ninguno sea vejado; que las propiedades sean respetadas, que todos sean mantenidos en sus derechos, considerándolos como hermanos y amigos. Y no soy, dice él, Jefe de un partido, sino Presidente de la República, para darle seguridad y garantías a todos los dominicanos.

Cuando un Gobierno en sí es fuerte porque tiene la convicción de estar de asiento en la opinión general, nada tiene que temer. Los visionarios, los aviesos que especulan sobre los disturbios políticos y que rara vez varían de condición, pueden abrigar ideas proditorias o pensamientos de desorden; pero el verdadero patriota, el ciudadano honrado, el buen padre de familia, comprende que sólo a la sombra de la paz es que puede florecer la verdadera libertad, la independencia y el bienestar de la Nación. Este es el sentimiento general encarrilado por una larga serie de sucesos y como no se puede formar un presente sin echar una ojeada sobre lo pasado, sería preciso para desvirtuar estas ideas de conveniencia negarle su fuerza y poderío a la experiencia, al consentimiento unánime de todos los pueblos cultos y a lo que han dicho

sobre el particular los más brillantes genios de la antigüedad y de los tiempos modernos.

La Administación Báez, como ya indiqué, nos dejó multitud de compromisos, una monstruosa deuda interior con una emisión enorme de millones de papeletas, empréstitos figurados, la dilapidación completa del Tesoro nacional, dificultades con naciones neutras y amigas, de donde necesariamente debían de surgir reclamos, no sólo de intereses materiales, sino por ultrajes que él y sus parciales hicieron a sus pabellones; deudas que se quiere que graviten sobre la Nación, el despojo de algunos buques de guerra y, en fin, un cúmulo de males calculados, porque cuando ellos vieron la imposibilidad del triunfo no pensaron sino en una completa destrucción y así decían: "Nosotros no ganaremos, pero ellos no triunfarán"

Lo más lamentable, lo que más afligía al corazón, era que la Religión había quedado como una gran columna aislada en medio de la sociedad: la muerte del Reverendo Arbozispo, la de su Coadjutor, el Reverendo Obispo de Flaviópolis, el abandono que hizo de la grey que se le confiara el Canónigo Don Gaspar Hernández, dejaron a esta Iglesia acéfala. No podía ocultarse al Ilustre Libertador y a los hombres que manejaban la cosa pública que el clero debe mezclarse en las instituciones de la sociedad, para traer a ella la delicadeza de sentimientos, el menosprecio de la fortuna, el desinterés personal, la fe de los juramentos, la fidelidad de que hay tanta carencia y las demás virtudes que engendran la religión y la moral.

En tal estado de cosas, zozobrando la nave del Estado como si hubiera corrido una borrasca espantosa, el diestro piloto, que en todos sus reveses la ha salvado y llevado a puerto seguro, fué llamado por la Nación y con los auxilios del que rige los destinos de los pueblos, hace el noble sacrificio de empuñar el timón del Estado, da el generoso ejemplo de olvido de lo pasado, restablece la confianza, a todos procura unir con los lazos suaves de la amistad y de la fraternidad. "Yo quiero gobernar en familia", es su expresión favorita. Cubre cuanto ha sido posible la deuda interna, procura inquirir y salvar los intereses de la Nación, cuida de la administración de Justicia, se desvela por poner un arreglo en el clero solicitando de S. S. un Prelado ilustrado y virtuoso, hijo del país, que pueda atender tanto a los bienes espirituales como a los de la Patria; da empuje a nuestras relaciones

internacionales, nombrando Plenipotenciarios en las principales cortes de Europa, no sólo para hacer más estrechas nuestras relaciones de amistad, sino para ciertas aclaraciones de suma importancia; solicita empréstitos para mejorar nuestro sistema monetario y dar impulso a la agricultura y el comercio; promueve la industria procurando atraer, por medio de concesiones, la explotación de minas, el establecimiento de mejoras y caminos y otras vías de comunicación, el aumento de las rentas públicas y, en fin, sin despreciar una tregua de cinco años, que se le propone con Haití, y que puede considerarse como la base de un arreglo que ponga un término definitivo a la guerra, prepara la Nación, organiza el Ejército y la Guardia Cívica, solicita armamentos, municiones y pertrechos, repara las fortificaciones y emprende nuevos trabajos para dejar bien puesto en cualquiera eventualidad el honor y crédito de la Nación.

Su Mensaje, en que da una cuenta detallada de todos sus actos los que han sido cumplidamente aprobados, me dispensan de entrar en otros pormenores.

Instalado el Cuerpo Legislativo, comprendió que debía auxiliar al Ejecutivo en la valiosa regeneración que había emprendido, y su primer cuidado fué la traducción de los Códigos actualmente en vigor, obra tan útil y de tan grande trascendencia, que ninguno puede dejar de conocer las ventajas que sobrevendrán a la Nación de tener leyes en su propio idioma, adecuadas a sus necesidades, a su conveniencia, a sus costumbres, y a las instituciones que se ha dado.

Objetos de mayor y más apremiante interés distrajeron al Senado de este importante trabajo y llamaron su atención a otros de prioridad. Era de necesidad vital una Ley de Hacienda que arreglase la fiel y legal administración y recaudación de los bienes y rentas de la Nación. El Senado satisfizo a esta primordial necesidad. Un vacío se encontraba en nuestra legislación por la falta de una ley sobre enjuiciamiento para los altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio y fuera del ejercicio de sus funciones. El buen sentido, la moral y el voto imperante de la Constitución, llamaron la atención del Senado sobre este particular. Sujetos todos a la ley, la elevación de un destino no exime al hombre de las flaquezas y miserias humanas.

Nosotros hemos trazado reglas positivas para los en-

juiciamientos, hemos rodeado a los altos funcionarios de todas las garantías, convenientes para que jamás pueda ser víctima de la intriga y de la calumnia.

Los Jueces de hecho, el Juro, ese monumento erigido por la razón y la filosofía, inventado para garantizar los derechos más preciosos del hombre en sociedad, es quien debe apreciar sus hechos y nos pareció lo más oportuno sacarlo a la suerte de entre los elegidos del Pueblo para nombrar una gran parte de los mismos altos funcionarios, dando así un realce a las formas democráticas que hemos adoptado sujetándose a la ley los mismos que contribuyen a su formación.

Hemos creído de necesidad crearle recursos al Gobierno reduciendo el cobro de impuestos a moneda fuerte o su equivalente en papel, y por eso, hemos revisado la Ley de Registros, la de Papel Sellado, Patentes, y Administraciones de Correos, para que el Gobierno pueda subvenir a los gastos públicos e indispensables de la Nación. El Senado se ha ocupado, también, con el acuerdo del Poder Ejecutivo, en mejorar la suerte de los ilustres defensores de la Patria, sostenedores del orden y de las libertades públicas y la de todos los empleados, si no concediéndoles un sueldo ventajoso, a lo menos acordándoles algún aumento que mejorará su condición a comenzar desde el año venidero, si las circunstancias del Erario público fueren más ventajosas después que la Nación haya satisfecho honrosamente sus créditos y compromisos.

Se revisó también la Ley de Ayuntamientos, dejándoles a éstos toda la latitud necesaria para que pueda crear las mejoras internas que se estimen más convenientes.

Se han dado, además, leyes para el arreglo de la medida de capacidad de los buques llamada "last"; sobre el cambio del papel moneda emitido por Báez; para crear un Tribunal de Primera Instancia en la Ciudad de La Vega; un Decreto concediendo un voto de gracias a Don Rafael María Baralt; otro aprobando el Tratado de Amistad y Comercio con las Ciudades anseáticas de Hamburgo y Bremen. Otro para introducir algunas mejoras en el sistema monetario que ha quedado en receso y otras varias resoluciones conforme a la Constitución y a las leyes.

No perdimos de vista la Instrucción Pública: después de haber fijado la atención sobre la educación primaria, creando y dotando escuelas públicas, acogimos con entu-

siasmo el proyecto de ley que nos remitió el Poder Ejecutivo para restablecer la antigua Universidad. Esto produjo en nuestros corazones recuerdos de honor y gloria para este suelo, y nos apresuramos en discutir y sancionar una ley que echa los fundamentos de ilustración y de moral en el país y que ensancha las esperanzas de una juventud ansiosa de saber y que, en el corazón natural, está llamada a sucedernos y a sostener las glorias de la Patria.

Un objeto de suprema importancia llamó la atención del Cuerpo Legislativo. Los crímenes del ex Presidente Báez y sus Ministros, cometidos con descaro a la faz del mundo y de la Nación no deben quedar impunes. Ellos han sido declarados reos de alta traición para ser juzgados y castigados conforme a las leyes. Algunos agentes contables de aquella malhadada Administración se han mandado también juzgar por la responsabilidad que pesa sobre ellos, por los desfalcos y fraudes cometidos según el informe de la Cámara de Cuentas.

El Senado está persuadido que la Justicia es la base más sólida de un Estado y que, sin ella no hay orden, no hay libertad, propiedad, seguridad ni garantía.

Este es el bosquejo de nuestras tareas y en mi particular, a pesar de mi salud achacosa, he contribuído cuanto he podido a cicatrizar las graves heridas que sufrió la madre Patria y los hombres de buen criterio, yo lo espero, nos harán la justicia que es debida.

Dichoso y felices nosotros si podemos restablecer para siempre la paz y la armonía social: si podemos hacer que por el amor al orden, al trabajo, a las ciencias, a las artes y a las industrias, que son las verdaderas fuentes de propiedad y abundancia en un Estado, las que pueden conducir la República a su verdadera gloria y esplendor, alcanzamos a tal altura.

Tales son nuestros más sinceros deseos. Pero, antes de concluir, séame permitido, como órgano del Senado, Representante de la Nación, consagrar para siempre un voto de gratitud a todos los que contribuyeron a derrocar al más insigne tirano, voto que hago extensivo al Ilustre Libertador, a los que con las armas en la mano, sostuvieron y defendieron los imprescriptibles derechos y la soberanía del Pueblo y a todos los que con sus luces y desvelos han ayudado y cooperado a darle nueva vida a la República.

Ellos han sido y serán hijos distinguidos de la Patria.

Documento núm. 13

COMUNICACION QUE DIRIGE EL HONORABLE ANTONIO ABAD ALFAU, VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, AL SENADO CONSULTOR, CONVOCANDO A SESION EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA (*).

ANTONIO ABAD ALFAU,
General de División, Vice-Presidente de la República y Encargado del Poder Ejecutivo

Honorable Senado: Los Ministros de Estado, el de Hacienda y Comercio y el de lo Interior, Policía y Agricultura, encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores, me han inclinado a tomar en consideración las poderosas razones que hay para convocar a ese Cuerpo y abrir su Sesión legislativa en calidad de extraordinaria, conforme a lo prevenido en el Art. 35 de la Constitución, con el fin de someter a su decisión materias importantes que no permiten esperar hasta la época en que el Pacto Fundamental lo llama a ejercer sus funciones ordinarias.

El Gobierno, de acuerdo con el Senado en su calidad de Consultor, se ha visto en la necesidad de autorizar a nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, para arreglar, convenir y estipular un protocolo que pusiese fin a las dificultades suscitadas por otras potencias acerca del arreglo definitivo de la cuestión pendiente sobre la amortización del papel moneda emitido por la Administración del ex Presidente Báez; y como el protocolo convenido por el Gobierno con la consulta del Senado y los representan-

(*) "Gaceta Oficial", Nº 71, 24 Diciembre 1859.

tes de Francia, España e Inglaterra, por más que sea de suma conveniencia para la República no está de acuerdo con las disposiciones tomadas por el Senado en su Decreto de 11 de Abril, he juzgado conveniente que la modificación de aquella ley del Estado se haga por el mismo Poder de donde emanó, a fin de que se llene el requisito constitucional.

Ese Honorable Cuerpo, que ha asistido a las deliberaciones que han precedido a la estipulación del protocolo convenido entre los Gobiernos de Francia, España e Inglaterra y el de la República, sabe con cuanta madurez se han pesado sus bases, de cuanta prudencia ha sido necesario hacer uso para combinar un arreglo que al par que satisficiese las reclamaciones de aquellos Gobiernos amigos no agobiase a la Nación con cargas superiores a sus fuerzas.

El Gobierno cree haberlo conseguido de una manera justa y equitativa, reconociendo el principio, que nunca ha negado, de indemnizar a los tenedores del papel moneda amortizado reservándose el derecho de hacerlo en los plazos convenientes que le permitiesen ser exacto en el cumplimiento de la obligación que contraía. Pero como el perjuicio reclamado no era de hoy, ni hoy tampoco podíamos ofrecer la indemnización, era de justicia reconocer el derecho de obtener un interés moderado por la demora que sufriese el pago, ofreciendo un seis por ciento por el tiempo que esa deuda permaneciese insoluble.

Los representantes de las Naciones reclamantes limitaron su demanda a la satisfacción de los perjuicios que hubiesen sufrido sus nacionales; pero el Gobierno, solícito siempre por los intereses de los pueblos que viven bajo su sombra, no podía desconocer, que si había justicia en reparar los daños que hubiesen sufrido los súbditos de otras naciones, no era menos la que asistía a los hijos de nuestra República para ser indemnizados en iguales proporciones.

Penetrado de esta idea, hizo generales las estipulaciones, y borró de una plumada la odiosa investigación que habría sido necesaria para averiguar la propiedad, el origen y la procedencia de cada una de las partidas que iban a ser presentadas; y prefirió hacer general la medida extendiendo la indemnización a todas las nacionalidades cualesquiera que fuesen.

A la justicia de esta determinación se añade la con-

veniencia, porque es evidente, que nuestro comercio habrá de recibir un impulso con la generalidad de la medida, de que quedaría seguramente privado, si, con miras menos liberales, el Gobierno la hubiese limitado al extranjero.

Estas son, Señores Senadores, las bases del convenio ajustado. La amortización del papel moneda de la Administración Báez, dando en cambio títulos de una renta de seis por ciento y cuya fecha se retrotraerá a la época en que el papel dejó de tener curso, recogiéndose además estos títulos a medida que se vayan presentando para el pago de los derechos de importación y exportación, en la no presurosa proporción de un seis por ciento de cada adeudo.

La misma conveniencia creyó el Gobierno encontrar en comprender en este arreglo el de aquellos vales emitidos entre el círculo de la ley por la misma Administración; y espera que merecerá igual aprobación del Senado.

El Gobierno se ocupa asiduamente de las disposiciones que han de preceder a la operación que es consecuencia de aquél, a fin de que se haga con toda la regularidad posible.

No se limitará, empero, a esta materia la obra del Senado en la presente Sesión extraordinaria; porque habiéndose aumentado los gravámenes que pesaban sobre la Hacienda pública, de una manera que impedía hacer frente a las obligaciones corrientes, no es dudoso que hoy quedarían desatendidas si no acudiésemos a proponer al Senado los medios de remediar este mal.

Por último, el Gobierno os presentará, Señores Senadores, otros proyectos de ley de conveniencia pública y utilidad común, cuya necesidad habréis de pesar vosotros mismos.

El carácter de extraordinaria que tiene la presente Sesión del Senado me obliga, Señores, a reservar para la próxima apertura de la ordinaria, el daros cuenta de cuanto convenga hacerlo en bien del país y en cumplimiento de la Constitución.

Santo Domingo, Diciembre 19 de 1959. — A. Alfau.

AGN



Documento núm. 14

ALOCUCION QUE DIRIGE EL HONORABLE ANTONIO ABAD ALFAU, VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, AL SENADO CONSULTOR (*)

(27 de Febrero 1860)

Señores Senadores: El Pacto Fundamental del Estado nos reune hoy para abrir de nuevo las sagradas puertas del Templo de la ley. Una vez más vais a tomar en vuestras manos el libro del destino venidero de la Patria. De las leyes que vosotros hagáis está pendiente su suerte, y del acierto con que llenéis ese augusto deber espera su venturoso porvenir. Al elegirnos la Patria para tan preeminente encargo, os ha distinguido entre sus hijos para conferiros el mayor de los honores que ella podía daros, y tal que sólo podéis medirlo por la importancia del solemne deber que os impone. Mucha es la prudencia, mucho el estudio, mucho el laborioso empeño que necesitáis para llenarlo; pero cuando ella os eligió sabía muy bien que aun era mayor vuestro patriotismo y que en él podía descansar tranquila.

¡Representantes del Pueblo, la Patria espera mucho de vosotros, ofrecedle más de lo que espera!

El Poder Ejecutivo, que no puede salir del círculo que vosotros le trazáis, os pide vuestra cooperación eficaz, a fin de que su acción, robustecida por vuestro apoyo, produzca como resultado inmediato el bien de los pueblos. Por su parte, él os ofrece la suya. Contad con ella, y estad seguros de que mientras vosotros empleéis vuestras vigilias en preparar las medidas necesarias para la felicidad de esa Patria, él velará de pie por la guarda

(*) "Gaceta Oficial", Nº 81, 3 Marzo 1860.

de sus derechos, la conservación de su tranquilidad y la recta administración de su justicia. El usará de la iniciativa que le concede la Constitución, para proponeros las medidas que convengan, a fin de hacer fructífera su Administración, y se hará un escrupuloso deber en cumplir y ejecutar las que vosotros acordéis.

Señor Presidente: El Mensaje que tengo el honor de poner en vuestras manos, como encargado del Poder Ejecutivo, en ausencia del General Libertador, es un fiel relato de todo aquello que ha tenido lugar en la República, en el período parlamentario transcurrido, y que merece ser sometido a vuestra consideración. En él veréis que las fuertes pruebas porque la Providencia ha querido hacer pasar a la República en tan corto tiempo, han servido para demostrar al mundo con cuanta firmeza está cimentada la base de su regeneración y cuan poco tiene que temer para el porvenir; decidido como se halla el Gobierno a mantenerse con firmeza en el recto camino de lo justo. — A. A. Afau. — Santo Domingo, 27 de Febrero de 1860 y 17º de la Patria.

Documento núm. 15

MENSAJE PRESENTADO POR EL HONORABLE ANTONIO ABAD ALFAU, VICE-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO (*)

(27 de Febrero 1860)

Señores Senadores: Encargado accidentalmente de ejercer el Poder Ejecutivo por la sentida ausencia del Presidente de la República, el Libertador Don Pedro Santana, tengo la honra de someter a vuestro examen una exacta noticia del uso que hemos hecho de ese Poder durante el último período constitucional.

Me cabe la satisfacción de anunciaros que la paz reina en todos los ángulos de la República. En lo exterior la disfrutamos con todas las naciones, inclusa aquella que hasta ahora nos ha hecho la guerra. Una tregua de cinco años que se nos propuso y que aceptamos, permite emplearse en utilidad de la República la mayor parte de los ciudadanos a quienes el deber de defenderla mantenía sobre las armas e inspira a los demás la confianza necesaria para entregarse a los fructíferos trabajos del comercio, industria y agricultura. En lo interior no es menos pacífica la situación del país; porque las tentativas que desde fuera se han hecho para turbarla por algunos de sus ingratos hijos, han producido sólo vergüenza para aquellos agentes provocadores, y laureles, humedecidos con lágrimas, para los vencedores.

A nuestro ingreso en la Administración del Estado hallamos un campo por doquier sembrado de cizaña, y han sido necesarios esfuerzos sobrehumanos para extirparla

(*) "Gaceta Oficial", Nº 81, 3 Marzo 1860.

y hacer que nazca en su lugar la concordia y buena inteligencia. Vosotros, Señores Senadores, vosotros habéis sido testigos de la serie de dificultades que nos legaron nuestros enemigos y que vuestros consejos nos han ayudado a resolver.

Por ellos enviamos a Dinamarca un Ministro, que defendió nuestro derecho y obtuvo el restablecimiento de una amistad que apetecíamos. Por ellos también zanjamos dificultades mayores que nos presentó la cuestión originada entre la República y los representantes de varias naciones, acerca de la amortización de un papel moneda ilegalmente emitido. Felizmente, Señores, de esas dificultades no queda más que un melancólico recuerdo; porque la última fué tan satisfactoriamente arreglada, como la primera. Los términos en que lo ha sido no han menester cabida en este lugar, pues que vuestra sanción les dió autoridad.

Las consecuencias de este arreglo; las medidas que él obligaba a tomar, y otras que reclamaba el país, inclinaron al Poder Ejecutivo a usar de las facultades que le concede el Art. 35 de la Constitución, convocándoos en Sesión legislativa extraordinaria, en la que habéis permanecido hasta hoy. En ella habéis aprobado el Protocolo celebrado por nuestro Ministro de Relaciones Exteriores y los Representantes de Francia, España e Inglaterra, en que se pone término a la cuestión de que os dejo hecho mérito.

Los trabajos con S. M. el Rey de los Países Bajos y la Ciudad anseática y libre de Bremen están felizmente terminados; y si con la primera ha existido una de esas dificultades que nos prepararon los enemigos de la República, su poca importancia y las explicaciones que han mediado, hacen esperar un pronto arreglo.

El Santo Padre por su parte, nos ha colmado de favores, aceptando el elegido de la República para ocupar su silla arquiepiscopal, y llevando su piadosa condescendencia hasta expedir un Breve para su nombramiento; la próxima consagración del venerable varón escogido, acabará de llenar de júbilo al cristiano pueblo dominicano.

Igual perspectiva de bienandanza nos promete la marcha regular que lleva el país en sus negocios interiores. Hoy todos los resortes de la Administración obran con igual regularidad, como más extensamente lo veréis en

la Memoria presentada por los respectivos Ministros y de que sólo puedo haceros ahora un breve compendio.

La escasez de recursos no ha permitido que en el importante negociado de obras públicas y mejoras materiales, sometido al Ministerio de lo Interior y Policía, se hagan las que el Gobierno hubiera apetecido; y con dolor se ha visto en la necesidad de aplazarlas para cuando dejen un sobrante que pueda aplicarse a aquella atención; y que el producto de los arbitrios especiales que se os propondrán, le permitan darles impulso.

Entre tanto ha debido limitarse a mantener en buen estado los edificios públicos y a reparar los caminos de la imperfecta manera que permite la rutina con otros trabajos de poca importancia. Las mejoras proyectadas, y que sólo aguardan vuestra sanción para fructificar, nos pondrán al nivel de lo que, en tan importante ramo, exige el progreso de las ciencias y las artes.

En el de Gobernación se han hecho también reformas que vigorizan la acción del Gobierno y con ellas hemos conseguido dar, como hemos dicho, más regularidad a la marcha administrativa. La Guardia Cívica ha sido objeto de un especial cuidado de parte de aquél; porque la considera como uno de los mejores baluartes en que está a cubierto la independencia nacional.

Los actos del Estado civil, tan importantes en su objeto como descuidados en su servicio, han sido y son materia de enérgicas providencias que nos aseguren de su exactitud y buen orden.

Vosotros sabéis, Señores Senadores, la importancia inmensa que en el estado en que se halla nuestra sociedad, habrá de tener la administración de Justicia. Ella, como acertadamente dice en su Memoria el Ministro encargado de este ramo, "es considerada en todos los países donde ha penetrado la antorcha de la civilización como la base más firme sobre que descansa el edificio social". Su reforma, pues, exige de nosotros el más cuidadoso esmero; pero encuentra obstáculos que el Gobierno se esfuerza en vencer. El cuidará de promover las mejoras convenientes en nuestra actual legislación, ininteligible hoy para los que han de juzgar o ser juzgados por ella, y ofrecerá las facilidades que estén a su alcance para que la República no carezca por más tiempo de tan indispensable mejora. Pero si nada le ha sido dado hacer al Gobierno sobre este punto principal, ha dirigido su esmero

hacia el personal de los Tribunales, dotándolos con magistrados dignos de ocupar esos distinguidos puestos, y se propone continuar haciendo cuantos esfuerzos estén a su alcance para llevar esa sagrada institución al punto de perfección deseada.

Pero ningún objeto cree el Gobierno tan digno de sus vigilias como el de la Instrucción Pública. Muerta antes de nuestra Independencia, apenas empieza a revivir; y si el Gobierno, aprovechándose del celo desplegado por los dignos Gobernadores Políticos, ha podido dar un grande empuje al establecimiento de escuelas primarias, nada ha podido hacer en favor de las enseñanzas superiores.

El Gobierno es de sentir que, mientras la ley sobre la materia exija condiciones imposibles para el país, en el estado en que se encuentra hoy no podremos adelantar un paso en tan preferente materia. El Gobierno os someterá en esta Legislatura, una ley restableciendo la Universidad de Santo Tomás de Aquino, cuyas bases se fundan en la posibilidad de su ejecución, y espero ver con ella removidos los obstáculos que existen hoy para perfeccionar, dentro de nuestro país, la educación completa de la juventud dominicana.

El atraso que las diversas vicisitudes porque ha pasado la República han hecho sufrir al envío de las cuentas de algunas Administraciones, ha impedido la centralización general de las relativas al último año y su consiguiente presentación al Gobierno; y me pone en la imposibilidad de dar al Senado los pormenores que desearía sobre ellas. Pero de los documentos de Secretaría tomaré aquellas noticias que puedan ser más interesantes para la Nación.

Vosotros no ignoráis, Señores, la pesada carga que dejó la guerra civil, y que sobrecargó el movimiento de Azua; y no ignoráis que, admitidos en pago de la mitad de los derechos de importación los vales que se dieron por aquella deuda, la Hacienda pública se ha visto en suma agonía para cubrir sus obligaciones. Por fortuna, acogido por el Senado el arbitrio de crear cincuenta mil pesos fuertes en billetes del Tesoro, este socorro viene a suplir el déficit de la Caja, hasta que la Hacienda se desembarace de los compromisos precitados. Esta época, Señores, no está muy lejana y pronto veremos cubrirse con ensanche las obligaciones del Estado. La nueva Ley de Aranceles, sancionada y publicada, contribuirá no po-

co a mejorar su situación. Los estados de los derechos de importación y exportación de dos puertos de la República, el de esta Capital y el de Puerto de Plata, dan un total de cerca de trescientos mil pesos, a los que hay que agregar el producto de otras entradas que tiene el Tesoro público.

El arreglo hecho en el Protocolo de que os he hablado al daros cuenta del estado de nuestras relaciones exteriores, nos ha obligado a crear una Deuda Interior, cuyos títulos serán canjeados en breves días por el papel que se amortiza. Esta deuda, cuyos valores disfrutan un 6 por ciento, se extinguirá en tres años, recibiéndose por cerca de una décima séptima parte de los derechos de importación de cada adeudo que se hiciere.

Muchas son las mejoras de que este ramo es susceptible; y el Gobierno está decidido a llevarlas a cabo con resolución y constancia y hacer que fructifiquen como tiene derecho de esperarlo el país.

Los cuerpos militares de la República quedaron casi desorganizados después de los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en los años de 1857 y 1858; pero ya hoy han vuelto a regenerarse lo mejor que han permitido las circunstancias. Grato me es anunciaros que en el Ejército reina siempre el más vivo entusiasmo por mantener la libertad y la independencia de la República y por sostener el orden y la tranquilidad interior de los pueblos. La Ciudad de Azua fué testigo en Setiembre del año pasado.

Los arsenales quedaron exhaustos a la rendición de esta plaza en Junio de 1858, pero tengo el gusto de anunciaros que hoy se hallan provistos de lo necesario para cualquier caso eventual.

El estado de penuria en que se ha hallado la Hacienda pública, por causa de los pesados compromisos que le dejara la funesta Administración Báez, como he dicho ya en otra parte, no ha permitido mejorar los sueldos de los dignos militares de la Patria, que con tanta abnegación le prestan sus servicios, y sólo ha sido posible hacerlo, aunque no de un modo correspondiente, a los Comandantes de Armas y sus Secretarios, reservándose hacer extensivo este acto de justicia a todos los demás servidores del Estado que estén en igual caso.

Tan luego como las circunstancias lo permitan, presentaré al Honorable Senado Consultor un proyecto que establezca el sistema más conveniente para el servicio mi-

litar. Habiendo consentido el Gobierno en el armisticio propuesto por el de la República de Haití, se creyó innecesario conservar el número de buques con que contaba la Marina de guerra, y se dispuso la venta de algunos de ellos, reservando aquellos que indispensablemente son necesarios para el servicio ordinario. Sin embargo de ésto, la República puede contar, en un momento dado, con los buques de la Marina mercante que aumentará de un modo admirable, merced a la acertada medida dictada por el General Libertador de prohibir la navegación de cabotaje en buques extranjeros.

Aumentado, como he dicho, el número de buques que forman la Marina nacional mercante, réstame sólo manifestar al Honorable Senado Consultor, que se hace indispensable que una ley limite la facultad de que se tripulen nuestros buques por extranjeros con el fin de crear marinos dominicanos.

Con este mismo objeto os presentaré un proyecto de ley proponiendo al Honorable Senado Consultor se autorice al Poder Ejecutivo para establecer dos escuelas náuticas en esta Ciudad y la de Puerto de Plata.

Dado en el Palacio Nacional de Santo Domingo, Capital de la República, a los 27 días del mes de Febrero de 1860 y 17º de la Patria. — Antonio A. Alfau.

Documento núm. 16

MEMORIA

QUE TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A S. E. EL JEFE DEL PODER EJECUTIVO, EL MINISTRO ENCARGADO DE LA CARTERA DE RELACIONES EXTERIORES, DANDO CUENTA DE LO CONCERNIENTE A SU RAMO, DURANTE EL ULTIMO PERIODO PARLAMENTARIO (*)

(24 de Febrero 1860)

Excmo. Señor: Al ofreceros una pintura exacta del estado de nuestras relaciones amistosas con otros Estados y las vicisitudes porque han pasado desde el último período constitucional, debo protestar, con la mano en el corazón, de la fidelidad del relato que os voy a hacer, porque ha sido tal la complicación de los acontecimientos y tal su feliz desenlace, que llevado el juicio por la preocupación vulgar de creer engañoso el lenguaje diplomático, apenas podría darle asenso.

Abriéndose estaba la Legislatura que acaba de pasar, cuando ya la República se halló a frente con una de esas trece cabezas de la Hidra, que una Administración de doloroso recuerdo había alimentado para lanzarla sobre nosotros; luego que se vió en la necesidad de abandonar nuestras playas. La Dinamarca nos pidió cuenta de la conducta de Báez durante el bloqueo que aquél hizo delante de Puerto Plata; nos reclamó el valor de las presas que se hicieron a su bandera; y nos pidió explicaciones por el mal tratamiento que sufrieron sus nacionales, cubiertos

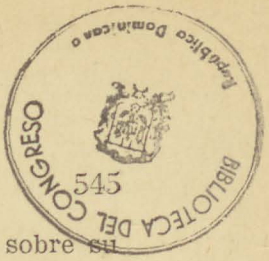
(*) "Gaceta Oficial", Nº 97, 30 Junio 1860.

con él pabellón danés. El Gobierno, recordando el origen de esas pérdidas, habría deseado haber hallado a su entrada en esta Ciudad los objetos que se le reclamaban o sus valores; porque seguramente que no habría querido retenerlos en perjuicio de los que habían sido sus dueños y lo que hizo con el último de los tres buques apresados habría hecho con los dos primeros; pero aquéllos habían desaparecido y la Nación se hallaba sobre el borde ruinoso de la bancarrota en que habría caído, si no hubiese sostenido el derecho que tenía para negarse a satisfacer la demanda de la Dinamarca. El Ministro Plenipotenciario que aquella potencia había nombrado cerca de la República, desconociendo nuestro derecho, se negó a escucharla y presentó un ultimátum exigiendo la condescendencia al pago, y amenazándonos con una interrupción de las relaciones amistosas en caso de negativa.

El buen acuerdo del Senado con el Poder Ejecutivo obvió este tropiezo porque se adoptó la acertada y fructuosa medida de enviar a la Corte del Rey de Dinamarca un Ministro Plenipotenciario que defendiera nuestros derechos. El Plenipotenciario hizo su deber, y la dificultad fué zanjada con un Protocolo que restableció las nuevas relaciones y puso fin a la disputa.

Por este mismo tiempo otro de los embarazos expresamente creados contra esta Administración nos había puesto en desacuerdo con S. M. Neerlandesa. La bombarda "Terror" que pertenecía a la Flotilla Dominicana, y que con su bandera había sido tomada por el ex Presidente Báez para conducir ese séquito de engañados con cuya desgracia quiso, por vanidad, engalanar su caída; ese buque, que debió volver con los demás pertenecientes a la República, sufrió una fraudulenta transformación de nombre y de nacionalidad y fué vendido ficticiamente a los mismos que lo habían descaminado; llevando el descaro hasta el punto de pasearlo en nuestras aguas cubierto, a su entender, con la bandera que habían profanado. Como era regular, la República embargó el objeto robado y sostuvo su derecho, demostrando el fraude cometido en una Memoria que presentó al Gobierno de S. M. el Rey de Holanda el mismo Plenipotenciario enviado al efecto cerca de aquella Corte; y aunque la circunstancia de residir los defraudadores lejos de su Gobierno y la de no querer éste decidir la cuestión sin oírlos, no han permitido darle una solución tan pronta como exigía la justicia, ha que-

AGN



dado planteada en términos que ni dejan duda sobre su éxito, ni permiten que nazca de ella dificultad alguna: restablecidas como han quedado las buenas relaciones entre ambos países y decididos como se hallan los que por una y otra parte han de resolverla a no separarse del recto sendero de lo justo.

Aun no estaban orilladas las precitadas dificultades cuando otra cuestión de las infaustamente alegadas por la misma fatal Administración, en su agonizante período, cuestión de más alta trascendencia y extensión, vino a producir un conflicto, que entre partes menos animadas de la buena fe y prudencia con que deben conducirse los negocios públicos, habría tenido por resultado un desacuerdo que hubiera prolongado el estado de desasosiego en que se mantuvo el país durante su ventilación. V. E. conoce el uso que hizo la Administración de la autorización que le concediera el Poder Legislativo para emitir diez y ocho millones de pesos nacionales, y sabe el descrédito fabuloso en que hizo caer el papel moneda la inusitada prodigalidad con que la sacó a la circulación. No ignora tampoco la necesidad en que se vió el nuevo Poder que la derrocó, de desautorizar aquel abuso de confianza y aplazar para más tarde la indemnización de los perjuicios reales que pudiera irrogar aquella indispensable medida.

El Senado hubo de tomar en consideración, cuando lo creyó oportuno, aquella necesidad, y decretó la amortización del dicho papel en los términos que la estimó conveniente.

Pero los representantes de las naciones amigas, juzgando a nuestro entender equivocadamente, perjudicados los intereses nacionales, tuvieron a bien protestar de aquella disposición, y, por desgracia, su protesta adoleció de un vicio de forma que la hizo inadmisible. Devuelta por el Ministro que precedió al que suscribe en el desempeño de esta Cartera, fué segunda vez presentada por sus autores y una nueva repulsa produjo la interrupción de las relaciones amistosas entre la República y las naciones representadas por aquéllos. La ausencia de una parte de éstos del país, quitó toda esperanza de dar a la dificultad una solución pronta y amistosa como la habría deseado el Gobierno.

Para zanjar esta nueva complicación, se creyó oportuno nombrar Ministros que representaran a la Repúbli-

ca cerca de las Cortes de Londres, París y Madrid; y encargar al que ya estaba acreditado cerca de las de Copenhague y La Haya, que hiciese valer en ellas nuestro derecho. No fué igual en todas ellas el éxito de estos encargos. En las últimas, en donde ya teníamos un Ministro acreditado cerca de sus Monarcas, éste fué escuchado; y aunque no obtuvo una resolución escrita, conforme a lo que era de justicia, porque en un negocio iniciado colectivamente no querían aquellos Gobiernos tramitarlo sin mutuo acuerdo, recibió sin embargo la seguridad de que ellos reconocían como justa la conducta del nuestro. Por el de Dinamarca se llevó a tal punto esta creencia, que no tuvo inconveniente en mandar a su Representante reanudase las relaciones con el Gobierno de la República, luego que se hubiesen llenado los requisitos exigidos por el Protocolo firmado en Copenhague para el ajuste de la cuestión dinamarquesa; no obstante estar pendiente la dificultad promovida por la nota presentada colectivamente por los Señores Cónsules cerca de la amortización del papel moneda desautorizado. La Inglaterra expresó la misma opinión aún más terminantemente; porque, después de suspender la admisión de nuestro Ministro, mientras sometía a examen la cuestión pendiente, lo admitió y honró, haciéndolo recibir por su Soberana; circunstancia que no habría tenido lugar, si aquella cuerda nación hubiese estimado temeraria nuestra conducta. La España, por su parte, aunque se abstuvo de recibir públicamente nuestro Ministro, le hizo dar mayores seguridades de su amistad y del deseo que abrigaba de dar a la cuestión pendiente una solución pronta y satisfactoria. Pero, desgraciadamente, la Francia, cerca de la cual trabajaban más asidua e inmediatamente los enemigos de la República, preocupada sin duda con la idea equivocada de nuestras pocas simpatías y persuadida tal vez de que éste fuera el motivo inmediato de la dificultad pendiente, persistió en no oír a nuestro Ministro, y se privó de ese modo del único medio que habría tenido de conocer a fondo la cuestión y de tener una seguridad de la franqueza y sinceridad de nuestras relaciones.

Esta infausta denegación de justicia produjo el resultado que necesariamente había de tener, porque llevada, como hemos dicho, de que en nosotros había un empeño temerario de resistirnos a escuchar su reclamación, nos la hizo intimar, de acuerdo ya con los Gobiernos de In-

glaterra y España, por conducto de los Comandantes de los buques de guerra que fueron enviados al efecto. Lo que pasó en aquellas dolorosas circunstancias harto lo saben V. E. y la Nación entera; y sólo debo añadir que la correspondencia que medió en aquellas discusiones, así como el resultado final de la negociación y las facilidades que hallaron los representantes de aquellos tres soberanos para terminar satisfactoriamente, debieron probarles que si prontos estuvimos a sostener lo que nuestra dignidad exigía, más pronto estábamos para probarles con cuanta espontaneidad deseábamos aprovecharnos de toda ocasión de manifestarles la sinceridad de nuestros sentimientos y la buena fe de que nunca nos separamos en nuestras relaciones internacionales.

Al que suscribe le cupo el alto honor de terminar la dificultad pendiente, de una manera honrosa y conveniente para ambas partes; y el Gobierno de la República puede lisonjearse de tener hoy cimentadas sus relaciones amistosas con todas las naciones, bajo un pie de cordialidad franca y sincera que no dan entrada al temor de que puedan alterarse.

Esta seguridad, Excmo. Señor, la deduce el que suscribe de las rectas intenciones que conoce en su Gobierno de mantenerse en la política que ha adoptado, política que no es ni puede ser otra que la misma de las naciones que han reconocido la soberanía de la República. Una completa independencia de todo extraño influjo; el mantenimiento de nuestra dignidad nacional; la conservación de la integridad del territorio y el sostenimiento firme de los derechos de la Nación, sería el norte de nuestra conducta. Guiado por él, jamás se verá una doblez en las relaciones del que suscribe; ni los que hayan de mantenerlas con él habrán de hallarle falto, en ninguna circunstancia, de la franqueza y buena fe que el estado de cultura del mundo civilizado exigen del que tiene la honra de representar su país.

La cuidadosa constancia y juiciosa persistencia en esta conducta, acabará al fin por disipar alguna ligera desconfianza que pudiera abrigarse, por lo menos bien dispuestos a creer en nuestra sinceridad. — Santo Domingo, 24 de Febrero de 1860. — Felipe Dávila Fernández de Castro.

Documento núm. 17

MENSAJE

DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL HONORABLE SENADO CONSULTOR (*)

(27 de Febrero de 1861)

Honorable Senado: Congregados hoy en este Santuario para llenar el sagrado deber que la Constitución nos impone, me complazco en anunciaros que la República goza de la más perfecta tranquilidad, no obstante el tenaz empeño con que nuestros enemigos han intentado turbársela. La paz volvió al suelo dominicano, casi sin derramar sangre, gracias al denuedo y valentía de nuestro Ejército que arrolló más allá de las fronteras a los que allí tomaron las armas para ofendernos; y de esta lucha no resuena ya más que el eco del grito de indignación que lanzó el mundo civilizado, al ver el nuevo ultraje hecho al buen sentido con esa repetición de la más cruda y más injusta de las agresiones.

El Poder Ejecutivo, Señores Senadores, no olvidó lo que en semejantes circunstancias cumplía a su deber; y luego por sí sujetó con mano firme el monstruo de la rebelión que se le echaba encima, por quien estaba obligado a guardar una tregua que solemnemente había jurado, acudió en queja a las naciones que se han constituído garantes de esta tregua. La Francia y la Inglaterra, a quienes toca ser jueces en esa cuestión, nos dan repetidamente pruebas de la más leal y franca amistad; y tenemos en muy alto concepto su justicia para que dudemos por un momento que miren con ojo indiferente un ultraje

(*) "Gaceta Oficial", Nº 132, 2 Marzo 1861.

dirigido a su dignidad para probar, tal vez, a cuanto alcanza su tolerancia en cuanto al quebrantamiento de los pactos que ellas garantizan.

A consecuencia de los trastornos que causó aquella agresión, y de la huella de inmoralidad que dejó tras sí, hubo de ser necesario investirme de facultades extraordinarias, de cuyo uso os he dado, en parte, cuenta al terminar la pacificación de las fronteras; y hoy lo hago, en pliego separado, de los pocos actos en que la salud de la Patria me ha obligado a emplear después esas mismas facultades.

Compláceme Señores, sobremanera, lo que os habré de decir acerca del estado de nuestras relaciones en lo exterior. De todos los Gobiernos con quienes tenemos estrechados lazos de amistad, recibimos muestras inequívocas de su buena disposición a conservar siempre la armonía que con tanto empeño se ha esmerado en cimentar sólidamente la actual Administración. No tenemos pendiente asunto ninguno que pudiera, en el porvenir más remoto, alejar tan lisonjera cordialidad; y si alguna insignificante reclamación de una u otra parte queda aún pendiente, un arbitraje convenido le dará adecuada solución.

S. M. el Emperador de los Franceses, a quien debemos las más sinceras simpatías hacia nuestra República, nos ha hecho transmitir por su Gobierno, proposiciones de paz con que nos brinda el haitiano; y la República, que verá siempre en cuanto S. M. Imperial le proponga, una garantía de su buen deseo de asegurarnos un feliz porvenir, no vacilará en acoger el pensamiento propuesto, en cuanto concuerde con aquellas augustas intenciones.

Duéleme, sin embargo, no poder abrigar la misma confianza en cuanto a la sinceridad de las de los haitianos; porque desde que las naciones mediadoras se tomaron a empeño alejar del suelo dominicano las sangrientas escenas con que periódicamente escandalizaban al mundo culto, y que recibieron y aceptaron su compromiso de guardar tregua, los hemos visto quebrantarla sin cesar. Pactada estaba esa tregua, y contraído ya el compromiso con la Francia y la Inglaterra cuando Soulouque nos invadió por una y otra frontera; y si una nueva tentativa, tan impopular como injusta lo derroca, apenas se establece otro Gobierno cuando se vuelven a quebrantar por éste los juramentos de paz que acababa de renovar. No con-

tento el último con el desengaño que sufrió en esta tentativa, lo vemos prepararse a una nueva agresión; y en fin, Señores Senadores, para daros una prueba de su intención de no cumplir el compromiso contraído con las naciones mediadoras ni llevar a cabo lo que posteriormente hizo ofrecer a la Francia, basta citaros las escandalosas negociaciones que acaban de tener lugar en Saint Thomas; donde si, con mengua lo decimos, figura un mal dominicano, hace peor papel un Gobierno que no tiene reparo en dar ese testimonio de su escasa fe política. Por generosos, pues, que sean los deseos de S. M. Imperial, por más que su corazón le incline a interponer su alta mediación, con el fin de encaminar por el sendero de lo justo los Gobiernos que se apartan de él, poco fruto sacará del de nuestros enemigos. Entretanto, Señores Senadores, el Gobierno vigila y se prepara.

Con los demás Estados están nuestras relaciones, como os dije arriba, en el mejor pie. La Reina de España por su parte, no se ha quedado atrás en demostrarnos sus simpatías. Nuestro Ministro cerca de S. M., encargado por el Poder Ejecutivo de la República de estrechar cada vez más nuestras relaciones amistosas con la Nación con quien nos ligan el origen, el idioma, la religión y los más antiguos usos y costumbres, ha obtenido de S. M. los más señalados favores que nos son garantes de que en esa Potencia hallará nuestro país el más firme apoyo contra los enemigos de su libertad.

Su Santidad, a su vez, se ha dignado prodigarnos recientemente las señales del particular afecto con que mira a sus hijos de esta Iglesia, dotándola con un Pastor, que hubiera llenado el doloroso hueco que hoy se nota en ella, si la Divina Providencia no se hubiera servido llamarlo a sí antes de llegar a sentarse en la silla arquiepiscopal. Vosotros, Señores Senadores, habéis hecho nueva elección, y el Gobierno ha presentado el candidato que ha de ocupar aquel puesto.

Holanda, Cerdeña y Dinamarca, siguen favoreciéndonos con su amistad, y nos complace aseguraros que sus buenas relaciones se estrechan más cada día.

Es igualmente satisfactorio el estado de las cosas en lo interior de la República; pues, anque algunos díscolos han querido extender una propaganda alevosa, cimentada en absurdas suposiciones, en breve la firmeza del Gobierno ha dado con ella por tierra. No mejor suer-

te han tenido los desleales proyectos del mal dominicano, que en medio de su impotencia, halló el valor suficiente para poner acechanzas a su Patria desde el extranjero y refugiarse en el territorio enemigo.

Al abrigo de esa tranquilidad, la administración de Justicia va tomando el giro que el Gobierno desea imprimirle, y me lisonjea la esperanza de ver cumplido ese deseo, luego que la localización de los Códigos nos remueva el mayor de los inconvenientes que se oponen a la perfección de tan importante ramo; entre tanto se ha dado más acción a ese Poder, creando dos nuevos Tribunales de Primera Instancia para las Provincias de Azua y el Seibo.

La instrucción pública es asimismo objeto de los desvelos del Gobierno, y tiene ya la satisfacción de tocar de cerca el fruto de sus afanes. Los brillantes exámenes que han tenido lugar en las diversas enseñanzas de las diferentes Provincias, auguran en nuestro país un porvenir más lisonjero para las ciencias que el que se prometieran los que hicieron pasar el hierro destructor por sobre la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La Memoria del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, que, con las demás de su clase, tengo la honra de presentar al Honorable Senado, le instruirá más detalladamente de las necesidades que en este ramo hay que satisfacer.

Los caminos públicos, Señores Senadores, han recibido las cortas mejoras que permite nuestro defectuoso sistema de comunicaciones; y, aunque eficazmente entretenidos por sus respectivas Comunes, adolecen de las imperfecciones de los de su clase. Venturosamente el restablecimiento de la confianza, que siempre es hija de la marcha firme de la Administración, empieza a desarrollar en nuestro país el espíritu industrial; y una Compañía compuesta de las personas más respetables de la República ha solicitado, y obtenido, la concesión de un camino de hierro que una los centros productores de las Provincias del Cibao, con el Puerto por donde aquéllas verifican sus transacciones con el extranjero.

La industria minera principia igualmente a desarrollarse, y además de los criaderos de cobre que se exploran en el partido de San Cristóbal, hay pedidas otras concesiones. Varios privilegios de importación, recientemente otorgados por el Poder Ejecutivo, acreditan asimismo, que el movimiento industrial se extiende por todas partes: y si en este ramo como en el de obras públicas se ha-

ce desear mucho todavía, hallaréis explicadas las causas en la Memoria que me ha presentado el Ministro del ramo, y que también os acompaño.

Nuestra Guardia Nacional, que como sabéis, comparte siempre las glorias del Ejército, se halla organizada en todas partes con perfección y exactitud; y tanto por su número como por su disciplina, podemos contar con ella como con el más firme apoyo de nuestras libertades.

Las rentas de la República, perjudicadas ya con la paralización que causa en las transacciones comerciales cualquier perturbación de la confianza pública, y con la disminución de los productos de la agricultura, originada por el levantamiento de hombres para marchar a las fronteras, se vieron gravadas por una considerable deuda que nos legó la ominosa Administración del ex Presidente Báez, con los gastos en que él mismo comprometió a la Nación por sostener una lucha impía; y, en fin, por los ruinosos desembolsos que se hicieron indispensables a consecuencia del movimiento insurreccional que en Abril del año pasado nos vino de Haití.

Con tales motivos, y a causa de los gastos de la inmigración de canarios que la guerra civil del continente Hispano-Americano nos proporcionó, tuvo el Senado que acordar la emisión de veinte millones de pesos nacionales; y más tarde, cuando cerrada la Legislatura no os fué posible acudir a remediar las necesidades del Estado, mandé, en virtud de las facultades extraordinarias de que estoy investido, emitir ocho millones más.

Si este cuadro, Señores Senadores, no es lisonjero, lo es, sí, la perspectiva del porvenir. Extinguida la deuda que se contrajo para sostener la guerra contra el proscrito Báez; amortizada más de la mitad de la interior, y decidido como está el Gobierno a cortar en su origen todo motivo de alteración de la tranquilidad, no hay duda alguna que las erogaciones se nivelarán con los ingresos, y la Nación verá cubiertas sus obligaciones y dotados sus funcionarios de una manera digna y decorosa.

Para cubrir el déficit que dejo indicado, y con el fin de retirar el papel moneda circulante, el Gobierno mandó un comisionado a la Isla de Cuba con el encargo de levantar un empréstito; y aunque halló desgraciadamente aquel mercado en disposición de necesitar para sí lo que nosotros le pedíamos, no ha sido del todo infructuoso su viaje.

Réstame, Señores Senadores, hablaros de nuestro Ejército, y me limitaré a hacerlo sólo de su estado, y de los medios con que cuenta para prestar sus servicios; porque sus glorias y sus sacrificios están escritos en el corazón de cada dominicano. Bastará deciros que hemos tenido una campaña, para que adivinéis que Jefes, Oficiales y Soldados, han rivalizado en valor y bizarría, cumpliendo su deber con el denuedo que acostumbran. En esa campaña, acreditó una vez más su lealtad, su constancia, su sobriedad y cuantas virtudes lo han hecho digno de las repetidas victorias que ha conseguido. En ella demostró asimismo a nuestros enemigos, cuán poco puede esperar el que con las armas en la mano amenace nuestro territorio.

El Gobierno, celoso de que ese Ejército adquiera la brillantez que nuestras vicisitudes políticas no nos han permitido darle hasta ahora, ha creado una Academia militar, donde la juventud dominicana se prepare a tomar su parte en las glorias que aquél adquiera; y procura los medios de mantener y mejorar la instrucción de todas las armas en las diferentes Provincias.

Por último, nuestra Marina de guerra, Señores Senadores, si bien disminuída en cuanto al número de buques por el desarme que aconsejó el estado de tregua en que pareció entrar la República, se ha reforzado mucho en cuanto al número de marinos, por el incremento que una medida acertada ha dado a la mercante.

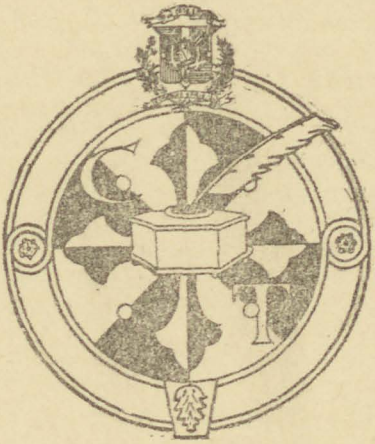
El material, en fin, de guerra, está completo para cualquier eventualidad. La República, Señores, apetece la paz; y para ofrecerla, el Gobierno está preparado para la guerra. ¡El Cielo proteja nuestras armas!

A vosotros, Señores Senadores, os toca ayudarme en la grande obra de procurar esa paz duradera a la República, sin la cual es inútil pensar en su fomento y prosperidad; y el Gobierno confía demasiado en vuestro patriotismo, para dudar un momento de que le prestaréis vuestra cooperación y le ayudaréis a lograr tan altos fines.

Palacio Nacional de Santo Domingo, a los 27 días del mes de Febrero de 1861 y 18º de la Patria. — Santana.

AGN

BIBLIOTECA DEL CONGRESO



ESTE LIBRO FVE IMPRESO
en la ciudad de Santiago de los Caballeros
por induſtria de la Editorial El Diario.
Se acabó de imprimir en febrero de
MCMXLIV

SENADO
de la
Republica Dominicana
BIBLIOTECA

AGN

